

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales



Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais



OSAL

Observatorio Social de América Latina
Publicación electrónica

Cronología del Conflicto Social

México

Enero de 2011

Editada en junio



Agencia Sueca
de Desarrollo Internacional



Agencia Noruega para la
Cooperación al Desarrollo



Govern
de les Illes Balears

Conselleria d'Afers Socials,
Promoció i Immigració
Direcció General de Cooperació

El Observatorio Social de América Latina [OSAL] cuenta con el apoyo de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional [ASDI], la Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo [NORAD] y la Agencia de Cooperación Internacional de las Islas Baleares [ACIB].

Documento de trabajo N° 847

*Realizado por el Comité de Seguimiento y Análisis
del Conflicto Social y la Coyuntura de
México*



Integrantes

Lucio Oliver Costilla y Massimo Modonesi
(coordinadores)
Fernando Munguía Galeana
Mariana López de la Vega

Fuentes

Diarios La Jornada y El Universal.

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Se autoriza la reproducción de los artículos en cualquier medio a condición de la mención de la fuente y previa comunicación al director.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en el documento incumbe exclusivamente al autor o a los autores firmantes y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

El **Observatorio Social de América Latina (OSAL)** constituye una iniciativa del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinada a la promoción de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, las dinámicas de participación y los repertorios de acción de los movimientos sociales y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado es uno de los resultados de este trabajo de relevo y registro llevado a cabo en el marco del programa. Se trata de un escrito en el que se sintetizan las principales acciones de movilización y protesta social y las medidas políticas llevadas a cabo durante el mes indicado en el país referido.

La cronología presentada ha sido elaborada por uno de los **Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana** que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo la coordinación del equipo de investigación mexicano, que forma parte de la red institucional de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.

Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana

PAÍS	INSTITUCIÓN	COORDINACIÓN
Argentina y Uruguay	PIMSA (Argentina)	María Celia Cotarelo
Bolivia	CIDES – UMSA	Dunia Mokrani Chávez Pilar Uriona Crespo
Brasil	LPP - UERJ	Roberto Leher
Chile	DI - UARCIS	Juan Carlos Gómez Leyton
Colombia	Escuela Nacional Sindical	Guillermo Correa Montoya
Costa Rica	IIS - FCS - UCR	Sindy Mora Solano
Ecuador	Centro de Investigaciones CIUDAD	Mario Unda
Guatemala	FLACSO Guatemala	Simona Yagenova
México	FCPS - UNAM	Massimo Modonesi Lucio Fernando Oliver Costilla
Panamá, El Salvador, Nicaragua y Honduras	CELA “Justo Arosemena” (Panamá)	Marco A. Gandásegui (h)
Paraguay	Centro de Documentación y Estudios	Quintín Riquelme
Perú	Instituto de Estudios Peruanos	Ramón Pajuelo Teves
República Dominicana y Puerto Rico	CES “Padre Juan Montalvo” (Rep. Dominicana)	Octavio Figueroa
Venezuela	PROVEA	Marco Antonio Ponce

México

Cronología del conflicto social

Enero de 2011

Sábado 1

El Gobierno del Distrito Federal toma posesión física de los 51 predios de la colonia La Malinche. El secretario de Obras y Servicios, Fernando Aboitiz, se presenta alrededor de las 6:30 en el plantón del frente amplio en contra de la construcción de la vía de cuota –*la supervía poniente*. Aún no amanecía y en el lugar se encontraban decenas de vecinos que desde la tarde anterior se habían reunido para despedir el 2010. Aboitiz llega con unas 25 personas, advierte que las obras comenzarán y asegura que no conocía las medidas cautelares que emitió la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). Habitantes del andador Durazno y callejón La Malinche quedan dentro del cerco. Los policías no los dejaron ni entrar ni salir de éste por varias horas. “Se mostró una vez más la forma en que Marcelo Ebrard actúa. Impone con la fuerza pública un proyecto cuyo grave impacto ambiental han evidenciado distintos especialistas. Cuando no se tiene la razón se reprime y se utiliza la fuerza. Otra vez violaron nuestro derecho a la seguridad jurídica, a la integridad personal y al libre tránsito”, asegura el frente amplio en un pronunciamiento público. El gobierno del DF ha ignorado los exhortos que le han hecho 34 diputados federales, la Asamblea Legislativa, organizaciones de la sociedad civil y la Comisión Civil de Acompañamiento para establecer una mesa de diálogo con el frente amplio. La administración de Marcelo Ebrard opta por utilizar la fuerza pública para liberar el derecho de vía de la *supervía* poniente, denunciaron los vecinos. A decir de los propios granaderos, participan más de 800 elementos. Por lo menos siete predios expropiados están fuera del cerco y el plantón no es desmantelado.

Domingo 2

A través de la página electrónica oficial del Ejército Zapatista de Liberación (EZLN) y *la otra campaña*, Enlace Zapatista desmiente las versiones periodísticas que vinculan a dichas organizaciones con el secuestro del ex senador panista Diego Fernández de Cevallos. El documento, firmado por Javier Elorriaga y Sergio Rodríguez Lascano, editores de Enlace Zapatista, alude al cable de la agencia Efe, literalmente reproducido en algunos medios, y reitera que “*la otra campaña* es un movimiento político, civil y pacífico. Así ha sido desde su convocatoria y así se ha movido y actuado a lo largo de estos años. No recurre por lo tanto a secuestros para obtener recursos ni para hacer propaganda política”. Asimismo, prosigue la comunicación, “es para todos sabido que el EZLN, y su historia y práctica durante 27 años desde sus inicios hasta hoy día lo demuestran, no realiza secuestros; esto va en contra de sus principios. Por lo mismo, el EZLN no ha desarrollado ni la estructura organizativa ni la infraestructura material para este tipo de acciones”. Por su parte, la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) del Congreso de la Unión, expresa también su rechazo tajante a cualquier intento que pretenda vincular al EZLN con el secuestro de Diego Fernández de Cevallos y solicita al gobierno de Felipe Calderón una investigación exhaustiva del origen de las versiones que, sostuvo, busca arrancar una nueva campaña de difamación contra ese movimiento. El presidente de la comisión –integrada por diputados y senadores–, el petista José Narro Céspedes, cuestiona las versiones difundidas en torno a que los zapatistas están vinculados a la retención del ex candidato presidencial del Partido Acción

Nacional (PAN). “Todo indica que se trata de panfletos que pretenden ser el inicio de una escalada represiva en contra del EZLN”, afirma.

La Arquidiócesis Primada de México se expresa en relación a la libertad religiosa en el semanario *Desde la Fe* y acusa a autoridades del Distrito Federal de “hacer del laicismo una religión única e intolerante, realizando ritos laicos contra las verdaderas religiones”. En el editorial de la publicación semanal, titulado *La verdadera libertad religiosa*, la jerarquía católica, que encabeza el cardenal Norberto Rivera Carrera, arremete contra las autoridades locales al calificarlas de “verdaderos talibanes laicistas; es decir, personajes intolerantes a la crítica, fundamentalistas en sus principios inmorales, incapaces de aceptar el reto del diálogo con la racionalidad y el derecho”. Sin mencionar nombres, subraya que “el autoritarismo y la intolerancia con que se manejan no es buen augurio para futuras responsabilidades públicas de quienes hoy ejercen la autoridad en la ciudad de México” y que “el legalismo en que se amparan es una muestra más de su intolerancia”. De acuerdo con el editorial, en concordancia con estos fenómenos en la ciudad de México “algunas autoridades y miembros de la Asamblea Legislativa no sólo se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse, aprobando leyes inmorales e injustas, sin ningún sentido moral y ético –por la falta de respeto a la vida humana y a la institución familiar, fundamental para la sana convivencia social–, sino que han desatado una verdadera persecución ideológica contra quienes, con base en sus principios religiosos y valores, se oponen a estas leyes”, en clara alusión a las leyes locales que permiten la unión entre personas del mismo sexo y reconocen su derecho a adoptar menores.

Lunes 3

Andrés Manuel López Obrador convoca a que en este año se consolide la organización territorial del movimiento en defensa de la soberanía y la economía popular, que busca constituir al menos 65 mil comités en todo el país. “Te invito a hacer historia” convoca en el primer mensaje de 2011, que se puede consultar en Youtube y en la página en internet del ex candidato presidencial. “Empezamos 2011 con un tema, la organización. Esa es la palabra clave. Tenemos que fortalecer en este año nuestra organización, consolidar nuestro movimiento”, resalta. De acuerdo con López Obrador, hasta ahora se ha logrado integrar aproximadamente 15 mil comités, más de 20% de su meta, y detalla que uno de los fines es que el movimiento cuente con cuatro millones de protagonistas y que cada persona convenza a otras cinco de sumarse al proyecto por el cambio verdadero.

En víspera del regreso de la activista Blanca Mesina Nevárez a Tijuana, Baja California, tras ocho meses de exilio, las comisiones Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste exhortan al Estado mexicano a determinar la persistencia del riesgo que enfrenta la vida de la activista, así como de Silvia Vázquez Camacho. De igual forma, piden a las autoridades dar seguimiento y cumplimiento a las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en favor de las dos defensoras.

En respuesta a la intención de compañías mineras extranjeras de explotar yacimientos en las regiones indígenas de la Montaña y la Costa, en Guerrero, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de la Montaña celebrarán asambleas comunitarias para integrar brigadas. El asesor jurídico de la CRAC, Valentín Hernández, anuncia que los días 8 y 9 de enero se impartirá un curso, probablemente en el municipio de San Luis Acatlán, con

información sobre las actividades de exploración de las empresas mineras. Indica que la jornada concluirá el 5 de febrero con una asamblea general en la comunidad Colombia de Guadalupe. El 5 de noviembre se presentaron en las oficinas de la CRAC, en San Luis Acatlán, representantes de Minera Hochschild México para informar que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) le otorgó un permiso de 30 días para realizar vuelos de reconocimiento de magnetometría en su propio beneficio y que realizaría vuelos rasantes sobre las comunidades para detectar minerales, lo que constituye una violación flagrante a los derechos de los pueblos sobre nuestro territorio. “No se nos consultó, como señala el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, señala.

Colectivos juveniles, integrantes del Frente Amplio contra la *supervía* poniente y organizaciones sociales marchan sobre la avenida Luis Cabrera en protesta por la ocupación de los 51 predios expropiados en la colonia La Malinche y para demandar al Gobierno del Distrito Federal la salida de los cuerpos de seguridad. Alrededor de las 17 horas los habitantes de la zona baja de La Malinche empiezan una jornada informativa en el cruce de Luis Cabrera y San Bernabé. Aprovechan los cambios de las luces del semáforo para explicar a los conductores cómo durante la madrugada del 1º de enero fueron ocupados los predios mediante el empleo de la fuerza pública. Sin afectar la circulación de los vehículos, los manifestantes extienden mantas y carteles en los que expresaban su rechazo al proyecto vial, el cual aseguran privilegia los intereses económicos en detrimento del pueblo.

El defensor de derechos humanos Édgar Cortez Morales afirma que el embate de la Arquidiócesis de México contra las autoridades del Distrito Federal al tacharlas de “talibanes laicistas” forma parte de la estrategia de la jerarquía católica para el proceso electoral de 2012, que apunta a obligar a los candidatos a fijar una postura favorable a la Iglesia con la intención de dar marcha atrás a las leyes locales que permiten la unión entre personas del mismo sexo y su derecho a adoptar. Dicho señalamiento, indica, peca de lo mismo que acusa: es decir, de tener una actitud intolerante frente a un proceso legal, legislativo, como es la normatividad que reconoce garantías a este sector de la población.

Martes 4

Martín Esparza Flores, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), denuncia que “desde 2000 el desaseo en el manejo de los recursos públicos en que incurrieron los directivos de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) llevó a subejercicios y sobre ejercicios de miles de millones de pesos”; además se pronuncia “porque Jorge Gutiérrez Vera, el último director de la extinta paraestatal, sea citado a rendir cuentas”. Indica que los malos manejos que se están reportando son una parte muy pequeña de los quebrantos realizados, son la punta de un iceberg, prácticamente no son nada, y que hay responsables, entre ellos Jorge Gutiérrez Vera, la subdirección de LyFC y también el órgano interno de control. Hay más de 120 auditorías pendientes de resolverse, subejercicios por más de 5 mil millones de pesos en los últimos cuatro años y sobreejercicios por más de 8 mil millones de pesos desde 2000.

Integrantes del Frente Amplio contra la construcción de la *supervía* afirman que el Gobierno del Distrito Federal apuesta a la mentira y ha intentado confundir a la opinión pública, pero sus burdos montajes para criminalizar las acciones de resistencia a la construcción de la *supervía* poniente han sido infructuosos. En conferencia de prensa realizada en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, los activistas, además de reiterar el carácter pacífico de su movimiento, denuncian que

la madrugada del 1° de enero la administración de Marcelo Ebrard intentó sin éxito justificar la entrada de más de 800 granaderos a la zona expropiada de La Malinche, aduciendo una supuesta agresión a sus funcionarios, lo cual jamás ocurrió; pues la persona que empujó al secretario de Obras Fernando Aboitiz fue un integrante de su propia comitiva.

Representantes de organizaciones de taxistas rechazan el incremento de 10% a las tarifas anunciado por el gobierno del DF; exigen que se respete el acuerdo ya firmado con ese gremio, en el que se aceptaba autorizarles 20% de aumento. En respuesta, la Secretaría de Transportes y Vialidad (SETRAVI) les informa que ese porcentaje –vigente a partir de la 2ª quincena de enero– no está sujeto a negociación; sin embargo les expresa que se buscarán otros incentivos fiscales para ayudar a los conductores.

Miércoles 5

Organizaciones de defensa de los derechos laborales denuncian que México sigue siendo uno de los países con mayor rezago en materia de política salarial y que el gobierno insiste en tomar la inflación como base para determinar los aumentos a las percepciones. Los centros de Investigación Laboral y Asesoría Sindical; de Reflexión y Acción Laboral y el Equipo Nacional de Pastoral Laboral señalan que mientras “el poder adquisitivo ha caído en cerca de 30% durante este sexenio, los aumentos a los salarios son ínfimos, y llamaron a detener el alza de los combustibles y a emprender una política que vaya resarcido dicha pérdida del poder de compra”.

Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno del Distrito Federal, afirma que su gobierno no actúa de manera autoritaria ni ha usado la fuerza pública contra personas para hacer una obra, ni detenido o perseguido a nadie porque piense distinto ni ha quitado el plantón del Frente Amplio contra la *supervía*.

Más de 500 habitantes de Cozumel, Quintana Roo, encabezados por el presidente municipal, Juan Carlos González, y acompañados por representantes de los sectores empresarial y sindical, marchan en rechazo al aumento del pasaje de los transbordadores que comunican la isla con el resto de Quintana Roo. Según los inconformes, el pasaje entre Cozumel y Playa del Carmen subió casi 15%, y ahora el viaje redondo cuesta 320 pesos. Según los inconformes, este incremento causará un grave daño a la economía local.

Trabajadores de base del Gobierno del Distrito Federal se manifiestan en diferentes puntos de la ciudad en protesta por el retraso en el pago de la segunda mitad del aguinaldo. De acuerdo con información de las autoridades delegacionales, quienes reconocen la demora, el problema se originó por un retraso en el sistema de captura de solicitud de pago en las áreas centrales, por lo cual a los gobiernos de las demarcaciones les fue imposible pagar como se había acordado. Las protestas se realizan en la delegación Coyoacán y en las calles de Carrillo Puerto y Allende -ubicadas en el centro histórico de la demarcación y donde más de 200 trabajadores intentan bloquear el acceso. El segundo bloqueo se da en Iztapalapa, en el Eje 6 y Río Churubusco, donde se manifiestan alrededor de 100 personas.

Jueves 6

El ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador arranca en Ocuilán la segunda etapa de su *Gira de la lealtad* por los 125 municipios del estado de México y aprovecha para presentar a Alejandro Encinas Rodríguez como candidato propuesto por su movimiento al gobierno de la entidad, con el fin de que llegados los tiempos legales los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia lo puedan inscribir en la contienda constitucional del 3 de julio. López Obrador reitera su postura en contra de unirse al PAN. “Queremos una alianza con la

gente, no con los partidos de la mafia del poder. Nosotros nada tenemos que hacer con el PAN ni con el PRI (Partido Revolucionario Institucional)”, afirma luego de agregar que Encinas se ha convertido en el factor de unidad que requería la izquierda para enfrentar las elecciones locales.

La policía del estado de Oaxaca a partir de este jueves refuerza el *operativo* de vigilancia en la ruta del tren que va de Chahuities a Ciudad Ixtepec, procedente de Arriaga, Chiapas, para evitar que se perpetren delitos en perjuicio de migrantes centroamericanos en su paso hacia Estados Unidos, informa el secretario de Seguridad Pública, Marco Tulio López Escamilla. Indica que la corporación ofrecerá seguridad al sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, coordinador del albergue Hermanos en el Camino, ubicado en Ciudad Ixtepec, y a los activistas de derechos humanos que abordarán el ferrocarril en Arriaga para acompañar en un tramo de su recorrido a los migrantes. Agrega que la policía estatal incrementará el número de elementos en la ruta y en las poblaciones donde se detiene el tren para seguridad de los migrantes y de los habitantes. El acto encabezado por Alejandro Solalinde tiene como objeto visibilizar las amenazas y delitos de los que son presa los migrantes a lo largo del trayecto en tren. Solalinde Guerra afirma que Chahuities se ha convertido en la ejemplificación reiterada de la injusticia contra los migrantes, no por su población sino por la indiferencia de las autoridades políticas y la ineficacia del Instituto Nacional de Migración, la Policía Federal y el Ejército Mexicano, entre otras dependencias, así como por la intromisión de *Los Zetas*, de grupos de *maras* y de rancheros coludidos. Detalla que la caravana en el tren pretende hacer visibles las condiciones de centroamericanos que atraviesan México con rumbo a Estados Unidos y revalorar el trabajo hecho por todos aquellos involucrados en la protección de los derechos humanos de migrantes

La sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) rechaza el gabinete del sector educativo designado por el gobernador de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú, y solamente reconoce al secretario, Diódoro Guerra Rodríguez. Asimismo, exige posiciones en la dependencia que asegura les ofreció Rodolfo Torre, candidato del PRI asesinado días antes de las elecciones del 4 de julio, al tiempo que convoca a los profesores a un paro magisterial para la próxima semana, cuando se reanudarán las clases.

Viernes 7

El presidente Felipe Calderón, durante la vigesimosegunda reunión anual de embajadores y cónsules, solicita al cuerpo diplomático acreditado en el exterior que “en la información que presentan de México pongan en perspectiva la dimensión de la violencia que afecta al país”. También destaca que es importante dar a conocer que “el problema se combate con valor y decisión y que se va a resolver. En la medida en que se logre reconstruir y fortalecer las instituciones de seguridad y de justicia, en esa misma medida, México será el país seguro a que todos aspiran, y estamos precisamente en esa ruta”. Sobre el número de muertes registrado, afirma que “se deriva de

la actividad homicida de los delincuentes y no de la acción del gobierno. Son los criminales quienes están atentando contra la vida, la seguridad y la tranquilidad de los mexicanos. Los responsables de la violencia son precisamente los violentos, y eso no podemos perderlo de perspectiva en nuestra tarea diplomática”.

Alrededor de 300 militantes del Frente Democrático Oriental de México Emiliano Zapata (FDOMEZ) y del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) marchan en el municipio huasteco de Atlapexco, en Hidalgo, para protestar contra la demagogia de los diversos niveles de gobierno y sostener que la atención al campo mexicano sigue siendo materia pendiente. En la

conmemoración del vigesimooctavo aniversario de la fundación del ejido General Emiliano Zapata, representantes y vecinos de ese lugar recordaron la represión sufrida durante los años 70 y 80 en el ejido de Tenexco I, tiempo en el cual fueron desplazados por la fuerza de sus hogares.

Medio centenar de *chatarreros* se manifiestan afuera del palacio de gobierno de Aguascalientes para exigir que cesen las detenciones de miembros de su gremio, pues en las dos semanas recientes al menos una decena fue capturada para responder por la presunta comercialización de productos robados. Aunque no garantizó la probidad de todos sus correligionarios, el dirigente Jesús García Ochoa denuncia que los operativos policíacos se iniciaron con la administración que encabeza el priísta Carlos Lozano de la Torre y señala que los materiales con se trabaja son reciclados y desechados.

Sábado 8

Al tiempo que el presidente Felipe Calderón ordenó a los embajadores matizar el tema de la violencia en México, los organismos de seguridad informan que dicho fenómeno aumentó en 2010; lo cual pone de manifiesto que el gobierno mantiene su estrategia de callar la realidad nacional para limpiar su imagen en el extranjero. Así lo afirman activistas de derechos humanos consultados, quienes lamentan que las autoridades prefieran ocultar el tema a nivel internacional en vez de dar pasos efectivos para resolver la ola de inseguridad.

Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, señala que la imagen que el mandatario quiere proyectar es totalmente contraria a la violencia desbordante que existe en muchas zonas del país, donde las autoridades incluso ya han sido rebasadas. “El gobierno quiere crear una idea falsa para ocultar las consecuencias de su política de militarización. Hay una fuerte campaña para limpiar esa imagen y demostrar que se ha avanzado en el combate a la criminalidad”. De su lado, Juan Carlos Gutiérrez, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, subraya que la orden de Calderón al servicio diplomático busca ignorar las más de 800 recomendaciones que diversas organizaciones internacionales le han dirigido a México por delitos graves, como tortura o desaparición forzada.

Andrés Manuel López Obrador asegura que en los cuatro años de gestión del panista Felipe Calderón Hinojosa, más de 100 mil familias se han mudado a Estados Unidos o al Distrito Federal debido a la inseguridad. Afirma que nunca habíamos visto los refugiados por la violencia que hay en el país. “El gobierno de Calderón es un rotundo fracaso. Empezó mal y ha terminado mal”, expresa al ser interrogado acerca de los cambios en las secretarías de Energía y Comunicaciones y Transportes, además de la secretaría particular de la Presidencia, efectuados la víspera.

Las autoridades ejidales de San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, adherentes de *la otra campaña*, anuncian la detención “*in fraganti*” de un joven asaltante en el cruce Xanil, cerca del que conduce al balneario de Agua Azul, en el municipio de Tumbalá. El pasado día tres fue reportado a las autoridades ejidales que a la altura del kilómetro 87 de la carretera Ocosingo-Palenque cuatro individuos “estaban asaltando a los tripulantes de un carro, y minutos después autoridades de la organización de *la otra campaña* se dieron a la tarea de investigar en el lugar de los hechos”. Los ejidatarios de *la otra campaña* dicen: “Esperamos que (en) las diferentes dependencias de gobierno no sea un negocio lucrativo la detención de los delincuentes ...”. Éstos “han venido manchando la imagen de *la otra campaña* con acusaciones falsas. Que quede claro que los miembros de nuestra organización no son los que están asaltando. Son los integrantes del

Partido Verde Ecologista de México (oficialista y aliado al PRI), miembros del comisariado oficial”.

Una veintena de organizaciones de la sociedad civil participa en la asamblea de solidaridad y acompañamiento con el Frente Amplio en contra de la *supervía* poniente. Más de 100 personas se congregan en el plantón pacífico de la llamada *zona cero* de la colonia La Malinche, delegación Magdalena Contreras. Durante el encuentro se explica el avance de las acciones judiciales interpuestas; se aclara que la reunión del próximo miércoles con Marcelo Ebrard no es con el Frente Amplio sino con la Comisión Civil de Acompañamiento. También se informa que se fortalecieron los vínculos entre los vecinos de La Malinche con las diferentes organizaciones, algunas de las cuales participaron con el Gobierno del Distrito Federal en la elaboración del Programa de Derechos Humanos y la carta de la ciudad de México. Los representantes de los diferentes colectivos, entre los que se encontraban Servicios y Asesoría para la Paz, comunidades eclesiales de base, los centros Miguel Agustín Pro y Fray Francisco de Vitoria, los Jóvenes Comunistas, el Centro de Estudios Ecuménicos y agrupaciones de vecinos de otras delegaciones, como Tlalpan, además de académicos y especialistas de universidades, coinciden en que el proyecto de la *supervía* ha consumado no sólo afectaciones ambientales sino también sociales y de violación a los derechos humanos.

Cientos de vecinos de la Unidad Habitacional Tizayuca, en Hidalgo, cierran los cinco accesos al centro de este municipio para exigir la reinstalación del servicio de energía eléctrica, suspendido hace una semana por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a más de mil 500 familias. Los inconformes cierran el libramiento en el cruce que lleva al centro del municipio y a Tepojaco; también, en la misma vía, la salida cerca del centro comercial Soriana, el puente peatonal de la colonia Nuevo Tizayuca, frente al acceso principal al Parque Industrial, y en los límites con el estado de México, el acceso frente a la gasera de Tizayuca, donde quemaron llantas.

Domingo 9

Autoridades agrarias del estado de Guerrero solicitan a comuneros de Tlacoapa, Malinaltepec, Zapotitlán, Iliatenco y San Luis Acatlán, y a la Policía Comunitaria de la Montaña de Guerrero que presenten una denuncia formal en contra de las investigaciones que realizan en sus tierras las empresas mineras Hochschild Mining y Camsim, con la finalidad de resguardar sus derechos. “Nuestra función es proteger a los campesinos para que las empresas o cualquier interesado en invertir en los ejidos y comunidades no se aproveche de ellos, pero no podemos actuar si no hay petición de parte”, asegura el procurador agrario, Rosendo González Patiño.

Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, afirma que la oleada de violencia y asesinatos cometidos por el crimen organizado en el país es muestra de la falta de rumbo del Estado, que a la fecha adolece de una estrategia de seguridad participativa y democrática en la que el respeto a la dignidad humana incluya la atención al desempleo, a la salud, la pobreza e incluso a las catástrofes naturales, entre otros factores que tienen que ver con una visión amplia de la seguridad y el respeto a la integridad humana. Advierte que las propuestas emanadas del gobierno federal o de gobiernos locales, como el endurecimiento de penas corporales o el aumento de ellas, el reforzamiento de los cuerpos policiales con armamento y equipo y la intervención militar, entre otras, no tendrán efectos positivos si no se acompañan con la prevención y con medidas de tipo económico, político y social.

En respuesta a las declaraciones vertidas el miércoles pasado por el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, en referencia al editorial del domingo anterior del semanario *Desde la Fe*, el consejo editorial del órgano de la Arquidiócesis Primada de México aclara en un documento entregado a los medios de comunicación que el término “talibán” se empleó por analogía de quienes son incapaces de diálogo, intransigentes y fundamentalistas y no en su acepción religiosa. Por esa razón, considera que el mandatario ha mostrado ignorancia al señalar que está mal empleado. “Tal parece que no ha caído en la cuenta del uso literario y argumentativo de las analogías”. Asimismo, precisa que los argumentos vertidos en el polémico texto corresponden a dicho consejo y no al cardenal Norberto Rivera Carrera ni a Hugo Valdemar Romero, quien hace más de un año fue relevado de la dirección del semanario.

Lunes 10

“Con la campaña *¡Basta de sangre!* tratamos de combatir a esa sociedad de agachados que no quiere abrir la boca porque tiene miedo”, explica el caricaturista Eduardo del Río, *Rius*, a propósito de la iniciativa que lanza para protestar contra la violencia que se vive en el país producto de las estrategias de lucha contra el narcotráfico del gobierno de Felipe Calderón. La cruzada arranca con la participación de casi todos los historietistas del país, quienes en sus cartones de este lunes plasmaron la frase *¡Basta de sangre!* Por su parte, artistas e intelectuales aplauden la campaña *¡Basta de sangre!* encabezada por el caricaturista Eduardo del Río y el periodista Julio Scherer, que protesta contra la violencia en el país, que en lo que va del sexenio ha cobrado más de 30 mil víctimas. Señalan que es fundamental que la sociedad civil exprese de manera enérgica su rechazo a la política de Felipe Calderón, que ha propiciado el clima de inseguridad y miedo que se vive en México, la que calificaron de equivocada.

El presidente nacional del PAN, Gustavo Madero, anticipa que su partido está abierto a realizar alianzas con otras instituciones políticas y organizaciones ciudadanas para las elecciones en el estado de México y otras entidades, y adelanta que para abordar ese tema se reunirá este mismo día con el dirigente nacional del PRD, Jesús Ortega. “Me voy a reunir con Ortega. Son pláticas que hemos sostenido tanto en persona como vía telefónica para analizar la evolución de los acontecimientos. Abordaremos los asuntos relacionados no sólo con el estado de México sino con otras entidades donde habrá elecciones y eventualmente habría la posibilidad de establecer alianzas”.

Choferes de al menos 400 mil unidades de carga y de pasajeros –según dirigentes– se movilizan en el Distrito Federal y en varios estados para demandar al gobierno federal que revierta las alzas al precio de los combustibles y amenazan con suspender el envío de productos básicos a las centrales

de abasto de las grandes ciudades. La Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas, Asesores en Turismo y Transportación Terrestre del Sur y la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad envían unidades a la residencia oficial de Los Pinos y a las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Comunicaciones y Transportes (SCT), en la ciudad de México. Este incremento de 49.6% en los combustibles moviliza a más de 500 transportistas en alrededor de 250 combis, *micros* y autobuses que toman los carriles centrales de Paseo de la Reforma para dirigirse a Los Pinos y exigir su congelamiento.

El presidente de la CDHDF, Luis González Placencia, recibe en las instalaciones del organismo tres carpetas con más de 22 mil firmas de habitantes de colonias del poniente y del sur de la capital a favor de la construcción de la *supervía*. El *ombudsman* capitalino asegura que se evaluará la

información y se incorporará a la investigación que está en curso. “Sí me interesa comentar que más allá del número de personas que están a favor o en contra de la obra, lo que a nosotros nos toca es valorar si hay en algún momento una violación de derechos humanos por el gobierno de la ciudad. Eso es lo que se está haciendo en la investigación, y con independencia, por tanto, del número de personas a favor o en contra, nosotros emitiremos nuestra resolución”, sentencia.

Martes 11

La poetisa y activista social contra los feminicidios Susana Chávez, quien acuñó la frase *Ni una muerta más*, es asesinada y su cuerpo hallado en una calle de la colonia Cuauhtémoc, en Ciudad Juárez, Chihuahua, informan familiares de la víctima. Con ella suman 13 los defensores de derechos humanos ultimados en la entidad desde 2009. Por la noche, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) abre un expediente por el asesinato. La juarense de 36 años fue localizada con la mano izquierda cercenada y una bolsa de plástico negra en la cabeza la mañana del jueves 6 de enero, y trasladada en calidad de desconocida al Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado, confirma la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

En una carta dirigida al presidente Felipe Calderón, trabajadores disidentes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) denuncian que se ha desatado una ola de terrorismo laboral en su sindicato, encabezado por Valdemar Gutiérrez Fragoso; que incluso más de 4 mil trabajadores del IMSS están sancionados por haberse manifestado en contra de la reelección del dirigente y que a muchos más les han quitado prestaciones económicas como castigo. En el escrito, que dirigen también a la Secretaría de Gobernación (SG), la CNDH y el director del IMSS, Daniel Karam, señalan que se ha generado un brote de inestabilidad en el IMSS y que los trabajadores buscarán mecanismos de defensa en la calle, por lo que realizarán una primer movilización el próximo 14 de enero en las oficinas centrales en esta ciudad, en Paseo de la Reforma.

Transportistas de Querétaro, Puebla y Veracruz protestan para demandar que cese el incremento a los precios de las gasolinas y el diesel. También piden modificar la norma mexicana sobre pesos y dimensiones por considerar que no se aplica en forma pareja a todos los camioneros. Durante 12 horas, integrantes de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (AMOTAC) cierran prácticamente todas las vías de comunicación con Veracruz en Teziutlán, en la Sierra Norte de Puebla. Impiden el paso en la autopista y en la carretera federal Puebla-Teziutlán, así como en los tramos Perote-Teziutlán y Nautla-Teziutlán de la carretera federal México-Tuxpan, al igual que algunos tramos que conducen a los municipios de Zaragoza, Zacapoaxtla y Hueyapan. Afiliados a la

AMOTAC en Veracruz se manifiestan en las autopistas Veracruz-Jalapa y Córdoba-Orizaba para llamar al gobierno federal a detener las alzas a los carburantes.

La administración del Distrito Federal y colonos de la Narvarte acuerdan que el desplazamiento del Metrobús de la línea 3 no se hará más allá de la calle de Pitágoras sobre Diagonal San Antonio, no habrá más de seis unidades estacionadas en Hora Valle, se instalarán cámaras de vigilancia y se levantará un censo de los inmuebles y comercios de la zona. En el acuerdo firmado ante notario público e integrantes de la CDHDF se estipula que en caso de alguna afectación estructural en los inmuebles la empresa constructora cubrirá los daños, que no se afectará la palmera ni se realizarán maniobras de ascenso y descenso de pasajeros en la zona de regulación o instalación de sanitarios. Mientras, el secretario de Transportes y Vialidad, Armando Quintero, confía en que esta semana se firme el acuerdo con las rutas 1-Itac 3 y 88 para crear una empresa única que a finales de mes operará la línea a finales de mes, que va de Tenayuca a Etiopía y encabezará ADO con el 51% de las acciones. El dirigente de ruta 3, Felipe Núñez, rechaza la posibilidad pues ADO “no tiene concesiones y no la vamos a dejar pasar”.

Miércoles 12

El presidente Felipe Calderón sostiene que no ha usado el concepto de guerra para referirse a la estrategia de combate al crimen organizado. “Yo no lo he usado y sí puedo invitar a que revise todas mis expresiones públicas y privadas. Yo he usado el término de lucha contra el crimen organizado y lucha por la seguridad pública”. El mandatario responde de esta manera a los cuestionamientos de representantes de organizaciones civiles acerca de su conceptualización del combate al crimen organizado. Sin embargo, el 5 de diciembre de 2006, durante una reunión con empresarios españoles Calderón aseguró que su gobierno trabajaría para ganar la guerra a la delincuencia. Asimismo, el mandatario utilizó la palabra guerra el 20 de diciembre de 2007, durante un desayuno con integrantes de la Secretaría de Marina con motivo del fin de año. Ese día Calderón señaló: “La sociedad reconoce de manera especial el importante papel de nuestros marinos en la guerra que mi gobierno encabeza contra la inseguridad, que es de las mayores amenazas para el presente y el futuro de México”, y agregó que su gobierno la inició en el año 2007 sin dar tregua desde entonces al crimen organizado. En el mismo acto, mencionó que la lealtad y eficacia de las fuerzas armadas son una de las más poderosas armas en la guerra. Además, en la página web de la Presidencia de la República se puede encontrar lo dicho por el presidente el 12 de septiembre de 2008, cuando encabezó la ceremonia de clausura y apertura de cursos del Sistema Educativo Militar: “En esta guerra contra la delincuencia, contra los enemigos de México, no habrá tregua ni cuartel, porque rescataremos uno a uno los espacios públicos, los pueblos y las ciudades en poder de malvivientes, para devolverlos a los niños, a los ciudadanos, a las madres de familia, a los abuelos”.

El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, descalifica la campaña *Basta de sangre* encabezada por el caricaturista Eduardo del Río (*Rius*) al señalar que es casi mezquino e irresponsable pretender imputar al gobierno federal la responsabilidad de la violencia desatada en el país. Durante su participación en la asamblea anual de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados asegura que son bienvenidas todas las campañas que se lancen para solidarizar a la sociedad y decir ¡ya basta!, sí, pero ya basta a los delincuentes, a los violentos.

A raíz de los operativos realizados por las fuerzas de seguridad federal desde hace un mes en la región de Tierra Caliente, Michoacán, vecinos de Apatzingán y municipios circunvecinos presentan,

en los recientes cinco días, nueva quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en contra de efectivos de la Policía Federal (PF) y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) por cateos ilegales, robo, tortura y lesiones.

Con un minuto de silencio, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión lamenta el asesinato de la activista social y poeta Susana Chávez, quien fuera asesinada en Ciudad Juárez, Chihuahua. En tanto, organizaciones de derechos humanos consideran que la versión de la fiscalía del estado, en el sentido de que el crimen sobrevino por una riña con tres jóvenes drogadictos y no por el activismo de Chávez, es poco creíble por el perfil de la víctima.

Seguidores del ex candidato de la coalición Unidos por la Paz y el Progreso (PAN, PRD, PT y Convergencia) a la alcaldía de Santa María Petapa, Oaxaca, Feliciano López Vásquez, intentan quemar en dos ocasiones la alcaldía e incendian dos patrullas municipales para exigir que se

destituya a la alcaldesa, la priísta Ángela Juárez Mendoza. Los inconformes rechazan a la múnicipe porque, argumentan, pertenece a una familia de caciques que ha mantenido el poder durante 12 años.

Integrantes de la Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) desconocen como encargado de la rectoría a Felipe Cuamea Velázquez. En un documento firmado por el presidente de la Junta de Gobierno de la UABC, el ex rector Luis Llorenz Báez y cuatro miembros del organismo, se solicitó a Cuamea Velázquez reintegrarse a su cargo de secretario general y abstenerse de incurrir en irregularidades administrativas, como nombrar a funcionarios universitarios.

Miembros del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Juárez del Estado de Durango se apoderan del edificio central de la casa de estudios y hacen que se suspendan las actividades luego de un enfrentamiento a golpes entre el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Estado, Jesús Cabrales, y el presidente de la sociedad de alumnos de la Preparatoria Nocturna, Jesús Rolando Salazar. Los inconformes exigen la suspensión de Cabrales por la agresión a Salazar.

Con el voto en contra del PAN, la Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) exige al titular de la SG, Francisco Blake Mora, a cumplir con las obligaciones de su cargo y aplicar las sanciones que correspondan en contra de la Arquidiócesis Primada de México, (borrar) por las ilegales declaraciones vertidas en el semanario católico *Desde la fe*. En el punto de acuerdo, promovido por el vocero del grupo parlamentario del PRD, Alejandro Sánchez Camacho, y presentado en tribuna por la diputada Claudia Elena Águila Torres, los asambleístas argumentan que las autoridades eclesiásticas violan flagrantemente el artículo 130 de la Carta Magna, la convivencia pacífica y la vida democrática de la ciudad de México.

Jueves 13

Alrededor de 50 caricaturistas en todo el país y varios medios de comunicación se suman a la campaña *¡Basta de sangre!*, que lanzó el lunes el historietista Eduardo del Río, *Rius*, “la cual busca darle a los ciudadanos la oportunidad de expresar su ‘encabronamiento’ ante la situación de violencia que se vive en el país”. Así lo informa el caricaturista al término de la mesa redonda en la que analizó la faceta de José Clemente Orozco como dibujante, a propósito de la exposición

dedicada al muralista que se presenta en el Antiguo Colegio de San Ildefonso. *Rius*, quien es acompañado por sus colegas Rafael Barajas, *El Fisgón*, Gonzalo Rocha y Antonio Helguera, explica que con su iniciativa “no pedimos que las personas hagan algo heroico como irse a la guerrilla o realizar una marcha vestidos de blanco con velitas en mano, ni hacer un mitin para desquiciar el tráfico o un plantón frente a Los Pinos, que son acciones que ya vimos no han servido de mucho. Queremos, ilusamente, que los ciudadanos hagan a un lado el miedo y que se lo hagan saber a esa gente que está arriba, en el poder”.

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) considera que la atracción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del amparo presentado por familiares de Rosendo Radilla Pacheco para que la Procuraduría General de la República (PGR) entregue copias certificadas de la averiguación previa sobre la desaparición del activista –ocurrida hace 36 años– abre el camino para que se haga justicia y se acate la sentencia de la CIDH.

Directivos de la escuela primaria Narciso Bassols, de la colonia Infonavit Nacional, en la capital de estado de Chihuahua, suspenden clases en protesta porque en días pasados desconocidos lanzaron bombas de fabricación casera e incendiaron tres aulas. Desde el miércoles los padres vigilan el plantel cuyos muros muestran huellas de vandalismo.

El Frente Amplio contra de la *supervía* poniente informa que está a la espera de la respuesta del jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, pues su movimiento siempre ha privilegiado el diálogo. Aseguran que el mandatario tiene la posibilidad de demostrar que está abierto a un diálogo respetuoso y técnicamente fundamentado, que permita construir soluciones sustentables en beneficio de la ciudad de México. Confían en que el papel que ha desempeñado la Comisión Civil de Acompañamiento modifique la postura del jefe de Gobierno, quien a falta de argumentos para sustentar la obra sostiene que “la *supervía* va porque va”. Por otra parte, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) informa que el 26 de enero dará a conocer el resolutivo sobre el cambio de uso de suelo del Estudio Técnico Justificativo presentado por la empresa Controladora Vía Rápida Poetas.

Viernes 14

Andrés Manuel López Obrador afirma que “la elección de gobernador del estado (de México) será el prólogo de la presidencial de 2012 y sus resultados anticiparán la opción que los ciudadanos quieren”, y aclara que hasta el momento Alejandro Encinas Rodríguez sólo ha sido propuesto como candidato de una coalición de izquierda, por lo que no se ha infringido la legalidad. “Para que no digan que violamos la ley, vamos a esperar el tiempo adecuado y lo que establezca el marco legal”, asevera. Una vez más, expresa su rechazo a que se consume una coalición entre los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y el PAN.

Integrantes de la Asamblea Nacional de Trabajadores Activos y Jubilados del IMSS anuncian que la primera semana de febrero interpondrán ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) una demanda de nulidad a la toma de nota del secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), Valdemar Gutiérrez Frago. Durante una manifestación realizada afuera de las oficinas centrales del IMSS, Eduardo Pérez Saucedo, integrante de dicha coalición que aglutina a diversos movimientos opositores al líder sindical, señala que se debe llamar a nuevas elecciones para renovar la dirigencia y critica la determinación de Gutiérrez Frago de

extender su gestión dos años, luego haber concretado una prórroga con la que busca mantenerse al frente del gremio hasta 2018.

Al menos diez estudiantes de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) son golpeados por desconocidos cuando bloqueaban dos de los seis accesos peatonales a la Ciudad Universitaria en protesta por el aumento de 20% en el transporte público de la entidad aplicado desde principios de año. Por la tarde, unos 700 jóvenes universitarios marchan por las principales avenidas de esta ciudad y del centro histórico para exigir al rector de la máxima casa de estudios de Puebla, Enrique Agüera Ibáñez, cesar la represión contra alumnos y respaldar la demanda de disminuir la tarifa del transporte público, la cual se fijó en 6 pesos. A petición de los estudiantes se les unen integrantes de una veintena de organizaciones civiles y sociales y durante cuatro horas se manifiestan en el zócalo, donde demandan la aplicación de un descuento para los más de 2 millones de alumnos de todos los niveles de la entidad y que se restablezca el precio del transporte público en cinco pesos.

Sábado 15

Unos 200 manifestantes realizan una marcha del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez en el DF para protestar por el clima de violencia *feminicida* que impera en todo el país y que recientemente ha cobrado la vida de las activistas Marisela Escobedo y Susana Chávez. Alrededor de las 12:30 horas, la movilización convocada por diversas organizaciones civiles, entre ellas Agenda LGBT, la Liga de Trabajadores Socialistas y Pan y Rosas, parte de la glorieta del Ángel rumbo a la Alameda Central, luego de cambiar de última hora el destino final, que era la Secretaría de Gobernación. Con pancartas donde se leían frases como “No más violencia contra las mujeres”, “Susana y Marisela, sus voces no se apagan” y “Ni una asesinada más”, los inconformes marchan por Paseo de la Reforma ocupando sólo un par de carriles. Durante la movilización –que se sumó a la campaña *No más sangre*– se insiste en la necesidad de esclarecer todos los casos de feminicidio, remover a las autoridades incompetentes, tipificar en el código penal el delito de asesinato contra mujeres por motivos de odio y decretar la alerta de violencia de género en todo el país.

Durante la madrugada fue baleado el nuevo edificio de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), situado en el municipio conurbado de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, informa Gustavo Tomás Hernández Cruz, secretario de Asuntos Jurídicos de la dirección gremial. El líder magisterial interpone una denuncia penal e informa que según versiones de los veladores la agresión sucedió alrededor de la 1:30 horas. En la fachada fueron localizados cinco impactos de arma de fuego.

Domingo 16

Organizaciones no gubernamentales se manifiestan por la tarde frente a las instalaciones de la PGR, en recuerdo del primer mes del homicidio de la activista Marisela Escobedo Ortiz, asesinada a balazos frente a la sede del Poder Ejecutivo del estado de Chihuahua. María de la Luz Estrada, del Observatorio Nacional de Feminicidios, asegura que el acto de protesta simbólico obedece a “que no vemos señales de las autoridades federales ni locales para esclarecer ese asesinato. Lo único que vemos es que Ciudad Juárez sufre un ambiente enrarecido, de violencia sistemática contra las mujeres e impunidad”. En el acto participan integrantes de la asociación Red Todos los Derechos para Todos, Católicas por el Derecho a Decidir, de la Red de Mujeres de Ciudad Juárez y de la Comisión Mexicana para la Promoción de los Derechos Humanos. A su vez, en Culiacán, Sinaloa,

una veintena de familiares de víctimas de delitos, dirigentes de organizaciones sociales y defensores de los derechos humanos se plantan también frente a las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Estado en protesta por los cerca de 116 *feminicidios* perpetrados en esta entidad en 2010 y lo que va de 2011. Los inconformes, encabezados por Ana Lidia Murillo, de la organización Observatorio Ciudadano, también condenan los asesinatos de Susana Chávez, Marisela Escobedo y Rubí Marisol Frayre. Detallan que el año pasado 110 mujeres fueron asesinadas en forma violenta en Sinaloa y que en lo que va del año suman seis las víctimas.

Decenas de vecinos se manifiestan para denunciar las severas afectaciones viales que causará la construcción de un edificio de 25 niveles para oficinas y los subterráneos para estacionamiento en avenida Pedregal número 24, colonia Molino del Rey, delegación Miguel Hidalgo, en el Distrito Federal. Este es el segundo proyecto rechazado por los residentes de la zona, pues en 2007 los habitantes de las colonias Lomas de Chapultepec y Molino del Rey se opusieron a la construcción de la Torre Bicentenario, que pretendía edificar el Gobierno del Distrito Federal en dicho terreno propiedad de Grupo Dhanos. Los residentes de Molino del Rey reclaman con pancartas al jefe

delegacional de Miguel Hidalgo, Demetrio Sodi, por permitir que avance la construcción, y solicitan que el proyecto vial que se tiene en la colonia Lomas de Chapultepec también se aplique en Molino del Rey, para no permitir una torre de tal magnitud. Los vecinos de Molino del Rey y Lomas de Chapultepec exponen que la zona no soportará el flujo vehicular ni el crecimiento de la población, pues de acuerdo con los informes que les ha dado la delegación el incremento de residentes será de alrededor de seis mil. Además, prevén caos por el crecimiento del número de autos, ya que el estacionamiento tiene capacidad para 2 mil 83 vehículos.

Lunes 17

La evaluación del proceso de modernización del sector eléctrico en la zona centro del país, tras la desaparición de LFC, es el escenario para que el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) denunciara agresiones contra sus agremiados, que han motivado 900 querellas desde que comenzaron a operar en la región. En respuesta, el presidente Felipe Calderón ofrece aplicar todo el peso de la ley contra quien agrede a los trabajadores y pide a los gobiernos locales involucrados asumir su compromiso de aplicación del marco legal para el caso. Entre elogios mutuos, Calderón y el sindicato ratifican su vínculo en esta nueva etapa de inserción de la CFE en los estados donde operaban anteriormente los afiliados al SME, gremio reiteradamente aludido, aunque nunca mencionado expresamente en el acto. “Sé perfectamente que los trabajadores de CFE no han permitido ni cedido en que quienes se oponen al progreso de México traten de hacer prevalecer sus propios intereses sobre el interés nacional y el del servicio”, afirma Calderón.

Organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos, seis mujeres galardonadas con el premio Nobel de la Paz y organizaciones nacionales de defensa de los derechos de las mujeres exigen al Estado mexicano que “cese la simulación, investigue los asesinatos de Marisela Escobedo y Susana Chávez e imparta justicia ante la ola de violencia *feminicida* en el país”. En conferencia de prensa, Andrea Medina, de la organización Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, lee el pronunciamiento de condena de las seis premios Nobel de la Paz por el asesinato de la defensora de los derechos humanos Marisela Escobedo. Las firmantes de la Nobel Women’s Initiative son: Betty Williams y Máiread Maguire, de Irlanda, premiadas en 1976 por su contribución a la solución pacífica del conflicto de Irlanda del Norte; Rigoberta Menchú Tum, de Guatemala, premiada en 1992 por su trabajo por la justicia social y el respeto a los derechos de los indígenas y Jody

Williams, de los Estados Unidos, premiada en 1997 por su trabajo para la prohibición del uso de las minas antipersonales y su remoción.

Organizaciones ciudadanas de Nuevo León, Chiapas y Sinaloa protestan frente a oficinas gubernamentales para exigir que se detenga el asesinato de mujeres en el país. En Sinaloa se perpetraron 351 *feminicidios* durante el recién concluido gobierno de Jesús Aguilar Padilla, informa la presidenta de la Asociación de Mujeres Universitarias, Ana Lilia Murillo Camacho, quien precisa que sólo el año pasado se cometieron 116. En Chiapas, integrantes de grupos de mujeres que participaron en la jornada internacional *Ni una más* advierten en un pronunciamiento que la violencia y la impunidad que están arrasando al país no serán detenidas por los que se benefician económica y políticamente de ellas. “Es la hora de la sociedad civil, la hora de decir ¡basta! ¡Ni una más! Creemos que entre todos podemos construir un país con justicia, libertad y democracia, como lo hemos anhelado desde hace muchos años”. En Nuevo León, las organizaciones civiles Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, Alternativas Pacíficas y el Colectivo Plural de Mujeres, con el lema *Ni una más* realizan una protesta fuera del palacio de gobierno, donde exigen parar la violencia contra las mujeres, que dejó el año pasado 70 muertes en el estado, 40 relacionadas con el crimen organizado.

Cientos de maestros y burócratas jubilados marchan por las capitales de Veracruz y Morelos, donde realizan plantones y mítines en demanda de que les devuelvan el impuesto sobre la renta retenido a sus aguinaldos y para exigir el pago de primas de antigüedad, respectivamente. En Jalapa, unos mil jubilados de la Secretaría de Educación estatal, la Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Rébsamen, la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad Veracruzana, entre otros, bloquean durante cinco horas las calles del centro histórico y se plantan frente al palacio de gobierno. En Cuernavaca, Morelos, más de 3 mil integrantes del Movimiento Estatal de Jubilados y Pensionados exigen al gobierno estatal pagar 200 millones de pesos que adeuda a unos 8 mil maestros retirados de 2007 a la fecha, por concepto de prima de antigüedad.

Ejidatarios de San Francisco Tlaltenco, en la delegación Tláhuac, obtienen tres amparos de la justicia federal en contra de la expropiación de igual número de parcelas donde se construye la línea 12 del Metro. Ante la negativa de los propietarios a vender sus tierras, el gobierno del Distrito Federal optó por la expropiación, cuyo decreto emitió el pasado 10 de diciembre, razón por la cual los campesinos recurrieron a la justicia federal. No se puede expropiar una tierra que ya se tiene en posesión, explicó Gabriel Reyes, representante ejidal, quien detalló los argumentos que antepusieron al presentar el recurso. De seis recursos que interpusieron el mes pasado les fueron otorgados tres. El primero, por el juez 14° de distrito en materia administrativa, quien otorgó el amparo a Sofía Anselma Leyte bajo el expediente 1636/2010 por el despojo de sus tierras, ante lo cual el gobierno está obligado a devolvérselas.

El gobierno capitalino no cuenta con permiso formal para construir la *supervía* poniente en zonas federales, afirma el titular de la Comisión Nacional del Agua, José Luis Luege. Afirma que las construcciones de ese tipo requieren un estudio de impacto ambiental del proyecto integral, es decir, de toda la obra en su conjunto y no en partes, como indican las leyes federal y capitalina. Agrega que corresponde a la SEMARNAT verificar la situación, pues podrían estar en riesgo barrancas y bosques de la zona poniente del valle de México.

Martes 18

Los sindicatos de las universidades Autónoma de Guerrero (UAG) y Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) se manifiestan para exigir recategorizaciones y aumento salarial. Con un paro que se inicia a las 5:00 horas y concluye las 22:00, empleados de la UAG rechazan la propuesta de aumento salarial de 3.9% y 2.6% en prestaciones que hace el rector Ascencio Villegas Arrizón. En tanto, el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Sonora (UAS) entrega a la Secretaría del Trabajo local una denuncia por violaciones contractuales y una petición de aumento salarial de 22%. El emplazamiento de huelga en la UAS está programado para el 28 de enero.

Miércoles 19

Diversas organizaciones sociales realizan una misa en recuerdo de los trabajadores fallecidos el 19 de febrero de 2006 en la mina Pasta de Conchos, que motivó 14 recomendaciones de la CNDH, y denuncian la muerte de un minero más en la misma zona carbonífera del norte de Coahuila. A las

afueras de la sede comercial de la compañía Grupo México, propiedad de Germán Larrea, un grupo de activistas se reúne para denunciar la impunidad en que todavía se encuentran los responsables del accidente en Pasta de Conchos y exigir que se cumplan los estándares de seguridad en las minas para evitar nuevas muertes.

El secretario general del SME acude a la Cámara de Diputados a una reunión con la Comisión de Energía, donde defiende la propuesta de crear una nueva empresa eléctrica. Al llegar al salón es agredido verbalmente por un grupo de seis golpeadores, quienes fueron introducidos al recinto legislativo por la secretaria técnica de dicha comisión; también es denostado por la diputada Ivideliza Reyes. Los videos de seguridad de San Lázaro muestran que Víctor Daniel Ortiz Sánchez, Eduardo Botello Ramírez, Gustavo Zárate García, Raúl Vélez Ramírez, Guillermo Guerrero Valdivia y José Antonio Herrera fueron introducidos al edificio legislativo por Claudia Maribel, quien es cercana al diputado panista Felipe de Jesús Cantú (quien ha permanecido a la sombra de Felipe Calderón desde que fue secretario de Energía). Al terminar el altercado, el dirigente del SME expone su propuesta sobre la creación de una nueva empresa que dé servicio eléctrico en el centro del país. Asimismo, demanda que se restablezca la legalidad.

El PRD en el Distrito Federal se suma a la campaña *¡Basta de sangre!* y denuncia en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en México al gobierno de Felipe Calderón, por instaurar en el país un clima de violencia exacerbada en su desesperación por construir una legitimidad que no consiguió en las urnas mediante su guerra fallida contra el narcotráfico.

Jueves 20

La escalada en los precios de productos de consumo básico provoca a que amas de casa, desempleados, transportistas, estudiantes e integrantes de organizaciones sociales se manifiesten en el Zócalo de la ciudad de México para exigir que cese el incremento del costo de la canasta básica, se congele el de la gasolina, se aumente un peso la tarifa del servicio colectivo y se apoye con alimentación y hospedaje a 200 jóvenes para que continúen sus estudios. Desde las 10 horas se

concentran pese a la colocación de vallas por personal del Estado Mayor Presidencial, que impide el acceso de microbuses y autobuses a la Plaza de la Constitución. Así, amas de casa, desempleados e integrantes de organizaciones sociales se ubican frente a Palacio Nacional desplegando pequeñas cartulinas donde se leía “No más hambre”. El alza de 15% en promedio en los productos de la canasta básica ha provocado que en muchos hogares el consumo de carne, pollo y pescado esté vetado. Por su parte, mientras, integrantes del Frente Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez exigen a las autoridades capitalinas que cumplan con su palabra de apoyarlos con un lugar dónde vivir y comida, a fin de que 200 jóvenes no trunquen sus estudios universitarios.

La diputada federal Leticia Quezada y su homóloga de la ALDF, Beatriz Rojas, presentan una queja ante la CNDH contra las autoridades del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, porque desearon realizar una investigación para determinar si procede declarar alerta de género en el estado de México ante los 922 *feminicidios* documentados en los últimos seis años. Las legisladoras perredistas demandan además la intervención de la CNDH, para que indague la situación de violencia contra la mujer en esa entidad, ya que “la comisión de derechos humanos mexiquense está actuando como *palera* del gobernador Enrique Peña Nieto, debido a que no quiere investigar los *feminicidios* documentados”.

“El Gobierno del Distrito Federal no detendrá la construcción de la *supervía* poniente, porque no existe una razón fundada para hacerlo y se afectaría a miles de personas”, afirma Marcelo Ebrard Casaubon. Cuestionado sobre la recomendación que la CDHDF emitió por la construcción de la citada vialidad de cuota, luego de inaugurar un comedor comunitario en la delegación Iztacalco, el jefe de Gobierno de la capital precisa: “hay actos jurídicos de por medio y no veo una razón fundada y motivada que nos llevara, de acuerdo con la ley, a suspender una obra de ese tipo”.

Viernes 21

Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres exigen a las autoridades de Jalisco poner alto a los *feminicidios* y que apliquen la alerta de género. En la entidad fueron asesinadas 81 mujeres en 2010, afirma Guadalupe Ramos, representante en Jalisco del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres. Señala que: “No es posible que la titular del Instituto Jalisciense de las Mujeres (Lucía Pérez Camarena) vaya al estado de México y vote para declarar la alerta en aquel estado y aquí no se pronuncie por ello”.

Académicos de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) interponen un recurso de inconformidad ante la procuraduría de justicia del estado contra el no ejercicio de la acción penal resuelto en la averiguación contra el ex rector Héctor Melesio Cuén, actual alcalde de Culiacán. Los inconformes encabezados por Ana Luz Ruelas y Felipe Martínez demandan a la dependencia reabrir la investigación por enriquecimiento ilícito y proceder contra el inculpado, pues no sustentó la adquisición de más de 30 inmuebles conforme a los ingresos obtenidos durante su mandato al frente de la casa de estudios.

Profesores de diversas facultades, institutos y centros de investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) acuden a la torre de rectoría de la institución para entregar una carta a José Narro Robles en la que manifiestan su desacuerdo por el intento de reducir los estímulos salariales al personal académico de tiempo completo. Manifiestan en entrevista su desacuerdo con la reciente convocatoria para el Pride, a la que califican como un intento por reducir los estímulos

salariales de los docentes de la institución. En respuesta, el rector José Narro Robles asegura en breve declaración que no existe ninguna intención de afectar a los catedráticos de tiempo completo.

El presidente de la CDHDF, Luis González Placencia, aclara que la recomendación que emitió al gobierno de la ciudad por el conflicto de la *supervía* poniente no pretende la cancelación definitiva de la obra sino la reparación de los derechos vulnerados a los vecinos que se oponen a la vialidad de peaje. Sobre las declaraciones del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, González Placencia afirma que lo que ha planteado el Ejecutivo local es que no tiene posibilidades jurídicas para suspender los trabajos, lo que significa que aparentemente no es tema de voluntad del gobierno. Sin embargo, añade que “la autoridad deberá justificar los motivos por los cuales no puede suspender la obra; si así lo hace y nosotros consideramos que esa fundamentación y motivación es suficiente, no podemos ir más allá de lo que la ley dice”.

Sábado 22

Militares allanan con exceso de fuerza y sin orden de cateo las instalaciones del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEP) en la ciudad de Oaxaca, lo que representa un acto de intimidación contra el trabajo en la defensa de los sectores más vulnerables de la entidad,

particularmente las mujeres indígenas, informa la consejera estatal de dicha organización, María del Carmen López Almazán. Los militares tratan de llevarse documentación y equipo con el argumento de que había una denuncia ciudadana contra las actividades del colectivo, pero los miembros de la CODEP lo impiden al comprobar que los efectivos no tenían orden de cateo.

Vecinos de pueblos y colonias aledaños a la Alameda Norte y el Deportivo Reynosa, Distrito Federal, denuncian que las autoridades pretenden estigmatizar el movimiento ciudadano creado en contra del proyecto denominado Foro Estadio Azcapotzalco. Aseguran que el jueves por la noche personal de la demarcación intentó colocar por lo menos siete mantas en las que se leía: “Que no te engañen, estamos rehabilitando la infraestructura del Deportivo Azcapotzalco (Reynosa)”. Los ciudadanos impidieron la colocación de las mantas, ya que afirman que las acciones que han realizado durante las últimas semanas tienen el objetivo de defenderse de un proyecto que busca privatizar espacios públicos y que no pretenden engañar a nadie.

Domingo 23

El Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM) informa que aún no hay avances en las negociaciones de la revisión salarial para el presente año y señala que al parecer esa institución quiere llevar las discusiones hasta el último día del emplazamiento, con el riesgo de llegar a la huelga. El sindicato recuerda que los trabajadores emplazaron en demanda de un incremento salarial de 20% para el primer minuto del 1º de febrero. La dirigencia gremial sostiene que de nueva cuenta el gobierno federal buscará imponer a las universidades el tope de 4% marcado al salario mínimo, lo que generará en diversas instituciones conflictos e incluso huelgas.

Campesinos de la comunidad Chametla, Sinaloa, demandan la intervención del gobernador Mario López Valdez para detener la hostilidad de los funcionarios de Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), quienes –aseguran– pretenden despojar de mil 200 hectáreas a 400

comuneros para construir un Centro Integralmente Planeado en Teacapan, Escuinapa. Oscar Crespo Nava, presidente de la comunidad indígena totorame de San Pedro Chiametlan, asegura que el ex gobernador Antonio Toledo Corro vendió los terrenos llamados Las Cabras, en Teacapan, hasta los límites de Chametla, donde se encuentra el predio Montijo, que son propiedad de los comuneros y fueron incluidos en el plano de los lotes. El dirigente de los comuneros indígenas indica que interpusieron una demanda ante la Procuraduría Agraria para recuperar sus terrenos de playa, pues el FONATUR pretende apoderarse de ellos mediante documentos ilegales que contienen inconsistencias en el trazo de los terrenos que vendió Toledo Corro.

Transportistas de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río realizan una marcha en protesta por las constantes alzas a los precios de los combustibles. Los inconformes, encabezados por Mario Olvera de Gasperín, presidente de la Asociación de Transportistas del Estado de Veracruz, reiteran su advertencia de hacer un paro nacional si el gobierno federal no deja de encarecer los carburantes.

Opositores a la construcción de la *supervía* poniente solicitarán a Juan Rafael Elvira Quesada, titular de la SEMARNAT, que proteja la seguridad hídrica de la capital y no otorgue el cambio de uso de suelo que solicita el gobierno del Distrito Federal para construir esa vía de cuota en tanto no se realice un estudio costo-beneficio del impacto de la obra. La convocatoria es lanzada por el Frente Amplio contra la *Supervía* durante la asamblea *Concierto de voces*, que realizan para leer la recomendación emitida por la CDHDF el pasado jueves.

Vecinos de Lomas de Chapultepec y Molino del Rey dan a conocer las acciones que emprenderán con el fin de evitar que continúe la construcción de una torre de 25 pisos que se edifica en Pedregal número 24. Durante su segunda jornada informativa, manifiestan que colocarán mantas para dar a conocer el proyecto y su impacto, pues según los datos que tienen éste generará un aforo calculado en 7 mil personas diariamente por día.

Lunes 24

El obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Samuel Ruiz García, fallece ayer a las 10 horas en la ciudad de México, a los 86 años de edad. El prelado estuvo internado las pasadas dos semanas debido a deficiencias pulmonares y renales, problemas en las coronarias y las carótidas y una prolongada diabetes, informa en un comunicado Felipe Arizmendi Esquivel, actual obispo de la diócesis de San Cristóbal de las Casas. Los restos del defensor de los pueblos indígenas reciben un homenaje en la parroquia de Santa María de la Anunciación, en el Centro Universitario Cultural (CUC), y son trasladados por la noche a Chiapas. Su cuerpo sería velado en la Catedral de San Cristóbal de las Casas y enterrado este miércoles al mediodía. Acompañarán el cortejo representantes de las comunidades indígenas a las que él defendió por décadas. La ceremonia religiosa en el CUC inicia alrededor de las tres de la tarde, si bien desde dos horas antes arribaron al lugar políticos, representantes de organizaciones civiles de defensa de derechos humanos y muchos miembros de la comunidad universitaria.

Andrés Manuel López Obrador asevera que a la “elite del poder” no le preocupa la economía familiar, a pesar del deterioro que ha sufrido. “Tan sólo –afirma– al inicio del actual sexenio el precio de la tortilla era de seis pesos y hoy está al doble; además, en 27 años el salario mínimo perdió el 75% de su poder adquisitivo”. En su mensaje de los lunes transmitido por video, sostiene que la carestía se debe a que no se hace nada por impulsar actividades productivas y contar con

abasto suficiente. Se sigue quitando dinero a la gente y se cobra cada vez más por los servicios, afirma. “El costo de la luz y la gasolina subió más de 10% el año pasado”.

Organizaciones obreras internacionales llevarán a cabo una campaña de movilizaciones entre el 14 y el 19 de febrero próximos para demandar que el gobierno del presidente Felipe Calderón cese los ataques a los sindicatos democráticos. La Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas, la Federación Internacional de Sindicatos de Trabajadores de la Química, Energía y Minas y la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte impulsarán esta campaña para denunciar la política antilaboral del gobierno de México. En un comunicado conjunto, estas organizaciones recuerdan que no se ha hecho justicia a los deudos de los mineros muertos en Pasta de Conchos. Además, demandan el retiro inmediato de la policía federal de la mina de Cananea y “que se acabe con las campañas de persecución política en contra de los electricistas, los mineros, los petroleros independientes y todas las organizaciones que no se ajustan al modelo de sindicalismo blanco”.

La Comisión Civil de Acompañamiento (CCA) entrega por la noche en la oficialía de partes del gobierno del Distrito Federal la posición del Frente Amplio en Contra de la Supervía Poniente con respecto al mecanismo de diálogo que se pretende construir para desactivar el conflicto social que se generó con la construcción de la vía de peaje. Los integrantes de la CCA informan que el frente amplio determinó que la apertura al diálogo plural, informado, público y productivo por parte del gobierno capitalino se demostrará en la respuesta del jefe de Gobierno en la aceptación total o rechazo a la recomendación 1/2011 de la CDHDF.

Martes 25

Miles de personas desfilan frente al féretro del obispo emérito Samuel Ruiz García, que desde la madrugada es colocado en la catedral de San Cristobal, Chiapas, para ser velado hasta el miércoles al mediodía, en que será sepultado. Acompañado por familiares y amigos, el cuerpo de el *Tatic* (padre, en tzeltal) es recibido en la catedral local a las 0:55 horas en medio de vivas y aplausos de cientos de católicos. Entre una valla humana, flores y velas el féretro color café ingresa al recinto religioso en medio de consignas como “Zapata vive, la lucha sigue” y con la entonación de la canción *Amigo*, del brasileño Roberto Carlos. Los seguidores de Don Samuel esperaban su llegada desde las 19 horas.

El rector de la UNAM, José Narro Robles, asegura que se equivocan aquellos que ven la lucha contra el crimen organizado como una guerra. Las únicas guerras válidas, agrega, son contra la ignorancia, la injusticia y la enfermedad. En conferencia de prensa en la que hace un balance de sus primeros tres años de gestión, el rector de la máxima casa de estudios subraya que las más de 34 mil víctimas que ha dejado la estrategia del gobierno federal contra la delincuencia organizada no deben ser minimizadas con el argumento de que la mayoría de los asesinados son criminales.

Los sindicatos independientes SITUAM y de Académicos del Colegio de Posgraduados llaman a las autoridades educativas a presentar propuestas de aumento salarial y avanzar en las negociaciones, pues existe el riesgo de estallamiento de huelga en ambas instituciones. En la UAM, el próximo martes, y en el Colegio de Posgraduados, el 15 de febrero.

Organizaciones de la campaña *Sin maíz no hay país* demandan al gobierno federal no permitir plantíos transgénicos en México y reinstalar la moratoria a la siembra de ese tipo de granos, porque

sólo de esa manera se salvaguardará la riqueza natural que tiene el país en su calidad de centro de origen de la gramínea y de la gran diversidad de maíces que alberga. Precisan que la diversidad del maíz nacional es una verdadera opción a los problemas de abasto alimenticio y de cambio climático, por lo que la decisión de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) de negar a Monsanto permisos para siembra piloto de maíz transgénico en Sinaloa fue la adecuada y ahora deben negarse todos los solicitados en otros estados.

La reunión de más de 4 horas no logra evitar posturas encontradas y pese a los acuerdos el fondo de la discusión no se resolvió: los vecinos aseguran que la construcción del foro estadio Azcapotzalco es un proyecto que privatiza un espacio público y las autoridades señalan que únicamente en los trabajos de recuperación del Deportivo Reynosa y la Alameda Norte participa la iniciativa privada. Más de 400 ciudadanos se presentan por la mañana en la sede del gobierno capitalino para exigir que el acuerdo publicado el 14 de diciembre del 2010 en la *Gaceta Oficial* del Distrito Federal quede sin efectos. Una comisión de vecinos fue atendida por servidores públicos, entre los que se encontraba el subsecretario de Gobierno, Juan José García Ochoa.

Un grupo de mujeres mexicanas a bordo de motocicletas rosadas distribuye comida y medicinas entre los pobres en Ciudad Juárez, Chihuahua, para paliar las numerosas carencias que, aseguran, alimentan la violencia. En medio de la guerra que libran los *cárteles* de las drogas en Ciudad Juárez, donde han sido asesinadas unas 6 mil 700 personas desde 2008, incluidas cientos de mujeres, el grupo *Las Guerreras* conduce sus motos cada domingo para entrar en peligrosos barrios que rodean la zona industrial vecina a El Paso, Texas. El grupo de diez mujeres (entre ellas maestras, ejecutivas y una agente de tránsito) ayuda en sus días de descanso a madres solteras, drogadictos, ancianos y

desempleados; muchos de los cuales no tienen acceso a asistencia social y se sienten abandonados. Llevan dinero en efectivo, medicinas, comida y hasta pasteles de cumpleaños.

Miércoles 26

Rompiendo el silencio más prolongado que se le recuerde después del levantamiento armado de 1994, el Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del EZLN manifiesta su pesar por la muerte del obispo emérito don Samuel Ruiz García. Firmado por el *subcomandante Marcos* y el *teniente coronel Moisés*, el comunicado del EZLN rinde homenaje a don Samuel: La *comandancia* rebelde destaca que en el EZLN militan personas con diferentes credos y sin creencia religiosa alguna, “pero la estatura humana de este hombre (y la de quienes, como él, caminan del lado de los oprimidos, los despojados, los reprimidos, los despreciados) llama a nuestra palabra”. Y apunta: “Aunque no fueron pocas ni superficiales las diferencias, desacuerdos y distancias, hoy queremos remarcar un compromiso y una trayectoria que no son sólo de un individuo, sino de toda una corriente dentro de la Iglesia católica”.

El Ejército Popular Revolucionario (EPR) lamenta el fallecimiento de Samuel Ruiz García. Define al prelado como “un gran defensor de las causas populares, los derechos humanos, de los pueblos indígenas y campesinos de México y de América. Un gran humanista ha muerto; a pesar de las presiones de la reacción clerical y el hostigamiento permanente del Estado mexicano nunca dejó de ser consecuente con su credo y su actitud solidaria, producto de su alta sensibilidad humana ante la injusticia”. En un comunicado, la agrupación rebelde señala: “*Tatic* Samuel nunca negó una orientación, un gesto solidario, cobijo y comida al desamparado, perseguido o reprimido. Gran promotor y defensor de la paz con justicia. Los revolucionarios que militamos en nuestro partido y

ejército (PDPR-EPR) jamás olvidaremos sus nobles esfuerzos por exigir la presentación de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, quienes siguen en manos de sus verdugos”.

El Congreso Agrario Permanente (CAP) demanda a las autoridades federales y estatales de procuración de justicia y de seguridad pública otorgar garantías a dirigentes e integrantes de organizaciones campesinas ante la creciente ola de crímenes contra este sector, el más reciente de los cuales fue el asesinato del líder de la Central Campesina Cardenista Democrática, Renato Cruz Morales, perpetrado el martes en Oaxaca. En un comunicado, los integrantes del CAP demandan al gobierno salvaguardar la estabilidad del país y las garantías constitucionales de la población.

El titular de la CDHDF, Luis González Placencia, afirma que tiene confianza en que el gobierno capitalino aceptará en su totalidad la recomendación que emitió por el conflicto de la *supervía* poniente, aun cuando el jefe del Ejecutivo, Marcelo Ebrard, ha manifestado que no suspenderá la obra como solicita en el documento. Señala que en caso de ser rechazada, acudiría a la ALDF para que exhorte a las autoridades a reconsiderar dicha postura. Agrega que ha tenido diversas reuniones con grupos vecinales que se han manifestado a favor de la vialidad para explicarles que “nosotros no estamos en contra de la obra, sino que en el proceso se violaron derechos humanos que deben ser reparados; de allí que se busca convencerlos para que acompañen la recomendación”. Por su parte, la SEMARNAT confirma el dictamen de cambio de uso de suelo forestal de 2 mil 60 metros a uso de suelo con derecho de vía para la construcción del Sistema Vial de Puentes, Túneles y Distribuidores Viales del Sur-Poniente de la ciudad de México, que había sido aprobado por el Comité Forestal, del cual forma parte la dependencia federal; aunque se fijaron todas las condiciones que fueron posibles.

Jueves 27

La dirección de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) oficializa por la noche su oferta de 3.9% de aumento salarial para los trabajadores administrativos y académicos de la institución, quienes habían solicitado 20% de incremento. El secretario general del SITUAM, Arturo Vega, indica que la propuesta será debatida en asamblea por los agremiados para ver si es aceptada o estalla la huelga programada para este martes, por lo cual el comité de huelga empezará a prepararse ante la eventualidad de que se produzca el paro de labores a partir del 1º de febrero.

El consejo general de huelga del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero, integrado por 186 delegados, acuerda por unanimidad estallar la huelga este viernes a las 18 horas debido a que la rectoría no dio respuesta a su pliego petitorio, que incluye la entrega de más de tres millones de pesos que se desviaron del Fondo de Ahorro y de la Caja de Ahorro de los académicos, entre otras demandas.

Unos 300 indígenas de la comunidad Mitzitón en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, adherentes a *la otra campaña*, inician un bloqueo por tiempo indefinido en la carretera que comunica a San Cristóbal con Ocosingo y Palenque para exigir la liberación de dos tzotziles presos desde hace nueve años, acusados del delito de secuestro. Los inconformes advierten que no se retirarán hasta que sus compañeros Manuel Heredia Jiménez y Juan Jiménez Pérez sean liberados.

La SEMARNAT informa que el proyecto aprobado para el cambio de uso de suelo forestal de 2 mil 60 metros a uso de suelo con derecho de vía para la construcción de la *supervía* poniente debe

cumplir al menos 14 medidas de mitigación y compensación ambiental, las cuales permitirán que el máximo benefactor de la obra carretera sea la biodiversidad, además de atendida la captación de agua y prevenida la erosión de suelos. Para el otorgamiento del aval, conmina a los promotores a integrar el proyecto de construcción al servicio de transporte público operado por RTP sin incremento del precio del boleto para los usuarios y la creación de nuevas rutas de servicio expreso en la zona, que en este momento no cuenta con ellas. Además pide se garantice el cumplimiento de condiciones fijadas en la Manifestación de Impacto Ambiental local del gobierno del DF, como la creación de un fondo ambiental público de 50 millones de pesos para la conservación de las barrancas del poniente de la ciudad. Adicionalmente demanda el compromiso de que al menos el 1% de la captación económica del pago de peaje por los usuarios de la carretera se utilice en exclusiva para acciones de conservación, reforestación y restauración de suelos, la reforestación con especies nativas de las zonas aledañas a las entradas y salidas de los cinco túneles proyectados, y la restitución de 3 mil 721 árboles en las zonas de vialidades y 108 mil 480 en áreas naturales de la zona de influencia del proyecto.

Viernes 28

Mientras la Asociación Autónoma del Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (AAPAUNAM) resuelve su situación contractual y salarial con las autoridades de la institución, los trabajadores de la UAM y del Colegio de México y Colegio de Posgraduados están a la espera de mejores propuestas salariales de los directivos de sus respectivas casas de estudios. La AAPAUNAM acepta un incremento de 3.9% directo al salario y de 2.6% en prestaciones. La negociación cierra días antes de que venciera el emplazamiento a huelga (1º de febrero). El aumento para los académicos universitarios estará vigente desde el 1º de febrero de este año hasta el 31 de

enero de 2012. Además, la representación de los docentes y las autoridades universitarias resolvieron satisfactoriamente la revisión bianual del contrato colectivo de trabajo que tendrá vigencia hasta el 31 de enero de 2013.

Activistas de más de 40 organizaciones sociales, civiles y religiosas realizarán este fin de semana en varias ciudades de México y el extranjero una jornada de ayuno y reflexión por la justicia, mediante la cual exigirán el fin de la violencia, la impunidad y los *feminicidios* en el país en el contexto del primer aniversario de la masacre en Villas de Salvárcar, Ciudad Juárez. En rueda de prensa, los promotores de la movilización señalan que la iniciativa busca poner de manifiesto la carencia de resultados de las autoridades para recuperar la tranquilidad en todo el país y al mismo tiempo hacer un llamado a la sociedad civil para encontrar alternativas a la destrucción. El ex *ombudsman* capitalino, Emilio Álvarez Icaza, subraya que la actual estrategia de seguridad del gobierno, basada en la intervención de las fuerzas armadas, está alimentando una onda expansiva de violencia y venganza, por lo que llama a modificarla de inmediato.

Unos 60 automovilistas pertenecientes a la Asamblea Estatal Ciudadana, en Colima, se manifiestan contra el *gasolinazo* y el *placazo* que aplican los gobiernos federal y estatal (aumento del precio del combustible y la obligación de cambiar la matrícula). Frente al palacio de gobierno, el ex líder estatal perredista Adolfo Núñez y el ex regidor Juan José Gómez convocan a no pagar las placas, que costarán al gobierno estatal 230 pesos pero cobrará por ellas 850 pesos que sumados al cobro del holograma sumarán mil 417 pesos.

Sábado 29

Con la exigencia de que el gobierno federal modifique cuanto antes su estrategia de seguridad, que sólo ha provocado mayor violencia, un grupo de activistas de diversas organizaciones civiles da inicio a la *Jornada de ayuno y reflexión por la justicia*, como parte de una serie de actividades que continuarán este domingo. La acción, realizada en el contexto del primer aniversario de la matanza de 16 personas en el fraccionamiento Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, comienza a las 10 de la mañana frente al monumento a Gandhi. La jornada de ayuno se realiza de manera simultánea en el Distrito Federal y Ciudad Juárez; se esperan acciones similares en varios puntos de México, Estados Unidos, Colombia y Alemania.

Agrupaciones defensoras de los usuarios del servicio eléctrico demandan a legisladores y partidos políticos a atender los numerosos reclamos de eliminar la tarifa doméstica de alto consumo y a detener la imposición de medidores digitales. Apuntan que es necesaria en todo el país una política tarifaria social con el fin de que paguen más quienes más consumen. Durante la Tercera Asamblea Nacional de la asociación civil En Defensa de Usuarios de la Energía Eléctrica –la cual, según informan, ya se convirtió en un movimiento nacional–, Fernando Amezcua, del SME, afirma que existen más de 100 mil quejas documentadas por tarifas excesivas y problemas de suministro, de las cuales unas 60 mil han sido interpuestas por los afectados ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).

Domingo 30

El secretario general del SITUAM, Arturo Vega, advierte que la propuesta económica de las autoridades de la UAM no responde a las peticiones del sindicato, “por lo que queremos una última reunión hoy para ver si logramos avanzar en los puntos no atendidos”. Destaca que entre los temas pendientes se encuentran las plazas de nueva creación, las prestaciones sociales y el tema de los académicos en relación con la extensión de la jornada y las plazas definitivas para los temporales. De acuerdo con estimaciones del SITUAM, hay 329 profesores temporales que realizan actividades permanentes. Reitera que serán los afiliados a esa organización quienes valoren los avances para tomar una decisión muy madura sobre el estallido de la huelga, cuyo plazo se vence el martes 1º de febrero.

El sindicato Napoleón Gómez Sada, que dirige Carlos Pavón –otrora mano derecha del dirigente minero Napoleón Gómez Urrutia y ahora férreo opositor–, informa que obtuvo el contrato colectivo de trabajo de la empresa Met Mex Peñoles, de Torreón, Coahuila. Indica que se hizo un recuento para resolver cuál de los dos sindicatos se quedaba con el contrato de la planta número uno de esta empresa y que con el 98% de los votos se obtuvo la titularidad. Asegura que el proceso fue avalado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Asociaciones de taxistas y otros transportistas paran labores durante más de 4 horas y se plantan en la carretera Mérida-Progreso para protestar por las constantes alzas a los combustibles. Según los organizadores, en la movilización participan al menos 4 mil unidades de servicio público (minibuses, taxis colectivos, foráneos, de sitio y de taxímetro).

Lunes 31

“Cambio de rumbo económico, político y social del país”, exigen al gobierno de Felipe Calderón cientos de gremios obreros y campesinos en la megamarcha que realizan al Zócalo capitalino y en la cual el líder del SME, Martín Esparza, llama a iniciar una insurgencia civil y pacífica en todo el país para enfrentar a una administración que sólo miente a la nación; mientras, el dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Gerardo Sánchez, señala que es preciso derrocar a este gobierno. La marcha –también convocada contra la escalada inflacionaria por las organizaciones que integran el Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas– tiene amplia respuesta. Llena la plancha capitalina, colapsa avenidas como Reforma y se hace acompañar de movilizaciones campesinas todo el día. De acuerdo con los organizadores, aglutina a unos 40 mil obreros y trabajadores del campo y logra, finalmente, un consenso entre las organizaciones para construir un gran acuerdo por la transformación del régimen. El mensaje central es leído por el líder del Sindicato de Trabajadores de la UNAM, Agustín Rodríguez, quien señala que el consenso de este movimiento es cambiar el rumbo del país, modificar el modelo actual y construir un gran acuerdo entre sectores para crear un esquema de desarrollo incluyente. Agrega que para los sectores obrero y campesino independientes, el eje orientador es garantizar los derechos humanos de todos los mexicanos, la inclusión social, el equilibrio entre los poderes y la democracia participativa.

El comité de huelga del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM) determina pedir a sus agremiados no estallar la huelga en esta casa de estudios en razón de que existen avances significativos en la mejora salarial y en las prestaciones del contrato colectivo de trabajo. Por la noche, después de una sesión de tres horas y una ronda de más de 20 oradores, el secretario general del SITUAM, Arturo Vega, informa que los trabajadores se pronunciaron por firmar los acuerdos que conllevan beneficios y que los que van a la baja en términos del contrato no serían signados, con el propósito de buscar que la universidad mejore su planteamiento.

Glosario de siglas

ALDF	Asamblea Legislativa del Distrito Federal
AMOTAC	Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas
AAPAUNAM	Asociación Autónoma del Personal Académico de la UNAM
CAP	Congreso Agrario Permanente
CCA	Comisión Civil de Acompañamiento
CDHDF	Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
CEDH	Comisión Estatal de Derechos Humanos
CFE	Comisión Federal de Electricidad
CIDH	Comisión Interamericana de Derechos Humanos
CMDPDH	Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
CNC	Confederación Nacional Campesina
CNDH	Comisión Nacional de los Derechos Humanos
COCOPA	Comisión de Concordia y Pacificación
CODEP	Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo
CRAC	Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias

CUC	Centro Universitario Cultural
EPR	Ejército Popular Revolucionario
EZLN	Ejército Zapatista de Liberación
FDOMEZ	Frente Democrático Oriental de México Emiliano Zapata
FNLS	Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FONATUR	Fondo Nacional de Fomento al Turismo
IMSS	Instituto Mexicano del Seguro Social
INEGI	Instituto Nacional de Estadística y Geografía
JFCA	Junta Federal de Conciliación y Arbitraje
LyFC	Luz y Fuerza del Centro
OACNUDH	Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
OIT	Organización Internacional del Trabajo
PAN	Partido Acción Nacional
PF	Policía Federal
PGR	Procuraduría General de la República
PRD	Partido de la Revolución Democrática
PRI	Partido Revolucionario Institucional
PROFECO	Procuraduría Federal del Consumidor
PT	Partido del Trabajo
SAGARPA	Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
SCJN	Suprema Corte de Justicia de la Nación
SCT	Secretaría de Comunicaciones y Transportes
SEDENA	Secretaría de la Defensa Nacional
SEMARNAT	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
SETRAVI	Secretaría de Transportes y Vialidad
SHCP	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
SITUAM	Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana
SG	Secretaría de Gobernación
SHCP	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
SME	Sindicato Mexicano de Electricistas
SNTE	Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
SNTSS	Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social
STPS	Secretaría del Trabajo y Previsión Social
SUTERM	Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana
UABC	Universidad Autónoma de Baja California
UABJO	Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca
UAG	Universidad Autónoma de Guerrero
UAP	Universidad Autónoma de Puebla
UAS	Universidad Autónoma de Sinaloa
UAS	Universidad Autónoma de Sonora
UNAM	Universidad Nacional Autónoma de México

Realizado por el Comité de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura de México del Observatorio Social de América Latina (OSAL-CLACSO).

Integrantes: Fernando Munguía Galeana y Mariana López de la Vega.

Fuentes: diarios La Jornada y El Universal.

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales



Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais



OSAL

Observatorio Social de América Latina
Publicación electrónica

Cronología del Conflicto Social

México

Febrero de 2011

Editada en mayo



Agencia Sueca
de Desarrollo Internacional



Agencia Noruega para la
Cooperación al Desarrollo



**Govern
de les Illes Balears**

Conselleria d'Afers Socials,
Promoció i Immigració
Direcció General de Cooperació

El Observatorio Social de América Latina [OSAL] cuenta con el apoyo de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional [ASDI], la Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo [NORAD] y la Agencia de Cooperación Internacional de las Islas Baleares [ACIB].

Documento de trabajo N° 866

*Realizado por el Comité de Seguimiento y Análisis
del Conflicto Social y la Coyuntura de
México*



Integrantes

Massimo Modonesi y Lucio F. Oliver
(coordinadores)
Mariana López de la Vega
Fernando Munguía Galeana

Fuentes

Diarios La Jornada y El Universal.

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Se autoriza la reproducción de los artículos en cualquier medio a condición de la mención de la fuente y previa comunicación al director.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en el documento incumbe exclusivamente al autor o a los autores firmantes y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

El **Observatorio Social de América Latina** (OSAL) constituye una iniciativa del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinada a la promoción de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, las dinámicas de participación y los repertorios de acción de los movimientos sociales y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado es uno de los resultados de este trabajo de relevo y registro llevado a cabo en el marco del programa. Se trata de un escrito en el que se sintetizan las principales acciones de movilización y protesta social y las medidas políticas llevadas a cabo durante el mes indicado en el país referido.

La cronología presentada ha sido elaborada por uno de los **Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana** que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo la coordinación del equipo de investigación mexicano, que forma parte de la red institucional de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.

Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana

PAÍS	INSTITUCIÓN	COORDINACIÓN
Argentina y Uruguay	PIMSA (Argentina)	María Celia Cotarelo
Bolivia	CIDES – UMSA	Dunia Mokrani Chávez Pilar Uriona Crespo
Brasil	LPP - UERJ	Roberto Leher
Chile	DI - UARCIS	Juan Carlos Gómez Leyton
Colombia	Escuela Nacional Sindical	Guillermo Correa Montoya
Costa Rica	IIS - FCS - UCR	Sindy Mora Solano
Ecuador	Centro de Investigaciones CIUDAD	Mario Unda
Guatemala	FLACSO Guatemala	Simona Yagenova
México	FCPS - UNAM	Massimo Modonesi Lucio Fernando Oliver Costilla
Panamá, El Salvador, Nicaragua y Honduras	CELA “Justo Arosemena” (Panamá)	Marco A. Gandásegui (h)
Paraguay	Centro de Documentación y Estudios	Quintín Riquelme
Perú	Instituto de Estudios Peruanos	Ramón Pajuelo Teves
República Dominicana y Puerto Rico	CES “Padre Juan Montalvo” (Rep. Dominicana)	Octavio Figueroa
Venezuela	PROVEA	Marco Antonio Ponce

México

Cronología del conflicto social

Febrero de 2011

Martes 1

El Congreso de la Unión reanuda sus sesiones ordinarias con un minuto de silencio de los senadores y diputados por la paz en el país y en contra de la violencia y, más tarde, en su primera sesión ordinaria, las bancadas de Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Partido del Trabajo (PT) insisten en que el gobierno de Felipe Calderón debe modificar su estrategia contra la delincuencia que, cuestionan, se basa sólo en el uso de la fuerza y un mayor despliegue militar en las calles. “El Poder Legislativo debe discutir cómo contribuir a enfrentar el desánimo, el descrédito institucional y la violencia generalizada. Que el gobierno saque a las calles a las fuerzas armadas, como en un estado de sitio, puede ser preludio de una crisis política que nadie desea en el país” advierte la diputada Diva Hadamira Gastélum (PRI).

En enero, cinco mujeres, de entre 25 y 35 años de edad, fueron asesinadas y sus cadáveres abandonados en distintos puntos de Hidalgo, sin que las autoridades hayan esclarecido un sólo caso, según cifras de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Tres de los cuerpos permanecen en el Servicio Médico Forense de Pachuca, otro en el estado de México y uno más fue reconocido por familiares. De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Femicidio, de 2005 a 2010 se contabilizaron al menos 978 casos, de los cuales más de 500 no han sido indagados. Este mismo observatorio explica que en 2005 hubo 98 feminicidios y en los años subsecuentes 138, 161, 176, 205 y 200, respectivamente. Por su parte, María de la Luz Estrada, dirigente del Movimiento Ciudadano Nacional del Femicidio manifiesta que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México no ha tenido sensibilidad para atender estos casos, como ella lo demostró al solicitar el expediente de la recomendación emitida contra policías judiciales que en Chimalhuacán dieron muerte a una chica en 2009, expediente que la institución jamás entregó. “En el estado de México todo lo quieren reducir a violencia doméstica”, declara Estrada.

En Salina Cruz, Oaxaca, unos cien policías municipales paran labores durante más de dos horas en protesta porque el ayuntamiento suspendió el pago de dos bonos, uno para canasta básica y otro por riesgo de trabajo, que suman 448 pesos mensuales. Avimelec Tovilla Hernández, director de seguridad pública, prometió gestionar los pagos, así como el servicio médico y el seguro de vida. La comandante Eva García Santos detalla que los policías tienen un salario de 136.70 pesos diarios, y los jefes, de 193.80.

La comunidad académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) continúa manifestando su descontento por los términos de la convocatoria 2011 del Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo, términos que pretenden disminuir parte del salario de docentes e investigadores. Los manifestantes solicitan su suspensión y emitir otra propuesta. Miembros de la Facultad de Filosofía y Letras, de los institutos de Fisiología Celular, de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación Superior y de Investigaciones Bibliográficas, entre otros, así como representantes sindicales del personal docente, hacen llegar a la rectoría sus

inconformidades por escrito, a través de documentos firmados por unos 70 académicos cada uno, donde manifiestan su inquietud por las modificaciones. La movilización y presión docente por este tema ocasiona que el abogado y el secretario general de la UNAM, Luis Raúl González Pérez y Sergio Alcocer Martínez de Castro, respectivamente, se reúnan con varios de los sectores inconformes.

Miércoles 2

México es uno de los países donde las defensoras de derechos humanos están expuestas a mayores riesgos, en particular las que combaten prácticas relativas a la impunidad y defienden el acceso a la justicia, las garantías laborales y de las comunidades indígenas; además, México se ubica como la segunda nación latinoamericana por número de amenazas de muerte lanzadas contra activistas de derechos humanos entre 2004 y 2009. Así lo revela el primer informe de Margaret Sekaggya, relatora especial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en un informe que se refiere a las condiciones de peligro que enfrentan quienes se dedican a la promoción de las garantías individuales de las mujeres y las cuestiones de género, así como a sus parejas y familiares.

En San Cristóbal de Las Casas, estado de Chiapas, un muerto y por lo menos dos heridos deja un enfrentamiento ocurrido esta tarde entre indígenas adherentes de la Otra Campaña y un grupo priísta (del PRI) que se disputan el control de la caseta de cobro ubicada en el centro turístico de Cascadas de Agua Azul, municipio de Chilón. Una fuente extra-oficial informa que el problema se originó en la mañana, cuando ejidatarios priístas de San Sebastián Bachajón, Chilón, desalojaron de manera “violenta” a los adherentes que tenían bajo su control la caseta de cobro desde hace dos años.

Mestizos del municipio de Carichí, en la Sierra Tarahumara, estado de Chihuahua, han vuelto a invadir tierras del ejido Baqueachi, devueltas hace apenas tres meses a los indígenas por el Tribunal Agrario, así como denuncian el primer gobernador de la comunidad, Patricio Chávez Gabriel y Felipe González Ramírez, presidente del comisariado ejidal. Desde el sábado pasado, Juan Manuel Romero y Jesús María Sandoval, quienes perdieron sendos procesos judiciales contra los indígenas, comenzaron a levantar cercos en un área de alrededor de tres mil has. en el ejido. Además, amenazaron con armas de fuego a los rarámuris que empezaron a trabajar las tierras que les fueron devueltas el 25 de noviembre pasado.

Con la finalidad de hacer respetar el contrato colectivo de trabajo, denunciar la “intromisión” de la rectoría de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) en la vida sindical de los trabajadores y demandar la devolución de las cuotas retenidas por las autoridades, el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (SUTUACM) realiza una movilización dentro y fuera del plantel Del Valle de esa casa de estudios.

Jueves 3

El comité central del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), encabezado por Martín Esparza, se reúne con el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Felipe Zamora Castro, a quien demanda la reanudación de las negociaciones suspendidas entre el gremio y el gobierno federal, y con quien convino que la próxima semana habría un encuentro con el titular de la dependencia, José Francisco Blake Mora, para retomar la agenda y la minuta que habían firmado. Acompañan al comité decenas de trabajadores “en resistencia” que, en “operación hormiga”, rodean la secretaría durante varias horas y bloquean la calle de Bucareli mientras dura el encuentro.

Según informa el propio Esparza, se tiene una agenda de asuntos a resolver, la cual se firmó con el secretario de Gobernación, por lo que el gremio exige su cumplimiento.

Cerca de medio millar de policías estatales y federales, apoyados por elementos del Ejército Mexicano, desalojan a cientos de indígenas del municipio de Chilón, estado de Chiapas, adherentes de la Otra Campaña, que mantenían bloqueada la carretera Ocosingo-Palenque, y detienen a 121 personas, así como informan fuentes no oficiales. Los indígenas cerraron la vía en protesta porque decenas de priistas del mismo municipio de Chilón los despojaron, el miércoles pasado, del control de la caseta de cobro al centro ecoturístico Cascadas de Agua Azul, ubicado a más de 150 kms de esta ciudad, que estaba en su poder desde hace dos años.

Más de 300 académicos de la UNAM externalan al rector, José Narro Robles, su preocupación por la construcción de la Supervía poniente. En una carta consideran que es un proyecto que pone en riesgo la sustentabilidad del valle de México. La misiva, apoyada con las firmas de más de 800 alumnos de la máxima casa de estudios, ya le fue entregada a Narro Robles. En ella los alumnos manifiestan, de manera formal, el rechazo a la vía de peaje. “Ya tuvimos respuesta. El rector se manifiesta preocupado y se compromete a coadyuvar en la búsqueda de una solución a este problema que afecta a todo el Valle de México”, asegura, en entrevista, Luis Zambrano, investigador del Instituto de Biología.

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) solicita al gobierno y a la Secretaría de Seguridad Pública capitalinos aplicar medidas precautorias en favor de Cristina Barros Valero, integrante del Frente Amplio contra la Supervía Poniente, por las intimidaciones de que ha sido objeto en mantas colocadas en distintas zonas de la colonia La Malinche, en la delegación Magdalena Contreras. Por medio de un comunicado, el organismo informó que el pasado miércoles la afectada presentó una queja en la que manifestó que, el 28 de enero pasado, aparecieron en los cruceros de Luis Cabrera y las calles Contreras y Presa Reventada, así como en la avenida San Bernabé, diversas mantas con alusiones a su persona.

Viernes 4

El Comité de los Derechos del Niño, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), expresa en Ginebra, Suiza, preocupación por la elevada cifra de menores muertos en México debido a la lucha contra el narcotráfico en la que participan las fuerzas armadas. El comité, dependiente del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, detalla que se calcula que por lo menos mil niños fallecieron durante los últimos cuatro años y denuncia violaciones a las garantías fundamentales de los menores y omisiones del gobierno mexicano, al no investigarse los crímenes perpetrados por personal militar.

Ejidatarios adherentes a la Otra Campaña denuncian que dos personas de su grupo están desaparecidas desde la tarde del miércoles pasado, cuando se enfrentaron con priistas en Agua Azul, Chiapas, por la disputa de la caseta de cobro de ese centro turístico. Los ejidatarios piden a las autoridades estatales que liberen a los 121 detenidos que fueron trasladados a Palenque para que rindan declaración y para que se realicen pruebas de radiofonato, necesarias para ver si alguno disparó contra los dos priistas que fallecieron y los dos que resultaron heridos en la trifulca.

El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, el Centro de Reflexión y Acción Laboral y la organización Familia Pasta de Conchos celebran que se haya clausurado la Mina Lulú, en la cual, debido a las deplorables

condiciones de seguridad e higiene, el dos de febrero pasado fallecieron los trabajadores Juan Manuel Gómez Gay y Daniel Vaquera Contreras. No obstante, señalaron que la determinación fue tardía, pues este socavón, propiedad de la minera Siderúrgica Coahuila, del empresario Salvador Kamar Apud, ha registrado diversos accidentes que han costado la vida de varios de sus trabajadores, como Alfredo Ríos Ramírez y Alfredo Soto Torres, acaecidas en 2009, las cuales aún quedan impunes.

Sábado 5

Diversos colectivos de jóvenes y movimientos sociales se manifiestan ante la embajada de Estados Unidos, en la Ciudad de México, para demandar al gobierno de ese país ponerse del lado del pueblo de Egipto y no de las autocracias de la región. Los manifestantes expresan que la diplomacia estadounidense debería pugnar por permitir a los egipcios ejercer su derecho a autogobernarse y resaltan que cada vez hay mayor solidaridad internacional hacia las demandas que enarbolan los jóvenes y trabajadores egipcios que han salido a las calles a exigir las dimisiones del octogenario presidente Hosni Mubarak.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas libera a 106 de los indígenas del municipio de Chilón, estado de Chiapas, adherentes a la Otra Campaña, detenidos el jueves pasado luego de un enfrentamiento con militantes del PRI. En un comunicado, la procuraduría añade que mantiene detenidos a 10 tzeltales acusados de homicidio calificado, tentativa de homicidio, privación ilegal de la libertad, ataques a las vías de comunicación y daños. Fueron en total 116 los detenidos, y no 121, como se informó extraoficialmente al principio.

Martín Esparza Flores, secretario general del SME, informa que los cinco integrantes del gremio que fueron detenidos, presuntamente por haber agredido a trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), fueron liberados, luego de haber pagado una fianza. En entrevista, el secretario manifiesta que la postura del sindicato es pacífica y se ha insistido en que no se debe hacer uso de la violencia. En ese sentido, llama a los afiliados al SME a no caer en provocaciones, que sólo buscan “desacreditar y criminalizar al movimiento”.

Indígenas zapotecos de Villa de San Blas Atempa, en el Istmo de Tehuantepec, estado de Oaxaca, desconocen a la autoridad municipal encabezada por el priísta Héctor Jiménez Osorio y constituyen el ayuntamiento popular autónomo para el trienio 2011-2013, así como informa Javier Aluz Mancera, dirigente regional del Frente Popular Revolucionario (FPR). Aluz Mancera dice que el ayuntamiento se instaló formalmente en el palacio municipal y en un bando de buen gobierno que declara a Jiménez Osorio enemigo del pueblo y otorga a la policía comunitaria facultades para detenerlo por los crímenes cometidos contra la voluntad popular.

Domingo 6

Durante el enero pasado se documentaron 29 asesinatos de mujeres en el estado de Chihuahua, cifra superior en 16% a la del mismo mes de 2010, así como da a conocer la organización no gubernamental Justicia Para Nuestras Hijas. La organización añade que la cifra de homicidios de mujeres registrada en Ciudad Juárez desde 1993, cuando se comenzaron a documentar estos crímenes, asciende a 1004, incluyendo 16 casos del enero anterior y cuatro del actual mes de febrero.

Pascual de Jesús González, integrante del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), informa que cerca de las dos de la tarde fue baleada la casa de Emiliano Martínez Santos, dirigente de la organización en la comunidad Ojo de Agua, situada al norte de San Juan Copala, estado de Oaxaca. El integrante declara que, por el momento, se ignora si Martínez Santos, de 45 años de edad, y su familia resultaron heridos. “Sólo nos reportaron que un grupo armado simpatizante del MULTI (Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente), proveniente de Agua Fría, tiroteó la vivienda de nuestro compañero” explica por vía telefónica.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) documenta violaciones al debido proceso en la detención de los 116 indígenas de la Otra Campaña del municipio de Chilón, en el centro ecoturístico Cascadas de Agua Azul; de los cuales 10 ya fueron consignados la noche del sábado como presuntos homicidas y recluidos en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados número 17, con sede en el municipio de Playas de Catazajá. En un comunicado, el centro indica que, según testimonios de los indígenas, es falsa la versión oficial de que bloquearon la carretera San Cristóbal-Palenque y que hubiera 17 turistas retenidos.

El Consejo Popular Indígena Ricardo Flores Magón asegura que el activista Pablo López Alavés, encarcelado desde agosto de 2010 en el penal de Villa de Etla, en el estado de Oaxaca, es procesado por un testimonio en su contra hecho por Flavio Méndez Santiago, alias *El Amarillo*, detenido recientemente y presunto fundador del cártel de *Los Zetas*. Miguel Cruz Moreno, directivo de la agrupación adherida a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), recuerda que López Alavés –originario de San Isidro Aloapan– fue aprehendido por policías estatales y acusado de homicidio y tentativa de homicidio, ilícitos presuntamente cometidos en junio de 2007 contra sus oponentes y paisanos Arturo Chávez y Matildo Méndez.

En la mina de Cananea, estado de Sonora, ha habido accidentes y muertes de trabajadores esquiroleros que la empresa contrató ilegalmente para hacer labores de supuesto mantenimiento, así como señala Genaro Ortega, secretario de acción política del sindicato nacional de trabajadores mineros. “Desde que entraron las *outsourcing* a Cananea, solapadas por las autoridades, ha habido más de 10 decesos, de los cuales no se ha informado nada y las familias han quedado en el desamparo por Grupo México”, acusa el dirigente.

Lunes 7

Radioescuchas de la periodista Carmen Aristegui realizan durante casi tres horas una manifestación en las oficinas de MVS Radio, en la colonia Polanco, Ciudad de México, y las clausuran simbólicamente en protesta por el despido de la comunicadora. Poco más de 200 personas se apostan a las puertas de la radiodifusora y gritan: “¡Carmen, Carmen, Carmen!”. También, conductores de vehículos que pasaban por la avenida Mariano Escobedo hacen sonar las bocinas de sus autos en muestra de solidaridad. Un grupo de mujeres porta cartulinas en las que escriben consignas como “Calderón represor, discúlpate”; “No hay arma más potente que la verdad en manos de las buenas”.

En el valle de Ciudad Juárez, Chihuahua, son secuestrados dos hermanos y la cuñada de Josefina Reyes, activista contra la militarización del estado asesinada en enero de 2010, lo mismo que su hermano Rubén, siete meses después. Sin dar más detalles, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) da a conocer que Malena y Elías Reyes, así como la esposa de éste, fueron bajados de su vehículo cuando circulaban por el poblado Reforma, municipio de Guadalupe, y llama a una amplia movilización para exigir al gobierno su reaparición.

El costo de la canasta básica se incrementó en un 70% en la pasada década, mientras los salarios perdieron 26% de su valor adquisitivo en el mismo periodo, y en lo que va de la presente administración, 2.5 millones de personas perdieron su empleo; “esta situación pone en riesgo la estabilidad social del país”, declara el dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Gerardo Sánchez García.

Unos 150 agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP) toman este lunes por la mañana las instalaciones de la corporación para protestar por la falta de chalecos antibalas y armas largas, además de los bajos salarios y mala comida que reciben, aunados al exceso de trabajo, consistente en jornadas hasta de 30 horas que se alternan con descansos de sólo 12.

Más de 500 ex braceros marchan del centro histórico de la capital federal a la casa de María del Carmen Hinojosa, madre del presidente Felipe Calderón, para exigir al gobierno pagos a 10 mil migrantes que laboraron en Estados Unidos entre el 1942 y el 1964. Elementos del Estado Mayor Presidencial impiden el paso a los manifestantes, 70 metros antes de llegar al domicilio.

Unos 200 elementos de la policía única (antes Centro de Inteligencia Policial, Cipol), paran labores durante cuatro horas para exigir a la Fiscalía General del Estado el pago de prestaciones económicas que les debe. Los agentes se manifiestan ante el edificio de la capital de Chihuahua conocido como C4, donde se encuentran los mandos operativos de su corporación.

Decenas de profesoras y cientos de padres de familia salen a las calles para hacerse escuchar e insistir a las autoridades de las secretarías de educación federal y local en su demanda de que no cierren los centros de Educación Inicial de Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, pues se quedarían sin trabajo muchos maestros, cuyos sueldos son de 1.300 pesos mensuales, y sin instrucción preescolar 1.500 niños de zonas marginadas.

Martes 8

En Ciudad Juárez, familiares, amigos e integrantes de organizaciones no gubernamentales instalan un plantón frente a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) para exigir la presentación con vida de las tres personas secuestradas el lunes, que son parientes de la activista Josefina Reyes Salazar, asesinada en enero de 2010 al igual que su hijo Julio César un año antes, y su hermano Rubén, en agosto pasado. Con pancartas, mantas y volantes, decenas de manifestantes exigen a las autoridades aclarar el paradero de Malena, Elías Reyes y su esposa, Luisa Ornelas, quienes fueron privados de su libertad el lunes pasado a las 16 hrs.

La Secretaría de Gobernación niega que la administración del presidente Felipe Calderón haya tenido injerencia en el despido de Carmen Aristegui (de MVS Radio) y asevera que tampoco vincula la situación del concesionario con elementos ajenos a lo que marca la ley para la operación de empresas de este sector. “El gobierno federal no hace canjes ni insinuaciones. (El despido de la periodista) nada tiene que ver con la política de comunicación social de este gobierno (...) se trata de la decisión de una empresa”, dice Héctor Villarreal, subsecretario de Normatividad de Medios.

Alrededor de 120 personas se reúnen afuera de las instalaciones de MVS Radio para manifestar su enojo por la rescisión del contrato de la periodista Carmen Aristegui, luego de que, el viernes pasado, ésta planteara, en su programa matutino, la necesidad de que la Presidencia aclare el señalamiento hecho por diputados sobre el supuesto alcoholismo del presidente Felipe Calderón. Entre gritos de

“¡Carmen, valiente, aquí está tu gente!” y “¡Carmen sí, borrachos no!”, los simpatizantes de Aristegui se reúnen por el segundo día consecutivo para lamentar el cierre del que consideraron uno de los pocos espacios en los medios de comunicación electrónicos donde se ofrece una visión distinta y crítica de lo que ocurre en el país. Los manifestantes se congregan a las puertas de la radiodifusora, en la colonia Polanco, y muestran pancartas donde cuestionan la legitimidad del código de ética de MVS Radio y exigen el regreso de la comunicadora, mientras los automovilistas suenan sus bocinas.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Hidalgo informa del hallazgo del cadáver de una mujer con huellas de tortura, con lo que suman seis feminicidios en lo que va del año en la entidad. La dependencia también reporta la detención del presunto responsable de al menos dos de los crímenes, aunque en ambos casos no dio detalles para no entorpecer las investigaciones. Las víctimas fueron torturadas, mutiladas y quemadas y sus restos abandonados en distintos puntos del estado.

Más de 100 artistas e intelectuales, entre ellos Carlos Payán y José Emilio Pacheco, solicitan al jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, ser congruente con el interés que ha manifestado en foros internacionales hacia el problema del cambio climático y con su actuación en pro de los derechos de diversas minorías. Por tanto, que cumpla cabalmente con la recomendación 1/2011 que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió por la Supervía Poniente. En una carta, 108 personalidades manifiestan su preocupación por las expresiones de funcionarios del Gobierno del Distrito Federal tendientes a descalificar la actuación de la CDHDF, y recuerdan al ejecutivo local que, no pocas veces, las autoridades se ven tentadas a hacer caso omiso de los exhortos realizados por organismos públicos de derechos humanos, actuar que califican de torpe, pues la mayoría de las veces no hace sino provocar daños mayores.

Miércoles 9

Para exigir la presentación con vida de los tres integrantes de la familia Reyes Salazar, levantados hace dos días por un comando de uniformados, 11 personas, entre familiares y activistas, inician una huelga de hambre afuera de la Fiscalía General del Estado Zona Norte en Ciudad Juárez, estado de Chihuahua. En el campamento se encuentran Marisela Reyes Salazar, hermana de Elías y Malena, y cuñada de Lorena Ornelas, esposa del primero. Marisela Reyes informa que sus familiares viajaban al municipio de Guadalupe, distrito Bravos, y en el ejido Juárez y Reforma los levantó un comando de hombres encapuchados y armados.

Más de 100 rarámuris del ejido Baqueachi, en la sierra Tarahumara, estado de Chihuahua, derriban alambradas y queman postes de madera colocados por ganaderos del municipio de Carichí, en predios que el Tribunal Agrario devolvió a los indígenas hace más de tres meses, después de más de 40 años de litigios con mestizos, quienes invadieron las tierras. La semana pasada los ganaderos Juan Manuel Romero y Jesús María Sandoval cercaron aproximadamente tres mil has. del ejido y amenazaron a los indígenas que habían empezado a trabajar los predios, que les habían sido devueltos el 25 de noviembre.

En Hermosillo, estado de Sonora, concesionarios de transporte público cierran el bulevar Rosales, la principal vialidad de esta capital, lo que causa enfrentamientos verbales y empujones entre choferes y usuarios inconformes. Los transportistas bloquean la avenida de las 10 a las 13:30 hrs para exigir que la tarifa aumente de 5 a 8.50 pesos. “Antes de protestar arreglen las rutas”, reclaman algunas personas que se organizaron en forma espontánea y protestan en la calle cerrada por los choferes, a quienes advierten que la mayoría de los obreros y estudiantes no podrán pagar pasajes de 8.50 pesos.

Unos 500 trabajadores académicos y administrativos de la Universidad Autónoma de Guerrero, estado de Guerrero, marchan en esta capital y exigen al rector Ascencio Villegas Arrizón que resuelva sus demandas, o de lo contrario iniciarán huelgas los días 16 y 21 de este mes. Los inconformes piden 90 días de aguinaldo, solución a más de 600 presuntas violaciones laborales, incremento salarial de 5%, zona salarial única y “recategorizaciones”, entre otros beneficios.

Habitantes del predio La Angostura, en Álvaro Obregón, Ciudad de México, acuden a la Cámara de Diputados a presentar una solicitud de juicio político en contra del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis González Plascencia, por su “actuar parcial y violatorio de las instituciones”, al emitir una recomendación en la que se plantea la suspensión de las obras de la supervía poniente. Así lo informa Rosa María Ayala, líder de colonos de esa zona, quien, junto con un centenar de simpatizantes, se manifiesta afuera de la Asamblea Legislativa. Ahí, detalla que con el apoyo de sus abogados y “en representación de 10 mil habitantes” de ese predio formalizó su petición de juicio político y destitución del ombudsman local.

Habitantes de distintos pueblos, colonias y unidades habitacionales de Azcapotzalco instalan cuatro “campamentos permanentes” para “resguardar” los espacios públicos e informar a la población del proyecto Foro Estadio Azcapotzalco. La demanda ciudadana es clara: exigen la derogación del acuerdo publicado en diciembre pasado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, en el cual el gobierno capitalino se compromete a desincorporar el Deportivo Reynosa y la Alameda Norte de los bienes del dominio público.

Jueves 10

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos abre un expediente para determinar la probable violación a las garantías individuales de los menores de edad en México en caso la Secretaría de Gobernación aplique la cédula de identidad. El presidente de la Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados, Pablo Escudero, presentó el miércoles pasado una queja ante la CNDH y le solicitó aplicar medidas cautelares para que se suspenda la aplicación del programa.

La Cámara de Diputados concluye que la extinción de la compañía Luz y Fuerza del Centro no se decretó por su alto costo de operación, sino para entregar a compañías trasnacionales la operación y suministro de energía eléctrica en la zona centro del país. Al desaparecer la compañía, expone, los productores externos de energía obtuvieron el 50% de la capacidad de generación de energía de la Comisión Federal de Electricidad. Al realizar un análisis de la extinción, la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara explica que, aunque oficialmente la CFE preste servicio en el Distrito Federal y los estados de México, Morelos, Puebla e Hidalgo, la paraestatal “disminuyó su capacidad de generación en más de 12 mil megavatios para permitir el ingreso de permisionarios privados, y que seis millones de usuarios, cuyo suministro era cubierto por Luz y Fuerza, sean atendidos por firmas extranjeras”.

Opositores a la construcción de la presa El Zapotillo, en el estado de Jalisco, obtienen un amparo que ordena suspender la obra. Durante cinco años, habitantes de tres comunidades han luchado contra el proyecto, al que consideran un peligro para los cuerpos de agua y para el abasto. El Comité Salvemos Temacapulián, Acasico y Palmarejo informa haber presentado unas 30 solicitudes de información sobre el proyecto de la presa, para conocer con detalle las posibles afectaciones al medio ambiente, al

territorio y a los bienes culturales, pero “todas han sido negadas, por lo que continuamos rechazándolo”.

Integrantes de la Otra Campaña protestan en Tuxtla Gutiérrez y en el centro turístico Cascadas de Agua Azul, estado de Chiapas, para exigir la liberación de 10 ejidatarios de San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, detenidos un día después del enfrentamiento con priístas ocurrido el 2 de febrero. Unos 30 manifestantes, instalados en la Plaza Catedral de San Cristóbal de Las Casas, reclaman también la liberación de cuatro indígenas presos “injustamente” en esa ciudad. En la capital del estado, unas 50 personas permanecen frente al palacio de gobierno, donde demandan la excarcelación de los hermanos Amílcar y Armando Méndez, presos desde 2008 en Playas de Catazajá, donde también están reclusos los 10 ejidatarios de Chilón.

En San Luis Potosí, un centenar de integrantes del Movimiento Estudiantil Independiente de educación superior se manifiestan frente al palacio de gobierno y el congreso local en demanda de mantener la tarifa del transporte público en 5.80 pesos (se prevé que el fin de semana entren en vigor las nuevas tarifas). El gobernador Fernando Toranzo Fernández informa que su administración podría solicitar una prórroga para estudiar la propuesta de incremento de los concesionarios.

Según integrantes del Frente Amplio, alumnas que se negaron a recibir propaganda de la supervía poniente fueron “víctimas de intimidación y represión” por parte del director de la secundaria diurna 223, ubicada en la delegación Magdalena Contreras. El director del centro escolar, Quintín Cruz Hernández, permitió que “representantes de la empresa OHL y la demarcación repartieran en los salones propaganda de la tan cuestionada obra vial y expresaran mentiras de las supuestas bondades que representaría, situación ilegal y ajena a la función de un plantel educativo”.

En un caso inédito en el país, los magistrados del décimo quinto tribunal colegiado de circuito en materia de trabajo resuelven que dos sindicatos detenten simultáneamente la titularidad del contrato colectivo de los trabajadores del Hospital Español, a pesar de que uno ganó el recuento, por lo cual los integrantes de este gremio se movilizarán e instalarán un plantón ante la SCJN a partir del martes próximo.

Viernes 11

“La violencia e inseguridad detonan en Ciudad Juárez problemas de salud mental que afectan a por lo menos 21.500 personas que padecen estrés postraumático, depresión o ansiedad, entre otros padecimientos. De ese total hasta una cuarta parte son niños y adolescentes, para quienes actualmente no existen servicios de atención clínica”, asegura Amelia Márquez, profesora de la Universidad de Ciudad Juárez y encargada del diseño del programa de atención que se aplicará en esta urbe en los próximos tres meses, una vez que se inaugure el Centro de Atención Integral en Salud Mental.

En Ciudad Juárez, familiares y activistas cumplen 48 horas en huelga de hambre para exigir la presentación con vida de los hermanos Malena y Elías Reyes Salazar, así como la esposa de éste, Luisa Ornelas Soto, levantados el 7 de febrero pasado en Guadalupe, Distrito Bravos del Valle de Juárez. Pese a las heladas de hasta ocho grados centígrados bajo cero, los demandantes se plantan ante la sede de la fiscalía del estado, donde protestan, encabezados por Marisela Reyes Salazar, quien dice que hombres con indumentaria militar privaron de la libertad a sus hermanos y cuñada.

El juez de la causa dicta en la noche auto de formal prisión en contra de 10 indígenas de la comunidad de San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, estado de Chiapas, adherentes de la Otra Campaña, acusados de los delitos de homicidio calificado, tentativa de homicidio, daños y atentados contra la paz y la colectividad, así como informan fuentes cercanas al caso. Ahora, tendrán que enfrentar el proceso penal correspondiente, aunque sus abogados han interpuesto un recurso de apelación. Los 10 tzeltales fueron detenidos el pasado 3 de febrero, un día después del enfrentamiento entre adherentes y priístas de San Sebastián Bachajón, por la disputa de la caseta de cobro de las Cascadas de Agua Azul, ubicadas a más de 150 kms de esta ciudad.

El Gobierno del Distrito Federal acepta realizar una consulta pública en torno a la Supervía poniente, pero ratifica su negativa a suspender la obra, como le solicitó la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) en su recomendación 1/2011. En la respuesta, entregada por la tarde al organismo, se le informa que se acepta parcialmente la recomendación. El gobierno señala que la consulta será “amplia y plural” y que en ésta se tomará en cuenta la opinión de todos los habitantes de la ciudad y no sólo la de las personas afectadas.

“Aceptar parcialmente una recomendación emitida por el órgano de Estado responsable de acreditar las violaciones a los derechos humanos no es viable y realizar una consulta sin suspender las obras de la Supervía poniente no repara el daño que ocasionó el Gobierno del Distrito Federal y el cual quedó ampliamente documentado en la recomendación 1/2011”, asegura el codirector de Litiga Ole, Luis Miguel Cano. “Si no se acepta la suspensión de la obra, ¿qué se va a poner a consulta pública? La autoridad competente, es decir la CDHDF, ya determinó una serie de violaciones. Si el jefe de Gobierno quiere cumplir con su obligación de reparar el daño tiene que aceptar en su totalidad la recomendación”. El abogado abunda: “habrá que leer en su totalidad la respuesta, pero por lo que se ha manejado en los medios se nos quiere tratar como tontos; los tres primeros puntos de la recomendación están ligados. La consulta pública está condicionada a la suspensión de la obra y a realizar una evaluación del impacto que ésta traerá consigo”.

Un enfrentamiento entre elementos del cuerpo de granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y presuntos integrantes de la Asamblea de Barrios tiene lugar cuando estos últimos pretenden impedir el desalojo de un predio ubicado en la colonia Euzkadi, delegación Azcapotzalco. Según el reporte policiaco, alrededor de las 6 de la mañana, 100 elementos del agrupamiento de granaderos se presentaron en el número 357 de la avenida Central, esquina con Jardín, para resguardar el inmueble y cuidar a los trabajadores que habían sido llevados al lugar para dar cumplimiento con la orden girada por un juez.

Sábado 12

Carecen de base las acusaciones de que Lucía Morett y los estudiantes mexicanos asesinados el 1º de marzo de 2008 por militares colombianos en Sucumbíos, Ecuador, fueran contactos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en México o que recibieran entrenamiento por parte de esa guerrilla, así como se afirma en un cable diplomático emitido por la embajada de Estados Unidos en México, fechado el 28 de marzo de 2008. El despacho descarta incluso versiones de que Raúl Reyes, dirigente de las FARC muerto también en el ataque colombiano al país vecino, tuviese en su poder una computadora con datos sobre un cargamento de droga que la guerrilla habría enviado a un cártel mexicano. El autor del cable –uno de los casi tres mil textos referidos a México y que fueron entregados por Wikileaks a La Jornada– afirma que la presencia de los estudiantes mexicanos – Verónica Natalia Velázquez Ramírez, Soren Ulises Avilés Ángeles, Juan González del Castillo y

Fernando Franco Delgado, quienes murieron en el ataque nocturno por aire y tierra que lanzó el gobierno de Álvaro Uribe en territorio de Ecuador, así como Lucía Morett, quien resultó herida– iban a asistir a un congreso bolivariano de grupos latinoamericanos de izquierda y que quisieron visitar el campamento de las FARC en Sucumbíos.

Por cuarta ocasión desde que Carmen Aristegui fue despedida de MVS Radio, un grupo de manifestantes se reúne frente a las instalaciones de la emisora para demandar la restitución de la periodista y exigir al presidente Felipe Calderón que respete la libertad de expresión en el país. Con mantas en apoyo a la comunicadora, además de banderas de la UNAM y para la diversidad sexual, más de 500 personas se dan cita en la colonia Polanco, Ciudad de México, en la protesta más numerosa que se ha realizado hasta el momento en su favor.

La Procuraduría General de la República informa que un juez federal otorgó la orden de aprehensión contra el dirigente de la organización Campesinos Sin Tierra, Sin Techo y Sin Trabajo, Guadalupe Medina Bernal, por su probable responsabilidad en la comisión de motín. Un comunicado de la dependencia dice que Medina Bernal está ligado a la toma de las oficinas federales del Fondo Nacional de Apoyos para Empresas de Solidaridad, ubicadas en el Palacio Federal de Ciudad Victoria, estado de Tamaulipas. Allí “un grupo de personas pertenecientes a la Organización Triple T, presuntamente dirigida por Guadalupe Medina Bernal, abrieron la sede de la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad, y bloquearon el acceso al personal que ahí trabaja”, destaca el comunicado.

En contradicción con la versión oficial que les atribuye un homicidio y otros presuntos delitos, los 10 indígenas adherentes de la Otra Campaña del ejido San Sebastián Bachajón, actualmente presos en la cárcel de Playas de Catazajá, aseguran ser inocentes. En ese mismo sentido se manifiesta la asamblea de ejidatarios de San Sebastián, que el jueves 10 instaló un plantón de denuncia en el cruce a las Cascadas de Agua Azul, sosteniendo que “los presos son rehenes del gobierno del estado para obligarlos a aceptar el diálogo”. Según la asamblea de ejidatarios tzeltales: “los que portaban sus armas de fuego eran del grupo de priístas, con Carmen Aguilar Gómez y su hijo, y sus compañeros, donde estaban disparando contra nosotros, y (ellos) manifiestan que hubo muerto y lesionados, echándoles la culpa a los compañeros de la otra campaña”.

En la entrada al Deportivo Reynosa hay una manta blanca, donde está escrito en letras rojas: “Cuidado, hormigas unidas hacemos marabunta”. En la calle de Matlacóatl, a un costado de la Unidad Habitacional Ferrería, se instala un campamento de información y vigilancia que funciona las 24 horas. Los ciudadanos que se oponen a la construcción del Foro Azcapotzalco saben lo que está en juego y conocen las limitaciones de su jefe delegacional: “Enrique Vargas podrá llamar a una consulta, tendrá su posición como delegado, puede aparentar estar en contra del proyecto, pero las leyes son muy claras y él está imposibilitado a parar la obra”, sostienen los manifestantes.

La presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Alejandra Barrales, respalda la decisión del jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, de realizar una consulta ciudadana sobre la construcción de la Supervía poniente. La presidente dice que “esperará las características que defina la Secretaría de Gobierno para conocer si el órgano legislativo participará en la promoción de esta consulta, tal como lo hizo en los casos de la reforma energética y el presupuesto participativo. En entrevista, la legisladora aclara, sin embargo, que a la ALDF le interesa también “no poner en duda que tenemos que llevar adelante todas las obras que se requieran para armonizar la convivencia de más de ocho millones de personas que vivimos en la ciudad”.

Domingo 13

En Durango, internos del Centro Especializado de Reintegración y Tratamiento de Menores Infractores del municipio de Gómez Palacio se amotinan para exigir una audiencia con la directora del lugar, Ivonne Patricia Elizalde, inconformes porque se les suspendió el derecho a visitas después de que se encontraran en las celdas de cinco internos instrumentos para hacer tatuajes y a dos se les castigara por entrar en un área restringida del centro. La protesta concluye luego que Elizalde se entrevistó con los jóvenes y les ofreció evaluar los castigos que se impusieron, los cuales no fueron levantados.

Lunes 14

En vísperas del quinto año de la tragedia de Pasta de Conchos, en el estado de Coahuila, en la cual fallecieron 65 mineros, este lunes organizaciones internacionales y nacionales inician movilizaciones en Estados Unidos, Canadá y México con la finalidad de emitir una condena moral contra el gobierno de México por su política anti-minera y anti-sindical, y por no haber resuelto el conflicto mencionado, que alcanza ya cinco años de duración. En este contexto, organizaciones como la Federación Internacional de Trabajadores de la Industria Metalúrgica y la American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO) inician una campaña de envío de cartas al gobierno de Felipe Calderón para demandar respeto a los derechos laborales en México.

“Si la guerra de Felipe Calderón Hinojosa (aunque se ha tratado, en vano, de endosársela a todos los mexicanos) es un negocio (que lo es), falta responder a las preguntas de para quién o quiénes, y qué cifra monetaria alcanza, pues no es poco lo que está en juego”, expone el subcomandante Marcos en un escrito sobre “la guerra del México de arriba”, dado hoy a conocer. De esta guerra no sólo van a resultar miles de muertos y jugosas ganancias económicas. También, y sobre todo, va a resultar una nación destruida, despoblada, rota irremediamente, así como advierte el jefe militar del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). “Nuestra realidad nacional es invadida por la guerra, por lo demás perdida para el gobierno desde que se concibió no como solución a un problema de inseguridad, sino a un problema de legitimidad cuestionada. Esa guerra ahora destruye el último reducto que le queda a una nación: el tejido social”, se lee en el comunicado.

En Mitzitón, estado de Chiapas, integrantes del llamado Ejército de Dios de esta comunidad de San Cristóbal de Las Casas atacan a balazos a adherentes de la Otra Campaña y hieren al indígena Carmen Jiménez Heredia, quien se encuentra delicado de salud, así como informan autoridades ejidales. “Varios hombres rodearon la casa ejidal, la ermita y la cancha de basquetbol entre las 22 y 23 horas del domingo, y dispararon contra los adherentes reunidos en esos lugares. Nos tiraron a matar, como 15 minutos duró el tiroteo y la policía que estaba a pocos metros no hizo nada”, asegura uno de los representantes de Mitzitón, quien pide el anonimato.

En Villahermosa, Tabasco, brigadistas del PRD comienzan a volantear en los 17 municipios de la entidad para promover la campaña Desenchúfate, con la cual llaman a los tabasqueños a participar en un apagón masivo para protestar por las altas tarifas de la CFE. En conferencia de prensa, el dirigente estatal perredista, Javier May Rodríguez, afirma que el apagón se efectuará el 25 de febrero próximo de las 18 a las 18:30 horas. Según la CFE, más de 400 mil personas tienen adeudos con la paraestatal en Tabasco, y la mayoría se niega a pagar, apoyada por el PRD, desde hace 16 años.

Centrales sindicales de Estados Unidos, Canadá, Europa y América Latina realizan mítines y entregan más de dos mil cartas en embajadas y consulados de México en sus países, para demandar que el

gobierno del presidente Felipe Calderón termine las violaciones a la libertad sindical, detenga las prácticas de represión hacia los trabajadores, castigue a los culpables de la explosión en la mina Pasta de Conchos y frene la persecución al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros. En el arranque de la Jornada Solidaridad con los Derechos de los Trabajadores Mexicanos una delegación de líderes sindicales internacionales, acompañada por un representante del más grande sindicato suizo de alimentos se reúne con el embajador mexicano en Ginebra para pedir al gobierno mexicano que cese de violar los derechos sindicales y empiece a cumplir sus leyes y compromisos internacionales sobre derechos humanos y laborales.

Martes 15

En Oaxaca, estado de Oaxaca, integrantes de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y de la APPO se enfrentan por más de siete horas con agentes de las policías federal y estatal, quienes les impiden ingresar al zócalo de la ciudad para protestar por la visita del presidente Felipe Calderón, quien se reúne con el gobernador Gabino Cué Monteagudo en el palacio de gobierno. Las escaramuzas se extienden por 15 cuadras del centro de esta capital y dejan al menos 20 detenidos y 30 lesionados, entre ellos el secretario de Seguridad Pública, Marco Tulio López Escamilla, y el ex vocero de la APPO, Marcelino Coache Verano, además de autos dañados, un tráiler incendiado y ventanas y puertas de negocios destruidos.

Ante la decisión del Congreso de Estados Unidos de disminuir los recursos destinados a respaldar la lucha contra el crimen organizado en México, senadores de PRI, PRD y PT exigen que se cancele la Iniciativa Mérida. “Estoy totalmente convencido que lo mejor que podemos hacer como país es renunciar a la Iniciativa Mérida para transformarla en un acuerdo de obligaciones y responsabilidades compartidas, con la finalidad de combatir de forma más eficiente la inseguridad y la violencia en ambos países”, señala el senador Francisco Labastida Ochoa, del PRI. El senador destaca que se trata de un acuerdo que implica que el país que recibe la ayuda tiene que rendirle cuentas al Senado de Estados Unidos, lo cual, significa someternos a otra nación y a otro poder, y abrir las puertas a la injerencia de Washington en asuntos internos de México, agrega.

El regreso de la periodista Carmen Aristegui al aire, el próximo 21 de febrero, representa un avance para la pluralidad de voces en los medios y demuestra la capacidad de movilización de las audiencias, al mismo tiempo que implica un revés para los comunicadores que ya festejaban su salida, así como afirman legisladores, líderes políticos y activistas de organizaciones civiles. Ricardo González, de la asociación Artículo 19, afirma que el retorno de Aristegui es un hecho positivo, aunque destaca que sigue pendiente la discusión de varios temas importantes, entre ellos la democratización del espectro radioeléctrico, la publicidad oficial y las relaciones entre el gobierno y los medios críticos.

Ante el auto de formal prisión a 10 ejidatarios que defendían su territorio en San Sebastián Bachajón, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas sostiene que en el proceso se registraron violaciones a las garantías judiciales de los detenidos, que el centro define presos políticos perseguidos por el gobierno de Juan Sabines Guerrero. Según documentó el organismo, Jerónimo Guzmán Méndez, acusado de homicidio calificado, y Domingo Pérez Álvaro, de homicidio en grado de tentativa, así como varios más de los señalados, no se encontraban en el lugar de los hechos ocurridos el 2 de febrero en el camino a las Cascadas de Agua Azul, donde perdió la vida Marcos Moreno García y resultó herido Tomás Pérez Deara, ambos del grupo que había tomado con las armas la caseta el ejido.

En Zimapán, Hidalgo, un tercio de las fuentes subterráneas de agua de este municipio tienen concentraciones de arsénico que rebasan la norma oficial mexicana 127, que es de 0.025 miligramos por litro, lo que se considera un desastre ambiental y sanitario, debido a que sus 45 mil habitantes se abastecen de esos manantiales, informó el alcalde José María Lozano Moreno. Este municipio, ubicado a 144 kilómetros de Pachuca, se encuentra en segundo lugar mundial en contaminación con arsénico después de Bangladesh, como señala el alcalde, sin dar detalles. Sin embargo, un estudio publicado en la *Revista internacional de contaminación ambiental* (vol. 4, no. 2, 2008) ya había advertido sobre la amenaza que constituyen para los cuerpos de agua de Zimapán los jales (residuos de la actividad minera), que contienen las más altas concentraciones de arsénico y plomo, superiores a las encontradas en Nacoziari, estado de Sonora; Santa Bárbara, estado de Chihuahua, y Taxco, estado de Guerrero.

En Guadalajara, estado de Jalisco, familiares del niño de ocho años Miguel Ángel López, quien murió en febrero de 2008 luego de caer al río Santiago e intoxicarse con arsénico, así como vecinos del municipio de El Salto y activistas ambientales marchan por el centro de Guadalajara para exigir justicia y que se resuelva la contaminación en el cauce. La Comisión Estatal de Derechos Humanos pide a la Procuraduría de Justicia de Jalisco que inicie un procedimiento administrativo contra el agente del Ministerio Público en El Salto, Gerardo Vázquez, quien desde 2009 se niega a entregar una copia de la averiguación previa sobre la muerte de Miguel Ángel.

Miércoles 16

En Oaxaca, estado de Oaxaca, miles de profesores de la sección 22 del SNTE se manifiestan en esta ciudad y en varias regiones del estado en protesta por la agresión de policía federal y estatal ocurrida contra maestros disidentes cuando pretendían ingresar al zócalo para expresar su rechazo a la visita del presidente Felipe Calderón. El saldo de la jornada del martes es de 13 manifestantes y 15 policías federales heridos, quienes se encuentran en establecimientos de salud, mientras los 17 miembros del movimiento popular apresados quedaron en libertad porque no fueron detenidos en la comisión de algún delito. Respaldados por seguidores de la APPO, los profesores de las regiones de Valles Centrales y Sierra inician su protesta hacia el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca caminando unos cuatro kms sobre la carretera internacional y concentrándose en el centro de la ciudad.

La desaparición de tres miembros de la familia Reyes Salazar y el incendio de su casa, ocurrido el martes pasado, muestra el grado de impunidad con la que se manejan grupos criminales en Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, y en poblados agrícolas del valle de Juárez, consideran activistas de los derechos humanos, mientras que para Amnistía Internacional este caso es un emblema de los agravios contra activistas y evidencia la incapacidad del Estado para evitarlos. Alberto Herrera, director del organismo internacional, considera que no es adecuado que el gobierno federal sólo se enfoque en el combate a la delincuencia organizada. Señala que el asesinato de la activista Josefina Reyes, ocurrido en enero de 2010, la ejecución de su hermano siete meses más tarde y, la semana pasada, el secuestro de otros dos de sus hermanos, Malena y Elías Reyes, así como la esposa de este último, hablan de que hay una violencia no sólo focalizada en uno de los miembros de la familia, sino contra varios de ellos. Podría hablarse, incluso, de exterminio; aunque la palabra es muy fuerte, definitivamente lo que hay es violencia contra toda la familia, así como advierte Herrera.

Los padres de Jyri Jaakkola, el activista finlandés asesinado el 27 de abril de 2010 junto con la defensora de los derechos humanos Bety Cariño, cuando fue emboscada la caravana humanitaria que se dirigía a San Juan Copala, estado de Oaxaca, informan que funcionarios de la PGR y de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores se comprometen a concluir la investigación del asesinato

en el corto plazo. David Peña, abogado que lleva el caso de esos crímenes, y el director de Amnistía Internacional México, Alberto Herrera, manifiestan su esperanza de que la investigación se termine antes del primer aniversario luctuoso de Jyry y Bety Cariño, y exigen que estos dos asesinatos no queden en la impunidad.

En Chilpancingo, estado de Guerrero, el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG) inicia una huelga en demanda de incremento salarial de 50%, rezonificación por vida cara, 90 días de aguinaldo, solución a 630 problemas laborales, así como revisión del contrato colectivo de trabajo, además del pago de diversos adeudos. A las 18 hrs, unos tres mil profesores cuelgan las banderas rojinegras en las unidades académicas de la casa de estudios, después de no lograr acuerdo con la administración central de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG).

A cinco años del crimen industrial de Pasta de Conchos ha imperado la impunidad y a los familiares de los 65 mineros muertos se les ha negado el acceso a la justicia, denuncia Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en tanto que el sacerdote Carlos Rodríguez revela que desde hace dos meses se estableció una mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación para discutir cómo y cuándo reiniciar el rescate de los restos. En la presentación del quinto informe de Pasta de Conchos, el jesuita habla a nombre del Centro de Reflexión y Acción Laboral, y señala que en la mesa también se discute cómo remediar la imparable siniestralidad de la región carbonífera, y dice que la Familia Pasta de Conchos (integrada por los familiares deudos de los 65 mineros que murieron en la mina hace cinco años) hace un llamado enérgico al secretario del Trabajo, Javier Lozano, para no que entorpezca ni estorbe este diálogo.

Jueves 17

En Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, el miércoles pasado, sujetos no identificados rociaron con gasolina la casa de la vocera de la organización no gubernamental Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Malú García, y la incendiaron mientras la activista acompañaba de noche a la familia Reyes Salazar en una huelga de hambre para exigir que los hermanos Malena y Elías Reyes, así como la esposa de éste, Luisa Ornelas, sean regresados con vida del levantón que sufrieron el pasado 7 de febrero. Malú García dice: “Afortunadamente mis dos hijos no estaban. Vecinos avisaron que gente armada bajó de un vehículo, roció la casa con gasolina y la incendió, por lo que se quemó de manera parcial, sobre todo el techo”.

Un enorme mapa de la República es dibujado anoche con miles de veladoras encendidas frente a la torre de rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El mensaje de “Alto a la militarización” que anima la moviliación es dirigido al gobierno del presidente Felipe Calderón: “¿Dónde está la justicia en este país? ¿Por qué robarnos el sentido de la solidaridad, de la dignidad y la capacidad de sentir el dolor propio y ajeno?”. Convocados por la Coordinadora Metropolitana contra la Militarización y la Violencia, marchan unos 1.500 estudiantes de la UNAM y de las universidades Autónoma Metropolitana (UAM) y Autónoma de la Ciudad de México (UACM), así como del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Colectivos de mujeres indígenas organizadas en la zona norte del estado de Chiapas, incluyendo las pertenecientes a los ejidos San Sebastián y San Jerónimo Bachajón, expresan su respaldo a los 10 presos del primer ejido, acusados de crímenes que aseguran no haber cometido, y dirigen un elocuente mensaje al gobierno estatal demandando su liberación inmediata. “No queremos centro ecoturístico en

nuestras tierras. No queremos privatización de la tierra y los recursos naturales, ni más amenazas y represión en nuestras comunidades. No queremos divisiones y enfrentamientos por su culpa, y tampoco su compasión, sino su respeto. No nos pueden desalojar de nuestras tierras, las trabajamos y las defenderemos porque nos dan de comer y de vivir”, manifiestan las mujeres.

En Celaya, estado de Guanajuato, Mireya Toledo, de 34 años de edad, fue asesinada por su esposo Abelino Reyes, de 70 años, de un balazo en la cabeza. Con este crimen suman a cinco los asesinatos de mujeres perpetrados en la entidad en este año, por lo cual la organización no gubernamental Centro Las Libres exige al congreso local que incluya en el Código Penal el delito de feminicidio. El homicidio de Mireya –quien según la procuraduría estatal era víctima frecuente de violencia familiar– se perpetró la madrugada del miércoles pasado en la comunidad Jáuregui, municipio de Celaya.

Viernes 18

La CDHDF hace un llamado al gobierno de la ciudad para que a más tardar en seis días hábiles “reconsidere” su postura y acepte suspender la construcción de la Supervía poniente en los términos marcados en la recomendación 1/2011. Al dar a conocer su postura en torno a la aceptación parcial del documento, el ombudsman capitalino, Luis González Placencia, cuestiona la consulta anunciada por las autoridades con base en la Ley de Participación Ciudadana, ya que, dice, no corresponde a lo recomendado, pues no se pidió un ejercicio de carácter plebiscitario. “No estamos pidiendo que la gente se manifieste en favor o no de la Supervía, sino que se ponga a consulta la manifestación de impacto ambiental”, declara el ombudsman. En ese sentido, agrega, la comisión consideró no aceptados dos puntos recomendatorios, vinculados a la consulta pública, que se refieren a la realización de un diagnóstico de movilidad en la ciudad y a garantizar la transparencia en la organización de la misma, en razón de que la suspensión de los trabajos es el núcleo de las medidas para “reparar adecuadamente las violaciones a los derechos humanos”.

Integrantes del Congreso Popular, Social y Ciudadano del Distrito Federal, organización que agrupa vecinos de varias delegaciones, advierten que, ante la “embestida privatizadora” que ha implementado el gobierno capitalino, se vuelven necesarias “las acciones de resistencia pacífica”. Durante un foro realizado en el Club de Periodistas, los vecinos manifiestan su apoyo a los ciudadanos que se oponen a la Supervía poniente y al Foro Estadio Azcapotzalco. Los colonos también denuncian la existencia de otros proyectos “privatizadores” como Biométrópolis, al sur de la ciudad, y el acuario de Xochimilco.

Se cumplen cinco años de que los familiares de los 65 mineros muertos estuvieran, desde el 19 de febrero de 2006, a las afueras de la mina Pasta de Conchos en espera de justicia y, mes a mes, han celebrado misas (44 en total) frente a la sede de Grupo México para demandar el rescate de los restos de los mineros sepultados, y han interpuesto 40 recursos legales. El gobierno ha pretendido dar “carpetazo” al conflicto, a pesar de que hay dos recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en favor de los deudos; el gobierno ha buscado “cerrar” la demanda presentada por los familiares de los mineros ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y ha omitido responder a las observaciones que le hizo la CIDH hace cuatro meses sobre el juicio interpuesto contra el Estado mexicano. La abogada de la Familia Pasta de Conchos, Cristina Auerbach; Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, y Carlos Rodríguez, del Centro de Reflexión y Acción Laboral, hacen un recuento de la batalla legal y social librada en estos años. Denuncian que el gobierno protege y encubre a los inversionistas de Grupo México, y solapa el estado de inseguridad y corrupción en la minería del carbón.

Integrantes de centrales obreras como la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y del Frente Sindical Mexicano, encabezado por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), realizan en el Distrito Federal una marcha del Ángel de la Independencia a las oficinas centrales de Grupo México, para demandar justicia para los deudos de los 65 mineros fallecidos en la explosión de la mina de Pasta de Conchos en Coahuila, en febrero de 2006. En el contexto de la Jornada de la Solidaridad con los Trabajadores Mexicanos, gremios de electricistas, telefonistas, tranviarios, mineros y el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM), entre otros, se reúnen antes de la 10 de la mañana para recorrer avenida Reforma hasta llegar a la calle Moliere, en Polanco, sede de las oficinas centrales de Grupo México.

Luego de una intensa negociación entre el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y la empresa canadiense Gammon Gold, termina una de las más prolongadas huelgas que el gremio mantenía desde hace ocho meses en la mina El Cubo, de Guanajuato, luego de que las partes acordaran el pago del 100% de salarios caídos para los mineros y la preservación del contrato colectivo de trabajo (CCT). En las negociaciones, que encabezaron, por el sindicato, su dirigente Napoléon Gómez Urrutia y, por la empresa, el presidente ejecutivo de la misma, René Marión, ambas partes se comprometieron a reanudar las operaciones y hacer productiva la fuente de trabajo, de tal forma que se obtengan las ganancias legítimas y de ello se deriven beneficios para sus trabajadores.

Sábado 19

La sección mexicana de Amnistía Internacional expresa su “honda preocupación” por el persistente asedio contra la familia Reyes Salazar de Ciudad Juárez, Chihuahua, de cuyos miembros tres fueron asesinados y tres más están desaparecidos. El organismo hace un llamado a la acción internacional y demanda, tanto al secretario de Gobernación, Francisco Blake, como al gobernador de Chihuahua, César Duarte, dar protección eficaz a la familia, pues hasta ahora no se han tomado medidas adecuadas, pese a que ya fueron asesinados Josefina, su hijo Julio César y su hermano Rubén, y secuestrados por paramilitares Magdalena y Elías Reyes Salazar, así como la esposa de éste, Luisa Ornelas Soto, el pasado 7 de febrero.

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, pide al Estado mexicano atender las demandas de los deudos de la mina Pasta de Conchos, donde hace exactamente cinco años una explosión sepultó a 65 trabajadores. “No hay justificación para que esa mina continúe como si fuera un cementerio... Está pendiente el rescate de los cuerpos y esto sigue siendo una deuda del Estado mexicano. Tiene que haber esfuerzos para el rescate de los cadáveres”, dice el ombudsman.

Representantes de al menos 15 organizaciones independientes, incluidos sindicatos estatales, nacionales e internacionales, participan en un foro en solidaridad con la lucha del Sindicato de Trabajadores Unidos de Honda de México, con sede en El Salto, Jalisco, por su reconocimiento ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), que sistemáticamente le ha negado la toma de nota. En la reunión, efectuada en el auditorio Silvano Barba, de la Universidad de Guadalajara, se leyó un mensaje de la Federación Sindical Mundial (FSM), según el cual los obreros de la empresa trasnacional Honda reciben salarios “de entre 600 y 900 pesos semanales” y continúan entre los peor pagados de la industria de ensamble del ramo automotriz, sometidos por un sindicato blanco afín a la empresa y las autoridades.

En demanda de excarcelar a Vitaliano Velasco –acusado de asesinar a Luis Jiménez Mata, edil de Santiago Amoltepec– su esposa, Gabriela Palacios Guerra, y sus hermanos, Adán y Taurino Velasco, inician una huelga de hambre. “Vitaliano está preso por un crimen que no cometió. Pido que se haga justicia”, dice Gabriela Palacios, mientras coloca cartulinas en las columnas de la entrada del palacio de gobierno de Oaxaca, que dicen: “Vitaliano es el primer chivo expiatorio del sexenio”, “Vitaliano es inocente” y “(gobernador) Gabino (Cué), no dejes a mi hijo sin padre 40 años”.

En Monterrey, vecinos de varias colonias del conurbado municipio de Guadalupe protestan ante la delegación estatal de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, contra la pretensión del Grupo Femsa de construir un estadio para el club de fútbol Rayados de Monterrey en el bosque La Pastora. Los inconformes exigen a la dependencia consultar a los residentes afectados y acusan al delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Francisco Treviño Cabello, de ocultar información y omitir la ley para favorecer el proyecto.

Los problemas ambientales y de salud que ha generado la contaminación por arsénico en las fuentes subterráneas de agua en el municipio de Zimapán, estado de Hidalgo, son producto de una “deuda histórica” de las empresas mineras, que por siglos han explotado los jales mineros, así como afirman activistas. Juan Carlos Ruiz Guadalajara, investigador del Colegio de San Luis, expone en entrevista que el municipio hidalguense es un ejemplo claro de abandono y sobreexplotación.

En Durango, miembros de la comunidad gay denuncian ante el cabildo local ser víctimas de constantes agresiones policíacas. El dirigente Ezequiel García dice que hay 60 casos documentados de hostigamiento, extorsiones y violaciones de sexoservidores y parejas gays que salen de bares o centros nocturnos. “Los agentes los ofenden y si rechazan sus peticiones los atacan físicamente o detienen”, indica; pero el regidor priísta Julio Cabrera desestima la queja por provenir –dice– de un colectivo adherido al Partido del Trabajo, cuya regidora María Trinidad Cardiel es madre del denunciante.

Aun cuando ya fueron etiquetados los recursos, los jefes delegacionales piden al Gobierno del Distrito Federal posponer la consulta ciudadana para la aplicación del presupuesto participativo, lo que genera inconformidad en la Asamblea Legislativa. La presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana, Lizbeth Rosas, exhorta a las autoridades delegacionales a cumplir con lo que mandata la Ley de Participación Ciudadana y realizar este ejercicio programado para el 27 de febrero, a fin de definir los proyectos en los que se destinará el 3% del presupuesto delegacional.

Aun con las enmiendas realizadas por las autoridades de la UNAM a la reciente convocatoria del Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo, ésta sigue generando controversia entre la comunidad universitaria. Técnicos académicos de varias escuelas, facultades e institutos de la institución señalan que el quinto punto de la adenda a la convocatoria –publicada el 8 de febrero pasado en Gaceta UNAM– “ratifica la situación de inequidad y hasta de franca discriminación hacia los técnicos académicos, al prever la participación activa de los directores de entidades y dependencias en su evaluación”.

Domingo 20

En San Juan de Sabinas, estado de Coahuila, a las 2:10 hrs se guarda un minuto de silencio. Luego, en la oscuridad de la madrugada, los familiares de los 65 mineros muertos en la explosión ocurrida el 19 de febrero de 2006 hacen sonar el claxon de sus automóviles, para no olvidar el momento exacto que marcó sus vidas. En el campamento instalado en la entrada principal de la veta, viudas, hijos, padres y

obreros solidarios provenientes de otros estados piden una vez más la recuperación de los cuerpos, labor que suspendieron el gobierno federal y la compañía Minera México, concesionaria del socavón, días después de la tragedia.

Sindicatos y federaciones nacionales e internacionales recuerdan a los 65 mineros que murieron en Pasta de Conchos hace un lustro por la “negligencia” de Grupo México, y reprochan el argumento esgrimido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de que el rescate de los cuerpos no se realiza porque existen razones científicas que sustentan la imposibilidad de hacerlo. En un mitin realizado en el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México, convocado con motivo de la clausura de la semana de solidaridad que agrupaciones sindicales de Estados Unidos y Canadá despliegan en favor de los gremios democráticos de México, los manifestantes sostienen que se pretende “ocultar” las verdaderas causas del siniestro y “proteger” a dicha empresa.

Andrés Manuel López Obrador expresa preocupación por las constantes violaciones a los derechos humanos en Ciudad Juárez, y exige finalizar el hostigamiento y ataques contra activistas y luchadores sociales de la capital de Chihuahua, particularmente contra la familia Reyes Salazar. En un pronunciamiento en nombre del Morena pide a las autoridades investigar el secuestro de tres de sus integrantes. “Desde aquí nos sumamos a su demanda de que aparezcan vivos, sanos y salvos sus familiares Malena, Elías y Luisa, secuestrados por un comando armado el pasado 7 de febrero”.

El grupo guerrillero Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo (TDR-EP) rechaza haber secuestrado al empresario Eduardo García Valseca, “como él ha venido reiterando, al parecer engañado y fuertemente convencido”, sostiene en un comunicado la organización escindida del Ejército Popular Revolucionario (EPR). La TDR-EP destaca que “a fin de deslindar nuestro accionar de la actividad delincriminal, generalmente apadrinada por los cuerpos policiacos, desde 2004 nuestra organización decidió asumir la responsabilidad de practicar, como medio de financiamiento legítimo, la captura, retención y cobro de impuestos –jamás la tortura– a quienes en nuestro país hayan hecho su fortuna valiéndose del uso corrompido del poder y pretendan gozar de total impunidad”.

En Tierra Colorada, estado de Guerrero, un pueblo tlapaneco de alrededor de cinco mil habitantes se convirtió en el primero de 30 de los núcleos agrarios situados bajo la zona de influencia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (o policía comunitaria), que rechaza formalmente la explotación por parte de compañías trasnacionales de los yacimientos de oro, plata y zinc recientemente descubiertos en un perímetro de 500 kms de la región Costa Chica y Montaña Alta de Guerrero. Así lo informa Carmelo Oropeza Demetrio, presidente del comisariado de los Bienes Comunales de Tierra Colorada, municipio de Malinaltepec, quien denuncia que, con autorización del gobierno federal, empresas mineras canadienses e inglesas pretenden explotar en los próximos 50 años esos grandes yacimientos.

El personal de la Procuraduría General de Justicia y de las policías municipales de Guanajuato mantiene sus prácticas de tortura y uso excesivo de la fuerza, que derivan en lesiones e incluso en homicidios, así como da a conocer la Procuraduría de los Derechos Humanos del estado. En enero de 2009, luego de que policías ministeriales mataron al campesino Vicente Palomo durante una sesión de tortura con choques eléctricos en la comandancia de San Felipe, la procuraduría ofreció erradicar los tormentos como forma de investigación, pero tres de los responsables continúan prófugos y en 2010 hubo 18 nuevas quejas contra elementos de esa corporación. Así lo señala el ombudsman Gustavo Rodríguez Junquera en el informe anual de la Procuraduría al Congreso del estado; sostiene también que la persistente práctica de la tortura incluyó el caso de Daniel Murillo Carrillo, asesinado a golpes en mayo de 2010 por dos policías que no han sido capturados y cuya identidad aún se desconoce.

Lunes 21

Anthony Garza, embajador de Estados Unidos en México, describió a Felipe Calderón en la mayor situación de debilidad política posible, en un cable confidencial del 1º de septiembre de 2006 filtrado por Wikileaks. “Corremos el riesgo de que los asuntos de mayor importancia para nosotros se estanquen, a menos que podamos enviar una enérgica señal de apoyo para que el futuro mandatario logre imponer su agenda, alertó”. Éste es el reporte de 1 de las 3 reuniones que sostuvieron Garza y Calderón en el periodo que corre entre los días posteriores a la jornada electoral y la declaración oficial como presidente electo, registradas en el paquete de mensajes diplomáticos filtrados por Wikileaks. En estos tres cables destacan algunas afirmaciones que el hoy presidente no podría sostener. Decía entonces que el suyo “no sería un narcosexenio”. Y calificaba a los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, y de Irán, Majmud Ajmadineyad, con “una capacidad sin límite para armar líos”.

“El expediente médico del presidente Felipe Calderón fue entregado a un cártel del narcotráfico por un integrante corrupto del primer círculo de la Presidencia de la República”, según un cable firmado por el embajador Antonio Garza despachado el 20 de enero de 2009 y clasificado como “secreto”. En el mismo documento, Garza informa que la embajada “compartió con el Estado Mayor Presidencial (EMP) información sobre amenazas contra la vida del presidente Calderón hechas por una organización de narcotraficantes”. Esta información, según el documento, fue proporcionada al EMP por la Oficina de Seguridad Regional, integrada por agentes especiales encargados de velar por la seguridad del cuerpo diplomático. En el cable 09MEXICO133, uno de los entregados por el sitio Wikileaks al diario La Jornada, no se detallan las fechas en que ocurrieron la fuga del expediente médico ni las amenazas. Tampoco se precisa de qué organización, u organizaciones, criminal se trata.

Andrés Manuel López Obrador da a conocer que solicitó licencia como miembro del Partido de la Revolución Democrática (PRD), tras aprobar su Consejo Nacional el pasado sábado la consulta pública que definirá la alianza con el Partido Acción Nacional (PAN) en la elección de gobernador del estado de México. López Obrador sostiene que su licencia durará mientras haya “contubernio” de los dirigentes del PRD con Felipe Calderón y Acción Nacional. “No acepto de ninguna forma la alianza con el PAN, y llamo a los perredistas a mantener el apego a nuestros principios y fortalecer el Morena, junto con los militantes del Partido del Trabajo (PT) y Convergencia”, expresa.

Miembros de la familia Reyes Salazar viajan a la ciudad de México en el contexto de su campaña Defensa de la Vida e instalan un plantón frente al Senado, en demanda de que las autoridades federales presenten con vida a los hermanos Magdalena y Elías, así como a la esposa de éste, Luisa Ornelas, quienes fueron levantados por hombres uniformados el pasado lunes 7 en Guadalupe Distrito Bravos, municipio de Valle de Juárez. Los denunciantes recuerdan en conferencia de prensa que primero fue asesinado un hijo de Josefina Reyes –en 2009–, después la luchadora social y activista en enero de 2010, a raíz de las amenazas por investigar y oponerse a los abusos militares y policiacos y, en agosto del mismo año, su hermano Rubén, pese a que varios organismos nacionales e internacionales de derechos humanos advirtieron oportunamente a las autoridades sobre el riesgo que corría la familia.

Cuatro jóvenes ciclistas ingresan cerca de las 11 de la mañana al Campo Militar número 1. Cascos, mochilas, todo normal a los ojos de los soldados que vigilan la entrada principal. Confundidos entre los paseantes que acudieron al tercer domingo de acceso a las instalaciones castrenses, como parte de la campaña propagandística de la fuerza armada, “la gran fuerza de México”, se detienen un momento cerca de la entrada principal. Y ante la sorpresa de los militares en turno, despliegan una gran manta y empiezan una protesta relámpago que no pudo ser sofocada. “Ésta no es una zona de recreo, es la mayor cárcel clandestina del país”, denunció el primer orador, al tiempo que sus compañeros colocaban al lado del croquis del campo otro cartel, simulando el mismo mapa pero con la leyenda: “Usted está

aquí... y los desaparecidos también”. Sincronizada, desde el exterior se aproximaba una pequeña marcha con más mantas, un megáfono y el acompañamiento de varias madres del Comité Eureka, entre ellas la senadora Rosario Ibarra. Empiezan las consignas de uno y otro lado. Policías militares, militares vestidos de civil, agentes de todo tipo se agitan inútilmente. Es demasiado tarde para desalojarlos. “En este mismo lugar desaparecieron desde los años 70 muchos estudiantes, maestros, médicos, campesinos, dirigentes populares”, dice una joven oradora deteniendo su bici con una mano y la manta con la otra. “Aquí adentro –continúa otro compañero– hubo una cárcel clandestina que le llamaban El Acapulco. Aquí trajeron a todos los campesinos presos en el pueblo El Quemado de Atoyac, Guerrero, para torturarlos. Nunca se supo más de ellos”. Quien habla es Juan Carlos Mendoza, treintañero, hijo de Juan Carlos Mendoza Galoz, desaparecido en este sitio tras ser plagiado el 30 de diciembre de 1981.

A la demanda de organizaciones nacionales y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de reformar el Código de Justicia Militar (CJM) para que civiles juzguen a los soldados que cometan delitos contra la ciudadanía, se suma un sargento del Ejército, quien impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la constitucionalidad del artículo 57, fracción segunda del CJM. Tras un largo litigio, el Supremo Tribunal Militar se declaró incompetente para juzgar a JGPF, sargento segundo –que no estaba en el activo–, acusado de delitos sexuales en agravio de las hijas de otro militar, y turnó el asunto a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, después de haber sentenciado al soldado a cinco años de prisión por abusar de dos niñas cuando les impartía clases de natación.

Después de la explosión en la mina 8 Pasta de Conchos, en la región carbonífera han ocurrido al menos cinco siniestros más, en los que además de 44 muertos han quedado 285 huérfanos y ninguna de las empresas ha reparado el daño, sólo reparten “ayudas humanitarias” e indemnizan a las familias como si hubieran “despedido” a los trabajadores, pagan los gastos funerarios y, al igual que en el primer caso, nunca se han fincado cargos penales a los responsables de tanta muerte. Los siniestros han dejado más de mil familiares directos e indirectos afectados, además de que en varias minas han sido cesados más de 350 trabajadores que conocían de los hechos, para no tener testigos de los mismos, y ni siquiera fueron indemnizados conforme a derecho, señala la Familia Pasta de Conchos.

Centenares de indígenas nahuas del municipio de Soledad Atzompa, en la sierra de Zongolica, estado de Veracruz, apedrean la delegación regional de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en Ciudad Mendoza, donde también golpean a tres policías estatales, dañan patrullas y bloquean calles para protestar por la incursión de militares y policías federales a comunidades, donde, aseguran, hostigan y agreden a pobladores. Los lugareños señalan que el 19 de febrero hubo cateos en varios municipios serranos y los uniformados golpearon a varias personas. El delegado regional de la secretaría, Ángel Landero Contreras, asegura que en esas acciones no participaron agentes locales. La noche del sábado pasado al menos 500 pobladores de Soledad Atzompa bajaron de la sierra al municipio de Camerino Z. Mendoza, conocido como Ciudad Mendoza, para protestar por el ingreso de convoyes del Ejército Mexicano y de policías federales durante la tarde.

Los servicios de salud en México “dejan mucho que desear”, pues aunque el Estado tiene obligación de garantizar la mejor atención, con médicos certificados que dispongan del equipo e instalaciones suficientes para el desempeño de su labor, la realidad es distinta: los pacientes se enfrentan a un sinnúmero de carencias, incluido el desconocimiento del personal médico de los procedimientos clínicos que deben seguir para el tratamiento de las enfermedades y la deficiente integración del expediente clínico, asegura Luis García López Guerrero, primer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). De ahí el cúmulo de denuncias por violaciones a las garantías

fundamentales en contra de instituciones públicas de salud. Sólo en la CNDH se reciben cada año un promedio de 1.500 quejas, las cuales representan 25% de las inconformidades que llegan.

Martes 22

Diversas organizaciones sociales, escritores, académicos y actores demandan al gobierno de Guerrero que intervenga para que sean canceladas las órdenes de aprehensión en contra de seis comunicadores de Radio Ñomndaa y liberen a tres amuzgos de Xochistlahuaca detenidos por defender sus tierras. En un mitin realizado fuera de la representación del gobierno de Guerrero en la ciudad de México, integrantes de 60 agrupaciones sociales demandan diálogo y justicia. Al entregar un pronunciamiento de solidaridad y apoyo a los detenidos los manifestantes sostienen que agotarán todas las instancias legales y pacíficas hasta lograr su objetivo.

En Oaxaca, mujeres y niños desplazados del municipio autónomo de San Juan Copala marchan en el zócalo de esta capital en demanda de castigo a “los grupos paramilitares del MULT (Movimiento de Unificación y Lucha Triqui) y Ubisort (Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui)”. Con altavoces y gritando “¡justicia!”, alrededor de 60 personas exigen al gobierno federal que restablezca la calma en esa demarcación para que puedan regresar a sus casas. Las mujeres y los niños están en plantón frente al palacio de gobierno desde agosto de 2010, cuando grupos armados presuntamente relacionados con la Ubisort los expulsaron de San Juan Copala.

Los comuneros de Santa María y San Miguel Chimalapas, estado de Oaxaca, rechazan la propuesta de las autoridades agrarias de vender las tierras que desde hace 40 años les disputan ganaderos y campesinos de Chiapas. En asamblea efectuada el 18 de febrero pasado, los comuneros de Santa María reiteran la propuesta de reconocer a los habitantes de tres núcleos agrarios y que el resto se integre gradualmente a la comunidad zoque. Desde 1993, los zoques de los Chimalapas se han negado a recibir indemnizaciones a cambio de parte de su territorio.

En Morelia, estado de Michoacán, gracias a un acuerdo de última hora, el Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana conjura la huelga que iba a estallar el mediodía, al aceptar un incremento salarial de 3.9% y 1.3% en prestaciones. El secretario general del sindicato, Erasmo Cadenas Calderón, declara que quedaron algunos temas pendientes como la contratación de personal y la regularización de profesores interinos. Tres cuartas partes de los maestros universitarios votaron contra la huelga.

En el Distrito Federal, 28 organizaciones sociales y ambientalistas de Estados Unidos y Canadá piden al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, la suspensión de las obras de la Supervía poniente; el cumplimiento, en todos los términos, de la recomendación emitida por la CDHDF respecto a ese proyecto, la generación de condiciones para un “verdadero y serio diálogo” con la comunidad que se opone a esa construcción y la salida inmediata de la fuerza pública de La Malinche y el área natural protegida de La Loma. A través de una “carta abierta” dirigida al mandatario capitalino, esas organizaciones –que luchan por los derechos civiles, la justicia social y ambiental– dejan en claro su respaldo a las demandas del Frente Amplio contra la Supervía Poniente, y manifiestan su preocupación por los habitantes de la colonia La Malinche, que han sido afectados por el proyecto de la vía de cuota.

El comité central del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, encabezado por Napoleón Gómez Urrutia, envía una carta al presidente Felipe Calderón en la que le demanda actuar para que se logre una “terminación justa” del conflicto minero iniciado hace cinco años, así como para hacer justicia a las viudas de los mineros muertos en Pasta de Conchos. Además, le plantea trabajar en un acuerdo

integral para terminar con las huelgas en Cananea, estado de Sonora; Sombrerete, estado de Zacatecas, y Taxco, estado de Guerrero. En la carta firmada por los integrantes del comité ejecutivo y del consejo general de vigilancia y justicia, piden al mandatario liberar a Juan Linares Montúfar, presidente del consejo general de vigilancia, quien ya fue exonerado de los cargos que se le imputaban, y el trabajador, Martín Fernando Salazar, preso en Hermosillo sin haber cometido delito alguno.

Miércoles 23

El Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (STAUO) inicia una huelga después de rechazar las ofertas de la rectoría, como parte de la revisión del contrato colectivo de trabajo, informa Agustín Hernández Monroy, secretario general del gremio. Las autoridades ofrecen un aumento de 3.9% directo al salario, 2.6% en prestaciones no ligadas al sueldo, incremento de dos mil pesos al seguro de vida por muerte accidental, natural o colectiva, así como un incremento de 20 pesos a las madres trabajadoras.

El acoso y abuso escolar, conocido como bullying, llevó a 190 adolescentes de la ciudad de México a suicidarse el año pasado, asegura Trixia Valle, directora de Fundación en Movimiento. Al signar con el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del Distrito Federal un convenio de colaboración con el propósito de combatir dicho fenómeno, la directora asevera que el acoso también se da en Internet, conocido como *ciberbullying*, donde los afectados reciben mensajes agresivos que los llevan a tomar la decisión de quitarse la vida.

Jueves 24

La organización Human Rights Watch (HRW) apremia al gobierno mexicano a llevar a cabo una “investigación imparcial y exhaustiva” de los ataques perpetrados contra defensores de derechos humanos y sus familiares en el estado de Chihuahua.

Líderes indígenas denuncian la triple discriminación que sufren por ser mujeres, indígenas y pobres, en el contexto de las jornadas Derechos Humanos y Gestión de Paz, realizadas en el Claustro de Sor Juana, en la Ciudad de México. Dicha discriminación, acusan, favorece la invisibilidad. “En México la violencia creciente contra las mujeres no representa una preocupación para las instituciones, somos víctimas invisibles”, apunta Fabiola del Jurado, de la Coordinación Nacional de Mujeres Indígenas.

El bombardeo de la aviación colombiana contra un campamento guerrillero en territorio de Ecuador, el primero de marzo de 2008, en el que resultaron muertos cuatro estudiantes mexicanos, fue un acto de terrorismo de Estado y un crimen de lesa humanidad aún sin castigar. De esta forma se expresan los participantes en un foro de análisis de dicho suceso, que se realiza en el auditorio Che Guevara de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en donde está presente el articulista de La Jornada Carlos Fazio.

Los dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Napoleón Gómez Urrutia, y del SME, Martín Esparza Flores, firman un “gran pacto nacional de unidad”, en el que acuerdan una alianza para defender de manera conjunta el respeto a los derechos laborales y humanos de los dos gremios, así como promover la creación de un Frente Nacional de Sindicatos Independientes y Democráticos.

El Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear presenta su emplazamiento a huelga, el cual vence el 31 de marzo próximo, en demanda de un aumento salarial de 12%, informa el secretario general del gremio, Manuel García Barajas, quien señala que exhortan a las autoridades del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares a negociar con seriedad para evitar a toda costa que se llegue al paro de labores.

Reporteros locales interrumpen el informe de labores que el presidente de la Comisión Estatal para la Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca, Heriberto Antonio García, presenta ante el Congreso local, para denunciar agresiones contra el gremio y exigir garantías para su labor y respeto a la libertad de expresión. El gobernador Gabino Cué Monteagudo no acude a la sesión solemne y el diputado perredista Tomás Basaldú Rodríguez se niega a participar en el acto porque la comisión, dice, no hizo comentario alguno sobre el enfrentamiento ocurrido durante la visita del presidente Felipe Calderón el martes pasado, y tampoco inició una investigación de oficio.

Investigadores de las universidades Autónoma del Estado de Hidalgo y de Valladolid, España, descubren altas concentraciones de arsénico en la flora de Zimapán y advierten que habitantes de ese municipio, en el estado de Hidalgo, corren peligro, pues se ha encontrado ese tóxico en los vegetales. En el documento “Daños en tejidos vegetales sensibles producidos por aguas contaminadas con arsénico en Zimapán”, los investigadores de la UAEH destacan que, según estudios realizados en los 10 años recientes en pozos, norias y manantiales de ese municipio de la Sierra Gorda hidalguense se observa un incremento del contenido de arsénico, el cual rebasa los límites máximos permitidos por la norma oficial mexicana.

Policías estatales detuvieron la tarde del pasado martes a 19 adherentes de la Otra Campaña cuando obstruían la autopista costera para exigir la liberación de 10 indígenas aprehendidos el 3 de febrero en las Cascadas de Agua Azul, así como denuncia el Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa. Entre los detenidos están Nataniel Hernández, director del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, y los también abogados José María Martínez Cruz y Eduardo Alonso Martínez Silva, quienes acudieron a averiguar por qué se detuvo a los activistas, tres de los cuales fueron liberados por la tarde.

Viernes 25

La tortura sigue siendo una práctica sistematizada y generalizada en México y el panorama no es alentador; toda vez que hay un aumento en el número de violaciones a los derechos humanos, el gobierno no puede ofrecer soluciones reales, existe una criminalización de la protesta social y la estrategia de mano dura del gobierno permite que el Ejército asuma cada vez más funciones de seguridad pública, así como asegura Felicitas Treue, del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad. Durante las Jornadas por los derechos humanos y gestión de la paz, en la Universidad del Claustro de Sor Juana, Ciudad de México, la activista refiere que su organización ha documentado alrededor de 300 casos de tortura en el país y determina como responsables a funcionarios públicos de las procuradurías estatales y federal, así como de las policías municipales y el ejército. La defensora indica que las violaciones a derechos humanos son, en todos los casos, responsabilidad del Estado, y que es deber de éste generar políticas públicas y no sólo programas para subsanar dichos atropellos

La Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos llama a las autoridades de México, Ecuador y Colombia a sobreseer los “infundados” procesos judiciales que mantienen en contra de Lucía Morett, y que la han orillado a vivir escondida desde hace varios meses. En conferencia de prensa, Rita del Castillo, madre de Juan González del Castillo –uno de los estudiantes muertos en el

bombardeo del primero de marzo de 2008–, lee un comunicado en el que los padres denunciaron el “crimen de Estado” cometido por Colombia hace casi tres años. El documento señala que, con la complicidad de la mayor parte de los medios de comunicación, el gobierno colombiano ha puesto en marcha una campaña para hacer pasar a las víctimas como agresores. “A tres años de distancia, reivindicamos la memoria de nuestros hijos, que además de formarse profesionalmente abrazaron el sueño latinoamericanista de Bolívar. Insistimos: ellos no eran delincuentes, su estancia en el campamento bombardeado correspondía a legítimas inquietudes sociales y de estudio”. A la actitud persecutoria de Bogotá, lee Del Castillo, se suma la falta de determinación del gobierno mexicano para respaldar a los padres de los jóvenes atacados, y a la única sobreviviente del bombardeo, Lucía Morett.

La Cámara de Diputados reinstala la mesa de negociación con el SME para encontrar una solución al conflicto generado por el despido de más de 40 mil trabajadores ante la disolución de Luz y Fuerza del Centro (LFC), y evaluar si es posible que el Poder Legislativo constituya una nueva empresa que otorgue el servicio eléctrico en la zona centro del país. Durante la sesión ordinaria, también se informa al pleno que se solicitó a la Secretaría de Gobernación que la próxima semana reanude las conversaciones con el SME.

En Guanajuato, la sección 142 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM) concluye la huelga que mantuvo durante casi ocho meses en la mina El Cubo y entrega las instalaciones a la empresa canadiense Gammon Gold. De acuerdo con Javier Zúñiga García, secretario del trabajo de la organización gremial, la extracción de oro y plata en El Cubo se reanudará en dos semanas, y sólo 50 mineros afiliados al sindicato minero que encabeza Carlos Pavón no recuperarán sus plazas. El paro en El Cubo se inició el 3 de junio de 2010, y el día 30 del mismo mes estalló la huelga en la mina, pues la parte patronal se negó a pagar utilidades o al menos un bono de 50 mil pesos por trabajador.

Ciudadanos de Azcapotzalco, Magdalena Contreras y organizaciones sociales marchan por Paseo de la Reforma en la Ciudad de México para exigir a la administración de Marcelo Ebrard parar “la entrega de espacios públicos a la iniciativa privada”. Las demandas de mayor eco son “no al Foro Estadio Azcapotzalco y detener la construcción de la Supervía poniente”. El contingente parte del Ángel de la Independencia; se suman estudiantes, un grupo de atenguenses encabezados por Ignacio del Valle e integrantes del Congreso Urbano Popular. En los carteles que portan se lee: “Marcelo, el DF no es un cheque en blanco”, “Salinas Pliego, comprar lo robado es delito”, “No al Foro” y “No a la Supervía”. Los manifestantes deciden entrar al Zócalo por Tacuba. Una vez en la Plaza de la Constitución el contingente realiza un mitin y recuerdan las palabras de Benito Juárez: “malditos aquellos que con sus palabras nos convencen, pero con sus actos nos traicionan”.

Por unanimidad, el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprueba reformas a la Ley de Salud local, en las que se considera el fenómeno de la violencia y el acoso escolar, conocido como *bullying*, como un problema de salud, y obliga a las autoridades capitalinas a instrumentar programas de apoyo psicológico a las víctimas y los agresores. El dictamen contiene cifras de la Secretaría de Desarrollo Social, en las que se precisa que entre mayo y junio del 2010 se presentaron 13.633 denuncias en la ciudad de México por casos de acoso. Con 52 votos a favor, los diputados del PRD, PAN, PRI, PT, PVEM, Partido Nueva Alianza (PANAL) modificaron los artículos 63 y 74 de dicha normatividad.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informa a la Cámara de Diputados que en 2010 y 2011 se erogaron 4.600 millones de pesos en la compra de equipo, armamento y tecnología para el combate al crimen organizado. En un oficio de respuesta a una solicitud de diputados, la Sedena detalla que, a

pesar de las restricciones presupuestales, se logró la modernización y el equipamiento de batallones y de centros de control, la adquisición de vehículos y de herramientas tecnológicas. Para el 2011, informa la dependencia, se completará la adquisición de seis helicópteros Cougar, así como la renta de cinco aviones casa C-295 y seis helicópteros Cougar, además de la compra de radares y equipo de comunicación. La dependencia dice que para privilegiar las inspecciones no invasivas, a la fecha se cuenta con 739 detectores moleculares GT-200, 18 medidores de densidad Buster y 43 Mobile Trace GE (transferidos por la Iniciativa Mérida), que se emplean en los puestos de control de las diferentes regiones militares, facilitando las revisiones.

Médicos de Durango y de Baja California exigen seguridad para el gremio después de que en el primer estado se registró el segundo asesinato de un galeno en menos de un año y en el otro secuestraron a un cardiólogo. El presidente del Colegio Médico de Durango, Eduardo Díaz Juárez, informa que, como protesta para exigir justicia, no realizarán consultas externas ni cirugías programadas en las instituciones del sector público ni en los centros privados.

El Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Chapingo, Estado de México, inicia una huelga en la institución luego de que no se lograran acuerdos con las autoridades académicas respecto de sus demandas de incremento salarial de 20%, retabulación de las categorías de los profesores y reparación de violaciones al contrato laboral. En punto de las 15 hrs, los profesores sindicalizados colocan las banderas rojinegras en los tres principales accesos a la Universidad Autónoma de Chapingo, con lo que alrededor de nueve mil alumnos, profesores y trabajadores sindicalizados suspenden las actividades.

Diversas organizaciones civiles y activistas independientes realizan una manifestación frente a la representación diplomática de Libia en México, donde se manifiestan en contra de la represión a ese pueblo y también exigen la salida del gobierno del presidente Muammar Kadafi. Los manifestantes demandan que “se detenga la masacre y se evite la intervención militar”; asimismo, piden que el cambio en el poder en aquel país se lleve a cabo “sin ninguna injerencia imperialista”. Los asistentes se congregan a partir de una convocatoria hecha a través de las redes sociales, con el objetivo de expresar su solidaridad con el pueblo libio.

Sábado 26

En Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, el pasado viernes por la mañana son hallados los cadáveres de María Magdalena Reyes Salazar, su hermano Elías y la esposa de éste, Luisa Ornelas Soto, sobre la carretera Juárez-Porvenir a unos tres kms de Guadalupe Distrito Bravos, donde un comando irrumpió en su casa y los levantó el pasado 7 de febrero. El fiscal de Prevención del Delito, Jorge González Nicolás, declara este sábado en conferencia de prensa que tanto helicópteros como la brigada canina y el personal estatal y federal desplegado proseguían la búsqueda iniciada hace 18 días cuando, aproximadamente a las 7 hrs, militares que patrullaban la zona avistaron los tres cuerpos, luego identificados por sus familiares.

Durante el último día de las Jornadas por los Derechos Humanos y Gestión de Paz en el Claustro de Sor Juana, en la Ciudad de México, los participantes se pronuncian por defender el derecho a la protesta y la movilización, toda vez que son acciones denostadas y criminalizadas que, sin embargo, buscan la garantía de los derechos humanos. Alan García, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, asegura que si bien los activistas forman parte de un movimiento general de defensa y promoción de derechos humanos, para ser reconocido como tal “no hace falta

carnet, título alguno, ni estar inscrito ante alguna organización en particular. La defensa de éstos es una convicción”.

Unas 200 personas acuden a la Representación del Gobierno de Chiapas en el Distrito Federal para exigir “la liberación de los presos políticos” de esa entidad, miembros del Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas y de la comunidad de San Sebastián Bachajón. Una comisión, integrada por Ignacio del Valle (Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra) e integrantes del Frente Popular Francisco Villa Independiente, Jóvenes en Resistencia Alternativa y del municipio autónomo de San Juan Copala es recibida por el titular de dicha representación, César Chávez, quien se compromete a comunicar su demanda lo antes posible al gobernador del estado Juan Sabines, según informa Centli Pérez, miembro de dicha comisión.

Las agrupaciones que integran la organización Alianza Trinacional de Solidaridad hacen un recuento de las acciones de protesta y solidaridad con el sindicalismo independiente mexicano. Precisan que, hasta ahora, la Presidencia de la República ha recibido, vía correo electrónico, cartas de protesta de 3.329 ciudadanos de 97 países. También en México se registraron 27 acciones con la denuncia de la “violación permanente de la libertad y autonomía sindical en México, tanto por el gobierno federal como por los estatales y el de la ciudad de México”.

Cerca de tres mil agremiados del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM) marchan por el centro histórico de Morelia, estado de Michoacán, para exigir aumento salarial y recursos extraordinarios al congreso del estado que eviten la huelga emplazada para el próximo 2 de marzo. Encabezado por el dirigente del SUEUM, Eduardo Tena Orozco, el contingente parte a las 10:30 hrs del Colegio de San Nicolás de Hidalgo a la fuente de Las Tarascas, de donde marchan al Congreso local.

Integrantes de una docena de organizaciones sociales efectúan un mitin en esta localidad, en memoria del profesor Agustín Pérez Rodríguez, torturado y asesinado hace 32 años, cuya lucha permitió el reconocimiento oficial de al menos 40 escuelas públicas de la región. Profesores, padres de familia y estudiantes provenientes de Ecatepec, Chimalhuacán, Chalco y Nezahualcóyotl, así como del Distrito Federal, se concentran frente a la escuela primaria Telpuchcalli, ubicada en la colonia Benito Juárez, de la Ciudad de México, donde el mentor era director cuando fue secuestrado y asesinado el 25 de febrero de 1979.

La Asociación Interamericana de Organizaciones de Padres de Familia no se conforma con el decreto presidencial que establece que las colegiaturas en escuelas particulares sean deducibles de impuestos. En conferencia de prensa, la agrupación encabezada por Guillermo Bustamante, ex titular de la Unión Nacional de Padres de Familia, dice que la medida de Calderón es buena “pero insuficiente” y demanda que los montos deducibles se incrementen a los niveles señalados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que alcanzan cerca de 30 mil pesos por alumno.

En Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, tras ser velados ante la sede local de la Fiscalía General del Estado, los cuerpos de Elías y Magdalena Reyes son sepultados en el panteón municipal de Guadalupe Distrito Bravos, mientras los restos de Luisa Ornelas, esposa del primero, son llevados al poblado de Caseta para ser inhumados en otro cementerio del Valle de Juárez. Los tres integrantes de la familia Reyes Salazar fueron levantados el 7 de febrero por un grupo armado que los torturó, asesinó, enterró clandestinamente y después exhumó para dejar a la vista los cadáveres, que fueron hallados la mañana del viernes por militares.

Los tres jóvenes abogados, defensores de derechos humanos, detenidos en Pijijiapan, estado de Chiapas, el pasado día 22, son internados en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) número 14, El Amate, en Cintalapa. José María Martínez Cruz y Eduardo Alonso Martínez Silva, del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, así como Nataniel Hernández Núñez, director del mismo, con sede en la ciudad de Tonalá, son acusados del delito de motín. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) manifiesta su preocupación por esta detención, efectuada cuando los abogados realizaban “actividades de observación y documentación de posibles violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades estatales mientras se realizaba un bloqueo carretero en el tramo Tonalá-Pijijiapan, en el punto conocido como La Pilita”. Inicialmente, las policías federal y estatal detuvieron a medio centenar de manifestantes.

En Huixtán, estado de Chiapas, unos 800 habitantes de este municipio marchan para demandar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tarifas justas y cesar las amenazas contra las comunidades que desde 1994 están en resistencia de pago en protesta por los altos cobros. Demandan a la empresa que pague el derecho de paso por los territorios indígenas en los cuales afecta miles de has. con el cableado y los postes, y piden al nuevo director de la CFE, Antonio Vivanco Casamadrid, que abra sus oídos a las justas demandas de las comunidades indígenas y campesinas, y baje las tarifas.

Domingo 27

La violencia que prevalece en el estado de Chihuahua y, en especial, en Ciudad Juárez, ha propiciado la muerte de 17 activistas y defensores de los derechos humanos de 2009 a la fecha. Cinco de los finados eran miembros de la familia Reyes Salazar y tres de la familia Gutiérrez Saláis, originaria de Nuevo Casas Grandes; así como Marisela Escobedo y Susana Chávez, entre otros. Un recuento de las cifras de homicidios que ha dado a conocer la fiscalía general del estado muestra que cuatro de las víctimas perecieron en 2011, tres en 2010 y 10 en 2009, el cual ha sido el año más violento para activistas sociales.

Alrededor de mil personas participan en el mitin “No Más Sangre”. En el acto, Rafael Barajas, El Fisgón, destaca a los asistentes: “dicen (quienes nos critican) que la campaña Basta de Sangre busca encubrir a los delincuentes y que pedimos que el gobierno negocie con el crimen organizado. Por supuesto que ese no es el sentido. Esta campaña está dirigida al Estado, que tiene la obligación de dar seguridad a la población”.

El encarcelamiento en Chiapas de tres abogados del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa y la persecución al Consejo Regional Autónomo de la Zona Costa ha generado numerosas protestas a escalas nacional e internacional. Ahora, unas 25 organizaciones de la Otra Campaña, al demandar la liberación de estos “presos políticos”, hacen severos señalamientos: “El gobierno de Chiapas, encabezado por Juan Sabines Guerrero, aplica una agresiva política represiva mediante el encarcelamiento de integrantes de organizaciones y comunidades indígenas”.

En San Francisco del Rincón, Guanajuato, los hermanos Manuel y Jorge Bribiesca Sahagún, hijos políticos del ex presidente Vicente Fox, pretenden desalojar a 150 familias del fraccionamiento El Zapote, en el municipio de Irapuato, después de haber comprado por sólo mil pesos cada una de sus viviendas al Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), para revenderlas en 250 mil pesos, para un total de 37.5 millones por toda la unidad, construida en 1996 por la inmobiliaria Plaza Industrial. Este domingo, unos 200 afectados llegan a las 8 hrs a la plaza de la comunidad de San Cristóbal para hablar con el ex mandatario y su esposa, Marta Sahagún, al término de la misa

dominical, pero la pareja no se presenta y ellos marchan hasta el Centro Fox con pancartas que dicen “Tus hijastros quieren quitarnos nuestro patrimonio” y “Primero Las Biznagas, ahora El Zapote, luego, ¿qué?”.

En Chilpancingo, estado de Guerrero, por órdenes del alcalde priísta Héctor Astudillo Flores, al menos 25 policías municipales desalojan y golpean, alrededor de las 2 hrs, a comerciantes y activistas de las organizaciones Calpulli Tecuanichan y Taller de Desarrollo Comunitario, entre otros organismos no gubernamentales, quienes se hallaban en el zócalo de Chilpancingo para vender artesanías y divulgar sus actividades.

En Oaxaca, estado de Oaxaca, organizaciones no gubernamentales inician acciones de resistencia para exigir el esclarecimiento de las muertes de la activista mexicana Alberta Bety Cariño Trujillo y del finlandés Jyri Antero Jaakkola, asesinados el 27 de abril de 2010 cuando participaban en una caravana humanitaria hacia el municipio autónomo de San Juan Copala, en la región de la Mixteca. La jornada “Por la Justicia y la Dignidad: es tiempo de nosotros los pueblos”, es coordinada por el Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, fundado por Cariño Trujillo, e incluye música, lectura de poemas, danzas populares y proyecciones.

En Pachuca, estado de Hidalgo, alrededor de dos mil integrantes del SME se manifiestan en la plaza Juárez, en esta capital, donde exigen al gobierno que baje los precios de la canasta básica. El dirigente nacional del SME, Martín Esparza, pronuncia un discurso en el cual repudia el incremento del precio de granos, tortillas y gasolina. En respuesta, el gobierno del estado anuncia que recibirá a los inconformes para escuchar sus quejas.

En Guadalajara, estado de Jalisco, la iglesia católica simpatiza con la lucha de organizaciones sociales y de las comunidades Temacapulín y Palmarejo, municipio de Cañadas de Obregón, así como de Acasico, municipio de Mexxicacán, contra la construcción de la presa El Zapotillo, según asegura el sacerdote Gabriel Espinoza Íñiguez, representante y vocero del comité Salvemos Temacapulín. El sacerdote considera que la jerarquía eclesiástica debe manifestarse abiertamente en favor de la gente y participar, de tal forma que tenga no sólo “los ojos en el cielo, sino también los pies en la tierra”.

Lunes 28

En Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, madres de mujeres desaparecidas en Juárez y miembros de la organización Justicia para Nuestras Hijas marchan a la sede local de la fiscalía general del estado para exigir a las autoridades investigar y resolver los casos de numerosas jóvenes de quienes no hay rastro alguno, especialmente Adaili Jauche Laguna, de 19 años, quien visitó a un familiar internado en la prisión local y desapareció en el estacionamiento.

En Real de Catorce, estado de San Luis Potosí, al inicio de 2010 los mara’akame (hombres de conocimiento del pueblo huichol) soñaron que sus dioses trataban de arrancarles las vísceras y el corazón. Esta visión se tradujo en las exploraciones de la minera canadiense First Majestic Silver en Wirikuta, el principal centro ceremonial de las comunidades wixárika, poco más de 140 mil has de desierto en el norte de San Luis Potosí, al suroeste de Real de Catorce, municipio que alcanzó su esplendor minero entre 1875 y 1925. En 2009, First Majestic Silver adquirió 22 concesiones otorgadas a la canadiense Normabec. Esta última empezó a explorar la mina Santa Ana, en la comunidad La Luz, pocos metros antes del túnel de ingreso a Real de Catorce. Son 6 mil 326 has., cuya explotación fue otorgada a la minera por el gobierno federal a cambio de tres millones de dólares. Casi el 70% de esa

superficie se encuentra en Wirikuta, declarada área natural protegida en enero de 2000. Datos de la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía indican que la empresa canadiense explora en busca de plata y oro. En la entrada a la mina Santa Ana pende un cartel en el cual First Majestic Silver asegura que “la mayor parte de las actividades de exploración se llevará a cabo en áreas subterráneas y probablemente no serán vistas; sin embargo, algunos trabajos pueden llevarse a cabo desde la superficie. De cualquier modo, toda la actividad de exploración requiere permisos de trabajo y todo trabajo seguirá las normas jurídicas y las direcciones ambientales”.

Glosario de siglas

AFL-CIO	American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations
AI	Amnistía Internacional
APPO	Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca
CCT	Contrato colectivo de trabajo
CDHDF	Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
CFE	Comisión Federal de Electricidad
CJN	Código de Justicia Militar
CNC	Confederación Nacional Campesina
EMP	Estado Mayor Presidencial
EPR	Ejército Popular Revolucionario
EZLN	Ejército Zapatista de Liberación Nacional
FARC	Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
FPR	Frente Popular Revolucionario
Frayba	Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas
FSM	Federación Sindical Mundial
IPN	Instituto Politécnico Nacional.
JLCA	Junta Local de Conciliación y Arbitraje
LyFC	Luz y Fuerza del Centro
MORENA	Movimiento de Regeneración Nacional
MULT	Movimiento de Unificación y Lucha Triqui
MULTI	Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente
OIT	Organización Internacional del Trabajo
ONU	Organización de las Naciones Unidas
PANAL	Partido Nueva Alianza
PAN	Partido Acción Nacional
PGR	Procuraduría General de la República
PRD	Partido de la Revolución Democrática
PRI	Partido Revolucionario Institucional
PT	Partido del Trabajo
SCJN	Suprema Corte de Justicia de la Nación
SME	Sindicato Mexicano de Electricistas
SNTE	Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
SNTMMSSRM	Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana

México - Cronología del conflicto social de febrero de 2011 – OSAL

STAUAG	Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero
STAUO	Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca
STPS	Secretaría del Trabajo y Previsión Social
STUNAM	Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México
SUEUM	Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
SUTUACM	Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México
TDR-EP	Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo
UACM	Universidad Autónoma de la Ciudad de México
UAG	Universidad Autónoma de Guerrero
UAM	Universidad Autónoma Metropolitana
UBISORT	Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui
UNAM	Universidad Nacional Autónoma de México
UNT	Unión Nacional de Trabajadores

Realizada por el Comité de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura de México del Observatorio Social de América Latina de México (OSAL-CLACSO).

Integrantes: Mariana López de la Vega y Fernando Munguía Galeana.

Fuentes: diarios La Jornada y El Universal.

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales



Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais



OSAL

Observatorio Social de América Latina
Publicación electrónica

Cronología del Conflicto Social

México

Marzo de 2011

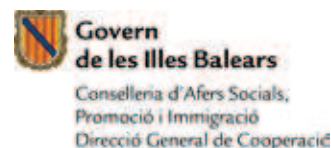
Editada en junio



Agencia Sueca
de Desarrollo Internacional



Agencia Noruega para la
Cooperación al Desarrollo



El Observatorio Social de América Latina [OSAL] cuenta con el apoyo de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional [ASDI], la Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo [NORAD] y la Agencia de Cooperación Internacional de las Islas Baleares [ACIB].

Documento de trabajo N° 885

*Realizado por el Comité de Seguimiento y Análisis
del Conflicto Social y la Coyuntura de
México*



Integrantes

Massimo Modonesi y Lucio F. Oliver
(coordinadores)
Mariana López de la Vega
Fernando Munguía Galeana

Fuentes

Diarios La Jornada y El Universal

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Se autoriza la reproducción de los artículos en cualquier medio a condición de la mención de la fuente y previa comunicación al director.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en el documento incumbe exclusivamente al autor o a los autores firmantes y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

El **Observatorio Social de América Latina (OSAL)** constituye una iniciativa del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinada a la promoción de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, las dinámicas de participación y los repertorios de acción de los movimientos sociales y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado es uno de los resultados de este trabajo de relevo y registro llevado a cabo en el marco del programa. Se trata de un escrito en el que se sintetizan las principales acciones de movilización y protesta social y las medidas políticas llevadas a cabo durante el mes indicado en el país referido.

La cronología presentada ha sido elaborada por uno de los **Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana** que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo la coordinación del equipo de investigación mexicano, que forma parte de la red institucional de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.

Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana

PAÍS	INSTITUCIÓN	COORDINACIÓN
Argentina y Uruguay	PIMSA (Argentina)	María Celia Cotarelo
Bolivia	CIDES – UMSA	Dunia Mokrani Chávez Pilar Uriona Crespo
Brasil	LPP - UERJ	Roberto Leher
Chile	DI - UARCIS	Juan Carlos Gómez Leyton
Colombia	Escuela Nacional Sindical	Guillermo Correa Montoya
Costa Rica	IIS - FCS - UCR	Sindy Mora Solano
Ecuador	Centro de Investigaciones CIUDAD	Mario Unda
Guatemala	FLACSO Guatemala	Simona Yagenova
México	FCPS - UNAM	Massimo Modonesi Lucio Fernando Oliver Costilla
Panamá, El Salvador, Nicaragua y Honduras	CELA “Justo Arosemena” (Panamá)	Marco A. Gandásegui (h)
Paraguay	Centro de Documentación y Estudios	Quintín Riquelme
Perú	Instituto de Estudios Peruanos	Ramón Pajuelo Teves
República Dominicana y Puerto Rico	CES “Padre Juan Montalvo” (Rep. Dominicana)	Octavio Figueroa
Venezuela	PROVEA	Marco Antonio Ponce

México

Cronología del conflicto social

Marzo de 2011

Martes 1

Decenas de transportistas del Estado afiliados a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) bloquean por cuatro horas tres de las principales entradas a la ciudad de Cuernavaca, capital del estado de Morelos, en protesta porque el ayuntamiento canceló la segunda etapa de pavimentación de la avenida Morelos, lo que dejó sin empleo a unos 500 trabajadores. El cierre de las vialidades comienza poco después de las 9 hrs. en la glorieta de La Paz, en el norte de la ciudad, en la avenida Plan de Ayala, al oriente, y El Polvorín, en el sur.

A las 21:40 hrs. el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (STAUO) concluye la huelga que mantuvo durante ocho días, después de que el gobierno del estado aceptara otorgarles un incremento salarial de 3.9% y 2.6% en prestaciones, además de un terreno valuado en alrededor de cinco millones de pesos para la construcción de viviendas para sus afiliados. Agustín Hernández Monroy, secretario general del STAUO, afirma que entregaron las instalaciones al momento de firmar la minuta. Agrega que el gobierno del estado se comprometió a gestionar recursos federales para la institución.

Miércoles 2

La procuraduría del estado de Chiapas libera “bajo las reservas de ley” al director del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, Nataniel Hernández, y a otros dos abogados del organismo, José María Martínez y Eduardo Alonso Martínez. El presidente del consejo de dicho centro, Bersaín Hernández, informa que se dictó auto de libertad a los tres litigantes, acusados del delito de motín, a las 22 hrs., después de que dialogó con el secretario de Gobierno, Noé Castañón, al final de una marcha efectuada en Tuxtla Gutiérrez en demanda de que fueran excarcelados los activistas, arrestados el 22 de febrero pasado durante un bloqueo carretero para solicitar la liberación de 10 adherentes a la Otra Campaña.

Un grupo de manifestantes se reúne al mediodía frente a la representación del gobierno de Chihuahua en el Distrito Federal para expresar su repudio a la violencia que sufren los activistas de derechos humanos en aquella entidad, donde las autoridades han sido omisas en el cumplimiento de su trabajo. En medio de consignas como “Chihuahua no es cuartel, fuera Ejército de él”, los inconformes señalan que la impunidad y el derramamiento de sangre, en particular el sufrido por la familia Reyes Salazar, hacen de México un Estado fallido que no garantiza la seguridad de sus ciudadanos.

Se realiza por la tarde en la parroquia adjunta al Centro Cultural Universitario (CCU), en el Distrito Federal, una misa en recuerdo de los cuatro estudiantes mexicanos fallecidos durante el bombardeo de la aviación colombiana en territorio de Ecuador, el primero de marzo de 2008. El padre Miguel Concha Malo, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, encabeza la ceremonia religiosa en la que se conmemoró a Fernando Franco, Verónica Velázquez, Soren Avilés y Juan González, además de a Lucía Morett, única sobreviviente del ataque.

Por segundo día consecutivo, cientos de choferes de unidades de transporte urbano paran labores en la zona conurbada de la ciudad de Cuernavaca, Morelos, y durante seis horas bloquean algunas

entradas a la capital en protesta porque el ayuntamiento reanudó las obras de la segunda etapa de pavimentación de la avenida Morelos, lo que, aseguran, cada día les provoca la pérdida de 400 mil pesos. Desde las primeras horas del día, encabezados por el líder de la Federación Auténtica de Transportes del Estado de Morelos, Dagoberto Rivera Jaimes, operadores de transporte urbano paralizan unas mil 800 unidades de las rutas 2, 3, 5, 7, 12, 13, 18 y 19. El primer cuadro queda prácticamente intransitable debido a que los transportistas de carga opositores a la pavimentación de la avenida Morelos estacionan los vehículos en las calles. Después del mediodía, el subsecretario de Gobierno estatal, José Luis Bolaños Aguilar, informa que el paro afectó a 505 de los usuarios en los municipios de Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Temixco, Huitzilac y Xochitepec.

El Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de Posgraduados (Sintcop) coloca las banderas de huelga en el acceso al campus Texcoco, estado de México, en demanda de aumento salarial y homologación de prestaciones con las de otras universidades, informa Pablo Corona Ramírez, secretario general del gremio. La mayoría de los 850 trabajadores administrativos determinan iniciar el paro debido a que las autoridades académicas se negaron a homologar prestaciones, en específico con la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). El paro afecta a mil estudiantes y 600 profesores. Demandan gastos médicos mayores e incorporación de la prima de antigüedad al salario para que impacte en jubilaciones e incapacidad permanente; además un incremento del 20% directo al salario y del 5% en prestaciones.

Jueves 3

Al menos 15 mil profesores integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se manifiestan frente a las oficinas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Morelia, Michoacán, y de ahí marchan al centro histórico de la ciudad para exigir el abasto de medicamentos. También demandan el cumplimiento de acuerdos pactados con el gobierno de Michoacán en el 2010, así como el retiro de la iniciativa de Ley Estatal de Educación presentada al Congreso local. Alrededor de las 9 hrs., acompañados de organizaciones sociales y estudiantes, los miembros del organismo disidente se plantan frente a la delegación administrativa del ISSSTE, donde exigen instalar una mesa de trabajo para resolver pronto el desabasto de medicamentos. A las 11 hrs. los contingentes de la CNTE arriban a la casa de gobierno, donde un grupo de maestros es recibido por funcionarios estatales, con quienes acuerdan analizar los puntos pendientes de la minuta del 2010, relacionados con prestaciones por 200 millones de pesos y con el apoyo (pendiente desde el 2008) de 300 millones de pesos para obras de infraestructura en comunidades marginadas.

El Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Chapingo (STUACH) levanta la huelga que mantuvo desde el viernes pasado, luego de llegar a un acuerdo con las autoridades académicas y aceptar un incremento salarial del 3.9% y diversas prestaciones laborales. A pesar de que el STUACH concluyó su movimiento, las instalaciones de la universidad continuarán cerradas, pues el Sindicato de Académicos mantiene también una huelga para exigir un incremento salarial. El STUACH acuerda con las autoridades, además del incremento salarial, que cada trabajador recibirá un bono único por 25 mil pesos; un fondo por 750 mil pesos para todo el sindicato, dividido en cuatro prestaciones diferentes, y la firma de un convenio para que del 2012 al 2015 se implemente un proceso de homologación salarial. También se acuerda que para cada trabajador que se jubile durante este año se abonará un bono extra de 30 mil pesos.

Integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) instalan nuevamente un plantón permanente e indefinido en el Zócalo de la Ciudad de México, en demanda de que se resuelva de fondo el conflicto que aqueja a este gremio y de que devuelvan su empleo a los más de 16 mil trabajadores que no han cobrado su liquidación y que no van a hacerlo. En conferencia de prensa, el

dirigente Martín Esparza plantea que “el SME también está convocando a todas las organizaciones independientes, sociales, urbanas, campesinas y obreras a que se sumen a este plantón-protesta, porque sólo con la movilización cívica se va a lograr que este gobierno respete las leyes”. Agrega que “en los próximos días se instalará otro plantón indefinido en la nueva sede del Senado, y se mantendrá el que ya se tiene en la Cámara de Diputados. La invitación es a que se sumen gremios y sectores que tengan problemas con este régimen autoritario, cuyo cúmulo de violaciones laborales ha escandalizado al sector sindical en todo el mundo”.

Viernes 4

Integrantes del SME inician la organización del plantón permanente que instalaron el jueves en el Zócalo capitalino, al tiempo que anuncian una nueva jornada de protesta. No descartan retornar a la huelga de hambre (en el ayuno del año pasado participaron decenas de trabajadores durante 90 días). Para esta nueva etapa de protesta usarán nuevos recursos, como la recolección de zapatos viejos para arrojárselos a Javier Lozano, secretario del Trabajo, en un acto público. En tanto, Martín Esparza, dirigente del SME, precisa que la reunión con el secretario de Gobernación, Francisco Blake, cancelada el jueves, fue reprogramada para el próximo miércoles. Se espera que acudan a la cita diputados encabezados por el presidente de la mesa directiva en San Lázaro, Jorge Carlos Ramírez Marín.

Con dos féretros en hombros y vestidos de negro, habitantes de Tecamachalco, municipio de Huixquilucan, estado de México, marchan y se plantan frente a las oficinas alternas del palacio municipal, donde solicitan frenar la construcción de 11 desarrollos inmobiliarios y comerciales que, aseguran, violentan el uso de suelo y el plan de desarrollo urbano.

Sábado 5

Como cada primer sábado de mes, desde hace dos años, la organización HIJOS México y el Comité Eureka efectúan una protesta frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), acto mediante el cual reiteran su exigencia de que las autoridades mexicanas investiguen seriamente el tema de los desaparecidos y frenen dicho fenómeno. La demanda correspondiente a este mes es dedicada a las mujeres, a propósito del día internacional de la mujer que se conmemora el próximo martes.

El Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Chapingo (UACH) pone fin a la huelga que sostuvo por 10 días, luego de aceptar la propuesta de la rectoría de otorgar a sus afiliados el 3.9% de incremento al salario y el 2.6 % en prestaciones, informa Sócrates Galicia Fuentes, secretario general del gremio. El acuerdo se logra a las 23 hrs. del viernes, pero las banderas rojinegras son retiradas hasta después de la firma de los acuerdos ante autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Galicia Fuentes informa que además obtuvieron 1.5 millones de pesos en prestaciones colectivas, el pago de un bono por 25 mil pesos, por única vez, para los profesores de tiempo completo, y apoyo para un proyecto de jardines botánicos, turístico, cultural y científico que se instalará en Tequesquinahuac.

Más de 10 mil priístas provenientes de los 20 municipios del estado de Nayarit marchan y se plantan afuera de la sede estatal del PRI en demanda de que el gobernador Ney González Sánchez “saque las manos del proceso electoral”. La marcha es encabezada por Raúl Mejía González y Gerardo Montenegro Ibarra, dos de los cuatro aspirantes a obtener la candidatura del PRI al gobierno del estado, que se renovará el 3 de julio, a la par que los 30 diputados locales y 20 alcaldes. A una semana de que comience la precampaña para todos los partidos, con miras a sus

procesos internos de selección de candidatos, los manifestantes demandan al titular del poder ejecutivo estatal que “se encargue de gobernar y no de andar apoyando candidatos”.

Domingo 6

En conferencia de prensa, José Antonio Lara, vocero de Alianza Única del Valle, anuncia que los integrantes del Frente Amplio Opositor a la Supervía Poniente y la Convención Popular Mexiquense, así como vecinos de Azcapotzalco y Tláhuac, acordaron aliarse y marchar a las 17 hrs. por Periférico Norte, vía Morelos, Periférico Sur y vialidades de estas delegaciones, con el objetivo de tomar, este próximo martes, las cuatro entradas a la ciudad de México para expresar su rechazo a la construcción de la supervía y del Foro-Estadio Azcapotzalco, la expropiación de predios en Tláhuac y el incremento hasta del 1.500% en las tarifas eléctricas en colonias populares por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). “No se trata de un movimiento político, sino de exigir que se nos escuche, aunque ello signifique afectar a la ciudadanía con bloqueos de tránsito, ante la actitud de soberbia y cerrazón de los tres niveles de gobierno que pretenden imponer dichas obras y mantener los altos costos de la energía eléctrica, lo cual ha provocado ya algunos conatos de violencia en municipios del estado de México”, puntualiza el vocero.

Lunes 7

Organizaciones feministas del estado de Morelos colocan en el zócalo de la ciudad de Cuernavaca 418 cruces de cartón rosa que, aseguran, representan el número de mujeres asesinadas en el estado en una década. Señalan que “la mayoría de los crímenes sigue impune, por lo que este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, no hay nada que celebrar”. Asimismo exigen tipificar el feminicidio en el Código Penal estatal. “Cada año aumenta el número de homicidios de mujeres en Morelos; del 2000 a principios del 2005 se contabilizaron 100; hoy suman 418, de los cuales se ha resuelto menos del 10%”, afirma la coordinadora del Comité contra el Feminicidio en Morelos, Nadxielli Carranco.

Desde las 6:30 de la madrugada, ejidatarios que se identifican como adherentes de la Otra Campaña realizan un bloqueo total de la carretera federal San Cristóbal-Ocosingo-Palenque, en el estado de Chiapas, a la altura del cruce del centro turístico Cascadas de Agua Azul, en demanda de la liberación de los detenidos el día 2 de febrero del año en curso y otras demandas.

Martes 8

Ejidatarios adherentes a la Otra Campaña, de San Sebastián Bachajón, Chilón, Chiapas, denuncian amenazas e intimidaciones de la policía estatal durante un bloqueo carretero el lunes pasado frente a la sede autónoma zapatista de San José en Rebeldía, a unos metros del cruce a Agua Azul. Los campesinos demandan la libertad inmediata de cinco de sus compañeros presos. Así mismo, en el contexto de su día internacional, las mujeres de San Sebastián se manifiestan por la defensa de sus tierras y territorios y por la paz, y prosiguen las protestas para “exigir la autodeterminación como mujeres indígenas que somos”.

Con marchas, mítines y bloqueos en al menos ocho estados, organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos exigen al gobierno poner un alto a los asesinatos de mujeres, tipificar el feminicidio como delito y atender los reclamos de ese sector de la población; asimismo repudian los recientes homicidios de activistas. En Chihuahua, decenas de personas marchan y se manifiestan frente a la Fiscalía General Zona Norte, con sede en Ciudad Juárez, para exigir justicia por los

asesinatos de las activistas Marisela Escobedo, Susana Chávez y los miembros de la familia Reyes Salazar. En lo que va del año, 87 mujeres han sido ultimadas en esa entidad, y 57 en Juárez. En Chiapas, unas 5 mil personas de diferentes agrupaciones sociales se manifiestan en 15 municipios, entre ellos San Cristóbal de las Casas, Chenalhó, Ixtapa, Pueblo Nuevo, Frontera Comalapa y Ocosingo, y bloquean cuatro vialidades para exigir que paren la violencia contra las mujeres y los feminicidios. En la comunidad de Majomut, municipio de Chenalhó, 500 mujeres de la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas, a la que pertenecían los 45 indígenas asesinados el 22 de diciembre de 1997 en Acteal, caminan tres kms. y protestan frente a un campamento militar, lo que deviene en roces con los soldados, quienes les impiden ingresar para realizar una oración. En Oaxaca, profesores de la sección 22 del SNTE suspenden actividades, marchan por la capital y realizan un mitin. En Monterrey, Nuevo León, decenas de activistas se apostan frente al palacio de gobierno en demanda de que se frenen los feminicidios y se respete la equidad de género. En la explanada de Los Héroes encienden veladoras en memoria de las mujeres que han muerto en forma violenta y portan tres cruces que completaban la leyenda “Ni una más”. En Morelos, el sexto Encuentro Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, en la comunidad nahua de Hueyapan, concluye con una marcha y un mitin en el zócalo de Cuernavaca, donde las participantes exigen el reconocimiento y respeto a sus derechos colectivos e individuales. También se realizan manifestaciones en los estados de Querétaro, Guerrero e Hidalgo. Por su parte, autoridades y congresos estatales aprovechan el Día Internacional de la Mujer para anunciar la creación de dependencias e instancias que beneficien a las mujeres, enviar iniciativas de reformas legislativas encaminadas a combatir la violencia de género y entregar reconocimientos a luchadoras sociales.

Vecinos de la zona norte del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, protestan en las instalaciones del Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Odapas) porque habitantes de 10 de las 18 colonias de la región padecen desabasto del líquido desde hace dos meses. Funcionarios del Odapas argumentan ante los inconformes que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) redujo el caudal de 800 a 550 lt/seg., por lo que no hay suficiente presión en las tomas domiciliarias.

Miércoles 9

La Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) informa que logró un acuerdo salarial con el Sindicato Único de Trabajadores de la UACM, con lo que queda conjurada la huelga que estaba programada para estallar en el primer minuto de este día. En asamblea, el sindicato acepta el incremento salarial del 3.9% ofrecido por la rectoría, un aumento similar al que se otorgó a otras instituciones de educación superior como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), con retroactivo al primero de enero de 2011, así como indica la UACM. Entre las modificaciones al contrato colectivo de trabajo se formaliza la instalación inmediata de la comisión bilateral, para que analice, establezca y proponga los plazos, mecanismos y montos para concretar la integración salarial y para evitar presiones financieras o presupuestarias que comprometan la viabilidad de la universidad y afecten en lo inmediato los ingresos de los trabajadores.

Los ejidatarios de San Sebastián Bachajón adherentes de la Otra Campaña en el municipio de Chilón, en Chiapas, responsabilizan al gobierno del estado, al secretario de Gobierno, Noé Castañón León, y al Consejo Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por el desalojo violento de los compañeros el pasado 2 de febrero, por un grupo de priístas que el mismo secretario de Gobierno organizó con autoridades del ayuntamiento de Chilón. Sostienen que la operación para despojarlos del acceso a las cascadas de Agua Azul “fue financiada por los tres niveles de gobierno, elaborando un convenio con las autoridades del municipio de Tumbalá y los oficialistas de San Sebastián

Bachajón para entregar al gobierno el centro ecoturístico que ahora quedó bajo administración de la Secretaría de Hacienda del estado en base a los acuerdos firmados entre ellos”.

Habitantes del poblado de San Francisco Acuautla, en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México, queman dos camiones y causan destrozos a otros tres, indignados porque el conductor de una de estas unidades, de la línea Autotransportes San Francisco, arrolló y mató a dos personas de la tercera edad y huyó. Los vecinos protestan durante más de siete horas hasta que unos 500 elementos de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) los dispersan con gases lacrimógenos, aunque los inconformes responden con piedras y otros objetos contundentes.

El gobernador del estado de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, firma un decreto que crea la Fiscalía de Investigaciones en Delitos de Trascendencia Social, la cual indagará los asesinatos, torturas y otras violaciones a los derechos humanos de activistas que participaron en el movimiento magisterial y popular del 2006, así como otros casos que involucren a luchadores sociales. Cué Monteagudo nombra también a una comisión ciudadana, formada por oaxaqueños expertos en leyes y en la promoción y defensa de los derechos humanos, para vigilar y acompañar las acciones de la nueva fiscalía.

Unos 200 miembros de la Sociedad Integral de Organización Nacional (SION) se manifiestan frente a la sede de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) en la ciudad de México para exigir que se construyan seis carreteras en la zona rural del municipio de Ixmiquilpan, estado de Hidalgo.

Jueves 10

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y Litiga Ole presentan ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) una denuncia contra la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, pues dicha instancia autorizó el cambio de uso de suelo en terrenos forestales para la construcción de la supervía poniente, en el Distrito Federal, sin que existiera una evaluación de impacto ambiental federal. En conferencia de prensa, Juan Carlos Arjona, de Cemda, y Luis Fernando García, de Litiga Ole, explican que el artículo 28 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) señala la obligatoriedad de dicho estudio y califican de violación a las leyes los trabajos que la empresa Controladora Vía Rápida Poetas realiza en el Área Natural Protegida de La Loma.

Por considerar que suspender la construcción de la supervía poniente en el Distrito Federal causaría daños y perjuicios a la sociedad, ya que este tipo de obra es de ejecución urgente e inaplazable, el quinto tribunal colegiado en materia administrativa de primer circuito ratifica la negativa a parar los trabajos, contra lo solicitado por María Cristina Barros, integrante del Frente Amplio contra la supervía, y el abogado Luis Miguel Cano, con el respaldo de casi 300 firmas, mediante un amparo. Alrededor de 290 residentes de San Jerónimo solicitaron el amparo para impugnar una larga lista de normas y actos relacionados con la vialidad, incluidos el Programa Integral de Transporte y Vialidad del Distrito Federal 2007-2012, la Ley Ambiental del Distrito Federal, el Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo de la ciudad de México, la declaratoria de utilidad pública para el proyecto, el decreto de expropiación y la declaratoria de impacto ambiental. La resolución, elaborada por el magistrado Eduardo Ceceñas González, es aprobada por unanimidad. Precisa que parar la construcción contravendría leyes, que tienen normas que buscan, mediante la expropiación y la justificación de las causas de utilidad pública, una mejora en las vialidades del Distrito Federal, por lo que el interés de la quejosa de que no se realicen las obras de construcción no debería prevalecer sobre el interés de la sociedad.

Después de 17 días de permanecer bajo toldos frente al palacio de gobierno del estado de Nayarit, 40 enfermeros suplentes de la Secretaría de Salud de Nayarit, que habían sido despedidos, logran el pago de salarios que les adeudaban y la firma de un contrato por un año, que les dará derecho a basificación y homologación de salarios. El contrato entrará en vigor la próxima semana, así como afirma su abogado, Benjamín Sandoval Cedano.

Alrededor de 3.500 alumnos de las 11 escuelas aglutinadas en la Coordinadora de Escuelas Normales del Estado de Oaxaca (CENEO) se mantienen en paro en demanda de que el Instituto Estatal de Educación Pública dé respuesta a sus demandas. Los inconformes se encuentran acampados en las instalaciones del Centro Regional de Educación Normal de Oaxaca, ubicado en la zona norte de esta ciudad, cerca de la Fuente de las Siete Regiones.

Cerca de 100 ex trabajadores de Petróleos Mexicanos marchan por las principales avenidas de Villahermosa, Tabasco, antes de partir al Distrito Federal, donde protestarán frente a la SCJN para exigir que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) acate el laudo 565/2009 emitido en su favor para que los reinstalen en la terminal marítima del puerto de Dos Bocas, de donde fueron despedidos en el 1992. Los inconformes afirman que, hace más de un mes, presentaron una queja ante el Tribunal Colegiado en Materia Civil y Laboral con sede en Villahermosa, sin que hasta el momento haya sido dictaminado por los jueces.

Trabajadores en activo y jubilados del Sindicato Nacional de Ferrocarriles se plantan frente al Hospital Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Chihuahua, estado de Chihuahua, para protestar por el desabasto de medicamentos y malos tratos a los pacientes por falta de personal médico en las clínicas de los municipios de Guerrero, Urique y la capital. El dirigente de los trabajadores, Benito Bueno, asegura que el IMSS está negando atención a los ferrocarrileros, quienes se ven obligados a consultar a médicos particulares y comprar medicamentos, por lo que exige que les rembolsen el dinero.

Viernes 11

La activista por los derechos de las mujeres y fundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Marisela Ortiz, deja de manera temporal Ciudad Juárez, luego de las amenazas de muerte que recibió cuando un grupo de hombres colocó frente a la secundaria técnica 60, donde da clases desde hace 18 años, un mensaje en contra de ella. Manifiesta que “se fue para proteger a sus hijos y que en cuanto haya mejores condiciones regresará”. La acción se suma a la de Marisol Valles, ex directora de Seguridad Pública de Praxedis G. Guerrero, en el mismo estado de Chihuahua, y a la de integrantes de la familia Reyes Salazar, así como de Cipriana Jurado, quienes también recibieron amagos que los obligaron a dejar sus sitios de residencia para buscar seguridad en otros lugares.

El movimiento Universitarios Unidos por la Paz 11:11 realiza cuatro actos simultáneos en igual número de universidades en Monterrey, estado de Nuevo León, para repudiar la violencia y comprometerse a trabajar en favor del desarrollo comunitario y combatir la criminalidad. Uno de los actos se lleva a cabo en la explanada de la rectoría de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), y congrega a unas 3 mil personas para un minuto de aplausos en memoria de Raúl Javier Villarreal Martínez, estudiante del primer semestre de arquitectura, de 17 años, que murió la noche del jueves al recibir un balazo en la cabeza debido al fuego cruzado entre militares y sicarios que se enfrentaron en el centro de Monterrey. La manifestación se realiza en el mismo sitio donde hace cinco meses se congregó una multitud de universitarios por la muerte de la estudiante de artes visuales Lucila Quintanilla Ocañas, víctima de una bala perdida, el 7 de octubre de 2010, cuando un sicario presuntamente atentó contra un celador del penal de Topo Chico en el centro de la ciudad.

Otra concentración se realiza frente a la rectoría del Tecnológico de Monterrey, también convocada por la Unión Universitaria 11:11, donde el dirigente estudiantil Adrián Martínez afirma que “este movimiento busca activar a los ciudadanos para ser agentes de cambio, empoderar a la sociedad para generar el cambio y, a través de los jóvenes, crear conciencia de que el cambio se puede generar”.

Habitantes de la colonia Ampliación Silvestre Castro, ubicada al poniente del puerto de Acapulco, estado de Guerrero, protestan contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) debido a que, como afirman, desde el 2005 no atiende su petición de electrificar la zona. Irma Hernández Romero, representante de los vecinos, expresa que a pesar de los escritos enviados, ni la empresa ni el ayuntamiento han solucionado el problema. Indica que ante los cobros mayores a 10 mil y 15 mil pesos, muchos vecinos optaron por conectarse a los cables ubicados en la parte baja del área.

Sábado 12

Diversas organizaciones sociales y sindicales se suman al plantón permanente del SME en la Plaza de la Constitución, que se inició hace 10 días.

Domingo 13

Continúan las acciones públicas para exigir la liberación de los indígenas de la Otra Campaña que se encuentran presos en Chiapas, especialmente los cinco pobladores de San Sebastián Bachajón recluidos en penales de Catazajá y Berriozabal. En las ciudades de México, Nueva York, Londres, Edimburgo, París, Berlín, Barcelona y Buenos Aires se realizan actos de protesta llamando “asesinos” y “represores” a los gobiernos federal y al gobierno estatal, y respaldando los derechos a la tierra y el territorio de las comunidades indígenas zapatistas y de la Otra campaña. Se reportan también protestas en Sudáfrica, Puerto Rico, Austria, Marruecos, Filipinas y Colombia. Colectivos, organizaciones y adherentes de la Otra Campaña, miembros de la Red Contra la Represión y por la Solidaridad, realizan un acto en la explanada del palacio de Bellas Artes, como parte de las acciones por la liberación de los cinco tzeltales de San Sebastián, así como de los maestros Alberto Patishtán Gómez (tzotzil encarcelado en San Cristóbal de las Casas) y Máximo Mojica Delgado (en Tecpan de Galeana, estado de Guerrero). Asimismo, activistas de la Otra Campaña en México demandan al gobierno de Oaxaca la liberación de Álvaro Sebastián Ramírez, preso político y de conciencia.

En San Cristóbal de Las Casas, estado de Chiapas, 441 delegados del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder), quienes acuden a su octava reunión nacional en el municipio de Huitiupán, exigen la cancelación del proyecto hidroeléctrico Itzantún y Chinín, que la CFE pretende reactivar en ese lugar luego de 26 años.

Lunes 14

Organizaciones civiles y de defensa de los derechos humanos denuncian en conferencia de prensa que las agresiones a los defensores siguen en aumento en el estado de Chihuahua y se mantienen en Guerrero y Oaxaca, al igual que las agresiones a periodistas en Chihuahua, Coahuila y Morelos.

En Morelia, estado de Michoacán, medio centenar de familiares de los cinco michoacanos desaparecidos en Veracruz el 13 de septiembre de 2010 marchan al centro histórico de esta capital para exigir al gobierno local que interceda ante autoridades del puerto de Veracruz, pues todo parece indicar que eran policías estatales de esta ciudad quienes los levantaron. Vestidos de blanco,

los familiares parten al mediodía de la fuente de Villalongín hasta llegar a palacio de gobierno, bajo las consignas: “vivos se los llevaron, vivos los queremos”. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Víctor Manuel Serrato Lozano, informa que en lo que va del año han desaparecido 55 personas en Michoacán, y manifiesta que los familiares de los cinco desaparecidos interpusieron una queja ante las comisiones de derechos humanos de Veracruz y de Michoacán, porque no hay avances en las investigaciones. Prisca Jaimes Hernández, Julio Zambrano Sánchez, Alejandro Manríquez López, Jorge Utrera Gamboa y Heriberto Celestino salieron de Morelia al puerto de Veracruz, a una diligencia de trabajo, a bordo de un vehículo Volkswagen, tipo Bora, rojo, modelo 2006, placas PFG188. Los cinco reportaron el pasado 13 de septiembre su llegada a Veracruz entre las 16 y 18 horas, y sus últimas llamadas telefónicas fueron entre las 10:30 y 24 horas de aquel día.

Organizaciones de lesbianas anuncian que el sábado próximo realizarán la quinta marcha lésbica 2011, que partirá del Zócalo al Monumento a la Revolución. En conferencia de prensa denuncian “la guerra no declarada que el Estado mexicano ejerce contra la sociedad civil, el pueblo y, particularmente, mujeres y activistas sociales, bajo pretexto de acabar con la delincuencia organizada, como los casos de femicidios, principalmente en Ciudad Juárez”. Rocío Jaramillo, Juana Guzmán y María Castro leen el pronunciamiento y las demandas que se harán durante la movilización. Destacan que su movimiento “cuenta con más de 34 años de historia y trabajo ininterrumpido por la emancipación de las mujeres”. Resaltan que su propósito fundamental ha sido “eliminar la opresión que el patriarcado ha ejercido por milenios contra la población femenina por el sólo hecho de ser mujeres; hacernos visibles en un mundo donde el espacio público ha sido dominado por los hombres”. De igual forma, se pronuncian en contra de la violencia “que ejerce el gobierno federal en contra de los movimientos sociales y, en particular, de las mujeres que luchan por mejorar sus condiciones de vida, así como de las luchas de los mineros de Pasta de Conchos, Atenco, Oaxaca y el Sindicato Mexicano de Electricistas”. Entre las exigencias que plantean destaca la construcción de “un centro de salud y albergue para lesbianas que viven violencia de todo tipo, que sea administrado por el comité organizador de la marcha lésbica; la tipificación del delito de lesbofobia, y la inclusión de las parejas lésbicas en las leyes de seguridad social”.

En Chilpancingo, estado de Guerrero, el Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco) exige al gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo reabrir los expedientes de 28 casos de desaparición forzada ocurridos durante su administración y asegura que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) pretende vincularlos con la delincuencia organizada. En conferencia de prensa, Javier Monroy Hernández, coordinador del Tadeco, anuncia que el 27 de marzo presentarán en Acapulco los expedientes recopilados desde el 2005 a la fecha al Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada o Involuntaria de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

En Acapulco, estado de Guerrero, integrantes de la comisaría ejidal de Alfredo Bonfil impiden a trabajadores de la CFE introducir cables en el bulevar Revolución, lo que provoca un conato de riña con residentes del Comité del Pueblo, quienes están en favor de la obra. María Palacios, del comité, señala que “la comisaría ejidal pide 10 millones de pesos para su beneficio”, mientras que Rocío Leal, de la comisaría, asegura “que el dinero es para pavimentar calles”. En tanto, la Unión de Pueblos y Organizaciones Sociales pedirá al gobernador electo Ángel Aguirre gestionar una tarifa preferencial de electricidad para pueblos indígenas.

Representantes del sector empresarial se pronuncian por la regulación de las marchas para evitar el cierre de negocios y el despido de personal, pues las pérdidas económicas que generan oscilan entre 320 y 900 millones de pesos, según la duración de cada evento, “pero lo peor es la mala imagen que damos como ciudad a los visitantes nacionales y extranjeros”. Al término de la firma de un convenio en favor de la seguridad, los presidentes de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, Rafael García, y de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos

Condimentados, Braulio Cárdenas, aclaran que “no se trata de limitar la libertad de expresión de nadie, sino de contar con orden”. El poder legislativo no puede posponer por más tiempo la discusión de esta iniciativa, que busca lograr una mejor convivencia y “evitar riesgos de seguridad, pues en cualquier momento podemos sufrir un terremoto y cómo vamos a llegar si ahí están los manifestantes” argumenta García González. Los costos políticos de una reglamentación en la materia deben quedar de lado, ante los costos económicos, sociales y hasta ambientales que traen consigo las marchas, así como los plantones “que no deberían permitirse”, agrega el representante hotelero, quien propone que el gobierno realice su programa de obras por la noche. Con base en estimaciones de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México una marcha de tres horas genera pérdidas para el sector por 320 millones de pesos y hasta de 900 millones si supera las ocho horas.

Martes 15

El grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias (de personas) realiza en la ciudad de México, a partir de este martes y hasta el viernes 18 de este mes, su 93ª sesión, en la que se examinarán más de 190 casos de desapariciones provenientes de diferentes países. Concluida la sesión, el grupo de trabajo, a invitación del gobierno federal, iniciará una misión oficial en el país para informarse de desapariciones forzadas de personas ocurridas en México en el pasado –en las décadas de los 70 y principios de los 80 en la denominada “guerra sucia”–, así como los casos recientes de desapariciones forzadas. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH, por su sigla en inglés) informa que el grupo de trabajo realizará una misión al país del 18 al 31 de este mes, “en la que visitará varias entidades –Distrito Federal, Chihuahua, Coahuila y Guerrero– a fin de reunir información de primera mano sobre la situación de las desapariciones forzadas. La misión de trabajo viajará a Atoyac, estado de Guerrero, donde, de acuerdo con información de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de México, se registraron más de 500 desapariciones forzadas en la época de la guerra sucia (década de los 70 y principios de los 80). El grupo de trabajo analizará la recomendación 26/2001 de los casos de desaparición forzada de personas que realizó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH): 532 casos de personas desaparecidas en la época de guerra sucia y en la que documentó 275 desapariciones forzadas. A esas se suman los cientos de denuncias de personas desaparecidas en los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, a través de los denominados “levantones”.

Los trabajadores del SME en resistencia realizan una cadena humana alrededor de la SCJN e informan sobre su decisión de iniciar ayunos masivos de 12, 24 y hasta 48 horas en el campamento instalado en el Zócalo capitalino, e incluso volver a realizar huelgas de hambre, si no se toman acuerdos inmediatos en la mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación (Segob) para que puedan regresar a laborar. En una carpa de las decenas instaladas por el SME en la plancha del Zócalo de la ciudad de México, el comité central de este sindicato, encabezado por Martín Esparza Flores, ofrece una conferencia de prensa, en la que se informa que retomarán las movilizaciones, debido a que “ya pasaron siete meses desde que levantaron la huelga de hambre a cambio de un acuerdo con el gobierno federal, y ya se le olvidó al secretario Francisco Blake Mora lo que firmó con los electricistas”. Esparza Flores denuncia que incluso instancias jurídicas arremeten nuevamente contra el sindicato, pues la presidenta de la Junta Especial número 5 de Conciliación y Arbitraje, María Adriana Mayo, acaba de emitir una resolución “inaudita”, según la cual miembros del comité central del SME no tienen representación para defender los intereses de sus agremiados. En la conferencia, dos trabajadores que participaron en la anterior huelga de hambre, María Isabel de la Rosa y Rafael Muñiz, toman la palabra para señalar que ante la impunidad, soberbia y mezquindad de las autoridades, varios integrantes del sindicato resolvieron comenzar huelgas de hambre, porque “están dispuestos a mantener su lucha sin comer por recuperar sus empleos, y el estado de derecho en el país”. Denuncian que ya quedó de manifiesto que la extinción de Luz y

Fuerza del Centro (LyFC) fue una maquinación de los secretarios del Trabajo, de Energía, Gobernación y de la CFE para dar el negocio de este servicio público a empresas trasnacionales, por lo que iniciarán los ayunos, dependiendo de la respuesta que dé Gobernación a los convenios que se hicieron.

La Central Campesina Cardenista (CCC) anuncia que el próximo 22 de marzo establecerá un “plantón permanente” frente a las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) y del Fideicomiso del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo) en demanda de que sean atendidas “más de 14 mil solicitudes de vivienda rural que presentó en febrero”. En conferencia de prensa, Santiago Domínguez Luna, secretario de desarrollo rural de la CCC, sostiene que, pese a existir un “déficit anual de vivienda rural de 600 mil”, la Sedeso “capitaliza políticamente los programas sociales en favor del PAN [Partido Acción Nacional]”. Exhorta a la dependencia a aplicar “en tiempo y forma los programas destinados para atender este problema en el campo; pues la demanda de vivienda rural es elevada, pues en una casa de cuatro por cuatro metros cuadrados, llegan a habitar hasta ocho miembros de una familia”.

Unos 100 integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) toman las oficinas de la Subcoordinación de Servicios Educativos de la región Acapulco-Coyuca de Benítez, como forma de presión para negociar sus demandas, como informa Alfonso Bautista Peralta, del comité de prensa de esa organización.

En el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, miembros del Frente Único de Pепенadores del Distrito Federal (FUPDF) cierran el relleno sanitario Bordo Poniente y bloquean el Periférico Oriente, en protesta porque la planta separadora de desechos donde laboran 1.800 trabajadores dejó de operar. Unos 300 trabajadores impiden desde las 9 hrs. el paso de los tractocamiones de transferencia procedentes del Distrito Federal. Los vehículos quedan varados en Periférico Oriente, entre Bordo de Xochiaca y el paso a desnivel que cruza el brazo derecho del río Churubusco, en la colonia El Sol.

Las etnias de Guanajuato logran, después de 10 años, que el poder legislativo estatal aprobara la Ley para la Protección de los Pueblos y Comunidades Indígenas. Habitantes de los municipios de Victoria y Tierra Blanca impulsaron una iniciativa en el año 2000, y durante el sexenio pasado (2000-2006), el entonces gobernador Juan Carlos Romero Hicks rechazó apoyarla por considerar que las normas existentes cubrían las necesidades de las etnias. El Congreso de Guanajuato aprueba hoy la ley indígena por unanimidad, a partir de una propuesta de los ayuntamientos de Tierra Blanca y Victoria, los de mayor presencia de pueblos originarios en la entidad. Las nuevas normas obligan a las autoridades a promover la igualdad de oportunidades para los indígenas, así como eliminar cualquier práctica discriminatoria.

Estudiantes de diversos grupos étnicos tomaron el lunes pasado las instalaciones de la Universidad Autónoma Indígena de México (UAIM) en la comunidad de Mochicahui, municipio de El Fuerte, y en la ciudad de Los Mochis, cabecera municipal de Ahome, para exigir la destitución del rector Guadalupe Camargo Orduño, a quien acusan de malos tratos y discriminación, de haber sido impuesto por el gobierno estatal y de no resolver los problemas académicos de esa institución. Los inconformes aseguran que el nombramiento del rector violó la autonomía universitaria, pues no se tomó en cuenta a la junta directiva. La UAIM, creada durante el gobierno de Juan Millán Lizárraga (1999-2004), tiene estudiantes de 15 etnias diferentes de Sinaloa, Sonora, Oaxaca, Guerrero y Chiapas.

Miércoles 16

En un mensaje leído al iniciar el encuentro “Con la memoria, los pueblos construimos justicia y verdad”, al cual convoca el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) en esta ciudad, el subcomandante Marcos expresa la admiración y reconocimiento de los pueblos zapatistas por quienes eligieron “el camino más difícil, incómodo, ingrato”, de defender y promover “los derechos fundamentales del ser humano”. Participan defensores y activistas de las garantías individuales que en años y meses recientes han enfrentado graves agresiones a sus derechos, tanto en comunidades indígenas de Chiapas como en las ciudades de Chihuahua, la Montaña de Guerrero, San Salvador Atenco y otros lugares donde la defensa de dichos derechos civiles es hoy altamente riesgosa. Uno de los abogados del Frayba afirma más tarde que una de las profesiones más peligrosas es la defensa de los derechos humanos, algo que podrían suscribir igualmente el Centro de Derechos de la Mujer de Chihuahua, o bien Ignacio del Valle y los miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), o cualquier otro de los participantes, que esta tarde continúan llegando de distintas partes del país a San Cristóbal de las Casas. Quien no ha podido llegar acá es Nataniel Hernández Núñez, director del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa en la costa de Chiapas. Este martes fue nuevamente encarcelado, ahora por autoridades federales, en la ciudad de Tapachula. Apenas el pasado 22 de febrero había sido aprehendido por la policía estatal e internado en el penal de El Amate durante varios días. Esta noche se informó que otra vez salió libre, ahora bajo fianza. Sí logran llegar, en cambio, representantes de Las Abejas de Acteal, Xi'Nich, San Sebastián Bachajón, Jotolá, Masojá Schucjá y otras experiencias vivas de represión, abuso, y su contraparte de resistencia y defensoría de los derechos individuales y comunitarios en Chiapas, donde viven la lucha y la memoria; donde, al igual que los zapatistas, los pueblos han decidido ser dueños de su historia.

Sindicatos de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) anuncian el inicio de movilizaciones contra la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) presentada por el PAN y el Partido de la Revolución Institucional (PRI), al considerarlas regresivas de los derechos de los trabajadores, en tanto que la secretaría del ramo mantuvo la postura de defender la propuesta presentada por el tricolor, al señalar que ésta permitiría a México elevar la productividad.

Con la participación de un grupo plural de diputados, se pone en marcha la mesa de diálogo entre el SME y el gobierno federal, con la premisa de otorgar un empleo a los trabajadores de la extinta LyFC. “Esta mesa no tiene tabúes ni parte de posicionamientos inflexibles, pero sí de algunas premisas básicas que son la voluntad del gobierno federal de encontrar salida para que los ex trabajadores, sea cual sea su condición, encuentren una fuente laboral o de actividad económica”, señala Juan Marcos Gutiérrez, subsecretario de la Segob, instancia que encabeza la negociación. El funcionario destaca que “a diferencia de otros encuentros, también con funcionarios de gobierno, esta vez no hay factores de detonación de un conflicto mayor [las anteriores conversaciones ocurrieron en el contexto de una huelga colectiva de hambre de electricistas en el Zócalo o en medio de conflictos intersindicales], por lo que hay confianza en alcanzar acuerdos, a 17 meses del conflicto generado por la extinción de LFC”. En tanto, Martín Esparza, dirigente del SME, destaca que a esta mesa se ha agregado un importante actor político, el poder legislativo, en donde hay una iniciativa que debe discutirse, la cual propone crear una nueva estructura para operar el suministro de energía eléctrica en la zona central del país, esto es, el área de operación de lo que fue LyFC.

Jueves 17

Amnistía Internacional (AI) emite una acción urgente en favor de las defensoras de derechos humanos Marisela Ortiz y María Luisa Andrade, quienes se vieron obligadas a huir de Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, tras ser amenazadas.

En San Cristóbal de las Casas, estado de Chiapas, organizaciones y representantes comunitarios de derechos humanos que participaron en el encuentro “Con la memoria los pueblos construimos justicia y verdad” demandan “alto a la guerra y la violencia generalizada que mantiene Felipe Calderón Hinojosa”. Asimismo, rechazan “la imposición de proyectos y programas que despojan el territorio de los pueblos de México” y ponen en peligro la integridad del país. Ante las agresiones, amenazas y persecuciones que enfrentan actualmente en el desempeño de sus labores, responsables comunitarios de pueblos indígenas, abogados y activistas -procedentes de Chiapas, Chihuahua, estado de México, Guerrero, Coahuila, Colima y Morelos- exigen cese al hostigamiento contra defensoras y defensores, garantías para realizar su trabajo y atención a las demandas de justicia y verdad para los que se movilizan en la defensa de sus derechos, así como libertad a todas las presas y presos políticos del país.

En Tecoaapa, estado de Guerrero, indígenas se enfrentan con palos y machetes a habitantes de la cabecera municipal que intentaron impedir que terminaran obras de introducción de agua potable, en beneficio de más de 5 mil personas. El incidente, que no deja muertos ni heridos, comienza a las 3 hrs., cuando cientos de agricultores provenientes de los poblados Mecatepec, El Guayabo, Tepintepec, Barrio Nuevo y Buena Vista arriban al río Tecoaapa para terminar obras que el gobierno estatal inició en el 2007. Un grupo encabezado por Baldomero Mendoza Castro, presidente del comité de administración del agua potable de Tecoaapa, intenta impedir los trabajos, “pero los campesinos los empezaron a perseguir”, informa Manuel Olivares, de la Red Guerrerense de Organismos de Derechos Humanos.

En Hermosillo, Sonora, más de 1.500 integrantes de Antorcha Campesina cierran calles por la falta de apoyos para el campo y servicios en los municipios de Pitiquito, Hermosillo, Guaymas, Cajeme y Navojoa. “Necesitamos luz, drenaje y agua en las comunidades, y encontramos puertas cerradas”, expone Ricardo Esquivel Castañeda, dirigente de Antorcha Campesina en la entidad.

El Frente Amplio en Contra de la Supervía Poniente acusa al Gobierno del Distrito Federal (GDF) de “atacar los principios de independencia, autonomía e imparcialidad que rigen al poder judicial de la federación”, pues en un boletín la administración de Marcelo Ebrard manipuló a su conveniencia la decisión del quinto tribunal colegiado en materia administrativa de no otorgar la suspensión de labores de la vía de peaje.

Viernes 18

Integrantes de organizaciones sindicales independientes, así como de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, comienzan una etapa de movilizaciones contra la iniciativa de reforma laboral presentada por el PRI, la cual sería dictaminada la semana próxima.

Integrantes de Pan y Rosas; Feministas Socialistas y Pacto por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres, entre otras agrupaciones defensoras de las mujeres, protestan ante la representación del gobierno de Baja California en la ciudad de México para exigir la liberación de 23 presas en la entidad (nueve procesadas y 14 sentenciadas) por homicidio agravado en razón de parentesco, que es una tipificación penal del aborto. Una comisión de las inconformes dialoga con el representante estatal Ricardo Emiliano Salazar, quien se compromete a revisar cada caso.

En Pachuca, estado de Hidalgo, Arturo Williams, líder del movimiento Todos Somos Zimapan, es capturado por policías federales y conducido al Reclusorio Oriente de la ciudad de México, por su presunta irrupción en la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la agresión a su personal, el pasado 27 de enero, efectuada por moradores inconformes con el proyecto del Acueducto II. José

María Lozano Moreno, quien luchó contra un vertedero tóxico junto al hoy indiciado, afirma que éste debe responder por sus actos de incivilidad.

En Culiacán, estado de Sinaloa, alrededor de 300 productores agrícolas recorren con sus tractores las calles de esta ciudad y se plantan en la Unidad Administrativa, principal sede del gobierno del estado, para exigir a la federación recursos extraordinarios ante las pérdidas que sufrió el campo sinaloense por las heladas de principios de febrero pasado. Los inconformes desisten de tomar carreteras y casetas de peaje, como lo habían anunciado, al insistir en no emprender acciones radicales; además de que algunos de los dirigentes ni siquiera asisten a la protesta.

Sábado 19

La visita a México del grupo de trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas o involuntarias “es una gran oportunidad para hacer visible la existencia de dicho crimen y presionar a las autoridades para que lo detengan y hagan cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso de Rosendo Radilla”, señalan activistas de organizaciones especializadas en el tema y Julio Mata, presidente de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem). De su lado, Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, considera que “la visita del grupo especializado se debe a que ya hay preocupación a escala internacional por la cantidad de desapariciones forzadas que ocurren en el país, aunque el gobierno pretenda ocultar la gravedad del asunto al decir que todos los casos tienen que ver con el crimen organizado”.

Al cumplirse 61 meses de la muerte de 65 trabajadores en la mina Pasta de Conchos, la agrupación civil Familia Pasta de Conchos y su asesor legal, Manuel Fuentes, aseguran que “la mesa que se estableció a finales del año pasado en la Segob para analizar el rescate está avanzando, pues el gobierno federal no sólo ha escuchado la opinión de peritos en rescate y en minas, sino también ha mostrado apertura a lo que se ha expresado respecto a la viabilidad del retiro de los cuerpos”. En el contexto de la misa mensual celebrada a las afueras de las oficinas de Grupo México, Fuentes comenta que “pareciera que de parte del gobierno hay interés de poder avanzar en una solución y se plantea tener una decisión institucional”.

El respeto a los derechos humanos de mujeres, principalmente las activistas, es la demanda central de la quinta Marcha Lésbica, que recorre del Zócalo al Monumento a la Revolución, en el Distrito Federal. Bajo el lema “Lesbianas guerreras sembrando dignidad”, cientos de mujeres marchan, convocadas por el Comité Organizador de la Marcha Lésbica (Comal) y 22 agrupaciones feministas más. Durante el trayecto consignas como “El príncipe azul no existe, el macho violento sí” y “Esta marcha no es de fiesta, es de lucha y de protesta” resuenan por la transitada calle de Madero hasta llegar a la explanada del Monumento a la Revolución. Ahí, representantes de diversas agrupaciones toman el micrófono para repudiar la persecución y exterminio que sufren las activistas por los derechos humanos en el país, particularmente en Ciudad Juárez y para exigir al gobierno federal protección para las activistas de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, como Marisela Ortiz y Malú García Andrade, quien estaba programada como oradora principal, pero por cuestiones de seguridad se mantuvo en el anonimato.

Domingo 20

“La violencia generalizada en el país y la profundización de la impunidad agudizan el contexto de represión, pobreza, criminalización, migración, despojo territorial y ataques a quienes promueven,

defienden y ejercen los derechos para todos”, declara la Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos, con énfasis particular en el sureste de México. Al concluir su 41 asamblea nacional, en San Cristóbal de las Casas, los defensores se pronuncian sobre las hostiles condiciones en que laboran sus colegas en Chiapas, Tabasco y Yucatán, en una región del país donde las violaciones a los derechos “no son menores”. La extensa red, a la que pertenecen 72 organismos, constata que “el despojo territorial es práctica recurrente de gobiernos y empresarios contra quienes defienden los recursos naturales y se niegan a ceder sus territorios para la inversión privada [explotación de minas, proyectos ecoturísticos y carreteros] pues han decidido practicar la autonomía ejerciendo en plenitud sus derechos fundamentales”.

En La Paz, Baja California Sur, el grupo ciudadano Sociedad Organizada por Sudcalifornia (SOS) lanza la campaña Todos, con la cual busca recabar 100 mil firmas para exigir la erradicación de los proyectos de minería tóxica en Baja California Sur. El presidente del comité directivo de la SOS, Antonio Caraza, sostiene que diversos proyectos mineros que se desarrollan en la entidad son una amenaza para la reserva de la biosfera Sierra La Laguna y el Golfo de California, considerados patrimonio de la humanidad por la Organización de Naciones Unidas.

En Oaxaca, estado de Oaxaca, la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) realizará varias “manifestaciones de emergencia” durante la semana para exigir a los gobiernos federal y estatal que se presente con vida al profesor Carlos René Román Salazar, miembro del Centro de Estudios y Desarrollo Educativo, desaparecido el pasado lunes a las afueras del municipio conurbado de San Jacinto Amilpas, como anuncia el dirigente Azael Santiago Chepi. Aclara que ninguna de las actividades aprobadas la madrugada del sábado en asamblea estatal implicará la suspensión de las actividades escolares.

Lunes 21

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la Organización Mundial Contra la Tortura y 11 mujeres violadas en San Salvador Atenco, entre otras personas e instituciones, denuncian “la impunidad prevaleciente en el caso de la tortura sexual contra mujeres” de ese municipio mexiquense. Ante representantes del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés) y el Comité contra la Tortura (CAT) –instancias de Naciones Unidas–, organizaciones no gubernamentales entregan un informe sobre la situación que viven los activistas de derechos humanos, especialmente en Ciudad Juárez y Chihuahua.

Estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, toman las casetas de Paso Morelos y Palo Blanco, en la Autopista del Sol, para reclamar a la Secretaría de Educación de Guerrero (SEG) la reducción de presupuesto para becas alimentarias.

En Chilpancingo, estado de Guerrero, campesinos indígenas de cinco poblados del municipio de Tecoaapa solicitan a la iglesia católica que intervenga ante los tres niveles de gobierno para que concluya la introducción de agua potable a sus comunidades, obra que exigen desde hace seis años. En conferencia de prensa, el comisario municipal del poblado El Guayabo, David Vargas Venancio, indica que la agresión que sus vecinos padecieron el jueves 17 de marzo, cuando iniciaron trabajos de conexión a la red hidráulica, se debió a que el cacique Baldomero Mendoza Castro “teme perder su negocio de repartidor de agua potable”.

Martes 22

Al haberse cumplido 21 días de huelga en el Colegio de Posgraduados (Colpos), integrantes del sindicato independiente de trabajadores se movilizan hacia las secretarías del Trabajo y Previsión Social (STPS) y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), pero su demanda de homologación no obtiene respuesta positiva. Desde la mañana, cientos de trabajadores administrativos del Colpos se trasladan en caravana desde Texcoco –donde se encuentra la sede principal de ese centro de estudios– hacia las referidas dependencias. En la STPS, una delegación del gremio acude a una cita con conciliadores, a los que les plantea la necesidad de que la homologación en prestaciones se concrete lo antes posible, pero “no hubo ofrecimiento”, señala en entrevista Rosendo Servín García, integrante de la comisión negociadora del sindicato, que agrupa a 856 trabajadores administrativos del Colpos, el cual tiene sedes en el estado de México, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz y Tabasco. Posteriormente, en camiones, los integrantes del sindicato acuden a la Sagarpa. Luego de tres horas y media de manifestación y de que una comisión fuera recibida por funcionarios de nivel intermedio, la respuesta es la misma. “No hubo cambios, por lo que vamos a continuar la huelga y las movilizaciones, quizás tengamos que radicalizar la postura”, advierte Servín García.

En Hermosillo, estado de Sonora, unos 300 integrantes del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora marchan de la rectoría de la institución a la Junta Local del Trabajo (JLT), para entregar el emplazamiento a huelga, fijado para las 18 hrs. del próximo 29 de abril. Los empleados piden 22% de alza salarial, mientras que las autoridades universitarias ofrecen sólo el 3.6%. “Solución, solución”, es una de las consignas que corean las decenas de trabajadores que exigen atención a sus demandas y mejoras salariales para más de 1.400 empleados.

En Cuernavaca, estado de Morelos, la dirigencia estatal del PRI y la CTM delegación Morelos responsabilizan al gobernador Marco Antonio Adame del asesinato del vicepresidente de esa organización obrera, Tito Barrera Ocampo, la tarde del lunes, por un desconocido que circulaba en motocicleta. Por su parte, el mandatario panista reprueba que algunos personajes ligados al tricolor pretendan politizar el caso. Familiares de Barrera Ocampo exigen que el crimen no quede impune.

En Chilpancingo, estado de Guerrero, dirigentes del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG), apoyados por las facciones sindicales aglutinadas en el Frente Único Estatal de Representantes de Sindicatos Autónomos, presentan ante el congreso del estado una demanda de juicio político en contra del gobernador Zeferino Torreblanca, a quien acusan de intervenir para declarar inexistente la huelga del STAUAG, que se inició el 16 de febrero. Previamente, marchan por calles de esta ciudad.

En Oaxaca, estado de Oaxaca, unos 5 mil maestros de la sección 22 del SNTE bloquean juzgados y dependencias de procuración de justicia en esta ciudad, en demanda de que se presente con vida al profesor Carlos René Román Salazar, desaparecido la semana pasada en el municipio conurbado de San Jacinto Amilpas. Dos mil y 200 profesores de las 11 escuelas normales de educación básica, tres unidades de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), dos centros de actualización del magisterio y de la Normal Superior de Oaxaca inician un paro y se plantan frente al palacio de gobierno.

Miércoles 23

Al conmemorar la masacre de Acteal en Chenalhó, estado de Chiapas, la Sociedad Civil Las Abejas declara: “Todo México está viviendo masacres todos los días. En lugares como Ciudad Juárez y Sinaloa se asesinan familias enteras, se queman sus casas, se amenaza a los sobrevivientes y el

gobierno no hace nada, dice que son los narcotraficantes”. Recordando la ofensiva contrainsurgente que sufren hace cuatro lustros, los indígenas expresan que “todo eso” ha seguido un plan de contrainsurgencia que militares mexicanos “aprendieron en las escuelas militares de Estados Unidos, y ahora sus perros bravos que entrenaron se les han salido del ejército y siguen masacrando inocentes pero como el grupo de Los Zetas”. Desde Acteal, Las Abejas apuntan: “Dice el gobierno que los que mueren son delincuentes o gente que por accidente iba pasando cuando fueron las balaceras, pero nosotros vemos que muchos han muerto por defender la vida frente a los proyectos de muerte y destrucción. Vemos que en Chiapas y en México hay matanza de gente inocente que está a favor de la paz, hay persecuciones para los líderes de diferentes organizaciones, encarcelaciones a los que piden justicia, paz y dignidad”.

El titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, se reúne con los integrantes del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de Naciones Unidas (ONU), a quienes entrega un informe en el cual compendia 240 casos de ese delito en México. El documento, escrito en inglés y español, no especifica el periodo en que ocurrieron dichas desapariciones, ni si son las únicas documentadas o si hay otras en proceso de estudio para clasificarlas como tales. A su vez, organizaciones sociales de familiares de desaparecidos celebran la buena voluntad de la comisión especial de la ONU, pero advierten que “es mejor esperar los alcances de su informe final, puesto que las observaciones de dicho grupo no tienen carácter vinculatorio para el Estado mexicano”.

Se extiende el rechazo a la reforma laboral propuesta por el PRI entre sindicatos y organizaciones de derechos humanos, que envían peticiones a las coordinaciones de todos los partidos en la Cámara de Diputados para que el proyecto no sea votado; incluso la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) se deslinda del discurso corporativo y señala que, antes de plantear una nueva reforma, primero se debe cumplir la Ley Federal del Trabajo (LFT). En tanto, los sindicatos que integran la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) iniciarán movilizaciones contra esta iniciativa, con un mitin en la Cámara de Diputados, y anuncian que su protesta también la llevarán el próximo 29 de marzo a la Cámara de Senadores; además difunden un extenso informe sobre las innumerables “inconsistencias” de la reforma laboral que planteó el PRI, las cuales prácticamente “desdibujan” a la LTF.

Estudiantes de la unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-I) denuncian haber sido agredidos por personal de seguridad del plantel cuando acudieron a la rectoría de esa unidad en demanda de la respuesta al pliego petitorio entregado hace un par de semanas a las autoridades universitarias. Roberto Lopez Mejia, estudiante de sociología, narra que unos 200 estudiantes fueron recibidos por un grupo de choque cuando pretendían encontrarse con el rector de la unidad y que fueron repelidos con gas lacrimógeno y varios compañeros fueron lastimados. Sin embargo, Israel Muñoz, coordinador de Servicios Generales de la UAM Iztapalapa, asegura que los estudiantes fueron recibidos por Araceli Guerrero, asesora del secretario de la unidad, quien leyó la respuesta al pliego petitorio de los estudiantes, y que éstos se negaron a acusar de recibido el documento.

Estudiantes, académicos y trabajadores administrativos de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía (ENMH) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) comienzan un paro de labores en demanda de la destitución del director del plantel, Crisóforo Ordóñez. Entre sus argumentos están las “irregularidades” en el proceso de conformación de la terna para el cargo, así como la nula atención y compromiso del funcionario con la comunidad escolar de ese plantel. Decenas de estudiantes inconformes y algunos académicos se plantan afuera de la ENMH en demanda de un diálogo público con las autoridades politécnicas y rechazan una reunión entre representantes de la dirección general del instituto y una comisión estudiantil, como proponen los directivos.

En Acapulco, estado de Guerrero, el secretario de la Reforma Agraria, Abelardo Escobar Prieto, asegura que quienes se oponen a construir la presa La Parota son “gente de fuera” e informa que la CFE tiene recursos para indemnizarlos en forma justa. Sostiene que “mientras el Tribunal Unitario Agrario 41 no resuelva el recurso de nulidad de la asamblea del 28 de abril anterior, en la que 1.500 comuneros de Cacahuatpec aceptaron el proyecto de la presa, no podrán expropiar los predios”. El pasado 12 de mayo, los opositores interpusieron un recurso de nulidad y aseguraron que personas ajenas participaron en la asamblea.

Jueves 24

Organizaciones campesinas señalan que ante el incremento del robo de productos del campo por bandas del crimen organizado, tanto el gobierno federal como los de los estados más afectados deberían tomar cartas en el asunto, y agregan que aunque lo ideal sería “combatir el fenómeno de la delincuencia de raíz”, deberían buscarse otros caminos, como establecer cuerpos especiales de vigilancia, particularmente en las bodegas de acopio, o establecer programas de apoyo para financiar el resguardo de las bodegas.

El secretario del Trabajo, Javier Lozano, defiende la iniciativa de reforma laboral del PRI y asegura que “hay intolerancia brutal de parte de supuestos defensores del movimiento obrero” opositores a ese proyecto. Sostiene que “mienten cobardemente quienes señalan que estamos esclavizando el trabajo, que estamos yendo contra los derechos de los trabajadores”. Según el funcionario, es una “minoría” la que se opone a la reforma, “que fue presentada por los representantes del sector obrero organizado del país a través de la central de mayor peso”.

Tras casi dos horas de discusiones, autoridades de la unidad Iztapalapa de la UAM-I y estudiantes pertenecientes a los colectivos Asamblea Estudiantil, Colectivo Feminista y Unión de Lucha acuerdan reunirse este viernes al mediodía en la sala del consejo académico, aunque hay un diferendo sobre el tema inicial de la discusión. El diálogo entre autoridades e inconformes se da luego de que éstos tomaran la rectoría de la unidad exigiendo respuesta a su pliego petitorio, así como la destitución de personal involucrado en el altercado del pasado miércoles. Antes, los alumnos disidentes realizaron un bloqueo en el Eje 6 por espacio de una hora, en demanda de que medios de comunicación y autoridades delegacionales escucharan sus exigencias y ejercieran presión para que el rector los recibiera. Ahí, unos 150 granaderos obligaron a los manifestantes a repliegarse y los cercaron por casi una hora sin que se suscitara enfrentamientos.

En Mazatlán, estado de Sinaloa, concesionarios del transporte urbano realizan un paro de cinco horas con el propósito de exigir más seguridad para su gremio. La movilización se produce por el asesinato del chofer José Gutiérrez Camacho, quien murió el miércoles por la noche durante un asalto al camión urbano que conducía. En respuesta, el presidente municipal, Alejandro Higuera Osuna, se compromete a redoblar la vigilancia por medio de las corporaciones policiacas. Durante la protesta, patrullas y vehículos propiedad del ayuntamiento ofrecen transporte gratuito a los usuarios.

En Cuernavaca, estado de Morelos, once integrantes del Frente de Trabajadores Jubilados del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) inician una huelga de hambre a la entrada del palacio de gobierno para exigir a la administración que encabeza el gobernador Marco Antonio Adame Castillo que les pague la prima de antigüedad prevista en el artículo 46 de la Ley de Servicio Civil estatal, y en el numeral 162 de la Ley Federal del Trabajo. Con los ayunos, que se realizarán de lunes a viernes, los afectados esperan que se instale una mesa de diálogo para resolver el conflicto y que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) les entregue los laudos, deje de

presionarlos para desistirse de sus demandas y que el SNTE entregue los expedientes de los profesores que demandaron ante la junta, con sus respectivos laudos.

Viernes 25

Integrantes del SME realizan una protesta en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) para exigir una resolución expedita a las 16.599 demandas de reinstalación laboral. Martín Esparza, dirigente del SME, asegura que esta acción derivará en un “plantón permanente” a la entrada de este tribunal, el cual –asevera– ha interpuesto todo tipo de tácticas para dilatar el proceso.

Luego de dos días de negociaciones con autoridades del IPN, estudiantes de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía inconformes con la designación de Crisóforo Ordóñez López como director del plantel llegan a un acuerdo para levantar el paro activo de labores que sostuvieron desde el pasado miércoles. La comisión de negociación suscribe un acuerdo de cinco puntos con las autoridades politécnicas, entre ellas Crisóforo Ordóñez y Manuel Cantú, secretario general del IPN. Entre los acuerdos destaca que no se emprenderán acciones que afecten la trayectoria académica de los alumnos que participaron en el movimiento; las autoridades centrales del IPN darán el apoyo necesario para la elaboración de un plan de trabajo de la dirección, para evaluar el desempeño de esa unidad académica, y los estudiantes se comprometen a concluir los actos de protesta pacífica iniciados desde el 23 de marzo, dejar libres los accesos obstruidos y retirar la propaganda y mantas que colocaron.

En Zacatecas, estado de Zacatecas, decenas de policías municipales se manifiestan frente a las instalaciones de la dirección de seguridad pública municipal, para exigir un mejor salario, uniformes y equipo. Los agentes –quienes exigen un incremento salarial del 50%, como les prometió en campaña el ahora alcalde priísta Arnoldo Rodríguez– aseguran que ganan 2.800 pesos quincenales. Luego de varias horas de negociaciones no se alcanza un acuerdo y los uniformados comienzan a las 20:30 hrs. el bloqueo de vialidades.

El Frente en Defensa de Wirikuta (FDW), integrado por dirigentes wixárika (huicholes) y miembros de organizaciones solidarias, inicia una nueva campaña para exigir a las secretarías de Economía (SE) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que informen sobre las concesiones que ha recibido la compañía minera canadiense First Majestic, y que se estudien los daños que podría provocar la operación de dicha empresa en la región. Los activistas promoverán el envío de cartas a todos los miembros del Senado de la República, especialmente a quienes forman parte de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, a fin de presionarlos para que aborden el tema en el Congreso y se discutan los daños que podrían causar las minas, tanto al medio ambiente como a la cultura y forma de vida huicholes.

En San Cristóbal de las Casas, estado de Chiapas, miles de maestros del bloque democrático de la sección 7 del SNTE bloquean carreteras y marchan en seis regiones del estado para oponerse a los proyectos de reformas laboral, educativa, fiscal y de seguridad pública, porque “tienen el objetivo de arrojar a la calle y despojar de sus derechos elementales a los trabajadores”. También protestan por las alzas de precio a los combustibles y a los productos de primera necesidad; asimismo exigen la renuncia del presidente Felipe Calderón y la expulsión de Elba Esther Gordillo Morales. Los mentores critican la propuesta de modificar la Ley Federal de la Trabajo, la cual “es altamente lesiva, porque destruye derechos y conquistas históricos y profundiza la sobreexplotación y la opresión de la clase trabajadora en México”.

Sábado 26

Gustavo de la Rosa Hickerson, visitador especial de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, integrantes del Centro de Confianza Ciudadana, académicos, profesionistas, empresarios y activistas elaboran una propuesta para rescatar la tranquilidad de esta ciudad ante la violencia generada por el crimen organizado en Ciudad Juárez, estado de Chihuahua. La organización Voz Ciudadana sugiere un modelo de policía de proximidad para las zonas menos conflictivas y exige que haya un comité ciudadano de vigilancia de esos policías para generar confianza. Acotan que la focalización de acciones debe darse según los rangos de edad que interesa atender y las zonas geográficas que reclaman inmediata atención; insisten en que el primer gran objetivo consiste en romper la cadena de regeneración de la delincuencia, fenómeno social que se da entre niños de 12 y 13 años.

A las 16 hrs., Mara Adriana Mayo, presidenta de la junta especial número 5, de la JFCA, determina suspender la audiencia, que se celebraba desde las 10 de la mañana, en relación con miles de demandas laborales promovidas por integrantes del SME. La audiencia fue reprogramada para el 9 de abril; sin embargo, cientos de electricistas que estaban afuera de este tribunal determinan instalar un plantón permanente para exigir la inmediata reanudación de la diligencia. De igual forma, el SME pedirá la intervención de la Cámara de Diputados para que los legisladores conozcan de la dilación de los juicios y las trabas que tienen que enfrentar los trabajadores.

Domingo 27

En Cuernavaca, estado de Morelos, más de 2 mil integrantes de la CTM marchan en esta capital para exigir al gobernador Marco Antonio Adame y al presidente Felipe Calderón que se detengan la violencia y la inseguridad en el estado y no quede impune el asesinato de su dirigente, Tito Barrera, perpetrado el 21 de marzo pasado. La movilización parte alrededor de las 10 hrs. de la avenida Plan de Ayala y concluye con un mitin en el zócalo de la ciudad. Por la mañana, en Jiutepec, municipio conurbado de Cuernavaca, se efectúa otra marcha contra la inseguridad.

En Villahermosa, estado de Tabasco, la asociación civil Tabasqueños Unidos por la Diversidad y la Salud Sexual protesta porque el congreso local mantiene congelada una iniciativa de ley de convivencia para el estado, presentada hace más de un año.

La consulta realizada para que los capitalinos decidieran el destino de más de 700 millones de pesos de presupuesto participativo se caracteriza por escasa asistencia a las urnas, falta de información de la ubicación de casillas, y desconocimiento de los proyectos a votar. Datos preliminares del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) y de la Asamblea Legislativa revelan que en ese ejercicio habrían participado 191.692 personas, es decir, el 2.5% del padrón nominal del DF, integrado por cerca de 7 millones y medio de votantes.

Lunes 28

Andrés Manuel López Obrador informa que pidió a los legisladores integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que por ningún motivo se permita la aprobación de las reformas laboral y energética, impulsadas por el PRI y por el PAN, respectivamente. En su mensaje semanal, emitido en tiempos oficiales del Partido del Trabajo (PT), López Obrador asegura que seguirán organizándose “para acabar con el régimen de opresión, de corrupción y privilegios que impera en el país, pero al mismo tiempo voy a estar atento porque, si es necesario, vamos a convocar a los ciudadanos a defender a los trabajadores y a defender el patrimonio nacional”.

En Cuernavaca, estado de Morelos, Juan Francisco Sicilia Ortega, hijo del poeta y novelista Javier Sicilia, colaborador de *La Jornada* y de la revista *Proceso*, es hallado sin vida en el interior de un automóvil junto con otras seis personas. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) da a conocer que elementos de la policía ministerial fueron informados a las 6:30 hrs. de que un automóvil “sospechoso” estaba estacionado en el fraccionamiento Las Brisas, frente a un hotel y a unos metros de la autopista del Sol México-Acapulco, a la altura del municipio de Temixco. Juan Francisco Sicilia, de 24 años de edad, era estudiante de administración en una universidad privada de Cuernavaca. Por la tarde, intelectuales y amigos de Javier Sicilia convocan a una protesta en el zócalo de Cuernavaca, para exigir al presidente Calderón y al gobernador Marco Antonio Adame que acabe la violencia y la inseguridad en Morelos y en México.

En Cuernavaca, estado de Morelos, unos 200 camiones de carga, propiedad de afiliados a la Federación Nuevo Grupo Sindical, realizan una caravana y bloquean las calles del primer cuadro de la ciudad durante cinco horas para exigir al gobierno estatal que inicie obras públicas previstas para este año y algunas pendientes desde el 2010. Indican que hace más de un año esperan esas construcciones para tener trabajo. A las 7 hrs., los choferes –antes integrantes de la CTM– estacionan sus unidades en un carril del bulevar Cuauhnáhuac, en el oriente de la ciudad. Después de las 9 hrs., avanzan rumbo al zócalo, donde cierran la circulación y realizan un mitin.

En Guadalajara, estado de Jalisco, habitantes de la comunidad de Temacapulín, municipio de Cañadas de Obregón, con apoyo de activistas locales y de otros estados, instalan un plantón en las obras de la presa El Zapotillo, y advierten que no se irán hasta que se cancele el proyecto, que inundaría ese poblado y los vecinos de Acasico y Palmarejo. La decisión se toma porque los trabajos continúan a pesar de mandatos legales y protestas, como informan el Comité Salvemos Temacapulín Acasico y Palmarejo y el Movimiento de Afectados por Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder). Las dos organizaciones afirman que los responsables de la obra, que realiza la federación con aportaciones de los gobiernos panistas de Jalisco y Guanajuato, carece de permisos para cambio de uso de suelo del ayuntamiento de Cañadas de Obregón y, por tanto, tampoco existe aval para construir la cortina de 105 metros de altura.

Trabajadores de alumbrado público de la delegación Tlalpan, en el Distrito Federal, mantienen un paro de labores en demanda de materiales y herramientas de trabajo, lo cual ha afectado a 150 colonias de la demarcación. Desde hace tres meses, los trabajadores solicitaron uniformes, botas, guantes y medidas de seguridad para su labor diaria, pero no han tenido respuesta. Además, denuncian que el gobierno de Higinio Chávez no proporciona los recursos para abastecer de gasolina a los vehículos que atienden los reportes, siendo que Tlalpan es una de las delegaciones de mayor territorio del Distrito Federal.

Martes 29

Los centros de derechos humanos Digna Ochoa, Fray Matías de Córdova y Ordóñez y Fray Bartolomé de Las Casas manifiestan en el estado de Chiapas su preocupación por el hostigamiento judicial a los integrantes del centro Digna Ochoa: “De manera específica a su director Nataniel Hernández Núñez y otros abogados de la misma institución”. Sobre ellos pesan cargos federales que más bien maquillan lo que de hecho es persecución en su contra por realizar su trabajo en las comunidades. Ante evidencias de que se trata de un proceso artificial, los organismos civiles denuncian que en el expediente jurídico aparece la resolución de un juez en Tapachula que “es una reproducción del pliego de consignación elaborado por el agente del Ministerio Público Federal (MPF) en la ciudad de Arriaga, la cual se fundamenta en ‘declaraciones’ de policías, que resultan

ser formatos acomodados para fabricar el delito”. Y precisan: “En el expediente penal existen declaraciones idénticas, incluso con los mismos errores de redacción”.

El Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear (SUTIN) realiza una marcha del parque Hundido a la Secretaría de Energía (Sener), en el Distrito Federal, en rechazo al tope que se quiere imponer en su revisión salarial, pues sólo han ofrecido el 3.2% para un solo sector de los agremiados, cuando han demandado el 12% de incremento para todos los empleados.

Ante la posibilidad de que se presente ante Comisiones Unidas del Senado el dictamen para aprobar la ampliación del Tratado de Libre Comercio con Colombia, la Confederación Nacional Campesina (CNC) manifiesta su rechazo a la inclusión del sector agropecuario en dicho acuerdo, así como en el que se analiza con Perú. Remarca que el sector agrícola y ganadero debe ser excluido de dicho convenio. Desde hace varias semanas, la CNC, encabezada por el diputado Gerardo Sánchez García, ha manifestado su oposición a la firma de los referidos tratados y también al comienzo de negociaciones con Brasil.

El diputado Porfirio Muñoz Ledo anuncia que se prepara una protesta contra la reforma a la Ley Federal del Trabajo, en la que participarán el Morena –que encabeza Andrés Manuel López Obrador–, sindicatos afiliados a la UNT y legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y PT. “El Movimiento de Regeneración Nacional, los sindicatos y los legisladores no vamos a permitir que pase una reforma que agravie a los trabajadores, que es no sólo obscena y perversa, sino que provocará gran descontento social”, asegura Muñoz Ledo.

Jóvenes de diferentes planteles del bachillerato de la UNAM continúan manifestando su rechazo a los “abusos y hostigamiento académico de algunos profesores”. Este martes realizan una marcha interna en el plantel seis de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP), donde invitan a la comunidad a denunciar abusos de docentes y directivos. Durante la movilización celebran que las autoridades de la institución hayan decidido rescindir los contratos de dos académicos de la preparatoria siete, quienes fueron denunciados por estudiantes de ese plantel de abusos docentes y uno de ellos de hostigamiento sexual. Con mantas y volantes, unos 40 jóvenes de las preparatorias dos, seis, ocho y nueve, así como del Colegio de Ciencias y Humanidades Vallejo, marchan por los pasillos del plantel y posteriormente hacen un pequeño mitin en el que demandan que se resuelvan problemáticas académicas en sus escuelas, como la erradicación de los grupos de porros, la mejora de instalaciones, baños y laboratorios, “pues en muchas ocasiones están cerrados”.

En Mazatlán, estado de Sinaloa, se constituye el consejo de administración de recursos pesqueros, acuícolas, turísticos y ecológicos, que explotará productos obtenidos de las aguas de la presa Picachos. El edil de Mazatlán, Alejandro Higuera Osuna, presidente del consejo, asegura que con la toma de protesta de ocho cooperativas, formadas por afectados del embalse procedentes de los municipios de Concordia y Mazatlán, se establecieron condiciones legales para ordenar la explotación turística y comercial de recursos de Picachos y para que los cooperativistas reciban apoyos de acuerdo con la ley.

En Jalapa, estado de Veracruz, productores de leche exigen al presidente Felipe Calderón poner orden en el mercado del lácteo en México y regular la importación masiva de sueros, derivados en polvo y quesos que no cumplen requerimientos proteínicos ni de sanidad para el consumo humano, pero que aun así llegan al consumidor con un precio más barato que los productos nacionales. Álvaro González Muñoz, presidente de la Unión Nacional de Productores de Leche, estima que, en el último año, se importaron 200 mil toneladas de compuestos lácteos, 80 mil toneladas de suero en polvo y 80 mil toneladas de quesos.

Integrantes de la comunidad de la UACM realizan un cierre simbólico de los planteles Cuauhtepac, Tezonco y Centro Histórico en protesta por las reformas a la ley orgánica de la casa de estudios aprobadas en comisiones la semana pasada en la Asamblea Legislativa.

Miércoles 30

Sindicatos integrantes de la UNT, así como de la CNTE, marchan del Zócalo a la Cámara de Diputados, en el Distrito Federal, en demanda de que el poder legislativo rechace las iniciativas de reforma laboral propuestas por el PRI y el PAN, en tanto que la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) empieza a distribuir un tríptico para difundir las 26 principales afectaciones que contempla la iniciativa del tricolor.

En Cuernavaca, estado de Morelos, más de medio millar de integrantes de la comunidad intelectual del estado realiza una marcha nocturna y asegura que “la muerte de Juan Francisco Sicilia y de otras seis personas, a consecuencia de la guerra contra el narcotráfico que impuso el presidente Felipe Calderón, será la punta de lanza para que desde Morelos se reproduzca un movimiento a escala nacional que acabe con el terrorismo de Estado en que viven actualmente los mexicanos”. Asimismo, se manifiestan porque Calderón Hinojosa renuncie a su cargo “por la muerte de 40 mil mexicanos” y el gobernador de Morelos por la de miles de morelenses.

En Hermosillo, estado de Sonora, diputados de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso local aprueban, por unanimidad, la Ley de Protección a Periodistas, que incluye garantías al secreto profesional y el derecho de cobertura de cualquier acto público, e incluso algunos de carácter privado que tengan impacto en la comunidad, sin que por ello los comunicadores puedan ser víctimas de persecución judicial o sufrir obstrucciones en el desempeño de su labor. El panista David Galindo, quien impulsa la iniciativa, dice que en el próximo periodo ordinario de sesiones, en abril, la propuesta será llevada al pleno.

En Durango, estado de Durango, campesinos de los municipios de Cuencamé y Canatlán cierran las bodegas de las acopiadoras de frijol Rotmar, Los Tres Viejos y San Fernando, que desde octubre pasado les adeudan el pago por 20 mil toneladas de grano. Labriegos del poblado Flores Magón denuncian que Rotmar entregó a 120 productores cheques reportados como robados.

Jueves 31

Tras una ardua negociación, el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear (SUTIN) logra un acuerdo de incremento salarial del 3.5% para este año, más el 0.5% en prestaciones, por lo que se conjura el emplazamiento a huelga que vencía a las 12 de la noche. Firman el convenio Manuel García Barajas, dirigente del SUTIN, y el director del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, Hernán Rico Núñez. El acuerdo se logra tras una amplia movilización de los trabajadores, los cuales incluso realizaron marchas y, el martes pasado, un mitin frente a la Secretaría de Hacienda de donde, al bloquear carriles de Constituyentes, cerca de una centena de granaderos los echaron con violencia.

El sindicato de la Lotería Nacional anuncia su salida de las filas de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), a la que perteneció durante varias décadas, ya que – según indica– esta central obrera “ya perdió dirección y rumbo y ha iniciado su irreversible desintegración”. En conferencia de prensa, Armando Valente Juárez Arroyo, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Lotería Nacional, asegura que los trabajadores tomaron la decisión de abandonar la FSTSE, que encabeza Joel Ayala Almeida.

El líder del SME, Martín Esparza Flores, anuncia que el próximo 8 de abril quedará conformado el Frente Nacional en Defensa de los Trabajadores, al que se unirán diversos gremios y organizaciones sociales, con el objetivo de unificar diversas luchas por la reivindicación de los derechos laborales de los mexicanos. Esparza encabeza un mitin afuera de la JFCA, donde, desde la semana pasada, los integrantes del SME están en plantón en demanda de que se reanude la audiencia para revisar los amparos promovidos por los electricistas, la cual fue suspendida unilateralmente por la presidenta de la junta especial número 5, María Adriana Mayo Río. Luego del mitin, funcionarios cercanos al presidente de la JFCA, Eduardo Salavarría, se entrevistan con Esparza y otros miembros del SME. Los electricistas les plantean que, entre las graves anomalías que ha cometido la JFCA, está haber entregado a Alejandro Muñoz –opositor al gremio– tres cheques por 7 millones de pesos cada uno, que eran de cuotas sindicales, y aun cuando no le correspondía cobrarlos, le facilitaron el acceso a los recursos que pertenecen a los trabajadores, por lo que hay una demanda en su contra.

En Guadalajara, estado de Jalisco, sólo cinco de los 37 diputados del Congreso local votan a favor del punto de acuerdo que presentó la perredista Olga Araceli Gómez para pedir a la Conagua que detenga la construcción de la presa El Zapotillo. Los 32 restantes se abstienen. Asimismo, cumple cuatro días el plantón instalado en la zona de las obras por activistas y habitantes de los poblados Temacapulín, Acasico y Palmarejo, que serían inundados con el proyecto. En Guadalajara se registran tres manifestaciones en apoyo a los habitantes de esa región de los Altos de Jalisco.

En Villahermosa, estado de Tabasco, unas 200 mujeres del Movimiento México Despierta se plantan en el Congreso del estado para denunciar que, en al menos 15 comunidades del municipio de Mascupana, siete empresas graveras y la fábrica de cemento Apasco “contaminan el entorno y provocan daños a caminos y viviendas”. A gritos, exigen la intervención de los diputados locales. Julio Álvarez de los Santos, quien dirige la protesta de las inconformes, acusa que los lugareños están en peligro permanente por “el manejo de desechos tóxicos”. Una comisión de las manifestantes intenta entrevistarse con el diputado priísta José Carlos Ocaña Becerra, presidente de la junta de coordinación política, pero los vigilantes se lo impiden.

Glosario de siglas

ACNUDH	Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Afadem	Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México
AI	Amnistía Internacional
ANAD	Asociación Nacional de Abogados Democráticos
ASE	Agencia de Seguridad Estatal
CAT	Comité contra la Tortura
CCC	Central Campesina Cardenista
CCU	Centro Cultural Universitario
CDI	Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Cedaw	Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
CEDH	Consejo Estatal de Derechos Humanos
Cemda	Centro Mexicano de Derecho Ambiental
CENEO	Coordinadora de Escuelas Normales del Estado de Oaxaca
CETEG	Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero
CFE	Comisión Federal de Electricidad
CIDH	Corte Interamericana de Derechos Humanos

CNC	Confederación Nacional Campesina
CNDH	Comisión Nacional de los Derechos Humanos
CNTE	Cordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación
Colpos	Colegio de Posgraduados
Comal	Comité Organizador de la Marcha Lésbica
Conagua	Comisión Nacional del Agua
CTM	Confederación de Trabajadores de México
ENMH	Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía
ENP	Escuela Nacional Preparatoria
FDW	Frente en Defensa de Wirikuta
Fonhapo	Fideicomiso del Fondo Nacional de Habitaciones Populares
FPDT	Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra
Frayba	Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas
FSTSE	Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado
FUPDF	Frente Único de Pепенadores del Distrito Federal
GDF	Gobierno del Distrito Federal
IEBEM	Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos
IEDF	Instituto Electoral del Distrito Federal
IMSS	Instituto Mexicano del Seguro Social
IPN	Instituto Politécnico Nacional
ISSSTE	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
JFCA	Junta Federal de Conciliación y Arbitraje
JLCA	Junta Local de Conciliación y Arbitraje
LFT	Ley Federal del Trabajo
LGEEPA	Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente
LyFC	Luz y Fuerza del Centro
Mapder	Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos
Morena	Movimiento de Regeneración Nacional
MPF	Ministerio Público Federal
Odapas	Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
ONU	Organización de las Naciones Unidas
PAN	Partido Acción Nacional
PGJE	Procuraduría General de Justicia del Estado
PRD	Partido de la Revolución Democrática
PRI	Partido de la Revolución Institucional
Profepa	Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
PT	Partido del Trabajo
Sagarpa	Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
SCJN	Suprema Corte de Justicia de la Nación
SE	Secretaría de Economía
Sedeso	Secretaría de Desarrollo Social
Segob	Secretaría de Gobernación
Semarnat	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Sener	Secretaría de Energía
Sintcop	Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de Posgraduados
SION	Sociedad Integral de Organización Nacional
SME	Sindicato Mexicano de Electricistas
SNTE	Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
SOS	Sociedad Organizada por Sudcalifornia

STAUAG	Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero
STAUO	Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca
STPS	Secretaría del Trabajo y Previsión Social
STUACH	Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Chapingo
SUTIN	Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear
Tadeco	Taller de Desarrollo Comunitario
UACM	Universidad Autónoma de la Ciudad de México
UAIM	Universidad Autónoma Indígena de México
UAM	Universidad Autónoma Metropolitana
UAM-I	Universidad Autónoma Metropolitana unidad Iztapalapa
UANL	Universidad Autónoma de Nuevo León
UNAM	Universidad Nacional Autónoma de México
UNT	Unión Nacional de Trabajadores
UPN	Universidad Pedagógica Nacional

**Realizada por el Comité de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura de México del Observatorio Social de América Latina (OSAL-CLACSO).
Integrantes: Fernando Munguía Galeana y Mariana López de la Vega.
Fuentes: diarios La Jornada y El Universal.**

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales



Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais



OSAL

Observatorio Social de América Latina
Publicación electrónica

Cronología del Conflicto Social

México

Abril de 2011

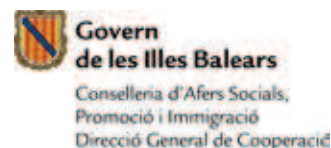
Editada en octubre



Agencia Sueca
de Desarrollo Internacional



Agencia Noruega para la
Cooperación al Desarrollo



El Observatorio Social de América Latina [OSAL] cuenta con el apoyo de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional [ASDI], la Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo [NORAD] y la Agencia de Cooperación Internacional de las Islas Baleares [ACIB].

Documento de trabajo N° 904

*Realizado por el Comité de Seguimiento y Análisis
del Conflicto Social y la Coyuntura de
México*



Integrantes

**Mariana López de la Vega
Fernando Munguía Galeana**

Fuentes

**La Jornada
El Universal**

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Se autoriza la reproducción de los artículos en cualquier medio a condición de la mención de la fuente y previa comunicación al director.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en el documento incumbe exclusivamente al autor o a los autores firmantes y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

El **Observatorio Social de América Latina** (OSAL) constituye una iniciativa del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinada a la promoción de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, las dinámicas de participación y los repertorios de acción de los movimientos sociales y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado es uno de los resultados de este trabajo de relevo y registro llevado a cabo en el marco del programa. Se trata de un escrito en el que se sintetizan las principales acciones de movilización y protesta social y las medidas políticas llevadas a cabo durante el mes indicado en el país referido.

La cronología presentada ha sido elaborada por uno de los **Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana** que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo la coordinación del equipo de investigación mexicano, que forma parte de la red institucional de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.

Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana

PAÍS	INSTITUCIÓN	COORDINACIÓN
Argentina y Uruguay	PIMSA (Argentina)	María Celia Cotarelo
Bolivia	CIDES – UMSA	Dunia Mokrani Chávez Pilar Uriona Crespo
Brasil	LPP - UERJ	Roberto Leher
Chile	DI - UARCIS	Juan Carlos Gómez Leyton
Colombia	Escuela Nacional Sindical	Guillermo Correa Montoya
Costa Rica	IIS - FCS - UCR	Sindy Mora Solano
Ecuador	Centro de Investigaciones CIUDAD	Mario Unda
Guatemala	FLACSO Guatemala	Simona Yagenova
México	FCPS - UNAM	Massimo Modonesi Lucio Fernando Oliver Costilla
Panamá, El Salvador, Nicaragua y Honduras	CELA “Justo Arosemena” (Panamá)	Marco A. Gandásegui (h)
Paraguay	Centro de Documentación y Estudios	Quintín Riquelme
Perú	Instituto de Estudios Peruanos	Ramón Pajuelo Teves
República Dominicana y Puerto Rico	CES “Padre Juan Montalvo” (Rep. Dominicana)	Octavio Figueroa
Venezuela	PROVEA	Marco Antonio Ponce

México

Cronología del conflicto social

Abril de 2011

Viernes 1

En Cuernavaca, Morelos, el escritor Javier Sicilia, padre de Juan Francisco Sicilia Ortega, quien fue asesinado junto con otras seis personas, exige al presidente Felipe Calderón y al gobernador Marco Antonio Adame hacer bien su trabajo; les advierte que si no tienen capacidad para garantizar paz, seguridad y justicia en el país “se larguen” y dejen gobernar a quien sí pueda hacerlo. Convoa a los mexicanos a “unirnos en torno a nosotros mismos” y salir a las calles para exigir a las autoridades federales, estatales y municipales que cesen la violencia y la inseguridad, y que “¡ya basta! de jóvenes, hombres, mujeres y niños asesinados a causa de la guerra contra el crimen organizado que empezó Calderón”, y que ha dejado más de 40 mil muertos.

En Hermosillo, Sonora, cerca de 120 maestros de la Universidad de Sonora (Uson) marchan del campus universitario al congreso del estado y al palacio de gobierno, para protestar por la falta de interés de funcionarios estatales para solucionar la huelga que estalló en esa institución hace dos días. Sergio Barraza Félix, dirigente del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (STAUS), señala que la inversión en educación va a la baja mientras grandes empresas evaden miles de millones de pesos en impuestos. Los maestros exigen la apertura de 40 nuevas plazas y un aumento salarial del 22%, entre otras prestaciones.

En la capital de la República, la tala de árboles en el área natural protegida La Loma provoca la movilización de cientos de vecinos de la colonia La Malinche e integrantes de organizaciones de la sociedad civil que se oponen a la *supervía* poniente. Las protestas comienzan a las nueve de la mañana. Por varias horas los conatos de enfrentamiento hacen que la integridad, tanto de granaderos como de ciudadanos, esté en riesgo. Por la mañana, el cerco de vallas metálicas que rodea los 51 predios expropiados no está vigilado por policías. Minutos antes de las 9 hrs. un helicóptero sobrevuela la zona. Después se escuchan motosierras. Tras percatarse de la tala, un pequeño grupo de vecinos traspasa el cerco de metal, mientras que otros tocan las campanas de la iglesia del pueblo y el llamado es atendido no sólo en el cerro del Judío sino también en colonias de otras delegaciones, como Tlalpan y Coyoacán. Los ciudadanos se ubican a unos siete metros de La Loma y un grupo de policías sale a bloquearles el paso. Los activistas, al igual que en ocasiones anteriores, forman una cadena humana con mujeres para evitar caer en provocaciones, según ellos mismos declaran.

Activistas y habitantes que se oponen a la construcción de la presa El Zapotillo, en Jalisco, acuerdan con funcionarios de la Secretaría de Gobernación la instalación de tres mesas de diálogo a partir del martes 5, así como el retiro, a las 16 hrs. de ese día, del plantón que mantienen los lugareños en la zona de obras desde el pasado 28 de marzo. Lo anterior es pactado en la mesa de acuerdo realizada entre ambas partes en Temacapulín –uno de los tres poblados que, de concretarse el proyecto, quedarían inundados– como muestra de buena voluntad y aportación al diálogo. También queda establecido que se retirarán todos los cargos y denuncias contra los manifestantes.

Durante este año se ha presentado un promedio de tres quejas diarias en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por presuntas violaciones a los derechos humanos de ciudadanos cometidas por militares, pero también por casos de transgresión a las garantías de elementos del ejército, que, en total, suman 281. La Sedena destaca que, ante la ofensiva del ejército y las fuerzas aéreas contra el crimen organizado, también existen quejas presentadas por la delincuencia para

desprestigiar a la institución castrense. En el informe de la secretaría se detalla que, durante este sexenio, la cifra de quejas ascendió a 4.772, presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra la milicia y que han derivado en 74 recomendaciones del organismo, mientras que 570 aún se encuentran vigentes. El documento, elaborado por la dirección general de derechos humanos de la Sedena, expone que “para garantizar la seguridad interior del país”, y de conformidad con las disposiciones emitidas por el presidente de México, la dependencia mantiene actualmente el despliegue del 24.53% del total del personal en operaciones en contra de la delincuencia organizada, con prioridad en aquellos estados del país en los que se han incrementado las actividades delictivas.

Sábado 2

La CNDH informa que, del 2006 al 2011, se ha registrado un total de 5.397 expedientes de personas reportadas como extraviadas o ausentes, además de 8.898 de cuerpos no identificados o cuyas causas de muerte no fueron aclaradas. Mediante un comunicado de prensa, el organismo da a conocer que, del total de extraviados, 3.457 son hombres y 1.885 mujeres, mientras que de 55 casos más no se proporcionaron datos. Mediante el Sistema de Información Nacional de Personas Extraviadas y Fallecidas no Identificadas (SINPEF), la CNDH recaba los datos proporcionados por los familiares de las personas reportadas como víctimas de extravío.

En el primer trimestre de este año se han contabilizado 3.195 ejecuciones, 1.130 sólo en marzo, el mes más violento del 2011. Fueron únicamente 139 casos menos que en el mismo periodo del 2010, año en que se cometieron más asesinatos durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Los estados donde ha sido reportado el mayor número de dichos crímenes, supuestamente ligados a grupos del crimen organizado o que han ocurrido por enfrentamientos entre autoridades y grupos delincuenciales o entre bandas rivales, son Chihuahua, Sinaloa, Guerrero, Nuevo León y Tamaulipas.

La organización H.I.J.O.S (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) México realiza su acostumbrada protesta mensual frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en demanda de la presentación con vida de todos los desaparecidos del país. Como todos los primeros sábados de mes, los activistas realizan un acto temático, en esta ocasión para recordar a las mujeres secuestradas junto con sus hijos en el contexto de la guerra sucia de los años 60, 70 y 80. En esta ocasión, colocan mantas en las que se alude a los niños despojados de sus familias y de su verdadera identidad, luego de que sus padres fueran víctimas de desaparición forzada; también se denuncian varios casos a través de un periódico mural. Además, los integrantes esparcen por el suelo juguetes como recordatorio de los menores víctimas de delitos de lesa humanidad.

La presencia en México del ex mandatario colombiano Álvaro Uribe, quien el miércoles 6 ofrecerá una conferencia magistral sobre valores y convivencia pacífica, es un acto ofensivo para los padres de los estudiantes mexicanos asesinados el primero de marzo de 2008 en Sucumbíos, Ecuador, y que busca limpiar la imagen de un asesino confeso. Así lo denuncia Jorge Morett, padre de Lucía Morett Álvarez, única sobreviviente del bombardeo en el que fallecieron los estudiantes mexicanos Fernando Franco, Soren Avilés, Verónica Velázquez y Juan González del Castillo. “Para nosotros, como padres, resulta agresivo y ofensivo la llegada de este señor como invitado oficial a un acto importante, cuyo contenido además tiene que ver con los valores y la convivencia pacífica. Resulta contradictorio, pues si algo caracteriza a Álvaro Uribe es su guerrerismo, sus acciones ilegales y sus violaciones a los derechos humanos”, subraya Morett.

En San Luis Potosí, para exigir el cese de la violencia generada por la guerra contra el crimen organizado, medio centenar de ciudadanos, encabezados por el escritor y poeta Ignacio Betancourt,

marchan por las calles de la capital potosina. Alrededor de las 17:30 hrs. el contingente parte del jardín de Tequis y se dirige hacia la plaza de Armas, donde los manifestantes llaman a la población a unirse a la exigencia de que el gobierno federal detenga en definitiva “esta guerra que no provocamos nosotros, pero somos los que estamos ofreciendo cada día más víctimas”.

El Frente Amplio en Contra de la Supervía Poniente responsabiliza al jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, “de cualquier agresión” en contra de sus integrantes y reitera “el carácter pacífico y apartidista” del movimiento. En un pronunciamiento público, el frente informa haber notificado a senadores y diputados federales de lo ocurrido el viernes 1 en la colonia La Malinche luego de que trabajadores de la empresa COPRI reiniciaran la tala de árboles en el área natural protegida de La Loma. Los ciudadanos aseguran haber “recurrido a todos los cauces legales” y que no se oponen a la obra “siempre y cuando responda a una planeación racional y cumpla con la ley”.

Domingo 3

Representantes de organizaciones de empleadas domésticas de Guatemala, Perú, Costa Rica y México celebran un foro en la capital para demandar que se reglamente su trabajo en toda América Latina, con el propósito de que se reconozcan sus garantías legales. Marcelina Bautista Bautista, presidente de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar (Conlactraho), señala que se busca impulsar un movimiento en toda la región para que se concreten las reformas legales en la materia, las cuales han sido “eternamente pospuestas” en varias naciones. En el contexto de la conmemoración internacional de las trabajadoras del hogar, Paulina Luza, secretaria de actas de dicha organización y representante de Perú, explica que, entre las tareas pendientes del gremio, está la de reforzar la asesoría legal a esas trabajadoras.

En Cuernavaca, Morelos, alrededor de mil personas marchan por el primer cuadro de esta capital y con veladoras colocadas en el zócalo forman la palabra justicia. El acto realizado es para reclamar a la procuraduría estatal y general de la República que esclarezca los asesinatos del joven Juan Francisco Sicilia Ortega y de otras seis personas, cuyos cuerpos se hallaron en un automóvil en el fraccionamiento Las Brisas de Cuernavaca el pasado 28 de marzo.

Los pobladores de Melchor Ocampo, municipio de Tepeji del Río, Hidalgo, bloquean caminos vecinales e impiden las obras de la estación ferroviaria de carga que la empresa Hutchinson Port Holding esta realizando en 200 hectáreas de su ejido. Los inconformes exigen la intervención del congreso del estado para que se reparen los daños, se pavimenten calles y se edifique una escuela secundaria, obras prometidas a cambio de permitir la operación de la empresa, así como afirma en una entrevista telefónica Sergio Cabrera Torres, presidente del comisariado ejidal.

Integrantes del Frente Amplio Contra la Supervía Poniente llaman a la ciudadanía a dejar de lado la apatía y el “no se puede”, a templar los ánimos para que la justificada indignación no se convierta en violencia y a organizarse para impedir que la capital federal siga siendo botín de políticos. En víspera de que se cumpla un año de la firma del título de concesión de la vía de cuota, los activistas, en voz de Cristina Barros, dan a conocer su manifiesto, acusando al gobierno de concebir “a la ciudad como un negocio y a la ciudadanía como una fuente a la que hay que exprimirle hasta la última gota, como lo demuestran los cobros excesivos de agua y prediales a los que nos hemos visto sometidos”.

Lunes 4

Trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), en plantón en el zócalo capitalino y frente a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), han puesto en marcha diversos mecanismos para mantener económicamente la resistencia. Éstos van de la venta de agua embotellada mediante una pequeña empresa que crearon, hasta la impresión de playeras y la instalación de un comedor comunitario. Los electricistas tienen tomada la plancha del zócalo desde el pasado 4 de marzo, ante el incumplimiento de los acuerdos firmados con la Secretaría de Gobernación para que levantaran la huelga de hambre realizada el año pasado.

El Movimiento por Justicia del Barrio, de Nueva York, adherente de la Otra Campaña, ocupa pacíficamente las oficinas del consulado de México para exigir al gobierno de Chiapas la liberación de “los cinco de Bachajón”. La acción es parte de la campaña mundial que se ha venido desarrollando en diversos países desde el pasado día primero y que ha incluido manifestaciones ante la embajada de México en Londres, Reino Unido, y el consulado en Montreal, Canadá.

En Oaxaca, pobladores de Jalapa del Valle, comunidad del municipio de San Felipe Tejalapa, respaldados por habitantes de Santa María Peñoles, bloquean durante más de tres horas la carretera internacional Cristóbal Colón, en las inmediaciones del cruce Hacienda Blanca, para demandar al gobierno estatal que atienda el conflicto agrario que enfrenta a esta comunidad con la de Santiago Tlazoyaltepec, ambas en la región de los Valles Centrales. En la disputa por 600 hectáreas, habitantes de las dos comunidades se enfrentaron a pedradas la noche del domingo 3, choque en el cual murió un vecino de la segunda demarcación.

En Guadalajara, Jalisco, en la comunidad de Temacapulín, municipio de Cañadas de Obregón, se inician mesas resolutorias de negociación en las que participan pobladores afectados por el proyecto de la presa El Zapotillo y autoridades federales. En esta capital se anuncia que el Congreso de la Unión prepara un estudio que demostraría la inviabilidad de la obra auspiciada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y señalaría alternativas, entre las cuales la de la presa Loma Larga II, que impedirían el desplazamiento de pobladores de Temacapulín, Acasico y Palmarejo.

La Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) exige al gobernador Ángel Aguirre Rivero cumplir la promesa de crear una fiscalía especial para indagar la desaparición del profesor Gregorio Alfonso Alvarado López, cuyo caso llegó en el 2005 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en el 2007, es decir 11 años después de ocurrida, a la Procuraduría General de la República, no obstante lo cual el expediente fue declarado información reservada, así como recuerda su esposa, Norma Valdés Santos.

Martes 5

Integrantes de la Red por la Paz y la Justicia anuncian que este miércoles se efectuarán 28 marchas en el país para exigir a las autoridades que pongan alto a la impunidad –a raíz del asesinato de Juan Francisco Sicilia, hijo del escritor Javier Sicilia, y de otras seis personas–, además de que se realizarán manifestaciones en ocho países en repudio a la violencia en México. Demandan al titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, Pedro Luis Benítez, y al gobernador panista Marco Antonio Adame, detener a los responsables del asesinato de estas personas, cuyos cuerpos fueron hallados en un vehículo abandonado en el fraccionamiento Las Brisas, municipio de Temixco, el pasado 28 de marzo.

Mientras en la comisión del trabajo se debate la reforma laboral, en el pleno de la cámara de diputados, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) dan

una muestra de cómo la subcontratación de servicios afectará la antigüedad, los ingresos y las prestaciones de los trabajadores. Ambas fracciones defienden el despido de 150 personas, subcontratadas por la empresa Alfa-Sol, que les pagaba 2.400 pesos al mes. Legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Partido del Trabajo (PT) señalan que la sustitución de contratistas para los servicios de limpieza del palacio legislativo derivó en el despido de trabajadores –en su mayoría mujeres– que días antes habían exigido que la cámara los contratara y asumiera sus obligaciones como patrón.

Las 5.300 personas reportadas como extraviadas y los casi 9 mil cadáveres sin identificar de los que informó la CNDH podrían estar relacionados con el fenómeno de las desapariciones forzadas, ya que dichas cifras corresponden al sexenio actual, cuando se desencadenó la “guerra” contra el crimen organizado. Advierten lo anterior activistas de derechos humanos, quienes consideran que, ante la falta de una base de datos confiable al respecto, muchos de los cuerpos no identificados podrían ser de casos de desaparición.

En el Distrito Federal, frente a la embajada de Colombia, padres, familiares y amigos de los estudiantes mexicanos ultimados en el 2008 en Sucumbíos, Ecuador, manifiestan su repudio contra el ex presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez. Luego, en la Procuraduría General de la República (PGR), los padres de los jóvenes asesinados, Soren Avilés, Juan González, Verónica Velázquez, Fernando Franco, y de la única sobreviviente, Lucía Morett, exigen justicia y la detención –con base en la constitución mexicana y el código federal de procedimientos penales– de Uribe, quien incurrió “en crímenes de lesa humanidad” al ordenar el bombardeo de un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en esa provincia ecuatoriana donde se encontraban los jóvenes mexicanos. Uribe, de visita en el país para dictar una conferencia sobre educación y valores para la convivencia pacífica, en el contexto del nonagésimo aniversario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), “usa estos actos para ocultar sus manos manchadas de sangre y para mantenerse en la impunidad”, así como dijeron padres, familiares y estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), exclamando “¿por qué, por qué los asesinan, si son la esperanza de México y América Latina?”.

Luis Quiroz Quiroz, ex candidato a presidente municipal de San Agustín Chayuco y profesor de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), es asesinado en el paraje Dos Caminos, de ese municipio de la Costa. El procurador de justicia del Estado, Jesús López López, declara que el occiso era supervisor de educación indígena de la zona escolar 24 del instituto estatal de educación pública de Oaxaca y fue asesinado alrededor de las 13 hrs. por desconocidos, cuando circulaba en su auto, un Nissan modelo Tsuru, rumbo a la cabecera municipal.

En Campeche, el líder del Frente Campesino 19 de Octubre, Armando García Jiménez, es asesinado de seis balazos en la madrugada por dos sicarios a bordo de una motocicleta, la cual abandonaron a unos kilómetros de donde perpetraron el crimen. La procuraduría general de justicia del estado informa que el dirigente agrario de 48 años fue ultimado con una pistola calibre 40. Una de sus hijas, que lo acompañaba y fue rozada por una bala, se encuentra ahora fuera de peligro.

Unos 500 trabajadores de la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG) toman las oficinas centrales de la dependencia y paran labores para exigir a la titular de la dependencia, Silvia Romero, no ratificar en sus cargos a 80 funcionarios del anterior gobierno estatal, así como informa Genaro Guevara, vocero de los empleados. Paralelamente, maestros indígenas de la disidente Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) se apoderan de las oficinas de la dirección de educación indígena de la SEG, en demanda de que el gobernador Ángel Aguirre designe al frente de esa dependencia a un profesor que reúna los requisitos, entre ellos el haber impartido clases en años recientes.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) suspende de manera temporal las obras de la *supervía* poniente, debido a que la constructora no cuenta con la manifestación de impacto ambiental (MIA) que otorga la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para los trabajos que se realizan en áreas federales por las que atravesará la vialidad. La decisión se aplicará en 38 puntos forestales, distribuidos a lo largo de la vía, y que van de Lomas de Tarango a Luis Cabrera. La inspección se realiza a iniciativa del organismo y por una denuncia popular, así como informa Carmen García, delegada de la Profepa en la zona metropolitana del Valle de México.

Miembros de organizaciones civiles que apoyan el Movimiento Ciudadano por la Justicia Cinco de Junio acuden al senado a reiterar las demandas de esa agrupación, a 22 meses del incendio en la guardería ABC de Hermosillo, donde murieron 49 menores y 70 más resultaron heridos. Abraham Fraijo, único padre de familia presente, y Daniel Gershenson, de la asociación Al Consumidor, intentan entregar una carta a Manlio Fabio Beltrones, presidente de la mesa directiva, y a los coordinadores de todas las fracciones parlamentarias, en la cual exigen que se retome la solicitud de aprobar la Ley General de Servicios de Cuidado, Aprendizaje y Desarrollo Integral Infantil. Sin embargo, por encontrarse éstos ausentes, la entregan a los legisladores del PRD.

Miércoles 6

En Cuernavaca, Morelos, más de 40 mil personas vestidas de blanco salen a las calles para exigir al presidente Felipe Calderón y al gobernador Marco Antonio Adame Castillo parar la violencia, la inseguridad y que vuelvan la paz, la justicia y la dignidad a Morelos y a México. El poeta Javier Francisco Sicilia, en los discursos que pronuncia frente a la 2ª Zona Militar, ante la PGR de la entidad y en el zócalo, exige justicia para el asesinato de su hijo, Juan Francisco, y de otras seis personas, quienes fueron encontrados sin vida en un automóvil el pasado lunes 28 de marzo. Además, pide frenar la ola de asesinatos, que regresen los militares a sus cuarteles y que dejen de llamar a las víctimas “daños colaterales”.

“Sí son nuestros muertos, no es nuestra guerra”. Es esta la frase que da sustento a una marcha que despega de la explanada del palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México, para dar inicio a una catarsis ciudadana y poética. Las letras, el ensayo y los versos sustituyen a la retórica política y el discurso partidista. El destinatario de la protesta es “quien en el 2006 inició una estrategia para legitimarse”. A más de cuatro años del despliegue de la “guerra” contra el narcotráfico y con el recuento de casi 40 mil muertos, la población sale a las calles de la capital para decir “no más sangre”, “fuera Calderón”, “ni uno más” y “¡Estamos hasta la madre!”.

Miles de personas marchan en 21 entidades de la República para exigir un alto a la violencia, la corrupción y la impunidad, con la consigna de que “ni un joven, ni una persona más muera a manos del crimen organizado ante la pasividad y la complicidad de las autoridades”. Los manifestantes salen a las calles en respuesta a la convocatoria del poeta Javier Sicilia, cuyo hijo fue asesinado junto a otras seis personas el pasado 28 de marzo en Morelos. En Veracruz, Nuevo León, Chihuahua, Guanajuato, San Luis Potosí, Coahuila, Aguascalientes, Oaxaca, Querétaro, Chiapas, Yucatán, Puebla y Colima se concentra el mayor número de participantes, mientras que en Michoacán, Durango, Tlaxcala, estado de México, Quintana Roo, Hidalgo, Tamaulipas y Jalisco decenas de estudiantes, académicos y activistas sociales portan pancartas con mensajes como “queremos vivir en paz”, “no más sangre”, “quiero caminar sin miedo” y “ni un muerto más”.

Al menos 59 cadáveres son extraídos de narcofosas halladas en los límites de los municipios de San Fernando y Matamoros, Tamaulipas, presuntamente de personas ejecutadas por uno de los grupos de narcotraficantes que controlan la plaza en esta zona. La cifra sobre el número de cuerpos varía de

una autoridad a otra; el gobierno de Tamaulipas sostiene en un comunicado que se encontraron 61, mientras la Secretaría de Gobernación (SG) federal aseguró que fueron 59.

La Coordinadora de Mujeres en Resistencia, reunida en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, “para analizar la situación de violencia en nuestras comunidades”, denuncia “graves amenazas de muerte y agresión” contra Rosa Díaz Gómez, adherente de la Otra Campaña, en la comunidad Jotolá, municipio de Chilón. Amenazas más preocupantes aun porque el 31 de marzo fueron liberados sus agresores –Juan Cruz Méndez, Medardo Cruz Méndez, Alfonso Cruz Cruz, Eleuterio Cruz Cruz y Melecio Cruz Guzmán–, bajo fianza, por un juez de Ocosingo.

En la Ciudad de México, la Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos se manifiesta contra la visita al país del ex presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, quien participa en un foro sobre valores y convivencia pacífica. El grupo de activistas parte al filo de las 9 de la mañana del museo nacional de antropología rumbo al acto organizado en el auditorio nacional, con motivo del nonagésimo aniversario de la SEP. En dicho acto están presentes el titular de esa dependencia, Alonso Lujambio; la esposa del presidente Felipe Calderón, Margarita Zavala, y la premio nobel de la paz guatemalteca, Rigoberta Menchú. Entre consignas como “Uribe asesino, la cárcel tu destino” y mantas que señalan los vínculos del ex mandatario con el narcotráfico y los paramilitares de su país, los manifestantes expresan su repudio a la visita del responsable del bombardeo del 1 de marzo de 2008 contra un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano.

En Chilpancingo, Guerrero, el gobernador Ángel Aguirre Rivero anuncia que el lunes 11 se reunirá con el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop) en las oficinas de la diócesis de Acapulco, que encabeza el arzobispo Carlos Garfias Melos –quien estará presente– para conocer las razones por las cuales los activistas rechazan el proyecto hidroeléctrico.

En demanda de que se incremente el precio de la leche, productores de los municipios de Delicias, Saucillo, Meoqui y Camargo, Chihuahua, se apostan en la plaza Hidalgo, frente al palacio de gobierno estatal, donde regalan al público más de mil litros de ese alimento. Encabezados por la agrupación El Barzón, los manifestantes exigen un incremento de por lo menos dos pesos al precio que les paga Liconsa, que ofrece apenas 3.90 pesos por litro a puerta de corral. Roberto Cázares, dirigente de la organización, denuncia que grandes grupos agroindustriales, como Lala y Zaragoza, venden a la paraestatal una fórmula láctea a 13 pesos por litro, mientras que se castiga a los productores de leche.

A un año del decreto de expropiación y la firma del título de concesión de la *supervía* poniente, integrantes del frente amplio en contra de la carretera urbana de cuota reciben con beneplácito la suspensión de la obra por parte de la Profepa, pero advierten que su exigencia es la cancelación. En un pronunciamiento público señalan que la medida “coincide” con la denuncia que presentaron con ayuda del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y la asociación civil Litiga Ole hace algunas semanas ante la instancia federal, en el sentido de que la concesionaria carecía de la MIA para las zonas federales.

En la Ciudad de México, padres de familia y alumnas de la escuela secundaria diurna número 34 Eugenia León Puig, toman el plantel y bloquean por más de una hora dos carriles de la calzada de Tlalpan en protesta por la ampliación de horario que pretende implementar la SEP. La escuela, exclusiva para mujeres, ha sido integrada al grupo de ocho planteles donde se desarrolla un programa piloto para la ampliación de horarios conocida como “escuela de tiempo completo”, con la que las clases terminan a las 16 en lugar de las 13:40 hrs., así como informan los padres de familia.

Jueves 7

“Estamos hasta la madre”, es la consigna que cientos de manifestantes gritan en Argentina y España para protestar por el asesinato del hijo del poeta mexicano, Javier Sicilia, Juan Francisco Sicilia, de 24 años, y seis personas más, en Morelos. “Estamos hasta la madre. Si no pueden, renuncien” se lee en un cartel frente a la embajada de México en Buenos Aires, adonde llegan manifestantes auto convocados en las últimas horas para protestar por dichos asesinatos. Es la respuesta simbólica y conmovedora a la carta de Javier Sicilia, que dio la vuelta al mundo, impulsando manifestaciones en varias ciudades.

Al protestar en contra de la reforma laboral impulsada por el PRI, integrantes de varias organizaciones gremiales coinciden en que esta iniciativa se está “desmoronando” e incluso al interior del tricolor hay posiciones encontradas entre sus legisladores, a quienes “se les descompuso el escenario que habían armado para aprobarla *fast track*” y sólo un grupo insiste en sacarla adelante, mientras otros evalúan el enorme costo político que tendría este golpe a los trabajadores en los próximos procesos electorales. En el contexto de la marcha y posterior concentración en el zócalo de la Ciudad de México que realiza en rechazo de la reforma laboral impulsada por PRI y PAN, la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) informa que esta iniciativa se está “resquebrajando”, siendo difícil que resulte aprobada no sólo en el actual periodo de sesiones, sino incluso “en el sexenio”. En tanto, el Frente Sindical Mexicano (FSM), que encabeza el SME, y los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) Azael Santiago Chepi y Salvador Cázares, informan estar dispuestos a incrementar las movilizaciones no sólo en contra de la reforma, sino en demanda de soluciones a sus gremios.

En Acapulco, unos 400 comerciantes afectados por el incendio causado por presuntos criminales al mercado Acatianguis bloquean durante hora y media el bulevar Vicente Guerrero para exigir la liberación de cinco compañeros, quienes estaban de guardia ese día y, acusados de matar a un militar durante el enfrentamiento que se desató tras la conflagración, han sido detenidos. Los manifestantes piden también al gobierno municipal cumplir con los apoyos que les prometió para adquirir puestos nuevos. Apostados en ambos sentidos del bulevar, a unos metros del distribuidor vial localizado entre las colonias Ciudad Renacimiento y Emiliano Zapata, queman cinco neumáticos y muestran cartulinas con leyendas como “somos comerciantes, no somos delincuentes”.

El Ejército Popular Revolucionario (EPR) solicita a todas las organizaciones campesinas e indígenas, así como a las autoridades de bienes comunales y ejidales, que incluyan en sus pliegos petitorios la exigencia de la presentación con vida de sus compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, detenidos y desaparecidos por este “gobierno criminal y antipopular” el 25 de mayo de 2007. En un comunicado, firmado por la comandancia general, el grupo guerrillero sostiene que el pueblo necesita “cerrar filas y exigir la presentación de todos los detenidos desaparecidos de ayer y hoy, y exigir juicio y castigo a los responsables”.

Miembros de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (Cocyp) se manifiestan afuera de las instalaciones de la representación del gobierno de Chiapas en el Distrito Federal para exigir al gobernador Juan Sabines “alto al hostigamiento policiaco que sufren las etnias del estado, a quienes se les violan sus derechos humanos, sociales y políticos”. José Jacobo Femat, presidente de la Cocyp, anuncia un plantón permanente de familiares de “presos políticos” de esta organización frente al palacio de gobierno de Chiapas, para exigir “la libertad inmediata de los detenidos arbitrariamente en la entidad”.

El secretariado internacional de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) manifiesta en Ginebra, Suiza, su preocupación por los cinco campesinos tzeltales presos en Chiapas, entre ellos

un menor de edad, pobladores del ejido San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, y denuncia las lamentables condiciones en que los mismos se encuentran en los penales. Señala que los cuatro adultos –Jerónimo Guzmán Méndez, Domingo Pérez Álvaro, Juan Aguilar Guzmán y Domingo García Gómez– encerrados en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) número 17, en el municipio de Playas de Catazajá, “denuncian actos de hostigamiento de parte del alcaide”, quien los amenaza con enviarlos “a una celda de castigo”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acepta revisar el caso de los trabajadores que quedaron sepultados en la mina Pasta de Conchos desde febrero de 2006, y da al gobierno mexicano hasta el 15 de abril como plazo para presentar observaciones, así como informa el senador panista Ricardo García Cervantes. La organización Familia Pasta de Conchos notifica lo anterior al legislador, presidente del capítulo México de la Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción (GOPAC), quien desde hace meses ha insistido en que el presidente de la República reciba y atienda a los familiares de los mineros fallecidos.

En la Paz, Baja California Sur, organizaciones ambientalistas exigen a la Semarnat revocar la manifestación de impacto ambiental del proyecto turístico Cabo Cortés, que incluye la construcción de 30 mil habitaciones en el municipio de Los Cabos. También demandan prohibir en el estado la minería tóxica para la extracción de oro y señalan que esta actividad pone en riesgo la poca agua que hay en la entidad, donde el 35% de los acuíferos están sobreexplotados.

Más de 9 mil maestros de la CNTE marchan de la casa de gobierno al centro histórico de Michoacán para exigir que se abastezca de medicinas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), rechazar la propuesta oficial de la Ley de Educación en la entidad y plantear demandas laborales al gobierno del estado para este año. Encabezados por el dirigente Jorge Cázares Torres, los mentores se concentran a las 10 hrs. frente a las oficinas del ejecutivo del estado. A las 11:30 salen hacia al centro de Morelia y a las 13 arriban a la plaza Melchor Ocampo, frente al palacio de gobierno.

Aunque la caravana ganadera, convocada por el Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche para exigir el pago de un mejor precio por el litro, no logre ingresar al Distrito Federal –pues se le impide el paso a medio centenar de vacas que traían los pequeños y medianos productores– éstos logran plantear sus demandas a funcionarios de la Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), de Gobernación y de Economía, quienes les aseguran que tendrán una respuesta en dos semanas.

Viernes 8

El escritor Javier Sicilia dice que no le sorprende que Felipe Calderón declarara en Cancún que continuará la lucha contra el narcotráfico pese a los 40 mil mexicanos muertos, porque el pasado miércoles, cuando se reunieron en Los Pinos, el mandatario le manifestó que no iba a modificar dicha estrategia. “Él me dijo: ‘no me voy a mover de mi posición’; lo que está declarando ahora ante las cámaras me lo dijo a mí en privado”, comenta Sicilia al ser entrevistado en el plantón que sostiene en el zócalo de esta ciudad desde el pasado miércoles, en demanda del esclarecimiento y justicia para el asesinato de su hijo Juan Francisco y seis personas más. Indica que lo sostenido por Calderón le confirma que sólo tiene imaginación para la violencia. “Lamentable, ¿en qué sentido?, en qué no tiene más imaginación para salvar este país. Sólo tiene imaginación para aumentar la guerra, la violencia, el dolor. Eso es lo terrible”, subraya Sicilia.

Estados Unidos expresa preocupación por el hostigamiento a defensores de derechos humanos en México en su reporte anual sobre derechos humanos presentado en Washington. Las denuncias de

ataques a activistas son “una señal alarmante” que Estados Unidos sigue “muy de cerca”, así como asegura Michael Posner, secretario de Estado adjunto para democracia y derechos humanos. Aunque México no esté destacado especialmente en el informe anual del Departamento de Estado, el funcionario reconoce que Estados Unidos tiene algunas “inquietudes” respecto de lo que sucede en el país.

Las más importantes organizaciones independientes de derechos humanos de México deciden no acudir a una reunión con delegados del gobierno federal, ya que éste no tiene una verdadera disposición para dialogar sino que quiere únicamente presentar cifras y legitimarse al decir que el tema les preocupa, así como lamentan los activistas. José Rosario Marroquín, coordinador de comunicación y análisis del centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez, señala que esta posición de las autoridades no es nueva, ya que desde el sexenio de Vicente Fox se ha utilizado la supuesta apertura con organismos internacionales como forma de “maquillar” la realidad del país. Durante la jornada nacional e internacional de información, ex braceros exigen del gobierno mexicano el pago del 10% que les adeuda de sus percepciones por trabajar en Estados Unidos entre las décadas de los años 40 y 60, y que les fue retenido para crear un fondo de ahorro del que nunca disfrutaron. Añaden que los 38 mil pesos ofrecidos son “insuficientes”, pues no cubren el monto del adeudo. Norberto Flores Eloísa y Nicasio Martínez, integrantes de la Asamblea Nacional de Braceros, señalan que ese monto, además de ser una “limosna”, se les pretende pagar en un plazo de diez años. Esto no solo no cubre lo que se les quitó de sus sueldos –y que fue en dólares–, sino que también el plazo de entrega es una “burla”, porque la mayoría de los que aún viven cuentan con más de 70 años de edad, los más jóvenes, mientras que los que fueron a trabajar a Estados Unidos en los primeros años después de signado el acuerdo entre México y Estados Unidos rebasan los 90 años.

Con la consigna “ni golpes de Estado, ni golpes a las mujeres”, representantes de redes feministas y de derechos humanos se manifiestan afuera de la embajada de Honduras en México para exigir el cese de la violencia en contra de las activistas de ese país. Las defensoras denuncian las “políticas represivas y altas tasas de violencia e impunidad que imperan en Honduras” después del golpe de Estado que destituyó al presidente Manuel Zelaya. Las organizaciones tienen el registro del asesinato de cinco defensoras de derechos humanos durante el 2010, mientras que, en lo que va del 2011, ya se cuentan 50 muertes violentas.

Los ejidatarios tzeltales adherentes de la Otra Campaña de San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, Chiapas, recuperan por la mañana la caseta de cobro de su ejido en el acceso a las cascadas de Agua Azul, en cuyo lugar el gobierno instaló desde hace dos meses un “módulo de atención ciudadana”, luego de que un grupo de indígenas identificados como pro-gubernamentales se había apoderado violentamente de ella el día 2 de febrero. Los representantes de la Otra Campaña notifican por vía telefónica, y luego mediante un comunicado, que la caseta fue tomada por “hombres y mujeres de la Otra Campaña [quienes] ya se cansaron del proceso de diálogo que hizo el gobierno a la malagueña [a su manera], y secuestró a los cinco compañeros actualmente presos en Playas de Catazajá”.

El Tribunal Unitario Agrario (TUA) de Zacatecas ordena a la compañía minera canadiense Gold Corp., que explota el complejo Peñasquito –la mina de oro a cielo abierto más grande de América Latina–, pagar 130 millones de pesos a los ejidatarios de El Vergel, municipio de Mazapil. Al resolver un recurso legal que interpusieron los labriegos a finales de 2009, dicha instancia considera insuficientes los cinco millones de pesos que la compañía ha pagado a los campesinos por la renta de una superficie de más de mil hectáreas. El expediente que contiene la resolución del TUA, cuyo número es 13/3/2009, estipula la indemnización de 130 millones de pesos como compensación por los cuatro años durante los cuales la Gold Corp. ha tenido y explotado los terrenos bajo la modalidad de renta.

En Tecámac, México, un grupo de 120 familias denuncia el abandono en que la inmobiliaria Desarrolladora Metropolitana S.A. de CV tiene al fraccionamiento Fuentes DeMet, pues, después de venderles sus viviendas desde hace tres años, no ha cumplido con el equipamiento urbano como alumbrado público, construcción de escuelas, suministro de agua y áreas verdes. Los afectados señalan que la compañía eliminó sus oficinas, por lo que no existe un lugar donde reclamar la entrega de sus escrituras y la dotación de servicios.

En Hermosillo, Sonora, unos 80 trabajadores del rastro municipal de esta capital marchan por la mañana por el centro histórico y realizan un plantón frente a la sede del ayuntamiento para denunciar que el gobierno del alcalde panista Javier Gándara Magaña busca cerrar el rastro para permitir que otros empresarios instalen uno privado, lo que los dejaría sin empleo. Los manifestantes sostienen que el rastro municipal tiene gran arraigo, siendo el sitio donde por décadas los restauranteros y dueños de taquerías de la ciudad han comprado la carne de res que ofrecen al público.

En San Luis Potosí, cinco de los nueve consejeros de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) solicitan a diputados “detallar acciones de seguimiento y/o resolución” a la queja presentada a finales de marzo por la ex delegada de la PGR en la entidad, Laura Ocón Bailón, contra José Ángel Morán Portales, presidente de la CEDH, a quien la primera acusó de hostigamiento. La querrela evidencia una conducta indigna del *ombudsman* y pone en grave riesgo la lucha contra el narco, así como consideran los consejeros.

En Chilpancingo, Guerrero, más de 5 mil disidentes de la CETEG protestan para rechazar la reforma laboral presentada por el PRI y el PAN y que pretende modificar el pago de indemnización a sólo un año de existir conflicto con el patrón sin tomar en cuenta la antigüedad del trabajador, así como informa Gonzalo Juárez Ocampo, dirigente magisterial. El mismo señala que el pliego petitorio contiene varias demandas, entre las cuales destaca los 90 días de aguinaldo para jubilados.

Más de 80 organizaciones reconocen “la resistencia legal y pacífica” del Frente Amplio en Contra de la Supervía Poniente y exhortan al Gobierno del Distrito Federal (GDF) a dejar la estrategia de “minimizar” la determinación de la Profepa. En un pronunciamiento conjunto, las agrupaciones – entre las que se encuentran los centros de derechos humanos Fray Francisco de Vitoria, Miguel Agustín Pro y Fray Bartolome de las Casas– advierten que la suspensión de las obras en 38 polígonos forestales que abarcan casi 17 hectáreas y que están repartidos a lo largo de todo el trazo de la supervía “constituye una prueba más de la ilegalidad que ha caracterizado al proceso”. Dichos centros demandan que se haga valer el estado de derecho frente a la vulneración de la ley por parte del poder público y consideran que la ejecución de un proyecto que no cumple con los requisitos fijados en la legislación muestra la falta de voluntad de las autoridades del GDF para ser garantes de los derechos humanos y vigilar el estricto cumplimiento de las leyes.

Maestros de la CNTE marchan de la columna de la Independencia a la SG para entregar al gobierno federal un pliego nacional de demandas y exigir mejores condiciones salariales, así como para expresar repudio a la aprobación de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, a la que califican de “obsequiosa con la cúpula empresarial”. Profesores disidentes de Oaxaca, Guanajuato, Guerrero, Zacatecas, Sonora, Jalisco, Durango, Estado de México y Distrito Federal, entre otros, afirman que se instalará un campamento nacional representativo de la CNTE en el zócalo capitalino, desde el cual “estaremos muy atentos a cualquier intención de albazo legislativo en materia laboral que pretenda imponer el gobierno calderonista”.

Sábado 9

Organizaciones defensoras de la libertad de expresión denuncian la desaparición de Ramón Ángeles Zalpa, corresponsal en Paracho del periódico *Cambio de Michoacán*, ocurrida hace cuatro días. La CNDH condena el crimen e informa haber iniciado las investigaciones pertinentes. Las organizaciones no gubernamentales (ONGs) Artículo 19, el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) y Reporteros sin Fronteras informan que Ángeles Zalpa es el cuarto periodista desaparecido en Michoacán desde el 2006 y el décimo en todo el país desde el 2003.

En México no puede haber democracia mientras *Televisa* continúe administrando la ignorancia y el pensamiento de millones de personas, así como sostiene Andrés Manuel López Obrador, el cual descalifica con dureza la determinación de los senadores, entre ellos el perredista Carlos Sotelo, de promover la iniciativa que refrendaría en automático las concesiones a las empresas privadas de radio y televisión. “Es una vergüenza lo que está pasando. En lugar de desmontar los monopolios de la comunicación, que son el principal instrumento de la mafia en el poder para manipular al pueblo, están consolidándolos con estas iniciativas. Estamos en favor de que se abra el sector, que no haya sólo una, dos, tres televisoras en México, sino que haya muchas y que no se proteja a los monopolios ni en la radio ni en la televisión”.

El jueves 7, María Eustolia Ornelas Oliva, de 28 años, fue asesinada por su marido, caso con el cual se incrementó a 96 el número de mujeres asesinadas en Guanajuato desde el 2008, mientras que sólo dos homicidas fueron sentenciados a prisión, así como sostiene la directora del centro de derechos humanos Victoria Diez, Ángeles López García. En el 2008 hubo 41 víctimas, 43 en el 2009 y, con María Eustolia, ya van 12 en el 2010. Dicha mujer murió en el hospital regional de León luego de discutir con su marido, Nicolás Montelongo, de 29 años, quien la agredió 20 veces con la hoz frente a sus hijos, en la comunidad de San Ignacio de Hidalgo, municipio de San Francisco del Rincón.

Alumnos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) reclaman a diputados locales la falta de apoyo económico a la institución de educación superior. Durante una visita de legisladores perredistas a la unidad Casa de la Libertad, ubicada en la delegación Iztapalapa, se escuchan reclamos como “no queremos ampliación de horarios para los antros, sino ampliación de recursos para la educación pública superior”. Los jóvenes exigen a los legisladores Claudia Águila, Alejandro Sánchez Camacho y Víctor Varela que se cumpla lo que establece la ley, es decir la entrega de 3.4 salarios mínimos para cada uno de los más de 10 mil jóvenes matriculados en la universidad.

El subsecretario general de la división Nuevo Necaxa del SME, Domingo Aguilar Vázquez, es detenido por la policía ministerial investigadora por ser acusado de delitos de violación a la Ley de Vías Generales de Comunicación y por hostigamiento y amenazas contra funcionarios del Servicio Postal Mexicano (Sepomex), así como informa la PGR, delegación Puebla.

Aguilar Vázquez, miembro del SME, es aprehendido el mediodía afuera de los juzgados federales de San Andrés Cholula, Puebla, a 15 minutos de la capital del estado, donde obtuvo el amparo 429/2010 por la causa penal 01/2001, por presunto delito de robo contra instalaciones de la desaparecida Luz y Fuerza del Centro (LyFC) en el municipio de Nuevo Necaxa.

En Hermosillo, concluye antes de la medianoche la huelga en la Universidad de Sonora, luego de que el gobierno estatal hiciera aportaciones extras a la rectoría para mejorar los salarios de los más de 1.300 docentes agremiados en el STAUS. El secretario general del gremio, Sergio Barraza Félix, considera que se obtuvieron “buenos resultados” en la negociación, entre ellos un aumento del 3.9%

más un punto porcentual para nivelar el sueldo de los maestros de distintas regiones del estado, y del 2.6% en prestaciones de monto fijo.

Domingo 10

Miembros de organizaciones sociales y militantes del PRD y del PRI conmemoran el 92 aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, en Cuernavaca, Morelos, así como en Chiapas, Hidalgo y Michoacán. Unos 400 integrantes de la Unión de Organizaciones Regionales Campesinas Agrícolas (Unorca) marchan y efectúan un mitin en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con el lema “Zapata vive, la lucha sigue”. Indígenas y campesinos de diferentes partes del estado caminan desde el sur de San Cristóbal, encabezados por el dirigente nacional Olegario Carrillo Meza, hasta el parque central, donde concluyen con un mitin.

En mayo próximo se cumplirán cuatro años de la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, militantes del EPR. Si para entonces no se resolviera el caso, el grupo rebelde pondría fin a la tregua que anunció en el 2008 para facilitar las investigaciones. José Enrique González Ruiz, miembro de la Comisión de Mediación (Comed) entre el EPR y el gobierno federal, declara que las autoridades tienen una última oportunidad pues, en caso de incumplimiento, los familiares de los desaparecidos acudirán a instancias internacionales como la CIDH, con sede en Costa Rica. “El EPR dijo en un comunicado que la tregua no es eterna, y a falta de resultados el caso se denunciará en el extranjero, adonde la Comed los acompañaríamos, pero concluiría el papel de mediadores que asumimos el primero de mayo del 2008”, indica el académico que integra la comisión, junto a Miguel Ángel Granados Chapa, Gilberto López y Rivas, Rosario Ibarra de Piedra y Juan de Dios Hernández Monge, entre quienes también figuraron los finados Carlos Montemayor y Samuel Ruiz.

La junta de buen gobierno (JBG) “El Camino del Futuro”, con sede en el *caracol* zapatista de La Garrucha, denuncia la pretensión de despojar de sus tierras y derechos ejidales a las bases de apoyo zapatistas del ejido Cintalapa, Ocosingo, en la selva Lacandona, si las mismas no renuncian a la resistencia. Las autoridades del ejido y los tres niveles de gobierno “están obligando a nuestros compañeros a pagar el impuesto predial de la tierra”, declara la JBG. A mediados de marzo, las autoridades priístas y panistas exigieron a las bases de apoyo zapatistas una copia de su credencial de elector “para solicitar un proyecto, pagar el impuesto de la tierra y obtener el certificado agrario”. También les dijeron que tendrán que cumplir lo que digan estas autoridades, acudir obligatoriamente a las escuelas oficiales y pagar cooperaciones. Los zapatistas no aceptaron, “porque están en resistencia y no reciben nada del mal gobierno” y, destaca la JBG, “tienen sus autoridades y educación autónomas [del municipio en rebeldía Ricardo Flores Magón], y no tienen por qué ser obligados a trabajos en que ellos no sean beneficiados”.

La responsable de bienes comunales del municipio de Zumpango de Neri, Emperatriz Basilio Goytia, informa que comuneros locales y pueblos indígenas de la costa y la montaña están en resistencia para impedir a la canadiense Goldcorp y a otras compañías mineras de Inglaterra, Japón y Estados Unidos comenzar la explotación de oro en sus localidades. Denuncia que Goldcorp, con aval de presidente municipal de Zumpango, Modesto Pérez Leyva, pretende usufructuar yacimientos de oro en unas 400 hectáreas alrededor del cerro de Huiziltepec, por lo que moradores de este municipio, ubicado a 10 kilómetros de Chilpancingo, Guerrero, se movilizarán para impedirlo. “Golcorp explotará los yacimientos durante dos decenios con una concesión que le otorgó el gobierno federal en el ejido de Carrizalillo. El empresario León Vejar compró en años recientes más de 400 hectáreas para iniciar la explotación y se construyó un helipuerto para un aparato de la empresa Helicópteros Atlantis, que, casi a diario, sobrevuela los cerros de Huiziltepec, Xochiltepec y Tompisquicio”, añade la responsable.

En Acapulco, Guerrero, pescadores de la laguna de Tres Palos, municipio de Acapulco, demandan al gobierno vigilancia para evitar la pesca con métodos prohibidos e impedir las descargas residuales de zonas habitacionales, además de vigilar que los recursos entregados a líderes pesqueros lleguen a todos los destinatarios. Los habitantes de la comunidad de San Pedro Las Playas, asentada junto a la laguna, esperan la llegada de las lluvias dado que la pesca desciende hasta el 70% durante el estiaje.

Lunes 11

Al cumplirse año y medio de la extinción de LyFC, el SME radicaliza su protesta y en la movilización realizada en Melchor Ocampo y Marina Nacional, en la Ciudad de México, en las inmediaciones de lo que fueron las oficinas centrales de LyFC, participan alrededor de 1.500 ex trabajadores electricistas, según datos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF). Durante la actividad se produce un enfrentamiento entre ex trabajadores y granaderos, con saldo de cuatro vehículos particulares incendiados y una camioneta propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) volteada; hay dos reporteros y varios transeúntes golpeados. La movilización sigue con una marcha hasta Gobernación, donde hay otro conato de violencia en medio de gas lacrimógeno, y termina en el Zócalo, donde, según versiones de los ex trabajadores, les son lanzadas por la policía dos bombas del mismo gas; una cae en la plancha y otra al interior del metro, donde el químico se dispersa por toda la estación y provoca que los usuarios salgan atropelladamente. La dependencia capitalina indica que, de los cuatro automóviles incendiados, nadie todavía se habría presentado a denunciar los daños.

En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, los grupos oficialistas del ejido San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, han amenazado, según versiones de ejidatarios de la Otra Campaña, con “agarrar” a los defensores de derechos humanos y a las personas que acudan de manera solidaria. Si bien los abogados de los cinco indígenas presos no han dejado de realizar su trabajo, es un hecho que lo hagan bajo riesgo. No hace mucho, defensores de la costa chiapaneca fueron encarcelados en ejercicio de su labor, un ataque extensivo a los observadores civiles y de la Otra Campaña, a la prensa tanto alternativa como comercial y, potencialmente, a los propios turistas, a los mismos que tanto se ensalza oficialmente y que acuden en gran número al balneario, más ahora que se aproxima un periodo vacacional. Las amenazas se justifican con el argumento de que esos “extranjeros” serían los causantes del “problema”.

En Acapulco, Guerrero, el gobernador Ángel Aguirre Rivero se compromete a respetar los acuerdos que tomen los comuneros de Cacahuatpec y los integrantes del Cecop. En una reunión celebrada en la casa diocesana de Acapulco, en la que participan miembros del Cecop, así como el arzobispo de la ciudad Carlos Garfías Merlos, Aguirre Rivero destaca que los proyectos productivos, de educación e infraestructura que su administración impulsará en la zona donde se pretende edificar la presa, en la zona rural de Acapulco, no estarán condicionados a que los comuneros aprueben el proyecto en el río Papagayo.

Productores cafetaleros de Veracruz marchan en esta capital para exigir al gobierno federal que libere 550 millones de pesos del programa de fomento a la producción que están retenidos desde el 2010, y aseguran que la Sagarpa pretende recortar a la mitad el apoyo al sector en el 2011.

Integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero informan que agentes de la PGR, en “contubernio” con el gobierno que encabeza Ángel Aguirre Rivero, detuvieron al profesor Jair Mendoza Bello cuando impartía clases en la escuela primaria de la comunidad Chacalapa, municipio de Juan R. Escudero, por haber participado en manifestaciones de normalistas en el 2007.

En ciudad Juárez, Chihuahua, la Fiscalía General del Estado (FGE) reporta que una joven de entre 20 y 25 años de edad fue “localizada sin vida en una casa abandonada de la colonia Vistas de Zaragoza hoy [lunes 11] a las 8:10 horas”. La joven recibió golpes en todo el cuerpo y fue hallada con su pantalón y ropa interior debajo de las rodillas, por lo que peritos de la FGE creen que fue atacada sexualmente, lo cual aún deberá ser corroborado en la necropsia.

Activistas de *Greenpeace* despliegan una manta de cien metros cuadrados con la leyenda “¿Nuclear?, no gracias”, en el nuevo edificio del senado de la República para demandar a los legisladores que rechacen la generación de electricidad con energía nuclear, tal como propone la Estrategia Nacional de Energía (ENE) 2011-2025. La organización advierte que en el contexto actual de cambio climático, agravado por la crisis nuclear en las centrales de Fukushima y Onagawa, en Japón, las autoridades del sector energético, diputados y senadores han hecho un frente común de defensa y promoción de la energía nuclear. Frente a esto, los activistas lanzan un mensaje a la comisión de legisladores que visitó recientemente la planta nucleoelectrónica de Laguna Verde, en el que les pide descartar en la ENE el uso de tecnologías peligrosas como la nuclear, porque no mitigan las emisiones de gases invernadero ni los efectos del cambio climático y, además, son peligrosas.

Martes 12

Este martes son hallados 32 cuerpos más en las fosas clandestinas del municipio de San Fernando, Tamaulipas, con los cuales se incrementó a 120 el número de cadáveres exhumados en el ejido La Joya, aunque la PGR reportó que eran 116. Los cuerpos son trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) de Matamoros, Tamaulipas, ubicado a 120 kilómetros de distancia de San Fernando, donde serán sujetos a necropsias con la finalidad de conocer las causas de las muertes y a pruebas de ADN que permitan establecer su identidad.

Un total de 15 cadáveres son encontrados en diversas fosas clandestinas en los estados de Sinaloa y Sonora, 12 de ellos en el municipio de Ahome, y los tres restantes en la ciudad de Nogales, como parte de la jornada de violencia relacionada con el crimen organizado, así como reportaron autoridades ministeriales en ambas entidades.

Juan Vásquez Mejía, presidente del comisariado de bienes comunales de Santiago Textitlán, denuncia que más de 21 mil habitantes del municipio están incomunicados y sin electricidad porque sus rivales del poblado vecino de San Pedro el Alto bloquearon la carretera y derribaron postes hace una semana. En conferencia de prensa, el representante señala que ambos municipios de la Sierra Sur de Oaxaca disputan desde el 1950 la posesión de 2.500 hectáreas donde se asientan las rancherías El Chamizal y Río Miel, que, según documentos virreinales, pertenecen a Santiago Textitlán, mientras que la gente de San Pedro intenta invadirlas constantemente.

Miércoles 13

La minería en todas sus formas es una actividad insustentable, depredadora del medio ambiente y de las culturas locales, y está siendo impuesta de forma violenta por las compañías transnacionales que se dedican a esta actividad. Así lo advierten los participantes en el foro “territorio y pueblos indígenas” en la mira de la explotación minera, organizado por diversos colectivos ambientalistas y civiles en la facultad de ciencias políticas y sociales de la UNAM. Uno de los casos abordados es el de la compañía de origen canadiense First Majestic Silver, que obtuvo 35 concesiones para explotar minas de oro y plata en Wirikuta, las que pondrían en grave riesgo a esta región sagrada para el pueblo wixárika.

El Centro Jurídico para los Derechos Humanos (CJDH) informa que solicitó a la CIDH que “analice el caso de Héctor Galindo, ex preso político de San Salvador Atenco, quien estuvo cuatro años recluido injustamente en el penal de máxima seguridad del Altiplano, así como determine la indemnización y emita medidas cautelares que correspondan”, pues el abogado, al cual se le sigue otro proceso, es víctima de actos de “intimidación”. En conferencia de prensa, Rebeca Ramos Duarte, coordinadora general del CJDH, detalló que la solicitud fue presentada el 27 de diciembre y añade que existen “muchas posibilidades que sea admitida”. Añade que al centro jurídico le preocupan particularmente dos aspectos, es decir lograr que se hagan cambios legales para que se elimine la figura de secuestro equiparado, pues se ha utilizado para “criminalizar la protesta social”, y que se establezcan mecanismos legales para que cuando se comentan “errores judiciales” haya forma de reparar el daño y exigir disculpas públicas.

En Hermosillo, Sonora, cerca de 300 integrantes del Movimiento Ciudadano por la Defensa del Agua, conocido también como “No al Novillo”, así como indígenas yaquis, bloquean en forma intermitente la carretera Mazatán-Hermosillo, en la zona central del estado, en rechazo a la construcción del acueducto Independencia, que, a partir del 2012, llevará agua a Hermosillo desde la presa El Novillo. En el kilómetro 28 de dicha vialidad, a un costado de donde se instalan los tubos del acueducto, los manifestantes señalan que podrían volver en unos meses para destruirlos.

El jefe de gabinete del gobierno del estado, Javier Aguilera García, reconoce que la tortura no se ha erradicado de las corporaciones policiacas del estado y que hay “casos aislados”, pero asegura que no se tolerará más. El *ombudsman* local, Omar Williams López Ovalle, declara que del 2005 a la fecha se han documentado cuatro expedientes que involucran a policías municipales.

Jueves 14

En San Fernando, Tamaulipas, las excavaciones en la zona rural tienen como resultado la localización de 23 cadáveres más que se encontraban en fosas clandestinas; el secretario de gobierno del estado, Morelos Jaime Canseco, informa que, con este hallazgo, suma a 145 el total de los cuerpos encontrados del pasado 6 de abril a la fecha.

En Ciudad Victoria, Tamaulipas, más de 100 policías estatales bloquean la entrada al complejo estatal de seguridad pública para reclamar incrementos salariales, pago de viáticos y dotación de armamento y chalecos antibalas, pues desde hace meses no se ha respondido a sus peticiones. En el plantón participan elementos de las policías rural y preventiva del estado, quienes exigen la destitución del general de división retirado Ubaldo Ayala Tinoco. Los policías rurales sostienen que sólo les dan una pistola calibre 38 y un salario de entre 3.600 y 6 mil pesos mensuales.

A 19 años de la reforma al artículo constitucional 27, el 40% de la tierra ejidal de México ha sido vendida y ahora es propiedad privada, así como asegura César Cantú Martínez, socio director del Centro de Estudios, Investigación e Innovación Tecnológica de la Valuación para América Latina (CEIITVAL). Desde el 1992, los cambios constitucionales han propiciado la privatización de tierras y el éxodo de campesinos a las ciudades, así como el rentismo de áreas dedicadas a la agricultura y de ranchos alquilados.

Ejidatarios tzeltales de San Sebastián Bachajón adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, y abogados del centro de derechos humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) interponen un amparo en contra de la construcción de una caseta de cobro y un “centro de respuesta y atención a emergencias” del Instituto de Protección Civil y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatales, en tierras de uso comunal del ejido San Sebastián. El recurso, presentado el 2 de marzo, fue negado por el juez séptimo de distrito en Tuxtla Gutiérrez, Héctor Martín Ruiz Palma,

no obstante que dichas obras “afectan tierras de uso común sin consentimiento y autorización de la asamblea general de ejidatarios y ejidatarias, lo que vulnera su derecho al territorio como pueblo indígena y las leyes mexicanas en la materia”. Por ello, la defensa presentó un recurso de revisión.

La Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) denuncia que elementos de la Armada de México detuvieron en la zona norte del Golfo de Cortés a doce indígenas cucapá –entre ellos un menor de edad–, que se encontraban supuestamente realizando actividades de pesca en aguas prohibidas y fueron puestos a disposición de la PGR.

El pasado 13 de abril, a las 18 hrs., una lancha de pescadores fue detenida por marinos, inspectores de Profepa y de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) con el argumento de utilizar el sitio de desembarco de Santa Clara en la región. De tal forma, la presidente de la cooperativa indígena, Mónica González, acompañada por Mónica Sandez y Elías Espinoza, se trasladan en lancha hacia el lugar de la detención de sus compañeros. En respuesta a la acusación de los inspectores de que los indígenas estuvieron utilizando un lugar no autorizado para el desembarco, Mónica González hace referencia a la existencia de un documento oficial que autorizaría a los pescadores a realizar labores en Santa Clara. Las autoridades declaran que desconocían tal acuerdo, por lo que decidieron llevarse a los detenidos. José Narro Céspedes, presidente de la Cocopa, refiere que los indígenas denunciaron haber sido objeto de golpes y culatazos por parte de las autoridades, remitiendo al Ministerio Público Federal de San Luis Río Colorado, en Sonora, a ocho personas, entre ellos un menor, a los cuales se imputaron daños a la nación por un choque de lanchas.

En Chilpancingo, Guerrero, profesores de la normal rural de Ayotzinapa denuncian que los gobiernos federal y estatal los persiguen como delincuentes, los encarcelan “como jamás lo hace con [Joaquín] *El Chapo* Guzmán”, y pretenden acumular resonancia judicial como medida para apagar a las organizaciones sociales en la entidad. En un comunicado difundido con motivo de la aprehensión del profesor Yahir Manzanares Bello, el lunes 11 en el municipio de Tierra Colorada, y de su reclusión en el penal de Iguala, recuerdan que otros maestros han corrido la misma suerte.

En la ciudad de Oaxaca, profesores de la sección 22 del SNTE, de la región de la Sierra, marchan para demandar la presentación con vida de Sergio Bautista Miguel, hijo de uno de sus dirigentes, y de su acompañante, Luis Alberto Santiago Velásquez, desaparecidos el 20 de julio de 2008 durante el gobierno de Ulises Ruiz. Los manifestantes salen de la fuente de Las Ocho Regiones y terminan frente al palacio de gobierno, donde realizan un mitin en el que el secretario general de la sección, Azael Santiago Chepi, demanda agilizar las investigaciones de ese caso y de su compañero desaparecido, Carlos Román Salazar.

Viernes 15

En Morelia, Michoacán, un herido de bala, por lo menos tres personas retenidas, tiroteos, vehículos baleados, bloqueos carreteros y la amenaza de “levantarse en armas” contra la autoridad local es el saldo de un enfrentamiento entre comuneros del municipio de Cherán con presuntos talamontes de la comunidad de Capácuaro. Los hechos comienzan alrededor de las 5:30 hrs. en el punto conocido como “El Calvario”, ubicado en la meseta purépecha, donde unos cien comuneros detienen tres camionetas cargadas con madera y retienen a por lo menos tres ocupantes de esas unidades.

En Culiacán, Sinaloa, agentes de la policía ministerial del estado adscritos al municipio de Ahome realizan un paro de labores en protesta porque no se les ha pagado el bono federal de 3.600 pesos y por excesivas jornadas de trabajo. Los inconformes señalan que sólo les llegó la mitad del bono, a pesar de que las autoridades se habían comprometido a pagarlo íntegro a más tardar el 5 de abril.

Martín Robles Armenta, subprocurador general de justicia, se reúne con los uniformados y les pide suspender la protesta; las negociaciones no prosperan.

El Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (SUTUACM) niega que dicha organización carezca de toma de nota, como afirmó la rectora de esa casa de estudios, Esther Orozco Orozco, a quien el sindicato acusa de retener ilegalmente, desde hace más de medio año, las cuotas sindicales, “con el propósito de menguar” al gremio. La secretaria de organización del SUTUACM, Melania Hernández Ramírez, afirma que el sindicato está reconocido por la junta local de conciliación y arbitraje, por lo que las autoridades universitarias saben a quién deben entregar esos recursos, lo cual no se ha hecho desde septiembre pasado.

Sábado 16

En Pachuca, Hidalgo, alrededor de 6 mil perredistas de los municipios de Actopan, Francisco I. Madero, Ixmiquilpan, Mixquiahuala, San Salvador y Progreso de Obregón, abandonan las filas del PRD en protesta por los “excesos” cometidos por la corriente de “los Chuchos”, que impuso a sus simpatizantes en la definición de candidatos para los comicios del próximo 3 de julio. Durante el consejo electivo estatal del PRD, donde quedó integrada la lista de candidatos a presidentes municipales, regidores y síndicos procuradores, militantes inconformes de este órgano político anuncian su separación del “sol azteca” por considerar que la corriente del actual dirigente nacional, Jesús Zambrano Grijalva, resultó beneficiada en el proceso.

Domingo 17

En Guadalajara, Jalisco, al término de cuatro mesas de diálogo, miembros del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmajero, así como autoridades federales de la Conagua y de la SG, acuerdan que la mesa resolutive en la que se decidirá si se suspende la construcción de la presa El Zapotillo –municipio de Cañadas de Obregón– se realizará en mayo próximo. En las primeras cuatro mesas de diálogo se analizan aspectos legales, jurídicos, técnicos y ambientales, entre otros, referentes a la oposición contra la presa y a las razones para erigirla en la comunidad Temacapulín.

Lunes 18

Más de 40 mil integrantes del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) obtienen un incremento salarial del 4.4%, más 1.4 en prestaciones, luego de varios días de negociaciones con Teléfonos de México (Telmex). El acuerdo con la empresa de Carlos Slim evita el estallamiento de la huelga, programada para el 25 de abril. Francisco Hernández Juárez, líder del STRM y de la UNT, expresa que la negociación salarial se presenta en un contexto complicado, a causa de la problemática que enfrenta la telefónica con *Televisa* y *Tv Azteca*. “La negociación es compleja por el alto grado de agresividad del duopolio televisivo” y sus intentos de “destruir a Teléfonos de México y, por consiguiente, a nuestra fuente de empleo”, declara.

En Ciudad Victoria, Tamaulipas, unos 25 policías municipales protestan frente a la alcaldía de esta capital para exigir mejores sueldos, prestaciones y equipo de trabajo. La manifestación concluye en menos de una hora, pues los uniformados se entrevistan con funcionarios colaboradores del presidente municipal Miguel González Salum, con quienes pactan la mejora de sus condiciones laborales.

En San Luis Potosí, servidores públicos afiliados al Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras del Gobierno del Estado (SITTGE) se plantan frente al palacio de gobierno para reclamar por los despidos de seis trabajadores de la alberca general Mariano Arista, del instituto de vivienda y del centro de las artes de San Luis Potosí y de la secretaría de finanzas estatal. En un comunicado, el SITTGE afirma que “aunque hemos sido escuchados por el secretario de gobierno, Marco Antonio Aranda Martínez, en los hechos siguen las agresiones del oficial mayor José Carrera Martell”.

En San Luis Potosí, el Consejo Ciudadano Pro Defensa del Río Huichihuayán acusa a la empresa productora de jugos Citrofrut de ser la principal contaminante del citado arroyo, pues vierte ahí sus aguas residuales, en perjuicio de más de 50 mil habitantes de los municipios de Axtla de Terrazas, Xilitla, Coxcatlán y Huehuetlán. La organización sostiene que hay personas afectadas por conjuntivitis, luego de tener contacto con agua contaminada del río, por lo que exige la intervención de la Conagua, de la Profepa y de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM) de Jalisco.

En Chilpancingo, el profesor Yahir Manzanares Bello, liberado la madrugada del sábado 16 del penal de Iguala, luego de pagar tres fianzas por más de 110 mil pesos por ataques a las vías de comunicación, asegura en conferencia de prensa que el gobierno federal persigue a egresados de la generación Lucio Cabañas Barrientos de la normal rural de Ayotzinapa, los mismos que, en el 2007, impulsaron movilizaciones para obtener plazas de maestro. Considera que la campaña de los gobiernos federal y estatal contra egresados de la normal de Ayotzinapa “es para tenernos presionados, para acallar a quienes se manifiesten”.

Martes 19

La JBG “Hacia la Esperanza”, de la zona selva fronteriza, con sede en La Realidad Trinidad, perteneciente al *caracol* 1 “Madre de los caracoles del mar de nuestros sueños”, Chiapas, denuncia que Patricio Domínguez Vázquez, base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), fue agredido en su propiedad ejidal en Monte Redondo, Frontera Comalapa, por autoridades ejidales, acusado de cargos falsos, secuestrado y entregado a la agente del ministerio público Ángeles Daniel Zúñiga Ballinas, quien inmediatamente determinó encarcelarlo en el penal de Motozintla. La JBG exige la liberación inmediata del preso zapatista. La JBG “Hacia La Esperanza” también denuncia públicamente agresiones y provocaciones por parte de las autoridades ejidales de Monte Redondo, junto con los policías del mismo ejido; afiliados al PAN, al PRD y al Partido Verde Ecologista de México (PVEM); y Ángeles Daniel Zúñiga Ballinas, que trabaja en el ministerio público de Frontera Comalapa, sosteniendo que los mismos “agreden y les provocan a nuestros compañeros bases de apoyo zapatistas del ejido Monte Redondo, municipio autónomo de Tierra y Libertad”.

La senadora Rosario Ibarra envía un escrito a la titular de la PGR, Marisela Morales, en que le pide citar a declarar a Luis Echeverría Álvarez para dar cauce a la demanda que ella misma interpuso contra el ex presidente de la República por su responsabilidad en la desaparición forzada de su hijo Jesús Piedra Ibarra, hace 36 años. En el oficio, la también presidente del comité Eureka precisa verse obligada a formular esa petición, porque ya transcurrieron ocho meses desde que presentó su denuncia contra Echeverría sin que se hayan averiguado las pruebas que ella misma ofreció. En entrevista, Ibarra explica que nada se ha hecho por tratarse del ex presidente al que, primero los gobiernos del PRI, y ahora los del PAN, cubren “con el manto de la impunidad”.

El campesino Javier Torres Cruz, integrante de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Benítez (OCESP), Guerrero, es asesinado a balazos la tarde del

lunes 18, en un ataque por el cual su hermano Felipe Torres resultó herido, así como informa la organización no gubernamental Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco). La ONG denuncia en un comunicado que el campesino ecologista de 30 años, “después de dos años y medio de feroz hostigamiento y persecución, fue asesinado el lunes a las 5:30 de la tarde por sicarios al servicio de Rogaciano Alba Álvarez”. Según el Tadeco, Torres Cruz fue emboscado “cerca de La Morena [municipio de Petatlán]. Su hermano Alejandro Torres relató que Javier se trasladaba desde Puerto de la Mosca, ubicado entre las comunidades de La Morena y La Barranca, en la sierra de Petatlán, cuando fue balaceado por un grupo de hombres de apellido Arreola, al servicio de Rogaciano Alba”, quien actualmente está preso en el penal del Altiplano por delincuencia organizada, delitos contra la salud y portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército.

En Oaxaca, Azael Santiago Chepi, líder de la sección 22 del SNTE, reprueba que el gobierno de Oaxaca pretenda usar a la policía estatal para enfrentar protestas sociales, como ocurrió el lunes 18 en el municipio de Santa Lucía del Camino, conurbado a esta capital. Ese día, la corporación desalojó a manifestantes, y el gobernador Gabino Cué Monetagudo advirtió que su administración actuará contra quienes realicen bloqueos, con el argumento de que no se puede permitir que las movilizaciones afecten a terceras personas.

Miércoles 20

El proyecto de dictamen de los grupos parlamentarios del PRI y el PAN en la cámara de diputados sobre la reforma a la Ley de Seguridad Nacional abre la posibilidad de que el presidente de la República solicite y declare la intervención de las fuerzas armadas en contra de “movimientos o conflictos de carácter político, electoral, de índole social o del trabajo”, cuando considere que “constituyan un desafío o amenaza” a la seguridad interior. El proyecto de dictamen a la minuta del senado que modifica la citada ley también incluye la atribución a militares, marinos y agentes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) para intervenir comunicaciones telefónicas previa orden judicial, realizar tareas de espionaje y seguimiento a presuntos miembros de la delincuencia organizada e integrar expedientes confidenciales, incluso de carácter político. Asimismo, como lo solicitó el secretario de Defensa, general Guillermo Galván Galván, a la comisión del ramo, el proyecto concede a las fuerzas armadas restringir la circulación de mercancías y vehículos, revisar las pertenencias de particulares en las calles y requerirles información con “cualquier herramienta que resulte necesaria”, pero señala que el mando de esas acciones recae en el ministerio público. Además, el proyecto prevé que tanto el Cisen como militares y marinos puedan contar con informantes anónimos y que, para sus actividades de inteligencia y contrainteligencia, “puedan hacer uso de cualquier método de recolección de información, sin afectar en ningún caso los derechos humanos y las garantías para su protección”.

En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, acompañados por activistas mexicanos, doce centroamericanos que pretenden llegar a Estados Unidos inician en la frontera con Guatemala el “Viacrucis del Migrante”, que durante tres días se escenificará en los puntos de mayor riesgo para los indocumentados, así como informa Rubén Figueroa, representante de la organización “Paso a Paso hacia la Paz”. “El objetivo es repudiar la masacre de San Fernando, Tamaulipas, y exigir que se castigue a los responsables; protestar por la persecución de los migrantes en territorio nacional; que se castigue la trata de personas y sean retiradas las garitas del Instituto Nacional de Migración [INM], porque quienes ingresan sin documentos no son delincuentes”, afirma Figueroa. Manifiesta que el viacrucis busca simbolizar el sufrimiento de los migrantes a su paso por México, y sensibilizar a las autoridades de que deben respetar sus garantías individuales, “porque lo único que buscan son oportunidades de trabajo que en sus países no encuentran”.

Mientras los ejidatarios tzeltales de San Sebastián Bachajón insisten en la liberación de sus cinco compañeros presos desde febrero, el gobierno de Chiapas publicita el establecimiento de una caseta de cobro “conjunta” de los ejidos San Sebastián Bachajón y Agua Azul y la entrega de la misma a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP). Aunque la finalidad anunciada sea la turística, la decisión ha sido tomada sin autorización de la asamblea ejidal de San Sebastián, gracias a que el juez séptimo en Tuxtla Gutiérrez negó el amparo a los indígenas de la Otra Campaña contra dicha caseta en sus tierras ejidales. En el sitio se registra una fuerte presencia de la policía y de militares.

En Zacatecas, más de 3 mil mineros suspenden totalmente las actividades en el yacimiento de oro y plata a cielo abierto Peñasquito, en protesta porque la empresa canadiense Gold Corp se niega, desde hace seis meses, a pagarles las horas extras y el bono mensual de productividad y utilidades. Lázaro Garza, secretario de seguridad social de la sección 305 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), informa que por esos “problemas que venimos acarreado” se ha acordado en asamblea parar todas las labores del complejo minero.

En Oaxaca, desconocidos se introducen durante la madrugada en las instalaciones de *Radio Huave* –una de las emisoras comunitarias más antiguas del país, situada en el municipio de San Francisco del Mar–, hurtando su equipo de transmisión. El director de la estación, Leonel Gómez Cruz, denuncia el robo del transmisor, computadoras, mezcladoras, micrófonos y otros artículos. Recuerda que la radio comunitaria indígena, que transmite en el 94.1 de frecuencia modulada desde hace casi ocho años, mantiene una línea editorial apegada a las luchas comunitarias y la defensa de los derechos humanos y apoya a diversos colectivos de radio en diferentes partes del país, “con carencias, pero con deseos de un mundo mejor”.

En Villahermosa, Tabasco, unos 250 internos del penal Las Palmas, ubicado en el municipio de Cárdenas, a 45 kilómetros de esta capital, se amotinan para exigir la destitución del director de la prisión, Marcos Fernando Romero, a quien acusan de vender alcohol, extorsionar a algunos reos y aplicar castigos “injustos”. En el intento por sofocar la revuelta, la cual dura ocho horas, tres policías resultan lesionados –entre ellos una mujer–, al igual que un reo. En el operativo participan 200 agentes antimotines y militares.

En la Ciudad de México, una vez más, el conflicto en Santa Bárbara por el rechazo a la construcción del Foro Estadio Azcapotzalco levanta los ánimos de los habitantes del poblado, los cuales impiden el ingreso de maquinaria al deportivo Reynosa. Los vecinos se habían opuesto a la instalación de la playa artificial en Azcapotzalco, por lo que se iniciaron negociaciones en la sede del GDF, donde al final se acordó el permiso para la adecuación del espejo de agua para el programa “Vamos a la Playa”, en la Alameda Norte.

Jueves 21

La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) manifiesta su protesta por la deportación “de manera rápida y arbitraria” del periodista italiano Gianni Proietti, colaborador del diario italiano *Il Manifesto*. Esta organización urge al gobierno mexicano a reexaminar su decisión, que “fue tomada sin tener en cuenta los procedimientos jurídicos en vigor”. RSF asevera que el periodista italiano, residente desde hace 18 años en México, “no habría sido notificado previamente de su obligación de abandonar el territorio ni de las razones de esta decisión. Sus derechos a solicitar asistencia consular de su país o de un abogado e informar a sus allegados no le fueron respetados, en violación de los acuerdos internacionales de protección de los derechos humanos, ratificados por México y contenidos en la ley mexicana de inmigración”.

Viernes 22

Los fieles de la parroquia de Juquilita, en el municipio de Santa Catarina Juquila, Oaxaca, escenifican un viacrucis durante el cual reviven hechos dolorosos por la situación de inseguridad y violencia que se viven en esa entidad y en todo el país. Un ejemplo es la tragedia que afecta a los familiares de 10 oaxaqueños desaparecidos en julio del año pasado en Tamaulipas y el sufrimiento de los migrantes centroamericanos en su travesía hacia Estados Unidos.

En Chilpancingo, Guerrero, una mujer muere y dos personas resultan lesionadas durante un enfrentamiento entre comuneros tlapanecos de las localidades de Tilapa y Tierra Colorada, municipio de Malinaltepec, en la zona de la costa-montaña alta, a causa de una disputa por 40 hectáreas, así como informa el director de la policía ministerial estatal, Fernando Monreal Leyva.

Sábado 23

Iglesias cristianas evangélicas llaman a que “México abandone la violencia” y exhortan a quienes la ejercen a “redimirse y establecer un pacto para respetar la vida de quienes determinan abandonar ese tipo de actividades y seguir a Jesucristo”. En el contexto de la décimo cuarta “Marcha de Gloria”, miles de integrantes de esas iglesias oran para que en el país prevalezcan la paz y el respeto a la vida de todos, asegurando que quienes se dedican a actividades ilícitas pueden enmendar su camino.

En Ecatepec, vecinos de Ciudad Azteca exigen al gobierno del estado de México y de este municipio gestionar la introducción de drenaje pluvial en la avenida Central y el bulevar Los Teocallis, debido a que las obras del *mexibús* Ciudad Azteca-Tecámac y las recientes precipitaciones ocasionaron anegaciones en varias casas. El regidor Francisco Cabrera Hermosillo expone que entre las deficiencias detectadas en los trabajos se encuentra la falta de drenaje pluvial y de puentes peatonales.

En el municipio chiapaneco de Chicomuselo, contra la voluntad de los ejidos donde se instaló, la compañía de origen canadiense Blackfire explota minas de barita, con lo que ha provocado enfermedades en personas y animales por la contaminación que sus métodos de trabajo generan en el agua, mientras que sus responsables han ordenado el asesinato de quienes se oponen a sus actividades, así como informa José Luis Abarca, integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), el cual aclara que la empresa causa daños a las comunidades de Grecia y Nueva Morelia desde el 2005, año en que se instaló con promesas de ayuda que sólo se cumplieron a medias.

Domingo 24

En los tres años recientes, 3.7 millones de mexicanos han ingresado a la pobreza alimentaria, por lo que se estima que la quinta parte de la población carece de recursos para cubrir la canasta básica alimentaria, así como advierte Genaro Aguilar, investigador del Instituto Politécnico Nacional (IPN). De acuerdo con cifras del Banco de México, de 2008 a la fecha el incremento en el precio de los alimentos ha sido del 21.2%, lo cual representa un riesgo para la población en pobreza alimentaria, la misma que, en el 2008, amontaba a 19.5 millones de personas, de acuerdo con un análisis del Observatorio de Política Social y Derechos Humanos. Hasta junio del 2009, las personas sin un ingreso mínimo de 1.040 pesos, en el ámbito urbano, y de 773, en el rural, no podían satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, con lo cual pasaron a la pobreza alimentaria.

En la Ciudad de México, varias mujeres y un hombre ingresan con altavoces a la catedral metropolitana e interrumpen la liturgia del domingo de pascua con consignas contra el cardenal Norberto Rivera. Las mujeres llevan cojines debajo de la ropa y se dicen embarazadas. Una de ellas afirma ser la elegida de las profecías y que es necesario destruir a la iglesia católica para que nazca un nuevo dios. Elementos de seguridad de la catedral las detienen con el apoyo del presidente del Colegio de Abogados Católicos de México, Armando Martínez, quien golpea en la cabeza al único hombre presente entre las manifestantes. Durante la trifulca, cae al suelo una imagen de cerámica de la virgen María que llevaban consigo las mujeres.

Lunes 25

En la Cámara de Diputados el PRI afirma estar dispuesto a asumir el costo político de aprobar la Ley de Seguridad Nacional que, a propuesta de la Sedena, concede al presidente de la República la atribución de sofocar con el ejército a los movimientos sociales, políticos, laborales y electorales, así como la de decretar el estado de excepción en entidades o regiones del país. Junto con el PAN, el PRI confirma que, desde la junta de coordinación política, “gestiona” con las comisiones de defensa, seguridad pública, justicia, derechos humanos y gobernación para que sólo una o dos de ellas voten el dictamen y el resto se allanen, esto para tratar de que se vote esta misma semana. No obstante, en la mesa directiva, se considera difícil que el documento entre al pleno en el actual periodo de sesiones, debido a la inconformidad que ha generado en el resto de las bancadas. En conferencia de prensa, Alfonso Navarrete Prida (del PRI) declara que su grupo parlamentario está dispuesto a asumir los costos políticos de votar una reforma que facilita al ejecutivo el uso de tropas cuando considere que estuviere en riesgo la seguridad interior. Incluso, el priísta acota que, si en los operativos se cometen abusos contra la población civil, ello será responsabilidad de la autoridad que los aplique y no resultado de una ley.

La iniciativa de Ley de Seguridad Nacional no pretende dar armas al ejército para violar los derechos humanos de los ciudadanos, ni para someter movimientos electorales, sociales o laborales, según señala un análisis de la Sedena. En respuesta a las versiones difundidas en diversos medios de comunicación acerca de la referida ley, que está siendo discutida en el seno de la cámara de diputados, el estudio de la secretaría enfatiza que “es falso” que la iniciativa en cuestión, con el pretexto de dar más instrumentos al gobierno federal para responder a una situación en la que la seguridad interior esté en peligro, sienta las bases de un estado militar.

La JBG “Corazón Céntrico de los Zapatistas delante del Mundo”, desde el *caracol* de Oventik, en los Altos de Chiapas, solicita ayuda a organizaciones y colectivos solidarios y de la otra campaña para tres mujeres, bases de apoyo del EZLN en la comunidad Pikote, municipio oficial de Sitalá, quienes fueron víctimas de un grave incendio el pasado 18 de abril. Cerca de las 12 hrs. de la noche, en Pikote, se consumieron tres viviendas, una de las cuales era la casa de salud autónoma; allí se perdieron medicamentos y equipo para aplicar vacunas. Otra construcción servía de cocina, y la otra para un pequeño negocio de abarrotes, el cual se quemó completamente. “Era el único sustento que tenían las compañeras, además viven solas, y solas buscan la forma para sobrevivir y seguir adelante en nuestra lucha zapatista”, informa la junta.

En Chilpancingo, Guerrero, comuneros de Tierra Colorada, en disputa por tierras con habitantes de Tilapa, emplazan al ayuntamiento de San Luis Acatlán para que libere a cuatro vecinos detenidos, acusados de asesinar presuntamente a una mujer el viernes 22. Domingo Martínez Altamirano, abogado de los comuneros, advierte que ellos “ya acordaron que bajarán con machetes hasta la cabecera municipal para liberarlos” y explica que los indígenas fueron detenidos el sábado 23 en la comunidad de Tlascalixtlahuaca de San Luís Acatlán.

Martes 26

Campeños de la comunidad Candelaria El Alto, municipio de Venustiano Carranza, Chiapas, adherentes de la Otra Campaña, denuncian agresiones e invasión de tierras por miembros de la Organización Campesina Emiliano Zapata-Región Carranza (OCEZ-RC), quienes cuentan con la complicidad de las autoridades, al menos por omisión. El 6 de abril, unas 50 personas “armadas y encapuchadas” de San José La Grandeza invadieron tierras de Candelaria, con el respaldo de miembros de la OCEZ de las comunidades El Puerto y El Paraíso, quienes permanecen en la propiedad.

A un día de cumplirse un año del asesinato de Beatriz Alberta Cariño Trujillo –activista ultimada cuando participaba en una caravana por la paz en San Juan Copala, Oaxaca– su viudo, Omar Esparza Zárate, es detenido por elementos de la Policía Federal (PF) en la jurisdicción de Tehuacán, Puebla, con el argumento de que el vehículo en el que viajaba estaba reportado como robado. Esparza Zárate, líder regional del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), mientras viajaba con Fernando Urbano, presidente del centro de apoyo comunitario “Trabajando Unidos”, en una jeep Liberty Sport con placa TKC-66-43 del estado de Oaxaca, es interceptado por elementos de la PF en un tramo de la autopista hacia esa entidad, quienes los mantienen allí por más de una hora para luego trasladarlo a él a la comisaría de Tehuacán. El activista declara al ministerio público su desconcierto, pues la unidad en la cual viajaba pertenece al gobierno de Oaxaca, el cual la puso a disposición de su organización para el traslado de testigos que tienen que declarar por el asesinato de Bety Cariño.

Miércoles 27

El ejército federal inicia un proceso de militarización en la frontera de Chiapas con Guatemala, en particular en la región de los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo y Jiquipilas. Para ello se anuncia la creación de dos nuevas bases militares, cada una con 600 elementos. El comandante de la séptima región militar en la entidad, Salvador Cienfuegos Zepeda, quien sostiene haber impuesto una política de comunicación más “cercana” con la prensa local, expresa, en Chiapas, que la estrategia forma parte de una nueva etapa de combate al narcotráfico, el cual ha mostrado tener presencia y actividad en la zona, “con todo lo que lleva aparejado”. La base castrense en Nuevo Chiapas, Jiquipilas, se creará con tropas procedentes de Oaxaca, mientras la de Chicomuselo (que, según otras versiones, será en Frontera Comalapa) podría constituirse con elementos militares ya establecidos en Chiapas. El general Cienfuegos revela que él mismo propuso trasladarlos de la base militar de San Quintín en la selva Lacandona, aunque otras fuentes aseguran que el nuevo destacamento fronterizo contará con tropas desplegadas actualmente en Marqués de Comillas, en el confín entre la selva y el río Usumacinta.

En la Ciudad de México, un total de quince activistas e inmigrantes indocumentados inician una huelga de hambre en las afueras del palacio de San Lázaro, donde permanecen en plantón desde el martes 26 en demanda de que los diputados aprueben la nueva Ley sobre Migración, que podría votarse en el pleno actual. Rubén Figueroa, integrante del Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM) y de la caravana “Paso a Paso hacia la Paz”, exhorta a los legisladores a analizar seriamente la iniciativa y darle cauce lo más pronto posible.

En Acapulco, el Tribunal Unitario Agrario (TUA) 41 determina anular la asamblea del 28 de abril de 2010 en la comunidad de La Concepción, en la que se aprobó la edificación del proyecto hidroeléctrico La Parota de la CFE, así como informan el centro de derechos humanos de la Montaña Tlachinollan y el Cecop. Con esta resolución se emite una quinta sentencia en contra de la paraestatal.

En la ciudad de Oaxaca, el senador perredista Armando Contreras Castillo, respaldado por legisladores del PAN, PRI, PT y Convergencia, presenta al pleno de esa cámara la iniciativa de ley de amnistía para liberar a 17 zapotecas de San Agustín Loxicha, sentenciados por supuestamente pertenecer al EPR. El legislador expone que la iniciativa busca decretar la amnistía en favor de las personas en contra de quienes se haya ejercido o pudiera ejercerse la acción penal ante tribunales federales por delitos cometidos como resultado de los hechos violentos ocurridos entre el 28 de agosto de 1996 y el 31 de diciembre de 2000.

Aumenta el conflicto que se generó luego de que la administración de Marcelo Ebrard decidiera desincorporar del patrimonio de la ciudad de México a 7.2 hectáreas del deportivo Reynosa y la Alameda Norte, y a 81 mil metros cuadrados de un predio ubicado en avenida Granjas, en beneficio del grupo Salinas. La jornada de conflicto deja un saldo de cuatro personas remitidas al ministerio público y el destrozo de la puerta principal de la delegación Azcapotzalco. Por la noche, alrededor de 300 personas realizan una marcha de antorchas en contra de las autoridades. A partir de la tarde, el deportivo Reynosa y la Alameda Norte quedan resguardados por policías por orden de la demarcación. Por la mañana, alrededor de 100 vecinos toman dos autobuses de la red de transporte de pasajeros para dirigirse al centro de la delegación. Los manifestantes argumentan que “la falta de respuesta a sus demandas” los orilló a movilizarse. Desde hace meses los ciudadanos han demandado, sin éxito, una copia del contrato del fideicomiso de la arena Ciudad de México y la derogación del acuerdo publicado en la *Gaceta Oficial* en el que se autoriza la desincorporación de 7.2 hectáreas de espacio público.

En Monterrey, Nuevo León, decenas de comerciantes, cuyos locales fueron destruidos por la autoridad municipal, se manifiestan mediante el cierre de avenidas aledañas a la presidencia municipal. El edil ofrece reubicar a los que comprueben que vendían “productos legales”.

Jueves 28

Amnistía Internacional (AI) advierte que el proyecto de reforma a la Ley de Seguridad Nacional, actualmente en la cámara de diputados, “debilitará gravemente” la labor de protección a los derechos humanos y podría generar una figura legal que incrementará aún más las violaciones a las garantías individuales en el país. Mediante un comunicado, la organización lamenta que dicha iniciativa le facilite al ejecutivo la utilización de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública que no le corresponden, con el pretexto de las afectaciones a la seguridad interior.

Desde diciembre del 2009, cuando marinos dieron muerte a Arturo Beltrán Leyva en la ciudad de Morelos, 150 muchachos de esta ciudad han sido ejecutados, así como informa Jessica Rivera, integrante de la Red por la Paz y la Justicia, al iniciar el congreso “Los Jóvenes en la Emergencia Nacional”. “Tenemos sus nombres y apellidos, sus familiares se han acercado a esta organización para denunciar que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) los acusó de pertenecer al crimen organizado y tras esa acusación no se investigó ni se castigó a los responsables de sus muertes”, declara Rivera en la sede del SME, donde se desarrolla el encuentro. Los participantes inician el congreso con la lectura de una carta enviada por el poeta Javier Sicilia –cuyo hijo Juan Francisco y seis personas más fueron localizados muertos hace exactamente un mes en esta ciudad– en la que los felicita de que se reúnan “para buscar los mejores caminos que nos ayuden a salir de este infierno cotidiano”.

El Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General (CCRI-CG) del EZLN anuncia que el próximo 7 de mayo participará en la “Marcha Nacional por la Justicia y Contra la Impunidad”, convocada por el poeta Javier Sicilia y que lo hará marchando a través de los suburbios indígenas de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, desde el Centro Indígena de

Capacitación Integral (CIDECI), en el camino a Chamula, hasta la plaza central o “de la Paz”. Además, convoca a los adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona a sumarse a esta movilización en sus distintas localidades, tanto en México como en otros países, y “a los pueblos originarios de México, agrupados en el Congreso Nacional Indígena [CNI], a que apoyen esta lucha por terminar la pesadilla de sangre que envuelve nuestros suelos”.

Estudiantes universitarios participan en el arranque de la conformación de los comités estudiantiles del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), encabezado por el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador. En la facultad de economía de la UNAM, decenas de jóvenes llaman a abrir un debate en las instituciones de educación pública del país sobre el “Proyecto Alternativo de Nación” impulsado por López Obrador.

Los presidentes de México, Chile, Colombia y Perú, todos de derecha, conforman la Alianza del Arco del Pacífico Latinoamericano, “más poderosa” que el Mercosur –integrado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay– por unir a “demócratas” en favor del librecomercio y los derechos humanos, según declara el presidente de México, Felipe Calderón. En la cumbre de Lima, los mandatarios de dichos países destacan que esta alianza representa un mercado de 200 millones de personas, con volúmenes de importación y exportación superiores a los del Mercosur y que plantea la meta de avanzar en la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas.

Se han presentado más de 40 mil quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) por parte de usuarios del servicio de energía eléctrica por cobros excesivos, errores de facturación y los llamados “recibos locos”, los cuales están llegando a los domicilios de consumidores domésticos con montos a pagar que, en algunos casos, rebasan los 20 mil o 30 mil pesos y, en situaciones extremas, han llegado hasta los 100 mil.

Viernes 29

En Tecámac, Estado de México, aproximadamente 300 choferes de 10 líneas del autotransporte urbano de pasajeros ocupan las instalaciones del ministerio público en esta localidad y bloquean la carretera federal México-Pachuca para exigir a la PGJE detener la ola de asaltos a sus unidades y los frecuentes secuestros de los que son víctimas. Desde diciembre de 2010 han ocurrido 20 retenciones de conductores o directivos del transporte, varios de los cuales han sido asesinados, y, cada semana, ocurren alrededor de 70 asaltos a sus unidades, sobre todo cuando circulan por los municipios de Ecatepec, Tecámac, Zumpango, Teotihuacán y Tizayuca, entre otros, así como denuncia César Rojo Guerrero, asesor de los conductores.

Académicos, estudiantes y trabajadores administrativos de la UACM entregan al consejo universitario de esa casa de estudios una solicitud de revocación del mandato de la rectora Esther Orozco Orozco, apoyada por más de 3 mil firmas, al considerarla la única forma para resolver la crisis que vive la institución. Lo anterior sucede durante el foro universitario previo a las sesiones del consejo, en la sede Casa Libertad, en Iztapalapa, durante el cual integrantes de la comunidad universitaria exponen sus posiciones sobre la problemática, en medio de un clima de división y, por momentos, de tensión entre quienes exigen la destitución de la rectora, lanzando gritos de “fuera Orozco”, y quienes la apoyan, recriminando las críticas de los primeros.

En la Ciudad de México, las detenciones de cuatro personas por el conflicto sobre el foro estadio Azcapotzalco fueron “una criminalización de la protesta social”, asegura Manuel Fuentes Muñoz, presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y representante legal de los acusados. Explica que, pese a que no existieron señalamientos directos en contra de los ciudadanos –ya que ningún policía o trabajador de gobierno los identificó como los responsables de los hechos,

la procuraduría capitalina recurrió a la “autoría indeterminada” para iniciar un proceso en su contra. El artículo 26 del código penal local señala que dicha figura se aplica “cuando varios sujetos intervengan en la comisión de un delito y no pueda precisarse el daño que cada quien produjo”.

Con el grito “¡Mi cuerpo es mío, mío, mío, mío!”, decenas de universitarias celebran el cuarto aniversario de la aprobación de la ley que permite la interrupción legal del embarazo en las primeras 12 semanas de gestación en el Distrito Federal. En las islas de Ciudad Universitaria, en la UNAM, se realiza el cuarto festival “Por el Derecho a Decidir”, donde las actividades se vuelven fiesta, pues en la capital “las mujeres son libres de elegir sobre sus cuerpos y su maternidad”. Cientos de universitarios se congregan en este espacio para escuchar charlas sobre salud sexual y reproductiva, métodos anticonceptivos, sexo protegido, infecciones de transmisión sexual e interrupción legal del embarazo.

Sábado 30

Grupos de activistas comprometidos con la campaña “Para Detener las Balas, Pintemos las Fuentes”, tiñen de rojo las de la explanada del palacio de Bellas Artes y la de la Diana Cazadora en el paseo de la Reforma, Ciudad de México. En ambos casos, usan pintura vegetal y actúan por sorpresa entre la 13 y las 15 hrs. de la tarde, para promover el apoyo popular a la marcha del próximo domingo 8 de mayo contra la violencia que desangra al país. En Bellas Artes, los activistas utilizan envoltorios de papel de china llenos de pintura vegetal, para una fusión lenta del agua con el colorante, lo que les permite alejarse sin ser molestados por la policía. Para su sorpresa, varios policías los ayudan a apresurar la mezcolanza, cuando con escobas intentan extraer del agua las bolsitas, dándole a estas una intensidad y una textura más brillante.

El martes 19 de abril –durante el periodo de asueto de la semana santa– un vehículo militar, con ocho soldados uniformados y portando sus armas reglamentarias, transitó por Ciudad Universitaria, en la UNAM, Ciudad de México. La institución informó de este hecho apenas el viernes 29, en un comunicado, explicando que la camioneta de la Sedena ingresó porque transportaba un perro muerto, al que se le practicó una necropsia en la facultad de medicina veterinaria y zootecnia. Sin embargo, el día del suceso los militares fueron vistos por integrantes del Comité Estudiantil Metropolitano (CEM), quienes tomaron un video que ya subieron a internet, acompañado de la denuncia de que ese hecho constituiría “una violación” a la autonomía universitaria.

La planilla sindical incluyente del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (Stunam) denuncia que “se continúan encontrando inconsistencias” en los resultados del proceso para la elección del comité ejecutivo para el periodo 2011-2014, que representará a los más de 30 mil afiliados a ese gremio. José Castillo Labra, quien encabezó esa planilla, asevera que al menos 700 boletas del proceso electoral –realizado el lunes 25 y el martes 26– se enviaron “de manera indebida a diferentes casillas”, ya que en algunos puntos el padrón de trabajadores no coincidió con el número de votos emitidos.

Glosario de siglas

AI	Amnistía Internacional
CCRI-CG	Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General
Cecop	Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa

CEDH	Comisión Estatal de Derechos Humanos
CEITVAL	Centro de Estudios, Investigación e Innovación Tecnológica de la Valuación para América Latina
CEM	Comité Estudiantil Metropolitano
Cemda	Centro Mexicano de Derecho Ambiental
Cencos	Centro Nacional de Comunicación Social
CERSS	Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados
CETEG	Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero
CFE	Comisión Federal de Electricidad
CIDECI	Centro Indígena de Capacitación Integral
CIDH	Corte Interamericana de Derechos Humanos
Cisen	Centro de Investigación y Seguridad Nacional
CJDH	Centro Jurídico para los Derechos Humanos
CNDH	Comisión Nacional de los Derechos Humanos
CNI	Congreso Nacional Indígena
CNTE	Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
Cocyp	Central de Organizaciones Campesinas y Populares
Cocopa	Comisión de Concordia y Pacificación
Comed	Comisión de Mediación
Conagua	Comisión Nacional del Agua
CONANP	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
Conapesca	Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca
Conlactraho	Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar
ENE	Estrategia Nacional de Energía
EPR	Ejército Popular Revolucionario
EZLN	Ejército Zapatista de Liberación Nacional
FARC	Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
FGE	Fiscalía General del Estado
Frayba	Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas
FSM	Frente Sindical Mexicano
GDF	Gobierno del Distrito Federal
GOPAC	Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción
H.I.J.O.S.	Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio
INM	Instituto Nacional de Migración
IPN	Instituto Politécnico Nacional
ISSSTE	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
JBG	Junta de Buen Gobierno
JFCA	Junta Federal de Conciliación y Arbitraje
LyFC	Luz y Fuerza del Centro
MAIZ	Movimiento Agrario Indígena Zapatista
MIA	Manifestación de Impacto Ambiental
MMM	Movimiento Migrante Mesoamericano
Morena	Movimiento Regeneración Nacional
OCESP	Organización de Campesinos Ecológicos de la Sierra de Petatlán y Coyoaca de Benítez
OCEZ-RC	Organización Campesina Emiliano Zapata-Región Carranza
OMCT	Organización Mundial contra la Tortura
PAN	Partido Acción Nacional
PGJE	Procuraduría General de Justicia del Estado
PGR	Procuraduría General de la República
PF	Policía Federal
PRD	Partido de la Revolución Democrática

PRI	Partido Revolucionario Institucional
Profeco	Procuraduría Federal del Consumidor
Profepa	Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
PT	Partido del Trabajo
PVEM	Partido Verde Ecologista de México
REMA	Red Mexicana de Afectados por la Minería
RSF	Reporteros Sin Fronteras
Sagarpa	Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Sedena	Secretaría de la Defensa Nacional
SEG	Secretaría de Educación en Guerrero
SEGAM	Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental
SG	Secretaría de Gobernación
Semarnat	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Semefo	Servicio Médico Forense
SEP	Secretaría de Educación Pública
Sepomex	Servicio Postal Mexicano
SINPEF	Sistema de Información Nacional de Personas Extraviadas y Fallecidas no Identificadas
SITTGE	Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras del Gobierno del Estado
SME	Sindicato Mexicano de Electricistas
SNTE	Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
SNTMMSRM	Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana
SSP	Secretaría de Seguridad Pública
SSPDF	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal
STAUS	Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora
STRM	Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana
SUTUACM	Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Stunam	Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México
Tadeco	Taller de Desarrollo Comunitario
Telmex	Teléfonos de México
TUA	Tribunal Unitario Agrario
UACM	Universidad Autónoma de la Ciudad de México
UNAM	Universidad Nacional Autónoma de México
Unorca	Unión de Organizaciones Regionales Campesinas Agrícolas
UNT	Unión Nacional de Trabajadores
Uson	Universidad de Sonora

Realizada por el Comité de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura de México del Observatorio Social de América Latina (OSAL-CLACSO).

Integrantes: Mariana López de la Vega y Fernando Munguía Galeana.

Fuentes: diarios La Jornada y El Universal.

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales



Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais



OSAL

Observatorio Social de América Latina
Publicación electrónica

Cronología del Conflicto Social

México

Mayo de 2011

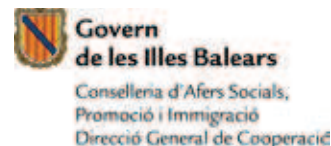
Editada en julio



Agencia Sueca
de Desarrollo Internacional



Agencia Noruega para la
Cooperación al Desarrollo



**Govern
de les Illes Balears**

Conselleria d'Afers Socials,
Promoció i Immigració
Direcció General de Cooperació

El Observatorio Social de América Latina [OSAL] cuenta con el apoyo de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional [ASDI], la Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo [NORAD] y la Agencia de Cooperación Internacional de las Islas Baleares [ACIB].

Documento de trabajo N° 923

*Realizado por el Comité de Seguimiento y Análisis
del Conflicto Social y la Coyuntura de
México*



Integrantes

Massimo Modonesi y Lucio F. Oliver
(coordinadores)
Mariana López de la Vega
Fernando Munguía Galeana

Fuentes

Diarios La Jornada y El Universal

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Se autoriza la reproducción de los artículos en cualquier medio a condición de la mención de la fuente y previa comunicación al director.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en el documento incumbe exclusivamente al autor o a los autores firmantes y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

El **Observatorio Social de América Latina** (OSAL) constituye una iniciativa del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinada a la promoción de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, las dinámicas de participación y los repertorios de acción de los movimientos sociales y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado es uno de los resultados de este trabajo de relevo y registro llevado a cabo en el marco del programa. Se trata de un escrito en el que se sintetizan las principales acciones de movilización y protesta social y las medidas políticas llevadas a cabo durante el mes indicado en el país referido.

La cronología presentada ha sido elaborada por uno de los **Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana** que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo la coordinación del equipo de investigación mexicano, que forma parte de la red institucional de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.

Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana

PAÍS	INSTITUCIÓN	COORDINACIÓN
Argentina y Uruguay	PIMSA (Argentina)	María Celia Cotarelo
Bolivia	CIDES – UMSA	Dunia Mokrani Chávez Pilar Uriona Crespo
Brasil	LPP - UERJ	Roberto Leher
Chile	DI - UARCIS	Juan Carlos Gómez Leyton
Colombia	Escuela Nacional Sindical	Guillermo Correa Montoya
Costa Rica	IIS - FCS - UCR	Sindy Mora Solano
Ecuador	Centro de Investigaciones CIUDAD	Mario Unda
Guatemala	FLACSO Guatemala	Simona Yagenova
México	FCPS - UNAM	Massimo Modonesi Lucio Fernando Oliver Costilla
Panamá, El Salvador, Nicaragua y Honduras	CELA “Justo Arosemena” (Panamá)	Marco A. Gandásegui (h)
Paraguay	Centro de Documentación y Estudios	Quintín Riquelme
Perú	Instituto de Estudios Peruanos	Ramón Pajuelo Teves
República Dominicana y Puerto Rico	CES “Padre Juan Montalvo” (Rep. Dominicana)	Octavio Figueroa
Venezuela	PROVEA	Marco Antonio Ponce

México

Cronología del conflicto social

Mayo de 2011

Domingo 1

En la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores los sindicatos independientes del país se oponen a la reforma laboral y denuncian las políticas económica y de seguridad implementadas por el gobierno de Felipe Calderón. La movilización, convocada por la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y el Frente Sindical Mexicano (FSM), es encabezada por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), organizaciones campesinas, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y decenas de gremios y organismos sociales. Al acto acuden más de 30 mil sindicalizados que llegan al Zócalo coreando consignas contra el presidente Felipe Calderón y el secretario del Trabajo, Javier Lozano. El reclamo en contra de esta administración se da en todos los tonos. En el templete, los dirigentes condenan la “obsesión” del gobierno panista por vulnerar los derechos laborales, el haber convertido a México en el paraíso de los bajos salarios, ser la “presidencia del desempleo” y querer cerrar con broche de oro el sexenio reformando en el interés del empresariado la Ley Federal del Trabajo. En la movilización confluyen telefonistas, tranviarios, maestros, pilotos, sobrecargos de aviación, trabajadores de la industria nuclear, mineros, técnicos petroleros, integrantes de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, representantes de centrales obreras mundiales como la Federación Internacional de Trabajadores de la Industria Metalúrgica (FITIM), de Nafin, la cooperativa Pascual, Monte de Piedad, bomberos, miembros del Partido Comunista, campesinos de San Salvador Atenco y los electricistas, que ya los esperaban en el Zócalo. Los trabajadores llevan ataúdes de cartón para sepultar la iniciativa. Francisco Hernández Juárez, dirigente de la UNT, declara prácticamente enterrada la reforma laboral. En el acto se lee una declaración del Tribunal Internacional de Libertad Sindical: “observamos con alarma no sólo la falta de mejora, sino también el agravamiento y profundización de la violación sistemática de los derechos fundamentales del trabajo en México, en medio de un clima de violencia generalizada”.

Por temor a la inseguridad, sólo en cinco de los 43 municipios del estado de Tamaulipas se efectúan marchas para conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores, las cuales no duran más de 90 minutos. Aunque en San Luis Potosí no hay un desfile oficial, agrupaciones independientes organizan las protestas, a pesar de que las corporativas habían anunciado en la semana que no marcharían por “razones de seguridad”. Las marchas de los trabajadores en los estados de Chihuahua, Veracruz, Sinaloa y Guerrero se enfocan en expresar el repudio a la situación de violencia, a la guerra declarada por el presidente Felipe Calderón al crimen organizado y a la reciente reforma laboral. En Acapulco, Guerrero, unos 7 mil trabajadores divididos en 21 contingentes marchan por las principales calles del centro para exigir al presidente de la República y a la secretaria de Turismo, Gloria Guevara Manzo, reconsiderar la decisión de convertir en itinerante el Tianguis Turístico. En Chihuahua, las protestas de los trabajadores independientes, que se manifiestan en marchas paralelas al desfile oficial, expresan el repudio a la situación de violencia que se vive la entidad y a la guerra declarada por el presidente al crimen organizado. Contingentes de sindicatos independientes y organizaciones civiles en Jalapa, estado de Veracruz, denuncian la política económica del gobierno federal y exigen el cese de la guerra entre militares y narcotraficantes con la campaña “No Más Violencia”, así como el cierre de la central nucleoelectrónica de Laguna Verde. En Culiacán, estado de Sinaloa, los contingentes más numerosos son los sindicatos de Telefonistas de la República Mexicana, de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa –que a las demandas laborales y económicas agregan la de mayor seguridad– y de los jornaleros agrícolas. Asimismo, decenas de miles de trabajadores sindicalizados marchan

en los estados de Aguascalientes, Nayarit, Yucatán, Puebla, Michoacán, Campeche, Guerrero, Tabasco, Baja California Sur, Sinaloa, San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas y Querétaro para rechazar las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, repudiar los incrementos mensuales a los combustibles y a los productos de la canasta básica y para exigir mejoras salariales. Entre las más numerosas destacan las de Aguascalientes, con 40 mil participantes; Campeche, con 23 mil; Puebla, Yucatán y Nayarit, con 20 mil; Guerrero, con 12 mil; Michoacán y Tamaulipas con 10 mil. Sinaloa reporta 9 mil 500 asistentes; Chiapas, 5 mil; Veracruz, 9 mil; Tabasco, 4 mil, Chihuahua, 2 mil; San Luis Potosí, 2 mil; Baja California Sur, 2 mil y Querétaro, mil. En la capital de Puebla, las agrupaciones sindicales, campesinas y populares locales adheridas a la UNT y al Frente de Organizaciones Sociales, Sindicales, Campesinas, Estudiantiles y Populares de Puebla marchan en rechazo a la reforma laboral. Al término de la marcha, la disidencia del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) critica al gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, su sometimiento total a la lideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo, quien hace unas semanas firmó un convenio con la actual administración estatal para la aplicación de programas federales de educación. En Jalisco, trabajadores de Honda de México, encapuchados con bolsas de cartón, recorren la glorieta La Normal hasta la plaza de armas por temor a ser despedidos por la transnacional y exigiendo libertad de asociación sindical. Por su parte, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) llama a los sindicatos independientes y organizaciones obreras a incluir en sus pliegos petitorios la presentación con vida de sus compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos el 25 de mayo de 2007 en Oaxaca.

Lunes 2

Agrupaciones internacionales encabezadas por destacados académicos e intelectuales de varios países se solidarizan con las “movilizaciones por la paz y la justicia y contra la militarización impuesta por la llamada guerra antidrogas”, convocadas en México para el 5 y 8 de mayo próximos por el poeta Javier Sicilia y amplios sectores afines. Mediante una carta, integrantes del Tribunal Permanente de los Pueblos, el Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento, la Asociación Internacional de Migrantes, la Asociación Internacional de Juristas Democráticos, la Asociación de Abogados del Pueblo, la Red de Alternativas a la Impunidad y a la Globalización del Mercado y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz manifiestan su solidaridad con la marcha que saldrá desde la ciudad de Cuernavaca, estado de Morelos. El documento incluye los nombres de importante intelectuales, entre quienes destacan, entre otros, Noam Chomsky; el secretariado del Tribunal Permanente de los Pueblos; de la Fundación Lelio Basso (Roma, Italia); Jeanne Mirer, de la International Association of Democratic Lawyers; Iván Forero, de Amnistía Internacional-España y Miguel Concha Malo, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria. “Reafirmamos el dictamen emitido por el Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento, señalando que la militarización ha propiciado crímenes de estado recurrentes, como los de San Fernando, Tamaulipas, y Durango, dentro de un marco creciente de impunidad e ilegitimidad, incluyendo el genocidio en curso contra los migrantes en tránsito en México y los intentos legislativos actuales de profundización del modelo de terror estatal contra estos y otros sectores [...] además nos solidarizamos con la resistencia activa a estas medidas promovidas por defensores de los derechos de migrantes, dentro del marco del primero de mayo, en México y Estados Unidos”, destaca la misiva.

En la ciudad de Oaxaca, estado de Oaxaca, Abraham Ramírez Vásquez, indígena zapoteca de Santiago Xanica considerado el primer preso político del gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, sale libre del reclusorio regional de San Pedro Pochutla al no ser encontrado culpable de los delitos que se le imputaron, después de seis años, tres meses y 15 días.

En Tepic, estado de Nayarit, 2.500 alumnos de cuatro planteles del Colegio Nacional de Educación

Profesional Técnica (Conalep) se quedan sin clases debido a que sus 120 profesores inician una huelga al mediodía, en demanda de homologación salarial y advierten que no regresarán a laborar hasta que se les pague “lo justo”.

La rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), Esther Orozco Orozco, deberá rendir cuentas ante los diputados locales el próximo 17 de mayo. Así lo acuerdan, por unanimidad, los integrantes de las comisiones de Educación y de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Legislativa, quienes destacan que la funcionaria tendrá que exponer a los legisladores la situación académica, administrativa y presupuestal de esa institución y resumir el desplegado que mandó publicar en los primeros días de abril, cuando criticó el rumbo que llevaba la UACM después de 10 años de existencia.

Martes 3

Javier Sicilia convoca a la marcha-caminata por la Paz con Justicia y Dignidad, que el próximo jueves saldrá de la ciudad de Cuernavaca para concluir en el Zócalo de la Ciudad de México el domingo 8. “Hemos insistido en que sea una marcha-caminata de silencio; el silencio es un arma moral y no violenta que habla, no es el silencio de los sepulcros, sino el grito de indignación de los vivos que luchan para que no haya más sepulcros inútiles”, afirma el escritor en la convocatoria dirigida a toda la ciudadanía, sectores y entidades sociales. De acuerdo con el itinerario de la marcha, los participantes se reunirán desde muy temprano en la glorieta de la Paloma de la Paz, en la ciudad de Cuernavaca, para partir a mediodía hacia Coajomulco, donde pernoctarán. Al día siguiente, el contingente partirá con rumbo a Topilejo, para ser recibidos el sábado en San Pedro Mártir y otras colonias del sur de la ciudad de México. Por la tarde, la marcha llegará a Ciudad Universitaria, donde se realizará un mitin con organizaciones solidarias. Finalmente, el domingo, caminarán al Zócalo, donde culminará el acto. La ruta que se seguirá en la ciudad de México será: Insurgentes-avenida Universidad-Río Churubusco hasta División del Norte-Eje Central-avenida 5 de Mayo-Plaza de la Constitución.

En Cuernavaca, estado de Morelos, La Red por la Paz y la Justicia exige al Congreso local que antes del 13 de mayo haga comparecer al procurador de Morelos, Pedro Luis Benítez Vélez, para que responda por los 400 asesinatos perpetrados desde que llegó al cargo en 2009; asimismo demanda a la instancia que antes del día 20 resuelva someter a juicio político al gobernador Marco Antonio Adame Castillo, por la inseguridad y violencia que padece la entidad. El colectivo de organizaciones que dio lugar al nuevo movimiento social morelense –integrado el primero de abril, tras la convocatoria del poeta Javier Sicilia a la primera marcha por la paz– también insta a los diputados locales de todos los partidos a resolver las demandas planteadas para mejorar la seguridad e impartición de justicia, en vez de dar continuidad a las corruptelas y conductas omisas de la clase política.

En el mitin para recordar el quinto aniversario de la incursión policiaca en Atenco, Bárbara Italia Méndez, una de las 26 mujeres que fueron detenidas, violadas y torturadas sexualmente por agentes, asevera: “a cinco años de los hechos, nuestro grito es el mismo: justicia”. Ante unas 200 personas, la mujer señala: “tenemos cinco años enfrentando cara a cara al Estado; seguimos en la lucha, de pie y, a pesar de la tortura y la cárcel, no nos vencerán”. Frente al edificio de la Procuraduría General de la República (PGR) se manifiestan alrededor de 200 integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), de Amnistía Internacional (AI), del SME y de Triquis de Oaxaca, entre otras agrupaciones que exigen justicia para las mujeres de Atenco. Ahí, al frente y junto a las mujeres agredidas sexualmente, están los dirigentes del FPDT, Ignacio del valle y su esposa, Trinidad Ramírez, quienes junto con otros integrantes de esa organización y machete en mano reclaman justicia.

El consejo nacional del SNTE aprueba por unanimidad un incremento directo al salario del 4.75% y 1.3% en prestaciones, retroactivos al primero de enero, para más de un millón de maestros de educación básica. De igual forma, el SNTE acepta un incremento salarial del 4.2% para el personal de apoyo y asistencia a la educación y un aumento del 0.5% para el fortalecimiento del salario. Para los niveles medio superior y superior –el personal homologado—acuerda un aumento del 3.9% directo al sueldo.

En Cherán, estado de Michoacán, los habitantes de la comunidad se preparan para enfrentar al crimen organizado: toman las calles y colocan barricadas en cada esquina, mientras la policía municipal es desarmada y se forma un cuerpo de seguridad con casi 100 jóvenes. Con decenas de mantas y cartulinas en las calles, los habitantes piden al presidente Felipe Calderón Hinojosa que se instale un cuartel militar en la región, “porque han sido muchos muertos, heridos y desaparecidos en tres años”. De las 27 mil hectáreas de bosques, sólo 8 mil no han sido afectadas por la tala ilegal. Los barrios de San Francisco, San Marcos, Santa Inés y San Pedro, que integran la cabecera municipal, donde habitan aproximadamente 16 mil personas, se organizan y reciben adiestramiento de ex militares, que también capacitarán a la nueva policía. El pueblo de Cherán cuenta para protegerse con sólo cuatro rifles AR-15 y algunas pistolas, escopetas y carabinas que les quitaron a los policías municipales. Indican que desconocieron al presidente municipal priísta, Alberto Bautista Chapina, porque –aseguran– está involucrado en robo de madera, y exigen que sea investigado.

Miércoles 4

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y diversas organizaciones de la otra campaña en el Distrito Federal, Estado de México, Puebla y Tlaxcala llaman a los adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona para movilizarse los próximos 7 y 8 de mayo junto con la Caminata-Marcha por la Paz con Justicia y Dignidad, que se inicia el jueves en Cuernavaca, Morelos. “No podemos permitir que nuestros jóvenes sigan siendo arrastrados a la muerte”, sostiene la convocatoria. Las organizaciones llaman a todos los integrantes de la otra campaña a reunirse en la Ciudad de México, ante el Hemiciclo a Benito Juárez, el sábado 7 a las 12 hrs. Los convocantes harán un mitin y formarán posteriormente brigadas para repartir volantes, a la vez que llamarán a sumarse el domingo, desde el Monumento a la Revolución, a la marcha que vendrá de Ciudad Universitaria.

El Movimiento de Unidad Social por un Gobierno del Pueblo (Musocgp), integrado por más de un centenar de organizaciones campesinas, obreras, sindicales y de juristas de tendencia progresista, que apoyan la candidatura de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, anuncia que se sumarán a la convocatoria que diversas organizaciones civiles, a propuesta del escritor Javier Sicilia, llevarán a cabo el próximo fin de semana para exigir justicia y protestar por la violencia, la impunidad y la corrupción que vive la nación.

En Hermosillo, estado de Sonora, padres de los menores que murieron en el incendio de la guardería ABC protestan frente a los juzgados federales y el palacio de gobierno para exigir justicia en la víspera de que se cumplan 23 meses de que 49 niños perecieron en la conflagración ocurrida el 5 de junio de 2009 en dicha estancia infantil, subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El conflicto en la UACM incrementa de tono luego de la clausura simbólica de las oficinas de la rectora Esther Orozco Orozco, ubicadas en el plantel Del Valle, por académicos, estudiantes y trabajadores administrativos. Al filo de las 12:30 hrs., al grito de “¡Fuera Orozco! ¡Fuera Orozco!

¡Orozco, vas a caer!”, integrantes de la comunidad universitaria colocan a las puertas de la rectoría un gran cartel en el que advierten: “Ante la ofensiva de Esther Orozco Orozco, más de 3 mil universitarios unidos por la defensa del modelo educativo de la UACM. ¡Si tienes dignidad vete ya!”. La asamblea universitaria, integrada por estudiantes, profesores y trabajadores administrativos, informa que continuará sus actividades cotidianas. Por su parte, integrantes del Consejo Universitario (CU) informan que empezaron el análisis del diagnóstico enviado por la rectora por medio de la comisión de organización de ese órgano.

Jueves 5

Al dar inicio la Caminata-Marcha por la Paz con Justicia y Dignidad, en la ciudad de Cuernavaca, estado de Morelos, el poeta Javier Sicilia reivindica el movimiento como una expresión social contra la violencia desatada por una absurda guerra que la sociedad no pidió y que ya ha cobrado 40 mil vidas. Sicilia subraya que “con esta manifestación se muestra que la sociedad ha comenzado a dejar el miedo y exige a las autoridades omisas y a los criminales poner alto a la violencia”. Afirma que el movimiento no tiene como propósito derribar al gobierno o las autoridades de los tres niveles, sino convocarlas a rehacer el tejido social, porque los integrantes del crimen organizado ya han infiltrado las estructuras gubernamentales y “actualmente hay un estado cooptado que necesariamente se tiene que reformar desde adentro”. Durante la primera conferencia de prensa ofrecida al comenzar la movilización, Sicilia sostiene que el gobierno debe entender que la seguridad nacional “no sólo es la violencia, no sólo es el ejército en las calles; la seguridad nacional es educación y cultura, tantas cosas que no han hecho las autoridades”.

Miles de personas protestan contra la inseguridad en Monterrey, estado de Nuevo León; Irapuato, estado de Guanajuato, y Chilpancingo, estado de Guerrero, en solidaridad con la Caminata-Marcha por la Paz con Justicia y Dignidad, que inicia en Cuernavaca, estado de Morelos. En Irapuato, marchan unas 600 personas mientras los dirigentes sociales anuncian que el domingo se unirán a la caravana que salió de Cuernavaca, como parte de la jornada de protesta. En Chilpancingo, medio centenar de integrantes de organizaciones sociales realizan un mitin en apoyo al llamado del escritor Javier Sicilia contra la violencia.

Viernes 6

Al encabezar un mitin en la comunidad de San Miguel Topilejo, en Tlalpan –primera parada de la Caminata-Marcha por la Paz con Justicia y Dignidad en la Ciudad de México–, el poeta Javier Sicilia condena la corrupción de gobernantes y políticos que han permitido que el país se haya descompuesto a tal grado que la sociedad vive horrorizada por la violencia. “Es tanto el dolor acumulado que cada quien trae sus propias historias de horror”, agrega Sicilia, quien censura el “envilecimiento alcanzado que ya no pertenece a lo humano sino a lo demoníaco”. Ante más de un millar de manifestantes, Sicilia ratifica la urgencia de reestructurar las instituciones del país, “porque prácticamente ya no hay Estado para detener una situación inaceptable para la sociedad”.

En Chilpancingo, estado de Guerrero, durante el sepelio de Quetzalcóatl Leija Herrera, presidente del Centro de Estudios y Proyectos para el Desarrollo Humano Integral asesinado el miércoles pasado en esta localidad, organizaciones civiles, defensores de los derechos humanos, académicos y activistas del movimiento lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual (LGBTTTI) demandan esclarecer el hecho. En un comunicado dirigido al gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero, a las instituciones de procuración de justicia, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Coddehum) y al congreso local, los demandantes señalan: “expresamos públicamente nuestra enérgica condena e indignación por el asesinato de nuestro compañero y

luchador social, líder del movimiento LGBTTTI y defensor de los derechos humanos y de la diversidad sexual en el estado, quien fue víctima de un crimen de odio por homofobia”.

En la ciudad de Oaxaca, estado de Oaxaca, pobladores del municipio de San José del Progreso agrupados en la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO), bloquean los accesos de la mina La Trinidad, propiedad de la compañía mexicano-canadiense Cuzcatlán, para demandar que se cancele la concesión y su cierre definitivo. Bernardo Vásquez Sánchez, portavoz de los inconformes, asegura que la operación de la mina causa destrucción y despojo de ríos, bosques, reservas de minerales, saberes tradicionales, formas de organización, autonomía, tranquilidad, salud, libertad y hasta la existencia de su pueblo.

En Morelia, estado de Michoacán, más de 600 profesores y la organización de Familiares de Maestros en Lucha por el Empleo se plantan indefinidamente frente al palacio de gobierno para exigir 54 millones de pesos que se adeudan a 1.800 docentes eventuales y deploran que, en el diálogo con las autoridades, no haya visos de arreglo al problema que ya tiene varios años. A su vez, las autoridades educativas estatales aseguran que carecen de presupuesto para pagar nóminas extraordinarias, pues la mayoría fueron contratados por la sección 18 del SNTE.

Sábado 7

En San Cristóbal de Las Casas, estado de Chiapas, por lo menos 15 mil zapatistas con pasamontañas, incluidos miembros de su comandancia general, marchan en silencio y en apoyo a la Marcha por la Paz con Justicia y Dignidad y para protestar por la guerra del gobierno federal contra el crimen organizado. En lo que representa la movilización más numerosa en esta ciudad desde hace 17 años, los zapatistas portan cientos de cartulinas y mantas para exigir “alto a la guerra de Calderón” y “no más sangre en nuestro suelo mexicano”. En un comunicado leído en la Plaza Catedral –donde concluye la marcha– por el comandante David, el EZLN afirma que la lucha actual es “entre quienes quieren la vida y quienes quieren la muerte”, y “nosotros elegimos luchar por la vida, es decir, por la justicia, la libertad y la paz”. Provenientes de diferentes regiones, hombres, mujeres y niños se reúnen desde las 8 hrs. en el Centro Indígena de Capacitación Integral Fray Bartolomé de Las Casas (Cideci Las Casas) ubicado en el poniente de la ciudad. Con una bandera mexicana y otra rojinegra al frente, la marcha comienza a las 15 hrs. en la calle César Augusto Sandino de la colonia América Libre, en el poniente y, después de una hora, el primer contingente arriba a la Plaza Catedral. Una hora después llega el último grupo y, a las 17:15 hrs., inicia el mitin con la entonación de los himnos nacional y zapatista y la presencia en el estrado de los comandantes David, Tacho, Guillermo y muchos más. Algunas personas habían previsto la posible presencia del subcomandante Marcos, el cual, sin embargo, no apareció públicamente, aunque el comunicado esté firmado por él. La movilización concluye con la lectura del mismo en tzotzil por parte del comandante Guillermo y, pasadas las 18 horas, los zapatistas emprenden el regreso a sus comunidades.

En su segunda jornada de “intervenciones urbanas” en apoyo a la Marcha por la Paz con Justicia y Dignidad, el colectivo Paremos las Balas, Pintemos las Fuentes tiñe el agua de 16 espacios arquitectónicos. Las fuentes son “intervenidas” con pintura vegetal de color rojo grosella para denunciar simbólicamente que el agua que brota del fondo de la tierra se tiñe de sangre al pasar por las “narcofosas”¹. Entre otras: la fuente de la Corregidora, en la plaza de Santo Domingo; la de los Coyotes, en el Jardín Centenario de Coyoacán y la del Auditorio Nacional, en Paseo de la Reforma. También son pintadas las seis que se encuentran distribuidas a lo largo del camellón de Álvaro Obregón, en la colonia Roma y las dos de la Plaza de la Solidaridad, junto a la Alameda Central, así

¹ Fosas comunes clandestinas, en las que han sido encontrados cuerpos de personas presuntamente asesinadas por miembros del crimen organizado, en particular por las organizaciones del narcotráfico.

como el espejo de agua del Centro Cultural Universitario y el que se localiza frente a la rectoría de la UNAM.

Miles de personas marchan en Acapulco, estado de Guerrero; Ciudad Juárez, estado de Chihuahua; Morelia, estado de Michoacán y en la capital de Zacatecas para manifestarse contra la violencia, la inseguridad y los homicidios ocurridos en la llamada “guerra contra el narcotráfico”. Unas 6 mil personas pertenecientes a 200 iglesias y congregaciones cristianas marchan por la Costera de Acapulco para orar por la seguridad, la paz y la libertad de los habitantes de ese estado, además de hacer un llamado a las familias a vivir con respeto a los valores sociales. En Ciudad Juárez, alrededor de 800 personas pertenecientes a 15 organizaciones realizan una marcha de silencio para exigir justicia y nuevas estrategias del gobierno en el combate al narcotráfico. Más de 500 personas participan en la capital de Zacatecas en la marcha contra la guerra de Calderón que ha sido convocada por el Frente Zapatista de Liberación Nacional en solidaridad con el movimiento nacional por la paz. Más de 200 integrantes de la otra campaña marchan en Morelia, desde Las Tarascas al palacio de gobierno, en favor de la paz y para apoyar al pueblo de Cherán en su lucha contra la delincuencia.

Profesores de bachillerato e integrantes de la CNTE califican de “absurdo y patético” que el gobierno federal y la Secretaría de Educación Pública (SEP) convoquen a miles de adolescentes a sumarse a las filas de los cuerpos policíacos, acción que refleja el “profundo desconocimiento sobre las metas y proyectos que puede construir la enseñanza y el acceso a un empleo de calidad”.

En la ciudad de Campeche, estado de Campeche, Andrés Manuel López Obrador manifiesta que “la marcha por la paz que encabeza el escritor Javier Sicilia es un movimiento justo”, al asegurar que los mexicanos de todo el país reclaman justicia, paz y una revisión de la estrategia de combate a la violencia e inseguridad. López Obrador subraya que la táctica seguida por el gobierno de Calderón en la lucha contra la delincuencia organizada desde hace cuatro años no ha funcionado.

Al menos 800 jóvenes marchan por calles de la Ciudad de México para exigir la legalización de la marihuana. Los manifestantes salen del Zócalo capitalino rumbo al Monumento a la Revolución, donde efectúan un festival que incluye performances, baile y lectura de poesía. En el contexto del Día Mundial por la Liberación de la Marihuana, que se celebra en 200 ciudades, el contingente camina por la calle de Madero y avenida Juárez, gritando consignas, pero sin que se susciten incidentes durante el trayecto, el cual es acompañado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. La manifestación, convocada por la Asociación Mexicana de Estudios Sobre Cannabis (Ameca), y en la que algunos de los participantes fuman cigarrillos de marihuana, tiene como propósito pedir a las autoridades organizar un debate serio sobre la viabilidad de legalizar el consumo, comercio y producción de la hierba, como señala Leopoldo Rivera Rivera, integrante de la citada organización.

Domingo 8

Al encabezar la concentración en el Zócalo con que concluye la Marcha por la Paz con Justicia y Dignidad, el poeta Javier Sicilia exige la renuncia del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. “Queremos oír un mensaje, con esa renuncia, del presidente de la República, diciendo que sí nos escuchó”, sostiene al comenzar su intervención entre gritos que pronto se tornan en un solo coro: “fuera Calderón, fuera Calderón”. Ante miles de participantes en esta movilización que comenzó el jueves pasado en Cuernavaca, estado de Morelos, Sicilia cuestiona: “¿Por qué se permitió al presidente de la República lanzar al ejército a las calles, en una guerra absurda que nos ha costado 40 mil víctimas y millones de mexicanos abandonados al miedo y la incertidumbre?”. Además critica la pretensión del Congreso Nacional de incluir en la Ley de Seguridad Nacional

facultades para el uso del ejército, porque esta legislación “no puede reducirse a un asunto militar. Asumida así, es y será absurdo. La ciudadanía no tiene por qué seguir pagando el costo de la inercia y la inoperancia del legislativo y sus tiempos convertidos en chantaje administrativo y banal cálculo político”. Durante la concentración, Olga Reyes –a quien le ejecutaron a varios miembros de la familia en Chihuahua– y Patricia Duarte –una de las madres de los niños fallecidos en la guardería ABC de Hermosillo, estado de Sonora– leen el pacto civil surgido de esta marcha que “busca detonar una nueva convivencia y sentar nuevas bases para la legalidad. Las propuestas son el inicio del camino, no son su fin”. Un pacto que contiene un conjunto de exigencias para recomponer el tejido social y detener la violencia, y a cuyo cumplimiento se le dará seguimiento para que los actores involucrados asuman y cumplan el compromiso de instrumentarlo. Para tal efecto, asegura Duarte, se crearán comisiones de la sociedad civil para verificación y sanción –que se conformarán el 10 de junio en Ciudad Juárez– y, como subraya, “en caso de no haber respuesta se emprenderán acciones de resistencia civil y pacífica para lograr el cumplimiento de un suelo mínimo para la reconstrucción de la nación”. Sicilia sostiene que el narcotráfico se debe enfrentar como un problema de salud pública y sociología urbana, y no como un asunto criminal que se confronta con violencia. Condena la postura estadounidense de beneficiarse con el lavado de dinero y la venta de armas, mientras se mantiene el mercado de consumo de droga. Sicilia subraya la importancia del pacto civil a que se ha convocado para reconstruir el tejido social, asumir un compromiso elemental con la paz y para que los jóvenes dejen de ser las víctimas de esta guerra y el ejército una reserva de la delincuencia.

Miles de personas participan en movilizaciones solidarias con la Marcha por la Paz con Justicia y Dignidad, celebradas en casi todo el territorio nacional. La manifestación efectuada en Saltillo, estado de Coahuila, es encabezada por el obispo Raúl Vera, con el cual marchan unas 200 personas, entre ellas familiares de personas desaparecidas. “La paz que buscamos se construye diariamente con la eficacia de nuestras instituciones, mismas que deben garantizar justicia y dignidad para los ciudadanos”, sentencia Vera. Aproximadamente 1.200 personas marchan en Morelia, estado de Michoacán, para exigir “no más sangre”, mientras que el gobernador Leonel Godoy Rangel, durante la celebración del 22º aniversario de la fundación del Partido de la Revolución Democrática (PRD), subraya que no se puede continuar con la misma estrategia para combatir al crimen organizado. “Nadie dice que no se castiguen o no se persiga a los que cometen delitos, pero también decimos que [esta medida] no ha funcionado, por eso saludamos la marcha”, afirma Godoy. Unas 1.500 personas caminan en Monterrey, estado de Nuevo León, con mantas y consignas como: “estamos hasta la madre, no más sangre”, “somos estudiantes, no somos sicarios y vivos los queremos”. El acto inicia alrededor de las 17 hrs. en la plaza del Colegio Civil, donde se congregan unas 500 personas, en su mayoría integrantes o simpatizantes de 30 organizaciones civiles que convocaron a la marcha en el estado, entre ellas Eureka, Cadhac, Alternativas Pacíficas, Evolución Mexicana y Biojusticia. Al menos 2 mil personas participan en la marcha silenciosa celebrada en Guadalajara, estado de Jalisco, que recorre casi dos kilómetros de la plaza Juárez a la plaza de armas. Los manifestantes, vestidos de blanco, con globos blancos y ondeando banderas de México, enarbolan carteles que dicen: “no más sangre”. Profesores de la sección 22 del SNTE y activistas de organizaciones adheridas a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) se manifiestan ante las instalaciones de la octava Región Militar en el municipio de Santa Lucía del Camino, conurbano a la capital oaxaqueña, y posteriormente caminan al centro de esa ciudad. “Gobierno, narco y policía, la misma porquería” y “queremos escuelas, queremos trabajo, queremos hospitales, no queremos militares”, corean los inconformes. Similar actitud hay entre los cientos de participantes de las marchas realizadas en Ciudad Victoria, estado de Tamaulipas; Culiacán y Mazatlán, estado de Sinaloa; Tuxtla Gutiérrez, estado de Chiapas; Acapulco y Chilpancingo, estado de Guerrero; León, estado de Guanajuato; Villahermosa, estado de Tabasco; Tepic, estado de Nayarit; Jalapa y el puerto de Veracruz; Ecatepec, Estado de México; La Paz, estado de Baja California Sur; Mérida, estado de Yucatán; así como en las capitales de Campeche, San Luis Potosí y Chihuahua.

En respuesta a la marcha en que participaron decenas de miles de personas y que encabezó Javier Sicilia, el gobierno federal, por medio de la Secretaría de Gobernación, manifiesta que la seguridad “es tarea que a todos concierne: principalmente a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el cumplimiento de la obligación de perseguir y castigar a la delincuencia organizada que atenta mediante su violencia contra la tranquilidad de la sociedad”. El comunicado de prensa entregado al concluir la marcha subraya: “y a la ciudadanía es su ejercicio democrático proponer, evaluar y exigir a las distintas autoridades y a los poderes públicos los cambios que México requiera para lograr una seguridad auténtica y duradera [...] el gobierno federal reitera su respeto a los participantes en la Marcha por la Paz con Justicia y Dignidad, así como a cualquier expresión de la sociedad que persiga la construcción de un México donde el estado de derecho y el acceso a la justicia sean los principales instrumentos contra la criminalidad y la violencia que ella provoca. Éste es también el principal objetivo de la Estrategia Nacional de Seguridad que instrumenta el Ejecutivo federal”.

Lunes 9

El presidente Felipe Calderón anuncia que su gobierno buscará una reunión con los principales promotores de la Marcha por la Paz con Justicia y Dignidad, para que se conozcan las razones de la estrategia gubernamental en el combate a la inseguridad. “Me interesa dialogar, escuchar razones y propuestas, y que se conozcan las acciones del gobierno federal en materia de seguridad”, asevera. En su discurso, pronunciado en Los Pinos, no hay respuesta alguna a la exigencia de los manifestantes de cambiar a Genaro García Luna al frente de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). El presidente afirma que la marcha del domingo simboliza el ánimo legítimo y justo de la ciudadanía para detener el problema de la inseguridad, aunque admite que México atraviesa por “un momento complejo” en esta materia.

En Cuernavaca, estado de Morelos, La Red por la Paz y la Justicia considera que el titular de la SSP, Genaro García Luna, representa la amalgama de corrupción en México, por ello su cese sería la señal más importante que el presidente Felipe Calderón pudiera ofrecer. En conferencia de prensa, ante la ofrenda floral ubicada a la entrada principal del palacio de gobierno, el activista cultural Rocato, uno de los voceros de la organización, afirma que la salida de García Luna será tomada como muestra de que se escuchó a los mexicanos afectados y que están en contra de la estrategia de combate al crimen organizado, la cual ya ha cobrado la vida de 40 mil personas. Rocato indica que así se demostrará si hay voluntad de iniciar la reconstrucción de las instituciones y el tejido social. Añade que el domingo pasado Javier Sicilia dejó claro que la renuncia de Genaro García Luna sería muestra de que hay disposición de Calderón, y de toda la clase política, a escuchar y servir a la ciudadanía “y no seguir gobernando con omisión y dejando que sigan muriendo mexicanos por esta guerra absurda”. Respecto a la oferta de Felipe Calderón de reunirse con Sicilia y los principales promotores de la marcha, Rocato afirma que eso no se solicitó. Asimismo advierte que si no hay respuesta, la lucha y la resistencia civil continuarán para que la ciudadanía afectada por la guerra contra el crimen organizado no vote en las elecciones de 2012 y convenza a sus familiares de no hacerlo. Integrantes de la Red por la Paz y la Justicia agradecen a todas las personas, medios de comunicación, pueblos, colonias, delegaciones y universidades de Morelos y de México por su participación, solidaridad y apoyo para que se realizara la caminata de Cuernavaca al Distrito Federal, y luego, la marcha en la capital del país. Sobre las investigaciones de las procuradurías de Morelos y General de la República respecto al multihomicidio de que fuera víctima Juan Francisco Sicilia Ortega, hijo del poeta, Rocato lamenta que, hasta hoy, no se ha esclarecido el caso, y sólo han sido detenidas personas que, según la opinión de la mayoría, son chivos expiatorios.

El líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, dice respaldar la exigencia de Javier Sicilia para que el presidente de la República, Felipe Calderón, cese a Genaro García Luna como secretario de Seguridad Pública. “Suscribo que García Luna debe irse, renunciar o debe ser despedido por Calderón; será prueba de que (el presidente, panista) está dispuesto a tener sensibilidad u oídos abiertos al reclamo que miles de personas hicieron el domingo durante la marcha por la paz”, afirma el perredista. Mientras tanto, el presidente nacional del Partido de Acción Nacional (PAN), Gustavo Madero, se pronuncia contra la destitución del secretario de Seguridad Pública. “Darle vuelta a la inseguridad no es con la renuncia de una o dos personas, sino con el cierre de filas de los tres órdenes de gobierno, de los partidos, actores sociales y ciudadanos”, afirma.

Los proyectos de reforma laboral del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y PAN no sólo afectarían el empleo estable y la antigüedad que sirve de base para el cálculo de las pensiones, sino que constituyen un “autoatentado” de los sindicatos que perderían fuerza y razón de ser al no tener una membresía a la cual representar, como advierten los dirigentes de trabajadores electricistas, mineros y universitarios. “No puede existir un sindicato de eventuales, ni contrato colectivo, ni seguridad social”, expone ante la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM), Agustín Rodríguez, en referencia a que uno de los ejes de ambos proyectos es la contratación temporal. Al respecto, Jesús Feliciano Cibrián, representante del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos, señala que las iniciativas del PRI y PAN se enfocan hacia “la destrucción de la estabilidad en el empleo, de las medidas sociales que lo protegen y de los sindicatos, para los que es un suicidio”. Por su parte, el abogado laboralista Arturo Alcalde Justiani reprocha que las iniciativas pretendan legalizar la contratación de trabajadores por terceras empresas, el llamado *outsourcing*. “Lo que quiere el señor Lozano es generar trabajadores desechables. ¿Eso es lo que ustedes van a respaldar?, pregunta el abogado a los legisladores. Por su parte, el dirigente del SME, Martín Esparza, plantea que se quite a la dependencia la toma de nota. Al entregar un reporte de análisis a las iniciativas, afirma que éstas no mejorarán las condiciones de los trabajadores, porque la imposición de los periodos a prueba “no solucionará la falta de empleo; lo que se busca es acabar con el empleo estable y la antigüedad, mientras que cambiar la forma para rescisión del contrato sólo beneficiará a los patrones”.

Un grupo de al menos 10 docentes, estudiantes y trabajadores administrativos de la UACM se reúne con Luis Jiménez Bueno, tercer visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), y con el director de quejas y orientación del organismo, Mario Patrón, para presentar “nuevos casos de ataques contra miembros del CU que difieren de María Esther Orozco Orozco, rectora de esa casa de estudios. La CDHDF reitera “su preocupación por los hechos que vienen ocurriendo en la UACM, los cuales considera un caso prioritario. Al respecto, académicos de la institución consideran que “no hay una respuesta clara de la rectoría ante la solicitud de aplicar medidas precautorias formuladas por la CDHDF a la rectora; prueba de ello es que han subido de tono los ataques e inclusive se fortalecen las prácticas de espionaje realizadas por funcionarios ligados a la rectora”. Entre las denuncias presentadas ante la CDHDF desde hace 15 días “figura la de espionaje por personal que trabaja en el área de protección civil de la UACM, entre otras áreas, que graba y documenta fotográficamente las reuniones que mantienen estudiantes y docentes en su legítimo derecho a organizarse en el contexto de la actual crisis”, indican los académicos.

Martes 10

El pueblo organizado de Mitzitón, adherente a la Otra Campaña, denuncia agresiones y disparos de miembros del denominado Ejército de Dios durante y después de la marcha de las bases de apoyo del EZLN y la Otra Campaña en el centro de San Cristóbal de las Casas, estado de Chiapas, el sábado pasado. Ante la masiva movilización zapatista y de la Otra Campaña, sostienen los

indígenas, “el gobierno rápidamente responde a nuestra muestra de organización civil y pacífica de la única manera que sabe: con violencia. Hoy en manos de sus paramilitares, mañana con su policía”.

El Frente Sindical Mexicano (FSM) expresa su rechazo a las tres iniciativas de ley para reformar la Ley Federal del Trabajo, impulsadas por PRI, PAN y PRD, debido a que “atentan contra las principales conquistas de los trabajadores, como la libertad sindical, la contratación colectiva, el derecho de antigüedad y la seguridad en el empleo”. En una carta enviada al presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, Tereso Medina Ramírez, el frente sindical, encabezado por el SME, señala que las iniciativas presentadas por los partidos parten de un diagnóstico erróneo de la situación nacional; tienen un carácter unilateral, en virtud de que sólo se consultó a uno de los factores de la producción, dejando afuera a los trabajadores, y contienen “figuras regresivas” que, de aprobarse, establecerían condiciones de trabajo similares a las existentes en 1931. Además, en conferencia de prensa, el líder del SME, Martín Esparza Flores, anuncia que el miércoles acudirán a la nueva sede del Senado de la República, a fin de entrevistarse con integrantes de la Comisión Permanente del Congreso, para tratar de convencerlos de que se dé marcha atrás en la pretensión de reformar la Ley Federal del Trabajo.

En Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, madres de adolescentes desaparecidas desde el 2008 hasta la fecha se plantan ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para exigir la localización de más de 130 jóvenes. Las manifestantes, afiliadas al Comité de Madres de Jóvenes Desaparecidas, demandan una investigación seria de estos casos, según lo expresa Francisca Galván, coordinadora del comité.

Miércoles 11

Dirigentes de diversas organizaciones sociales entregaron ayer en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 20 mil firmas de capitalinos que rechazan cualquier esquema de privatización en el sector hídrico del DF.

Ante al diagnóstico hecho por la rectora de la UACM, Esther Orozco Orozco, sobre el “Desempeño académico y de los estudiantes inscritos de 2001 a 2009, así como de sus avances a marzo de 2011”, la profesora Mariana Elkisch Martínez, integrante de la Academia de Estudios Sociales e Históricos de esa casa de estudios, señala que “la fórmula para evaluar a la UACM, pensada para y conformada por una gran cantidad de estudiantes de medio tiempo o menos, no sólo resulta inútil, sino que presume un acto doloso por parte de quien la elaboró”. Al abrir las participaciones durante la sesión del consejo, que se desarrolla en el plantel Casa Libertad, en Iztapalapa, la profesora Beatriz Amézquita, del plantel San Lorenzo Tezonco, pide a la comisión de organización del CU, encabezada por Gloria Luz Alejandre, que informe sobre el curso que ha tomado la demanda de la comunidad universitaria, avalada por 3 mil firmas, para que se revoque el mandato de Orozco.

En Morelia, estado de Michoacán, la parálisis económica, educativa y social continúa en el municipio de Cherán, 26 días después de que comuneros se enfrentaran con miembros de la delincuencia organizada. Los ejidatarios anuncian que suspenderán su movimiento cuando los militares lleguen a la zona boscosa y les garanticen seguridad; mientras, la titular de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), Graciela Andrade, afirma que los maestros trabajarán horas extras, sábados y domingos para recuperar el tiempo que han perdido aproximadamente 3.500 alumnos de educación básica. “No pararemos hasta que haya vigilancia en los bosques y seguridad en las calles del pueblo”, asegura uno de los integrantes del llamado Comité Ciudadano.

Una comisión de autoridades agrarias y tradicionales del pueblo huichol wixárika, que defiende la

preservación de la reserva espiritual, natural e histórica de Wirikuta, da a conocer el contenido de una carta entregada a la Presidencia de la República, cuyo contenido demanda a Felipe Calderón cancelar el permiso de explotación minera a la empresa trasnacional First Majestic Silver Corporation en la Sierra de Real de Catorce.

Jueves 12

En la ciudad de Aguascalientes, estado de Aguascalientes, el ex jefe de gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, asegura que están dadas las condiciones para que las izquierdas ganen la próxima elección presidencial, toda vez que “la gente quiere un cambio por la vía pacífica y por la vía electoral”. Antes de encabezar un mitin ante unas 4 mil personas reunidas en la Plaza de la Patria, el ex candidato presidencial se refiere a la Marcha por la Paz con Justicia y Dignidad que el domingo pasado se efectuó en varios estados del país, especialmente en la ciudad de México. La protesta “significa que muchas personas quieren un cambio porque ya no soportan tanta represión”, asegura, y aclara que “estamos de acuerdo con las causas que ellos defienden, pero no vamos a ser oportunistas para colgarnos de un movimiento genuino”. Obrador, dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), insiste en que tiene que repetir sus palabras porque está luchando contra el poder de la televisión nacional, que está “al servicio de la mafia del poder”.

En Villahermosa, estado de Tabasco, unos mil habitantes de comunidades indígenas bloquean durante cinco horas la carretera Villahermosa-Frontera, en el kilómetro 26, para exigir a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) el pago de indemnizaciones por daños en tierras de cultivo, viviendas y animales de corral, derivados de las inundaciones del año pasado. Los inconformes denuncian que, pese a haberse instalado mesas de diálogo con representantes de la Sagarpa, los pagos no se han concretado.

En Morelia, estado de Michoacán, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional arriban a los bosques de Cherán para patrullar la zona, como informa el procurador general de Justicia del estado, Jesús Montejano Ramírez. En tanto, habitantes de Capacuaro bloquean una carretera federal para exigir el retiro de las fuerzas de seguridad de esa región de la meseta purépecha.

En Cuernavaca, estado de Morelos, familiares de Miguel Ángel Pérez Cazales y de Rubén Flores Hernández, el primero asesinado en el 2009 y el segundo en el 2010 por defender los recursos naturales de sus pueblos, demandan a la Organización de Naciones Unidas (ONU) que intervenga para que se haga justicia, pues la procuraduría estatal no ha detenido a los responsables ni avanzado en las investigaciones. Luisa María Aguilar y Martha Merlo Huerta anuncian que remitirán un informe a la ONU.

Un día después de que productores de frijol de Nayarit afiliados a la Confederación Nacional Campesina (CNC) protestaran porque compradores recomendados por la Sagarpa no les habían pagado ni un centavo por 15 mil toneladas del grano, debiéndoles 150 millones de pesos, la organización informa que la dependencia cedió a sus demandas después de que amenazaron con tomar carreteras y que obtuvieron el apoyo de legisladores.

Ganaderos de Coahuila, Veracruz, Hidalgo, Chihuahua, Aguascalientes, Querétaro y Guanajuato se manifiestan frente a oficinas de dependencias federales para demandar que el gobierno de la República aumente un peso al litro que les compra y distribuye por conducto de Leche Industrializada Conasupo (Liconsu). El precio actual es de 5.70 pesos. Aseguran que la crisis en el sector ha llevado a la bancarrota al 50% de los productores. En Torreón, estado de Coahuila, los ganaderos de la región lagunera se concentran en la oficina del Sistema de Administración Tributaria. Mario Valdés Berlanga, presidente de la Unión Ganadera Regional, demanda un

incremento, ya sea mediante apoyos directos o subsidios para insumos. A la protesta se unen empresarios, dueños de establos y sus familias, e incluso distribuidores de insumos y maquinaria, afectados por la falta de liquidez de los productores. Ganaderos de Hidalgo bloquean una de las principales avenidas de Pachuca, frente a la delegación de la Sagarpa, con una pipa que transporta mil litros de leche, la cual reparten. En Aguascalientes, unos 70 productores se manifiestan fuera de la delegación de la Secretaría de Economía. En Chihuahua, productores de los municipios de Delicias, Meoqui y Saucillo protestan porque el gobierno federal se niega a aumentar el precio de la leche. Los manifestantes regalan miles de litros a la gente que pasaba por la plaza Hidalgo e interrumpen el tránsito durante casi una hora. Aproximadamente 100 lecheros de Querétaro y Guanajuato se manifiestan fuera de las delegaciones de la Secretaría de Economía y de la Sagarpa para exigir un aumento de precio y señalan que en ambas entidades quedan unos 600 ganaderos, la mitad de los que había hace 10 años, como asegura Víctor Manuel Martínez, presidente del Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche (FNPCL). En Veracruz, Miguel Franzoni Hernández, presidente local del FNPCL, informa que al menos 200 productores de los municipios de Acajete, Jalapa, Las Vigas, Emiliano Zapata, Xico, Naolinco y Coatepec han decidido vender sus hatos por incosteables. En la Ciudad de México, Everardo González Padilla, coordinador general de ganadería de la Sagarpa, afirma que fueron los industriales quienes han decidido no aumentar el precio de la leche, de acuerdo con las condiciones de mercado. Apunta que la Sagarpa hizo su parte al reunir a las partes a dialogar y apoyar al sector con infraestructura, coberturas y procesos de transformación.

Viernes 13

En la ciudad de Zacatecas, un centenar de trabajadores de la sección 62 del sindicato minero, pertenecientes a la mina Fresnillo PLC, del Grupo Peñoles, toman durante siete horas el edificio central del IMSS en esta capital en protesta por la mala calidad del servicio médico en clínicas y hospitales del noroeste del estado. La protesta concluye con la promesa de reintegrar gastos médicos erogados en instituciones privadas.

En respuesta a las peticiones de las organizaciones encabezadas por el poeta Javier Sicilia, el secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, señala que hay condiciones para que el diálogo propuesto sea público. Antes de participar en una comida con delegados estatales en el Centro Banamex, Blake Mora señala que la dependencia se encuentra en proceso de interlocución con los organizadores de la marcha del domingo pasado, con el propósito de definir en qué términos se realizará la reunión con el presidente Calderón. Asegura que el gobierno ha dado la bienvenida a toda expresión ciudadana y resalta que el propio presidente Calderón “ha sido sensible a la voz de los ciudadanos”.

Profesores del Comité Ejecutivo Democrático del SNTE se manifiestan frente al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) para exigir una respuesta a su demanda contra la Alianza para la Calidad Educativa (ACE), la cual “no tiene ninguna legalidad y viola nuestros derechos laborales”. Aseguran que Elba Esther Gordillo “no tenía ninguna representatividad legal del magisterio cuando suscribió el acuerdo, en mayo de 2008, pues su periodo estatutario al frente del gremio de maestros ya había concluido”. Sergio Espinal, secretario general del comité disidente, informa que decenas de docentes acudieron al tribunal, donde realizaron un mitin para “exigir una respuesta definitiva a la denuncia presentada y suscrita por más de 29 mil profesores del país, para que se retome la bilateralidad en las relaciones entre la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el SNTE, pero en un marco de legalidad, es decir, con una dirigencia electa conforme a los estatutos”.

Sábado 14

En Nezahualcóyotl, Estado de México, la Asociación de Servidores Públicos Académicos Sindicalizados de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl estalla una huelga en demanda de un aumento salarial del 30%, vales de despensa, material didáctico y estímulos mensuales y anuales de puntualidad para profesores de tiempo completo y asignatura. Las autoridades ofrecen un aumento salarial del 3.9%, lo que ha forzado a los académicos a parar labores a partir de las 19 horas de este sábado, como afirma Marcos Ricardo García, secretario general del gremio.

En la ciudad de Oaxaca, estado de Oaxaca, resultan nueve muertos y más de una decena de heridos tras una emboscada contra una caravana de ocho camionetas que transportaba a pobladores, la mayoría indígenas mixes de Santiago Choapam, municipio de la región de la Cuenca del Papaloapan, como informa Marco Tulio López Escamilla, secretario de Seguridad Pública. Las víctimas, originarias de San Juan del Río y Santo Domingo Latani, se desplazaban a la cabecera municipal para acudir a la instalación del Consejo Municipal Electoral, donde se iba a realizar la elección extraordinaria por el régimen de usos y costumbres, pero fueron atacadas con armas de fuego por desconocidos en el paraje El Portillo, en el tramo Latani-Choapam

En Chilpancingo, estado de Guerrero, organismos de derechos humanos demandan a las autoridades resolver el clima de violencia creado por grupos criminales, paramilitares y fuerzas de seguridad, que ha impulsado a varias familias a abandonar la comunidad de La Laguna y refugiarse en la de Puerto las Ollas, en el municipio de Coyuca de Catalán. Tras constatar la situación, el viernes pasado las agrupaciones exigieron a las autoridades federales y estatales resolver las causas del desplazamiento forzoso que agrava la precariedad en que ya vivían los afectados, garantizar condiciones para un pronto retorno a su lugar de origen e impulsar una política de desarrollo avalada por las comunidades. La Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad y el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón demandan atención médica, fármacos, provisiones de agua y alimentos, además de condiciones de vivienda y refugio para los, hasta hoy, 107 desplazados, mientras estos permanezcan en Puerto las Ollas.

Domingo 15

En Morelia, estado de Michoacán, comuneros de Cherán advierten que no levantarán las barricadas que colocaron en el poblado porque aún no hay seguridad, un mes después de que se enfrentaran con talamontes e iniciaran un movimiento de autodefensa. Aclaran que su movimiento no busca la autonomía municipal, sino resolver un conflicto de tala clandestina protegida por el crimen organizado, que ha dañado 20 mil hectáreas en menos de una década.

Miles de profesores disidentes, miembros de la CNTE, marchan desde la Escuela Normal de Maestros al Zócalo capitalino, donde realizan un juicio político contra la dirigente vitalicia del magisterio, Elba Esther Gordillo Morales, y el secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, acusados, entre otras cosas, por pretender acabar con la educación pública en el país y los derechos laborales de los maestros. Paco Ignacio Taibo II, convertido simbólicamente en juez, tras escuchar una larga lista de cargos y denuncias por parte de fiscales y testigos, condena a ambos personajes a “abandonar inmediatamente sus cargos, la incautación de todos sus bienes mal habidos y la reclusión perpetua en un penal de máxima seguridad, por su evidente peligrosidad social” para el pueblo de México.

Lunes 16

Por primera vez después de varios años se dejan ver juntos, primero en un restaurante y luego en el arranque formal de la campaña de Alejandro Encinas por la gubernatura del estado de México, las figuras claves de la izquierda partidista mexicana: Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard, jefe del Gobierno del Distrito Federal. Todos, con diferentes maneras y palabras, llaman a la unidad para que la izquierda triunfe el 3 de julio en el estado y a mantener la cohesión para las elecciones presidenciales del 2012.

Habitantes de diferentes colonias de la delegación Tlalpan clausuran de manera simbólica el centro de servicio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), localizado en avenida Insurgentes Sur 3702 de la colonia Peña Pobre, el cual se tiene previsto que empiece operaciones en los próximos días. Los inconformes niegan que la paraestatal tenga la capacidad para suministrar energía a la Ciudad de México, porque, pese a los argumentos “sobre su buen funcionamiento”, continúan con estimaciones para hacer los cobros que, para algunos vecinos, han sido excesivos, pues de 400 pesos que pagaban se han disparado a 2 mil. Durante la protesta colocan pancartas en las que expresan su rechazo a la apertura de ese centro de servicio y exhiben los aparatos eléctricos y de cómputo que se han dañado por la variación del voltaje y las descargas eléctricas, las cuales, denuncian, son recurrentes por la mala infraestructura que existe.

En la ciudad de Oaxaca, estado de Oaxaca, autoridades municipales y agrarias de Capulalpan de Méndez, en la sierra norte, aseguran que la Secretaría de Economía (SE) entregó a empresas extranjeras –la mayoría canadienses– concesiones para explotar minas en 50 mil hectáreas, superficie que abarca el territorio de más de 10 municipios, sin consenso de sus dueños. En conferencia de prensa, acompañado por el presidente municipal Néstor Baltazar Hernández Bautista y el regidor Javier García Juárez, así como por miembros del Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, el presidente del comisariado de bienes comunales, Javier García Juárez, afirma que la SE otorgó 25 concesiones entre el 2002 y el 2008 a las empresas Continuum Resources, Sundance y American Smelting and Refining Company, así como al Grupo México y a la Compañía Minera Natividad, para explotar oro y plata.

Martes 17

Diputados de las comisiones de Educación y Ciencia y Tecnología de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) acuerdan convocar de nueva cuenta a la rectora de la UACM, Esther Orozco Orozco, para que rinda cuentas ante el órgano legislativo. El presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, Sergio Eguren, plantea que la reunión se lleve a cabo a finales de junio, con el fin de dar tiempo a que sesione el CU de esa casa de estudios y autorice a la servidora pública a acudir al recinto.

La Coalición Ciudadana por la Educación (CCE) realizará una consulta nacional en septiembre para someter a consideración de la población su propuesta de cambiar las reglas del juego para terminar con la complicidad entre los líderes del sindicato magisterial y el gobierno federal, y acabar con el pago de favores electorales que tienen una injerencia directa en el sistema educativo mexicano. El coordinador ejecutivo de la CCE, Alberto Serdán, expresa que cada 15 de mayo el gobierno y la cúpula sindical encabezada por Elba Esther Gordillo “prometen que ahora sí habrá calidad educativa y evaluaciones, que ahora sí tendremos una educación como la que necesita y merece el país”.

Miércoles 18

La Asamblea Universitaria de la UACM, conformada por académicos, estudiantes y trabajadores, señala que las declaraciones de la rectora Esther Orozco sobre la calidad de los profesores de esa institución “nuevamente difaman y atentan” contra su prestigio académico. En un pronunciamiento leído por la profesora Tania Rodríguez, la asamblea agrega que “sólo por mencionar algunos ejemplos, el profesor Juan Manuel Contreras Colín, citado en una lista (de 40 profesores) como uno de los docentes que no cuenta con título de licenciatura, es doctor en filosofía”.

Miles de locatarios de mercados públicos, de tianguis sobre ruedas y tiendas de barrio toman el Zócalo capitalino y las calles aledañas para exigir al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, que no otorgue más cambios de uso de suelo y autorizaciones para la instalación de tiendas de autoservicio y de conveniencia, que tienen a más de 100 mil familias al borde de la desaparición. En mantas y cartulinas denuncian el despojo de 6 mil metros cuadrados del mercado 34 Villa Zona en favor de la Plaza Mariana, el retiro del tianguis de la calle Victoria y la calzada de Guadalupe, por privilegiar a Wall-Mart y la violación de usos de suelo para la instalación de tiendas de conveniencia como Oxxo, 7 Eleven y Extra, así como Aurrerá Exprés, que han invadido la ciudad y provocado una caída en las ventas del 80%, como afirma Humberto García Montes, presidente de la Federación de Mercados y Concentraciones Populares Anáhuac.

Con la exigencia de incrementar la cobertura en educación media superior y superior, jóvenes integrantes del Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior (MAEES) marchan por el circuito universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El juzgado sexto de distrito de procesos penales federales en la capital del país gira orden de aprehensión contra el integrante del SME Jorge Eulises Uribe Gaona (o Jorge Ulises Uribe Gaona o Jorge Ulises Urbe Gaona), como probable responsable de la comisión de los delitos de motín, robo, daño en propiedad ajena y lesiones en agravante de pandilla cometidos en agravio de la CFE.

Jueves 19

En La Paz, estado de Baja California Sur, el Consejo General Universitario de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) suspende a ocho trabajadores que el 11 de mayo pasado participaron en una movilización para apoderarse de las oficinas de la rectoría, como informa el abogado general de la institución, Adrián de la Rosa. El mismo precisa que siete empleados fueron castigados con una semana sin goce de sueldo, mientras el catedrático Carlos Villavicencio, quien se ostenta ilegalmente como rector, fue sancionado con un mes sin cobrar su salario.

En la ciudad de Oaxaca, estado de Oaxaca, profesores adscritos a la sección 22 del SNTE suspenden las clases por segundo día consecutivo y bloquean los accesos a las oficinas de los gobiernos federal, estatal y municipal en esta capital, así como en las principales ciudades de la entidad, como medida de presión para que se atienda su pliego de demandas. Asimismo, se apoderan de los puentes de peaje Caracol y Papaloapan, en la carretera La Tinaja-Tuxtepec, al igual que de la caseta Huitzo de la supercarretera Cuacnopalan-Oaxaca.

Viernes 20

En la ciudad de Oaxaca familiares de Beatriz Alberta Cariño y el finlandés JyriJaakkola Antero, los activistas asesinados el 27 de abril de 2010 en el ataque a la caravana humanitaria que enfilaba

hacia San Juan Copala, aseguran que la detención de Rufino Juárez Hernández manda un mensaje de confianza a quienes han sufrido la violencia de su grupo paramilitar, posibilitando la justicia antes negada y la paz tan requerida por el pueblo triqui y la sociedad oaxaqueña.

En Guadalajara, estado de Jalisco, alrededor de 500 personas, la mitad de ellas indígenas ataviados con la ropa tradicional de los wixárika o huicholes, marchan por las calles del centro de esta ciudad para exigir a los gobiernos estatal y federal que honren su compromiso de velar por los sitios sagrados de la etnia.

Andrés Manuel López Obrador envía un mensaje a los asistentes a la 17° reunión del Foro de Sao Paulo, que se realiza en Managua, Nicaragua. En el mensaje Obrador subraya que el Morena tiene como primera tarea derrotar a la oligarquía política de México para avanzar, por vía pacífica, en las elecciones de 2012. En una carta entregada por los integrantes de la dirigencia del PRD que se encuentran en el foro, el tabasqueño explica el sentido del movimiento que encabeza, “nacido tras el fraude” del 2006. Explica que el proyecto alternativo impulsado por el Morena propone mantener una relación de respeto con todos los pueblos y gobiernos del mundo. “Queremos hacer valer los principios de no intervención, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de los conflictos”, asegura. En tanto, durante su intervención en el foro, la secretaria general del PRD, Dolores Padierna, solicita a los líderes de izquierda de América Latina estar atentos a la elección presidencial de México el año entrante.

Trabajadores sindicalizados del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal (IEMS) bloquean avenida Cuauhtémoc, en el DF, ante la falta de respuesta por parte de las autoridades de la institución por el retraso de dos meses en el pago a empleados contratados por honorarios, así como por el incumplimiento de diversos términos de su contrato colectivo de trabajo. El secretario general de la Secretaria del Exterior del Sindicato Unico de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior (SUTIEMS), Raúl Pérez Ríos, denuncia que las autoridades del IEMS “han decidido suspender unilateralmente las reuniones” que sostenían con el sindicato sin ofrecer solución a sus demandas –pago de salarios y cobertura de plazas vacantes en áreas administrativas– lo que ha afectado el funcionamiento de las preparatorias.

Sábado 21

En Santiago Ixcuintla, estado de Nayarit, un grupo de campesinos continúa su ocupación de los centros de investigación de la compañía Monsanto, ubicados en Bahía de Banderas y El Tizate, en protesta porque la empresa les hizo firmar un contrato de compra de maíz en el que se estipula un precio de 2.70 pesos el kilogramo, a diferencia del anterior convenio, que era de cinco pesos. Por su parte, Monsanto lamenta que se haya paralizado la labor de 200 campesinos que trabajan en esos sitios y señala que a nadie se le ha obligado a firmar un contrato.

En Acapulco, estado de Guerrero, la huelga en el condominio y hotel La Palapa suma 51 días. El paro inició el 31 de marzo pasado debido a que la Operadora de Inmuebles Acapulco (OIA), administradora del sitio, les adeudaba seis semanas de salario a los 150 trabajadores, además de que no había cubierto 40 millones de pesos de cuotas al IMSS, 600 mil pesos a la CFE y 200 mil a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco. Roberto Balbuena Naves, secretario general de la sección 113 de la Confederación de Trabajadores Mexicanos, explica que la OIA ya hace cálculos para indemnizar a los huelguistas, la mayoría con 20 y 30 años de antigüedad.

Domingo 22

Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), asevera que “el desfile militar que encabezó el presidente Felipe Calderón el sábado pasado en Ciudad Juárez, Chihuahua, es una muestra clara de la distancia que hay entre lo que la ciudadanía quiere y lo que el gobierno hace”. “Sin duda, con ese desfile, el ejecutivo federal manda el mensaje de que no habrá modificación a su política en materia de seguridad. Con esa acción Calderón desperdicia la oportunidad para rectificar; su obstinación por esta guerra parece inamovible”, sostiene Cortez. Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana de Defensa por los Derechos Humanos (Limedd), a su vez resalta: “el desfile del sábado pasado en Ciudad Juárez reafirma que el presidente no está dispuesto a escuchar ni a los ciudadanos ni a los llamados de organismos internacionales de defensa de los derechos humanos que piden que cambie su estrategia de combate al crimen organizado por los 40 mil muertos que sufre el país”. Cortez y Ramírez coinciden en entrevistas por separado en que “tenemos que insistir en la modificación de la estrategia de combate al crimen organizado”.

Lunes 23

En Guadalajara, estado de Jalisco, integrantes del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, opositores a la presa El Zapotillo, se manifiestan frente a las oficinas de la Comisión Nacional del Agua y bloquean por casi una hora la avenida Federalismo para exigir que se reanude el diálogo con las autoridades sobre el proyecto y se retiren las denuncias penales contra activistas que bloquearon, en marzo pasado, la zona donde se realiza la obra, en el municipio de Cañadas de Obregón.

En Morelia, estado de Michoacán, comuneros de Cherán denuncian ante la subprocuraduría Regional, con sede en Uruapan, que Miguel Ángel Jende salió la tarde del domingo anterior a la población de Paracho y fue secuestrado. Por su parte, el gobernador Leonel Godoy Rangel afirma que “se trabaja en el conflicto de Cherán con sensibilidad y responsabilidad”.

En la ciudad de Oaxaca, estado de Oaxaca, profesores de la sección 22 del SNTE inician un paro de labores, además de un plantón indefinido en el zócalo y en más de 30 calles del centro histórico, luego de rechazar la segunda respuesta de los gobiernos federal y estatal a su pliego de peticiones. “Son demandas legítimas que deben resolverse y el paro no afectará el ciclo escolar, pues habrá un programa de recuperación conforme a nuestro compromiso con la educación y el pueblo”, expresa en conferencia de prensa el dirigente seccional Azael Santiago Chepi, quien rechaza la oferta de ambos gobiernos de 1.500 millones de pesos para atender las exigencias del magisterio. Al término de la conferencia, dirigentes de la Organización Independiente de Comerciantes Establecidos (OICE) ingresan a la sede sindical para rechazar el plantón. “Los profesores están acostados en las calles, bloquean las entradas de los establecimientos y ya no tenemos clientes”, deplora la lideresa Esther Merino Badiola. Antes del plantón se efectúan cuatro marchas que parten de los principales accesos de la ciudad hacia el zócalo. Un millón y 300 mil alumnos de 13 mil planteles de educación preescolar, primaria, secundaria y media superior se quedan sin clases.

En el inicio del diálogo y debate sobre la emergencia nacional y el pacto nacional ciudadano en contra de la violencia, realizado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM, el escritor y poeta Javier Sicilia convoca a los ciudadanos a iniciar una resistencia civil hasta conseguir un mejor presente y futuro para los mexicanos, principalmente los jóvenes, distinto al que se vive ahora con la llamada guerra contra el narcotráfico. En su intervención, Julián Contreras, del Frente Popular Ciudadano de Ciudad Juárez, expresa el abierto rechazo de esa organización, y otras más, a que el movimiento ciudadano sostenga un diálogo con el gobierno federal. Tras enunciar una larga lista de agravios en contra de la ciudadanía juareense, incluyendo los

asesinatos de líderes que aglutinaban diversos movimientos y organizaciones locales, el activista señala que no existe cabida para la negociación con el gobierno. En tanto, Javier Sicilia explica que “los diálogos no son negociación, sino es poner los puntos en claro”. Agrega que evidentemente hay un acercamiento del gobierno, pues hasta este momento el único que ha dado el paso para un diálogo es el presidente Felipe Calderón. En sus intervenciones, tanto Luis Hernández Navarro como Carlos Fazio coinciden en que Calderón no va a cambiar su política militarista en el último tramo de su administración. Incluso se prevé que la pueda fortalecer con miras a la elección del 2012, donde busca que su partido (el PAN) permanezca en el poder.

Martes 24

La comunidad tzotzil de Cruztón, del municipio Venustiano Carranza, estado de Chiapas, denuncia que personas del municipio de Teopisca pretenden invadir tierras comunitarias, presuntamente con el aval de la Procuraduría Agraria. Durante el pasado mes y medio se ha reeditado un conflicto que, presuntamente, el gobierno estatal y las autoridades agraria ya habían resuelto. La comunidad demanda al gobierno respeto a sus tierras y a la procuraduría que deje de inducir las invasiones. “Hacemos responsable al mal gobierno de lo que puede suceder y le exigimos que nos informe de inmediato el resultado del ‘convenio de finiquito’ firmado el 3 junio del 2009 y llevado ante el Tribunal Unitario Agrario para su ratificación”, declaran.

En Chilpancingo, estado de Guerrero, medio centenar de indígenas provenientes de la comunidad de Tilapa, municipio de Malinaltepec, en la región de la Costa-Montaña, marchan y demandan al gobierno estatal desistirse de 19 órdenes de aprehensión en su contra, derivadas de un conflicto con sus vecinos del poblado de Tierra Colorada por 29 hectáreas.

En Acapulco, estado de Guerrero, unos 100 profesores pertenecientes a las delegaciones D3-1613 y D3-1614 del SNTE ocupan las oficinas de la subcoordinación de los Servicios Educativos de la región Acapulco-Coyuca de Benítez de la Secretaría de Educación en Guerrero, en protesta por el nombramiento de 10 funcionarios, entre ellos militantes de PAN, Convergencia y PT. Exigen al gobernador Ángel Aguirre designar servidores públicos capacitados y advierten que mantendrán cerradas las oficinas hasta que se dé marcha atrás a los nombramientos.

Con diversos carteles –algunos de los cuales dicen “sí al amor en todas sus expresiones, no al nepotismo en todas sus expresiones”– alrededor de 60 estudiantes y profesores del plantel San Lorenzo Tezonco de la UACM protestan por la exhibición del documental “Agnus Dei, cordero de Dios”, realizado por Alejandra Sánchez Orozco, hija de la rectora Esther Orozco Orozco.

En la ciudad de Oaxaca, integrantes de la sección 22 del SNTE bloquean oficinas de gobierno, plazas comerciales y tiendas departamentales para demandar a los gobiernos federal y estatal la reinstalación de la mesa del diálogo, suspendida la semana pasada, después de que la asamblea estatal del magisterio rechazara la segunda respuesta a su pliego de demandas. Azael Santiago Chepi, secretario general de la sección 22, informa que, en su segundo día de paro, los mentores han rodeado oficinas de los tres niveles de gobierno, cerrado los cuatro centros comerciales de la ciudad y tiendas de autoservicio, entre ellas Chedraui, y que mantienen su campamento en al menos 25 calles del centro histórico. Asimismo, los manifestantes han ocupado la caseta Huitzo de la supercarretera Cuacnopalan-Oaxaca y visitado medios de comunicación para exigirles “que ya no publiquen más mentiras en favor del gobierno estatal”.

El SME llevará a cabo elecciones para designar a los 26 integrantes de su comité central para el próximo periodo, por lo que el 16 de junio arrancará el proceso de votaciones, las cuales durarán 11 días hábiles, a fin de que, el 4 de julio, se den a conocer los resultados en una asamblea general.

Según el secretario general del gremio, Martín Esparza Flores, para estos comicios hay dos planillas: la que contendrá por 13 secretarías, incluida la general que él encabeza, y otra que va por igual número de carteras, incluida la secretaría del interior, que buscará Fernando Amezcua.

Integrantes de la CNTE rechazan la Evaluación Nacional de Logro Académico en los Centros Escolares (Enlace), que actualmente se lleva a cabo en planteles del país, y reiteran su exigencia de que se cancele la ACE, así como la salida de Elba Esther Gordillo del SNTE, pues carece de personalidad jurídica. En conferencia de prensa, Sergio Espinal, secretario general del comité ejecutivo nacional democrático del SNTE, precisa que “Enlace no está diseñada para medir la capacidad y actitud crítica de los estudiantes a este modelo de muerte, sino la aceptación y adaptación a este sistema; es el punto final en la aplicación y justificación del discurso empresarial, ya que se mide cuánto ha aprendido el niño a ser neoliberal; en síntesis, esa es la calidad a que hace referencia Calderón; se mide cuánto conocen el sistema de competencias mercantiles”.

Miércoles 25

En la ciudad de Oaxaca, profesores de la sección 22 del SNTE regresan a la mesa de diálogo con funcionarios de los gobiernos estatal y federal tras romperse las negociaciones el fin de semana pasado, cuando se declararon en paro indefinido de labores y en plantón permanente en el Zócalo.

En San Cristóbal de Las Casas, estado de Chiapas, al cumplirse cuatro años de sus desapariciones en Oaxaca, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) exige la presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, integrantes del EPR.

En Cuernavaca, estado de Morelos, el escritor Javier Sicilia solicita a la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales, entrevistarse con el jefe de sicarios del Cártel del Pacífico Sur (CPS), Julio de Jesús Radilla, alias El Negro, presunto responsable del asesinato de su hijo Juan Francisco, ocurrido el pasado 27 de marzo en Jiutepec, y de seis personas más. De acuerdo con las declaraciones del abogado del poeta, Julio Hernández Barros, cuando él se enteró de la detención de Radilla se lo comunicó al poeta, quien le comentó su deseo de sostener un encuentro con el supuesto homicida. Esa petición de Sicilia, según Hernández Barros, fue expuesta en la audiencia que él sostuvo con la procuradora Morales, que ofreció analizar la posibilidad de concederla.

Organizaciones no gubernamentales, académicos y defensores de derechos de los migrantes advierten que existe “debilidad institucional y corrupción” en las instancias encargadas de ejecutar la política migratoria en México. “No es con más militares como se va a proteger a los y las migrantes, sino con políticas públicas efectivas. Para evitar los abusos, tanto de bandas criminales como de funcionarios corruptos, debe analizarse la situación del Instituto Nacional de Migración, desde la formación institucional hasta la incorporación de protocolos para el respeto de las garantías de los migrantes”, indican. Manifiestan que la violación sistemática a los derechos humanos de los extranjeros continúa y que la Ley de Migración, en vigor desde hoy, no brinda mayores garantías a las personas. Por el contrario, puntualizan, continúa la vinculación entre la migración y el tema de seguridad nacional; persiste la participación de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en acciones de control y verificación migratoria y no desaparecen los operativos y verificaciones domiciliarias sin orden judicial.

La junta de buen gobierno zapatista (JBG) *El camino del futuro*, correspondiente al caracol de La Garrucha, estado de Chiapas, alerta de un nuevo intento de despojo en las inmediaciones del sitio arqueológico de Toniná, contra un propietario que es base de apoyo del EZLN. El predio, denominado San Antonio Toniná, pertenece legal y legítimamente a Alfonso Cruz Espinosa, del

municipio autónomo Francisco Gómez. Los zapatistas acusan al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y al gobierno estatal de incumplir un acuerdo firmado hace más de dos años. Responsabilizan directamente a los tres niveles del gobierno de cualquier acción “que atente contra la integridad física del compañero y su familia”.

Cerca de 3 mil profesores de la CNTE marchan del Zócalo capitalino a la Secretaría de Gobernación (SG), en el Distrito Federal, para exigir la reinstalación de la mesa nacional de diálogo, suspendida el pasado 18 de mayo. Advierten que de “continuar la cerrazón de las autoridades federales, hay condiciones para que los maestros de Michoacán se sumen a un paro indefinido de labores a partir del próximo día 31”. Contingentes representativos de Michoacán, Oaxaca, Tlaxcala, Guerrero, Baja California Sur, el valle de México y el Distrito Federal permanecen por más de dos horas en las inmediaciones de la dependencia, en espera de que el subsecretario de la SG, Juan Márquez Gutiérrez, reinstale la mesa de diálogo y atienda el pliego nacional de demandas, que incluye la cancelación de la ACE, incremento real al presupuesto educativo y abrogación inmediata de la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

En Texcoco, estado de México, integrantes del SME lanzan huevos al autobús de Luis Felipe Bravo Mena, candidato a la gubernatura del Estado de México del PAN, durante una gira de trabajo por el centro de la ciudad. Después del mediodía, Bravo Mena hace un recorrido por los portales y el mercado municipal de San Antonio. El grupo de electricistas le sale al paso coreando: “ni un voto al PAN” y “fuera el PAN”. Le reclaman que un gobierno federal panista los haya dejado sin trabajo al decretar la extinción Luz y Fuerza del Centro (LyFC). Los manifestantes no logran increpar al candidato porque sus seguidores le hacen una valla, lo que genera algunos empujones.

Jueves 26

En Guadalajara, estado de Jalisco, el congreso se declara a favor del pueblo wixárika que se opone a los trabajos de exploración que la empresa minera canadiense First Majestic Silver realiza en Wirikuta, centro ceremonial de los wixaritari (conocidos como huicholes), en la zona norte de San Luis Potosí.

Más de 8 mil integrantes de la CNTE marchan al palacio de gobierno de Michoacán, en Morelia; toman la Secretaría de Educación del estado e inician un paro de 48 horas para exigir un incremento salarial a nivel federal.

Viernes 27

El gobierno federal y el de Oaxaca entregan a representantes de la sección 22 del SNTE la tercera propuesta para atender su pliego de demandas, con la finalidad de terminar con el paro de labores iniciado el lunes pasado. Alfredo de la Rosa Chávez, coordinador de la mesa de diálogo del gobierno estatal, asegura que esta respuesta está fundamentada en las gestiones realizadas por Cué Monteagudo con la SG y la SEP, así como con el Comité Ejecutivo Nacional del SNTE. No obstante, se abstiene de dar a conocer los nuevos ofrecimientos. Azael Santiago Chepi, secretario general de la sección 22, afirma que esta respuesta presenta importantes avances, pero, antes de definir si se acepta, será presentada a la asamblea plenaria de la dirección seccional y después a la asamblea estatal para su valoración.

El Frente Amplio Contra la Supervía Poniente plantea crear un centro de atención y promoción para las comunidades indígenas migrantes en el Distrito Federal dentro de la llamada *zona cero* –donde

se realizan los trabajos para la construcción de la vialidad—, esto una vez que se logre la cancelación del proyecto. Lo anterior se plantea en el encuentro que vecinos que permanecen en plantón en la colonia La Malinche sostienen con los integrantes de la caravana proveniente del municipio autónomo de San Juan Copala, estado de Oaxaca. El propósito del encuentro, además de expresar mutua solidaridad, es compartir experiencias en la lucha que ambas comunidades mantienen, esta última para lograr la autonomía del pueblo triqui en su municipio.

Integrantes del Pacto Nacional por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres realizan un plantón frente a la Secretaría de Salud (SSA) para exigir a las autoridades que garanticen el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres a la salud sexual y reproductiva. En particular, demandan la obligación del Estado de defender el precepto constitucional que establece el derecho de los ciudadanos a decidir libremente sobre el número de hijos y su espaciamiento.

Después de permanecer tres días en refugios de los municipios de Buenavista Tomatlán y Apatzingán, cerca de 1.500 desplazados de siete comunidades de la región de Tierra Caliente, en Michoacán —que huían de los enfrentamientos entre bandas rivales del crimen organizado— regresan a sus hogares, como informa el alcalde de la primera localidad, Osvaldo Esquivel Lucatero. La mayoría de los refugiados, incluidos niños, laboran en la cosecha de limón en la región del valle de Apatzingán. Diariamente se recolectan alrededor de 3 mil toneladas del cítrico en la zona, por lo que la principal actividad económica se vio afectada.

Locatarios del mercado Adolfo López Mateos, en la ciudad de Cuernavaca, estado de Morelos, rechazan el proyecto del presidente municipal, Manuel Martínez Garrigós, de rehabilitar esa central de abasto con la inversión privada. Los comerciantes aseguran que no permitirán que se lleve a cabo ese proyecto, que temen acabará con la esencia del mercado.

Sábado 28

La activista Luz María González Armenta denuncia a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por actos de intimidación y hostigamiento por participar en una campaña contra la militarización de calles y carreteras de Tamaulipas. “Los soldados ya vinieron a mi casa en dos ocasiones, revisaron mi vehículo y exigieron con gritos, malas palabras y amenazas que borre la leyenda ‘No más militares’ pintada en el vidrio trasero”, señala. La defensora humanitaria, integrante de la Otra Campaña y dirigente de la organización Emiliano Zapata desde 1994, asegura que no se trata de un simple desencuentro, porque, en ambos incidentes, los militares también cerraron la calle, tocaron la puerta, la interrogaron e insultaron por el sólo hecho de ejercer su libertad de expresión.

La asamblea de la sección 22 del SNTE decide prolongar el paro de labores, aunque dispone la celebración de una ronda de asambleas delegacionales de información y consulta para determinar si aceptan el ofrecimiento del gobierno a su pliego de demandas. La ronda de asambleas delegacionales se realizará el lunes en las 836 representaciones sindicales y en ellas se preguntará a los más de 73 mil trabajadores si las respuestas son suficientes, mínimas o nulas. Azael Santiago Chepi, secretario general de la gremial, asegura que el tercer ofrecimiento de las administraciones federal y estatal presenta algunos avances para atender sus reclamos, especialmente los relacionados con la educación, aunque los políticos aún están pendientes.

Unos 200 usuarios del distrito de riego 100, de la región Alfajayucan, bloquean la carretera federal México-Laredo para exigir que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) les dote del suministro suficiente para el riego de sus cultivos. La dependencia ha informado que, debido a la escasez de agua por el estiaje, a los agricultores de esta región se les dotaría de 3.7 m³ por segundo. La medida

no ha satisfecho a los agricultores y ha sido razón para el bloqueo realizado cerca del entronque con los municipios Ixmiquilpan, Alfajayucan y Zimapán, en el estado de Hidalgo, como medida de presión para que la Conagua incremente la distribución.

Indígenas del ejido Mogotavo, municipio de Urique, en el estado de Chihuahua, consiguen una suspensión provisional en el juicio de amparo contra la demolición de una escuela, un albergue y varias viviendas enclavadas dentro la zona de las Barrancas del Cobre, donde se construyen un “pueblo mágico” y un complejo de hoteles y restaurantes de gran turismo. Los demandantes consideran un triunfo jurídico la suspensión otorgada por el juzgado quinto de distrito, que impide temporalmente la construcción del complejo planeado sobre 155 hectáreas, las mismas adquiridas de modo irregular por inversionistas y políticos, como el senador Manlio Fabio Beltrones, el diputado local Ricardo Orviz Blake y el también priísta ex líder de la Confederación de Nacional de Organizaciones Populares en la entidad, Omar Bazán Flores.

Activistas del colectivo Paremos las Balas Pintando las Fuentes y miembros de la logia masónica Independencia No. 2 tiñen de rojo grosella las aguas que bañan la estatua de la Diana Cazadora en el Paseo de la Reforma, en el Distrito Federal. Con cartulinas que reproducen el emblema de la campaña “No Más Sangre”, demandan la renuncia de Genaro García Luna y el regreso del ejército a sus cuarteles. Los activistas caminan en torno del monumento gritando consignas como: “¡Ni un muerto más!” y “¡Fuera Calderón!”.

Domingo 29

A una semana de que se cumpla el segundo aniversario del incendio de la guardería ABC de Hermosillo, estado de Sonora, en la que murieron 49 niños y 75 resultaron lesionados, padres de las víctimas, organizaciones civiles, juristas y activistas por la defensa de los derechos humanos realizan en el Zócalo de la Ciudad de México un juicio ciudadano al Estado mexicano. En el acto se recrea un juicio oral, en el que Emilio Álvarez Icaza, ex ombudsman capitalino, quien funge como juez, luego de escuchar las resoluciones del jurado y de los testigos de calidad, declara responsabilidad de Estado a la Presidencia de la República, al IMSS y a la PGR. Álvarez Icaza declara responsable al Poder Judicial de la Federación, en caso concreto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por la denegación de acceso a la justicia a las víctimas e imponer el peligrosísimo criterio de que los niños y niñas no son sujetos de derechos, así como desatender de manera grave el principio del interés superior de la infancia.

Lunes 30

Más de un centenar de personas marcha del Hemiciclo a Juárez –en la Alameda Central– a la Secretaría de Gobernación, en el Distrito Federal, para exigir la presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya, Gabriel Alberto Cruz Sánchez, Francisco Paredes Ruiz y las hermanas Daniela y Virginia Ortiz, todos ellos desaparecidos en Oaxaca hace cuatro años, y Lauro Juárez, desaparecido en Morelos, también en el 2007. La movilización es convocada por el FNLS y el comité de familiares de detenidos y desaparecidos “Hasta Encontrarlos”, y en la misma participan varias organizaciones. Por otra parte, en Chiapas, integrantes del mismo FNLS realizan marchas y bloqueos carreteros intermitentes en cinco regiones del estado para exigir la presentación con vida de los miembros del EPR.

La asamblea estatal de la sección 22 del SNTE analiza los resultados de la ronda de asambleas delegacionales de información y consulta, en las cuales las bases evaluaron la tercera respuesta de los gobiernos federal y estatal a su pliego petitorio. En el plantón instalado en el zócalo y calles del

centro histórico de Oaxaca, se pregunta a los más de 73 mil agremiados de las 836 representaciones sindicales de distintas regiones del estado si la oferta es suficiente, si se decreta un receso o si se mantiene el paro. El gobierno estatal ofreció incorporar en el sistema estatal los principios generales del Programa de Mejoramiento Educativo, alterno a la ACE, y destinar 65 millones de pesos a la Programación Detallada para regular a trabajadores contratados por honorarios.

Catedráticos y especialistas de la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero (UIEG) anuncian que, ante los abusos y el mal servicio que presta la CFE en la región de La Montaña, el 6 de junio se inaugurará una estación meteorológica en el campus de dicha institución ubicado en La Ciénega, municipio de Malinaltepec, con la finalidad de determinar qué tipo de energía alternativa conviene producir en la región.

La organización Asamblea de Juarenses por la Paz con Justicia y Dignidad, de Ciudad Juárez, anuncia que todo está listo para recibir a la Marcha Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezada por el escritor y poeta Javier Sicilia, el 9 de junio a las 16 horas en la glorieta del kilómetro 20 de la carretera Ciudad Juárez-Chihuahua. Activistas de esta organización informan que el 10 de junio se firmará el pacto ciudadano y a las 17 hrs. de ese día realizarán un emplazamiento a las autoridades en la explanada del monumento a Benito Juárez.

Policías del Mazatlán, estado de Sinaloa, lanzan gases lacrimógenos para dispersar una manifestación de pescadores, trabajadores de plantas congeladoras y sus familias, quienes arriban a la alcaldía para exigir al presidente municipal panista Alejandro Higuera Osuna apoyo para 1.400 desempleados. Selene Vidrios, una de las manifestantes, sufre convulsiones y es llevada a una clínica. Otras personas sufren crisis nerviosas.

Al grito de “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!” unas 400 personas, la mayoría familiares de desaparecidos por presuntos motivos políticos y sociales marchan por el centro histórico de la ciudad de Morelia, estado de Michoacán, y se plantan frente al congreso local para exigir a los diputados tipificar el delito de desaparición forzada como crimen de lesa humanidad.

La UACM informa que el agente del Ministerio Público adscrito a la delegación Benito Juárez, en el Distrito Federal, determinó el no ejercicio de la acción penal en contra de la doctora Esther Orozco, rectora de esa casa de estudios, luego de la denuncia penal que interpuso Abraham Guzmán de Blas, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la institución, por la supuesta comisión del delito de administración fraudulenta.

Martes 31

Integrantes del SME realizan un mitin fuera de la Cámara de Senadores, donde compareció el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón. En medio de la protesta, anuncian una serie de movilizaciones que incluye una marcha de usuarios del servicio de energía eléctrica del Estado de México contra los incrementos en las tarifas. Esa marcha se realizará el 3 de junio en Tepeji del Río y los usuarios llegarán hasta las oficinas de la CFE en la zona. Los electricistas también aseguran que suspenderán las movilizaciones hasta recuperar su fuente de trabajo y reiteran que acudirán a la reunión anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a llevarse a cabo en Ginebra, Suiza.

Con un recorrido por nueve entidades afectadas por la inseguridad, hasta llegar a Ciudad Juárez, la Caravana Ciudadana por la Paz con Justicia y Dignidad iniciará su trayecto el próximo sábado en Cuernavaca, con la idea de firmar el Pacto Ciudadano en aquella ciudad fronteriza, que incluiría actos binacionales en El Paso, Texas. Al hacer este anuncio, Javier Sicilia, asegura que a casi un

mes de la caravana a la Ciudad de México, los reclamos de la sociedad civil no han sido todavía escuchados. Los organizadores de esta nueva movilización subrayan que la demanda central de un cambio en la estrategia de combate al crimen organizado no ha sido atendida. Inclusive, el ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Álvarez Icaza, critica el reciente desfile militar en Ciudad Juárez, encabezado por el presidente Felipe Calderón, por agraviar a los habitantes de esa localidad y mostrar que se mantiene la visión de privilegiar la seguridad del Estado sobre la de los ciudadanos. Por este motivo, Álvarez Icaza asegura que se ha postergado la reunión con funcionarios del ejecutivo y también con el Congreso de la Unión para cuando concluya la caravana y se firme el Pacto Ciudadano, y señala que los reclamos sociales no sólo van dirigidos a la administración federal sino a los tres niveles de gobierno, que están involucrados en la obligación de garantizar la seguridad de los mexicanos. En principio, la caravana partirá de Cuernavaca a la ciudad de México el próximo sábado 4 de junio. Tras un mitin en el Ángel de la Independencia, se dirigirá a Morelia, San Luis Potosí, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y Chihuahua. En cada punto se efectuarán actos públicos, hasta culminar con la firma del Pacto Ciudadano en Ciudad Juárez.

Más de 4 mil integrantes de la CNTE marchan al palacio de gobierno de Morelia, estado de Michoacán, donde exigen a las autoridades estatales un aumento salarial superior al 4.7% anunciado. Jorge Cázares Torres, dirigente de la sección 18 de la CNTE, calcula que más de 50 mil de los 65 mil maestros de la entidad se suman al paro indefinido en demanda de aumento y del pago de 200 millones de pesos que el gobierno estatal adeuda por la llamada minuta 2010, además de prestaciones y apoyos para la educación.

La asamblea estatal de la sección 22 del SNTE, en Oaxaca, acuerda concluir el viernes 3 de junio su plantón en el centro histórico de la ciudad y el paro estatal que inició el 23 de mayo pasado. Las actividades escolares se reanudarán el lunes 6 de junio. Al menos 20.884 delegados votan a favor de aceptar la oferta de los gobiernos federal y estatal y volver a las aulas, mientras que 13.793 se oponen. Profesores bloquean las ciudades administrativa y judicial, el congreso local, los juzgados del poder judicial federal, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y las delegaciones de las secretarías de Hacienda, de Desarrollo Social y de Comunicaciones y Transportes, además de las plazas comerciales Del Valle y Oaxaca y las radioemisoras Radio Hit y Grupo Oro. Demandan al gobierno estatal la cancelación de la ACE y la aplicación del programa alternativo planteado por el gremio. Además exigen que renuncien la secretaria de Gobierno, Irma Piñeiro Arias, y el director del IEEPO, Bernardo Vásquez Guzmán, por ser operadores políticos de la dirigente nacional del SNTE, Elba Esther Gordillo.

Glosario de siglas

ACE	Alianza para la Calidad Educativa
AI	Amnistía Internacional
ALDF	Asamblea Legislativa del Distrito Federal
Ameca	Asociación Mexicana de Estudios Sobre Cannabis
APPO	Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca
CCE	Coalición Ciudadana por la Educación
CDHDF	Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
CFE	Comisión Federal de Electricidad
Cideci Las Casas	Centro Indígena de Capacitación Integral Fray Bartolomé de Las Casas
CNC	Confederación Nacional Campesina
CNTE	Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación

Coddehum	Comisión Estatal de Derechos Humanos
Conagua	Comisión Nacional del Agua
Conalep	Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
CPS	Cártel del Pacífico Sur
CPUVO	Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán
CU	Consejo Universitario
Enlace	Evaluación Nacional de Logro Académico en los Centros Escolares
EPR	Ejército Popular Revolucionario
EZLN	Ejército Zapatista de Liberación Nacional
FCPyS	Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
FGE	Fiscalía General del Estado
FITIM	Federación Internacional de Trabajadores de la Industria Metalúrgica
FNLS	Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNPCL	Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche
FPDT	Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra
FSM	Frente Sindical Mexicano
IEEPO	Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca
IEMS	Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal
IMDHD	Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia
IMSS	Instituto Mexicano del Seguro Social
INAH	Instituto Nacional de Antropología e Historia
ISSSTE	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
JBG	Junta de buen gobierno zapatista
LGBTTTI	Movimiento lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual
Licons	Leche Industrializada Conasupo
Limeddh	Liga Mexicana de Defensa por los Derechos Humanos
LyFC	Luz y Fuerza del Centro
MAEES	Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior
Morena	Movimiento de Regeneración Nacional
Musocgp	Movimiento de Unidad Social por un Gobierno del Pueblo
OIA	Operadora de Inmuebles Acapulco
OICE	Organización Independiente de Comerciantes Establecidos
OIT	Organización Internacional del Trabajo
ONU	Organización de Naciones Unidas
PAN	Partido Acción Nacional
PGR	Procuraduría General de la República
PRD	Partido de la Revolución Democrática
PRI	Partido de la Revolución Institucional
Prodh	Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
Sagarpa	Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
SCJN	Suprema Corte de Justicia de la Nación
SE	Secretaría de Economía
SEE	Secretaría de Educación en el Estado
Sedena	Secretaría de la Defensa Nacional
SEP	Secretaría de Educación Pública
SG	Secretaría de Gobernación
SME	Sindicato Mexicano de Electricistas
SNTE	Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación
SSA	Secretaría de Salud
SSP	Seguridad Pública
STUNAM	Sindicatos de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México

SUTIEMS	Secretaria del Exterior del Sindicato Unico de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior
TFCA	Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje
UABCS	Universidad Autónoma de Baja California Sur
UACM	Universidad Autónoma de la Ciudad de México
UIEG	Universidad Intercultural del Estado de Guerrero
UNAM	Universidad Nacional Autónoma de México
UNT	Unión Nacional de Trabajadores

Realizada por el Comité de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura de México del Observatorio Social de América Latina (OSAL-CLACSO).

Integrantes: Fernando Munguía Galeana y Mariana López de la Vega.

Fuentes: diarios La Jornada y El Universal.

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales



Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais



OSAL

Observatorio Social de América Latina
Publicación electrónica

Cronología del Conflicto Social

México

Junio de 2011

Editada en Marzo 2012



Agencia Sueca
de Desarrollo Internacional



Agencia Noruega para la
Cooperación al Desarrollo



El Observatorio Social de América Latina [OSAL] cuenta con el apoyo de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional [ASDI], la Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo [NORAD] y la Agencia de Cooperación Internacional de las Islas Baleares [ACIB].

Documento de trabajo N° 942

*Realizado por el Comité de Seguimiento y Análisis
del Conflicto Social y la Coyuntura de
México*



Integrantes

Mariana López de la Vega

Fernando Munguía Galeana

Fuentes

La Jornada

El Universal

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Se autoriza la reproducción de los artículos en cualquier medio a condición de la mención de la fuente y previa comunicación al director.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en el documento incumbe exclusivamente al autor o a los autores firmantes y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

El **Observatorio Social de América Latina** (OSAL) constituye una iniciativa del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinada a la promoción de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, las dinámicas de participación y los repertorios de acción de los movimientos sociales y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado es uno de los resultados de este trabajo de relevo y registro llevado a cabo en el marco del programa. Se trata de un escrito en el que se sintetizan las principales acciones de movilización y protesta social y las medidas políticas llevadas a cabo durante el mes indicado en el país referido.

La cronología presentada ha sido elaborada por uno de los **Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana** que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo la coordinación del equipo de investigación mexicano, que forma parte de la red institucional de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.

Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana

PAÍS	INSTITUCIÓN	COORDINACIÓN
Argentina y Uruguay	PIMSA (Argentina)	María Celia Cotarelo
Bolivia	CIDES – UMSA	Dunia Mokrani Chávez Pilar Uriona Crespo
Brasil	LPP - UERJ	Roberto Leher
Chile	DI - UARCIS	Juan Carlos Gómez Leyton
Colombia	Escuela Nacional Sindical	Guillermo Correa Montoya
Costa Rica	IIS - FCS - UCR	Sindy Mora Solano
Ecuador	Centro de Investigaciones CIUDAD	Mario Unda
Guatemala	FLACSO Guatemala	Simona Yagenova
México	FCPS - UNAM	Massimo Modonesi Lucio Fernando Oliver Costilla
Panamá, El Salvador, Nicaragua y Honduras	CELA “Justo Arosemena” (Panamá)	Marco A. Gandásegui (h)
Paraguay	Centro de Documentación y Estudios	Quintín Riquelme
Perú	Instituto de Estudios Peruanos	Ramón Pajuelo Teves
República Dominicana y Puerto Rico	CES “Padre Juan Montalvo” (Rep. Dominicana)	Octavio Figueroa
Venezuela	PROVEA	Marco Antonio Ponce

México

Cronología del conflicto social

Junio de 2011

Miércoles 1

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) señala en su informe que México fracasó en sus intentos por juzgar a los autores de asesinatos de periodistas por un sistema legal plagado de corrupción. En el informe, titulado *Eludir los asesinatos*, el CPJ lista a los 13 países del mundo donde hay una mayor impunidad ante los casos de asesinatos de periodistas. El CPJ cifra en 251 los periodistas muertos impunemente en la década pasada en todo el mundo. México figura en el número 8 de la lista, mientras Colombia se encuentra en el número 5 y Brasil en el 12.

En Guadalajara, Jalisco, en una mesa sin diálogo que supuestamente sería resolutive, el subsecretario de la Secretaría de Gobernación (SG), Juan Marcos Gutiérrez González, advierte a pobladores de Temacapulín, Acasico y Palmarejo que seguirá la construcción de la presa El Zapotillo y sus pueblos serán inundados. También insiste a que los opositores al proyecto diriman sus quejas por la vía legal, so pena de ser considerados delincuentes. La mesa se realiza en Tepatitlán, en los Altos de Jalisco, lejos de los municipios a ser afectados por la presa (Cañadas de Obregón y Mexxicacán) y más cerca de Guanajuato, de donde llegan funcionarios estatales y medios de comunicación. Se prevé que El Zapotillo abastecerá a la ciudad de León.

El acoso a la comunidad académica y estudiantil que prevalece en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) incrementa el encono y la polarización en esa casa de estudios. El sindicato de la universidad señala que luego de que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) determinó no ejercer acción penal contra la rectora Esther Orozco, por el manejo fraudulento de las cuotas sindicales, emprenderá un plan de acción para recuperar el respeto a los derechos humanos y laborales en esa institución.

Jueves 2

En Cuernavaca, el congreso de Morelos cita a comparecer al titular de la secretaría de auxilio y protección ciudadana de esta capital, Mauricio Vega Chavaje, para que dé a conocer los pormenores de la detención de Jethro Ramsés Sánchez Santana, efectuada por elementos de esa corporación el primero de mayo, día desde el cual se desconoce su paradero. Los agentes municipales aseguran haber entregado al joven de 26 años a elementos de las fuerzas federales, pero sus familiares no han vuelto a saber de él y han realizado dos marchas para exigir a las autoridades que lo presenten con vida. Los legisladores también invitan al general de la 24ª Zona Militar, Leopoldo Díaz Pérez, así como a los delegados de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Federal (PF) en Morelos, con la finalidad de que se aclare la desaparición de Sánchez Santana y que el joven sea presentado con vida.

En el Distrito Federal será hasta la próxima semana cuando la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal consigne el expediente en torno a la presunta agresión que sufrió el nigeriano Isaac Echenidu Nwachukwu en la calles de la colonia Obrera, la medianoche del pasado 10 de mayo, por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) capitalina, así como informa el procurador, Miguel Ángel Mancera Espinosa. El funcionario precisa que se están agregando otros dictámenes periciales a la averiguación previa, aunado a que no se han presentado a declarar los

policías preventivos del sector Asturias que aparentemente agredieron en primera instancia al africano, quien, cuando era atendido por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, se echó a correr sobre calzada de Tlalpan, donde fue atropellado.

En el Distrito Federal, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emite una recomendación a la PGJDF por la dilación “injustificada” en la integración y determinación de la averiguación previa que inició hace más de 10 años, con motivo de la denuncia interpuesta por ex trabajadores de la desaparecida Ruta 100 por administración fraudulenta de tres fideicomisos. El organismo asegura que se acreditó que la dependencia se ha negado a investigar los hechos pues, sin agotar la investigación, el Ministerio Público consignó el expediente en dos ocasiones ante la juez 47 penal, mismas que la juzgadora lo devolvió por falta de agotamiento de todas las líneas de investigación posibles y en las que le pidió la realización de distintas diligencias.

El gobierno de Oaxaca anuncia que en los próximos días recuperará las escuelas que controla la sección 59 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), como parte de las exigencias para que el magisterio oaxaqueño concluya un paro indefinido que afecta a 1.3 millones de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en el estado. Sin embargo, los maestros paristas, encabezados por la sección 22 del SNTE, consideran que aún son insuficientes las respuestas que las autoridades han dado a sus peticiones, especialmente en el aspecto político, por lo que se mantiene la paralización del sistema educativo elemental. “Las respuestas son mínimas e insuficientes; han dado respuesta a algunas de nuestras demandas, como la cancelación de módulos de la sección 59, pero faltan las demandas políticas como la aparición con vida de nuestro compañero Carlos René Román Salazar y castigo a los responsables de los hechos de 2006”, declara el dirigente de la sección 22, Azael Santiago Chepi.

Viernes 3

Las comisiones de Derechos Humanos y de Gobernación de la Cámara de Diputados acuerdan reunirse para definir de manera conjunta los temas, participantes y contenidos de la consulta pública para debatir la reforma a la Ley de Seguridad Nacional. “Tenemos que ser protagonistas de ese ejercicio y no sólo invitados al foro. Una ley tan importante demanda la participación activa de la Comisión de Derechos Humanos”, acota Manuel Cadena, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), luego de que esa instancia legislativa concluyera que no sólo la de Gobernación decida la ruta de la consulta, denominada “Derechos Humanos, Democracia y Seguridad Nacional”, convocada para el 21 de junio. Durante la reunión ordinaria de la comisión, el jueves 2, diputados de PRI y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) expresan que debía incluirse la visión del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como una política comparada en seguridad nacional sobre la experiencia de la Unión Europea, Estados Unidos y países de América Latina.

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, dependiente de la PGR, ejerció acción penal ante un juez de distrito en dicha materia, con sede en el estado de Puebla, contra agentes migratorios y un policía federal por haber atacado el 16 de julio de 2010, en el municipio de Sultepec, Puebla, al periodista Irineo Mújica Arzate, cuando realizaba un documental relacionado con las agresiones que sufren los migrantes que viajan por esa ruta hacia Estados Unidos. En un comunicado, el Ministerio Público Federal da a conocer que ejerció acción penal contra los agentes que atacaron a Irineo Mújica cuando grababa “imágenes de un operativo del personal del Instituto Nacional de Migración y de la Policía Federal”.

En Jalapa, Veracruz, el periodista Noel López Olgún, quien se encontraba desaparecido desde el pasado 8 de marzo, cuando fue levantado por un grupo armado, fue localizado muerto y sus restos

desenterrados de una fosa clandestina en el municipio de Jáltipan, así como reportan fuentes de las procuradurías General de la República y de Justicia del Estado. La localización fue posible por la declaración de Alejandro Castro Chirinos, presunto sicario detenido el domingo pasado en Coatzacoalcos, quien confesó haber participado en el rapto y homicidio del comunicador. El cadáver fue exhumado el miércoles de una fosa localizada en el rancho Los Tres Hermanos, ubicado en el ejido Malacate, en Jáltipan, y posteriormente trasladado a una funeraria del vecino municipio de Chinameca, donde médicos forenses le hicieron la necropsia y los familiares reconocieron los restos por la vestimenta y placas dentales.

En Chilpancingo, en lo que va del año, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero ha recibido 382 quejas por violaciones a las garantías individuales en la entidad, de las cuales más de 40 involucran a elementos del ejército y la armada, así como informa Juan Alarcón Hernández, presidente del organismo. No obstante, el funcionario dice que las denuncias contra miembros de esas instituciones militares han disminuido, pues entre 2009 y 2010 se contabilizaron 350. El ombudsman externa su preocupación por la presencia de grupos de civiles armados (paramilitares), principalmente en la región de Tierra Caliente. En tanto, el ex guerrillero Eloy Cisneros Guillén da a conocer que este jueves se presentó al secretario general de gobierno del estado, Humberto Salgado Gómez, el anteproyecto para la creación de una comisión de la verdad que investigue el paradero de más de 482 personas desaparecidas durante la llamada “guerra sucia” en el estado, en la década de 1970. Al respecto, José Enrique González Ruiz, ex rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, quien acude a la reunión realizada en el palacio de gobierno, manifiesta que dicha comisión deberá ser pública, independiente, con personalidad jurídica propia, no gubernamental ni jurisdiccional.

En Morelia, Michoacán, una caravana de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) parte rumbo a la ciudad de México, para sumarse a la marcha nacional que la organización efectuará hacia a Los Pinos, donde demandarán un incremento salarial digno y recursos para la educación, además de pronunciarse contra la reforma laboral que promueve el poder ejecutivo federal. Los maestros parten en unos 10 autobuses y 150 vehículos, del centro histórico de Morelia, donde se pronunciaron contra la política de Elba Esther Gordillo, presidenta vitalicia del SNTE, y de las políticas neoliberales del gobierno de Felipe Calderón.

En Oaxaca, líderes magisteriales opuestos al paro que afecta desde hace dos semanas al sistema educativo oaxaqueño responsabilizan al gobierno estatal de la violencia que genere una medida de fuerza que intente despojarlos de las escuelas que controlan y que el movimiento de la sección 22 exige se les devuelva como parte de sus demandas para que se reinstauren las clases para más de un millón y 300 mil alumnos. Tras el anuncio oficial de que se entregarán a los maestros paristas 146 escuelas y 148 módulos que controla la sección 59 del SNTE, la dirigente de esa organización, Erika Rapp Soto, advirtió que sus afiliados defenderán los espacios ganados. Unos 70 mil profesores afiliados a la sección 22 del SNTE inician un paro de labores desde el pasado 23 de mayo para exigir a los gobiernos federal y estatal solución a sus demandas económicas, sociales y políticas, a la vez que establecieron un plantón en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca.

El jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, ordena a la Secretaría de Seguridad Pública y a la PGJDF castigar a los responsables de la muerte del nigeriano fallecido en calzada Tlalpan, a la altura de San Antonio Abad, el pasado 10 de mayo. Frente a la viuda del nigeriano, Liduvina Castillo, el mandatario giró instrucciones a ambas dependencias para que no quede impune dicha muerte, la cual, a decir de la mujer, fue ocasionada por policías auxiliares. Sobre este caso, el ombudsman Luis González Placencia indica que en las omisiones de las autoridades involucradas, así como sus contradicciones, reflejan actos de encubrimiento de los responsables de la agresión. El día 2, Liduvina Castillo acompañada del presidente del Comité de Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos, Wilner Metelus, realizaron una protesta con una huelga de hambre

frente a la sede del antiguo palacio del Ayuntamiento para pedir castigo para los responsables de la muerte de su esposo. Según la viuda, su esposo fue agredido por elementos de la SSP del Distrito Federal, quienes lo abordaron sin razón alguna cuando esperaba un taxi, para golpearlo. Tras ello, el hombre fue atropellado y murió después de ser hospitalizado.

Sábado 4

La Caravana Ciudadana por la Paz con Justicia y Dignidad –que parte de Cuernavaca, Morelos, rumbo a Ciudad Juárez, Chihuahua– busca mantener la movilización nacional contra la impunidad, la violencia y la militarización de la vida pública en México, así como declaran los organizadores. De acuerdo con los manifestantes, se espera que a las 7 de la mañana de este sábado salgan unos 10 autobuses con unas 300 personas de la glorieta de la Paz, ubicada en el norte de la capital morelense. El poeta Javier Sicilia encabezará la protesta a partir del monumento a la Independencia de la ciudad de México, donde hará un pronunciamiento.

En Saltillo, Coahuila, en la víspera de que arranque la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad, diversas instancias coahuilenses aglutinadas en el Colectivo de Organizaciones de la Sociedad Civil por la Paz con Justicia y Dignidad, entre ellas el área de comunicación de la diócesis de Saltillo, el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Belén Posada del Migrante, Humanidad Sin Fronteras y Colectivo Grafitos y Frontera con Justicia expresan su respaldo a la marcha y llaman a sumarse a ella a su paso por ese estado. Estas agrupaciones anuncian que el próximo 7 de junio recibirán a la caravana –a su paso por Saltillo– y ahí víctimas de la delincuencia e injusticias, acompañadas por el obispo Raúl Vera, expresarán su sentir ante la situación que vive México. La diócesis de Saltillo informa que, aunque por ahora no se sabe si Vera se podrá sumar al recorrido hacia Ciudad Juárez, sí estará presente cuando la caravana llegue a esa urbe para firmar el pacto ciudadano.

En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, la Red contra la Represión y por la Solidaridad llama a los adherentes de la otra campaña en todo el país, en particular a quienes integran la red, a participar en la Caravana Ciudadana por la Paz con Justicia y Dignidad, convocada por la Red por la Paz y la Justicia, que encabeza el escritor Javier Sicilia. La movilización, que inicia en Cuernavaca, Morelos, recorrerá el territorio nacional para llegar a Ciudad Juárez la próxima semana. La red convoca a colectivos, organizaciones e individuos a que, “de acuerdo con sus formas y modos, realicen actividades de difusión, información y solidaridad con la caravana”, la cual tocará el Distrito Federal, Morelia, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Torreón, Saltillo, Monterrey y Chihuahua, para realizar una reunión el día 10 en Ciudad Juárez y un encuentro internacional transfronterizo el día 11. “A los compañeros y compañeras de los lugares por donde pasará la caravana los exhortamos a rodearla de solidaridad y apoyarla”. En tanto, en Las Margaritas, Chiapas, el Frente Popular Campesino Lucio Cabañas, también adherente de la otra campaña, se deslinda de un grupo que, diciendo pertenecer a su organización, se posesionó de un rancho particular en el tramo carretero Comitán-Las Margaritas, en la región Selva Fronteriza. El frente Lucio Cabañas informa que el 30 de mayo, Matilde Hernández Álvarez, Armando Luna Álvarez, Óscar y Ernesto López García, este último trabajador del programa gubernamental Chiapas Solidario, ocuparon una propiedad ostentándose falsamente como miembros del citado frente. “Estas personas son sólo despojadores de terreno, con el fin de vender cierta cantidad por lote, engañando a la gente.” Por último, miembros de la Sesta Internacional en la ciudad de Berlín, Alemania, también adherentes de la otra campaña, anuncian una protesta este domingo 7 para exigir la libertad de Patricio Domínguez Vázquez, base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), encarcelado en Motozintla, y de los “cinco de Bachajón”, presos en Playas de Catazajá y adherentes de la Sexta declaración de la selva Lacandona del ejido San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón. Todos ellos, “detenidos arbitrariamente y en constante

hostigamiento y amenazas” por el gobierno chiapaneco, “son inocentes y víctimas del sistema de justicia mexicano”, declaran los integrantes.

En el marco del 17º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, organizaciones sociales advierten que el Estado mexicano sigue haciendo caso omiso de las múltiples recomendaciones internacionales para eliminar la figura del arraigo y modificar el Código de Justicia Militar. Así lo afirma Silvano Cantú, director de incidencia e investigación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), uno de los organismos que hace unos días acudió a Ginebra, Suiza, para denunciar nuevamente “los graves ataques a las garantías individuales que ocurren en el país de forma cotidiana”. En dicho foro, iniciado el 30 de mayo, los colectivos mexicanos hicieron un reconocimiento público al Congreso de la Unión por haber aprobado la reforma en materia de derechos humanos, aunque también exhortaron al presidente Felipe Calderón para que publique cuanto antes dicha enmienda en el Diario Oficial de la Federación.

Alrededor de mil integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación marchan del Zócalo de la ciudad de México hasta la torre del Caballito y de allí a la Secretaría de Gobernación, donde efectúan un mitin y obtienen de las autoridades el compromiso de que el próximo jueves serán recibidos por el subsecretario Juan Carlos Rodríguez para discutir sus demandas en una mesa de negociaciones. Desde abril los inconformes exigen cancelar las órdenes de arresto contra luchadores sociales y sindicalistas independientes del país y la aparición con vida de Carlos Román Salazar y José Guadalupe Pérez, profesores desaparecidos en marzo “como represalia por su activismo social”. Además, demandan abrogar la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, que obliga a los maestros a cumplir 30 años de servicio a los hombres y 28 a las mujeres, además de fijar edad de jubilación ascendente a partir de los 51 años. Los mentores rechazan la Alianza por la Calidad de la Educación, pues consideran que quita trabajo a los normalistas, elimina los contratos definitivos y perjudica los principios básicos de la educación pública. Epifanio Paredes, profesor de la sección 22 del SNTE, de Oaxaca, afirma que el plantón nacional que los docentes instalaron en la Plaza de la Constitución busca presionar al gobierno para que atienda sus exigencias. En Oaxaca, la sección 22 del SNTE finalizó el día 3 el paro de labores y el plantón que mantuvo dos semanas en el zócalo local, después de que el martes 30 aceptó la tercera oferta en materias económica, educativa y social que los gobiernos federal y estatal les hicieron.

Domingo 5

Se cumplen veintiún años de la desaparición forzada de Tomás Pérez Francisco, ocurrida la tarde del martes primero de mayo de 1990, en el municipio de Pantepec, en el norte del estado de Puebla. Desde entonces, sus familiares han buscado y denunciado ante las instancias ministeriales y de derechos humanos, recibiendo insultantes respuestas tendientes a la impunidad y la perpetuidad de este crimen de lesa humanidad. “Toca el turno a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla: veremos qué nos responde” sostienen María Rodríguez Santiago y Guadalupe Pérez Rodríguez.

En Cuernavaca, Morelos, inicia nuevo episodio en la lucha contra la guerra al crimen organizado asumida por este movimiento. Luego la caravana hace escala en la capital del país y pernocta en Michoacán, una de las entidades más sacudidas por la violencia y primer estado donde Calderón comenzó su experimento militar para combatirlo, en diciembre de 2006. “Los inocentes están pagando esta guerra, por la negligencia de las instituciones, por la corrupción de las instituciones, que ha permitido que el crimen campee, como lo está haciendo, y cobrando las víctimas que somos los ciudadanos.”, denuncia Sicilia.

En Morelia, Michoacán, en el comienzo del largo trayecto en la “ruta del consuelo”, con destino final al “epicentro del dolor”, Ciudad Juárez, Chihuahua, la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad se adentra en las tierras de donde es originario el presidente Felipe Calderón. En el mismo sitio donde ocurrieron los granadazos de septiembre de 2008 se realiza el mitin, en el que se ofrece un recuento de los daños procurados por el sexenio calderonista: el “michoacanazo”, muertos, secuestrados y desaparecidos en Acapulco, la Familia Michoacana y la lucha de los indígenas de Cherán. “Tenemos que salir de este infierno y dolor que nos han impuesto”, resume el poeta Javier Sicilia en su arenga para que la sociedad ponga fin a las decenas de miles de “bajas colaterales o abstracciones que nos quieren hacer creer, cuando detrás de esos rostros hay vidas segadas, inocentes o criminales que no nacieron así”.

Por dos años los padres de las víctimas del incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, han padecido un viacrucis en busca de justicia para los 49 niños que murieron y los 75 lesionados debido a esa tragedia. La justicia sigue pendiente. Los decesos no son el único saldo: de los 104 menores que sobrevivieron, 24 tienen aún las huellas de las llamas en sus cuerpos, sufrieron quemaduras de segundo y tercer grados que siguen siendo atendidas. Familiares de los menores demandan castigo para los responsables directos e indirectos de la tragedia: entre ellos, el entonces director y el actual titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Juan Molinar Hortasitas y Daniel Karam, respectivamente, así como el ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours.

En San Luis Potosí, “la rebelión es un derecho” es una de las tantas consignas que, camino a Ciudad Juárez, proclaman en mantas o en playeras los integrantes de la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad que arriba a la capital potosina, donde es recibida entre cantos que pretenden protestar por la inseguridad, poesía que retuerce el lenguaje para condenar la guerra que se impone y una interminable lista de historias trágicas, iguales y diferentes a la vez, todas dramáticas. Una parte de la multitud congregada en la plaza central tiene ya un veredicto de los culpables y corea: “los asesinos, están en Los Pinos”.

En Hermosillo, más de 8 mil personas participan en la marcha por el segundo aniversario del incendio de la guardería ABC, que en principio cobró la vida de 31 niños y bebés y luego la de otros 18 que salieron agonizantes de la conflagración, para dar un total de 49, a los que se añaden más de cien con secuelas de mayor o menor gravedad por la exposición al fuego y el humo tóxicos. Los manifestantes –muchos de los cuales portan pancartas y cartulinas– lanzan gritos en demanda de justicia para los niños fallecidos y los lesionados, además de prisión para los que señalan como responsables del desastre, entre ellos el director del IMSS, Daniel Karam, su antecesor Juan Molinar Horcasitas, el ex gobernador Eduardo Bours y sus ex dependientes Gilberto Inda Durán y Wilebaldo Alatraste Candiani, que ocupaban la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Protección Civil estatales. También exigen la destitución del procurador de justicia estatal, Abel Murrieta Gutiérrez, quien ocupaba el cargo el día de la tragedia, y fue ratificado por el posterior gobierno encabezado por el panista Guillermo Padrés Elías, responsable de obstruir el proceso. Durante la marcha, Julio César Márquez, vocero del Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio, denuncia que se cumplieron dos años de búsqueda de justicia y en demanda de medidas oficiales para que la tragedia no se repita, años que también fueron de luto y sufrimiento por falta de respuestas del gobierno, y –en contraparte– de apoyo social en un país agraviado como los mismos padres de los niños fallecidos.

Lunes 6

A las 12 hrs, 25 zapotecos, todos autoridades electas del municipio de Santiago Yaveo, distrito de Choapam, Oaxaca, inician una huelga de hambre indefinida adentro de la Cámara de Diputados del

estado, con la exigencia de que se respete la autonomía de los pueblos indígenas y del mencionado municipio, en concordancia con los artículos 2 y 115 de la Constitución. Los zapotecos se vieron obligados a tomar esta medida extrema después de más de cinco meses de trámites infructuosos, sin que hasta hoy la Cámara de Diputados haya cumplido con el mandato de nombrar un concejo de administración municipal, a pesar de que éste es el acuerdo de la mayoría de los pueblos de Santiago Yaveo. El ejecutivo ha cumplido con su tarea, participando en los acuerdos construidos entre los pueblos y ha propuesto la composición del concejo a los diputados; sin embargo, los partidos políticos –en este caso el PRD de Amador Jara y Rey Morales, que defendió a Ulises Ruiz Ortiz (ex gobernador de Oaxaca)– se ha opuesto a que se respeten los acuerdos entre los pueblos y ha azuzado el odio para tratar de ocupar posiciones en el municipio, que se rige por el régimen de usos y costumbres, y donde no tienen cabida legal los partidos políticos. “Exigimos el respeto a los acuerdos firmados por el ejecutivo y los legisladores el 15 de enero de 2011, que se respete la voluntad popular y que de una vez por todas se reconozca a nuestro concejo. Llamamos a que se avance en la segunda etapa de la necesaria reforma constitucional en el estado, la relativa al reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos indígenas y a frenar la contradicción jurídica que privilegia el derecho individual sobre el colectivo, lo que permite a un puñado de personas desgastar a todo un pueblo y pretender chantajearlo por ambiciones económicas y políticas”, declaran las autoridades reconocidas y electas de Santiago Yaveo.

En Zacatecas, el allanamiento por la PF de las instalaciones del centro de derechos humanos Paso del Norte, en Ciudad Juárez, provoca indignación y enojo entre los miembros de la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad, quienes en un pronunciamiento leído por el poeta Javier Sicilia, en la plaza central de esta urbe, culpan de los hechos al presidente Felipe Calderón. “¿Qué busca Felipe Calderón en el centro de derechos humanos Paso del Norte? ¿El expediente de dolor e injusticia? ¿Las pruebas irrefutables de su incapacidad para garantizar paz y legalidad? ¿Qué guerra pretende ganar instruyendo a su gente a comportarse como delincuentes?”, expresa Sicilia, quien comenta que dicho centro, dirigido por el sacerdote Óscar Enríquez, es el organismo de la sociedad civil que participa en la recepción de la caravana en Ciudad Juárez.

En Ciudad Juárez, organizaciones no gubernamentales (ONG) nacionales e internacionales exigen a autoridades estatales y federales esclarecer el cateo realizado por la PF a las instalaciones del centro de derechos humanos Paso del Norte, en Ciudad Juárez, y califican el operativo de “acto de intimidación” para los organizadores de la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad, que encabeza el poeta Javier Sicilia y que llegará a esta frontera el viernes 10. El sacerdote católico Óscar Enríquez, director del centro, declara que, por tratarse de un “operativo anticonstitucional” para amedrentar a los defensores de las garantías individuales, se presentaron quejas ante las comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además, se realizó una demanda ante la PGR por abuso de autoridad, allanamiento de morada y daños. La ONG Human Rights Watch, con sede en Nueva York, demandó a la fiscalía mexicana realizar una investigación exhaustiva e imparcial, luego de que a las 20:30 horas del domingo 5 unos 20 agentes irrumpieron en las instalaciones del centro, el cual se caracteriza por su férrea defensa de las garantías de personas detenidas por militares durante operativos anticrimen.

El subcomandante Marcos envía una carta en la que expresa la admiración y respeto de los zapatistas por el Movimiento Ciudadano por la Justicia y su marcha por la paz iniciada el pasado sábado en Cuernavaca, Morelos, rumbo a Ciudad Juárez, Chihuahua. Dirigida principalmente a los familiares de los bebés muertos y heridos en el incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, Marcos señala en la misiva que los zapatistas reconocen su paso y su esfuerzo, y los acompañan en el compromiso por que nunca más se repita la desgracia y “termine el carnaval sangriento con que arriba festejan la impunidad y la desvergüenza”. “La lucha de ustedes nos hace sentir respeto y admiración por su causa, por su paso y por su empeño”, sostiene el líder zapatista en

su mensaje al Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio, a los familiares de las víctimas de la guardería ABC.

En la ceremonia “Un Minuto por No Más Sangre”, académicos, defensores de los derechos humanos, investigadores, periodistas, moneros, artistas, intelectuales y familiares de víctimas exigen al gobierno federal poner fin a la guerra contra el crimen organizado, abatir la impunidad, justicia y el retorno de los militares a sus cuarteles. Los participantes llenan el museo de la Ciudad de México, donde hay más de 120 oradores, todos coincidiendo en la demanda de poner fin a la violencia en el país. Eduardo del Río, Rius, se dice sorprendido. “No pensé que viniera tanta gente. Como me consideran el padre de la criatura, a mis años sólo puedo ser padre de ideas. Ya me hice la vasectomía”, declara irónicamente. La campaña empezó el 10 de enero con la aparición, en más de 30 periódicos y revistas, de caricaturas alusivas al tema.

Martes 7

Decenas de organizaciones defensoras de garantías condenan el allanamiento a las oficinas del centro de derechos humanos Paso del Norte, en Ciudad Juárez, Chihuahua, y exigen a los gobiernos estatal y federal garantizar la seguridad e integridad de los miembros de ese centro. La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, los centros Miguel Agustín Pro Juárez, de las Mujeres, Solidaridad Popular, Victoria Diez, Fray Matías de Córdova, Fray Julián Garcés, Tlachinollan, Fray Bartolomé de las casas, Fray Francisco de Vitoria y el Cereal, entre muchos otros, exigen una investigación para identificar a los autores intelectuales y materiales del operativo policiaco en el que fueron allanadas y cateadas las oficinas de Paso del Norte, y que se les apliquen las sanciones correspondientes.

La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH) deplora enérgicamente el allanamiento realizado por la PF el 5 de junio sin orden de cateo a las instalaciones del centro Paso del Norte que dirige el sacerdote Óscar Enríquez. Testigos afirman que participaron las patrullas con las matrículas 12427, 13972, 13943, 13748 y 1057. Con estas acciones el gobierno federal refrenda su compromiso con la impunidad y trata de acallar y amedrentar a la Caravana por la Paz.

En Saltillo, Coahuila, la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad comienza su incursión en el norte, y la violencia se asoma con mayor crudeza conforme se adentra en este teatro de guerra en que se ha transformado la región. Aquí domina el crimen organizado, pese a la guerra oficial emprendida en su contra y su saldo sangriento. Se percibe rabia, pero también temor, dolor y, sobre todo, desesperanza. En Saltillo, las desapariciones forzadas son el tema que más golpea a la sociedad, por un total de 180, según denuncia Diana García, de la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos, cuyo tono sereno va quebrándose conforme describe la realidad y raya en la ira en denunciar la indiferencia de la autoridad.

En Ciudad Juárez, Chihuahua, al menos 20 elementos de la PF se encuentran suspendidos y arrestados luego del allanamiento a las instalaciones del centro de derechos humanos Paso del Norte, así como informa el visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Gustavo de la Rosa Hickerson. El funcionario puntualiza que se está a la espera de que los abogados de dicho centro, presidido por el sacerdote católico Óscar Henríquez, presenten la denuncia formal ante la PGR, para que se abra una investigación contra los agentes que catearon el inmueble sin orden judicial.

La Secretaría de Gobernación publica en el Diario Oficial de la Federación la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso “Cabrera García y Montiel Flores contra México”, en la que este organismo internacional condenó al Estado mexicano a reparar los

daños con motivo de tratos crueles, inhumanos y degradantes contra las personas mencionadas. La demanda demuestra responsabilidad por el sometimiento del que fueron objeto Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores mientras se encontraban detenidos y bajo custodia de miembros del ejército, la falta de presentación expedita ante un juez y las irregularidades en todo el proceso penal. La CIDH halló culpable al Estado mexicano de falta de investigación adecuada de las denuncias de tortura, así como del uso del fuero militar dentro de la investigación de violaciones a los derechos humanos en los hechos ocurridos en 1999.

Los ocho chiapanecos, habitantes de la ciudad rural Nuevo Juan de Grijalva, municipio de Osatuacán, encarcelados desde marzo pasado junto con su abogado defensor en Pichucalco, Chiapas, son víctimas de injusticia y además no han contado con las garantías procesales a que tienen derecho, según denuncia el centro de derechos humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), el cual demanda su libertad inmediata y el cese de hostigamientos policiacos y judiciales contra otros compañeros y familiares suyos. Los detenidos fueron acusados “de asociación delictuosa, ataques a las vías de comunicación y oposición a que se efectúe una obra o trabajo público”, y durante su declaración ministerial les fueron asignados defensores de oficio “que se limitaron a firmar la diligencia” sin ofrecer asistencia ni defensa adecuadas. Los cinco primeros detenidos firmaron documentos cuyo contenido desconocían, y el 18 de marzo quedaron arraigados en la Quinta Pitiquitos, en Chiapa de Corzo. Tras 28 días, el 14 de abril fueron puestos a disposición del juez de primera instancia en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados número 10 en Pichucalco. El Frayba considera que el gobierno de Chiapas ejerce “actos de represión contra los pobladores del ejido” mismos que, hace unos meses, eran los consentidos de la propaganda gubernamental.

Las investigaciones para aclarar la muerte o desaparición de 20 periodistas en Chihuahua, nueve en Michoacán, cinco en Veracruz, tres en Sinaloa y tres en Sonora no han dado resultado alguno, así como reconocen las autoridades en el día dedicado a la libertad de expresión. En Torreón, el caso más sonado fue el secuestro, el 26 de julio de 2010, de dos reporteros y un enviado de *Televisa México* cuando cubrían un motín en el penal número 2 de la ciudad, y el asesinato del reportero Eliseo Barrón, de *La Opinión Milenio*. En 10 años han sido asesinados en Chihuahua 19 periodistas. Todos estos crímenes siguen impunes. Otro comunicador permanece desaparecido y tres están asilados en el extranjero. Apenas el 4 de junio fue ultimado Alán Eduardo Flores Rico, reportero del periódico en línea *Dossier*. El procurador de justicia de Veracruz, Reinaldo Escobar Pérez, dice que en la entidad hay cuatro periodistas desaparecidos, presuntamente por mano del crimen organizado. Asegura que los expedientes no se archivarán hasta localizar a los reporteros o a los responsables. Según Reporteros Sin Fronteras, en México han sido asesinados 73 periodistas desde el 2000.

En Ayutla de los Libres, Guerrero, Efrén Cortez Chávez, sobreviviente de la masacre de El Charco, perpetrada el 7 de junio de 1998, exige a la administración que encabeza el gobernador Ángel Aguirre Rivero crear una comisión de la verdad que investigue y castigue a los militares que encabezaron la operación, en la cual murieron 11 personas, entre ellas Ricardo Zamora, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Además, sostiene que horas antes de la matanza, soldados y una columna del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) se enfrentaron en un poblado aledaño a El Charco, en la región de la Costa Chica. El ex preso político encabeza un acto en el cual participan unas 300 personas, entre ellas indígenas mixtecos, y tlapanecos, así como representantes de 10 organizaciones sociales, la familiar del estudiante asesinado Érika Zamora y las viudas de las víctimas.

Miércoles 8

En Ciudad Juárez, Chihuahua, Guadalupe Meléndez Villegas, madre de Israel Arzate Meléndez, quien el 4 de febrero de 2010 fue detenido y acusado de estar implicado en la masacre de 15 jóvenes en la colonia Villas de Salvárcar, repudió que su hijo haya sido torturado por militares para que se declarara culpable de haber participado en la matanza. Hace unos días, el joven de 26 años pudo demostrar su inocencia, luego de que a principios del presente año le aplicaron el protocolo de Estambul, mediante el cual se determinó que fue torturado para que confesara su participación en el multihomicidio cometido el 31 de enero de 2010. Se espera que en los próximos días recupere su libertad. En conferencia de prensa, la señora recuerda que, con el apoyo de abogados del centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez, presentó amparos para lograr la libertad de su hijo. Con la intermediación de representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) logró que le aplicaran el mencionado protocolo, el cual dio positivo en tortura física (con descargas eléctricas) psicológica y verbal.

La Secretaría de Derechos Humanos del PRD exige al gobierno federal restablecer el estado de derecho en México, con el regreso de los militares a sus cuarteles, así como la sanción inmediata a todas aquellas autoridades, especialmente de seguridad pública y procuración de justicia, que “han omitido el cumplimiento de sus obligaciones legales y se han visto beneficiados con la corrupción de los grupos del crimen organizado”. Sin referirse a nadie en particular, Luciano Borreguín, titular de esa instancia perredista, exige que se les juzgue conforme a derecho y reitera el rechazo del partido a la estrategia puesta en marcha por el gobierno federal, porque además de generar más de 40 mil víctimas, “busca cerrar el paso a la participación política y la libertad de expresión”.

Los presos políticos de la Voz del Amate, adherentes de la Otra Campaña recluidos en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) número 5, en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, denuncian un injustificado operativo sorpresa del denominado “Grupo Lobo”, el cual ingresó a las celdas de los reclusos y los despojó de sus pertenencias y dinero en efectivo. Los hechos ocurrieron el pasado 25 de mayo. El grupo de agentes especializados realizó una “revisión sorpresa” y decomisó todos los aparatos domésticos propiedad de los reclusos. El director del penal, David Montero Moreno, notifica a los internos que los utensilios, principalmente radios y reproductores de discos, fueron entregados al subsecretario Gustavo Ferreira Jiménez, quien condiciona su devolución a que los dueños presenten las facturas de compra.

En Oaxaca, profesores afiliados a la sección 59 del SNTE, respaldados por alumnos y padres de familia, se instalan en plantón frente al palacio de gobierno para exigir que no se cierren los planteles donde laboran. Antes de pasar en marcha frente al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, desvían su trayectoria debido a que miembros de la sección 22 del SNTE les cierran el paso. Una comisión encabezada por Humberto Alcalá Betanzos, fundador de la sección 59, ingresa al palacio de gobierno, pero no es atendida, por lo que padres de familia bloquean las entradas al inmueble.

Jueves 9

En Ciudad Juárez, en los suburbios de esta ciudad, una pancarta da ánimos cuando la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad asoma su llegada: “no te rajes Sicilia”. Conforme se acercan los vehículos, aparecen decenas de banderas blancas y la algarabía de los juarenses es inocultable. Son centenares los habitantes que se han reunido en la entrada de la ciudad. Javier Sicilia y su caravana llegan tras miles de kilómetros recorridos. La gente se agolpa en la camioneta del poeta para manifestar su alegría por la llegada de la caravana. Se diría que lo ven como un redentor que, al menos, les prodigará consuelo con sus palabras en esta ciudad que, como dice otra pancarta de

bienvenida: “no vive, sobrevive” en medio del fuego cruzado de los cárteles de Juárez y el Golfo, que se disputan la plaza y, como colofón, los federales que ponen su parte en la violencia dominante. Luz María Dávila, reconocida por su desafiante postura ante el presidente Felipe Calderón tras la masacre de Villas de Salvárcar –donde ejecutaron a sus dos hijos– es la responsable de ofrecer la bienvenida oficial en el puente de entrada a Ciudad Juárez.

En Chilpancingo, Guerrero, indígenas mixtecos y tlapanecos provenientes del núcleo agrario de Quiahuitlitzala, municipio de Xalpatláhuac, en la Montaña alta, solicitan la intervención del gobernador Ángel Aguirre Rivero para resolver un conflicto por 949 has. colindantes el municipio de Atlamajalcingo del Monte. Regino Reyes Villano, presidente del comisariado de bienes comunales de Quiahuitlitzala, explica que ese núcleo agrario agrupa a las comunidades de Amatitlán, La Victoria, La Reforma, Tlaxco, Santiago del Río y Cacalotepec. “Tenemos un documento del 1785 que avala que somos los dueños”, declara. Debido a los enfrentamientos, ambas partes acordaron hace 30 años no sembrar las tierras, pero “los de Atlamajalcingo nos roban el ganado que entra a pastar a las tierras en conflicto”. Reyes Villano insiste en que hay tensión en la zona: “ya interpusimos denuncia ante el Tribunal Unitario Agrario, pero no han hecho nada, y la Procuraduría Agraria sólo ha tratado de conciliar, pero el riesgo de violencia sigue latente”. Recuerda que por este conflicto han muerto 150 personas en distintas épocas.

En México aún hay una proporción alta de policías municipales, estatales y federales, así como ex uniformados que participan en plagios. Un escenario al que se suman deficiencias en las unidades antisequestro del país que carecen de tareas de inteligencia, por lo que es necesario que los procuradores estatales trabajen para revertir esta tendencia, así como reconoce el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Juan Miguel Alcántara Soria. Al participar en la “Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia”, el funcionario federal declara que en general hay un retraso en la aplicación del modelo nacional policial, cuando de más de 2 mil policías municipales, sólo el 10% aplican esta estrategia. Alcántara Soria sostiene que, ante la Ley General Antisequestro, los tres niveles de gobierno deben trabajar en materia de prevención y persecución de este delito y elaborar programas correspondientes.

Viernes 10

En Ciudad Juárez, Chihuahua, el parque que rodea el monumento erigido a Benito Juárez está inusualmente lleno; centenares de juarenses se congregan para atestiguar el colofón de la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad: la firma del Pacto Nacional Ciudadano. Sentimientos encontrados: el dolor que no deja de fluir en los testimonios de las víctimas, la irritación contra los gobiernos por la desgracia en que han sumergido a esta ciudad y el consuelo surgido de la esperanza que les ha dejado el paso de la caravana encabezada por el poeta Javier Sicilia. Los juarenses no son gente de grandes concentraciones: el miedo, la apatía o la indiferencia lo impiden, pero esta vez, a pesar del denso ambiente que se respira por la violencia, salieron de sus casas para escuchar a Sicilia en su mensaje final. El poeta les habla del amor como fórmula de lucha, del odio que no debe dominar el sentimiento humano y de la insustituible unidad del movimiento para alcanzar las tareas que se ha fijado. Acaso es un mensaje cifrado al atardecer, cuando, entre los intensos jalones y disputas se ha logrado sortear la diversidad de enfoques sobre el rumbo de la movilización y concretar finalmente el objetivo central de la caravana, que recorrió más de 3 mil kilómetros: la firma del Pacto Nacional Ciudadano. Es la vía –dice Sicilia– para alcanzar la paz y el fin de la impunidad, luchar contra las absurdas decisiones gubernamentales que “con su búsqueda de legitimarse” han provocado dolor a las familias en todo el país.

El Pacto Nacional Ciudadano por la paz que se firma en Ciudad Juárez, Chihuahua, estuvo apoyado por cientos de personas que marcharon, discutieron, recabaron firmas y algunos hasta acudieron a

misa en Morelos, Nayarit, Sinaloa, Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro y Yucatán para respaldar la solicitud de que los gobiernos federal, estatales y municipales cumplan ese acuerdo o, de lo contrario, se llamará a la desobediencia civil. El pacto se sustenta en seis vertientes: verdad y justicia desde las víctimas, fin a la estrategia de guerra, desmilitarización del país, combatir corrupción e impunidad, política social para los jóvenes y perfeccionamiento de la democracia en el país, con mayor participación ciudadana. Integrantes de la Red por la Paz y la Justicia se concentran en el zócalo de Cuernavaca, Morelos, para exigir que se cumpla el acuerdo. Mientras se enlazan por radio con el acto en Ciudad Juárez, leen poemas y cantan en demanda de que no mueran más mexicanos en esta guerra “absurda”. Más de 2 mil personas asisten a la peregrinación convocada por la diócesis de Tepic, Nayarit, para pedir por la paz y tranquilidad del país; los feligreses caminan en silencio desde cuatro puntos de la capital hasta arribar a la catedral, donde son recibidos por el obispo emérito Alfonso Humberto Robles Cota, quien expresa que sólo unidos se podrá vencer la violencia. Unos 300 integrantes de organizaciones civiles, de derechos humanos y familiares de víctimas de la violencia marchan desde el templo de Nuestra Señora de Guadalupe hasta la catedral, en Culiacán, Sinaloa. En las ciudades de Acámbaro, San Miguel de Allende, Celaya, León y Guanajuato, decenas de ciudadanos debaten los seis puntos del pacto por la paz, así como informa José Rodríguez Macías, uno de los organizadores. “Las conclusiones de las mesas serán enviadas a Javier Sicilia para que sepa que Guanajuato también alza la voz”, comenta.

En Acapulco, Guerrero, aproximadamente 50 periodistas marchan del asta bandera ubicada en la avenida Costera a la Fiscalía Regional de la Procuraduría General de Justicia del Estado para exigir celeridad en la investigación del paradero de Marco Antonio López Ortiz, jefe de información del diario *Novedades* de Acapulco, desaparecido la noche del 7 de junio. Al arribar a la fiscalía, se entrevistan vía telefónica con Alberto López Rosas, titular de la Procuraduría General de la Justicia del Estado (PGJE), a quien exigen la presentación con vida del comunicador de 45 años de edad. El funcionario declara: “estamos muy interesados en resolver este asunto y, sobre todo, en salvaguardar la vida del compañero periodista”. Agrega que comprende que puede haber impaciencia, pero que hay información y particularidades de la investigación en curso que no pueden darse a conocer.

En Irapuato, la Unión Campesina Democrática, Unión de Campesinos y Emigrantes de México, Organización de Campesinos y Emigrantes, Unión Democrática Campesina y la Asociación Civil Independiente forman la Coordinación de Organizaciones Sociales de Guanajuato, “para defenderse de la política terrorista” que aplica el gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez, a quien acusan de ordenar que los labriegos sean despojados de sus vehículos comprados en Estados Unidos e introducidos al país ilegalmente.

En San Cristóbal de Las Casas, alrededor de 450 reos del penal cinco cumplen segundo día en huelga de hambre para exigir la destitución del director de la prisión, David Montero, a quien acusan de “malos tratos” y de restringir las visitas, así como informa Arturo Pensamiento Liévano, visitador del Consejo Estatal de Derechos Humanos, quien acude al penal ubicado a 20 kms. de la ciudad. Señala que los únicos que no participan en la protesta son ocho reos que están en la zona de observación y clasificación y unas 50 reclusas.

A unos días de que se cumplan tres años del operativo en la discoteca News Divine, la CDHDF detecta que las autoridades de la ciudad han reiniciado acciones policiacas como la que derivó en la muerte de 12 personas en dicho establecimiento, el 20 de junio de 2008. El presidente del organismo, Luis González Placencia, señala que se investigan prácticas como presentar ante el Ministerio Público a adolescentes con el propósito de que inculpen a encargados y empleados de antros que presuntamente venden bebidas alcohólicas o drogas a menores de edad. Refiere que se tienen quejas en ese sentido como el de un operativo realizado en un billar, ubicado en la delegación Azcapotzalco, en el Distrito Federal, donde se encontraron menores de edad, a los que

presuntamente se utilizó para que declararan contra los trabajadores del lugar, lo que “redita la cadena de eventos que culminaron con el News Divine”.

Sábado 11

En Nuevo Laredo, Tamaulipas, la CNDH acepta investigar una denuncia presentada contra personal de la Secretaría de Marina (SEMAR) por familiares del comerciante José Fortino Martínez Martínez, detenido y desaparecido desde el domingo 5. La denuncia por la probable desaparición forzada de José Fortino fue hecha por su esposa, Oralia Guadalupe Villaseñor Vázquez, en las oficinas del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. La captura del comerciante ocurrió después de la una de la mañana del cinco de junio, cuando presunto personal de la Marina allanó su domicilio en la colonia Arturo Cortés Villada y sin orden judicial lo subió por la fuerza a una camioneta de la SEMAR; hasta el momento se desconoce su paradero.

La presidencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con sede en Ginebra, recibe el informe de la organización Familia Pasta de Conchos acerca de la situación en la zona carbonífera de Coahuila, en donde en el reciente año (periodo que analiza este organismo internacional) se ha registrado la muerte de 32 mineros, con lo que suman 124 desde 2006, incluidos los 65 de Pasta de Conchos que perecieron en febrero de ese año. Durante los trabajos de la centésima conferencia de la OIT, este grupo de defensores de derechos humanos y familiares de mineros denunciaron que continúa la situación de violación a las normas laborales en aquella zona, especialmente por la ausencia de una inspección gubernamental efectiva.

En Morelia, un comunero de Cherán que llevaba 13 días desaparecido es encontrado muerto la noche del viernes 10 en un predio del vecino municipio de Zacapu, así como informa la Procuraduría de Justicia estatal. En las faldas del cerro El Tecolote, policías municipales encontraron medio calcinados y en avanzada descomposición los restos de Domingo Chávez Juárez, residente del barrio San Francisco de Cherán, luego que familiares denunciaran su desaparición el 28 de mayo. El 15 de abril pasado la comunidad se declaró en pie de lucha contra los talamontes vinculados a la delincuencia organizada y, desde entonces, ya fueron asesinados tres hombres y uno lesionado de bala en la cabeza; todo esto mientras los moradores mantienen bloqueados los accesos a la cabecera municipal, donde radican unas 16 mil personas.

Pese a que la rectora de la UACM, Esther Orozco Orozco, cuestiona la facultad de la CDHDF para investigar las presuntas violaciones a las garantías individuales de integrantes de la comunidad de esa casa de estudios, el organismo dio curso a las quejas presentadas por los afectados en contra de la rectora, por tratarse de una servidora pública, así como señala el presidente del organismo, Luis González Placencia. En ese sentido, explica el funcionario, un aspecto importante es probar la línea de mando que puede existir, porque si bien la rectora es una servidora pública “no es una autoridad en la UACM, pues la autoridad es el consejo [Universitario]”. El relator de la citada comisión, Marco Antonio Trejo Velázquez, será el encargado de realizar las funciones de secretario técnico en la próxima sesión, con la posibilidad de que ocupe el puesto durante un año, si así lo decide el pleno.

Diputados de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) coinciden en la necesidad de reforzar los mecanismos que salvaguarden los derechos de los jóvenes y la urgencia de impulsar políticas públicas que amplíen el espectro de actividades educativas, culturales y productivas para este sector. Luego de la advertencia del ombudsman capitalino, Luis González Placencia, en torno a que han regresado las prácticas policiales contra los jóvenes en la capital, el asambleísta David Razú señala que es importante que en la aplicación de la

ley en torno a las fiestas clandestinas u otros sitios de diversión de los jóvenes, la intervención de la autoridad sea siempre para protegerlos.

En las últimas dos semanas la CNDH emitió seis recomendaciones en contra de las secretarías de la Defensa Nacional (SEDENA), de Marina y Seguridad Pública Federal por violaciones en las que se acreditaron la privación de la vida, tratos crueles, tortura, desaparición forzada y privación ilegal de la libertad. Entre los casos está el de Javier Herrera Valles, ex comisario general de la PF, a quien se le infringieron tratos crueles pues fue golpeado al momento de su detención en noviembre de 2008, por lo que, al igual que en el resto de los expedientes, el organismo presentará denuncia penal contra los responsables ante la PGR. La recomendación 28/2011 emitida el 26 de mayo está dirigida a la SEDENA por la muerte de un hombre ocurrida el año pasado en Durango, aunque la dependencia ya pagó a los familiares una suma económica por concepto de reparación de daño moral y material, así como los gastos funerarios.

Domingo 12

Con el lema “¡Basta! Yo decido sobre mi cuerpo” y “No, es No”, se realiza en la capital de la República la Marcha de las Putas, con el objetivo de denunciar el acoso en las calles y la violencia sexual que viven cotidianamente las mujeres. La convocatoria a salir a las calles en contra del hostigamiento físico y verbal contra las mujeres se suma a las más de 75 marchas que se han venido desarrollando en varias partes del mundo.

En Ciudad Juárez, la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad concluye su recorrido y ratifica el Pacto Nacional Ciudadano. Ahora queda por delante la enorme tarea de traducir todo ese dolor humano recogido en el trayecto en un emplazamiento a los actores responsables de la violencia que azota el país. “Todos queremos la desmilitarización, incluso comenzando por los propios soldados, que quisieran regresar a sus cuarteles, pero hay que reconocer la gradualidad que se requiere para ello. Es posible que en algunos territorios del país tenga que ser inmediato y en otros gradual; lo seguro es que es preciso cambiar el modelo de seguridad militarizada. La idea de ir a un diálogo con lógica de exigencia tiene que ver con una visión de que la autoridad asuma los reclamos sociales y les dé respuesta, pero también se trata de entender que debe haber una relación entre el fin y los medios. La historia tiene muchos ejemplos de que cuando se descuidan los medios por conseguir el fin, se convierte en un infierno, y es lo que vemos en Juárez”, declara Álvarez Icaza, quien también explica los alcances del papel de la resistencia civil en esta segunda fase del movimiento: “si se me permite un símil, serían acciones simbólicas como las que realiza *Greenpeace*: nada que impacte a la ciudadanía, sino mensajes que interpelen a la autoridad, en sus diversos órdenes, para avanzar en el cumplimiento de las exigencias sociales que se han desprendido de esta caravana”.

En Ciudad Juárez, el gobierno de Estados Unidos da asilo político a la defensora de los derechos humanos Cipriana Jurado, segunda persona amenazada de muerte en Ciudad Juárez que recibe ese beneficio, luego del periodista Jorge Luis Aguirre. El abogado Carlos Spector declara que Jurado cruzó a Estados Unidos en 2010. El 10 de junio fue notificada del asilo concedido y a finales de mes planea realizar una gira por EE.UU para denunciar la situación prevaleciente en México. Su solicitud de asilo fue aceptada cuando demostró que el ejército mexicano la perseguía por su activismo en favor de una familia de la que tres integrantes –entre ellos dos mujeres– desaparecieron en el ejido Benito Juárez, a finales de 2009.

Lunes 13

Organizaciones de la Red Nacional de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todos” hacen un balance del examen periódico universal de México ante el Consejo de Derechos Humanos de la

Organización de las Naciones Unidas (ONU). Consideran que “los feminicidios y los asesinatos violentos contra mujeres se han incrementado sustancialmente, lejos de disminuir; las agresiones y amenazas contra defensores crecen y continúan las violaciones a las garantías de los migrantes”. Además, denuncian que el proyecto de reforma laboral que se discute en la Cámara de Diputados “es regresivo y atenta contra las conquistas de los trabajadores”, mientras que, en materia de seguridad y militarización, la CIDH ordena al ejecutivo reformar el Código de Justicia Militar. Sobre la propuesta de cambios que el presidente Felipe Calderón hizo llegar al Senado la CIDH declara que “es insuficiente”. En conferencia de prensa, la secretaria ejecutiva de la red nacional “Todos los Derechos para Todos”, Agnieszka Raczinska, comenta: “vemos avances en términos legislativos con la aprobación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y otras modificaciones han sido positivas; sin embargo, hay un trecho muy grande entre su promulgación y el hacerlas efectivas”.

Martes 14

En Cuernavaca, Morelos, 45 días después de la detención y desaparición de Jethro Ramsés Sánchez Santana, sus familiares rompen el silencio y exigen a las autoridades presentarlo vivo. “Si alguna persona sabe dónde está nuestro hijo, le pedimos que se apiade y nos lo diga para poner fin a este sufrimiento; pero si hay gente malvada que le ha hecho daño y en esta vida es impune, queremos decirle que hay justicia divina y tendrá que responder por sus maldades”, lee su padre, Héctor Sánchez. En conferencia de prensa, los familiares del joven visto por última vez el primero de mayo en la feria de Cuernavaca negaron que Jethro pudiera hacerse pasar por sicario, como argumentaron los policías municipales que lo detuvieron junto con su amigo Horacio Sánchez Castelo y entregaron a ambos a la PF, tras una presunta riña.

Miles de profesores adscritos a la sección 22 del SNTE, junto con seguidores de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), participan en la megamarcha “14 de junio no se olvida” para conmemorar el quinto aniversario de que la administración que encabezó Ulises Ruiz Ortiz (2004-2010) intentó desalojar un plantón magisterial instalado en el centro histórico de la capital oaxaqueña. La movilización provoca la suspensión de clases en alrededor de 13 mil escuelas de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, en perjuicio de casi un millón 300 mil alumnos.

La CNDH sostiene la postura de que la SEMAR cometió actos violatorios de los derechos humanos en el caso del presunto narcomenudista detenido el 21 de marzo de 2010 en Nuevo León y un día después encontrado muerto. La reiteración se da en referencia al comunicado emitido por la SEMAR el lunes 13 en el que explica que el personal naval limitó su actuación a brindar apoyo a la autoridad municipal de Santa Catarina, Nuevo León, para transportar personas heridas y a un detenido, que fueron trasladados bajo la custodia del director de la policía de esa localidad. Pese a ello, la CNDH no ha recibido ninguna respuesta oficial de la SEMAR en torno a la aceptación o no de la recomendación 34/2011, en la que se señala como probables responsables de actos contra los derechos humanos, incluso de tortura, a elementos de la Marina.

La CDHDF inicia una investigación por los hechos ocurridos en San Lorenzo Acopilco, en Cuajimalpa. El organismo afirma que visitantes y personal de comunicación acudieron al lugar y emitieron medidas precautorias dirigidas a la Secretaría de Gobierno, a la delegación Cuajimalpa y a la Secretaría de Seguridad Pública local. La CDHDF pide a las autoridades locales privilegiar el diálogo para buscar una solución de fondo al conflicto, evitando el agravamiento de la confrontación. Se solicita además que todas las actuaciones relacionadas con la investigación y sanción de los hechos sean apegadas a derecho y a las normas internacionales de los derechos humanos.

Miércoles 15

En Acapulco, periodistas de diversos medios se manifiestan en la glorieta de la Diana, para exigir a la PGJE celeridad en la investigación por la desaparición del jefe de información del periódico *Novedades* de Acapulco, Marco Antonio López Ortiz, ocurrida la noche del pasado 7 de junio, después de visitar a un amigo en el bar Los Dos Arbolitos, de la colonia Centro. La manifestación forma parte de las protestas que un grupo de alrededor de 20 comunicadores acapulqueños comienzan a realizar en distintos puntos del puerto por espacio de una hora, lapso en el que con cartulinas y mantas demandan la presentación con vida de su compañero. El lunes 13, la concentración se efectuó en el asta bandera, frente al parque Papagayo, sobre la avenida costera Miguel Alemán; el martes realizaron una marcha silenciosa en el centro del puerto, y este miércoles el punto de reunión es la glorieta de la Diana. Familiares de Marco Antonio López presentan una denuncia a visitadores del programa de agravios a periodistas de la CNDH, quienes declaran que el gremio está considerado por dicho organismo como “grupo vulnerado”.

En Villahermosa, alrededor de 17 mil profesores afiliados al Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Tabasco (SITET) realizan un paro “de brazos caídos” para exigir mejores prestaciones laborales. Cientos de escuelas laboran parcialmente, en perjuicio de más de 770 mil alumnos. Rufo Cerino, vocero de la organización gremial, advierte que las clases se reanudarán el próximo lunes 20, ya que este jueves 16 se efectuará una movilización y el viernes 17 continuarán las protestas con una manifestación en las principales calles de Villahermosa.

En Compostela, Nayarit, pescadores de esta localidad incendian una embarcación propiedad de la Comisión Nacional de Pesca (CONAPESCA), con la cual la misma dependencia les impedía salir a laborar en altamar. Abelardo Bustos Oregón, dirigente de la cooperativa Pescadores y Comercializadores del estado de Nayarit, indica que inspectores de la CONAPESCA llegaron a las playas de Chacala, Rincón de Guayabitos y La Peñita de Jaltemba a finales de abril pasado, con la orden de verificar que no se capturara camarón, porque el crustáceo se encuentra en veda. El líder pesquero asegura que los inspectores se dedicaron a intimidar y amenazar a los pescadores, ya que les dijeron que si no mostraban sus permisos de trabajo en el mar no podrían salir, y de hacerlo se harían acreedores a fuertes sanciones.

Jueves 16

En Tepic, Nayarit, por tercera vez en la semana, productores de frijol del municipio de Santiago Ixcuintla se manifiestan porque no les han pagado y el gobierno estatal no los atiende. Señalan que han transcurrido 100 días de que entregaron el grano y no les han cubierto el precio pactado, de 12 pesos por kilo. Se apoderan por segunda vez de la caseta Trapichillo, en la autopista Tepic-San Blas-Villa Unión. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes informa que interpuso denuncias.

En Morelia, Michoacán, el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana anuncia un paro indefinido a partir de este viernes 17 para exigir el cumplimiento total del contrato colectivo de trabajo. El origen de la protesta es que su dirigente, Eduardo Tena Flores, quedó fuera del cargo, pues el Consejo Universitario aceptó su solicitud de jubilación y, según los estatutos del organismo, un jubilado no puede ser dirigente sindical. Por la mañana, los trabajadores universitarios se plantan frente a la rectoría para exigir la revocación del trámite.

Transportistas de Veracruz, Yucatán, Sinaloa, Jalisco y Colima radicalizan sus movilizaciones en rechazo a las constantes alzas a los combustibles y para exigir al gobierno federal seguridad en las carreteras del país. Veracruz prácticamente se paraliza ante los múltiples bloqueos en carreteras federales y de cuota por diversas organizaciones, entre ellas la Alianza Mexicana de Organizaciones

de Transportistas. Autoridades locales reportan cierres en los municipios de Poza Rica, Tuxpan, Martínez de la Torre, Huatusco, Córdoba, Orizaba, Xalapa, Perote, Veracruz, Cosamaloapan, Acayucan, Coatzacoalcos y Minatitlán. La circulación hacia el norte y sur-sureste del país queda completamente paralizada por más de cinco horas, pues los transportistas además de cerrar las carreteras, toman casetas de peaje, también cierran las vías de comunicación hacia Puebla y el Distrito Federal.

Viernes 17

En Torreón, Coahuila, representantes de casas de migrantes de todo el país, de organizaciones defensoras de los derechos humanos, locales y extranjeras, además de académicos, acuerdan lanzar la campaña “Por el Derecho a Migrar Sin Violencia”, que incluye siete puntos prioritarios para terminar con los abusos contra indocumentados, como parte de las conclusiones del taller internacional en la materia efectuado durante tres días en Saltillo. En un comunicado, el obispado de dicha ciudad, que preside Raúl Vera López, y quien encabeza los trabajos del encuentro, señala que con la campaña se intenta responder a la lacerante realidad que viven los migrantes en el país, con más de 20 mil secuestros al año, masacres como la de San Fernando, en Tamaulipas, y hallazgos de fosas clandestinas.

Los adherentes a la Otra Campaña del ejido San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, Chiapas, denuncian amenazas de muerte e intimidaciones en la comunidad K’anakil, del mismo ejido. También falta de atención, incluso burlas, del fiscal del Ministerio Público del municipio mencionado. Los representantes de San Sebastián señalan que el 15 de junio un grupo de mujeres adherentes a la Otra Campaña llegaron a Chilón para interponer una denuncia por amenazas contra Nicolás Aguilar Mejía, originario de Reforma K’anakil y miembro de la alguna vez conocida banda criminal “Los Aguilares”, que asoló la región junto con el grupo paramilitar “Los Chinculines” en la década pasada. Denuncian que el fiscal del Ministerio Público, José Manuel Pérez Gómez, “ni así las quiso atender. Será porque todavía no llevaban un agujero en el pecho o un manojo de dinero, porque son como cualquier otra persona que quiere justicia y les niegan su derecho”. El día 12 fue detenido Aguilar Mejía, acusado de abigeato. La Policía Judicial lo trasladó al penal número 12 de Yajalón. Los ejidatarios temen que sea liberado: “anteriormente habitantes de las comunidades cercanas no han querido denunciarlo por el miedo a ser secuestrados, violados o asesinados. Es conocido como el último integrante de ‘Los Aguilares’, secuestradores, violadores, asaltantes y homicidas”.

En Villahermosa, en el tercer día consecutivo de protestas, más de 3 mil maestros afiliados al SITET marchan por las principales avenidas de esta capital y se manifiestan frente a la Quinta Grijalva –residencia oficial del gobernador Andrés Granier– para insistir en su exigencia de mejores prestaciones sociales y laborales. Los mentores se apostan primero frente a las instalaciones de la Secretaría de Educación, donde demandan la renuncia de la titular de la dependencia, Beatriz Luque Green, a quien acusan de los atrasos en sus peticiones y de entorpecer el diálogo para una negociación. Los profesores insisten en su solicitud de recategorización de unos cien mentores, mejor servicio en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el pago de un fondo de retiro y financiamiento para la obtención de una vivienda, entre otras demandas.

En Jalapa, Veracruz, trabajadores jubilados bloquean durante ocho horas el edificio del Instituto de Pensiones del Estado en protesta por descuentos del impuesto sobre la renta aplicados a sus prestaciones, entre ellas el aguinaldo, lo que, aunado a otras deducciones a nivel local, suma rebajas en sus sueldos hasta de 1.800 pesos. Acusan al director del instituto, Gonzalo Morgado, de ocultar

la situación financiera del mismo, el cual, dicen, tendría un déficit de 3 mil millones de pesos, mismo que podría en riesgo las pensiones de 22 mil jubilados.

Sábado 18

Desde el 9 de junio, agremiados a la sección 14 del SNTE tienen ocupada la sede central de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en Acapulco, Guerrero, en protesta por el nombramiento de Gil Florente Castellanos como director de la institución, a quien acusan de representar a un grupo maestros que “defienden costumbres y vicios del pasado”. El 15 de junio la titular de la SEG, Silvia Romero Suárez, aseguró que no había firmado ningún nombramiento, por lo que la dirección seguía acéfala tras el retiro del ex director Fernando Pineda. “El conflicto en la UPN viene de años atrás por la pugna del poder político y sindical dentro de la universidad”, declara la funcionaria, adelantando que el proceso de selección de director será sometido a una convocatoria.

Los 17 mil maestros del SITET realizan un paro del 15 al 17 de junio en los 17 municipios de la entidad para exigir a la Secretaría de Educación estatal recategorizar a profesores de ese gremio, mejorar el servicio médico en el Instituto de Seguridad Social, el pago de un fondo de retiro y la renuncia de la secretaria de Educación Rosa Beatriz Luque Green. El viernes, tras una marcha en la que participaron más de 3 mil trabajadores, los inconformes anunciaron tregua en sus protestas.

En Tepic, Nayarit, por segundo día consecutivo, policías estatales, municipales y custodios, continúan el paro laboral frente al palacio de gobierno, en demanda del pago de un mes de salario atrasado, aumento salarial que desde hace seis años les han prometido, el bono federal que desde hace tres años no reciben, seguro de vida, chalecos antibala, armas y cartuchos en buen estado. Los uniformados radicalizan sus protestas y toman uno de los cruceros de mayor importancia vial de esta capital, lo que ocasiona afectaciones en el tráfico vehicular de las avenidas Prisciliano Sánchez e Insurgentes, las cuales quedan bloqueadas durante unas dos horas.

Lunes 20

En Acapulco, Guerrero, las organizaciones internacionales de derechos humanos solicitan al secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, garantías de seguridad para los defensores de derechos humanos en Guerrero, luego que el Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDHM) Tlachinollan reabrió su oficina en el municipio de Ayutla de los Libres el 16 de junio pasado. Diversos organismos expresan preocupación por el cumplimiento de las medidas provisionales ordenadas por la CIDH al Estado mexicano en abril de 2009 para salvaguardar la seguridad de 107 integrantes del CDHM Tlachinollan, la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa y la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco, luego de ser perseguidos y amenazados. Las organizaciones que dijeron estar atentas al comportamiento del Estado mexicano son Amnistía Internacional, Centro para la Justicia y Derechos Humanos Robert F. Kennedy, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, Front Line, la Fundación Internacional para la Protección de Defensores de los Derechos Humanos, la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México y el Observatorio de Abogados de Canadá, así como el Centro de Análisis e Investigación Fundar, Instituto Guerrerense de Derechos Humanos y el Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local.

Rafael Galindo Jaime, presidente de la Central Campesina Independiente (CCI), denuncia ante el relator especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, Olivier de Schutter, la violación flagrante en México de los derechos humanos de 22 millones de campesinos que sólo comen una vez al día y una parte importante son blanco de extorsión, asaltos y secuestros. Se

calcula que el 90% de la población rural no tiene seguridad social y que 13 de cada 100 jóvenes de esas áreas no llegan al bachillerato. En una reunión privada, el dirigente plantea al relator de la ONU la “urgencia de que este organismo internacional haga un exhorto al gobierno de México para que detenga las violaciones a los derechos humanos de los campesinos”. El dirigente expuso que el 47% de los campesinos viven en pobreza extrema y 22 millones de mexicanos llegan a comer sólo una vez al día, porque sus ingresos, en ocasiones, no superan los mil pesos al mes. Dice que otra violación a los derechos humanos de este sector es que de los 36 millones de campesinos, solo la quinta parte tienen un trabajo formal.

En lo que va de la administración de Felipe Calderón, al menos 42 periodistas han sido asesinados en 16 estados, 10 se encuentran desaparecidos luego de haber sido levantados por presuntos criminales y muchos otros han sido víctimas de diversas agresiones en represalia por su labor. La mayoría de los casos no han sido esclarecidos por las autoridades. Guerrero encabeza la lista, con nueve periodistas ultimados y la desaparición de Marco Antonio López, jefe de información del periódico *Novedades* de Acapulco, quien apenas el 7 de junio fue privado ilegalmente de la libertad por desconocidos en ese puerto.

En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, la defensa de los derechos humanos es hoy en México “un trabajo peligroso”, sostiene el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa (CDHDO), “los que trabajan en asuntos relacionados con el medio ambiente, los derechos de mujeres, campesinos, periodistas, migrantes e indígenas, diariamente reciben amenazas a su integridad física y psicológica, y la de sus familias. [La situación] cada día va empeorando”. El centro, que labora en la costera ciudad de Tonalá, anuncia una “campaña nacional e internacional contra el hostigamiento judicial y criminalización a defensores y luchadores sociales en México”, que se iniciará el próximo jueves 23. Demanda también cese a la persecución contra su director, Nataniel Hernández Núñez, debida principalmente al acompañamiento del organismo a las protestas del Consejo Regional Autónomo de la Zona Costa, adherente de la Otra Campaña.

Familiares de los jóvenes muertos en la discoteca News Divine piden a la CDHDF abrir nuevamente la recomendación hecha a las autoridades capitalinas por los hechos ocurridos tras un operativo fallido en ese lugar en junio de 2008. A esta petición se suma el padre Miguel Concha, presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Victoria, quien dice que el gobierno del Distrito Federal no ha reparado los daños, no ha garantizado que esos hechos no se repitan y que no hay policías capacitados para interactuar con los jóvenes. En punto de las 17 hrs, alrededor de 500 personas se congregan a las afueras de la ex discoteca ubicada sobre Eduardo Molina, en la colonia Nueva Atzacolco, para celebrar una misa en memoria de las víctimas, la cual es oficiada por el padre Miguel Concha.

Martes 21

En Morelia, Michoacán, miembros de la CNTE interrumpen la sesión del Congreso estatal e instalan un campamento en la plaza Melchor Ocampo de esta capital para exigir al gobierno de Leonel Godoy cumplir los compromisos pactados en 2009, que implican una erogación superior a mil millones de pesos. Mientras, continúa el paro iniciado hace tres semanas, que mantiene sin clases a más de un millón de alumnos de nivel básico. Las negociaciones prosiguen, pero sin acuerdos.

En Guadalajara, Jalisco, miembros del Sindicato de Empleados Públicos del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de la zona metropolitana de Guadalajara protestan contra el consejo de administración, formado por cuatro alcaldes priístas, quienes promueven la privatización del organismo con el argumento de que ello acabará con las corruptelas detectadas, entre ellas el

faltante de 700 millones de pesos de un préstamo de 1.100 millones recibido en 2008, según explica el dirigente Ángel Rodríguez.

La CDHDF reabre la recomendación 11/2008 por el caso News Divine y empieza la revisión de los 40 puntos que la integran, pues si bien, dice, 36 han sido cumplidos, el “grado de insatisfacción de las víctimas” obliga a dar un seguimiento puntual de los mismos. El presidente del organismo, Luis González Placencia, manifiesta su preocupación por la repetición de patrones que tuvieron como consecuencia la muerte de 12 personas en dicho operativo, que el gobierno de la ciudad se había comprometido a no repetir, como el uso de jóvenes como pruebas en las investigaciones del Ministerio Público.

Grupos internacionales de periodistas, como Reporteros Sin Fronteras, condenan el asesinato de Miguel Ángel López Velasco y se suman a las voces que exigen esclarecer el caso. El Comité de Protección de Periodistas (CPJ) afirma que la violencia contra la prensa en México está menoscabando el derecho a la libertad de expresión y constituye una “crisis nacional” que amenaza la estabilidad democrática. En una conferencia junto con la relatora de la CIDH de la Organización de Estados Americanos (OEA), Catalina Botero, el coordinador del programa de las Américas de CPJ, Carlos Lauría, dice que los asesinatos de periodistas van más allá de la violencia.

Miércoles 22

El Movimiento de Trabajadores Petroleros en Resistencia condena la criminalización de las luchas de trabajadores por parte del gobierno de Felipe Calderón, y exigen la libertad inmediata e incondicional de Mario Rubissel Ross García, secretario general del movimiento. Ross García fue detenido a la altura de Suburbia y Reforma por policías judiciales del DF y llevado a la Procuraduría de la delegación Miguel Hidalgo.

En Ocosingo, Chiapas, la junta de buen gobierno (JBG) del *Caracol* de Morelia denuncia agresiones e intentos de expulsión y despojo contra bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) por miembros de la Organización Regional de Cafecultores de Ocosingo (ORCAO), quienes mantienen secuestrados y torturados a dos zapatistas en el ejido Patria Nueva. Desde hace años, denuncia la junta, “estas personas repiten sus provocaciones por problemas de tierra que a fuerzas nos quieren despojar lo que recuperamos [después de enero de 1994]”. El pasado día 10, en la comunidad Mártires, municipio autónomo Lucio Cabañas, gente de ORCAO que vive en el ejido Patwitz, municipio de Chilón, llegó a casa de Antonio Pérez López a presionarlo para que abandone el EZLN y pase a la ORCAO. Lo interrogaron –señala la JBG– con “un tono de amenaza y con una actitud para verlo rendido; por la respuesta negativa de él, empezaron a cumplir lo que tenían planeado”.

Jueves 23

El poeta Javier Sicilia demanda al presidente Felipe Calderón pedir perdón por los 40 mil muertos causados por la lucha contra la delincuencia y pregunta: “¿les parecemos bajas colaterales?” La respuesta del mandatario es que no pedirá perdón por haber perseguido a los delincuentes; en eso – enfatiza–, “Javier estás equivocado” y en todo caso pido “perdón por no proteger la vida de las víctimas, estoy arrepentido de no haber enviado antes a las fuerzas federales”. En el primer diálogo público sostenido entre los miembros del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y el presidente, el poeta aprovechó para llamar a Calderón a reconocer que su estrategia ha sido equivocada. “¿Dónde están las ganancias?”, le pregunta, y el mandatario contesta que él seguirá en este combate aunque probablemente sea recordado con “mucho injusticia” por esta lucha y no por

otras obras que hizo. Al final, Sicilia acuerda con el mandatario federal instalar una comisión de seguimiento con la Secretaría de Gobernación y reunirse en tres meses para evaluar en qué medida se cumplió el pliego petitorio presentado por 23 representantes de la sociedad civil, y en el que de antemano la respuesta del presidente volvió a ser un no al regreso del ejército a sus cuarteles.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) expresa su “absoluto respeto a las organizaciones ciudadanas que impulsan el mejoramiento de la seguridad pública y la erradicación de la violencia en el país”. En un comunicado difundido horas después del encuentro que sostuvo Calderón con los participantes de la Marcha por la Paz, la corte sostiene que “ve coincidencias en la necesidad de fortalecer el respeto a los derechos humanos y el sometimiento de todos los actos de la vida pública a la ley, como única forma de consolidar un Estado democrático y de paz para el beneficio de todos los mexicanos”. En referencia al diálogo que se desarrolló en el Castillo de Chapultepec, en la capital del país, el máximo tribunal, dice estar abierto “a las solicitudes que estas organizaciones ciudadanas han planteado el día de hoy, para lograr un acercamiento”.

El secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, y la titular de la PGR, Marisela Morales, se reúnen por la tarde con integrantes de la agrupación Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos (FUNDEC) en Coahuila para dar seguimiento a la desaparición de 185 personas en el estado en los últimos tres años. De este primer encuentro, resultado del diálogo entre integrantes del Movimiento por la Paz y el ejecutivo, surge el compromiso de instalar en un mes una mesa de trabajo con las familias afectadas para analizar cada uno de los expedientes, a fin de que las investigaciones sean atraídas por la PGR. Yolanda Morán, representante de FUNDEC, informa que dejaron a los funcionarios un informe sobre las 185 desapariciones, “con todos los antecedentes, nombre, lugar y número de averiguaciones previas, incluso algunas presentadas en la PGR y que no les dieron seguimiento”. Resalta que Morales se comprometió a analizar cada uno de los casos, después de que tanto ella como Blake Mora les explicaron –en la reunión de hora y media en la Secretaría de Gobernación– que tienen la “orden de arriba de que hay que actuar”.

La Comisión de Derechos Humanos de Nuevo Laredo turnó a la CNDH una queja por la “desaparición”, entre el primero y el 17 de junio, de 15 personas que presuntamente fueron detenidas por elementos de la SEMAR, mientras que esta dependencia no ha informado de tales arrestos. Raymundo Ramos, presidente de la organización no gubernamental, dice que los familiares solamente autorizaron dar a conocer los nombres de José Fortino Martínez, José Cruz Díaz, Martín Rico, Héctor Rodríguez, Usiel Gómez, Diego Guillén, Joel Díaz y Arturo Guevara. Destacó que los afectados también presentaron la denuncia ap/pgr/tamps/nc/1994-III/2011, en la subdelegación de la PGR, que un visitador de la CNDH se entrevistó con los familiares de los desaparecidos y que Amnistía Internacional (AI) está documentando el caso.

La PGJE de Chiapas investiga la agresión que sufrió en las primeras horas del domingo 19 el periodista Jacobo Elnecavé Luttmann. Las autoridades inician la averiguación previa 223/CAJ4A/2011 por homicidio en grado de tentativa, lesiones y amenazas. Según las investigaciones, el comunicador se encontraba con amigos en una discoteca ubicada en el poniente de la ciudad, cuando de manera intempestiva sujetos desconocidos lo agredieron con un objeto contundente y le causaron heridas en el cráneo, la cara y el hombro derecho. La lesión de mayor gravedad es una cortada de 12 centímetros en la mejilla derecha.

En Ocosingo, Chiapas, dos indígenas bases de apoyo del EZLN, del municipio autónomo Lucio Cabañas, torturados, heridos y vejados cruelmente, son finalmente liberados por sus captores de la ORCAO, que los tuvieron en su poder desde el pasado día 20. La situación sigue tensa en la región Primero de Enero, próxima a esta ciudad, y las bases zapatistas realizan guardias en la sede autónoma. La JBG Corazón del arco iris de la esperanza, en el *Caracol* Torbellino de nuestras palabras, en el ejido Morelia, informa que Alberto y Pablo, como se identifica a los afectados, se

encuentran muy lastimados. El día 23 enfermaron “y nunca les dieron trato humano”. Fueron secuestrados para obtener su “rendición”.

Viernes 24

En San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Cometidos contra Inmigrantes informa que inició una averiguación previa y las investigaciones correspondientes por la desaparición del indocumentado salvadoreño Mario Palacios, quien según sus familiares está en dicha situación y habría sido secuestrado por el grupo criminal de Los Zetas en alguna parte de México. En un comunicado, señala que abrió la averiguación luego de que el vicecónsul del país centroamericano en Tapachula, Luis Perdomo Vidal, acudió ante un agente del Ministerio Público a interponer la demanda penal por la desaparición del migrante.

Funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la PF falsearon declaraciones ante la CNDH durante una investigación del organismo, que concluyó que los servidores públicos violaron diversas garantías de un reportero y de siete migrantes durante un operativo en Puebla, en julio de 2010, por lo que se presentará denuncia penal y administrativa contra los implicados. La recomendación 36/2011, dirigida a Genaro García Luna, titular de la SSP, y a Salvador Beltrán del Río, comisionado del INM, exige sanciones para el personal involucrado, la reparación del daño a las víctimas, y que en los operativos migratorios se permita el trabajo de los medios de comunicación para impedir que se vuelva a vulnerar la libertad de expresión, como ocurrió en ese caso.

La CDHDF analiza la forma de mostrar el video a la viuda del nigeriano Isacc Echinedú, debido a que, por ley, no puede exhibir evidencias de alguna queja que investigue. El 11 de mayo, el ciudadano de origen africano perdió la vida al ser atropellado y presuntamente agredido por policías. Aunque la concubina del extranjero pidió a la procuraduría capitalina que le fuera mostrada la grabación captada por una cámara de seguridad, ésta fue entregada a la comisión. Además se determinó que hay elementos para la detención de los César Elizarrarás Martínez y Alfonso Romero Salinas, por los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y abuso de autoridad, aunque ambos auxiliares son buscados.

En San Cristóbal de Las Casas, mas de 4 mil comuneros del municipio de Chalchihuitán ingresan a limpiar las mojoneras y brechas en el área que ese municipio se disputa con su vecino de Chenalhó, tres años después de que las partes firmaron un acuerdo para que ningún grupo entre en la zona y de ese modo evitar provocaciones y enfrentamientos mientras se encuentra una salida negociada al problema limítrofe. Argumentan que ingresaron a la zona en disputa debido a que ya pasaron tres años del inicio de las negociaciones y las autoridades municipales y el presidente del comisariado de Bienes Comunes de Chalchihuitán, Melesio García, nada hacen para que se solucione el problema.

En Oaxaca, dos muertos, dos lesionados y un desaparecido es el saldo de un enfrentamiento entre pobladores de los municipios de San Mateo Yucutindoo y Santiago Amoltepec, en la Sierra Sur, por un conflicto agrario, así como informan autoridades estatales y municipales. Valentín Barrios Sánchez, edil de Yucutindoo, explica que al menos 100 hombres armados, oriundos de Barranca Honda, Barranca Oscura, Piedra del Tambor y El Cocal, del municipio de Santiago Amoltepec, incursionaron después de las 18 hrs del viernes 24 en la rancharía El Limón, y dispararon contra tres sembradores.

Domingo 26

En Cherán, Michoacán, en plena meseta purépecha se avizora a la distancia una primera barricada: es el aviso de que se ha llegado a Cherán. Parece abandonada, pero la presencia de algunos miembros de la “ronda comunitaria” es la primera expresión del pueblo levantado. Conforme se avanza, hombres y niños embozados con paliacates en el rostro, así como mujeres afanosas en la alimentación de quienes defienden la comunidad, conforman la estructura popular para la autodefensa de sus tierras contra el crimen organizado. Una caravana del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad –sin la presencia del poeta Javier Sicilia– llega al pueblo para expresar su solidaridad lo que representa una tregua en la zozobra que Cherán vive desde abril, cuando se levantaron hartos de que los talamontes devoraran sus bosques. Desde entonces, la comunidad se ha reorganizado en una asamblea que encabeza la resistencia frente a la pasividad, complicidad o ambas, de los gobiernos federal, del estado y municipal.

En San Cristóbal de las Casas, autoridades comunitarias y comités de padres de familia de los bachilleratos interculturales en la zona Norte rechazan los planes de la Secretaría de la Educación Pública (SEP) para convertir sus escuelas en parte del sistema de educación media superior a distancia. La imposición de esta medida es vista por las comunidades como “una manera de discriminación y falta de respeto a las garantías constitucionales”. Las autoridades educativas del estado, añaden los indígenas, “presionan a los maestros, personal administrativo y padres de familia para que acepten el cambio de modalidad”. Las comunidades están en desacuerdo, “pues se tiene una valoración muy positiva” del trabajo de estos centros de estudio. “En ellos se han formado, en los pasados cinco años, gran cantidad de jóvenes que actualmente cursan estudios universitarios y que reivindican su identidad, elaborando proyectos comunitarios para un desarrollo sustentable, respetando su forma de organización y de percepción del mundo”.

En Torreón, Coahuila, los reiterados intentos que desconocidos hicieron para introducirse a las instalaciones del colectivo Justicia para Nuestras Hijas del estado de Chihuahua constituyen otro acto de hostigamiento tras las denuncias presentadas contra las fuerzas de seguridad por su directora, Norma Ledezma, en el Diálogo por la Paz con Justicia y Dignidad celebrado en la capital del país entre el presidente Felipe Calderón y víctimas de la violencia presididas por el poeta Javier Sicilia, así como advierten el Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, las Fuerzas de Unidad por los Desaparecidos de Coahuila y otras agrupaciones.

En Oaxaca, ejidatarios zapotecos de Unión Hidalgo, municipio ubicado del Istmo de Tehuantepec, informan que la compañía española Demex, que construye un parque eólico para abastecer de energía eléctrica a la panificadora Bimbo, comete abusos e intimida a los lugareños por protestar debido a que no ha cumplido con lo que ofreció a cambio de arrendar sus tierras. Bettina Cruz Velázquez, integrante de la Asamblea de los Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, asegura, en representación de los agricultores, que empresas extranjeras, en contubernio con los gobiernos federal, estatal y municipal, llegaron hace cinco años al Istmo de Tehuantepec, donde rentaron tierras ejidales, comunales y de pequeña propiedad con la intención de construir parques eólicos y abastecer de energía eléctrica a diversas firmas. Expone que representantes de Demex visitaron el jueves 23 sus terrenos, ubicados en la fase uno Las Palmas Zapotal, polígono Piedra Larga, donde la firma española proyecta construir un parque eólico. Sostuvo que los empleados de Demex pretendieron desalojarlos, con amenazas de elementos armados de la Agencia Estatal de Investigación. Demex, aseguró, entró a las tierras de los indígenas sin proporcionarles información completa sobre el proyecto, lo que viola el convenio 169 de la OIT, el cual estipula: “deberá impedirse que personas extrañas puedan aprovecharse de las costumbres de los pueblos o de su desconocimiento de las leyes para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de sus tierras”. Advierte que los ejidatarios acordaron organizarse para recuperar sus predios y demandar la

cancelación de los contratos civiles de arrendamiento. Asimismo, exige que las autoridades se desistan de las averiguaciones previas y órdenes de aprehensión contra los inconformes.

El sacerdote Alejandro Solalinde, director del albergue Hermanos en el Camino, de Ixtepec, Oaxaca, dice que al menos 80 migrantes fueron secuestrados en Medias Aguas, Veracruz, el pasado viernes 24. “Ya se presentaron dos denuncias en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), y desde el sábado la CNDH asiste a los testigos en su declaración ministerial”, asevera el clérigo. La mayoría de los migrantes plagiados “estuvieron en nuestro albergue, tenemos fotos de cada uno, sus nombres y su lugar de origen. Esta información nos fue solicitada por la SIEDO y también se la vamos a entregar a las embajadas y consulados de Honduras y El Salvador, [mismos que] ya entraron en contacto con nosotros”, resalta el religioso.

En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en el ejido San Marcos Avilés, municipio de Chilón, las bases de apoyo del EZLN fueron amenazadas de muerte, son hostigadas y se encuentran en riesgo de desplazamiento forzado, así como informa el Frayba. Los agresores son habitantes del mismo ejido, afiliados a PRI, PRD y Partido Verde Ecologista de México (PVEM). El Frayba alerta del “inminente riesgo a la vida, integridad y seguridad personal que sufren las bases zapatistas de San Marcos Avilés, ya que las amenazas de muerte y hostigamientos han ido en aumento”, además del despojo de tierras. También han recibido amenazas miembros del campamento civil por la paz, instalado en la comunidad desde abril pasado.

Un grupo de alrededor de 200 personas, en su mayoría vecinas de la comunidad de San Luis Acatlán, Guerrero, y de las comunidades de Yoloxóchitl y Cuanacaxtitlán, de la misma entidad, acuden a las instalaciones de la Casa de Justicia Comunitaria de San Luis Acatlán, que es una autoridad regional. Los inconformes exigen la libertad de Teresita Félix Hernández, Leticia Villegas Morán y Rafaela Meza Gerónimo, quienes están detenidas, acusadas de un fraude millonario en contra de socios de la cooperativa Chinde Etanyo. En un comunicado, la casa de justicia informa que el día de la manifestación, ocurrida el pasado domingo, “de manera circunstancial se encontraban sesionando consejeros de nuestra organización, y luego de más de una hora de mitin en la calle frente a la casa de justicia, se pidió la presencia de una comisión de los inconformes para atender sus reclamos.

Unos 150 campesinos de la comunidad de Huecahuaxco, municipio de Ocuituco, Morelos, toman la sede del ayuntamiento, en demanda de 722 pisos firmes que les fueron aprobados el año pasado; pero al no encontrar al alcalde, Juvenal Campos Pineda, destruyen los vidrios de las ventanas, algunas computadoras y muebles, y queman algunos documentos. En Guerrero, 150 labriegos provenientes de unas comunidades ocupan la sede del ayuntamiento de Cutzamala de Pinzón, y exigen al edil Francisco Estrada 2 mil toneladas de fertilizante.

Martes 28

Ante la falta de seguridad para sus integrantes, el 24 de junio dejó de funcionar la Iniciativa Frontera Norte de México, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, cuya misión era documentar las violaciones a garantías fundamentales de que son víctimas mexicanos deportados de Estados Unidos, tanto en aquel país como en territorio nacional. Durante casi ocho meses, las organizaciones integrantes del proyecto esperaron respuestas de las autoridades a sus peticiones de protección. Hubo diálogo, pero ninguna acción concreta, ni siquiera para cumplir con las medidas cautelares solicitadas por la CIDH, así como afirma Gabriela Morales, del Centro de Derechos Humanos del Migrante.

En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, las amenazas de expulsión y de muerte contra las bases de apoyo del EZLN en la comunidad San Marcos Avilés, municipio de Chilón, denunciadas la noche del lunes 27, alcanzan proporciones alarmantes por segunda ocasión en menos de un año. El 9 de septiembre de 2010, las familias zapatistas fueron desplazadas durante más de un mes por ejidatarios afiliados a los partidos políticos PRI, PRD y PVEM. Los mismos son responsables de las nuevas agresiones. El Frayba señala “la responsabilidad del Estado por omisión” en estas agresiones, “ya que las autoridades no han actuado para garantizar la integridad y seguridad de las bases zapatistas y el acceso a la tierra”. Ello, a pesar de las denuncias de la JBG de Oventik y las varias intervenciones enviadas por el propio Frayba al gobierno de Chiapas. El organismo, que preside el obispo Raúl Vera, demanda el cese de las amenazas de muerte, el hostigamiento y el despojo contra las bases de apoyo del EZLN por integrantes de los partidos políticos del ejido, así como proteger y garantizar su vida y seguridad, “respetando su proceso autonómico, que vienen construyendo hace años, en el marco del derecho a la libre determinación de los pueblos”, sancionado por la OIT, la ONU y firmado por el Estado mexicano.

En Cuernavaca, Morelos, AI exige a los tres niveles de gobierno que esclarezcan la posible desaparición forzada de Jethro Ramsés Sánchez Santana, que el pasado primero de mayo fue detenido por policías municipales, quienes declararon que lo entregaron a agentes federales, y éstos a militares. El organismo expresa su preocupación porque hace casi dos meses que no se sabe nada del joven y las autoridades se niegan a dar información sobre su paradero. Además, exige que “se brinde protección a testigos y familiares”.

“¡Justicia!, que se castigue a los autores intelectuales”, exigien en marchas simultáneas en Coyuca de Benítez y Acapulco militantes de organizaciones civiles y de campesinos, al recordar la matanza de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas.

Al cumplirse 16 años de que efectivos de la policía Motorizada y Judicial del estado balearon a campesinos que se dirigían a Atoyac de Álvarez a bordo de un camión de redilas, con saldo de 17 muertos y 21 heridos, el gobierno de Guerrero informa que reabrirá el caso para castigar a los autores intelectuales de esa matanza.

Miércoles 29

Más de un centenar de organizaciones de derechos humanos lanza un comunicado conjunto mediante el cual manifiesta su preocupación por la defensa de la figura del arraigo que hizo el procurador general de justicia del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, y subraya que ese mecanismo es “contrario a los principios del estado de derecho”. En una carta firmada por colectivos de defensa de garantías individuales como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la Red por los Derechos de la Infancia en México y la Red “Todos los Derechos para Todas y Todos”, se le recuerda al funcionario que el arraigo está ligado a abusos. Los grupos de derechos humanos le solicitan a Mancera que obedezca la recomendación 2/2011 de la CDHDF, cuyo contenido lo obliga a establecer en un lapso no mayor a 30 días las disposiciones necesarias para que la PGJDF busque alternativas al arraigo. También le ordena presentar ante la asamblea de la ciudad una propuesta de reforma al Código de Procedimientos Penales.

En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la CNDH investiga la agresión que sufrió el periodista Jacobo Elnecavé Luttmann, conductor de uno de los noticieros del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. El comunicador fue atacado el pasado 19 de junio con un objeto contundente que le causó heridas en el cráneo, rostro y hombro derecho, cuando convivía con amigos en un centro de diversiones. En un primer reporte, la PGJE informa que en el ataque el agresor “se lanzó contra el periodista, al tiempo que repetía ‘esto es para que no te metas con los

Álvarez Puga, esto también es por Pablo e Isaín, te vas a arrepentir””. Por estos hechos se inició la averiguación previa 223/CAJ4A/2011 por los presuntos delitos de homicidio en grado de tentativa, lesiones y amenazas. La CNDH señala que luego de la agresión, Luttman declaró al Ministerio Público “que su agresor fue el reportero Isaín Mandujano”, con quien había “tenido serios roces por el manejo de información y opiniones, donde Isaín se ha mostrado intolerante”.

Jueves 30

En lo que va de 2011 suman más de 6 mil las personas asesinadas presuntamente por el crimen organizado, y durante la administración de Felipe Calderón se han reportado 41 mil 648 ejecuciones, de acuerdo con un conteo realizado por *La Jornada* y datos estadísticos de la Presidencia de la República, de diciembre de 2006 a diciembre de 2010. Asimismo, de acuerdo con los registros gubernamentales, cada vez más jóvenes de entre 18 y 25 años de edad se suman al crimen organizado y participan en actividades de sicariato o tráfico de drogas. La probabilidad manifiesta de que sea aprobado un nuevo proyecto de Ley de Seguridad Nacional en el seno de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, genera la oposición de 96 organizaciones de derechos humanos del país que exigen al presidente de ese órgano legislativo, Javier Corral Jurado, esclarecer y publicar la metodología a utilizarse en la incorporación de observaciones y recomendaciones planteadas durante el proceso de consulta pública sobre esa materia. El texto signado por los centros de derechos humanos Fray Francisco de Vitoria, Miguel Agustín Pro y de la Montaña Tlachinollan –además de otras 93 organizaciones civiles– desglosa las recomendaciones más reiteradas por los ponentes en las consultas públicas y el foro nacional sobre el tema, y que deberán tomarse en cuenta de manera irreductible.

En una reunión efectuada por representantes de diversas comunidades indígenas e integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, realizada en la comunidad purépecha de Santa María Ostula, en el municipio michoacano de Aquila, se acuerda celebrar el próximo 6 de agosto el primer encuentro sobre experiencias comunitarias en materia de seguridad, a fin de intercambiar los esquemas que se han aplicado en diversas comunidades, indígenas, principalmente. La reunión se efectúa en ocasión del segundo aniversario de que la comunidad purépecha recuperó 10 has. del predio denominado Xayacalam, que le habían sido invadidas.

En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, los ejidatarios de San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, alertan sobre un intento de despojo en Alan Sac jun, anexo del ejido, por parte de grupos oficialistas. Asimismo, la comunidad tzeltal denuncia abusos y trato discriminatorio de las autoridades carcelarias en Playas de Catazajá hacia los familiares de los presos políticos de la comunidad (conocidos como “los cinco de Bachajón”, aunque uno de ellos se encuentra en una correccional en Ocozocautla). Los ejidatarios acusan de abusos y malos tratos a David Montero Montero y David Arias Jiménez, director y alcalde, respectivamente, del CERSS número 17, en Playas de Catazajá, “así como los custodios de esa penitenciaría, ya que el pasado 26 de junio un grupo de familiares de presos fueron obligados a enseñar sus intimidades cuando querían ingresar a la visita”. Los custodios “no respetaron la integridad de los familiares, ofendiéndolos verbal y físicamente”.

A más de cuatro años de que Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), fueran desaparecidos por elementos de las Fuerzas Armadas, el crimen sigue en la total impunidad debido a la falta de voluntad política de las autoridades mexicanas, así como lamentan los integrantes de la Comisión de Mediación entre el gobierno federal y el mencionado grupo guerrillero. Durante la presentación del libro *Desapariciones forzadas en México* –con el que buscan documentar todo el proceso de búsqueda de justicia para ambos guerrilleros y sus familiares–, los miembros de dicha instancia advierten que

este delito de lesa humanidad forma parte de una estrategia gubernamental para acallar el descontento social.

Elementos de la Policía Federal Ministerial detienen en Nogales, Sonora, a Delia Irene Botello Amante, coordinadora zonal de guarderías del IMSS, considerada responsable de los delitos de ejercicio indebido del servicio público, homicidio y lesiones culposas tras el incendio de la guardería ABC, donde fallecieron 49 menores, el 5 de junio de 2009. La PGR informa que Botello Amante fue detenida en la calle San Gregorio del fraccionamiento San Carlos, en cumplimiento de tres órdenes de aprehensión y una cuarta de reaprehensión que fueron giradas por el juzgado primero de distrito, con sede en Hermosillo, dentro de las causas penales 126/2009, 182/2009 y 12/2011. Botello Amante es trasladada a Hermosillo para ser ingresada al Centro de Readaptación Social a disposición del juez que la reclama, quien resolverá su situación jurídica.

En Cuernavaca, Morelos, integrantes de la Red por la Paz y la Justicia colocan 80 cruces de madera alrededor de la ofrenda floral que mantienen en la entrada del palacio estatal en memoria de Juan Francisco Sicilia, asesinado el 27 de marzo junto con otras seis personas, para exigir al gobierno de Felipe Calderón que pare la estrategia militar contra el narcotráfico, porque está a punto de convertir a México en una fosa común. Insisten en que esa guerra ha fallado debido a que no ha bajado ni erradicado la producción de drogas, menos el trasiego a Estados Unidos, y ha aumentado el consumo en el país. La activista Nayeli Sánchez dice que las cruces reflejan que México se está convirtiendo en “un largo panteón”. Bajo la consigna “y muchos no volvieron”, se trata de “recordar a nuestros 40 mil muertos. Estamos convirtiendo este zócalo en un panteón”, dice.

Glosario de siglas

AI	Amnistía Internacional
ALDF	Asamblea Legislativa del Distrito Federal
APPO	Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca
CCI	Central Campesina Independiente
CEDH	Comisión Estatal de los Derechos Humanos
CDHDF	Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
CDHDO	Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa
CDHM	Centro de Derechos Humanos de la Montaña
CEDH	Comisión Estatal de los Derechos Humanos
CERSS	Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados
CIDH	Corte Interamericana de Derechos Humanos
CMDPDH	Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
CNDH	Comisión Nacional de Derechos Humanos
CNTE	Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
CPJ	Comité de Protección de Periodistas
EPR	Ejército Popular Revolucionario
ERPI	Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente
EZLN	Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Frayba	(Centro de Derechos Humanos) Fray Bartolomé de las Casas
FUNDEC	Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila
IMSS	Instituto Mexicano del Seguro Social
INM	Instituto Nacional de Migración
ISSSTE	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

JBG	Junta de buen gobierno
OEA	Organización de Estados
OIT	Organización Internacional del Trabajo
ONG	Organización no gubernamental
ONU	Organización de las Naciones Unidas
ORCAO	Organización Regional de Cafecultores de Ocosingo
PF	Policía Federal
PGJDF	Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal
PGJE	Procuraduría General de Justicia del Estado
PGR	Procuraduría General de la República
PRD	Partido de la Revolución Democrática
PRI	Partido Revolucionario Institucional
PVEM	Partido Verde Ecologista de México
SCJN	Suprema Corte de Justicia de la Nación
SEDENA	Secretaría de la Defensa Nacional
SEMAR	Secretaría de Marina
SG	Secretaría de Gobernación
SIEDO	Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada
SITET	Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Tabasco
SNTE	Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
SSP	Secretaría de Seguridad Pública
SSPDF	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal
UACM	Universidad Autónoma de la Ciudad de México
UNAM	Universidad Nacional Autónoma de México
UPN	Universidad Pedagógica Nacional

Realizada por el Comité de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura de México del Observatorio Social de América Latina (OSAL-CLACSO).

Integrantes: Mariana López de la Vega y Fernando Munguía Galeana

Fuentes: diarios La Jornada y El Universal.

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales



Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais



OSAL

Observatorio Social de América Latina
Publicación electrónica

Cronología del Conflicto Social

México

Julio 2011

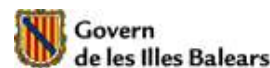
Editada en junio 2012



Agencia Sueca
de Desarrollo Internacional



Agencia Noruega para la
Cooperación al Desarrollo



Conselleria d'Afers Socials,
Promoció i Immigració
Direcció General de Cooperació

El Observatorio Social de América Latina [OSAL] cuenta con el apoyo de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional [ASDI], la Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo [NORAD] y la Agencia de Cooperación Internacional de las Islas Baleares [ACIB].

Documento de trabajo N° 961

*Realizado por el Comité de Seguimiento y Análisis
del Conflicto Social y la Coyuntura de
México*



Integrantes Fernando Munguía Galeana
Mariana López de la Vega

Fuentes diarios La Jornada y El Universal

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Se autoriza la reproducción de los artículos en cualquier medio a condición de la mención de la fuente y previa comunicación al director.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en el documento incumbe exclusivamente al autor o a los autores firmantes y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

El **Observatorio Social de América Latina** (OSAL) constituye una iniciativa del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinada a la promoción de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, las dinámicas de participación y los repertorios de acción de los movimientos sociales y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado es uno de los resultados de este trabajo de relevo y registro llevado a cabo en el marco del programa. Se trata de un escrito en el que se sintetizan las principales acciones de movilización y protesta social y las medidas políticas llevadas a cabo durante el mes indicado en el país referido.

La cronología presentada ha sido elaborada por uno de los **Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana** que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo la coordinación del equipo de investigación mexicano, que forma parte de la red institucional de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.

Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana

PAÍS	INSTITUCIÓN	COORDINACIÓN
Argentina y Uruguay	PIMSA (Argentina)	María Celia Cotarelo
Bolivia	CIDES – UMSA	Dunia Mokrani Chávez Pilar Uriona Crespo
Brasil	LPP - UERJ	Roberto Leher
Chile	DI - UARCIS	Juan Carlos Gómez Leyton
Colombia	Escuela Nacional Sindical	Guillermo Correa Montoya
Costa Rica	IIS - FCS - UCR	Sindy Mora Solano
Ecuador	Centro de Investigaciones CIUDAD	Mario Unda
Guatemala	FLACSO Guatemala	Simona Yagenova
México	FCPS - UNAM	Massimo Modonesi Lucio Fernando Oliver Costilla
Panamá, El Salvador, Nicaragua y Honduras	CELA "Justo Arosemena" (Panamá)	Marco A. Gandásegui (h)
Paraguay	Centro de Documentación y Estudios	Quintín Riquelme
Perú	Instituto de Estudios Peruanos	Ramón Pajuelo Teves
República Dominicana y Puerto Rico	CES "Padre Juan Montalvo" (Rep. Dominicana)	Octavio Figueroa
Venezuela	PROVEA	Marco Antonio Ponce

México

Cronología del conflicto social

Julio de 2011

Viernes 1

La Red contra la Represión y por la Solidaridad (RCRS), compuesta por colectivos de la Otra Campaña de diversos estados del país, denuncia la escalada de violencia contra las comunidades zapatistas de Chiapas, y en general contra los pueblos indígenas y los adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Los días 22 y 24 de junio, refiere, la zapatista Junta de Buen Gobierno (JBG) Corazón del Arco Iris de la Esperanza denunció agresiones, violencia y despojo por miembros de la Organización Regional de Cafecultores de Ocosingo (ORCAO) a las bases zapatistas del poblado Mártires, municipio autónomo Lucio Cabañas. La red manifiesta también su preocupación por el hostigamiento, despojo y riesgo de desplazamiento contra las bases zapatistas de San Marcos Avilés.

Damnificados por el desborde del río de Los Remedios, en el Estado de México, bloquean la avenida Central, una de las principales vías de circulación entre el municipio de Nezahualcóyotl y el Distrito Federal que tienen los habitantes de Ecatepec, Coacalco, Tultepec y Tecámac, entre otros municipios. Cerca del mediodía, los vecinos protestan en demanda de víveres, agua y ayuda; ante ello, son desalojados a toletazos y con gases lacrimógenos por 150 elementos de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE), que los repliegan hacia el cruce de las calles Valle de Almazora y avenida Central, en el área de Nueva Valle de Aragón, municipio de Ecatepec, donde el río inundó al menos treinta colonias. Los manifestantes responden a pedradas y queman llantas y maderos. Después de 2 horas se reabre la circulación vehicular, debido al embate continuo de las fuerzas policiales.

Trabajadores de limpieza de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México denuncian abusos y maltrato por el personal de Fejastec, empresa de terciarización. Aseguran que no han tenido vacaciones, pues cada 12 meses vuelven a ser contratados “como si fuéramos nuevos y, por lo tanto, sin derecho a vacaciones, hasta que transcurra un año”.

Sábado 2

Alrededor de 300 personas participan en “La marcha de las putas” en el centro histórico de la ciudad de Mérida, Yucatán, para exigir respeto a sus derechos humanos. El contingente, integrado por sexoservidoras y organizaciones no gubernamentales, parte del Congreso local, y al pasar frente a la catedral las manifestantes levantan el grito de “¡Fuera rosarios de nuestros ovarios!”, lo que molesta a los feligreses que salían de misa. También demandan atención de la gobernadora, Ivonne Ortega Pacheco, y de la alcaldesa, Angélica Araujo, y realizan un mitin en el parque Eulogio Rosado.

En el marco de la jornada de actividades por el primer aniversario de la excarcelación de Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, tres de los más importantes líderes del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), la académica Aída Hernández Ruiz afirma que luego de más de cinco años de la represión gubernamental en San Salvador Atenco los abusos cometidos por

las fuerzas policiacas siguen impunes y la criminalización del FPDT no se ha detenido, pese a lo cual sus activistas han creado espacios de defensa de los derechos humanos y siguen reivindicando los motivos de su lucha.

Damnificados por los desbordamientos del canal Xochiaca exigen al gobierno del Estado de México entubar ese drenaje de aguas negras para evitar nuevas inundaciones. En la zona norte de Nezahualcóyotl, vecinos de las colonias Valle de Aragón 2, Plazas de Aragón e Impulsora demandan entubar el río Los Remedios, que también se desbordó el jueves y afectó principalmente a unas treinta colonias de Ecatepec. En redes sociales, los vecinos exigen a los tres niveles de gobierno confinar el río. Además, demandan a las autoridades del Estado de México y a la empresa española OHL, concesionaria del Circuito Exterior Mexiquense, la reconstrucción del puente vehicular que cruza el río en la intersección con Periférico Oriente.

Domingo 3

Sin respuesta de las autoridades a su añejo conflicto de propiedad agraria, representantes de las comunidades de Santa Rosa Xochiac, San Bartolo Ameyalco, San Bernabé, San Lorenzo Acopilco y La Magdalena, pueblos rurales del Distrito Federal, anuncian que retomarán los proyectos que se han visto frenados por esa disputa de tierras, y responsabilizan al gobierno de la ciudad de cualquier situación de violencia que se genere con los habitantes de San Mateo Tlaltenango. Los líderes comunales y ejidales detallan que cada uno de esos poblados ha sostenido un largo juicio con esta última localidad por la propiedad de tierras tanto del Parque Nacional Desierto de los Leones como de su zona aledaña, y que a pesar de que los tribunales agrarios han resuelto que el gobierno del Distrito Federal asuma la guardia y custodia de esas hectáreas, este fallo no se ha cumplido y la tensión crece día con día.

Hombres armados asesinan a balazos al mediodía a Isabel Ayala Nava, de 54 años, última esposa del guerrillero Lucio Cabañas Barrientos y quien fuera madre de su única hija, Micaela Cabañas Ayala. El asesinato ocurre en el poblado Xaltianguis, en la zona rural de Acapulco, informa la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil estatal.

La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navy Pillay, presentará el próximo miércoles la campaña nacional “Yo me declaro”, diseñada por su oficina en favor de los defensores de derechos humanos, con la cual se busca frenar la violencia en contra de los activistas. Diversas redes sociales se sumarán a dicha campaña ante las constantes agresiones de que son víctimas. Ese día, la alta comisionada se reunirá con el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, quien le entregará un informe sobre los defensores de garantías fundamentales y participará en el foro “La reforma constitucional en materia de derechos humanos”.

Lunes 4

Rafael Rodríguez Dircio, integrante de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) y beneficiario de medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fue detenido en un retén por elementos de la policía investigadora ministerial de Guerrero y llevado a una prisión de Ayutla de los Libres, denuncia el Centro de Derechos Humanos

Tlachinollan. Esta misma organización sostiene que el activista indígena está preso desde el pasado 29 de junio, acusado de participar en el asesinato de Alejandro Feliciano García, informante del Ejército, en la comunidad de El Camalote, en 2008, delito que, aseguran, no cometió. “La detención del indígena muestra claramente que la persecución contra los defensores no ha cesado”, afirman.

Familiares y líderes de organizaciones sociales manifiestan su indignación y condenan el asesinato de Isabel Ayala Nava. Micaela Cabañas Ayala exige al gobierno terminar con la violencia que azota a las comunidades de Guerrero. En tanto, el Comité Cerezo y la asociación civil Nacidos en la Tempestad solicitan a las organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales demanden al gobierno investigar los dos asesinatos y resguardar la integridad física y psicológica de Micaela Cabañas Ayala, hija del comandante guerrillero.

Vecinos de siete colonias de Cuernavaca, Morelos, se manifiestan contra la construcción de una planta tratadora de aguas residuales que se construye en el parque Tlaltenango. Los inconformes afirman que existe el riesgo de que las aguas negras se esparzan en la zona urbana de esta capital, sobre todo en temporada de lluvias, lo que afectaría cientos de viviendas, como ocurrió la semana pasada en el Estado de México.

Martes 5

Decenas de familiares de los presos en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) número 17, de Playas de Catazajá, Chiapas, denuncian malos tratos y humillaciones sexuales por parte de las autoridades del penal. Responsabilizan al director, David Montero Montero, y exigen la intervención del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, general mayor de caballería Rogelio Hernández de la Mata, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 de la Constitución estatal. En dicho centro carcelario se encuentran cuatro de los cinco indígenas, adherentes de la Otra Campaña del ejido San Sebastián Bachajón, presos desde el pasado 3 de febrero. Se trata de Juan Aguilar Guzmán, Jerónimo Guzmán Méndez, Domingo García Gómez y Domingo Pérez Álvaro. Se les considera presos políticos, pues está demostrado que son inocentes de los cargos que les imputan.

Ante las constantes amenazas del crimen organizado, cuyos pistoleros los obligan a recibir heridas en salas de emergencia e incluso en quirófanos, cientos de enfermeras, camilleros y médicos de los Servicios de Salud del estado de Zacatecas exigen a las autoridades estatales mayor vigilancia y atención inmediata de las corporaciones policiacas locales.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan informa que por considerar que no hay pruebas suficientes para procesarlo, Inocente Orduño Magallón, juez de primera instancia del distrito judicial de Allende, en el municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, dictó un auto de libertad para el defensor indígena de derechos humanos Rafael Rodríguez Dircio, de la OPIM, detenido el 29 de junio acusado de participar en el asesinato de Alejandro Feliciano García, perpetrado en la comunidad de El Camalote el primero de enero de 2008.

Miércoles 6

El presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, presenta ante la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, el Informe Especial sobre la Situación de las y los Defensores en México, que abarca el periodo de enero de 2005 a mayo de 2011, e indica que en esa y en las comisiones estatales se tienen registradas 523 quejas y expedientes de violaciones de las garantías básicas de defensores, que incluyen 27 ejecuciones. El mayor número de quejas, resalta el *ombudsman* nacional, lo tiene Jalisco, con 97; el segundo lugar corresponde al Distrito Federal, con 46; Chiapas se ubica en el tercer lugar, con 44; Oaxaca detenta el cuarto sitio, con 36, y Chihuahua, el quinto lugar, con 28.

Micaela Cabañas Ayala, hija del guerrillero Lucio Cabañas Barrientos, y veinte de sus familiares abandonan la comunidad de Xaltianguis, en la zona rural de Acapulco, Guerrero, luego de recibir amenazas tras el asesinato de su madre, Isabel Ayala Nava, y su tía, Reyna Ayala, perpetrados por un grupo armado que las atacó la tarde del domingo cuando salían de la iglesia evangélica de dicho poblado.

Jueves 7

Activistas y defensores de derechos humanos en Chiapas denuncian hostigamiento judicial y reiteradas amenazas de cárcel. El Centro de Derechos Humanos “Digna Ochoa” declara en Tonalá, Chiapas, que el Estado mexicano, y en particular el gobierno estatal, utilizan el sistema judicial para perseguir, hostigar y encarcelar a defensores de derechos humanos y a sus familiares. Esto, al informar sobre el recrudecido hostigamiento contra los defensores en la entidad, en particular hacia Nataniel Hernández Núñez, director del centro.

La juez María Guadalupe Flores Rocha, adscrita al reclusorio para menores Villa Crisol, en Chiapas, dicta sentencia para que sea liberado de manera condicionada el joven Mariano Demeza Silvano, uno de los cinco adherentes a la Otra Campaña del ejido San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, detenidos a principios de marzo pasado acusados de los delitos de homicidio, daños y atentados a la paz pública, luego de un enfrentamiento con militantes priístas por la disputa del centro turístico Cascadas de Agua Azul. Representantes del Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas” (Frayba) informan que el menor de 17 años edad habría sido liberado este día, y quedaría bajo resguardo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal de Chilón para realizar trabajos en favor de la comunidad, ya que, según la sentencia, su libertad es condicionada.

El sindicato de burócratas estatales y municipales de Baja California inicia un paro de labores para exigir alza salarial de 5.5%. El sindicato representa a 19 mil empleados de base adscritos al gobierno estatal y a los ayuntamientos de Tijuana, Mexicali, Ensenada, Playas de Rosarito y Tecate, así como al Congreso local y al Tribunal Superior de Justicia local, por lo que los trabajadores de confianza atienden la solicitud de trámites de atención ciudadana y servicios. Hace 25 años que no se realizaba ningún paro laboral por demanda de aumento de sueldo en Baja California.

Elementos de la Policía Estatal, en Tepic, Nayarit, y custodios, amenazan con marchar a la ciudad de México para buscar que las autoridades les ayuden a resolver el conflicto laboral que los tiene en paro desde hace 21 días frente al palacio de gobierno. Los manifestantes advierten que ésta será la

última semana que esperen respuesta del gobierno del estado, pues informan que el diálogo se terminó hace unos días. En entrevista colectiva, los policías estatales adelantan que formarán una comisión que acudirá a las instalaciones centrales de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, al Senado o a la Cámara de Diputados, donde explicarán que desean volver a sus trabajos, pero en condiciones de trabajo dignas.

Con mantas y cartulinas colocadas en inmuebles, postes de luz y en el módulo de seguridad, vecinos de Santa Isabel Tola, Distrito Federal, expresan su rechazo a la construcción del Viaducto Elevado Indios Verdes - Santa Clara por el gobierno federal, que significará la expropiación de sus casas, la desaparición de áreas verdes y recortar el Parque del Tepeyac.

Viernes 8

Napoléon Gómez Urrutia, secretario general del sindicato minero, critica el empecinamiento del Grupo México y del gobierno de Felipe Calderón, los cuales –asegura– han urdido regalarle el contrato colectivo de trabajo en Cananea a un sindicato charro de Sonora, de la antes gloriosa Confederación de Trabajadores de México (CTM). En un mensaje para el foro “El conflicto minero: de Cananea a Pasta de Conchos”, organizado por la universidad Obrera y la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco (UAM-X), así como por el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) y la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, rechaza la actitud de la CTM, pero indica que esta acción no rendirá frutos.

Representantes de las comunidades agremiadas al Frente Popular Campesino “Lucio Cabañas”, adherentes a la sexta declaración de la selva Lacandona y participantes en la Otra Campaña en la región selva fronteriza, denuncian en Las Margaritas, Chiapas, que según informaciones publicadas en la prensa estatal este jueves los representantes de la organización tendrían, inmotivadamente, órdenes de aprehensión en su contra. Recuerdan que el 30 de mayo, Matilde Hernández Álvarez, Armando Luna Álvarez, Óscar y Ernesto López García, este último trabajador del programa Chiapas Solidario, se posesionaron de un rancho particular en el tramo carretero Las Margaritas - Comitán, al lado de la ranchería Nueva Aurora, y proclamaron con una manta: “Predio recuperado por la Organización Campesina Lucio Cabañas”. Los representantes del frente señalan que “estas personas no pertenecen a la organización. Son despojadores [quienes] utilizando nuestro nombre se han posesionado del terreno con el fin de venderlo por lotes, engañando a la gente”.

Alrededor de 2 mil 500 ciudadanos demandan juicio político contra la gobernadora del estado de Yucatán, Ivonne Ortega, y la alcaldesa de Mérida, Angélica Araujo, ambas priístas, al responsabilizarlas de la represión que el pasado lunes sufrió un grupo de manifestantes. En la explanada del Congreso estatal, los inconformes anuncian que seguirán con la lucha para evitar más actos represivos, como la ocurrida en la glorieta de La Paz, ubicada en el Paseo de Montejo de Mérida. Esa vez, grupos de choque priístas arremetieron contra ciudadanos que pretendían impedir el comienzo de un paso vial.

Aproximadamente 500 afiliados al Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara (UdeG) se manifiestan afuera del Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios 10, en la misma ciudad de Guadalajara, para exigir al secretario de Educación, Alonso Lujambio Irazábal, el pago de los estímulos que se deben a 670 docentes. Exigen también una explicación del destino de 960 millones de pesos que la Federación prometió a la casa de estudios.

Sábado 9

La JBG del caracol zapatista de La Garrucha denuncia despojos de tierra y agresiones de la ORCAO contra las comunidades Nuevo Paraíso y Nuevo Rosario, en los municipios autónomos Francisco Villa y San Manuel, respectivamente. Según la JBG, “los malos gobiernos de Felipe Calderón, Juan Sabines Guerrero y el presidente municipal de Ocosingo, Arturo Zúñiga, han intensificado la campaña de contrainsurgencia manipulando a los dirigentes de ORCAO, quienes a su vez manipulan a sus bases para enfrentarnos entre campesinos, entregando tierras recuperadas”. Los señalamientos a la ORCAO como instrumento de la contrainsurgencia, hechos por la junta zapatista El Camino del Futuro, en la selva tzeltal, se suman a las denuncias en el mismo sentido de la JBG Arco Iris de la Esperanza, en el caracol de Morelia, hechas el 22 y 24 de junio, referentes a agresiones y despojos en el municipio autónomo Lucio Cabañas.

Directivos, reporteros y trabajadores del diario Noroeste, en Culiacán, Sinaloa, exigen al gobernador Mario López Valdez que no queden impunes las agresiones contra el medio, que incluyen tiroteos, robos de automóviles corporativos y la aparición de un cadáver decapitado ante sus puertas. “El crimen organizado es enemigo de la libre expresión, pero también pueden serlo el poder político y los poderes fácticos, que muchas veces orillan al periodista a la autocensura”, señalan los inconformes en una carta publicada este sábado y entregada el viernes al mandatario.

Al menos 400 vecinos de los fraccionamientos Geovillas de Terranova y Real del Valle bloquean más de cuatro horas la vía Lechería - Texcoco, en el Estado de México, para exigir la protección del edil Roberto Sánchez Campos y de las constructoras Geo y Ara, debido a que paracaidistas invaden sus viviendas cuando las ven desocupadas. Lucía Martínez, representante vecinal, asegura que el viernes integrantes del Movimiento Unificado golpearon a tres vecinos que intentaron evitar la invasión a una casa de Geovillas.

El Frente Amplio contra la Supervía Poniente solicita a la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Navanethem Pillay, su intervención para salvaguardar los derechos humanos y ambientales de los habitantes de la ciudad de México. En una misiva enviada, los ciudadanos que se oponen a la carretera urbana de cuota enumeran, entre otras cosas, lo ocurrido el 19 y 30 de octubre de 2010, fechas en que la administración de Marcelo Ebrard intentó, sin éxito, tomar posesión física de los inmuebles expropiados de La Malinche; el 20 de enero de este año, cuando la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió la recomendación 1/2011; y la incursión policiaca del uno de enero a la llamada zona cero, pese a que existían medidas cautelares y a que se trataba de un día feriado.

Con más de 30 mil personas residentes de pueblos y colonias de las cinco zonas de la delegación Tlalpan reunidas en el Centro Deportivo “Villa Olímpica”, dirigentes de Izquierda Democrática Nacional (IDN) del Partido de la Revolución Democrática (PRD) anuncian la conformación del Frente Democrático de Tlalpan con el objetivo de establecer alianzas ciudadanas en la demarcación y cerrar la puerta –por su colindancia con el Estado de México– al efecto “Peña Nieto”. El acto es encabezado por el dirigentes del Movimiento Nacional por la Esperanza, quienes hacen un llamado a reflexionar sobre los resultados de la elección en el Estado de México y asumirlos como una advertencia.

La asociación civil Unión de Fuerzas por el Bien Común denuncia que desde hace un año han solicitado al Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM) poner un alto y resolver estas

incongruencias en el cobro por este servicio que reciben los habitantes de colonias populares de la delegación Tlalpan, donde se asientan viviendas hechas con material precario, que reciben el agua por tandeo, y se ven obligados a pagar hasta 30 mil pesos al bimestre por el servicio, mientras que en zonas residenciales instaladas sobre camino a Santa Teresa, entre ellas el fraccionamiento Jardines de la Montaña, gozan de una cuota fija de 553 pesos, sin importar el consumo del líquido, aun cuando cuentan con amplios jardines y albercas.

Domingo 10

En gira por municipios del estado de Yucatán, el dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, afirma que “México necesita verdaderos cambios en lo económico, político y social. Fortalecer los valores culturales, morales y espirituales y nada de eso se hace. Por el contrario, se mantiene el mismo régimen de injusticia y de corrupción”. Agrega que el Morena es la única esperanza para transformar al país, sobre todo para apoyar a los pobres. Más tarde, López Obrador también visita el municipio de Solidaridad, Quintana Roo, en cuya cabecera, Playa del Carmen, en un mitin ante más de 2 mil personas, asegura que “los grupos de poder que dominan al país tienen como estrategia presentar al presidente Felipe Calderón como un chivo expiatorio, al que se pretende culpar de la crisis actual, y así facilitar la llegada del PRI al poder”.

La Arquidiócesis Primada de México, a través de su órgano informativo *Desde la Fe* asegura que “es una aberración considerar que la opinión de un sacerdote puede atentar contra los valores democráticos de la sociedad”, al referirse al fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), mediante el cual se determinó sancionar a Hugo Valdemar, director de comunicación social de esa institución. Al respecto, se indica que con esa resolución “los magistrados se estrenaron como los primeros violadores de la Constitución, al atropellar los derechos humanos que la Carta Magna plantea, entre ellos la libertad de opinión”.

La JBG de La Garrucha declara que defenderá las tierras recuperadas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) después del alzamiento de 1994, en referencia específica a la zona arqueológica de Toniná, que en una porción considerable pertenece legítimamente a bases de apoyo zapatistas, según terminaron por reconocer en 2009 las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el gobierno estatal, después de años de negarse a ello. Las autoridades zapatistas de la selva tzeltal advierten: “Toda la riqueza natural de nuestro territorio la vamos a defender, porque sabemos que el gobierno quiere la tierra para vender en otro país para grandes hoteles. La JBG la va a defender porque es el patrimonio que dejó nuestro antepasado. El gobierno ofrece terrenos en los centros ecoturísticos a otros países para grandes hoteles, restaurantes y cabañas, en beneficio de las grandes empresas trasnacionales”.

Los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez y De la Montaña Tlachinollan, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Fundar, el Centro de Análisis e Investigación, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), el de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) y la Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos” (Red TDT) manifiestan que este lunes, al continuar la discusión en la Suprema Corte sobre el cumplimiento a la sentencia de la CIDH sobre el caso de Rosendo Radilla –desaparecido en la denominada guerra sucia–, se abordará el tema del fuero militar, y que lo deseable es que se

restrinja, como la corte interamericana ha ordenado. Las organizaciones destacan la importancia de la discusión que iniciará este lunes el máximo tribunal, y recuerdan que la adecuación de la interpretación prevaleciente en la judicatura mexicana sobre la extensión del fuero militar no sólo ha sido ordenada en la sentencia del caso Rosendo Radilla, sino que ha sido dispuesta por el mismo tribunal regional en los casos de las mujeres indígenas violadas Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, y en el de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera.

Unas 200 personas, integrantes de diez organizaciones civiles de Monterrey y del Distrito Federal, participan en la “Marcha de las Putas” en el centro de la ciudad, para demandar a autoridades, empresarios y a la población en general a detener la violencia sexual hacia todas las mujeres.

Napoleón Gómez Urrutia, dirigente del Sindicato Nacional de Mineros, asegura que: “se abre la perspectiva de que termine, en definitiva, la ilegal persecución que se ha mantenido en su contra”, y sostuvo: “vamos a salir adelante, que a nadie le quepa la menor duda. Vamos a triunfar y vamos a regresar para seguir en la lucha”. Al enviar desde Vancouver un mensaje por la conmemoración del 77 aniversario del Día del Minero, que se celebra este lunes, el líder del gremio señala que la liberación de Juan Linares Montúfar –integrante del comité ejecutivo, acusado de los mismos cargos que se imputaban a Gómez Urrutia– deja sin sustento jurídico absolutamente todas las demandas, calumnias y acusaciones que había en su contra.

Lunes 11

Durante varias horas unos 300 colonos afectados por el desborde del río Los Remedios, en el Estado de México, ocurrido el 30 de junio, obstruyen la carretera libre México-Pachuca, cerca de Santo Tomás Chiconautla, y 400 el Periférico Oriente en sus entronques con las avenidas R1 y Central, para denunciar tanto su exclusión de los apoyos prometidos por los gobiernos federal y estatal como el taponamiento de drenajes. Provenientes de las colonias de Las Vegas Xalostoc, Villas de Guadalupe Xalostoc, El Renacimiento, Valle de Aragón tercera sección, Ampliación Ojeda Paullada y Franja Valle de México afirman que al menos 600 familias no fueron incluidas en el censo o desaparecieron de las listas de damnificados, por lo que no recibieron el apoyo de 20 mil pesos anunciado por el gobierno estatal y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). Los bloqueos afectan el tránsito en las principales vías del oriente de Ecatepec y el norte de Nezahualcóyotl. En el primer municipio, un grupo de 200 vecinos –principalmente amas de casa– coloca piedras y llantas para impedir el paso de vehículos por el desdén gubernamental a unas doscientas familias y comerciantes de Las Vegas y de Villas de Guadalupe que sufrieron importantes pérdidas.

Trabajadores de las 35 secciones de la SEDESOL cierran las instalaciones de la dependencia en la mayor parte del país en protesta porque 18 de sus compañeros están detenidos y fueron golpeados luego de haber tomado las instalaciones de este organismo en Hidalgo, donde exigían el cumplimiento de sus condiciones de trabajo. Por su parte, la SEDESOL informa en un comunicado que luego de que un grupo de personas tomó y ocupó el edificio de la delegación en Hidalgo el jueves, la Procuraduría General de la República (PGR) consignó a 18 personas por los delitos de motín y obstrucción de servicio público, y fueron puestas a disposición de un juez federal.

Martes 12

Cinco familias choles, desalojadas por hombres armados del municipio de Salto de Agua el pasado 3 de julio, inician un plantón por tiempo indefinido en las oficinas de la CNDH en esta ciudad. Exigen a las autoridades federales y estatales que generen condiciones para su regreso a tierras que recibieron en 2002 de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), al ser reubicadas de la reserva de Montes Azules. Los indígenas, en su mayoría niños y mujeres, ingresaron en la CNDH, ubicada cerca del parque central de San Cristóbal, a las 11 de la mañana, y se instalaron en el vestíbulo del inmueble. “Lo único que exigimos es que se garantice nuestro retorno, el retiro inmediato del grupo paramilitar que nos despojó de las tierras y regularización de las mismas, así como castigo a los culpables materiales e intelectuales de la agresión”, declara una de las personas afectadas.

Los pobladores de la ranchería Huitepec Alcanfores, en las faldas de cerro Huitepec, cerca de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, denuncian la destrucción de un bosque y las pretensiones de convertir la comunidad en colonia urbana y construir 74 condominios con respaldo de los gobiernos municipal y estatal. Ante la inconformidad de la población, vehículos del Ejército federal y de las policías estatal y municipal realizan patrullajes desde el pasado día 3. Los inconformes de Huitepec Alcanfores señalan al ex agente municipal Alejandro Cabrera Cano, secretario técnico en la presidencia municipal de la perredista Cecilia Flores, como responsable de estas acciones: “Es una persona que siempre se opone a la asamblea y se niega a participar en los trabajos de la comunidad”.

Más de 30 ejidatarios del poblado La Sabana, en la periferia de Acapulco, Guerrero, interrumpen la construcción de un distribuidor vial y exigen a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cumplir los acuerdos firmados hace un año para permitir a la dependencia usar terrenos ejidales. Advierten que impedirán los trabajos hasta que dependencia federal construya un camino a La Sabana y comunidades aledañas, y señalan que el problema se podría agravar de un momento a otro.

En una acción que tuvo como finalidad presionar a los mineros que están en huelga en Cananea, mediante una maniobra de autoridades federales y estatales, coaligada con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cortan el servicio de energía eléctrica a más de una centena de familias de los mineros en paro. Tras asegurar lo anterior, el Sindicato Nacional de Mineros señala en un comunicado que esta acción es otra expresión más de la perversa represión que se ejerce contra quienes defienden su derecho de huelga en esa mina.

En un foro convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el secretario del interior del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Humberto Montes de Oca, propone construir una nueva central de trabajadores que agrupe a todas las tendencias sindicales democráticas y realizar el trabajo para tener una representación política propia.

Se reanuda la normalidad laboral en las sedes de la SEDESOL en todo el territorio nacional, luego de que este lunes integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Social tomaran las oficinas como protesta para exigir la liberación de 18 sindicalistas detenidos en el estado de Hidalgo, informa la dependencia. Cristina Olvera Barrios, presidenta ejecutiva del sindicato de SEDESOL, informa que las 18 personas detenidas el lunes fueron puestas en libertad

por el juez primero de distrito en materia penal con sede en Pachuca, Hidalgo, al no encontrar elementos para proceder judicialmente contra ellos.

Miércoles 13

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Olga Sánchez Cordero confirma que la sentencia de la CIDH sobre el caso del luchador social Rosendo Radilla, desaparecido por miembros del Ejército en 1974, es de cumplimiento obligatorio para el Estado mexicano. La magistrada enfatiza que las resoluciones de la justicia interamericana “deben ser acatadas, y no se trata sólo de un criterio orientador”, como han afirmado algunos de sus colegas.

Tras conocer la resolución de la SCJN que restringe el fuero militar para que los miembros de las fuerzas armadas que violen las garantías fundamentales puedan ser juzgados en tribunales civiles, Tita Radilla, dirigente de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violación a los Derechos Humanos (AFADEM), demanda que la PGR cite a declarar a los militares en activo que participaron en las desapariciones forzadas durante la guerra sucia en Guerrero. La activista, quien desde el 25 de agosto de 1974 empezó la búsqueda de su padre, Rosendo Radilla –detenido y desaparecido ese día por militares en un retén de Atoyac, Guerrero–, afirma que la determinación del máximo tribunal “es un logro de esta lucha de tanto tiempo”.

El obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López, asegura que “el clima de inseguridad ha llegado a tales niveles en Coahuila que las bandas de narcotraficantes reclutan a niños para que trabajen como halcones (informadores)”. Luego de officiar una misa en la Basílica de Guadalupe, con motivo de la peregrinación de la diócesis de Saltillo a dicho templo, el religioso señala: “Están reclutando niños porque los están usando de halcones; ya hay muchos pequeños que nada más están parados en las esquinas de las colonias informando y sabemos que les dan hasta mil 500 pesos semanales”.

La Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos (Fedessp), que integra a gremios de los trabajadores de la educación, de las secretarías de Comunicaciones y Transportes, Desarrollo Social, del Sindicato Independiente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y otros, realizarán este jueves una manifestación a las afueras de la Cámara de Diputados, durante la comparecencia del director del instituto, Jesús Villalobos López, ante la Comisión Legislativa de Seguridad Social. En esta movilización, demandarán que se audite la administración de Villalobos al frente del organismo, así como la anterior, cuando estuvo al frente del organismo Miguel Ángel Yunes, a fin de esclarecer los malos manejos de los recursos del organismo, y que se finquen responsabilidades por estos actos, según indica dicha central obrera.

El secretario general de la Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas (FITIM), Jyrki Raina, y Manfred Warda, líder de la Federación Internacional de Sindicatos de la Química, la Energía y la Minería, refrendan su disposición a mantener el apoyo al sindicato nacional de mineros hasta que logren el respeto a su libertad sindical. En una misiva enviada a este sindicato por su septuagésimo séptimo aniversario, los dirigentes plantean que continuarán con su apoyo y solidaridad internacional a este gremio, el cual incluye el seguimiento a las quejas presentadas en contra del gobierno mexicano ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT respecto de la libertad sindical y los contratos de protección. Tanto la FITIM como la *International Federation of Chemical, Mine and General Workers' Union* (ICEM), mandan al sindicato que

encabeza Napoleón Gómez Urrutia un mensaje de renovación de su compromiso de apoyo a su lucha y otras del sindicalismo independiente mexicano.

Debido a que fueron despedidas injustificadamente por la trasnacional *Samsung*, y de que fueron víctimas de violencia física y psicológica por parte de la empresa, las trabajadoras Madaí Díaz Rodríguez, Sandra Gómez y Lourdes Zamora se enjaulan frente a la alcaldía de Manzanillo, Colima, en una protesta y huelga de hambre en demanda de su inmediata reinstalación. Un informe enviado por el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical indica que diversas organizaciones ya se prestan a realizar acciones y demandas nacionales e internacionales para denunciar este caso, ya que incluso una de las trabajadoras se cose la boca y amenaza con prenderse fuego, luego de haber sido víctima no sólo de despido sino incluso de una golpiza por parte de coreanos que laboran en la empresa. Este centro exige la inmediata reinstalación de las mujeres despedidas, el castigo a sus golpeadores y el cese de la impunidad con que se permite actuar a empresas trasnacionales.

Jueves 14

Integrantes de la Fedessp realizan un mitin fuera de la Cámara de Diputados contra el director del ISSSTE, Jesús Villalobos, durante la comparecencia de éste en el recinto legislativo. Cuestionan el manejo turbio de la institución, y demandan a los legisladores que se investigue a fondo la grave problemática por la que atraviesa el organismo y que ordenen hacerle una auditoría integral. Encabezados por Bernardo Quezada Salas, Víctor Bernardo López Carranza y Cristina Olvera, presidentes colegiados de la Fedessp, así como por otros dirigentes, incluido el del Sindicato Independiente de Trabajadores del ISSSTE, Juan Manuel Garduño Moreno, la protesta no sólo se realiza en la calle, ya que trabajadoras vestidas de blanco que portaban pancartas en las que pedían auditoría ya logran entrar en el recinto y recorren la explanada central. La Fedessp sostiene que hay pruebas del desvío de recursos en la institución, cometido no sólo por el actual director, sino por el anterior, Miguel Ángel Yunes, y que éstas se podrían aportar a la cámara legislativa.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), la CMDPDH, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y la AFADEM exigen que la PGR solicite a la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) que le entregue todas las investigaciones, averiguaciones y procesos que tenga en curso sobre violaciones a derechos humanos cometidas por militares. Asimismo, en conferencia de prensa, las organizaciones no gubernamentales demandan que el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, se pronuncie públicamente sobre la resolución de la SCJN con respecto a la restricción al fuero militar, e instan al *ombudsman* a que a partir de hoy ya no envíe ninguna recomendación a la procuraduría de justicia militar por violaciones cometidas por militares, sino que las remita a la PGR.

El poeta Javier Sicilia, quien encabeza el Movimiento Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), manifiesta que la resolución de la SCJN que restringe el fuero castrense es un gran logro que se estaba pidiendo desde hace muchos años. Ahora el problema es que los jueces hagan lo que tienen que hacer, porque hay un grado de impunidad y de corrupción terrible. Sicilia resalta: “sí, hay que hacer un marco jurídico, porque no basta la ley de seguridad nacional como fue aprobada por el Senado. Ese marco jurídico debe detallar cuándo deben regresar los militares a sus cuarteles”. Además, agrega que la ley de seguridad nacional debe contener, entre otras cosas, una fiscalía civil en las procuradurías. Destaca que continúan las pláticas con senadores y diputados para realizar el

encuentro con el MPJD y las víctimas, pero que no será en el nuevo Senado, sino en el Castillo de Chapultepec.

Viernes 15

La diócesis de Saltillo denuncia acciones de hostigamiento contra el obispo Raúl Vera López, las cuales se dieron con la instalación clandestina de mantas en la catedral de Santiago Apóstol, ubicada en el centro histórico de la misma ciudad. Las mantas con las frases “Queremos un obispo católico” y “Queremos que el obispo sólo hable de religión” aparecieron la mañana del jueves en la explanada del edificio y fueron retiradas por personal del centro religioso. En un comunicado, la diócesis de Saltillo advierte sobre el contexto del hostigamiento contra el obispo Raúl Vera López por sus acciones pastorales. Afirman que “la actividad constante del prelado con sus organismos, sus planes de trabajo y sus agentes de pastoral, no está al margen del evangelio ni de las normas y orientaciones de la Iglesia, ni de los retos de la sociedad en que vivimos”.

Funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Oaxaca y una comisión de familiares de los 10 pobladores de San Pedro Pochutla desaparecidos en Tamaulipas, en julio del año pasado, se trasladan a Cuernavaca, Morelos, para solicitar información de las víctimas en la delegación de la PGR en esta entidad. María de Jesús Vizarratea (hermana de tres de los desaparecidos), quien se encuentra en huelga de hambre junto con otros familiares en los portales del palacio de gobierno, manifiesta que los familiares recibieron una notificación de la PGR en enero pasado sobre la detención de dos de los desaparecidos. Subraya que también se indagará la versión sobre el encarcelamiento en un reclusorio de Morelos, pues supuestamente existen presos con su identidad. “Hay ocho presos con los mismos nombres que nuestros familiares, pero se nos ha dicho que se trata de otras personas; tenemos la esperanza de encontrarlos con vida”. Afirma que mantendrán el ayuno hasta conocer el paradero de los desaparecidos.

Se cumplen tres meses de la toma de la comunidad purépecha de Cherán, en el estado de Michoacán, por sus moradores, y el gobierno del estado anuncia una próxima campaña de reforestación en el municipio, mientras la delegación de la PROFEPA afirma que del 15 de abril hasta la fecha fueron detenidos 14 presuntos talamontes e incautados 41 vehículos y 60 m³ de madera. El delegado de la PROFEPA, Alfredo Ledezma Rangel, asegura que en el periodo transcurrido se aplicaron sanciones administrativas por 120 mil pesos a personas que no acreditaron la procedencia legal de la madera que poseían o transportaban. Además, continúan la inspección y vigilancia de la región junto con fuerzas federales. Según Alejandro Méndez López, titular de la Comisión Forestal de Michoacán (Cofom), el gobierno del estado impulsará programas de explotación racional en toda la Meseta Purépecha y ayudará a los comuneros de Cherán a restaurar 27 mil hectáreas boscosas, de las cuales el 50% tiene grave deterioro.

Sábado 16

El defensor de derechos humanos y estudiante Cristóbal Sánchez Sánchez sale libre luego de haber sido detenido y golpeado, el pasado jueves, por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la policía estatal de Chiapas, cuando se encontraba haciendo una investigación sobre explotación sexual en un bar de Tapachula. En entrevista telefónica, el propio activista narra las

condiciones de su arresto y lamenta que esa clase de agresiones sigan ocurriendo, justamente cuando se está organizando en el sur del país la Caravana Paso a Paso hacia la Paz.

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) expresa su respaldo al obispo de Saltillo, Raúl Vera López, luego de que esta semana recibió amenazas anónimas. Manuel Corral Martín, secretario ejecutivo de Relaciones Institucionales de la CEM, asegura que es condenable que se intente amedrentar a alguien de esta forma, sólo por expresar su opiniones. “Los anónimos implican cobardía; no se puede dar crédito a quien se esconde detrás de un anónimo. A ningún ciudadano se le puede coartar la libertad, de la índole que sea; hemos llegado a tal punto que las cosas están tomando cariz muy triste”, señala el sacerdote.

Mujeres de varios estados de la República se dan cita en el auditorio de la Villa Olímpica, ubicada al sur del Distrito Federal, para compartir sus experiencias de lo que les ha tocado vivir y padecer a causa de la guerra contra el narcotráfico emprendida por el gobierno calderonista, así como por el sistema económico neoliberal. Llegan familiares de mujeres asesinadas y de jóvenes desaparecidos, así como hijos que durante años han buscado infructuosamente a sus padres levantados. También se hacen presentes las ex trabajadoras de Luz y Fuerza del Centro (LFC), que desde octubre de 2009, cuando el presidente Felipe Calderón declaró la extinción de la empresa, se han mantenido en la lucha por recuperar su fuente de empleo. También las experiencias de localidades con graves daños ambientales producto de la explotación minera, como San Luis Potosí, con la minera San Xavier, que en unos cuantos años terminó con el emblemático Cerro de San Pedro. De igual manera está el caso de Cherán, Michoacán, cuyos pobladores viven bajo constante amenaza por su decisión de enfrentar a los talamontes con sus propios medios.

Residentes del Centro Histórico de la ciudad de México acuden al INAH para demandar que realice un peritaje en las calles del primer cuadro de la ciudad para que garantice que de operar la línea 4 del metrobús, los edificios considerados como monumentos artísticos o históricos no se verán deteriorados o afectados por el paso constante de este medio de transporte. En una carta dirigida a la directora de Licencias, Inspecciones y Registro del INAH, Ana María Lara Gutiérrez, los inconformes con este proyecto también exigen que informe si existe un permiso que avale esta obra.

Domingo 17

Cerca de 150 jóvenes participan en la “Kaminata por la desmilitarización y contra la muerte”, realizada en el Distrito Federal y convocada por la Coordinadora Metropolitana contra la Militarización y la Violencia (Comecom) para denunciar la violación a los derechos humanos por parte del Ejército en el norte del país, los asesinatos de jóvenes y para exigir un cambio en la estrategia de seguridad en el combate contra el crimen organizado. La movilización parte del Monumento a la Revolución hacia el Zócalo capitalino, y participan en ella jóvenes de Ciudad Juárez, el Estado de México y Monterrey, además de miembros de la organización Pan y Rosas, y estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El encuentro de “Mujeres de izquierda ante la emergencia nacional” concluye con la exigencia de detener los feminicidios y la militarización del país que se ha expandido con el argumento de la guerra contra el narcotráfico, así como un llamado a sostener un movimiento autónomo a los partidos políticos. Las casi 700 participantes de 31 estados acuerdan constituir el Movimiento Nacional de Mujeres de Izquierda en Emergencia Nacional, en el cual pugnarán por el aborto libre y

gratuito, defender los derechos de las trabajadoras y volver a “tomar las calles” con consignas que unan a las mujeres del país, al margen de los partidos, “los cuales no nos representan”, afirman.

Ejidatarios de las comunidades Palmarejo, Guazapares y Agua Salada bloquean desde el viernes pasado los accesos a la empresa minera estadounidense *Coeur d’Alene Mines*, en el municipio de Chínipas, en el estado de Chihuahua, para exigir a la compañía que responda por daños ambientales y por los problemas de salud que ocasiona al obtener oro y plata a tajo abierto. Denuncian que los niños de la región padecen “hinchazón en el cuerpo” y que “varias mujeres han sufrido abortos espontáneos”. Los inconformes exigen también que la empresa cumpla un convenio notariado, en el cual se comprometió a contratar mano de obra local y a hacer inversiones sociales en los poblados mencionados, además de contratar a proveedores de servicios en la zona, en lugar de pagar contratistas de otras partes del país. En nombre de los inconformes, el profesor Javier Morales, del ejido Agua Salada, denuncia que en las comunidades aledañas a la mina hay graves problemas de contaminación ambiental por manejo inadecuado de desechos tóxicos, principalmente cianuro, lo que ha causado diversos padecimientos en niños pequeños.

Lunes 18

Los consejos municipales autónomos zapatistas de Francisco Gómez y San Manuel reinstalan los letreros que identifican a Toniná como territorio rebelde y de tierras recuperadas por el EZLN. Estas señalizaciones habían sido retiradas por funcionarios estatales y el presidente municipal de Ocosingo, Arturo Zúñiga Urbina, el pasado 20 de junio, la víspera de una visita del gobernador del estado al sitio arqueológico. En un acto sencillo, al cual acuden decenas de bases de apoyo del EZLN de las comunidades autónomas circundantes: Javier López, San Juan la Palma, Maya Tzeltal y La Libertad, los representantes autónomos refrendan que los propietarios de los predios próximos a la pirámide de Toniná son bases de apoyo rebeldes y que sus territorios están organizados con la JBG de La Garrucha.

Ejidatarios y moradores de las comunidades de Agua Salada y Palmarejo, municipio de Chínipas, Chihuahua, abandonan al mediodía las instalaciones de la minera estadounidense *Coeur D’Alene*, a la cual, según su director de operaciones internacionales, Leon Hardy, causaron pérdidas por 2.4 millones de dólares durante tres días de bloqueo. La empresa asegura que atenderá de inmediato los problemas de salud que genera entre habitantes de la zona, para lo cual se realizará un estudio independiente de impacto ambiental en la presas de jales y en la planta de beneficio, que utilizan cianuro para procesar el oro y la plata extraídos.

Unos mil 500 afiliados al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios (SUTSEM) inician un paro fuera de la presidencia municipal para denunciar que desde hace tres años el ayuntamiento no ha pagado los abonos que les descuenta cada quincena para la adquisición de muebles, computadoras, ropa, viajes, casas y préstamos en efectivo. A la suspensión de labores se suman unos 120 empleados del Sistema Integral de Agua Potable (organismo descentralizado). Los inconformes señalan que la falta de pago ha provocado que los proveedores de esos bienes y servicios los persigan para que paguen los adeudos con los intereses.

Indígenas choles desalojados de sus tierras en el municipio de Salto de Agua el 3 de julio realizan un plantón en la Plaza Catedral, en San Cristóbal de las Casas, para exigir que las autoridades estatales generen condiciones para su retorno. Los también miembros del Frente Nacional de Lucha

por el Socialismo (FNLS) realizan un bloqueo intermitente en la carretera hacia Ocosingo a la altura de Río Florido, y desde el 12 de julio mantienen otro plantón en la sede local de la CNDH. Los inconformes –niños en su mayoría– portan cartulinas donde exigen poder regresar, el pago de los bienes dañados y la regularización del asentamiento de Las Conchitas, de donde los desalojaron hombres armados bajo el mando de Marciano Gaspar González, pese a que las autoridades federales los reubicaron al salir de la reserva de Montes Azules.

Martes 19

Las alcaldías de Malinaltepec, en la región de la Montaña alta; Atlixnac, en la Montaña baja, y Huitzucu, en la zona norte de Guerrero, son tomadas por campesinos que exigen la entrega de fertilizante, según informa Víctor Aguirre Alcaide, subsecretario de Asuntos Políticos del gobierno estatal. Los campesinos exigen que el ayuntamiento les pague por cultivos que se echaron a perder por falta de abono.

Organizaciones sindicales universitarias y del sector salud anuncian el inicio de una campaña de información y movilización para exigir que se investiguen y sancionen los actos corruptos y de desvío de recursos en los sistemas de seguridad social, que involucran al ex director del ISSSTE, Miguel Ángel Yunes Linares, y a la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales. En conferencia de prensa, Arturo Vega, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM), afirma que el 28 de julio se convocará a diversas agrupaciones sindicales y sociales a integrar un plan de acción unitario que incluirá movilizaciones y plantones para exigir que se abra una comisión en el Congreso de la Unión que investigue todas las irregularidades que han salido a la luz, no sólo en el ISSSTE sino también en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En demanda de que el gobierno federal cumpla los compromisos hechos a los ex integrantes del SME que aceptaron su liquidación, un grupo de estos trabajadores, encabezados por el ex tesorero del gremio, Alejandro Muñoz, anuncia que hoy iniciará un plantón a las afueras de la residencia oficial de Los Pinos. Muñoz –quien está al frente de un grupo disidente del secretario general del gremio, Martín Esparza– indica que el gobierno federal les ofreció y firmó compromisos, mediante los cuales a los trabajadores que aceptaron la liquidación se les iba a dar empleo en la CFE, asesoría y financiamiento para la conformación de 68 empresas cooperativas y múltiples créditos para el arranque de negocios, pero todavía no se ha cumplido con los compromisos.

Karla Valdez Robles, directora del semanario, publicado en la ciudad de Zacatecas, *Siete Días*, denuncia ante la PGR, la PGJE y la opinión pública que Rodrigo Saucedo Ramírez, presidente municipal priísta en Calera, la amenazó de muerte a través del ganadero Benjamín Félix. Explica que el semanario *Siete Días* publicó una nota en la que se denunció que el alcalde priísta pavimentó un camino de terracería que cruza por el rancho Santa Rita, propiedad del ganadero Benjamín Félix, quien habría financiado la campaña electoral de Saucedo el año pasado. Denuncia que el pasado fin de semana Benjamín Félix y varios sujetos la han acosado a ella y a su esposo, pues el nombrado dijo tener vínculos con Los Zetas y supuestamente les pagaría dos pesos para desaparecerlos. Por ello, Valdez interpone una denuncia de hechos contra el alcalde de Calera y el ganadero, en la agencia del Ministerio Público número uno, que preside el abogado José Salvador Pérez Hernández, con número de expediente A224/II/2011.

Por segundo día, afiliados al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios continúan en paro frente a la presidencia municipal de Tepic, Nayarit, para acusar al ayuntamiento de no pagar a proveedores los bonos que les entrega para la adquisición de muebles, artículos para el hogar y ropa, a pesar de haber hecho las retenciones correspondientes. Los trabajadores de limpia suspenden labores, lo que provoca enojo de colonos de varios puntos de la ciudad. También ha habido quejas por falta de agua potable, alumbrado público, rondines de patrullas y recolección de basura. Los inconformes calculan que la deuda del municipio con proveedores podría rebasar 14.2 millones de pesos.

Pescadores de las lagunas de Coyuca y Mitla, en el estado de Guerrero, exigen a los gobiernos estatal y federal a dragar el canal que atraviesa la zona, porque la captura de diversos peces se ha reducido hasta en 70%. Señalan que la proliferación de lirio impide navegar. Este problema afecta a tres municipios: Coyuca de Benítez, Atoyac de Álvarez y San Jerónimo, expresa el dirigente Santos Galeana Cárdenas.

Rogelio Miguel López, regidor de San Francisco Jaltepetongo, en el estado de Oaxaca, inicia una huelga de hambre en el palacio de gobierno para exigir que se desaloje a pobladores del municipio de San Miguel Tecamatlán, quienes desde hace varios días bloquean los accesos al municipio a causa de un conflicto entre ambas comunas por 640 has. Indica que unos mil 200 habitantes de su localidad se encuentran incomunicados y que tres pobladores siguen retenidos en San Miguel Tecamatlán.

Ante la falta de atención de la inmobiliaria Baita, responsable del deslizamiento de tierra que afectó a dos edificios de la calle Zamora, en la colonia Condesa, Distrito Federal, los vecinos que fueron desalojados demandan al procurador capitalino, Miguel Ángel Mancera, tomar en sus manos la averiguación previa. A casi 20 días del incidente todavía no hay fecha para poder regresar a sus hogares y los representantes de la inmobiliaria no se han presentado, pues los argumentos que han recibido los vecinos es que Baita sólo era la comercializadora de los departamentos, no la constructora.

Miércoles 20

Trabajadores de la línea 12 del Metro, que está en construcción en el Distrito Federal, se manifiestan frente a las oficinas de la Dirección General del Proyecto Metro en demanda del pago correspondiente a cuatro semanas de labores en el armado estructural que realizan en las estaciones ubicadas entre Tláhuac y Veinte de Noviembre. Denuncian que es la segunda ocasión en que la empresa Servicios Integrales Saldívar, subcontratista de la empresa Ingenieros Civiles Asociados (ICA), se atrasa en la liberación de sus cheques, por lo cual exigen a las autoridades capitalinas intervenir. Ante ello, el director del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas, solicita al abogado de dicha empresa atender a la brevedad esta situación.

Organizaciones de vecinos y comerciantes del barrio de La Merced, y de las calles Ayuntamiento, República de El Salvador, Belisario Domínguez y la Unidad Kennedy, en el Distrito Federal, anuncian la conformación de un frente común contra la construcción de la línea 4 del Metrobús, “pues se trata de una decisión improvisada y autoritaria, que ya ha causado la caída de nuestras ventas en 30%”, denuncian. En conferencia de prensa, los vecinos de las zonas afectadas consideran

que “hay tiempo para dar marcha atrás a este proyecto, aunque estamos trabajando para generar diferentes estrategias jurídicas y de movilización para detener la obra, las cuales comenzarán en los siguientes días, pues no vamos a permitir que se acabe con nuestro patrimonio, cuando el gobierno puede cambiar el trazo”.

Alrededor de 380 habitantes de El Salto, Jalisco, participan en un estudio de epidemiología popular, impulsado por las organizaciones locales Un salto de vida y Biosmédica, para documentar los estragos que ha dejado en su salud la contaminación del río Santiago. Las organizaciones están tomando muestras de cabello, sangre y orina que serán analizadas para conocer el nivel de metales pesados y arsénico en la población, aseguró Graciela González, miembro de Un salto de Vida. Los análisis de sangre son sufragados por cada una de las personas que participa; los de cabello y orina serán hechos por la Universidad de Guadalajara. La agrupación civil presentará los resultados de esta investigación en el Tribunal Latinoamericano del Agua, a realizarse en septiembre próximo.

Jueves 21

Según el cable 06VATICAN61 de *Wikileaks*, revelado recientemente, el cardenal Juan Sandoval Íñiguez pidió ayuda a Washington para frenar el avance de Andrés Manuel López Obrador en 2006, mismo que fue redactado por la embajada de Estados Unidos en el Vaticano. La representación estadounidense afirma en dicho cable que a Sandoval Íñiguez le preocupaba el avance de la izquierda en Latinoamérica, y señaló que aumentaba el poder de Fidel Castro, Hugo Chávez, Evo Morales, Néstor Kirchner, Michelle Bachelet y López Obrador. Según esa misma información, el prelado se reunió en Roma el 28 de marzo de 2006 con Francis Rooney, embajador de Estados Unidos en el Vaticano y en dicha reunión Sandoval dijo a Rooney que “el avance de la izquierda representaba una tendencia peligrosa”, señaló la embajada en el Vaticano. De acuerdo con el cable de *Wikileaks*, el prelado preguntó si el presidente George W. Bush podría ayudar. Por su parte, la Arquidiócesis de Guadalajara acepta que el cardenal Juan Sandoval Íñiguez se reunió el 28 de marzo de 2006 con el embajador de Estados Unidos en el Vaticano, Francis Rooney, con el fin de solicitarle apoyo para la construcción del santuario cristero que se erige en Tlaquepaque, pero niega que le haya pedido intervenir para detener el avance de Andrés Manuel López Obrador en las preferencias electorales, como apuntó un cable difundido por *Wikileaks*.

Javier Sicilia, representante del MPJD, demanda la creación de una comisión de la verdad, con carácter ciudadano y autónomo, con el propósito de avanzar en el proceso de diálogo, justicia y reconciliación. “Llegamos a este Museo de Antropología con el corazón aún más lastimado que el pasado 23 de junio en que nos encontramos con el presidente Calderón,” afirma en el inicio de otra serie de encuentros con representantes gubernamentales, e insiste en que es necesario que el Estado pida perdón, porque “el que externó el jefe del Ejecutivo federal aquel día, en el castillo de Chapultepec, no es aún cabal ni profundo”, afirma. Subraya además que “el presidente de la República está obligado a pedir un sincero perdón a la nación, porque aunque se atribuye la violencia a los criminales, la estrategia para enfrentarlos también ha sido causa de agresiones que es necesario reconocer”.

Luego de dos días de trabajo en el Encuentro Nacional de Trabajadoras Sexuales, las participantes se pronuncian en contra de la iniciativa de ley general contra la trata de personas, porque en aras de obtener resultados que sean reconocidos a escala mundial cancela las garantías individuales de quienes considera responsables, en este caso, las trabajadoras sexuales. En conferencia de prensa,

representantes de colectivos de los estados de Veracruz, Jalisco y del Distrito Federal, aseveran que la reciente reforma constitucional en materia de trata de personas, que derivará en una nueva ley general, no significa que la autoridad haya puesto todo su empeño para abatir el problema, toda vez que no se castiga a los verdaderos responsables sino que sólo se buscan chivos expiatorios, en este caso, quienes ofrecen servicios sexuales.

Las radios comunitarias de Oaxaca, adheridas a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), exigen al TEPJF ratificar la decisión del Instituto Federal Electoral (IFE) para integrarla en su nuevo reglamento de radio y televisión, porque es un avance en el reconocimiento de sus formas de operación y funcionamiento en las próximas campañas electorales de 2012. Sócrates Vásquez García, integrante de *Radio Jēnpoj*, asegura que la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), desde la determinación del órgano electoral, ha acusado a las radios comunitarias de ser piratas e ilegales, lo cual demuestra una vez más su oposición a la pluralidad de los medios y su desconocimiento de la legalidad.

Viernes 22

El arzobispo de Tijuana, Rafael Romo Muñoz, denuncia que los principales agresores de los defensores de los derechos humanos son los integrantes del crimen organizado y también el Estado por conducto de funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno, quienes intentan intimidarlos para que no sigan denunciando los abusos y las violaciones que cometen contra los migrantes. Durante la presentación de un informe sobre la situación de los protectores de las garantías fundamentales, Romo Muñoz demanda la creación de mecanismos de protección para ellos, así como que las procuradurías General de la República y las estatales eviten la impunidad en las agresiones cometidas en su contra. Señala también que la falta de una atención oportuna ante la violencia e inseguridad ha generado un incremento en el número de ataques contra los defensores de derechos humanos. De 18 incidentes de riesgo registrados en cinco años (2004-2009), se pasó a 46 en año y medio (2010 y lo que va de 2011). Sumado a ello, fueron asesinados dos defensores de migrantes, mientras otros han sido amenazados, golpeados, hostigados y acusados penalmente por su labor de denuncia. Uno de ellos se tuvo que exiliar y, por falta de seguridad, una casa del migrante y un centro de derechos humanos se vieron obligados a cerrar. Frente a este panorama, la CNDH ha otorgado 13 medidas cautelares, en tanto que la CIDH emitió tres. Por su parte, Amnistía Internacional (AI) y la Federación Internacional de los Derechos Humanos han difundido alertas urgentes sobre el tema, y la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana de la CEM es acompañada por brigadas internacionales de paz. El arzobispo de Tijuana demanda, finalmente, a los gobiernos federal, estatales y municipales, que desarrollen campañas de prevención sobre el secuestro de migrantes; que se analice suprimir el requisito del visado a los transmigrantes, y se investiguen los raptos de estas personas.

Integrantes de diversas organizaciones civiles coinciden en que crear una comisión de la verdad – como sugirió el jueves Javier Sicilia– para resolver las violaciones a los derechos humanos cometidas en la guerra contra el narcotráfico es una demanda viable en la búsqueda de la reparación del daño, siempre y cuando tenga amplio margen de independencia frente al gobierno. Afirman que debe tener una formación tan plural como sea posible y no estar integrada sólo por funcionarios públicos. Silvano Cantú, de la CMDPDH, señala que “el país necesita mecanismos que garanticen el conocimiento de la verdad histórica de determinados periodos de violencia generalizada, para avanzar hacia la justicia verdadera y la reparación integral del daño para las víctimas”.

Según la postura oficial, el propósito de las mesas de trabajo entre el gobierno federal y el MPJD es elaborar propuestas de políticas públicas y un catálogo de reformas legislativas, informa el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación (SG), Juan Marcos Gutiérrez. Afirma que el gobierno y la sociedad están del mismo lado; sin embargo, manifiesta su discrepancia con algunos aspectos de lo dicho por Javier Sicilia, representante de la agrupación civil. “Entendemos el dolor y todas las adversidades que rodean este debate, pero también debemos tomar en cuenta los aciertos y lo que está funcionando”, afirma.

Martín Esparza Flores, secretario general del SME, señala que dada la situación en que se encuentra el país, en 2012 no votar por el Partido Acción Nacional (PAN) será una obligación de todos los mexicanos, y añade que a fin de que los ciudadanos tomen conciencia de sus derechos ante los comicios del próximo año, el gremio, en conjunto con otras agrupaciones obreras y sociales, integrará una organización política nacional. El SME y las organizaciones que se sumen a la agrupación política que conformarán “vamos a abrir el debate en torno a aquellos que le han hecho daño a los trabajadores y al país, y decirle a ciudadanos lo que han hecho”, asegura.

Ante el incumplimiento del gobierno del presidente Felipe Calderón, quien en abril de 2008 se comprometió a proteger los lugares sagrados y las rutas históricas de peregrinación del pueblo huichol, organizaciones internacionales inician una nueva campaña para salvar Wirikuta. En su página en internet, el Frente Salvemos Wirikuta convoca a la comunidad internacional a impedir la destrucción del sitio sagrado, mediante promocionales en medios convencionales, correos electrónicos y redes sociales para respaldar la lucha del pueblo huichol contra la minera.

La asamblea del municipio de Zimapán, en el estado de Hidalgo, determina en sesión extraordinaria la clausura definitiva de la planta de confinamiento de residuos tóxicos, construida por Sistemas de Desarrollo Sustentable (SDS) en el ejido de Cuauhtémoc, además de sancionarla con 10 mil días de salario mínimo tras comprobar que había violado varias leyes de legislación ambiental. Los pobladores iniciaron un movimiento opositor contra la planta, que finalmente se terminó de construir en 2009 e iniciaría operaciones en enero de 2010, pero autoridades municipales revocaron los permisos de suelo.

Más de una decena de organizaciones ciudadanas, la mayoría integrantes del Frente Opositor a la Minera San Xavier, realizan un plantón en el Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México, en repudio a la explotación a cielo abierto, dañina al medio ambiente, y demandan al gobierno federal a dejar de respaldar a las transnacionales que extraen minerales de esta forma en el país, 70% de las cuales son canadienses. En el Día Mundial contra la Minería a Cielo Abierto y con pancartas en las que se pedía cesar esta actividad, como “Alto a la Minera San Xavier”, “El agua y la vida valen más que el oro” y “Viva Cerro de San Pedro”, entre otras, exigen que el gobierno deje de ser cómplice, y que declare una moratoria a este tipo de explotación.

Campeños de la comunidad de Amomolulco, Estado de México, denuncian ante el Colegio Académico de la Universidad Autónoma de México (UAM) que el despojo de 44 has., de las ciénagas de Lerma –área natural protegida desde 2002– es resultado de una acción ilegal, en la que están coludidas autoridades federales y estatales, pero también la universidad, pues era su responsabilidad investigar si esos terrenos tenían o no dueño. Por su parte, el rector de la unidad Lerma, Francisco Flores Pedroche, afirma que en el conflicto la UAM es sólo la tercera perjudicada, pues la discusión sobre si es un área natural protegida corresponde a autoridades del gobierno

federal, a las dependencias que participaron en la donación y a los juzgados; asegura que quien determinó los linderos del terreno fue el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin).

Sábado 23

Comunidades indígenas de la selva norte de Chiapas exigen la liberación inmediata e incondicional de los cuatro tzeltales de San Sebastián Bachajón presos en el penal de Playas de Catazajá por motivos políticos, a quienes su defensa ha caracterizado como rehenes del Estado por reivindicar sus derechos territoriales y oponerse a los proyectos turísticos en Agua Azul. También denuncian las condiciones carcelarias del profesor tzotzil Alberto Patishtán Gómez, vocero de la Voz del Amate y adherente a la Otra Campaña, quien se encuentra recluido en el penal de San Cristóbal, en el mismo estado, y está a punto de perder la vista definitivamente. Los cargos que se le imputan a este último son federales, lo cual impidió que fuera exonerado, aun tras participar en las importantes huelgas de hambre que derivaron en la liberación de más de 40 presos políticos, muchos de ellos de la Otra Campaña, durante el presente gobierno.

Integrantes del Colegio Académico de la UAM reconocen que entre la comunidad estudiantil, docente y administrativa prevalece la desinformación en torno a la certeza jurídica del terreno donde se construye la quinta unidad académica de esa casa de estudios, por lo que demandan que se dé a conocer todo el proceso con el cual se adjudicó esa donación. Luego de que ejidatarios de Amomolulco, municipio de Lerma, denunciaron que el predio de 24 has., donado a esa casa de estudios por la Secretaría de la Función Pública, mediante el Indaabin –organismo descentralizado responsable de adquirir, recuperar o enajenar inmuebles del patrimonio federal– se localiza dentro de un área natural protegida, destacan que es necesario que se informe a la comunidad sobre el caso y determinar claramente quién tiene la razón.

Vecinos de los pueblos de San Miguel Amantla y Santiago Ahuizotla, delegación Azcapotzalco, en el Distrito Federal, denuncian que la empresa Gas Natural ha instalado, sin el permiso correspondiente, tuberías en las calles de sus comunidades, situación que además de ponerlos en riesgo va en contra de la voluntad de la mayoría de los pobladores. A decir de los colonos, la administración de Enrique Vargas Anaya (jefe delegacional de Azcapotzalco) no ha hecho nada al respecto. Los pobladores aseguran que la intención de Gas Natural es pasar por tubos por las comunidades para así poder llegar a las unidades habitacionales ubicadas en calzada de La Naranja.

Domingo 24

Son liberados los últimos cuatro de los cinco de Bachajón, campesinos adherentes de la Otra Campaña del ejido San Sebastián Bachajón, en el municipio de Chilón, Chiapas, que permanecieron presos más de cinco meses en el penal de Playas de Catazajá, acusados del asesinato de un ejidatario de Agua Azul, Tumbalá, y de presuntos delitos relacionados con protestas en el cruce de dicho lugar la primera semana de febrero. Si bien los cargos resultaron falsos, los indígenas permanecieron encarcelados como rehenes del gobierno, según venía sosteniendo reiteradamente el Centro de Derechos Humanos “Frayba”. Los ejidatarios de la Otra Campaña afirman que mantendrán la resistencia a los proyectos turísticos privatizadores, así como la defensa de su tierra y territorio.

El INM retira los cargos en contra del activista Cristóbal Sánchez Sánchez, quien desde el pasado 17 de julio está en huelga de hambre frente la estación migratoria Siglo XXI, ubicada en Tapachula, Chiapas, para exigir que los agentes de esa dependencia que lo detuvieron y agredieron el 14 de este mes sean investigados y castigados. Con el argumento de que había sido él quien agredió a los agentes, el INM interpuso una demanda en su contra por daños, lesiones y resistencia de particulares. El 16 de julio pagó 31 mil pesos para obtener su libertad bajo caución, y el 17 comenzó el ayuno.

Decenas de jóvenes de siete ciudades del país convocan a la Primera Jornada Antinuclear mediante mesas informativas, y denuncian los riesgos de las nucleoelectricas y la promoción de más centrales de este tipo que realizan legisladores en el Senado y la Cámara de Diputados, informó *Greenpeace*. Los manifestantes se instalan en plazas públicas de las ciudades de México, Culiacán, Guadalajara, Monterrey, Pachuca, Puebla y Jalapa para dar a conocer esto.

Vecinos de la delegación Tlalpan exigen la clausura de cuatro desarrollos inmobiliarios con un total de 900 departamentos en la zona de Tepepan, por violar el uso de suelo autorizado de tres niveles y una densidad poblacional de una vivienda cada 250 mts., lo que agravará los problemas de suministro de agua potable, energía eléctrica, drenaje, seguridad y vialidad. En conferencia de prensa, anuncian que este lunes entregarán una carta al jefe delegacional de Tlalpan, Higinio Chávez, y al presidente del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal (Invea-DF), Meyer Klip, para que revisen los proyectos ubicados en Arboleda Tepepan, Mirador 44 al 48, Aralia 48 y Bosques de Tepepan, con el fin de que sean clausurados.

Lunes 25

Los gobiernos federal y de Jalisco acuerdan con la UdeG avanzar en forma gradual para resolver los problemas financieros que enfrenta esa casa de estudios, hasta que se corrijan por completo en el transcurso de 2012, informa en un comunicado la SG. Por ello, la UdeG cancela la manifestación que 4 mil integrantes de su comunidad realizarían mañana en la ciudad de México para exigir a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Educación el pago de 960 millones de pesos.

Locatarios de mercados públicos exigen al Gobierno del Distrito Federal la cancelación del programa de cédulas de empadronamiento por los espacios que ocupan, que cambiaría su régimen de usufructuario por el de concesionario, obligándolos a cumplir con nuevas obligaciones fiscales y administrativas; así como la aplicación de la recién aprobada norma 29. En conferencia de prensa en la Asamblea Legislativa, denuncian que con ambas medidas se busca desaparecer los 318 mercados públicos, con un total de 70 mil locatarios, de los cuales depende casi medio millón de familias, con el fin de entregar estos espacios a las grandes tiendas de autoservicio y de conveniencia. Juan Alcántara y Marcos Orta, locatarios del mercado América 124, en la delegación Miguel Hidalgo, advirtieron que, de no dar marcha atrás, harían una movilización, lo que implicaría cerrar esos centros de abasto como forma de presión para las autoridades, pues no están dispuestos a perder su fuente de trabajo y el patrimonio de sus familias.

Martes 26

Luego de presentar a los ex presos políticos del ejido San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, quienes fueron liberados el sábado pasado del penal de Playas de Catazajá, el director del Centro de Derechos Humanos “Frayba”, Víctor Hugo López, anuncia que el organismo dará a conocer en breve la valoración jurídica de los procesos, así como sobre el despojo territorial sufrido por los indígenas, además de la situación del quinto preso, Mariano Demeza Silvano, quien fue liberado de la correccional juvenil de Berriozábal, pero sigue bajo caución. Los ejidatarios tzeltales, señala Hugo López, “recuperaron su libertad física; no obstante, llegaron a su comunidad y encontraron que ésta sigue ‘presa’ de un proceso unilateral, con la policía y el Ejército federal en sus tierras, y ante proyectos gubernamentales que no fueron consultados con los pobladores”. También enfatiza que, debido a los abusos que sufrieron en prisión, Domingo Pérez Álvaro, Juan Aguilar Guzmán, Jerónimo Guzmán Méndez y Domingo García Gómez vivieron uno de los peores momentos dentro de la actual la situación de los presos en los penales del estado.

El rector de la UdeG, Marco Antonio Cortés Guardado, da a conocer los pormenores de un acuerdo logrado el lunes con el gobierno federal para que esa casa de estudios reciba 480 millones de pesos en agosto y una cantidad similar en 2012, como parte del subsidio ordinario. Cortés Guardado, acompañado por autoridades de la UdeG, asegura en conferencia de prensa que la entrega de 960 millones de pesos resolverá lo inmediato, pero no la crisis financiera de la institución. El acuerdo entre la UdeG y las secretarías de Hacienda y Crédito Público y Gobernación también prevé la restitución gradual de las aportaciones federales al presupuesto de la casa de estudios, que debe sumar 52%, más 48% proveniente del gobierno estatal, proporción que se fue reduciendo en la década reciente. Los 480 millones de pesos que se recibirán el mes entrante formarán parte del subsidio irreductible para la UdeG, lo que incrementó el presupuesto federal de 2 mil 764 a 3 mil 244 millones de pesos. El gobierno estatal deberá entregar a lo largo del año 3 mil 439 millones.

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del SNTE informa en la ciudad de México que reestructuró la dirigencia de la sección 59 de Oaxaca, de tal modo que Joaquín Echeverría Lara asumió la presidencia de la comisión ejecutiva seccional, en sustitución de Erika Rapp Soto. En protesta por esta imposición de la presidenta nacional del SNTE, Elba Esther Gordillo Morales, el secretario general de la sección 59, Cuauhtémoc Sigüenza Orozco, renuncia al cargo, al igual que Raúl Villaseñor Mondragón, secretario de organización.

Luis González Placencia, presidente de la CDHDF, señala que “el año en resistencia de los habitantes de la colonia La Malinche, en Magdalena Contreras, a la construcción de la Supervía Poniente, es indicio de que no se han podido establecer los canales de comunicación entre el gobierno de la ciudad y quienes vieron violentados sus derechos”. Denuncia como negativa que la autoridad central no haya aceptado la recomendación que emitió por las violaciones a los derechos humanos de ese grupo de ciudadanos.

Vecinos de la delegación Tlalpan, en el Distrito Federal, se manifiestan en el Zócalo para denunciar supuestos actos de corrupción del jefe delegacional, Higinio Chávez, así como la privatización de espacios públicos. Los inconformes, en su mayoría usuarios de instalaciones como Ceforma y el Deportivo Vivanco, se congregan en el asta de la bandera de la Plaza de la Constitución. Después realizan un mitin frente al Antiguo Palacio del Ayuntamiento. A decir de los denunciantes, Chávez implementó en Tlalpan una política de privatización de estacionamientos y deportivos. Es por ello que demandan que revoque el convenio de concesión del deportivo Vivanco del 6 de julio.

Miércoles 27

La Red Nacional de Resistencia Civil contra las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica, reunida en la comunidad El Naranjo, municipio de Palenque, Chiapas, demanda al gobierno respeto a los derechos humanos y se pronuncia por “la justicia verdadera y contra la persecución política, la represión y la criminalización de los movimientos sociales”, así como por la cancelación de la amenaza jurídica y de los procesos injustos en contra de los luchadores sociales y los defensores comunitarios. Delegados de los estados limítrofes de Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Campeche se reúnen durante dos días para reflexionar en torno a dichos problemas. Además, dicha organización anuncia su adhesión a la Campaña Nacional e Internacional contra el Hostigamiento Judicial y la Criminalización a Defensores de Derechos Humanos y Luchadores Sociales en México, iniciada por el Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas, en respaldo al Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, y en especial a su director, Nataniel Hernández Núñez, y a su familia, sujetos a una persecución política por su activismo junto a los pueblos de la costa.

Diversas organizaciones no gubernamentales presentan una queja ante la CNDH por las declaraciones del secretario de Marina, Mariano Francisco Saynez, quien dijo que “grupos delictivos utilizan a agrupaciones ciudadanas para tratar de manchar el prestigio de las fuerzas armadas”. Esas afirmaciones, denuncian, “violan las garantías a la seguridad de las ONG dedicadas a la defensa de los derechos humanos”. Exigen, además, que el gobierno federal haga una comunicación pública en la cual refrende la importancia de la labor de estos defensores y sobre la necesidad de garantizar la aplicación de medidas para protegerlos. De igual manera, dichas las agrupaciones suspendieron de manera temporal la mesa de diálogo sobre el diseño del mecanismo para la protección de los defensores de derechos humanos que se realiza en la Secretaría de Gobernación, en protesta porque las declaraciones del secretario de Marina en las que puntualizaba que “existen grupos delictivos que tratan de manchar el buen nombre de las instituciones, utilizando grupos ciudadanos que, mediante engaños, pretenden que caigan en el juego perverso de los criminales, ya que al utilizar la bandera de los derechos humanos intentan dañar la imagen de las instituciones con el fin malévolo de obstruir la participación de las mismas en su contra y así tener el campo abierto a su maldad”.

Unos 60 ejidatarios de Icacos y Cumbres de Llano Largo, en el estado de Guerrero, acompañados de familiares y residentes, marchan por la avenida Costera para exigir que el Ejército les devuelva 200 has., que les fueron arrebatadas en 1992 para edificar la novena Zona Militar. “El gobierno federal les dio 50 has., a los militares. Ocuparon 15 para construir las instalaciones castrenses, pero nos quitaron 200 más, a las que no nos dejan acceder, y con esto se violan nuestros derechos humanos, como el derecho a la posesión”, manifiesta José Luis González Meza, abogado de los afectados. Precisa que los ejidatarios reclaman 144 has. en Plan del Chico, en Cumbres de Llano Largo, y 854 lotes de 250 m² cada uno en el ejido de Icacos.

Jueves 28

Durante un encuentro con 40 integrantes del Congreso de la Unión realizado en el alcázar de Chapultepec, y en nombre del MPJD, el poeta Javier Sicilia exige a los integrantes del Congreso pedir perdón a las víctimas de la lucha gubernamental contra el crimen organizado, a sus familiares y a toda la nación mexicana, “a la que no han defendido ni representado con dignidad”. Los acusa de tener responsabilidad por la violencia que “golpea a millones de familias en el país, que se ha

traducido en 50 mil muertos, 10 mil desaparecidos y 120 mil desplazados”. “Ustedes son también corresponsables de nuestros muertos y de nuestros dolores, porque –recalca– permitieron que el presidente Felipe Calderón pusiera en marcha una estrategia fallida, que viola la Constitución”. Sicilia reclama también a senadores y diputados el no haber aprobado aún la reforma política, y los recrimina por la forma dispendiosa y corrupta como consiguen votos los partidos y por los intereses mezquinos con los que día a día destruyen al IFE. Al final del encuentro, Sicilia abraza y da un beso a Manlio Fabio Beltrones, senador priísta, quien le reprocha que las críticas son “duras y rudas”, pero acepta que no se puede inconformarse “si son reales”. Por su parte, el sacerdote Miguel Concha exige a los diputados que dictaminen en sentido negativo la ley de seguridad nacional que aprobó el Senado, porque con ella se avanza en la militarización del país y en la violación de los derechos humanos, ya que “se garantiza la seguridad del Estado, no la de los ciudadanos”. Entre otras intervenciones de representantes del Movimiento por la Paz, Emilio Álvarez Icaza demanda a senadores y diputados trabajar en conjunto para aprobar una ley general de atención integral a las víctimas, porque, asegura, “es inadmisibles que después de ser víctimas de la delincuencia, el Estado tenga la incapacidad de responder; que tenga ineficiencia e incluso complicidad en algunos casos”. Finalmente, luego de seis horas de diálogo con representantes del congreso, el MPJD logra el compromiso de los legisladores de aprobar la reforma política, modificar la ley de seguridad nacional para que no se vulneren los derechos humanos y avanzar conjuntamente en iniciativas como la legislación de protección a víctimas del delito. También se acuerda integrar una comisión de enlace para dar seguimiento a los acuerdos.

Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, indígenas que acusan a elementos del Ejército de haberlas violado, exigen a la PGR y a la PGJM que sus agresores sean investigados en el fuero civil, en cumplimiento de las sentencias de la CIDH y de la SCJN, que recientemente se manifestó por restringir el fuero castrense. Las dos mujeres informan que entregaron una misiva a la PGR en la cual le exigen que atraiga el caso de los militares acusados, y otra a la PGJM para que renuncie a este caso y entregue de inmediato las averiguaciones previas iniciadas tras la denuncia de las agresiones, cometidas en 2002 en Guerrero. La entrega de estas cartas se realiza tras ocho meses de que la CIDH ordenara al Estado mexicano que las investigaciones fueran trasladadas al fuero civil, y luego de que hace unas semanas la SCJN, en una resolución histórica, decidiera restringir el fuero militar. Pero hasta el momento los casos de los militares acusados de violaciones contra ambas indígenas, así como del resto de los casos existentes, permanecen en tribunales castrenses.

Amnistía Internacional México manifiesta que las declaraciones del secretario de Marina, Mariano Francisco Saynez, tendientes a desacreditar las labores de los defensores de los derechos humanos, dañan el acuerdo del Ejecutivo federal de brindarles garantías para su labor e incrementan el riesgo y la situación de vulnerabilidad en que se encuentran. En un comunicado, demanda al gobierno mexicano a formular un amplio reconocimiento al valor y a la legitimidad de quienes defienden los derechos humanos en México, para restablecer la confianza en el diálogo entre la Secretaría de Gobernación y las organizaciones civiles, y así poder concretar un mecanismo permanente de protección para los defensores.

Desde las 2:30 hs., unos 400 camiones de carga de diversas dimensiones toman las calles de 20 de Noviembre, Fray Servando Teresa de Mier y Doctor Río de la Loza, en la zona centro del Distrito Federal, en protesta por la entrada en vigor de las modificaciones al Código Penal del Distrito Federal que sancionan con 1 a 9 años de prisión y multas de hasta 299 mil 100 pesos a quien tire desechos de materiales de construcción en lugares no autorizados. Policías realizan cortes viales y más de 100 granaderos son desplegados en el cruce de 20 de Noviembre e Izazaga, con el fin de

impedir que el contingente llegara al Zócalo, pero no logran evitar la afectación del tránsito que se extiende hacia calzada de Tlalpan, Anillo de Circunvalación, Paseo de la Reforma, Eje Central y las avenidas Juárez y Chapultepec.

El obispo Raúl Vera se reúne en la ciudad de San Cristóbal de las Casas con los presos liberados de San Sebastián Bachajón y las autoridades de la Otra Campaña de la región. El Centro de Derechos Humanos “Frayba” informa, a su vez, que en el contexto de la reunión ordinaria de su consejo directivo, que preside el obispo de Saltillo, los cinco ex presos políticos “compartieron la alegría de su liberación, y agradecieron que en todo este proceso no los dejáramos solos en su lucha”. Los ejidatarios reafirman que su lucha es por la defensa de la tierra y el territorio, y que seguirán organizándose con los compañeros y compañeras.

Miembros de la Asociación de Periodistas de Acapulco, en el estado de Guerrero, rinden un homenaje al locutor Juan Daniel Martínez Gil, asesinado hace dos años, y exigen a las autoridades estatales aclarar los crímenes cometidos contra el gremio. “El ciudadano en general se encuentra vulnerable, independientemente de su ocupación. El gobierno debe brindarnos la garantía de paz y seguridad a todos”, afirma Enrique Silva, locutor y compañero de Daniel Martínez.

El conflicto en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) se reaviva a tres días de que se reiniciaron las actividades, por las protestas de estudiantes del plantel del Centro Histórico contra la rectora, Esther Orozco, quien acude a dar la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso. Las manifestaciones de protesta concluyen con un saldo de tres estudiantes golpeados por empleados de la institución. Además de las consignas de “fuera Orozco” y de carteles que los estudiantes colocan en las inmediaciones del plantel, la Asamblea Universitaria denuncia la contratación de personal vinculado al Partido Nueva Alianza (Panal) y cita el caso del nuevo coordinador de servicios administrativos, José Antonio Cid Ibarra.

Viernes 29

El gobierno federal reconoce la existencia de por lo menos 184 casos de desapariciones forzadas y, aunque no acepta la propuesta de crear una fiscalía especializada, se compromete a analizar opciones para establecer en breve un mecanismo particular de investigación. Durante una reunión con más de 160 personas, en su mayoría procedentes de Coahuila, funcionarios federales niegan que todos los casos mencionados sean atraídos por la PGR; aseguran que muchos de ellos son desapariciones forzadas, mientras que los servidores públicos reiteran que la gran mayoría son casos atribuibles a la delincuencia organizada y no a una acción concertada del Estado, aunque en el caso de abusos –señalan– se tiene que indagar. El encuentro es encabezado por el secretario de Gobernación, Francisco Blake, y la titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, Patricia Bugarín, así como por el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la SG, Felipe Zamora. En su turno, el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, advierte que la guerra emprendida contra la delincuencia “es irracional, equivocada, llena de violaciones a la Constitución y a los derechos humanos”; además, que ha negado a toda costa la procuración de justicia.

Funcionarios del gobierno federal e integrantes del MPJD instalan dos subcomisiones temáticas con el objetivo de revisar, en los próximos dos meses, el sistema de atención a las víctimas y la estrategia de seguridad. En el segundo caso se fija una agenda temática y una metodología de

trabajo que pone énfasis en diagnósticos y propuestas para mejorar las condiciones de vida, la educación, la salud y la cultura de los jóvenes mexicanos. De manera paralela, se delimita el estudio y la discusión de los elementos que se requieren para combatir la corrupción, la impunidad y el lavado de dinero, entre otros puntos, cuyo eje es también reconstruir el tejido social. En el encuentro, realizado en las instalaciones de la Serapaz, participan funcionarios de las secretarías de Gobernación, Hacienda, Educación, Función Pública y Desarrollo Social, fundamentalmente, aunque se solicita –como uno de los primeros puntos– que se incorporaran a estos trabajos representantes de las secretarías del Trabajo y Economía, de la PGR y del Servicio de Administración Tributaria.

En un comunicado, el SME afirma que retirará el plantón que mantiene en el Zócalo capitalino hasta que sean resueltas sus demandas y responsabiliza al gobierno federal de la integridad física de los trabajadores que se hallan ahí desde hace varios meses, ante posibles actos de provocación que pretendan montarles. “Nuestras familias sufren desde hace 21 meses la falta de recursos y discriminación social por el hecho de ser parte de la lucha de resistencia del SME”, indica el comunicado.

Habitantes de municipios aledaños a la central nucleoelectrónica de Laguna Verde, en el estado de Veracruz, se manifiestan frente a la superintendencia regional de la CFE en Jalapa, en repudio a la represión que la paraestatal ejerce contra usuarios que están en resistencia contra el cobro de tarifas elevadas y presumiblemente alteradas. Provenientes de unas 40 localidades del centro y el sur de la entidad que están en huelga de pagos, unos 100 manifestantes exigen la liberación de Francisco Fernández Morales, ex diputado local fundador del movimiento de resistencia Chucho El Roto, quien encabezó el reclamo por tarifas justas en municipios aledaños a Laguna Verde. El representante de los afectados indica que en lugar de instalar mesas de negociación para dirimir el conflicto que mantiene con los usuarios, en la semana reciente la CFE dispuso destruir o retirar aparatos medidores de energía eléctrica a 50 familias de la ciudad de Cardel, municipio de La Antigua, y a 40 de las municipalidades de Cosoleacaque, Actopan, Minatitlán y Coatzacoalcos.

Diversas organizaciones defensoras de las garantías de los migrantes de México –entre ellas los centros de derechos humanos Fray Matías de Córdova y de la Montaña Tlachinollan, así como el Comité de Derechos Humanos de Tabasco– y de naciones centroamericanas se reúnen durante dos días, en la frontera sur del país, con el relator de la CIDH, para analizar la situación de los migrantes y los abusos en su contra. Ahí, representantes de dichas organizaciones exponen ante el relator sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias de la CIDH, Felipe González, la situación que enfrentan los migrantes que transitan o se asientan en territorio mexicano. Denuncian la ausencia de una política migratoria con enfoque de género y derechos humanos, la criminalización de los migrantes, la falta de garantías y acceso a sus derechos fundamentales, las prácticas discrecionales por el INM, la violación sistemática a garantías fundamentales en las estaciones migratorias y la persecución de los activistas son algunos pendientes que el Estado mexicano tiene en la materia.

Decenas de comuneros de Santa Cruz Tanaco, Michoacán, retienen por la noche a dos agentes federales, quienes pretendían ingresar y romper el cerco que habitantes de esta comunidad mantienen desde hace dos meses por el conflicto con sus vecinos de Cherán ante la tala clandestina. Más tarde, cuando patrullas estatales intentan liberarlos, los policías son despojados de sus vehículos, según informa la SSP estatal. Los comuneros de Santa Cruz afirman que los policías federales lesionaron con armas de fuego a dos de sus compañeros, que fueron trasladados a un

hospital del municipio de Zamora. Aseguran que cuando unos ocho uniformados quisieron entrar a fuerza a bordo de una patrulla, detuvieron a dos y posteriormente, armados de palos, piedras y machetes, bloquearon la carretera Cherán - Charapan con un camión de carga.

Más de 600 mujeres, en su mayoría provenientes del interior del estado de Guerrero, se manifiestan en la “Marcha de las Putas”, realizada en la ciudad Chilpancingo, y exigen respeto a su integridad y castigo a quienes violen sus derechos de género. Con consignas como: “No, significa no”, “Ni santas, ni putas, somos mujeres” y “Alerta, alerta, alerta que camina, la marcha de las putas, en América Latina”, recorren un trayecto de casi 2 kms desde Las Banderas hasta el zócalo de Chilpancingo.

Jóvenes excluidos de la educación superior y media superior se manifiestan por la falta de oportunidades para más de 80 mil estudiantes que no obtendrán un lugar en el bachillerato tras los resultados del examen único realizado por la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior. Durante un mitin en el Palacio de Bellas Artes, en el Distrito Federal, aseguran que a los 20 mil alumnos que no fueron asignados en algún plantel de educación media superior en el área metropolitana de la ciudad de México, ya sea porque no obtuvieron el puntaje mínimo requerido –31 aciertos– o porque no se presentaron al examen, se sumarán 40 mil, que al ser colocados en instituciones que no eran de su preferencia –sobre todo escuelas técnicas–, no se inscribirán, y 20 mil más que, si bien se inscribirán en estos planteles, aún sin desearlo, desertarán por su insatisfacción. Más tarde, los manifestantes se dirigen a la embajada de Chile en México, donde expresan su solidaridad con los estudiantes en huelga de hambre en el país andino.

Sábado 30

Representantes de las organizaciones civiles que se retiraron de la mesa de diálogo con el gobierno federal tras las acusaciones del secretario de Marina, Francisco Saynez, señalan que a cuatro días del hecho no hay visos de una disculpa pública de la administración de Felipe Calderón, por lo que será difícil retornar a los trabajos para la construcción de un mecanismo de protección para los defensores de los derechos humanos. Representantes del Instituto de Derechos Humanos y Democracia, del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, y de la CMDPDH, subrayan que es incongruente que por un lado el gobierno prometa crear un mecanismo de protección a los activistas y, por el otro, frente al propio Calderón, se les vincule al crimen organizado.

Comuneros de Capácuaro, Michoacán, interceptan a dos vehículos de la Policía Federal (PF) y a los 12 agentes que viajaban en ellos, y los retienen varias horas en las oficinas de la jefatura de tenencia para denunciar los abusos de los policías. Alrededor de las 10 a.m., las patrullas 12331 y 10229 de la Policía Federal circulaban por la carretera Uruapan-Paracho. Al transitar frente a Capácuaro, se ponchó el neumático de una camioneta y los comuneros pensaron se trataba de un operativo. Apoyados por pobladores de Chilchota y Tangancicuaro, los habitantes bloquean los accesos a Capácuaro, incluida la carretera federal que comunica a Zamora con Zacapu, donde atraviesan un autobús. Allí, un grupo de militares impide que incendiaran el vehículo y reabre el tránsito. Por la noche, el gobierno de Michoacán emite un comunicado en el que señala que detrás de los bloqueos en la meseta purépecha se encuentra el crimen organizado, y refrenda su apoyo a las comunidades indígenas en la lucha por proteger su patrimonio natural. Se informa también que la Secretaría de Gobierno y la policía estatal se encuentran en la región para salvaguardar la seguridad de los

habitantes, así como apoyar, colaborar y coadyuvar con las autoridades federales en su lucha contra los delitos federales y la delincuencia organizada en la zona.

La llegada de maquinaria a la comunidad de La Playita, en el estado de Baja California Sur, donde el corporativo canadiense *Vista Gold* pretende instalar una planta desaladora para abastecer de agua a su proyecto de extracción de oro en la reserva de la biosfera Sierra de la Laguna, en este municipio, provoca la movilización de los habitantes, quienes confrontan a los operadores y exigen la intervención de las autoridades ambientales. Ariel Ruiz Castillo, representante de la organización Agua Vale más que Oro, asegura que “esta acción forma parte de una escalada de disputas y desencuentros entre la minera con la sociedad sudcaliforniana, que se ha movilizado en rechazo a la instalación de proyectos de megaminería tóxica a cielo abierto en La Paz y Los Cabos”.

La Asamblea de los Pueblos del Istmo en Defensa de las Tierras y el Territorio, en el estado de Oaxaca, demanda cancelar averiguaciones, órdenes de arresto y causas penales iniciadas por empresas españolas contra quienes defienden sus derechos étnicos al repudiar el programa de desarrollo eólico del Istmo de Tehuantepec. Al dar a conocer los acuerdos de la sesión efectuada en el municipio de Unión Hidalgo, Carlos Manzo –uno de los convocantes–, afirma que los programas de desarrollo impuestos por el gobierno y múltiples empresas nacionales e internacionales “no sólo conllevan el despojo de territorio sino desplazan y dividen a los pueblos”. El programa eólico, que es impulsado por las autoridades nacionales, los bancos Mundial e Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional, junto a empresas como Preneal, Enel, Unión Fenosa, Iberdrola, Acciona, Demex, Renovalia, Gamesa, Eyra, Peñoles, Edf, Eoliatec y Fems-McQuaire, “divide a nuestros pueblos, amenaza nuestra vida y nos despoja de tierras”, asegura.

Domingo 31

En su declaratoria final, participantes de la segunda Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA) exigen la cancelación de la hidroeléctrica La Parota, en Guerrero, y de obras similares que la CFE impulsa en Paso de la Reina, Oaxaca, y Zapotillo, Jalisco, así como 112 minipresas planeadas en Veracruz, además de la revocación de 880 proyectos mineros que beneficiarían a empresas canadienses. En el segundo y último día de la ANAA, en la comunidad de Salsipuedes, municipio de Acapulco, estado de Guerrero, representantes de casi 90 organizaciones no gubernamentales y delegados procedentes de 16 entidades demandan frenar la expansión de las granjas porcícolas Carroll en el valle de Perote, en Puebla y Veracruz, y que los gobiernos del Distrito Federal y del Estado de México paren los planes de urbanización que amenazan a los asentamientos tradicionales. Los activistas acuerdan unificar el movimiento ecologista y anuncian una gran marcha nacional para el 12 de octubre, a fin de difundir los conflictos ambientales en el país, 15 de los cuales fueron sumados a un expediente que ahora incluye más de 210 casos, según el catedrático Andrés Barreda Marín, de la UNAM.

Ejidatarios de Huizopa, municipio de Madera, estado de Chihuahua, denuncian a la empresa Minera Dolores –subsidiaria de la canadiense *Minefinders*– por despojo de tierras y provocar enfermedades con la contaminación que genera al explotar oro y plata. Asimismo, se manifiestan en contra, y lo califican como ilegal, del usufructo de 2% de la ganancia que obtiene Liébano Sáenz Ortiz, “pues no es ejidatario”. En cartas enviadas a periodistas, la CNDH, Amnistía Internacional y los congresos estatal y federal, el profesor Dante Valdez Jiménez, vocero de los afectados, asegura que desde 2007 los ejidatarios han sido víctimas de autoridades “puestas al servicio de la empresa”.

Una treintena de policías encapuchados, pertenecientes a la SSP del municipio de Puebla – gobernado por el panista Eduardo Rivera Pérez–, detienen por la tarde al sacerdote católico Alejandro Solalinde Guerra, coordinador de la Pastoral de Migrantes de la Zona Sur Golfo, y director del albergue Hermanos en el Camino de Ixtepec, Oaxaca. En la acción, los uniformados detienen también a dos guardaespaldas de Solalinde, con el pretexto de que portaban armas largas. El párroco es retenido durante casi una hora, luego de que arribó a la cabeza de la caravana de migrantes Paso a Paso por la Paz, que arribaba a Puebla procedente de la comunidad Las Patronas, del municipio de Orizaba, Veracruz. Rubén Figueroa, integrante del movimiento migrante mesoamericano Familia Latina, relata que los encapuchados cerraron un perímetro de 50 mts., a la redonda del templo de Nuestra Señora de la Asunción, ubicado en la capital poblana, con el argumento de que en el vehículo en el cual viaja Alejandro Solalinde había armas de grueso calibre. A su vez, la organización no gubernamental Nodo de Derechos Humanos (Nodho) informa que el párroco es custodiado por policías del estado de Oaxaca, ya que cuenta con medidas cautelares en virtud de la gran cantidad de amenazas en su contra. De igual manera, aseguran que mientras se ignoraba el paradero de Solalinde, la caravana fue asediada por elementos policiacos locales, estatales y ministeriales.

La Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), en el estado de Oaxaca, designa presidente al mixe Cristóbal Velásquez Tomasa, durante su décima asamblea, y exige al gobierno estatal castigo a los crímenes perpetrados contra activistas y luchadores sociales en el sexenio de Ulises Ruiz Ortiz (2004-2010). “Para todos exigimos justicia. De otra forma, no podrá haber paz en Oaxaca”, afirma Lucía Antonio Montero, representante de un grupo de mujeres mixes, quien se encarga de dar lectura al pronunciamiento final del acto.

Glosario de siglas

AFADEM	Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos
AI	Amnistía Internacional
AMARC	Asociación Mundial de Radios Comunitarias
ANAA	Asamblea Nacional de Afectados Ambientales
ASE	Agencia de Seguridad Estatal
CDHDF	Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
CEM	Conferencia del Episcopado Mexicano
CEN	Comité Ejecutivo Nacional
Cereal	Centro de Reflexión y Acción Laboral
CERSS	Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados
CFE	Comisión Federal de Electricidad
CIDH	Corte Interamericana de Derechos Humanos
CIRT	Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión
COMDPDH	Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
CNDH	Comisión Nacional de los Derechos Humanos
CNTE	Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
Cofom	Comisión Forestal de Michoacán
Comecom	Coordinadora Metropolitana contra la Militarización y la Violencia
CTM	Confederación de Trabajadores de México

DIF	Desarrollo Integral de la Familia
EZLN	Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Fedessp	Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos
FITIM	Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas
FNLS	Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FPDT	Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra
Frayba	Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”
ICA	Ingenieros Civiles Asociados
ICEM	<i>International Federation of Chemical, Mine and General Workers’ Union</i>
IDN	Izquierda Democrática Nacional
IFE	Instituto Federal Electoral
IMDHD	Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia
IMSS	Instituto Mexicano del Seguro Social
INAH	Instituto Nacional de Antropología e Historia
Indaabin	Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales
INM	Instituto Nacional de Migración
Invea-DF	Instituto de Verificación Administrativa del DF
ISSSTE	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Estado
JBG	Junta de Buen Gobierno
LFC	Luz y Fuerza del Centro
Morena	Movimiento de Regeneración Nacional
MPJD	Movimiento Paz con Justicia y Dignidad
Nodho	Nodo de Derechos Humanos
ONU	Organización de las Naciones Unidas
OPIM	Organización del Pueblo Indígena Me’phaa
Orcao	Organización Regional de Cafecultores de Ocosingo
PAN	Partido Acción Nacional
Panal	Partido Nueva Alianza
PGJE	Procuraduría General de Justicia del Estado
PGJM	Procuraduría General de Justicia Militar
PGR	Procuraduría General de la República
PRD	Partido de la Revolución Democrática
PRI	Partido Revolucionario Institucional
Prodh	Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”
PROFEPA	Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
RCRS	Red contra la Represión y por la Solidaridad
Red TDT	Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos”
SACM	Sistema de Aguas de la Ciudad de México
SCJN	Suprema Corte de Justicia de la Nación
SDS	Sistemas de Desarrollo Sustentable
SEDESOL	Secretaría de Desarrollo Social
Serapaz	Servicios y Asesoría para la Paz
SG	Secretaría de Gobernación
SITUAM	Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana
SME	Sindicato Mexicano de Electricistas
SNTE	Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación

SSP	Secretaría de Seguridad Pública
SUTSEM	Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios
TEPJF	Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
UACM	Universidad Autónoma de la Ciudad de México
UAM	Universidad Autónoma de México
UAM-X	Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco
Ucizoni	Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo
UdeG	Universidad de Guadalajara
UNAM	Universidad Nacional Autónoma de México

Realizado por el Comité de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura de México del Observatorio Social de América Latina de México (OSAL-CLACSO).

Integrantes: Fernando Munguía Galeana y Mariana López de la Vega.

Fuentes: diarios La Jornada y El Universal.

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales



Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais



OSAL

Observatorio Social de América Latina
Publicación electrónica

Cronología del Conflicto Social

México

Agosto de 2011

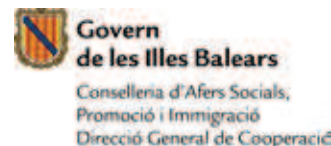
Editada en marzo 2012



Agencia Sueca
de Desarrollo Internacional



Agencia Noruega para la
Cooperación al Desarrollo



Govern
de les Illes Balears

Conselleria d'Afers Socials,
Promoció i Immigració
Direcció General de Cooperació

El Observatorio Social de América Latina [OSAL] cuenta con el apoyo de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional [ASDI], la Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo [NORAD] y la Agencia de Cooperación Internacional de las Islas Baleares [ACIB].

Documento de trabajo N° 980

*Realizado por el Comité de Seguimiento y Análisis
del Conflicto Social y la Coyuntura de
México*



Integrantes

**Mariana López de la Vega
Fernando Munguía Galeana**

Fuentes

**La Jornada
El Universal**

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Se autoriza la reproducción de los artículos en cualquier medio a condición de la mención de la fuente y previa comunicación al director.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en el documento incumbe exclusivamente al autor o a los autores firmantes y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

El **Observatorio Social de América Latina** (OSAL) constituye una iniciativa del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinada a la promoción de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, las dinámicas de participación y los repertorios de acción de los movimientos sociales y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado es uno de los resultados de este trabajo de relevo y registro llevado a cabo en el marco del programa. Se trata de un escrito en el que se sintetizan las principales acciones de movilización y protesta social y las medidas políticas llevadas a cabo durante el mes indicado en el país referido.

La cronología presentada ha sido elaborada por uno de los **Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana** que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo la coordinación del equipo de investigación mexicano, que forma parte de la red institucional de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.

Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana

PAÍS	INSTITUCIÓN	COORDINACIÓN
Argentina y Uruguay	PIMSA (Argentina)	María Celia Cotarelo
Bolivia	CIDES – UMSA	Dunia Mokrani Chávez Pilar Uriona Crespo
Brasil	LPP - UERJ	Roberto Leher
Chile	DI - UARCIS	Juan Carlos Gómez Leyton
Colombia	Escuela Nacional Sindical	Guillermo Correa Montoya
Costa Rica	IIS - FCS - UCR	Sindy Mora Solano
Ecuador	Centro de Investigaciones CIUDAD	Mario Unda
Guatemala	FLACSO Guatemala	Simona Yagenova
México	FCPS - UNAM	Massimo Modonesi Lucio Fernando Oliver Costilla
Panamá, El Salvador, Nicaragua y Honduras	CELA “Justo Arosemena” (Panamá)	Marco A. Gandásegui (h)
Paraguay	Centro de Documentación y Estudios	Quintín Riquelme
Perú	Instituto de Estudios Peruanos	Ramón Pajuelo Teves
República Dominicana y Puerto Rico	CES “Padre Juan Montalvo” (Rep. Dominicana)	Octavio Figueroa
Venezuela	PROVEA	Marco Antonio Ponce

México

Cronología del conflicto social

Agosto de 2011

Lunes 1

En Acapulco, Guerrero, en su declaratoria final, participantes de la segunda Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA) exigen la cancelación de la hidroeléctrica La Parota, en el mismo estado, y de obras similares que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) impulsa en Paso de la Reina, Oaxaca, y Zapotillo, Jalisco, así como de 112 minipresas planeadas en Veracruz, además de la revocación de 880 proyectos mineros que beneficiarían a empresas canadienses. En el segundo y último día de la ANAA, en la comunidad de Salsipuedes, municipio de Acapulco, representantes de casi 90 organizaciones no gubernamentales y delegados procedentes de 16 entidades demandan frenar la expansión de las granjas porcícolas Carroll en el valle de Perote, en Puebla y Veracruz, y que los gobiernos del Distrito Federal y del estado de México paren los planes de urbanización que amenazan los asentamientos tradicionales.

En Ciudad Juárez, Chihuahua, ejidatarios de Huizopa, municipio de Madera, acusan a la Minera Dolores (subsidiaria de la canadiense *Minefinders*) de despojo de tierras y de provocar enfermedades con la contaminación que genera al explotar oro y plata. Asimismo, califican de ilegal el usufructo de 2% de la ganancia que obtiene Liébano Sáenz Ortiz, pues no es ejidatario. En cartas enviadas a periodistas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Amnistía Internacional (AI) y los congresos estatal y federal, el profesor Dante Valdez Jiménez, vocero de los afectados, asegura que desde 2007 los ejidatarios han sido víctimas de autoridades “puestas al servicio de la empresa”.

La asamblea universitaria (AU) de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) exige a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) solicitar a la rectoría de esa casa de estudios “el material fotográfico y videográfico de la visita de la rectora María Esther Orozco al plantel Centro Histórico, incluido el de su salida del inmueble, momento en que personal administrativo y docente golpeó a los estudiantes”. Señala que “los testigos de las agresiones físicas están dispuestos a declarar en el momento en que así lo soliciten las autoridades correspondientes”. La asamblea universitaria emite un nuevo pronunciamiento en el que califica de “vergonzoso que la oficina de Protección Civil [de la institución] haya sido convertida en la oficina de guaruras de la rectora”.

En Puebla, una treintena de policías encapuchados, pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del municipio de Puebla –gobernado por el panista Eduardo Rivera Pérez–, retienen la tarde de este domingo al sacerdote católico Alejandro Solalinde Guerra, coordinador de la Pastoral de Migrantes de la Zona Sur Golfo, y director del albergue Hermanos en el Camino de Ixtepec, Oaxaca. En la acción, los uniformados se llevan a dos guardaespaldas de Solalinde, con el pretexto de que portaban armas largas. El párroco fue retenido durante casi una hora, luego de que arribó a la cabeza de la caravana de migrantes Paso a Paso por la Paz, que llegó a Puebla procedente de la comunidad Las Patronas, del municipio de Orizaba, Veracruz. Rubén Figueroa, integrante del movimiento migrante mesoamericano Familia Latina, relata que los encapuchados cerraron el perímetro a la redonda del templo de Nuestra Señora de la Asunción, ubicado en la capital poblana, con el argumento de que en el vehículo en el cual viajaba Alejandro Solalinde había armas de grueso calibre.

Martes 2

El director de investigación del secretariado internacional de AI, el mexicano Javier Zúñiga, advierte que el país podría vivir una “situación similar” en materia de violación a los derechos humanos a lo que ocurrió en las dictaduras militares del cono sur en las décadas de los 70 y 80, sobre todo por la presunta responsabilidad del ejército en las desapariciones forzadas. El prestigioso defensor también declara que el país está al borde de experimentar una “represión sistematizada”, con especial gravedad en los hechos probados por desaparecidos a manos de militares. El mexicano Javier Zúñiga ha investigado y documentado las violaciones a los derechos humanos en el mundo por más de 30 años, en este caso para AI. En ese periodo ha vivido de primera mano las experiencias dramáticas de las guerras civiles de Centroamérica, Colombia y varios países del Cuerno de África.

Los más de 850 mil integrantes de la organización *United Steelworkers* de Estados Unidos y Canadá exhortan al presidente Felipe Calderón a poner término a la “campaña de represión” en contra de los integrantes del sindicato minero y de su líder, Napoleón Gómez Urrutia, así como descongelar las cuentas bancarias del gremio y procesar a los homicidas de cuatro dirigentes sindicales asesinados en 2006. “Hacemos un llamado al presidente Calderón y al gobierno federal mexicano para que termine esta campaña de represión en contra de los mineros; se reconozca a su electo secretario general, de acuerdo con los principios establecidos por la Suprema Corte de México, y se retiren los cargos criminales falsos que han sido repetidamente rechazados por los tribunales mexicanos de apelación”. En el documento refrendan su apoyo a las huelgas de Cananea, Taxco y Sombrerete, encabezadas por el Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana. *United Steelworkers* exhorta al Grupo México a “que retire a los esquiroleros que han remplazado a los trabajadores en la mina de cobre de Cananea y se siente con el sindicato a negociar un acuerdo de buena fe”.

La representación general de los pueblos que integran la comunidad de Milpa Alta negó el pasado 13 de julio a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) el acceso a tierras comunales para que la empresa Consultores en Ingeniería Civil SA realice trabajos del proyecto ejecutivo, en un tramo 32 kms. de la carretera Arco Sur de la ciudad de México, que sería concesionada a la empresa española Obrascón Huarte Lain (OHL). Copias del documento oficial, enviado al representante general de bienes comunales, Julián Flores Aguilar, también se dirigieron a las autoridades civiles, militares y ejidales, así como a propietarios de terrenos en el estado de México, pero en ningún caso hubo una exposición previa del proyecto carretero, del cual sólo se conoce que buscará conectar Puebla con Morelos, sin entrar al Distrito Federal.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomienda al gobierno federal que otorgue permisos (visas) temporales a los migrantes como alternativa para frenar las graves y constantes agresiones que sufren los extranjeros en tránsito por el país. “Ahora hay un contexto de riesgos para la seguridad del migrante mucho mayor, [lo que] hace necesario adoptar una medida de esa naturaleza”, subraya Felipe González, relator especial para los Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias de la CIDH.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y la CNDH reciben la visita de Felipe González, relator especial para los Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias de la CIDH, con quien dialogan sobre los problemas y peligros que enfrentan los migrantes durante su paso por territorio nacional. Horas antes de presentarse ante la prensa para hacer público su informe preliminar de observación luego de su estancia de 10 días en México, González se reúne con el ombudsman Raúl Plascencia Villanueva, con quien comparte información acerca del creciente riesgo de extorsión y la vulnerabilidad de los ciudadanos de otras naciones cuando se internan en territorio nacional, sobre

todo por estar expuestos a las acciones de la delincuencia organizada y a los abusos de algunas autoridades.

Organizaciones civiles y defensores de los derechos de los indocumentados deben participar en la elaboración del reglamento de las leyes de migración y de refugio, porque de otra manera el mismo quedará fuera de la realidad que viven miles de personas que cruzan el país hacia Estados Unidos, así como afirma Leticia Gutiérrez Valderrama, secretaria ejecutiva de la dimensión pastoral de la movilidad humana de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM). En entrevista telefónica, sostiene que el Estado mexicano debe garantizar la seguridad de los activistas, porque “vivimos la misma situación que los migrantes al ser acosados por el crimen organizado y las fuerzas federales”. Asevera que el gobierno es el principal ausente en la labor de protección de ambos sectores.

La alerta lanzada la víspera por AI sobre una degradación en México en materia de derechos humanos similar a la vivida en países del cono sur, es secundada por activistas, como la senadora Rosario Ibarra, quien pide atender la advertencia, sobre todo por venir de una organización seria que conoce perfectamente la situación y no se equivoca cuando afirma que el país está al borde de una represión sistematizada. El obispo de Saltillo, Raúl Vera, declara que la falta de procuración de justicia, la militarización del país y la propuesta de Ley de Seguridad Nacional que permite la injerencia de las fuerzas armadas en labores de seguridad interior significan virtualmente un golpe de Estado, porque estos elementos evidencian que la pauta de gobernabilidad está en manos del Ejército.

Integrantes de AI realizan una manifestación frente a las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para exigir que el gobierno de México tome medidas efectivas contra la pobreza y suscriba el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con el propósito de tener nuevos mecanismos que permitan a la población acceder a instancias multilaterales para exigir el cumplimiento de sus derechos humanos. Una veintena de activistas construyen una vivienda de cartón (de dimensiones reales) en una de las entradas de la cancillería, para mostrar las condiciones a que deben enfrentarse las personas que viven en pobreza. A un costado colocan dos grandes mantas en las que se lee que la pobreza es inaceptable y constituye la peor crisis de derechos humanos en el mundo.

Miércoles 3

Micaela Cabañas Ayala, hija de Lucio Cabañas, solicita apoyo para salir del país junto con 17 integrantes más de su familia, “porque la vida de ellos y la mía corren peligro, igual que la de mi hijo”. En conferencia de prensa, en el centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en la ciudad de México, manifiesta que a raíz del asesinato de su madre, Isabel Ayala, y de su tía Reyna, ocurridos a principios de julio, han sufrido amenazas y, por tanto, los integrantes de su familia se han trasladado de un lado a otro para evitar acciones o ataques. Entre lágrimas, la hija de Lucio Cabañas resalta que cuando ocurrió el asesinato de su madre y su tía, inicialmente pensó que se trataba de un asalto porque se habían llevado sus cosas, pero cuando a las 9 de la noche del día de los crímenes recibió una llamada procedente del número celular materno, con la voz de un hombre amenazándola, cayó en la cuenta que el ataque pudo haber estado dirigido a ella. A raíz del doble homicidio de las hermanas Ayala Nava, 18 integrantes de la familia se vieron obligados a abandonar su comunidad, Xaltianguis; por razones de seguridad no revelan su paradero actual. Están a la espera de poder salir de México. Micaela Cabañas explica que decidió hablar a la prensa, “exponerme y hacer ruido” para que los asesinatos no queden impunes, tras señalar que las investigaciones no han avanzado. En un comunicado distribuido entre la prensa, se afirma que “el Estado mexicano nunca investigó ni sancionó la detención arbitraria, tortura y desaparición de Isabel Ayala y su hija en los años 70, ni emprendió acción alguna para castigar a los responsables

del exterminio de la familia Cabañas, 158” revela Catarino Hernández del Campo, de Izquierdas Unidas del Sur.

Dirigentes comunitarios de la Zona Lacandona de Chiapas llegan a un acuerdo para solucionar conflictos agrarios, ambientales, culturales y sociales que mantuvieron durante 40 años. El acuerdo entre Bienes Comunales Zona Lacandona (BCZL) y Aric Unión de Uniones Independiente y Democrática se inscribe en un marco de defensa contra intenciones del gobierno federal de desalojar habitantes de la zona, con el argumento de que se asientan en área protegida. En conferencia de prensa en el centro Miguel Agustín Pro Juárez, en la ciudad de México, representantes de las partes se refieren en particular al riesgo para los poblados San Gregorio, Salvador Allende y Ranchería Corozal, donde se asientan 100 familias.

Jueves 4

El poeta Javier Sicilia expresa que el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad se siente traicionado por diputados y senadores ante la aprobación en lo general de la minuta de Ley de Seguridad Nacional. En conferencia de prensa asegura que los legisladores “traicionaron su palabra y se traicionaron como hombres” con este hecho, por lo cual, en la Cámara de Diputados, “vamos a expresar nuestro repudio, nuestra sorpresa y nuestra indignación con una acción porque no podemos permitir que se apruebe esa ley”. Por la noche, el movimiento convocó a una “concentración ciudadana” frente al recinto de San Lázaro al mediodía, cuando se instalen las mesas para dar seguimiento a los acuerdos que tomaron con los legisladores una semana antes en Chapultepec.

Organizaciones no gubernamentales se manifiestan por que las fuerzas armadas se involucren en una discusión pública en torno a las violaciones cívico-militares, en el contexto de la aprobación de la minuta a la ley de seguridad. Agnieszka Racynska, de la Red Todos los Derechos para Todos, reitera el rechazo a la norma que se pretende aprobar, cuando “México está en una situación muy peligrosa para los derechos humanos”. Indica que las agrupaciones consideran que las fuerzas armadas deben participar en un debate franco y público para que “el discurso que se está manejando en la ley de seguridad se actualice con lo que marca ahora la Constitución por la reforma de derechos humanos. En la reunión efectuada están representantes de la, Centro Fray Francisco de Vitoria, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Red Todos los Derechos para Todos, Centro Pro y otros.

La Secretaría de Gobernación (SG) acepta el llamado de la CIDH para definir –con base en un diálogo con las organizaciones civiles– reglas que “faciliten” el tránsito de los migrantes que cruzan México para llegar a Estados Unidos. “Debemos trabajar en mecanismos de facilitación migratoria que nos permitan regular el flujo y, por lo mismo, tratar de disminuir la vulnerabilidad de indocumentados, señala René Zenteno, subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la dependencia. Estamos claros en el reto: regular y ordenar los flujos migratorios. Evidentemente la Ley [de Migración] da algunos mecanismos; es cuestión de ponernos de acuerdo para ver cuáles son las vías más fáciles que puedan beneficiar a los migrantes”.

La Junta de Buen Gobierno (JBG) Hacia la esperanza, del *Caracol* zapatista de la Selva fronteriza, en La Realidad, Chiapas, denuncia “provocaciones y perjuicios” de autoridades y ejidatarios de Monte Redondo, en la frontera con Comalapa, contra bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) pertenecientes al municipio autónomo Tierra y Libertad. Responsabilizan a militantes de cuatro partidos políticos: Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) , y al gobierno estatal, por solapar las agresiones. La JBG refiere que Patricio Domínguez Vázquez, Alba Palacios de León y Carmelino Felipe Pérez, bases

zapatistas, adquirieron desde 1972 terrenos dentro del mismo ejido, que cultivaron “sin ningún problema” hasta 1987, cuando surgieron “serios conflictos”, que persisten a la fecha. Las autoridades anteriores y actuales y otros ejidatarios cometieron “agravios, despojo y robo” de maíz, frijol, fruta y café, además de ocupar “ilegalmente” los terrenos. Los representantes autónomos identifican con claridad a los invasores de ocho hectáreas de Felipe Pérez, tres de Patricio Domínguez y ocho de Alba de León. Uno de aquellos, el perredista Conrado Domínguez, tenía ocupada una hectárea, la cual vendió en marzo de este año por 50 mil pesos “como si fuera el dueño”. El pasado 27 de julio, unas 200 personas, entre ellas autoridades del ejido Monte Redondo, “se metieron en las parcelas de nuestros compañeros a tumbar las matas de café que ya estaban dando frutas”.

En Melchor Ocampo, estado de México, pobladores de esta cabecera municipal bloquean la carretera Cuautitlán-Zumpango para exigir la liberación de dos vecinos detenidos por al menos 50 policías municipales que con toletes, gases lacrimógenos y disparos al aire, reprimieron a habitantes que intentaron impedir la clausura de una miscelánea, cuyo dueño no pagó impuestos. En la refriega hay más de 50 golpeados. Los inconformes consideran que la represión se debió a que la población se opone a que la alcaldía ceda tres ejidos a los municipios de Cuautitlán y Nextlalpan.

Viernes 5

El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad da por roto el diálogo con el Congreso y parcialmente lo aplaza con el gobierno de Felipe Calderón, a causa de haberse aprobado en lo general la minuta de reforma a la Ley de Seguridad Nacional como documento base para elaborar el dictamen en materia. Sus representantes ya no acuden a los encuentros programados en San Lázaro y en la Secretaría de Gobernación, celebrándose una reunión en la Procuraduría General de la República (PGR). Javier Sicilia da lectura a un texto a la entrada principal del recinto camaral, donde acusa: “no se puede dialogar con hombres y mujeres que no hablan verdad, porque el diálogo, que quiere decir de dos y un empeñar la palabra dicha entre dos, no ha sido honrado por una de sus partes y sólo queda un *logos*, una palabra herida por la traición”.

El gobierno de México firma sendos acuerdos para solucionar dos casos que se tramitan ante la CIDH, la cual encontró acreditada la responsabilidad del Estado por violaciones a las garantías fundamentales de los involucrados. El primer caso es el de Paloma Angélica Escobar Ledezma, de 16 años, que desapareció en 2002 en la ciudad de Chihuahua, y semanas después fue encontrada sin vida en una carretera cercana. Sus familiares dieron aviso de los hechos a las autoridades, pero no se realizó una investigación seria y eficaz, por obstáculos imputados a autoridades estatales, lo que impidió llevar a juicio a los responsables del homicidio. El otro caso es el de los indígenas purépechas Irineo Martínez Torres y Candelario Martínez Damián, quienes fueron detenidos en Nuevo Laredo en 1997, acusados de transportar mariguana en columnas de madera tallada, sobre las que no tuvieron control por más de 24 horas, dado que el comprador fue quien las transportó de Michoacán a Tamaulipas. Además de haber sido golpeados por policías federales al momento de su detención, los dos indígenas no contaron con un intérprete en el juicio que se realizó en su contra, pese a que uno de ellos no hablaba castellano y el otro apenas lo entendía. En su queja ante la CIDH, la defensa de los purépechas alegó faltas al debido proceso, por no haber sido asistidos por intérpretes en el juicio, en el que fueron encontrados responsables penalmente y condenados a penas privativas de su libertad.

La CIDH solicita a las autoridades mexicanas adoptar medidas urgentes para proteger a los familiares de Javier Torres Cruz, defensor ambiental asesinado el 18 de abril en la comunidad La Morena, municipio de Petatlán, en Guerrero. Esta decisión, dada a conocer, fue notificada el 29 de julio a los solicitantes de las medidas cautelares: Colectivo contra la Tortura y la Impunidad,

Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Comisión de Defensa de Derechos Humanos del estado de Guerrero y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). “La importancia de proteger a la familia quedó en evidencia luego de que el pasado 21 de julio sujetos armados irrumpieran en La Morena y se enfrentaran a policías estatales, como se informó en la prensa”, señala el CEJIL. La organización recuerda que Torres Cruz era miembro de la Organización de Campesinos Ecológicos de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP), cuyos miembros han sufrido diversos actos de represión motivados por su actividad.

Los ex presos políticos de San Sebastián Bachajón, en Chiapas, adherentes de la Otra Campaña, quienes fueron liberados el 23 de julio pasado, denuncian que tras el retorno a sus hogares, han recibido amenazas de muerte de parte de dirigentes del PVEM en el municipio de Chilón. Los campesinos tzeltales señalan directamente a Manuel Jiménez Moreno, hijo del ex regidor de Chilón Antonio Jiménez García, y a Juan Álvaro Moreno, dirigentes del citado partido, así como pobladores de las comunidades Pamalá Xanil Segunda Sección y El Paraíso. En hechos ocurridos los pasados días 24 y 28 de julio, señala la denuncia, “nos han provocado y amenazado de muerte, señalándonos verbalmente que somos ex presos políticos; nos provocan para que caigamos en una confrontación, como ellos han hecho siempre.

Sábado 6

Se denuncia el asesinato de tres triquis por paramilitares, ya que el viernes 5 por la tarde fueron atacados con armas de fuego en la desviación Cayuco, cerca de Agua Fría, Oaxaca, Alvaro Jacinto, José Luis Ramírez Hernández y Francisco Ramírez Merino, identificados con el proyecto de autonomía en la región triqui. El ataque fue perpetrado por paramilitares del MULT-PUP, que actúan en un ambiente de impunidad propiciado por los gobiernos pasado y presente del estado, que hacen caso omiso de las medidas cautelares de la CIDH, de las recomendaciones de la CNDH, y alientan política y económicamente a esa organización. Recientemente han sido amenazados de muerte los miembros del Consejo Autónomo Comunitario y el vocero del municipio autónomo.

Domingo 7

En Cherán y Ostula, Michoacán y San Luis Acatlán, Guerrero, cansados de los asaltos, robos y violaciones en La Montaña y la Costa Chica, de la tala de los bosques y de la delincuencia organizada en Cherán, así como de la invasión a su territorio en Ostula, miles de indígenas de estos pueblos deciden valerse por sí mismos y organizar su autodefensa. Con historias y dinámicas distintas, los comuneros de Cherán, en la meseta purépecha; los nahuas de Ostula, en el litoral del Pacífico michoacano, y los mixtecos, nahuas y mestizos de La Montaña y Costa Chica de Guerrero, reivindican sus sistemas de seguridad tradicionales y tienen en sus manos la vigilancia de sus comunidades. Mientras en Ostula y Cherán los pueblos –al margen del gobierno– se hacen cargo de la vigilancia local, en Guerrero 65 comunidades tienen, además de los cuerpos de seguridad, un sistema de impartición de justicia propio basado en la re-educación.

La CIDH advierte que el principio de excepcionalidad de extranjeros indocumentados no está garantizado en la nueva Ley de Migración mexicana y tampoco en la práctica actual. Precisa que existen “serias dificultades” para el ingreso de las organizaciones de la sociedad civil a las estaciones migratorias y, adicionalmente, hay deficiencias en lo que toca a la atención de grupos vulnerables. La CIDH señala al gobierno mexicano que existen parámetros ante los extranjeros que deben partir, según la declaración de la Organización de Estados Americanos (OEA), de la presunción de libertad. El Instituto Nacional de Migración (INM) indica que el corredor migratorio

México-Estados Unidos es el de mayor movimiento en el mundo, con tránsito de 11.6 millones de emigrantes en 2010.

“Culpables”, es el veredicto durante un juicio público –afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) efectuado por familiares de víctimas de desaparición forzada– contra las fuerzas armadas mexicanas por abusos y delitos cometidos contra la ciudadanía. Como cada primer sábado de mes, desde septiembre de 2008, integrantes del Comité Eureka y de la organización Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS) México se manifiestan ante el máximo tribunal para demandar la presentación con vida de centenares de desaparecidos políticos, del pasado y del presente. Informan que el próximo mes cumplirán tres años ininterrumpidos de presentarse cada mes ante la SCJN, acto al que califican de “ejercicio de memoria con la gente”.

Lunes 8

El conflicto agrario entre varias comunidades de la zona del Desierto de los Leones por la propiedad de un terreno puede terminar en violencia, así como alerta el diputado local Leonel Luna, quien hace un llamado urgente al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, y a la secretaria de Medio Ambiente, Martha Delgado, a que intervengan de manera decidida en ese asunto. En conferencia de prensa, en la que estuvo acompañado por líderes comunales y ejidales de Santa Rosa Xochiac, San Bartolo Ameyalco, San Bernabé, San Lorenzo Acopilco y La Magdalena, el diputado perredista remarca que desde hace más de cuatro años el tribunal unitario agrario distrito ocho resolvió que las autoridades capitalinas debían asumir el resguardo de esa zona de reserva ecológica en tanto no se resuelva el conflicto de propiedad; sin embargo, esa resolución no se ha concretado. Luna explicó que la tensión crece día con día, y se corre el riesgo de que en cualquier momento ocurran situaciones de violencia entre los pobladores de San Mateo Tlaltenango con los de los pueblos antes citados. Añadió que la gente de San Mateo determinó en fechas recientes cobrar peaje por el acceso a la zona, así como fijar tarifas por el estacionamiento y diversos servicios localizados en el Desierto de los Leones, lo cual rompe con cualquier posibilidad de que se pueda llegar a un acuerdo.

En Oaxaca, los tres cadáveres de los indígenas triquis asesinados el pasado viernes 5 son velados por once horas frente al palacio de gobierno, en el zócalo de esta ciudad, como una manera de protestar por la violencia que impera en aquella región, donde constantemente se registran emboscadas y crímenes que en los últimos 30 años han dejado por lo menos 500 muertos. Los cadáveres de Álvaro Jacinto Cruz, Francisco Ramírez Merino y José Luis Ramírez, originarios de Agua Fría, Copala, y militantes del Movimiento Unificador de Lucha Triqui Independiente (MULTI), son trasladados a bordo de una camioneta en un viaje de al menos seis horas. La camioneta entra y sale por la calle de Bustamente, a un costado del palacio de gobierno, en cuyos corredores, desde septiembre de 2010, se encuentran en plantón mujeres y niños del MULTI, quienes salieron de sus comunidades argumentando que la violencia en la zona no los deja vivir. Previo a su llegada al zócalo de la ciudad, en el municipio de Santiago Juchitán, elementos de la policía estatal aseguran por unas cuatro horas los cadáveres y los llevan al panteón de aquella localidad, bajo el argumento de que quienes los llevaban no tenían documentos de sanidad. Sin embargo, después de varias horas de negociación los cadáveres son devueltos y el vehículo se encamina hacia Oaxaca.

Martes 9

Agraristas de Campeche denuncian la desaparición de tres miembros del Frente Campesino Democrático 19 de Octubre (FCD-19) detenidos el domingo por elementos de la marina. Mientras,

una familia de Ciudad Juárez, Chihuahua, acusa a un grupo de policías federales de allanar su casa y saquearla frente a vecinos y transeúntes. Candelaria García González, lideresa del FCD-19, señala que unos 50 elementos de la Armada de México llegaron en cinco vehículos a su casa, en la cabecera municipal de Candelaria, a las 4:40 de la madrugada. Cuando llegó le informaron que habría un cateo, pero no la dejaron pasar, y cuando exigió que le explicaran el motivo respondieron que había “mucha gente” en la vivienda, lo cual, así como declara, no es delito porque allí muchos campesinos y sus familias duermen, cocinan y comen, dadas las actividades de la agrupación. Según la denuncia, a dos miembros del frente ya se los habían llevado, a dos más los tenían con la cabeza cubierta en una de las camionetas, y también intentaron llevarse a la hija de García González, pero la intervención de la dirigente hizo que la soltaran junto con otro de los huéspedes.

En Oaxaca, indígenas ikoots de Pueblo Viejo, municipio de San Dionisio del Mar, en el Istmo de Tehuantepec, acuerdan en asamblea general no permitir el establecimiento de una central eólica de energía eléctrica en más de mil has. de tierras comunales. El agente municipal, Teódulo Gallegos Pablo, informa que los habitantes de esa comunidad manifiestan su preocupación por el contrato “leonino” firmado el 8 de noviembre de 2004 por el comisariado de bienes comunales y el consejo de vigilancia con la empresa española Preneal, porque dispondrá de su patrimonio cultural y biológico. Expuso que el contrato es “desventajoso” para Pueblo Viejo, pues se firmó por 30 años, prorrogables por un periodo similar, sin haber informado ni consultado a los habitantes sobre las implicaciones y alcances de la central eólica. Destacó que Preneal podrá utilizar las 1. 643 has. de tierras comunales y pagará solamente 100 pesos al año por cada una. “Con la central eólica peligra nuestra vida como pueblo indígena”, además de los manglares, selva, lagunas, peces y aves, “recursos que hemos conservado milenariamente. Esta instalación no representa ninguna ventaja para el pueblo y en cambio pone en peligro nuestra forma de vida”, remarca el agente municipal.

Ante el deterioro que sufriría el suelo de conservación de la delegación Milpa Alta y la violación a los derechos de los pueblos originarios por la construcción del Arco Sur de la ciudad de México, el titular de la demarcación, Francisco García Flores, y un grupo de representantes comunales exigen a Dionisio Pérez Jácome, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la cancelación de ese proyecto carretero. García Flores se pronuncia por respetar los diferentes niveles de gobierno y solicita que cualquier intervención en las comunidades se haga de manera coordinada, para evitar situaciones como la que ocurrió en San Pedro Atocpan, cuando tres policías federales fueron retenidos por la comunidad al intentar detener a dos de los pobladores. A caballo, 17 jinetes encabezados por el funcionario recorren un tramo del eje central Lázaro Cárdenas hasta llegar a la dependencia federal. En las puertas del edificio de gobierno ratifican que en Milpa Alta “no hay negociación de tierras para obras viales”.

Miércoles 10

La Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) denuncia que las violaciones a los derechos de los pueblos originarios han ido en aumento con la llegada de empresas transnacionales que han instalado plantas eoloelectricas en el Istmo de Tehuantepec. Con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el coordinador de programas de la organización, Carlos Beas Torres, sostiene que el negocio de la energía eléctrica beneficia a empresas españolas como Endesa, Preneal, Iberdrola y Unión Fenosa, que “con engaños y presiones de todo tipo han legalizado el despojo de más de 15 mil hectáreas”. A su vez, el gobernador Gabino Cué Monteagudo toma protesta en Teotitlán del Valle al Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas del estado y se solidariza con su lucha en defensa de sus territorios y recursos naturales. El ex relator para los Pueblos Indígenas de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Rodolfo Stavenhagen, reconoce los esfuerzos del gobierno estatal, pero advierte que aún falta mucho y confía en que el consejo consultivo sirva para lograr avances.

En Acapulco, Guerrero, un centenar de ejidatarios del poblado La Sabana bloquean en forma intermitente el viaducto Punta Diamante de la autopista del Sol, cerca de la comunidad Los Playones, donde cobran 50 pesos a los conductores para dejarlos pasar. Los manifestantes reclaman desde hace cuatro años que el gobierno estatal pague el derecho de vía para construir el viaducto. Los manifestantes se reunirán esta semana con el gobernador Ángel Aguirre Rivero.

En Guadalajara, Jalisco, indígenas nahuas del ejido de Ayotitlán, municipio de Cuautitlán, Jalisco, acusan a mineras “furtivas” de extraer minerales de su territorio. El comisariado ejidal presenta una denuncia ante la Unidad Especializada contra Delitos Ambientales de la PGR, sosteniendo que las empresas efectúan rápidas incursiones con maquinaria, sin permiso de la comunidad ni del ayuntamiento. El saqueo se ha detectado en las comunidades El Roble Ancho y El Pedregal, zona de amortiguamiento de la reserva de la biosfera en la sierra de Manantlán, ecosistema rico en especies endémicas y biodiversidad, y abundante en hierro. Jaime Hernández Lamas, asesor jurídico del ejido de Ayotitlán, informa que el 4 de agosto los nahuas, por conducto de su comisario, Juan Mancilla, interpusieron una denuncia ante la PGR, no sólo por extracción ilegal del mineral, sino por el daño ambiental que causa la maquinaria. “No tienen concesión, permisos de impacto ambiental, uso de suelo ni aprobación de la asamblea de mayores [del ejido]. Llegan de improviso y extraen material hasta agotarlo”, dice Hernández Lamas.

En cuatro meses, integrantes del Movimiento Ciudadano de Cuernavaca han presentado más de 120 quejas ante la Procuraduría Federal de Consumidor contra la CFE por cobros excesivos. Los inconformes convocan a una marcha para el 17 de agosto para exigir que paren los abusos de la paraestatal, y si no es capaz de dar servicio con tarifas bajas, que mejor regrese Luz y Fuerza del Centro.

Integrantes de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán exigen medidas cautelares ante amenazas de grupos de la delincuencia organizada, que han cometido crímenes en esa región de la Costa Grande, así como informa el procurador estatal, Alberto López Rosas. Indica que en una reunión que sostuvo con campesinos ecologistas encabezados por Eva Alarcón, éstos pidieron “medidas cautelares para tres mujeres y algunos campesinos más”.

Cuauhtémoc Ramírez, dirigente de la Organización de los Pueblos Indígenas Me’phaá, advierte que a poco más de un mes de que se cumpla el plazo fijado por la CIDH, ni el gobierno federal ni el de Guerrero han cumplido con una recomendación por el caso de las indígenas Valentina Rosendo e Inés Fernández, violadas por soldados en 2002, en el municipio de Ayutla de los Libres. En tanto, el ex guerrillero y ex dirigente del PRD en Guerrero Eloy Cisneros reclama que el *sol azteca* entregó un proyecto para conformar una comisión de la verdad en cuanto a la *guerra sucia* implementada en la entidad durante la década de 1970, pero no se ha respondido a la propuesta a cinco meses de que inició la administración que encabeza el gobernador Ángel Aguirre.

La representación comunal de Villa Milpa Alta organizará un foro informativo para difundir la importancia que tiene esa zona de conservación del Distrito Federal y los daños ecológicos que sufriría si se concreta el proyecto carretero Arco Sur. Según la información recabada por los representantes vecinales, la licitación de la obra se tiene prevista para septiembre próximo, por lo cual los habitantes de la demarcación buscan revertir la pretensión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de construir la vialidad a través de la zona boscosa. Para la presentación y exposición del valor ambiental de las zonas de conservación han invitado a especialistas de instituciones académicas como Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Instituto Politécnico Nacional (IPN) y del Colegio de México. Además se lanzará la convocatoria a habitantes de las delegaciones Tlalpan, Xochimilco, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Tláhuac y Cuajimalpa, con quienes se buscará

hacer un frente común en defensa de las áreas verdes, de conservación y el bosque de agua de la capital.

Cese al clima de violencia y extorsión de policías mexiquenses demandan migrantes centroamericanos luego de la muerte a golpes del adolescente guatemalteco Julio Fernando Cardona Agustín en la zona donde se encuentran las vías del ferrocarril. Al mismo tiempo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala expresa su total repudio por el asesinato de Cardona Agustín, de 19 años, originario del departamento de San Marcos, quien fue asesinado en el municipio de Tultitlán, Estado de México, donde se encontraba acompañando la caravana “Paso a Paso por La Paz” a favor de la comunidad migrante. Julio Fernando, indígena guatemalteco, obtuvo la visa humanitaria por parte del gobierno mexicano el pasado 5 de agosto, horas antes de ser asesinado, apuntó Irineo Mujica Arzate, coordinador de la caravana “Paso a paso hacia La Paz”.

Jueves 11

Más de 40 estudiantes rechazados de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) efectúan por segunda ocasión una huelga de hambre para exigir que sean aceptados en las unidades académicas de medicina, odontología y enfermería, y en rechazo a la propuesta del rector Ascencio Villegas Arrizón de integrarlos a otras carreras disponibles que ofrece la institución. En representación de 300 rechazados, Bertha Yuridia Zúñiga Leyva, integrante del Movimiento Académico Social Alternativo del Sur, manifiesta: “no estamos de acuerdo en la solución que nos dieron los directivos de la UAG. Muchos de los que estamos aquí queremos estudiar medicina, y vamos a insistir; nos vamos a ir hasta que nos acepten”. En tanto, el rector Villegas Arrizón insiste en que no hay más espacios en las áreas de la salud y descarta que se vaya a aplicar otro examen de admisión. Sostiene que “ya no hay posibilidad de más ingresos, pues ya no hay cupo. Los resultados de los exámenes se abrieron ante notario público”.

El allanamiento del domicilio del poeta Efraín Bartolomé evidencia la indefensión ante los actos ilegales de las fuerzas coercitivas del Estado, hechos que de aprobarse las reformas a la Ley de Seguridad Nacional dejarían de ser punibles, señalan a *La Jornada* intelectuales y artistas mexicanos.

La CNDH inicia una queja de oficio y requiere al gobierno municipal informes sobre la actuación de los policías municipales presuntamente involucrados en la muerte del joven migrante de Guatemala, Julio Fernando Cardona Agustín, cuyo cadáver fue encontrado en la zona de vías de la colonia Lechería. Luis Ignacio Arredondo, visitador adjunto de la CNDH, acude a este municipio para iniciar una investigación sobre la muerte del guatemalteco y solicita a la dirección de Seguridad Pública local el reporte en el cual participaron elementos de la patrulla 203, que tomaron conocimiento de la muerte.

Más de 40 organizaciones sindicales, políticas y sociales se comprometen a asumir la defensa del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), condenan la política “totalitaria y fascista” del gobierno federal y van a emprender un plan de acción conjunto, el cual incluye el reforzamiento del plantón en el Zócalo y la realización de movilizaciones en septiembre y octubre de este año. Entre las acciones acordadas, destacan que para evitar el levantamiento forzado del plantón instalado en el centro de la capital, van a incorporarse al mismo nuevos contingentes de diversas organizaciones; asimismo se van a unir a la movilización convocada por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad el próximo 14 de agosto y el jueves 1º de septiembre van a realizar un contra-informe de gobierno “que deje constancia del saldo negativo de las políticas neoliberales impuestas por la administración de Felipe Calderón”. Organizaciones como la Unión Nacional de Trabajadores; el Movimiento por la Soberanía Alimentaria y Energética; el sindicato minero; las secciones 9 y 18 de

la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)- Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el Frente Sindical Mexicano, el Diálogo Nacional, y la Federación Estadunidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, por sus siglas en inglés), entre muchas otras, convienen además realizar una campaña internacional para denunciar al gobierno mexicano por su política represiva violatoria de la libertad sindical, impulsar una campaña de cartas, pronunciamientos de personalidades, protestas en las embajadas y consulados de México en el mundo y convocar a una misión internacional solidaria con el SME que acuda al Zócalo.

La Organización Familia Pasta de Conchos da un ultimátum al gobierno federal para que defina si procederá al rescate de los cuerpos de los 63 mineros muertos en ese socavón en febrero de 2006. Han pasado tres meses desde que conversaron al respecto con el secretario de Gobernación, José Francisco Blake, con quien analizaron los aspectos técnicos, la “viabilidad para el rescate”, las características de los eventuales operativos y los alcances presupuestales necesarios para ello. “Los familiares no están dispuestos a esperar más. Si no hay una definición sobre este punto, nos enfocaremos a las gestiones y denuncias ante organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, indica Carlos Rodríguez, integrante de la organización. El objetivo es que representantes de grupos de diversas partes del mundo vayan a Coahuila y se percaten del nivel de seguridad con el que ahí se explota el subsuelo.

En Guadalajara, mientras estuvo a cargo del área de Atención a Delitos en Agravio de Menores, Sexuales y Violencia Intrafamiliar de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Pedro Haro Ocampo permitió que empleados de la dependencia tuvieran relaciones sexuales con menores de edad y que utilizaran instalaciones y vehículos oficiales para hacer fiestas y tener sexo, entre otros ilícitos, así como denuncian organizaciones civiles. Salvador Cosío, dirigente de Conciencia Cívica, y Juan Manuel Estrada, presidente de la Fundación Find, entregan a la prensa grabaciones de audio de entrevistas con supuestas empleadas de la PGJE, quienes narran que compañeros de Haro Ocampo aprovechaban los rondines en bares para tener sexo con menores de edad, a quienes amenazaban con encarcelar, con la aquiescencia de su jefe, hoy director de Averiguaciones Previas de la PGJE. Esta prueba “pone al descubierto una red de tráfico de influencias [en la PGJE], que incluye la modificación de dictámenes a cambio de cantidades que van de 50 mil a 100 mil pesos para liberar de responsabilidad a presuntos pederastas y pedófilos”, denuncia Cosío.

El Centro de Derechos Humanos de la Mujer en Chiapas exige la liberación de cuatro guatemaltecas y un menor que fueron arrestados por agentes del INM en el poblado de Carmen Xhan. En una acción urgente, el organismo pide la intervención del consulado de Guatemala en Comitán y de la CNDH y el Consejo Estatal de Derechos Humanos, por la “injusta detención” de las cuatro mujeres. El cónsul de Guatemala en Comitán, Hugo Arnoldo Blanco, se entrevistó con funcionarios de la delegación migratoria donde están las mujeres de la organización Mamá Maquín, integrada por ex refugiados guatemaltecos. Un portavoz del organismo comenta que existe la promesa de que las mujeres sean deportadas por la zona de Tapachula, lo que retrasaría aún más su viaje a la comunidad de El Quiché. Mientras, en esta entidad donde la trata de personas se ha convertido en un grave problema social en diversos municipios, la Comisión de Derechos Humanos de Tlaxcala (CDHT) buscará crear una visitaduría que atienda los casos de este tipo y proponga una estrategia para combatir el problema, así como declara el presidente del organismo, Francisco Mixcoatl Antonio. Luego de presentar su plan de trabajo, el ombudsman local señala que después de hacer un diagnóstico de la situación de los derechos humanos y saber en qué zonas se practica la trata de personas, analizarán la creación de una visitaduría que se avoque al problema. Refiere que para luchar contra este delito existen dos vías: la primera, es la participación de la comisión al interior del Consejo Estatal Contra la Trata de Personas, donde recientemente fueron integrados para trabajar con organizaciones no gubernamentales y dependencias estatales; la segunda, es hacer un enfoque multidisciplinario para la elaboración del diagnóstico.

Viernes 12

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) inicia una investigación de oficio por la irrupción de policías del estado de México en tres casas de la colonia Torres de Padierna, la madrugada del jueves 11, como parte del operativo para detener a Óscar García Montoya. El organismo investiga la posible intervención de policías capitalinos en los hechos, así como si se cumplieron las formalidades para el ingreso de los agentes estatales en el DF. La CDHDF manifiesta su preocupación por el robo de que fue objeto el escritor, así como los daños a su casa y las de Patricia Magaña y Victoria Rueda. El organismo deja entrever que otros domicilios también fueron allanados en otras zonas del DF, por lo que hace un llamado a quienes hayan sufrido estas situaciones para que lo denuncien.

La CNDH da a conocer su recomendación general número 19, en la que alerta sobre la persistencia de los allanamientos ilegales en el país, y subraya que dichas prácticas son contrarias a los artículos 14 y 16 de la Constitución. Al mismo tiempo, abre una queja de oficio en el caso de las familias que fueron víctimas de un cateo de este tipo durante la madrugada del jueves a cargo de elementos de Procuraduría General de Justicia del estado de México, entre ellas la del poeta Efraín Bartolomé y la investigadora universitaria Patricia Magaña. El organismo informa mediante un comunicado que su personal ya ofreció acompañamiento legal y psicológico a las personas afectadas por el operativo, realizado supuestamente en busca de armas, y subraya que la acción de los cuerpos de seguridad contra el crimen no pueden realizarse vulnerando los derechos de las personas. Un día después de las vejaciones cometidas contra Bartolomé y Magaña, la CNDH manifiesta su preocupación por el “alarmante” número de allanamientos ilegales que ocurren en el país. La recomendación general, publicada en el Diario Oficial de la Federación, está dirigida a los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Seguridad Pública, así como de la PGR, y en ella se solicita que se lleven a cabo las reformas legislativas necesarias para tipificar como delito los cateos domiciliarios sin la orden correspondiente.

En Cuernavaca, Héctor Sánchez exige que autoridades civiles juzguen no sólo a los dos militares detenidos por la muerte de su hijo, Jethro Ramsés Sánchez Santana, sino a todos los implicados en la detención arbitraria, tortura, desaparición forzada y homicidio del joven. Sánchez lee un pronunciamiento en la funeraria Hispano Mexicana, donde por la noche recibe el cuerpo de su hijo, quien el pasado primero de mayo fue aprehendido en la feria de la ciudad por policías municipales, los cuales lo entregaron a agentes federales y éstos a militares de la 24 Zona Militar. Tres meses y 11 días después de que desapareció su hijo, Héctor Sánchez demanda que se limpien el nombre y la memoria de Jethro, porque los policías locales y federales, además de los soldados, lo acusaron sin fundamento de pertenecer a un grupo delictivo “para justificar su abuso de autoridad”.

En Querétaro, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emite una recomendación a la presidencia municipal de Peñamiller para inhabilitar del cargo a seis policías por violaciones a los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica en agravio de dos menores de edad, uno de los cuales murió el 16 de enero del presente año. La recomendación se deriva de la queja presentada el 4 de febrero pasado por Ascensión Trejo Serrano, padre del joven fallecido. La dependencia informa que comprobó que los policías detuvieron ilegalmente y agredieron físicamente a Daniel, de 16 años de edad, pues aquel día presuntamente insultó a uno de los policías, luego de que el joven salía de un baile al filo de las tres horas en la comunidad de Peña Blanca.

En Oaxaca, Alejandro Solalinde Guerra –coordinador de la Pastoral de la Movilidad Humana de la Zona Pacífico Sur del Episcopado Mexicano– visita el campamento de desplazados del municipio autónomo de San Juan Copala, establecido en el portal del palacio de gobierno, para expresar su solidaridad con los manifestantes. “Esta situación me impacta muchísimo, me da mucha pena; es parte del México fragmentado y me duele doblemente, pues por ser indígenas y mujeres no se les

escucha”, afirma durante su visita efectuada la noche del jueves 11. Ante mujeres y niños de esa comunidad, quienes cumplen un año acampados allí, el religioso sostiene que si en las manos de las mujeres, y sobre todo de las indígenas, estuviera la solución de los problemas de Oaxaca y México se avanzaría más rápido.

Integrantes de pueblos, barrios y colonias en defensa de Azcapotzalco denuncian que por la mañana “decenas de granaderos y policías se presentaron” en los “dos puntos permanentes de revisión” que instalaron hace más de dos meses en el pueblo de Santa Bárbara para evitar la circulación de camiones de carga. Adriana Vallejo, habitante de la zona, explica que las unidades pretenden acceder al predio donde se construye la Arena Ciudad de México “sin respetar” la manifestación de impacto urbano, la cual señala que para “el tránsito de camiones de carga se contará con una cuadrilla para organizar el movimiento vial en los accesos y salidas, los que deberán realizarse por avenida Granjas”.

Sábado 13

La CDHDF tiene documentado que fueron más de tres las casas cateadas en la ciudad de México durante el operativo realizado por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) para capturar a Óscar García Montoya, de la organización criminal conocida como “la mano con ojos”, que resultaron “ser más graves y violentos” que los efectuados en la colonia Torres de Padierna, así como informa el primer visitador del organismo, Mario Patrón Sánchez. “Todavía no llegamos a 10, pero son bastantes más”, expresa el integrante de la comisión, quien se niega a dar detalles sobre lo ocurrido a petición de los afectados, aunque, así como apunta, se trata de familias en situación de vulnerabilidad, que “no han tenido el trato dado” al poeta Efraín Bartolomé, la investigadora de la UNAM Patricia Magaña y la madre de esta última, Victoria Rueda.

Aun cuando la PGJEM se comprometió a resarcir los daños ocasionados y devolver los objetos robados por policías estatales que irrumpieron en su casa la madrugada del jueves 11, el poeta Efraín Bartolomé demanda que sean castigados los agentes que participaron en esa acción, por lo cual, asegura, no desistirá de la denuncia penal que interpuso por esos hechos. El escritor comenta que fue el procurador mexiquense quien se empeñó en dejarle “en prenda” su reloj, marca *Mont Blanc*, como prueba de que devolverá o pagará los objetos robados del domicilio. “Fue él quien insistió y lo dejó sobre el escritorio a pesar de nuestra negativa”, explica.

Domingo 14

En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, más de mil tzotziles llegan a la cárcel de San Juan Chamula y liberan al dirigente de la Coordinadora de Organizaciones en Defensa de los Indígenas, Campesinos y Evangélicos de Chiapas (CODICEH), Narciso Lunes Hernández, encerrado horas antes por orden del alcalde priísta Dagoberto Hernández Gómez, quien lo acusó de hacer proselitismo político. En el incidente, ocurrido el sábado 13, unos 15 vehículos fueron dañados, al menos 10 indígenas resultaron lesionados y cinco requirieron hospitalización, pero cuatro fueron dados de alta y sólo uno seguía internado con traumatismo craneoencefálico, según informa el propio Lunes Hernández.

Lunes 15

La JBG El camino del futuro, del *Caracol* zapatista de La Garrucha, Chiapas, denuncia ataques armados de grupos de la Organización Regional de Cafecultores de Ocosingo (ORCAO), a

quienes describe como paramilitares que cuentan con el respaldo de las policías estatal y municipal. Los agresores proceden de los ejidos Guadalupe Victoria y Las Conchitas, Ocosingo, así como de Pojcol, Chilón, que han intentado invadir tierras de las bases de apoyo del EZLN del municipio autónomo Francisco Villa. El pasado día 14, doce grupos organizados y armados de la ORCAO agredieron a tiros a campesinos tzeltales que se dirigían a realizar trabajos colectivos en sus tierras recuperadas. “Hombres y mujeres orcaístas de Guadalupe Victoria impidieron el paso de nuestros compañeros amenazando con quemar el vehículo con todas las pertenencias que llevaban”, informa la JBG.

“No se puede aceptar de ninguna manera que por más importante que sea el golpe que se da a la delincuencia organizada se pase por encima de los derechos de las personas. No encontramos ninguna justificación para ello”, asegura el titular de la CDHDF, Luis González Placencia. Subraya que hasta el momento se han identificado otros ocho domicilios, además del de Efraín Bartolomé, en los que hubo allanamientos, robos y violencia física contra sus habitantes, durante el operativo del jueves 11, cuando fue detenido el líder de la banda criminal conocida como “la mano con ojos”. El ombudsman capitalino dice que estos operativos, que son investigados por el organismo, revelan también la ineficacia con la que actúan las policías: “es como querer cazar moscas con escopetas”.

Martes 16

En Tultitlan, Josefina y María Luisa dejaron sus casas e hijos abandonados, al ser detenidas por prestar apoyo a migrantes que llegan a Lechería. Son acusadas de tráfico de indocumentados y lavado de dinero, así como señala un numeroso grupo de mujeres, vecinas y familiares que afirman la inocencia de ambas: “el único pecado que cometieron fue abrir la puerta de su casa”. Han pasado seis meses de “una detención ilegal, su casa ubicada en el número 53 de la avenida 11 de Julio en Lechería, y la orden de cateo de los agentes de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada [SIEDO] traía una dirección de San Francisco Chilpa”, señala Guadalupe Anaya, hermana e hija de las detenidas. Josefina Vela Torres, de 53 años, vecina de Lechería, abrió su casa a los migrantes que llegan sedientos, con hambre y lesiones luego de recorrer más de 2 mil kms. desde Centroamérica, por eso fue acusada de “tráfico de indocumentados” al igual que su hija María Luisa Ayala, quien en el momento del cateo se encontraba con su madre.

Miércoles 17

El poeta Javier Sicilia exige a la Cámara de Diputados detener la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional, pues asegura que mantenerla perpetuará la guerra declarada por Felipe Calderón contra el crimen organizado, y pide no sólo sustituirla por una legislación de seguridad humana y ciudadana “que nos conduzca a la paz”, sino convocar a las fuerzas armadas “a un diálogo profundo y constructivo”. Y pregunta a los legisladores: “¿Qué están esperando para detener la guerra? Una guerra tan dolorosa para los mexicanos, que nos la ha impuesto Estados Unidos con su hipócrita puritanismo prohibicionista, su adicción masiva al consumo de drogas, su próspera industria armamentista y su gusto por la guerra”.

La Cámara de Diputados y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad acuerdan constituir un grupo técnico de trabajo que revise el estado de las iniciativas y minutas en materia de Ley de Seguridad Nacional, de reforma política y contra el lavado de dinero, para determinar cuáles son viables de aprobación. El grupo determinará si es posible modificar dicha ley, pero de entrada el Movimiento por la Paz define que deben buscarse los mecanismos necesarios “para no legitimar un entendimiento de la construcción de una cultura de la guerra”. Después de una reunión de más de

cuatro horas, en nombre del movimiento, el ex ombudsman capitalino Emilio Álvarez Icaza hace un resumen de los cinco acuerdos logrados con los diputados, y dice que entre éstos se solicitó al PAN requerir al ejecutivo que incluya, en su propuesta de paquete económico, una partida específica de atención a víctimas, para solventar las debilidades de la procuración de justicia y de apoyo a los jóvenes con una política de Estado.

Jueves 18

Estudiantes universitarios e integrantes de la Coordinadora Metropolitana contra la Militarización y la Violencia (COMECOM) demandan la salida del ejército de las labores de seguridad pública, rechazan la minuta de Ley de Seguridad Nacional que se analiza en el Congreso y convocan al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad –encabezado por el poeta Javier Sicilia– a confiar en que sólo la movilización independiente permitirá terminar la guerra contra el narcotráfico emprendida por el gobierno de Felipe Calderón. Unos 50 estudiantes de la UNAM, normalistas, integrantes de colectivos sociales y de la COMECOM realizan una marcha por Ciudad Universitaria, la cual termina con un mitin frente a la torre de Rectoría, donde demandan un cambio en la estrategia gubernamental que ha dejado un saldo de 50 mil muertos, 10 mil desaparecidos y miles de desplazados. “Los muertos los pone el pueblo”, señalan.

A unas horas de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) se comprometiera con padres de familia a cancelar el cierre de la escuela secundaria diurna número 46 José Vasconcelos, personal de la dirección operativa de la dependencia federal acuerda las adecuaciones que se realizarán para levantar las aulas provisionales con personal de la delegación Cuauhtémoc y directivos de la secundaria número 28, donde se prevé reubicar a los estudiantes. Los padres, que han emprendido una lucha ciudadana en defensa de su escuela, al descubrir el engaño señalan que la información obtenida en el encuentro del pasado miércoles 17 con los funcionarios de la SEP Octavio Oliva, coordinador de asuntos jurídicos, Guillermo Ayala, de vinculación interinstitucional, y Ramón Castro Chávez, coordinador sectorial de secundarias, fue que “no se daría la reubicación de los alumnos y seguirían en la [secundaria] 46”, localizada en la calle de Sabino número 135, en la colonia Santa María la Ribera. Días antes de que concluyera el ciclo escolar 2010-2011 estudiantes y padres de familia fueron notificados del cierre del plantel para el próximo año escolar. El argumento fue que el dueño del inmueble solicitaba su desocupación.

Viernes 19

Organizaciones defensoras de derechos humanos exigen a los gobiernos federal y del Estado de México esclarecer el crimen del ciudadano guatemalteco Julio Fernando Cardona, de 19 años de edad, asesinado el pasado 7 de agosto en la zona de vías de Lechería, en Tultitlán, y quien fue detenido previamente por policías municipales. En conferencia de prensa realizada en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), ubicado en el Distrito Federal, los defensores de derechos humanos plantean que ambos gobiernos presenten estrategias que promuevan los derechos de los migrantes para evitar agresiones. Nancy Pérez, de Sin Fronteras, aseguró que la recién aprobada Ley de Migración en nuestro país en principio habla de derechos humanos de los migrantes, pero en el fondo busca la manera de evitar su ingreso a nuestro país y la forma de castigarlos. Agrega que 80% del flujo migratorio son personas que no acreditan su estancia legal en México y es necesario que los organismos defensores de derechos humanos participen en la elaboración de la nueva Ley de Migración.

Sábado 20

En Saltillo, Coahuila, los Zetas esperan como buitres la salida de los migrantes centroamericanos para secuestrarlos. Están de cacería, colocados sin disimulo a pocos metros de la entrada de la posada Belén, un refugio rodeado de halcones a sueldo que informan puntualmente los movimientos de las posibles víctimas. Cada migrante vale de 2 mil a 4 mil dólares. Son “presas” indefensas, sin protección, ni documentos; son el botín de delincuentes y autoridades. “Estamos en territorio muerte, territorio zeta”, dice de entrada el sacerdote jesuita Pedro Pantoja Arreola, fundador de la Casa del Migrante. De nada sirvieron las órdenes reiteradas de medidas cautelares, los llamados del Alto Comisionado de la ONU o la CIDH; tampoco las denuncias de la CNDH o la nueva Ley de Migración; mucho menos la propaganda oficial de Lupe Esparza y el grupo Bronco. Nada se ha cumplido. El hostigamiento, las amenazas, los ataques y la persecución contra los migrantes y quienes les apoyan continúan. Peor aún, la connivencia entre delincuentes, policías y el gobierno del priísta Jorge Torres López es cada vez más evidente. Y la indiferencia de las autoridades federales, un aliciente que invita al delito. “Hay cosas sospechosas. Todo mundo sabe. Hay una complicidad en este régimen de Estado; la hay, si no cómo puede funcionar el crimen organizado. Nadie dice nada, pero el mensaje es claro: hagan lo que hagan, nosotros vamos a seguir abasteciéndonos de migrantes”, comenta el padre Pedro, quien lleva 20 años trabajando con los viajeros.

En Huehuetoca, la oficina de la CNDH en Tamaulipas turna a su similar del estado de México dos quejas iniciadas en mayo pasado por migrantes centroamericanos, contra policías de Huehuetoca que los obligaron a desnudarse y atracaron, amenazando con entregarlos a bandas de secuestradores. Mauro Francisco Vega Román, defensor humanitario del ayuntamiento de Huehuetoca, dice que la policía del municipio es investigada por los presuntos delitos de abuso de autoridad y robo cometidos contra los indocumentados. De hecho, refiere también que residentes de Huehuetoca solicitaron a los medios de comunicación investigar los abusos cometidos por la policía local contra los migrantes que llegan a la llamada zona de El Basurero y las inmediaciones del panteón municipal, contiguos a las vías férreas de la empresa *Kansas City Southern* de México, cuyos trenes usan para trasladarse a la frontera con Estados Unidos.

En Chihuahua, dos mujeres son asesinadas lo que incrementa a 15 el número de feminicidios cometidos en la entidad a partir del pasado día 4, según cifras del Centro de Derechos Humanos de la Mujer, AC. La directora de esa organización no gubernamental, Luz Estela Castro, apremia a las autoridades estatales y federales y a las comisiones nacional y estatal de derechos humanos a declarar la alerta de género en Chihuahua. Los dos feminicidios se cometieron en la madrugada, cuando las jóvenes, que caminaban por la calle Venceremos y 17, colonia Comité de Defensa Popular, en el norte de la ciudad, fueron alcanzadas por los ocupantes de un vehículo. Aunque corrieron en busca de refugio, recibieron disparos de armas de grueso calibre y cayeron muertas. Las víctimas no han sido identificadas por las autoridades. En otro sector de la capital estatal, una tercera mujer recibió varios disparos que la dejaron herida, por lo que fue trasladada a un hospital. La ola de ataques más recientes contra el género femenino comenzó el 4 de agosto, cuando una mujer fue asesinada a golpes y violada en las inmediaciones de un parque infantil. Entre el 5 y el 8 del mismo mes, dos mujeres resultaron acribilladas y dos más murieron en un restaurante, todas en la ciudad de Chihuahua.

Las constantes violaciones a los derechos humanos cometidas por cuerpos policiacos federales y estatales, que irrumpen en domicilios particulares sin orden judicial, prueban que el Senado tuvo razón al oponerse a que se legalizara dicha práctica, la cual el presidente Felipe Calderón pretendía incluir en la reforma penal de 2007 y en la Ley de Seguridad Nacional, así como coinciden en expresar los senadores priístas Francisco Labastida y Pedro Joaquín Coldwell, y el ex perredista René Arce. Labastida expone que la minuta sobre la Ley de Seguridad Nacional que salió del

Senado eliminó la facultad al ejército para catear casas y retener personas más allá de 72 horas, como se proponía en la iniciativa presidencial, y así debe mantenerse. Por fortuna, agrega, diputados y senadores van a dictaminar conjuntamente la minuta, a fin de lograr consensos y entregar una ley que proporcione a las fuerzas armadas el marco jurídico para realizar tareas de seguridad pública, y al mismo tiempo preserve las libertades y los derechos constitucionales de los mexicanos. Por su parte, el senador Pedro Joaquín Coldwell, presidente de la comisión de puntos constitucionales, recuerda que cuando se dictaminó la reforma constitucional sobre seguridad pública y justicia penal, hubo un fuerte debate en torno a permitir que la policía realizara cateos e intervenciones telefónicas sin orden judicial.

La JBG Arcoíris de la esperanza, del *Caracol* zapatista Morelia, denuncia que el pasado día 17 en la comunidad Patria Nueva, región Primero de Enero, municipio autónomo Lucio Cabañas, Chiapas, la ORCAO cometió nuevas agresiones, cuando unas 150 personas destruyeron una casa de las bases de apoyo del EZLN que servía de cocina para los campamentistas y observadores civiles. La agresión fue dirigida por los representantes locales de ORCAO Cristóbal Gómez López, El Saddam, y Manuel Bautista Moshan, “el Empresario”, a su vez coordinados por los dirigentes Antonio Juárez Cruz, Alejandro Gómez Navarro y Carlos Ramírez Gómez, y asesorados por Nicolás López Gómez, “el Tzirin”, Juan Vázquez López y José Pérez Gómez. La JBG sostiene: “el coraje de los tres niveles del mal gobierno es porque no quieren que se difundan sus mañas, por eso organiza gente ignorante [para] inyectar sus proyectos de muerte en nuestros territorios autónomos, donde también estamos gobernando a nuestra manera, tal como el pueblo lo queremos. No luchamos obligados o en la manipulación, como estos representantes locales, regionales, asesores y los supuestos gobernantes federal, estatal y municipal, donde lo tiene bajo presión y amenaza a la pobre gente, obligándola a recibir miserables proyectos y hacer provocaciones”. Señala que la ORCAO amenaza con expulsar “a quienes no cumplen con las indicaciones de provocar en territorio zapatista”.

En Chilpancingo, de las 7 hrs. a la medianoche del domingo 21, la Policía Comunitaria desplegará a sus aproximadamente 700 integrantes en carreteras, caminos y veredas, así como a la entrada y salida de las 63 comunidades de 10 municipios de la Costa Chica y la región de la Montaña, para informar del inicio de la lucha contra las empresas mineras canadienses e inglesas que pretenden explotar yacimientos de oro y plata, entre otros metales, sin el consentimiento de los pueblos indígenas. Así lo informa Valentín Hernández, asesor jurídico del grupo de autodefensa conocido también como Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), quien en entrevista telefónica afirma que los policías comunitarios instalarán retenes y repartirán volantes mediante los cuales informarán de los avances de la lucha contra las compañías mineras. Recuerda que esas empresas extranjeras pretenden explotar yacimientos en un área de 500 kms. a partir de concesiones que les fueron otorgadas por el gobierno federal en los municipios de San Luis Acatlán, Malinaltepec, Tlacoapa, Zapotitlán Tablas, Iliatenco y Metlatónoc, principalmente. Trasciende que este año iniciará la explotación en tres puntos: uno, por la empresa inglesa *Hochschild Mining* y su filial Minera Zalamera. Ésta explotaría 47 mil has. otorgadas a nombre de proyecto “Corazón de Tinieblas”, en áreas específicas de los municipios de La Montaña y Costa Chica.

En Culiacán, el presidente del comisariado ejidal del poblado Ocoroni, municipio de Sinaloa, Juan Manuel López Bernal, quien el mes pasado encabezó movilizaciones de campesinos en demanda del pago de tierras que les fueron expropiadas, es localizado muerto con lesiones de bala y huellas de tortura, así como informa la Policía Ministerial del Estado. Sus familiares indican que hombres armados lo interceptaron el viernes 19 cuando circulaba en un vehículo con su familia por la carretera Estación Naranjo-Guasave. Los homicidas dejaron libres a su esposa y a sus tres hijos y a él se lo llevaron. El cadáver fue encontrado alrededor de las 6 hrs. de este sábado en la carretera Benito Juárez, cerca del poblado Tesitos, municipio de Angostura. A mediados de junio, ejidatarios de Ocoroni bloquearon la carretera México 15, municipio de Guasave, en demanda de que se les otorgara indemnización de más de 500 millones de pesos por 7.500 has. que les fueron expropiadas

por el gobierno federal para la construcción de la presa Guillermo Blake. Esta lucha ejidal involucra a cerca de 21 ejidos de la región, entre ellas Genaro Estrada y El Caimán.

En Acapulco, en cumplimiento a la orden girada por la CIDH, la PGR anuncia que a finales de octubre o principios de noviembre realizará la tercera búsqueda de los restos de Rosendo Radilla Pacheco, militante desaparecido durante la llamada *guerra sucia* de los años 70 en Guerrero. La dependencia encontró 18 anomalías en la segunda búsqueda hecha durante mayo en la ex zona militar de Atoyac de Álvarez, donde un georadar y un resistivímetro detectaron inconsistencias del subsuelo que aún deben examinarse.

Domingo 21

Marco Tulio López Escamilla, secretario de SSP de Oaxaca, presenta una denuncia penal en contra de los “alborotadores profesionales” que se escudan en el movimiento de desplazados del Municipio Autónomo de San Juan Copala (MASJC), “encargados de gritar consignas y confrontar a la policía sin siquiera ser originarios de Oaxaca [...] son extranjeros y activistas que pervierten y vuelven contestatario [al movimiento de los triquis] y que ahora se está a la espera [de] la liberación de las órdenes de aprehensión”. Esta es la respuesta por velar en el palacio de gobierno los tres muertos del MASJC el 5 de agosto de 2011. Dos días después se ordenó un operativo para retirar los cuerpos y el plantón; al regreso del cortejo que puso los cuerpos en el transporte para el sepelio en Agua Fría se trató de impedir que entrara al campamento golpeando y empujando incluso a mujeres y niños. El plantón tiene un año pidiendo justicia, desarme de paramilitares y regreso de desplazados a San Juan Copala. El gobierno muestra su incapacidad para resolver un conflicto que ha provocado la muerte de 25 integrantes del MASJC, asesinados por los paramilitares del MULT-PUP y Ubisort-PRI, que actúan coordinados y con apoyo económico del erario.

La CNDH informa que inició una queja de oficio por la balacera que ocurrió en el exterior del estadio de fútbol de Torreón, Coahuila. Personal de la oficina de ese órgano en la ciudad coahuilense, al conocer de los hechos, de inmediato se trasladó al estadio para verificar la existencia de víctimas y agraviados, con el objetivo de ofrecerles, en caso requerido, atención médica y psicológica de urgencia, orientación jurídica y “acompañamiento”. Se resaltó, por medio de un comunicado de prensa, que la oficina de la CNDH en Torreón se ubica en la calle Eulogio Ortiz número 32, colonia Ampliación Los Ángeles, asimismo, solicita que cualquier persona que haya sido víctima de un delito o violación a sus derechos humanos acuda o llame a esa oficina. La CNDH apunta que los índices de inseguridad que imperan en el país obligan a los servidores públicos encargados de cumplir y hacer cumplir la ley a llevar a cabo acciones preventivas que protejan a la sociedad y eviten exponerla a cualquier acto de violencia.

En Chilpancingo, la CRAC-Policía Comunitaria informa a indígenas de las regiones de la Costa Chica y la Montaña que empresas canadienses e inglesas pretenden explotar a cielo abierto, sin consentimiento de los pobladores, yacimientos de oro, plata, zinc y otros metales, así como da a conocer Pablo Guzmán Hernández, uno de los diez coordinadores de la CRAC. Vía telefónica, aclara que en este movimiento no sólo participa la Policía Comunitaria, sino también más de 100 comunidades que no se rigen por los lineamientos de la CRAC, pero “se oponen a que se destruya su entorno, su historia y su futuro”. Señala que hubo alrededor de 15 puntos de concentración, desde el municipio de Tlapa, en la Montaña alta, hasta Marquelia, en la Costa Chica, además de las tres casas de justicia ubicadas en Zitlaltepec, municipio de Metlatónoc, Espino Blanco, en Malinaltepec, y en la cabecera municipal de San Luis Acatlán, donde se instalaron “retenes informativos” para alertar a pobladores y transeúntes.

En Guanajuato, un joven que fue torturado para que se incriminara por el robo de 300 mil pesos a Raquel Barajas Monjarás, magistrada del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), es declarado inocente después de permanecer preso once meses y haber sido sentenciado a pasar once años y seis meses en el penal de Puentecillas, en esta capital. El 11 septiembre de 2010, Manuel Medina Ibarra, de 26 años, fue retenido por policías ministeriales para que declarara como testigo de un robo a la casa de Raquel Bajaras. Después de permanecer incomunicado nueve horas y de ser torturado, se declaró culpable. El juez de la primera sala penal, José Luis Molina, lo sentenció a pesar de que la declaración sobre la forma en que ocurrió el robo era inconsistente y fue obtenida a golpes, así como denuncia el abogado Héctor Ponce Ramírez. Además, el día del robo Medina Ibarra se encontraba en su trabajo. El magistrado Rubén Lara López determinó liberarlo porque su confesión era “ambigua, incompleta, increíble y, por lo tanto, inatendible”. El 12 de agosto Manuel Medina fue liberado y su abogado analiza pedir la reparación del daño, pues “ni siquiera le dijeron ‘la regamos, discúlpenos’”. En la declaración preparatoria del proceso penal 142/2010, el acusado reveló ante el juez primero penal que lo golpearon y obligaron para que dijera que tenía qué ver con el robo; además “no le permitieron comunicarse con ninguna persona durante el tiempo que estuvo privado de la libertad. Le cubrieron la cabeza con su playera y una bolsa de plástico, y dentro de la bolsa le arrojaban humo de cigarro, y lo pateaban en el cuello y el pecho”. Según el expediente 195/2011 de la apelación ante el magistrado Rubén Lara “la declaración le fue arrancada mediante violencia física y durante el tiempo que fue presentado ante el Ministerio Público estuvo incomunicado”.

Lunes 22

En Guadalajara, alrededor de 100 habitantes de las comunidades Temacapulín, Acasico y Palmarejo, en el municipio de Cañadas de Obregón, ubicado en los Altos de Jalisco, culminan en el centro de Guadalajara la Caravana por la Paz y el Agua que partió el sábado de Temacapulín, para exigir al gobierno estatal que detenga la construcción de la presa El Zapotillo. “¡Temaca vive, la lucha sigue y sigue!”, gritaron los afectados, entre otras consignas, por las calles de la capital de Jalisco. El grupo pernoctó el sábado 20 en Tepatitlán, y este lunes 22 llegó a la zona metropolitana, donde realizó un recorrido desde la glorieta de los Niños Héroe hacia el palacio de gobierno, en el primer cuadro de la ciudad. “¡Emilio, entiende, Temaca no se vende!” reclaman los pobladores al gobernador Emilio González Márquez. Temacapulín, Acasico y Palmarejo serán inundados por la presa El Zapotillo, que dotará de agua principalmente al vecino estado de Guanajuato. “Emilio, eres un cobarde. Lástima que seas alteño como los de Temaca”, grita por un altavoz Alfonso Íñiguez, habitante de Temacapulín. El anciano reprocha que el mandatario panista dé prioridad a los Juegos Panamericanos que se realizarán en octubre en Guadalajara, en lugar de atender los problemas sociales de la entidad. A las puertas del palacio de gobierno, los afectados leen una carta que les envió Javier Sicilia, quien anunció estar presente en la marcha del sábado, pero no acudió.

El costo de casi un millón de pesos por obtener copias simples del expediente del caso *News Divine* es un obstáculo material al derecho a la justicia para los familiares de las víctimas, así como asegura el presidente de la CDHDF, Luis González Placencia. Por ello, el organismo apelará a la sensibilidad del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) para que encuentre algún mecanismo que resuelva esa situación, ya que se trata de víctimas del propio Estado. En caso de que los afectados presenten una queja al respecto, se investigará la situación para encontrar una solución, así como asegura González Placencia al término de la inauguración del encuentro “Defender los derechos humanos: camino hacia un diagnóstico sobre las personas defensoras en el DF”. Agrega que, aunque el costo de cada copia es una medida fijada por el TSJDF para todas las personas, se deberían encontrar mecanismos que permitan el acceso pleno a la información que es parte de sus procesos.

Martes 23

El pasado 21 de junio Venancio Vázquez, comisario ejidal de la comunidad de Chilacachapa, Guerrero, se dirigió a la cabecera municipal en Cuetzala para solicitar al presidente que proporcionara a los campesinos el herbicida que les corresponde para la siembra de maíz en la presente temporada. El alcalde, en lugar de atender su petición, ordenó a la policía municipal y a la policía estatal que lo detuvieran, y éstos, con lujo de violencia, se lo llevaron, golpeándolo en reiteradas ocasiones. Esto sucedió aproximadamente a las 19 hrs. del día señalado y, hasta el momento, Venancio Vázquez continúa preso. “Exigimos que se libere de manera inmediata e incondicional al compañero Venancio, y que se dote del herbicida a los campesinos de Chilacachapa, pues es su derecho” piden el Comité de Campesinos de Chilacachapa, la Organización Pedagógica Radical y la Organización Popular Revolucionaria.

En Cuernavaca, desde el pasado fin de semana, familiares y amigos que buscan a Yadira Dávila fijan en calles de la capital morelense volantes con la foto y datos de la investigadora del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, desaparecida el pasado 5 de agosto cuando fue a la Plaza Comercial Cuernavaca. Sin embargo, muchos de los avisos fueron arrancados por trabajadores del ayuntamiento. Por su parte, las autoridades ministeriales no tienen viso alguno de su paradero. Mientras, en el caso de la joven Elena Libertad García García, asesinada el 24 de agosto del año pasado, su padre denunció a la Procuraduría de Justicia estatal por no avanzar en la pesquisa, y recuerda ahora en conferencia de prensa que varios militares alteraron la escena del crimen al irrumpir en su negocio de Temixco, pero ahora niegan su presencia en el lugar de los hechos.

El procurador de justicia de Chihuahua, Carlos Manuel Salas, informa que en su entidad la violencia contra las mujeres va en aumento, y tan sólo en lo que va del presente año 222 han sido asesinadas en la entidad. En tanto, la presidenta de la Comisión Especial de Femicidios, Teresa Incháustegui, expone que entre 2007 y 2009 la cifra de homicidios de mujeres en el país aumentó 71 %, al pasar de 1.085 a 1.858 casos, y 10 % de éstos se cometieron contra niñas y adolescentes. Frente a una condición como la descrita, insiste Incháustegui, será necesario implementar una alerta de género, con el propósito de emprender acciones que permitan combatir la problemática. Se busca, considera, tener mayor conocimiento de los hechos, y más previsión sobre los alcances reales de las acciones que se implementan para mejorar el servicio de investigación.

En San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, la organización de la sociedad civil Las Abejas informa que se une al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que encabeza el poeta Javier Sicilia, y a quienes se oponen a la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional, porque “no estamos de acuerdo con lo que propuso el presidente Felipe Calderón para seguir con su estrategia de guerra. Lo que quiere es que no exijamos cuentas a él y al Ejército”. La agrupación llama a todos los ciudadanos a estar conscientes del peligro que representa para México esa norma y los exhorta a que “se movilicen para detenerla”, porque diputados y senadores “sólo esperan ver cómo engañan o cómo duermen al pueblo para aprobarla”.

La asamblea de ejidatarios de Tila, Chiapas, denuncia el intento de despojo de tierras por parte de autoridades gubernamentales y demanda el retiro del actual párroco, el controvertido sacerdote católico Heriberto Cruz Vera, “a quien el gobierno federal, estatal y municipal utilizan para engañar y manipular a la población, para despojarnos de nuestra tierra”. Añaden que ésta “no tiene precio, no es mercancía para proyectos ‘ecoturísticos’ o de supuesto ‘desarrollo’, y sólo la máxima autoridad del pueblo chol de Tila, que es la asamblea general, puede determinar el uso y destino [de sus 5.405 has] el ejido tiene más de 30 años luchando en la defensa y cuidado de la madre tierra contra la discriminación y racismo del mal gobierno municipal, estatal y federal”. Sus fundadores caminaron por el monte para llegar a Tuxtla Gutiérrez y la ciudad de México, pasando frío y hambre para obtener la resolución presidencial y el plano definitivo. Estos documentos, añaden los

ejidatarios, “representan la libertad de nuestro pueblo que vivió esclavo en la época de la colonia con la invasión de los españoles y después trabajando en las fincas de extranjeros”. Sólo después de la “revolución de Emiliano Zapata” se reconoce “que la tierra es para el indígena, porque es mero originario de las tierras que ocupa”, que son “de quien las trabaja”, y por tanto no se venden ni se indemnizan.

En Rosario, Sinaloa, militares, policías federales y elementos de seguridad privada desalojan a unos 150 campesinos de la comunidad indígena totorame de San Pedro Chiametla, municipio de Escuinapa, que ocupaban el predio El Zacatillo y disputan su propiedad al Fondo Nacional de Turismo (FONATUR), que lo compró al ex gobernador Antonio Toledo Corro para la construcción de un centro integralmente planeado. El dirigente Óscar Fortunato Crespo Nava denuncia que más de 100 policías y personal del FONATUR llegaron con maquinaria pesada y a bordo de unos ocho camiones del gobierno federal para empezar a destruir las cabañas y el mobiliario que los demandantes instalaron hace dos años para vigilar los terrenos en litigio.

En Colima, por unanimidad, el congreso del estado aprueba modificar el Código Penal para tipificar el feminicidio. La iniciativa es presentada por la diputada panista Patricia Lugo Barriga, quien informa que Colima ocupa el tercer lugar nacional en violencia contra mujeres en relaciones de pareja y se encuentra entre las 10 entidades donde se perpetran más asesinatos de mujeres por violencia intrafamiliar. Explica que las reformas incrementan la pena máxima hasta 70 años e incluyen seguimiento a la investigación de crímenes, atención a víctimas y capacitación a los agentes del Ministerio Público.

La delegación Tlalpan del Distrito Federal informa que como resultado de la instalación de “una mesa de diálogo y negociación con tianguistas” se concreta la “liberación de un importante tramo de la ciclovía” que pasa por las colonias Cultura Maya y Belvedere, en la zona media del Ajusco. Hace poco más de un mes, en esa misma zona, una persona falleció al ocurrir un deslave provocado por las lluvias. En la gestión anterior del Distrito Federal se construyó la ciclopista en lo que fue el derecho de vía del ferrocarril a Cuernavaca. En el tramo correspondiente a la delegación Tlalpan y Magdalena Contreras la ciclovía se encuentra en pendiente, y en algunas partes la pista está rodeada de terrenos sin pavimentar. Desde hace varios años, cientos de comerciantes utilizaron parte de la ciclovía para instalar sus puestos los sábados y domingos. La concentración, ubicada en las colonias Cultura Maya y Belvedere, se extendía alrededor de cuatro kms. De acuerdo con las autoridades, “participaban más de mil comerciantes que estaban congregados en ocho organizaciones”.

Comuneros de Milpa Alta solicitan a las autoridades vigilar aserraderos y poner mayor atención en las zonas de conservación ecológica y áreas de la montaña para evitar el ingreso de personas ajenas a la comunidad que intenten realizar trabajos para la construcción del Arco Sur y el saqueo de madera. Esta vez los ancianos de la zona salen a defender los bosques y se suman a los trabajos de reforestación de la montaña, con lo que, según dicen, ayudarán a la vigilancia. “Debemos defender los montes que nos dan aire y agua, porque si no, ¿qué les vamos a dejar a nuestros hijos, a las futuras generaciones? ¿Un cerro pelón?”, cuestionan. En San Pablo Oztotepec, donde de acuerdo con los planos de la SCT a los que han tenido acceso, se tiene proyectada la vialidad, los comuneros exigen ser consultados, pues su postura es de rechazo total al proyecto. El jefe delegacional, Francisco García, señala que antes de iniciar cualquier obra es necesario preguntar a los pueblos originarios si están de acuerdo, porque “son dueños de las tierras”.

Miércoles 24

En Culiacán, un comando priva de la libertad al periodista Humberto Millán Salazar, director del periódico virtual *A Discusión* y conductor de los noticieros locales de *Radio Fórmula* en Culiacán,

así como informa la PGJE. La dependencia reporta que hombres armados interceptaron al periodista a las seis horas, cuando circulaba cerca de su casa en una camioneta tipo Suburban acompañado de un hermano y, al parecer, se dirigía a la estación de radio donde labora. Cuando los sujetos lo abordaron, Millán Salazar pidió que dejaran ir a su hermano, a lo cual finalmente accedieron. El comunicador fue jefe de prensa durante parte de la administración del ex gobernador Renato Vega Alvarado. También fue director del semanario *A Discusión*, que circuló en esta entidad antes de convertirse en un medio en Internet, y coordinó un programa en *Radio UAS*, del mismo nombre, hasta antes de que concluyera el mandato del ex gobernador Jesús Aguilar Padilla. Durante la mañana, una veintena de periodistas realiza un plantón fuera de las instalaciones de la PGJE en esta capital, en demanda de la liberación de Millán y de que las autoridades agilicen las investigaciones y detengan a los responsables.

Jueves 25

La CNDH informa en un comunicado que abrió un expediente con el fin de apoyar a las víctimas del ataque contra el casino Royale, cometido en Monterrey, Nuevo León. El ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, se comunica con la presidenta de la CEDH, Minerva Martínez Garza, para coordinar acciones de respaldo a los heridos en dicho atentado con el fin de asegurarse de que cuenten con atención médica y psicológica, así como orientación jurídica y acompañamiento. La CNDH, apunta el boletín, hizo un llamado a emprender acciones preventivas que protejan a la sociedad de cualquier acto de violencia, y asegura que estará al pendiente de las acciones que tomen las autoridades para atender a las personas agraviadas por el ataque.

A pesar de la sentencia de la CIDH, el Estado mexicano sigue sin mostrar voluntad política para buscar los restos del luchador social Rosendo Radilla, y únicamente está preocupado por fingir que el tema le preocupa para lavar su imagen en el extranjero, así como señalan defensores de garantías individuales. En el contexto del 37º aniversario de la desaparición del activista guerrerense – ocurrida a manos del ejército el 25 de agosto de 1974–, el secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de los Derechos Humanos en México (AFADEM), Julio Mata Montiel, señala que aunque se ha logrado demostrar la ausencia de justicia en el país, ello no ha sido suficiente para que se encuentren los restos de Radilla.

Jóvenes rechazados del bachillerato que viven en la delegación Iztapalapa, Distrito Federal, rompen copias de sus certificados de secundaria y la constancia de resultados del examen único frente a las oficinas de la SEP, como protesta por haber sido excluidos del sistema de educación pública federal. Los adolescentes manifiestan que de nada sirve tener un certificado que demuestre la terminación y aprovechamiento que obtuvieron en su educación si no pueden continuar su formación académica. “No somos ‘ninis’, sino los excluidos del sistema”, comentan. En la plaza de Santo Domingo hacen añicos los documentos y desahogan la rabia y frustración de varias semanas tirándolos frente a la sede de la SEP.

Viernes 26

En Culiacán, familiares y reporteros protestan durante las exequias del periodista Humberto Millán Salazar –asesinado el pasado jueves en Culiacán– para exigir a las autoridades estatales y federales que este crimen no quede impune y se garanticen condiciones para el ejercicio profesional en la entidad. Antes que el cadáver fuera cremado, se coloca una fotografía con el rostro de Millán y hay gritos a coro: “¡todos somos Humberto!” En la funeraria de Culiacán, Eva Obdulia Beltrán, esposa del comunicador, declara: “él luchó 35 años, por luchar y decir la verdad, 35 años de esfuerzo”. Millán Salazar, director del semanario *A discusión*, fue encontrado muerto en las inmediaciones de

la comunidad Campo Morelia, en el municipio de Culiacán, luego de haber sido levantado por un comando, la mañana del miércoles. En un carta dirigida al presidente Felipe Calderón y al gobernador Mario López Valdez, Malova, las asociaciones Periodistas 7 de Junio y Comunicadoras de Sinaloa señalan que en Sinaloa los reporteros viven en la indefensión, ya que no hay estado de derecho, y las instituciones gubernamentales son omisas o están rebasadas por la delincuencia.

Martín Esparza Flores, secretario general del SME, informa que la CNDH revisará el caso sobre “hostigamiento” de que han sido víctimas los agremiados que se encuentran en plantón en el Zócalo capitalino y frente a la hidroeléctrica Necaxa, así como en Juandhó. Alrededor del mediodía del día 25 el líder se reunió con Raúl Plascencia, titular de la CNDH, quien “se comprometió a analizar el caso para establecer las medidas cautelares solicitadas por el SME”, comenta el líder sindical, quien asegura que Plascencia le dijo que enviará visitadores a las áreas donde “se nos ha reprimido”, particularmente al Zócalo. En entrevista, durante el 30º Congreso General Ordinario del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, Esparza Flores lamenta el “terrorismo de Estado” que, sostiene, ha impuesto el gobierno de Felipe Calderón contra el SME. Comenta que la “ineficacia” de la administración federal y su “estúpida guerra contra el narco” serán expuestas en un contra-informe que será presentado en el Zócalo el próximo primero de septiembre.

En Acapulco, el coordinador regional de la CEDH, Ramón Navarrete Magdaleno, visita a los estudiantes de la UAG que se encuentran en ayuno en el kiosco del zócalo desde el 10 de agosto en demanda de que sean aceptados en carreras relacionadas con la salud. Aunque hasta hoy había más de 30 jóvenes en el campamento, los alumnos dicen que suman ya 162 los solicitantes de un espacio en la máxima casa de estudios de la entidad. La UAG es un organismo autónomo, pues al igual que la CEDH, se rige internamente por el consejo universitario, por lo que la visita tiene carácter solidario y para revisar médicamente a los ayunantes, dice el funcionario. No obstante, comenta: “llegar al ayuno es lamentable; se adquieren padecimientos irreversibles, pero si así lo decidieron no podemos más que apoyarlos” sostiene Juan Alarcón Hernández, presidente de la CEDH, que ha buscado establecer puentes de diálogo para motivar y persuadir a las autoridades universitarias a resolver a favor de los jóvenes.

En Cuernavaca, el abogado de la familia de Jethro Ramsés Sánchez Santana, Cipriano Sotelo Salgado, demanda a la PGR instruir a la delegada de esta dependencia federal para que determine la posible responsabilidad penal de los policías municipales, federales y elementos castrenses que participaron en la detención y asesinato de Sánchez Santana el pasado 1º de mayo. El abogado reitera que solicitaron a la Procuraduría de Justicia Militar detener a todos los militares involucrados en el caso y, de ser necesario, la medida se extienda al comandante de la 24ª Zona Militar, Leopoldo Díaz Pérez.

Integrantes de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ) se manifiestan en las oficinas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), ubicadas en el número 280 de Barranca del Muerto, delegación Álvaro Obregón. Gonzalo Hernández Juárez, de la Coordinación Nacional de Unidades Habitacionales, asegura que el INFONAVIT “ha sido poco sensible”, pues “recurre al ámbito judicial para recuperar casas. Venimos a solicitarle al director general (del INFONAVIT) y al mismo consejo de administración que sean más sensibles ante un sector de trabajadores que se han quedado sin empleo o son madres solteras. El INFONAVIT recurre a la judicialización como vía para recuperar viviendas”. La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal informa que fueron alrededor de 200 personas las que marcharon. La mayor parte de los manifestantes portaban playeras blancas. Hernández asegura que el único objetivo de la UPREZ es apoyar a los ciudadanos: “llevamos ocho años asesorando a los compañeros. No los presionamos para votar”.

Sábado 27

Alrededor de 50 habitantes de Huixquilucan marchan por las calles de Interlomas para pedir a las autoridades paz y tranquilidad en la localidad, en una manifestación convocada por redes sociales. Los colonos incluyen en sus demandas el respeto al uso del suelo y el rechazo a más centros comerciales en la zona, protesta a la que se suman pobladores de la delegación Cuajimalpa del Distrito Federal. Por medio de *Twitter* y *Facebook* se realizó la convocatoria para la concentración, atendida por unas 50 personas que se concentran en el cruce de los bulevares Magno Centro e Interlomas, desde donde caminan a la glorieta del Gato y vuelven al punto de partida. Luis Miguel Dena, presidente de la Asociación de Colonos Jesús del Monte, quien asiste a título personal a la marcha, asegura que la voz ciudadana se elevó para que sea escuchada por los gobiernos federal, estatal y municipal.

Domingo 28

En Cuernavaca, integrantes de la Red por la Paz con Justicia y Dignidad exigen a las autoridades federales detener a todas las personas involucradas en el multihomicidio donde también perdió la vida Juan Francisco Sicilia Ortega, sin excluir los policías, a quienes las autoridades aludieron desde el principio. Al conmemorar el quinto mes transcurrido desde los hechos, demandan “justicia real” ante la ofrenda que se mantiene a las puertas del palacio de gobierno estatal en homenaje a las víctimas, y lamentan que todavía no sean detenidos todos los autores materiales e intelectuales del crimen, donde además de Sicilia Ortega perecieron María del Socorro Estrada, Gabriel Alejo Cadena, Jesús Vázquez Chávez, Álvaro Jaime y Julio César y Luis Antonio Romero Jaime.

En el contexto del Día Internacional del Detenido Desaparecido, que se conmemorará el martes 30, los comités Hermanos Cerezo, Hasta Encontrarlos y Monseñor Romero efectúan en el Zócalo capitalino un festival político musical en el que exigen la presentación de todos los desaparecidos políticos y los que han ocurrido en la lucha contra el crimen organizado. Nadín Reyes, hija de Edmundo Reyes Amaya, quien fue detenido el 25 de mayo de 2007 en Oaxaca, y desde esa fecha se encuentra desaparecido, dice que “este festival político musical es para exigir la presentación de todos los detenidos desaparecidos que hay en el país. Aunque no hay un dato exacto, se habla de que son más de mil los desaparecidos en la denominada *guerra sucia*, ocurrida en los años 70 y principios de los 80 del siglo pasado. La mayor parte de ellos son de Guerrero, pero también los hay de Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Chiapas, entre otros estados.”

El intento de la familia de Digna Ochoa por lograr que la PGJDF investigue como homicidio la muerte de la defensora de los derechos humanos recibió un revés luego de que un juez federal determinó que la dependencia capitalina investigara correctamente el caso. El 14 de marzo de 2011, el Ministerio Público resolvió que Digna Ochoa se suicidó con arma de fuego y que no hubo presencia de un tercero cuando ocurrió la muerte. Sin embargo, la familia de Digna Ochoa consideró que el MP no realizó los peritajes adecuados y que a su parecer había pruebas de que otras personas intervinieron en el deceso, por lo que presentó un amparo ante el juez de distrito, el cual les fue negado. El día 27 se informó que el juez séptimo de distrito de amparo en materia penal en el Distrito Federal resolvió sobreseer y negar el amparo 343/2011, interpuesto por Jesús Ochoa y Plácido y familia, relativo a la autorización definitiva del no ejercicio de la acción penal y su ejecución por los hechos en los que murió Digna Ochoa.

Frente al desdén que ha mostrado el gobierno federal hacia los comuneros y ejidatarios que piden frenar la construcción de la vialidad Arco Sur, el diputado perredista Alejandro Sánchez Camacho da a conocer un plan de acción de resistencia civil pacífica en defensa de los bosques, tierra agrícola y medio ambiente de las delegaciones políticas que resultarían afectadas por esa vialidad. En conferencia de prensa, el también vocero de la mayoría perredista en la Asamblea Legislativa del

Distrito Federal expresa que como parte de esas actividades se buscará el apoyo de las autoridades capitalinas; también presentarán, la próxima semana, una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública en contra del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez Jácome, por “ocultamiento de información”, y realizarán una clausura simbólica de las oficinas principales de esa dependencia. Detalla que en algunas zonas ya se percibe la ubicación de mojoneras que van limitando cuál es el trayecto de esta obra del Arco Sur, situación que ha sido impedida en la delegación Milpa Alta por las autoridades y los representantes comunales.

En Culiacán, los periodistas organizados en Sinaloa reclaman una mayor protección para la familia del director del diario digital *A Discusión* y conductor de un segmento noticioso de *Radio Fórmula*, Humberto Millán Salazar, cuyo cadáver fue encontrado el jueves 25, un día después de haber sido secuestrado en Culiacán por hombres armados. El presidente de la Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de Junio, José Alfredo Beltrán, considera que mientras se mantenga la investigación sobre la muerte del comunicador, su esposa Eva Beltrán Quintero y sus hijos deberán de estar vigilados las 24 horas del día. En las indagaciones del caso, en las que participan fiscales especiales de la PGR en coordinación con la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), el secretario general de Gobierno de Sinaloa, Gerardo Vargas, se presentó el sábado 27 en forma voluntaria a rendir su declaración ante el Ministerio Público. El funcionario admitió que tuvo diferencias con el periodista asesinado, pero que nunca pasaron a más, y dijo que eso puede constatare en las diversas columnas en el que el comunicador se refirió a su persona. Vargas Landeros aseguró estar limpio y tranquilo y en espera que la procuraduría estatal, auxiliada por fiscales federales, lleguen al fondo de la investigación para que, en breve, se conozca el móvil y la identidad de los agresores del periodista victimado.

Lunes 29

En Culiacán, la CEDH turna al ombudsman nacional el expediente del asesinato del periodista Humberto Millán Salazar, director del semanario *A discusión*, y dará seguimiento a las investigaciones para esclarecer este crimen. Juan José Ríos Estavillo, presidente de la CEDH, dice que luego de que el fin de semana un grupo de periodistas interpuso una queja y pidió protección para familiares y compañeros de trabajo del extinto comunicador, el organismo intervino y resolvió dicho asunto ante la PGJE. Sobre el caso, el diputado Cenovio Ruiz Zazueta, líder de la mayoría priísta en el Congreso local, dice que las exigencias de justicia en torno al asesinato del comunicador Humberto Millán Salazar no deben quedar como parte de un “rosario más en la lista de impunidad de hechos que enlutan los hogares sinaloenses”.

El presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, afirma que si la reforma a la Ley de Seguridad Nacional viola la Constitución o presenta vicios, hará uso de su facultad de interponer acciones de inconstitucionalidad para que no entre en vigor. Entrevistado luego de asistir al foro “Legalidad democrática, ética, derechos humanos y seguridad”, el ombudsman considera que las dos cámaras del Congreso de la Unión deben discutir con cuidado el contenido de la reforma, con objeto de generar “un pleno equilibrio entre los derechos de la sociedad, los derechos humanos y las facultades de la autoridad para que pueda luchar contra la delincuencia”. Expone que uno de los puntos más delicados es la declaratoria de afectación a la seguridad interior, y plantea que los diputados y senadores deben trabajar en la prevención del delito y atención a las víctimas.

Martes 30

Amnistía Internacional denuncia el fracaso del plan lanzado hace un año por México para luchar contra el secuestro de “un número alarmante” de centroamericanos que cruzan ese país en su intento

por llegar a Estados Unidos. El plan, anunciado días después de la masacre de 72 indocumentados de Centroamérica, Ecuador y Brasil, en un rancho de Tamaulipas, incluía medidas para prevenir y combatir estos plagios, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estima en alrededor de 20 mil anuales. “A pesar de las afirmaciones del gobierno de que está ocupándose de esa cuestión, no hay pruebas de que la aplicación de esa política ampliamente publicitada haya tenido un impacto”, declara Rupert Knox, investigador especializado en México de la organización establecida en Londres. “El gobierno mexicano debe hacer un informe detallado sobre el impacto de la estrategia y las acciones judiciales y condenas de todos aquellos responsables de abusos contra los migrantes”, agrega. Amnistía afirma haber documentado docenas de casos de secuestro, tortura, violación, asesinato y desaparición de centroamericanos.

La CNDH pide a la Secretaría de Gobernación que otorgue medidas cautelares a los familiares del periodista Humberto Millán Salazar, quien fue encontrado sin vida el pasado 25 de agosto en Culiacán, Sinaloa. Luego de la desaparición y asesinato del director del periódico digital *A Discusión*, sus familiares recibieron mensajes amenazantes, por lo que el organismo urge a las autoridades a que se les brinde protección. Por su parte, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) manifiesta su condena por el asesinato del reportero.

Miércoles 31

El gobierno del presidente Felipe Calderón llega a su quinto año con serios retrocesos en materia de derechos humanos y cuestionado no sólo por organizaciones civiles, sino por amplísimos sectores de la sociedad mexicana que no están dispuestos a permitir que una política pública protagónica en el gobierno, como es la actual, en contra de la delincuencia organizada se convierta en espacio fértil para el abuso, la impunidad y el incremento de la violencia, así como considera Alberto Herrera, director ejecutivo de AI-México. “Hay impunidad, violencia, una militarización sin fecha concreta de término, funcionarios públicos que no rinden cuentas, procesos de depuración del aparato de procuración de justicia inconclusos y entidades que no asumen su responsabilidad en materia de derechos humanos en coordinación con las autoridades federales [...] urge un cambio de rumbo, pues la respuesta del gobierno ha sido corta e ineficiente ante la violencia”, denuncia.

Debido al temor ocasionado por la violencia, al menos 80 escuelas públicas de preescolar, primaria y secundaria de la zona conurbada de Acapulco, Guerrero, cumplen cinco días sin clases, lo que perjudica a unos 35 mil estudiantes. Desde el jueves 25, profesores de cuatro zonas educativas de Acapulco denuncian amenazas, extorsiones y “secuestros exprés” contra integrantes de su gremio, por lo cual advierten que no reanudarán labores hasta que el gobierno les garantice condiciones de seguridad.

Luego de demostrar que su vida corre peligro en México, Alejandro Hernández Pacheco, ex camarógrafo de *Televisa Torreón*, recibe asilo de manera oficial, otorgado por autoridades migratorias de Estados Unidos en El Paso, Texas. Hernández fue amenazado de muerte por grupos del crimen organizado y es el quinto comunicador mexicano que recibe ese estatus. Se suma al reportero Horacio Nájera, que pidió asilo en Canadá; Rosa Isela Pérez, de *El Norte de Juárez*, y su esposo, en España, y José Luis Aguirre, editor de un portal de Internet, también en Estados Unidos.

Alrededor de 300 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa bloquean por dos horas las casetas de cobro de la autopista del Sol México-Acapulco y de Palo Blanco, en demanda de 30 lugares más para los alumnos de nuevo ingreso, porque este año sólo ingresaron 140 y en años anteriores eran recibidos 170. Uno de los dirigentes explica que los alumnos de primer grado no pudieron iniciar cursos el 22 de agosto por este conflicto. Poco después de las dos de la tarde los inconformes vuelven al plantel, en el municipio de Tixtla.

Integrantes del Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior (MAES) anuncian que se alcanzó un acuerdo con autoridades de la UNAM, por lo que suspendieron la instalación de un plantón frente a la rectoría de esa casa de estudios. Atzelbi Hernández, del MAES, informa que tras concretarse una reunión con funcionarios universitarios la noche del martes 30, se resolvieron los tres casos de revalidación de estudios de jóvenes integrantes del movimiento, por lo que se acuerda aplicar un nuevo dictamen de equivalencias, a fin de verificar si cumplen o no los requisitos para ingresar a la máxima casa de estudios.

Este 1º de septiembre sindicatos independientes, organizaciones campesinas, no gubernamentales, políticas, urbanas y, por primera vez, gremios de trabajadores de la burocracia, llevarán a cabo una jornada de protesta y movilización en contra de la política económica, social y laboral del presidente Felipe Calderón.

Glosario de siglas

AFADEM	Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de los Derechos Humanos en México
AFL-CIO	Federación Estadunidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales
AI	Amnistía Internacional
ANAA	Asamblea Nacional de Afectados Ambientales
AU	Asamblea Universitaria
BCZL	Bienes Comunales Zona Lacandona
CDHDF	Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
CDHT	Comisión de Derechos Humanos de Tlaxcala
CEDH	Comisión Estatal de los Derechos Humanos
CEJIL	Centro por la Justicia y el Derecho Internacional
CEM	Conferencia del Episcopado Mexicano
CFE	Comisión Federal de Electricidad
CIDH	Comisión Interamericana de Derechos Humanos
CJF	Consejo de la Judicatura Federal
CNDH	Comisión Nacional de los Derechos Humanos
CNTE	Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
CODICH	Coordinadora de Organizaciones en Defensa de los Indígenas, Campesinos y Evangélicos de Chiapas
COMECOM	Coordinadora Metropolitana contra la Militarización y la Violencia
CRAC	Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias
EZLN	Ejército Zapatista de Liberación Nacional
FCD-19	Frente Campesino Democrático 19 de Octubre
FONATUR	Fondo Nacional de Turismo
HIJOS	Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio
INM	Instituto Nacional de Migración
IPN	Instituto Politécnico Nacional
JBG	Junta de Buen Gobierno
MAES	Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior
MASJC	Municipio Autónomo de San Juan Copala
MULTI	Movimiento Unificador de Lucha Triqui Independiente
OCESP	Organización de Campesinos Ecológicos de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán

OEA	Organización de Estados Americanos
ONU	Organización de las Naciones Unidas
ORCAO	Organización Regional de Cafecultores de Ocosingo
PAN	Partido Acción Nacional
PGJDF	Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal
PGJE	Procuraduría General de Justicia del Estado
PGR	Procuraduría General de la República
PRD	Partido de la Revolución Democrática
PRI	Partido Revolucionario Institucional
PVEM	Partido Verde Ecologista de México
SCJN	Suprema Corte de Justicia de la Nación
SCT	Secretaría de Comunicaciones y Transportes
SEP	Secretaría de Educación Pública
SG	Secretaría de Gobernación
SIEDO	Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada
SME	Sindicato Mexicano de Electricistas
SNTE	Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
SRE	Secretaría Relaciones Exteriores
SSP	Secretaría de Seguridad Pública
STJE	Supremo Tribunal de Justicia del Estado
TSJDF	Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal
UACM	Universidad Autónoma de la Ciudad de México
UAG	Universidad Autónoma de Guerrero
UAM	Universidad Autónoma Metropolitana
UCIZONI	Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo
UNAM	Universidad Nacional Autónoma de México
UNESCO	Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
UPREZ	Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata

Realizada por el Comité de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura de México del Observatorio Social de América Latina de México (OSAL-CLACSO).

Integrantes: Mariana López de la Vega y Fernando Munguía Galeana.

Fuentes: diarios La Jornada y El Universal.

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales



Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais



OSAL

Observatorio Social de América Latina
Publicación electrónica

Cronología del Conflicto Social

México

Septiembre 2011

Editada en junio 2012



Agencia Sueca
de Desarrollo Internacional



Agencia Noruega para la
Cooperación al Desarrollo



Govern
de les Illes Balears

Conselleria d'Afers Socials,
Promoció i Immigració
Direcció General de Cooperació

El Observatorio Social de América Latina [OSAL] cuenta con el apoyo de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional [ASDI], la Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo [NORAD] y la Agencia de Cooperación Internacional de las Islas Baleares [ACIB].

Documento de trabajo N° 999

*Realizado por el Comité de Seguimiento y Análisis
del Conflicto Social y la Coyuntura de
México*



Integrantes Fernando Munguía Galeana
Mariana López de la Vega

Fuentes diarios La Jornada y El Universal

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Se autoriza la reproducción de los artículos en cualquier medio a condición de la mención de la fuente y previa comunicación al director.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en el documento incumbe exclusivamente al autor o a los autores firmantes y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

El **Observatorio Social de América Latina** (OSAL) constituye una iniciativa del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinada a la promoción de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, las dinámicas de participación y los repertorios de acción de los movimientos sociales y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado es uno de los resultados de este trabajo de relevo y registro llevado a cabo en el marco del programa. Se trata de un escrito en el que se sintetizan las principales acciones de movilización y protesta social y las medidas políticas llevadas a cabo durante el mes indicado en el país referido.

La cronología presentada ha sido elaborada por uno de los **Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana** que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo la coordinación del equipo de investigación mexicano, que forma parte de la red institucional de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.

Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana

PAÍS	INSTITUCIÓN	COORDINACIÓN
Argentina y Uruguay	PIMSA (Argentina)	María Celia Cotarelo
Bolivia	CIDES – UMSA	Dunia Mokrani Chávez Pilar Uriona Crespo
Brasil	LPP - UERJ	Roberto Leher
Chile	DI - UARCIS	Juan Carlos Gómez Leyton
Colombia	Escuela Nacional Sindical	Guillermo Correa Montoya
Costa Rica	IIS - FCS - UCR	Sindy Mora Solano
Ecuador	Centro de Investigaciones CIUDAD	Mario Unda
Guatemala	FLACSO Guatemala	Simona Yagenova
México	FCPS - UNAM	Massimo Modonesi Lucio Fernando Oliver Costilla
Panamá, El Salvador, Nicaragua y Honduras	CELA "Justo Arosemena" (Panamá)	Marco A. Gandásegui (h)
Paraguay	Centro de Documentación y Estudios	Quintín Riquelme
Perú	Instituto de Estudios Peruanos	Ramón Pajuelo Teves
República Dominicana y Puerto Rico	CES "Padre Juan Montalvo" (Rep. Dominicana)	Octavio Figueroa
Venezuela	PROVEA	Marco Antonio Ponce

México

Cronología del conflicto social

Septiembre de 2011

Jueves 1

En el Distrito Federal, más de un centenar de organizaciones sindicales y movimientos sociales se concentran en el Zócalo para protestar en contra de la política social y económica del gobierno de Felipe Calderón, en el día en que realiza la presentación de su *Informe de Gobierno*. En la llamada Jornada Nacional de los Mexicanos Indignados, realizan un contrainforme popular y una movilización que comienza desde temprano con la realización de cinco mesas de análisis, en las que se condena la guerra del gobierno de Felipe Calderón, que ha dejado, al menos, 50 mil muertos y desaparecidos.

Las periodistas Ana María Marcela Yarce Viveros y Rocío González Trápaga son encontradas asesinadas; sus cuerpos –con signos de violencia– fueron abandonados en un parque a espaldas del panteón San Nicolás Tolentino, en la colonia El Mirador, delegación Iztapalapa, en el Distrito Federal. Yarce Viveros se desempeñaba como gerente de relaciones públicas de la revista *Contralínea*, medio del que fue reportera y fundadora; a su vez, González Trápaga trabajaba de manera independiente. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) informa que la principal línea de investigación es que se trató de un feminicidio, por la violencia utilizada contra las dos periodistas. Con estos asesinatos, la cifra de comunicadores ejecutados en el país de 2000 a la fecha subió a 74, la mayoría de ellos entre 2005 y 2011.

Por segundo día consecutivo, las instalaciones de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) permanecen ocupadas por integrantes de la Coordinadora de Universitarios en Lucha (CUL), quienes bloquean la avenida Madero, frente al palacio de gobierno, para exigir que la institución inscriba a rechazados. Las autoridades universitarias presentan una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y ante la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR), por posibles daños a la UMSNH y porque los manifestantes introdujeron bombas *molotov* a la Ciudad Universitaria. El rector de la UMSNH, Salvador Jara Guerrero, asegura que, con excepción de Medicina, hay espacios en las demás facultades, y alumnos que reprobaron el examen para ingresar a esa carrera fueron reubicados en otras escuelas de la misma universidad; afirma que las protestas no tienen razón de ser y no descarta que la movilización estudiantil sea un fraude, pues se sabe, asegura, de personas que piden dinero a cambio de entrar a la casa de estudios. “No es una toma normal. Puede ser un asunto político o estar relacionada con algún ilícito”, sentencia el rector.

Viernes 2

Jóvenes pertenecientes a diversas agrupaciones sociales se manifiestan en el Ángel de la Independencia, en el Distrito Federal, con motivo del quinto *Informe de Gobierno* de Felipe Calderón. Denuncian que el presidente convirtió el bono demográfico en un cheque en blanco para el crimen organizado, al no garantizar oportunidades de estudio ni empleo digno para los jóvenes en

el país. De igual manera, denuncian que el gobierno destine la mayor parte de los recursos económicos a la guerra contra el narcotráfico en vez de incrementar el presupuesto para la educación superior o para la prevención de adicciones. Afirman que, de acuerdo con un reporte de la Red por los Derechos de la Infancia en México, el narcotráfico usa a los menores de 12 años como vigilantes, mientras que a los niños de 12 a 15 años los usa para trasladar droga. Los de 16 años en adelante son contratados para sicarios y las niñas para empaquetar droga.

Unos 100 integrantes del Frente Plural Ciudadano y del recién creado Movimiento Mexicano de los Indignados se manifiestan, en Ciudad Juárez, Chihuahua, en contra del proyecto de Ley de Seguridad Nacional, que se encuentra en análisis en la Cámara de Diputados. Entre las exigencias de los manifestantes destaca la desmilitarización del país y la salida de los policías federales de la ciudad. Asimismo, que el gobierno federal aporte más recursos a las ciudades para instrumentar políticas sociales. Durante la protesta, la Policía Federal sólo permite la circulación por un carril, mientras que los agentes de vialidad desviaban el tránsito. Exigen a los legisladores federales rechazar esa iniciativa, por considerarla anticonstitucional, y convocan a los ciudadanos a repudiar esa reforma.

Más de mil profesores de preescolar, primaria y secundaria en la ciudad de Acapulco, Guerrero, rechazan volver a clases debido a las amenazas del crimen organizado: por séptimo día consecutivo más de 400 permanecen en la delegación Acapulco - Coyuca de Benítez de la Secretaría de Educación de Guerrero (SEG). En conferencia de prensa, a nombre de los 47 representantes de zonas escolares de Acapulco, los denunciantes calculan que para el lunes habrá unas 550 escuelas cerradas, lo que representa 5 mil docentes en paro y 70 mil alumnos sin clases. Sobre la reunión efectuada el jueves, con representantes de los tres niveles de gobierno, afirman que no hubo avance porque sólo asistieron jefes de sector y supervisores. “El 12 de agosto levantaron a un profesor a las 7:30 de la mañana”, explica uno de los denunciantes. Señala que los bandoleros exigen a su plantel una cuota mensual de 200 mil pesos, pero las autoridades lo ven fácil pues no tienen que cooperar, y el mismo problema se tiene en zonas escolares como la 32, que incluye La Venta y Vacacional. Otra de las exigencias del profesorado acapulqueño es que las autoridades garanticen la seguridad en torno a los centros escolares y no sólo dentro. “Trabajo en la colonia Benito Juárez de Las Cruces y nos van a tirar muertos, hay balaceras, y tenemos que callarnos, ¿A quién denunciarnos?”, expone otro de los mentores. En la conferencia, los profesores paristas reiteran que mientras las autoridades no brinden la vigilancia solicitada y en ésta participen el Ejército y la Marina, no volverán a sus puestos porque ya se volvieron objetivo de los grupos criminales, y resolver la inseguridad es una exigencia en que los apoya la sociedad entera.

Familiares de Patricia Jazmín Ibarra Apodaca y Bertha Alicia Vidal, jóvenes desaparecidas hace dos meses en Ciudad Juárez, Chihuahua, se manifiestan a las afueras de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) para exigir la pronta localización de las jóvenes. Durante la protesta, familiares de las desaparecidas demandan a funcionarios de la fiscalía apoyo para encontrarlas vivas, pues pese a que ya interpusieron una denuncia, aún no hay resultados en las investigaciones. La FGE en la zona norte reconoce que de 2008 a la fecha tiene un total de 121 expedientes abiertos de jóvenes de las que se desconoce su paradero, y que cada año la cifra ha ido en ascenso. De éstos, reporta que en 2008, hubo 16; en 2009, 20 casos; 2010, contabilizó 30 y en lo que va de 2011, 55 expedientes. La organización civil Nuestras Hijas de Regreso a Casa ha denunciado que en esta frontera hay cientos de casos de jóvenes que han sido secuestradas, tenidas en cautiverio, violadas, asesinadas y dejadas en lotes baldíos. Muchas eran trabajadoras de maquiladoras, camareras, empleadas en la economía informal o estudiantes.

Cientos de maestros de la sección 20 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y empleados de los Centros de Desarrollo Infantil protestan frente al palacio de gobierno en la ciudad de Tepic, Nayarit, por la falta de recursos para el pago de salarios y servicios que ofrecen a estudiantes. Unos 600 empleados de dos primarias y nueve guarderías reclaman, a la Secretaría de Educación Pública (SEP), un adeudo por 63 millones de pesos, que ha ocasionado la omisión de pagos de nueve quincenas.

Alumnos rechazados de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) que están en plantón y ayuno en el quiosco del zócalo desde el 10 de agosto, en protesta por irregularidades en la integración de estudiantes aceptados, denuncian que los directores de medicina, odontología y enfermería, comenzaron a incrementar la lista de aceptados con alumnos diferentes a su movimiento, con lo que violan la premisa de mantener grupos pequeños en las carreras que imparte la institución educativa. Informan que de los treinta que iniciaron el plantón, dos compañeras se retiraron por problemas de salud.

Al tiempo que organizaciones como Amnistía Internacional (AI) y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenan el asesinato de las reporteras Ana María Marcela Yarce Viveros y Rocío González Trápaga –ocurrido la noche del pasado miércoles–, grupos de periodistas y de defensores de derechos humanos cuestionan las afirmaciones del titular de la PGJDF, Miguel Ángel Mancera, en el sentido de que no se encontraron huellas de tortura en el cuerpo de ambas comunicadoras. Alma Gómez, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, señala que la muerte de las comunicadoras debe ser considerada un feminicidio por el carácter violento y doloso del asesinato, y lamenta que los periodistas y los defensores de derechos humanos sigan siendo agredidos impunemente. En el mismo sentido se pronuncian María de la Luz Estrada, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, y Karla Michel Salas, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. Las activistas exigen a las autoridades del gobierno de la ciudad una investigación seria, con la debida diligencia y perspectiva de género, y lamentan que Mancera haya afirmado que no hubo violencia sexual ni tortura.

Sábado 3

Ante miles de habitantes de la región sur de la Sierra Huasteca, reunidos en la plaza principal de Tamazunchale, en San Luis Potosí, Andrés Manuel López Obrador afirma que “el sistema actual ya no sirve, ya se pudrió; por eso en México hace falta un verdadero cambio para superar este régimen de corrupción e injusticias”. “En 2012 –insiste– habrá la oportunidad para iniciar los cambios que reclama el país y deshacerse de la mafia que controla el país”. Más tarde, en Huejutla, Hidalgo, asegura que “de los más de 50 mil asesinatos ocurridos en la guerra estúpida de Calderón, la mayor parte son jóvenes, y propone que es mejor tenerlos estudiando y no en la cárcel o en el panteón”. En la asamblea de Morena realizada en el zócalo de dicha localidad, López Obrador advierte que el problema de violencia no podrá resolverse con soldados o leyes más severas, ya que la paz y tranquilidad son frutos de la justicia. “La forma más barata es combatir la pobreza y fortalecer los valores espirituales y culturales”, asegura.

Al celebrarse el Día Internacional del Detenido Desaparecido se realizan manifestaciones por todo el país denunciando los cientos de casos registrados durante la guerra contra el narcotráfico decretada por Felipe Calderón, la falta de investigación judicial, el nulo interés del Estado por atender a los familiares de las víctimas y la impunidad. Cientos de desapariciones forzadas fueron

perpetradas por el Ejército, la Marina, la Policía Federal y las policías estatales y municipales. También los cárteles de la droga han secuestrado a miles.

A falta de 11 días para que el presidente Felipe Calderón encabece la ceremonia del Grito de Independencia en Palacio Nacional, integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), que se mantienen en plantón en el Zócalo capitalino, aseguran que mientras el gobierno federal no les devuelva su trabajo no se moverán del lugar, y adelantan que llegarán refuerzos para apoyar la protesta, la cual, calculan, ocupa cerca del 75% de la explanada. El secretario general del SME, Martín Esparza Flores, se reúne con miembros del gremio y de agrupaciones solidarias y les solicita no responder a las provocaciones y a la intimidación, “pues por las noches han rodeado la zona policías federales, y la madrugada de ayer lo hicieron integrantes del Ejército”. Afirma que la única forma de que levanten el campamento es que se resuelva la petición de los más de 16 mil trabajadores que no han aceptado la liquidación.

Catedráticos de la UAG proponen crear cursos alternativos y certificados por la propia institución, para dar cabida a los jóvenes aspirantes a las carreras de la salud, los cuales fueron rechazados en el pasado proceso de admisión, principalmente en las unidades de odontología, medicina y enfermería, y se mantienen en plantón permanente desde el pasado 10 de agosto. La directora del plantel de Enfermería, con sede en Acapulco, Maximina Gil Nava, niega que se hayan aceptado más alumnos de los que marca el reglamento, como señalaron hace unos días los rechazados.

El colectivo Hijos por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio (HIJOS) - México conmemora el tercer aniversario de sus actos de escrache o señalamiento público en demanda de que el gobierno solucione los miles de casos de desaparición forzosa, desde la época de la llamada guerra sucia hasta la actualidad, esta vez con la realización de una obra teatral que denuncia cómo la impunidad ha ganado la batalla a la justicia en el país. Tal como hacen cada primer sábado de mes frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los activistas del grupo instalan fotografías de algunos de los desaparecidos que tienen registrados, entregan volantes al público y reiteran su mensaje de que en este país sigue ocurriendo de forma cotidiana dicho crimen de lesa humanidad. En esta ocasión, el escrache temático gira en torno a una representación teatral en que la Señora Impunidad y la Señora Justicia debaten sobre quién manda en México. Por cada avance que menciona esta última, su rival cuenta dos o tres agravios a su favor –como los casos emblemáticos de Ernestina Ascencio o Rosendo Radilla–, para terminar ganando ampliamente el duelo. Acerca de la idea de crear una procuraduría social de atención a las víctimas de la violencia, anunciada por Felipe Calderón, Pablo Álvarez –miembro de HIJOS– señala que esos proyectos son inútiles, porque en realidad no hay ninguna disposición del Estado para resolver las desapariciones.

El Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas” (Frayba) y la delegación de la Unión Europea en México condenan por separado el asesinato de las periodistas Ana María Marcela Yarcé Viveros y Rocío González Trápaga, y exigen que se realice una investigación exhaustiva, eficaz e imparcial. Para el Frayba, el clima de amenazas y hostigamiento desatados en todo el país contra periodistas que ejercen su profesión y la impunidad con que son encubiertos estos actos, son una confirmación de la obstrucción por parte del Estado al ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información, asevera en un comunicado de prensa. El organismo que preside el obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López, manifiesta que los asesinatos de periodistas son un atentado a la libertad de expresión. En un comunicado, también la delegación de la UE en México exhorta a las autoridades del país a perseverar en el fortalecimiento de las condiciones que permitan el libre

ejercicio de todos los derechos humanos y a seguir luchando contra la impunidad, en el espíritu de la reciente y muy positiva reforma constitucional en materia de derechos humanos.

Domingo 4

Andrés Manuel López Obrador, coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), asegura en mítines realizados en municipios del estado de Veracruz que mientras “los treinta potentados que integran la mafia del poder no sean derrotados y hechos a un lado por la ciudadanía, no se podrá recuperar la tranquilidad ni la paz social que se perdió en México”. En su recorrido por Veracruz, afirma que “la crítica situación del país, donde cada vez hay más pobreza, desempleo, inseguridad y violencia, es porque hay un mal gobierno, y a eso se debe que haya perdido la vida gente inocente”. Después de recorrer Tantoyuca y Tuxpan, al cierre de su jornada en este municipio, señala que “esos mafiosos, 16 supermillonarios, 11 políticos de Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN), y tres tecnócratas, desde hace casi tres décadas no sólo se han dedicado a saquear al país, sino que privaron de toda oportunidad de progreso al resto de los mexicanos”.

El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) reanudará sus movilizaciones con una nueva caravana al sureste, donde la violencia coexiste con la pobreza, con las agresiones a los indígenas, los abusos contra migrantes y la creciente presencia del narcotráfico. Casi tres meses después de la primera marcha emprendida desde Cuernavaca, Morelos, el escenario no ha mejorado, la espiral de violencia obliga a manejar ya cifras de 50 mil muertos y el discurso gubernamental persiste en la estrategia militarizada. La etapa de la movilización social ha cambiado porque también ha aumentado la intensidad de la violencia, no se ha detenido. “Lo sucedido en el casino Royale desató una reacción oficial que ha dotado de mayor agresividad a su discurso belicista como única vía para resolver el problema de la violencia y nos enteramos de un mayor grado de injerencia de los aparatos de inteligencia estadounidenses”, advierte el historiador y activista Pietro Ameglio, para quien el contexto de esta nueva caravana –que comenzará el viernes– es aún más crítico del que prevalecía en junio pasado, cuando el movimiento incursionó en el norte del país.

Lunes 5

Más de 30 organizaciones sociales de Ciudad Juárez, Chihuahua, y de otras ciudades de México, afirman que nuevamente la violencia e impunidad acechan a la familia Reyes Salazar, después de que el 14 de agosto fuera secuestrada Isela Hernández Lara, quien cuidaba al nieto de tres años de Marisela Reyes. Exigen que sea presentada con vida la cuñada de Marisela Reyes, y en un comunicado aseveran que la persecución contra los Reyes Salazar se debe a que son una familia de luchadores sociales en defensa de los derechos humanos, denuncian las arbitrariedades de Ejército en el valle de Juárez y exigen su inmediato regreso a los cuarteles. En el documento, que firman diversas organizaciones, se sostiene que “en el caso de la familia Reyes Salazar es evidente que los funcionarios, el Ejército y el crimen organizado están coludidos, ya que los crímenes de Juan José, Josefina, Rubén, Magdalena, Elías y Luisa, así como la quema de casas de varios de sus integrantes, se han dado en el contexto de la militarización del valle de Juárez”.

El Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) y la organización Litigio Estratégico en Derechos Humanos (Idheas), en conferencia de prensa, denuncian que el Instituto Nacional de Migración (INM) tolera la impunidad y protege a funcionarios y empleados que han violado los

derechos humanos y tienen orden de aprehensión por abuso de autoridad, robo y lesiones. Fabián Sánchez Matus, director de Idheas, expone el ejemplo del caso de las agresiones que sufrió el periodista y defensor de derechos humanos Irineo Mújica el 26 de julio de 2010, cuando viajaba en el tren junto con migrantes en Xicotepec, Puebla. Policías federales y elementos del INM lo despojaron de su cámara fotográfica y de dinero. Los hechos, señala Sánchez Matus, se denunciaron ante la Fiscalía Especializada para Delitos contra Periodistas, y después de que se realizaron las investigaciones se dictó la orden de detención de Rocío Sánchez de la Vega Escalante, delegada del INM en Puebla, y a pesar de que en el instituto están enterados de esa orden y de que hay una recomendación al respecto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la mantienen en su puesto.

Ante la presión de grupos ecologistas, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro recibe una denuncia en contra del ayuntamiento del municipio homónimo por otorgar cambios de uso de suelo en la zona de conservación conocida como Peña Colorada, informa el magistrado presidente del Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura estatales, Jorge Herrera. Los activistas aseguran que la zona de conservación de Peña Colorada –que abarca territorios de los municipios de El Marqués y Querétaro– ha perdido en 10 años 2 mil has., que se comercializaron para edificar viviendas y negocios.

Comerciantes del mercado de flores en Cuernavaca, Distrito Federal, bloquean el Anillo Periférico, a la altura de Canal Nacional, para exigir la liberación de sus negocios, que amanecieron inundados por la saturación del Canal Nacional, luego de intensas lluvias. El jefe delegacional de Xochimilco, Manuel González, reconoce por su parte que las compuertas de desahogo del drenaje no se pudieron abrir debido a la saturación del canal. Ante los reclamos de los comerciantes, cerca de las 13 hs se abren las compuertas para liberar la zona anegada.

Martes 6

A un año y cuatro meses de que fueron asesinados en una emboscada los activistas Bety Cariño y Jyri Jaakkola, todavía no hay una sola persona que haya sido juzgada y castigada por dicho crimen, ni tampoco se ha concretado el regreso de decenas de personas desplazadas a la comunidad de San Juan Copala, Oaxaca. Tal balance es el que realizan las diputadas del Parlamento Europeo Satu Hassi –de Finlandia– y Franziska Keller –de Alemania–, durante su visita a México como parte de una misión oficial para saber los pormenores del caso. Hassi lamenta que los avances en las investigaciones para encontrar a los asesinos de Cariño y Jaakkola hayan sido casi nulos, y manifiesta su preocupación por el hecho de que decenas de personas aún no puedan regresar a sus hogares en San Juan Copala, debido a la violencia de los paramilitares de la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort). Por su parte, la legisladora alemana Franziska Keller coincide en que una muestra verdaderamente significativa de que el gobierno mexicano está dispuesto a solucionar el asesinato de Jaakkola y Cariño sería realizar pronto una investigación completa y adecuada, cuyo resultado sea el encarcelamiento de los responsables del crimen.

Andrés Manuel López Obrador se reúne con un grupo de diputados federales de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano, para convocarles a formar parte del proceso de organización de la estructura del Morena que les permita disputar las elecciones federales del próximo año.

El presidente de la Unión de Industriales de la Masa y la Tortilla en el estado de Tabasco, Raúl Morales, asegura que alrededor de 800 molinos de maíz en ese estado están en huelga de pagos contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la entidad debido a sus cobros excesivos. Morales advierte que los molineros en resistencia civil podrían paralizar sus actividades, o cerrar, si el año próximo la paraestatal emprende juicios de embargo contra los deudores.

Miércoles 7

El MPJD descalifica a la nueva Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito, de la que considera que dista mucho de crear una comisión de la verdad que atienda a los ciudadanos afectados por la guerra y que es incongruente con la ratificación de su estrategia de seguridad. El poeta Javier Sicilia asegura que se trata de un maquillaje del gobierno de Felipe Calderón, que carece de presupuesto y no da claridad respecto de si será una instancia que trascenderá a esta administración. Miguel Concha sostiene que el anuncio de la procuraduría no fue consultado con el movimiento y enfatiza en el hecho de que el grupo había demandado la creación de una comisión de la verdad con el Legislativo, con una fuerte participación social y en la que se buscaría no sólo la verdad legal, sino la histórica, la garantía de no repetición y la plena reparación del daño. Por otro lado, anuncian el recorrido de la Caravana por la Paz, que incluirá a los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Veracruz y Puebla, donde habrá reuniones con organizaciones sociales, de migrantes y de grupos indígenas. Sicilia asegura que, a diferencia de la Caravana del Consuelo, en esta ocasión se trata de percibir otros niveles de violencia, no sólo la ejercida por el crimen organizado, sino la que ejerce el Estado o la que por años ha sido denunciada y nunca ha sido atendida, la que, al acumularse, se vuelve más lacerante por el olvido y la impotencia.

Escuelas públicas de la zona suburbana de Acapulco, Guerrero, se mantienen cerradas y en paro laboral a pesar de los anuncios y exhortos efectuados por autoridades estatales y federales del sector educativo, durante el martes pasado, para que reanudaran sus actividades. Profesores anuncian que no regresarán a clases y señalan que más de 170 planteles se mantienen cerrados. El secretario general de la sección 14 del SNTE, Emiliano Díaz Román, reitera su apoyo a los integrantes del magisterio de Acapulco, quienes dejaron de laborar formalmente desde la semana anterior en protesta por la falta de protección policial en la zona suburbana, y manifiesta que las autoridades no actuaron a tiempo para evitar el problema.

Integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones Sociales del Estado de Guerrero parten de Chilpancingo a la ciudad de México para demandar al Congreso de la Unión que defina una tarifa única al servicio de la CFE, informa Cirino Plácido Valerio, uno de los dirigentes del movimiento. Los contingentes, provenientes de las regiones de la Costa Chica y la Montaña, participarán este jueves “en una movilización nacional contra las políticas de quienes están desmantelando el país, privatizan la energía eléctrica y siguen explotando a los pueblos indígenas como en tiempos de Porfirio Díaz”, señala el dirigente. Los manifestantes, anuncia, se sumarán al plantón que miembros del SME mantienen en la Plaza de la Constitución, en la ciudad de México. Este jueves, “tanto en Guerrero como en la ciudad de México se tomarán las instalaciones de la CFE, y también iremos al Congreso de la Unión. La lucha es contra los delincuentes de cuello blanco que nos explotan, que con la ley en la mano nos están robando a los mexicanos”, advierte.

La reducción en 80% del suministro de agua potable en la delegación Gustavo A. Madero obliga a cancelar clases en las escuelas públicas y provoca enfrentamientos vecinales y secuestro de pipas en

las colonias del cerro del Chiquihuite, así como el saqueo de líquido de los tanques de abastecimiento. Debido a que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) cerró las válvulas para reparar los daños causados por el desborde del río Cuautitlán Zumpango, habitantes de las zonas altas de Cuauhtépec, el cerro del Chiquihuite y la Sierra de Guadalupe, primeros en padecer la carencia del líquido, toman el agua de los tanques de almacenaje. A su vez, vecinos de las colonias Candelaria, Santa María, San Juan y Guadalupe Ticomán bloquean el Anillo Periférico, en el cruce con Acueducto de Guadalupe, en demanda de líquido. Ante la presencia de los cuerpos de seguridad y la promesa de que se les surtiría mediante pipas, liberan la vialidad. Sin embargo, pasado el mediodía, y viendo que aún no se restablecía el suministro, deciden retener las pipas.

Jueves 8

Integrantes de medios informativos, académicos y organizaciones sociales demandan a los tres niveles de gobierno esclarecer las agresiones y asesinatos de comunicadores y emprender acciones de prevención y resguardo del gremio, ya que “México aún es el país más peligroso para ejercer el periodismo, con un promedio de un asesinato por mes”. En conferencia de prensa, integrantes de Reporteros Sin Fronteras, del Frente Nacional de Periodistas por la Libertad de Expresión, de la Casa de los Derechos de los Periodistas, del Centro de Periodismo y Ética Pública, del Comité de Protección de Periodistas del Estado de México, de los sindicatos de *Notimex*, *El Sol* y *La Jornada*, así como Miguel Badillo, director de la revista *Contralínea*, anuncian la realización de una marcha el próximo domingo al mediodía del Ángel de la Independencia a la Secretaría de Gobernación (SEGOB), bajo el lema “El peor crimen es el silencio”. También exigen que se haga justicia en el caso de los asesinatos de las periodistas Marcela Yarce Viveros y Rocío González Trápaga.

Organizaciones de usuarios del servicio de energía eléctrica, el SME y representantes sociales de La Montaña de Guerrero se congregan ayer en el Zócalo de la ciudad de México, desde donde marchan a la Cámara de Diputados para demandar la renacionalización del servicio público, la aplicación de una tarifa social para quienes menos tienen y la creación de una nueva empresa de electricidad para la zona centro del país. Asimismo, proponen emplazar a una huelga de pagos contra la CFE y señalan que la problemática de los cobros excesivos y erráticos de esta compañía ya se generalizó a todo el país, pues “incluso la empresa está criminalizando a los usuarios”. En tanto, la fracción del PRD en el Senado propone ante el pleno integrar una comisión especial para investigar las denuncias contra la CFE por abusos en los cobros, la cual “tendría a su cargo revisar los llamados ‘recibos locos’ [recibos del servicio que registran cifras muy por encima del consumo real] y las intimidaciones de la paraestatal contra los quejosos, pues se sabe que acude a amenazas de embargo a quienes se niegan a pagar las cifras exageradamente altas que les llegan por el consumo de luz”.

Trabajadores de Honda de México denuncian que no cesan la represión y los actos intimidatorios de la empresa contra el sindicato, ya que despidió a dos integrantes más de la organización. Asimismo, informan que exigen un incremento salarial de 30%, debido a que este corporativo es uno de los que paga los sueldos más bajos del sector, que en promedio son de 2 mil pesos quincenales para los agremiados. El Sindicato de Trabajadores de Honda de México señala que el hecho de que la empresa haya tenido durante 26 años sindicatos de protección le permitió pagar los peores salarios del ramo automotriz, por lo que el nuevo gremio independiente –ya con registro– le dirigió un oficio al presidente de la compañía en México, Isamu Yamaki, en el que se le pide que valore un aumento de salario emergente de 30% para los obreros de la empresa.

Católicos tradicionalistas de la junta auxiliar de San Rafael Tlanalapan, en el municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, amenazan con linchar y crucificar a evangélicos. Advierten que no tolerarán a nadie que no comparta el credo mayoritario en la localidad y advierten también que los evangélicos deberán irse antes del lunes. Por su parte, el secretario general de Gobierno, Fernando Manzanilla, minimiza la situación y asegura que sólo se trata de diferencias de “fervor religioso”.

Tras menospreciar el paro de maestros en escuelas públicas de Acapulco, que comenzó el 25 de agosto pasado en protesta por la violencia que azota al puerto, la SEG reconoce que alrededor de 130 planteles se mantienen cerrados. Representantes de los profesores en paro se reúnen en Acapulco, a puerta cerrada, con la titular de la SEG, Silvia Romero, a quien aseguran que cerca de 5 mil 500 maestros de 61 delegaciones escolares dejaron de laborar en 300 escuelas del puerto, en perjuicio de unos 70 mil alumnos. Al concluir el encuentro, los docentes anuncian que expondrán a la base trabajadora las propuestas de la autoridad, entre ellas instalar botones de pánico en todas las escuelas de Acapulco, así como retenes policiacos en los sitios de mayor peligro y líneas telefónicas en todos los planteles.

Viernes 9

En el primer día de recorrido de la llamada Caravana hacia el Sur, encabezada por el MPJD, se realizan actos en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, y uno más en Iguala, Guerrero. En el primer sitio, hacia el mediodía, la caravana se encuentra con una plaza prácticamente vacía, a pesar de que fue ahí donde surgió el movimiento, en marzo pasado, tras el asesinato de Juan Francisco, hijo de Sicilia. En ese lugar, Sicilia censura la política de seguridad, demanda el resarcimiento del dolor social y se da tiempo para leer un poema que le escribió a Juanelo, su hijo. En Iguala, el líder del MPJD ofrece una conferencia de prensa, en la que se refiere al énfasis en las partidas presupuestales para las fuerzas armadas. En su intervención el poeta realiza una crítica al proyecto presidencial, y enfatiza que el compromiso de los legisladores de ampliar los recursos económicos para reconstruir el tejido social en vez de canalizar más fondos a seguridad.

Cerca de 400 policías estatales desalojan por la madrugada del viernes a cientos de agricultores del Valle del Yaqui e integrantes de la etnia de ese nombre que desde el pasado martes bloqueaban la carretera México - Nogales, tramo Ciudad Obregón - Guaymas, en la población de Vícam, al sur del Estado de Sonora, para exigir que se detenga la construcción del Acueducto Independencia, el cual a partir del verano de 2012 llevará agua desde la presa El Novillo, en el río Yaqui, hasta la capital sonoreense. El Acueducto Independencia se construye de la presa El Novillo hacia la ciudad de Hermosillo, Sonora, para abastecer 75 millones de m³ de agua a la capital, pero los manifestantes han expresado que dicha obra hidráulica afectará sus dotaciones de agua.

Fuentes magisteriales consideran en Acapulco, Guerrero, como casi un hecho que el lunes entrante docentes del nivel básico de toda la entidad se unan al paro generalizado para protestar por la inseguridad, e indican que este viernes se elevó el número de escuelas sin clases, por lo que ya serían más de 300 planteles sin laborar. En contraste, autoridades estatales y federales del sector educativo confían en que las propuestas efectuadas a representantes del SNTE sean suficientes para reanudar de manera paulatina las labores en los 114 planteles públicos que, de acuerdo con el gobierno estatal, no laboraron esta semana en el puerto.

Sábado 10

En su segundo día de recorrido, la caravana emprendida por el MPJD llega a la ciudad de Chilpancingo y Acapulco, Guerrero, en donde se realizan diversos actos en apoyo del movimiento y en protesta contra la “guerra contra el narco”, responsabilidad del gobierno federal.

Comuneros de Santa Cruz Tanaco, municipio de Cherán, en Michoacán, se enfrentan a golpes y pedradas con policías federales y estatales, quienes los desalojaron tras bloquear la carretera a Capácuaro. El saldo es de 11 detenidos, informó la PGJE. Los manifestantes protestaban por los cateos ilegales y otras arbitrariedades de los elementos de la base de operaciones mixtas, integrada por policías estatales, federales y municipales. En minutos arribaron decenas de vecinos de la población purépecha, quienes de inmediato intentaron obstaculizar las salidas de las patrullas para evitar que se llevaran detenidos a sus familiares. Finalmente, los elementos de la Policía Federal y de la Policía Ministerial del estado lograron salir y llevar a los detenidos ante la agencia del Ministerio Público. La comunidad de Capácuaro, así como la de Santa Cruz Tanaco, está en conflicto desde hace décadas con la comunidad vecina de Cherán, que acusa a estos dos pueblos de proteger a talamontes.

Miembros de la comunidad wixárika acusan al gobierno de Jalisco y al comité organizador de los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 de caricaturizar sus símbolos sagrados, al usar la imagen del venado como mascota de la justa deportiva a realizarse en octubre. En la cosmovisión de esta etnia, el espíritu de Tamatsi Kauyamari –personaje mítico encarnado en el venado– vive en el peyote, planta alucinógena que el pueblo huichol consume en su peregrinación a Wirikuta, en San Luis Potosí, lugar sagrado donde, para la etnia, inició la vida. Antonio Mijares, de la comunidad Tateikié, en el municipio de Mezquitic, en la zona norte de Jalisco, explica: “en sus discursos de convenios, el gobernador Emilio González Márquez está hablando de huicho [la mascota], diciendo que es un orgullo del pueblo wixárika y de Jalisco, sin haber hecho partícipe al pueblo wixárika. No solicitó permiso a las autoridades comunitarias cuando ha utilizado un elemento sagrado”. “¿Qué pasaría si se usara la imagen de la virgen de Zapopan?”, preguntó Mijares a los organizadores cuando en 2009 acudió al área de comercialización del comité. Las autoridades deportivas reconocieron haber cometido un error al no consultar al pueblo wixárika para utilizar el venado como mascota, pero dijeron que no podían ya hacer nada pues huicho ya era conocido internacionalmente. A cambio, los organizadores ofrecieron un programa de difusión de la cultura wixárika para incluirse en los Juegos Panamericanos, lo cual no ha sido concretado. Antonio Mijares recordó que, en 2008, González Márquez y el presidente Felipe Calderón Hinojosa firmaron un acuerdo en el que se comprometieron a defender los sitios sagrados indígenas.

El Movimiento Ciudadano por el Agua buscará la liberación de los nueve integrantes de la etnia yaqui detenidos tras el desalojo del viernes de la carretera México - Nogales, pues les asiste la razón, asegura Adalberto Rosas López, integrante del agrupamiento que se opone a la construcción del acueducto Independencia.

Ismael Bautista, dirigente del Movimiento Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), denuncia que a menos de un mes de que se realice el quincuagésimo congreso nacional ordinario del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), la dirigencia, encabezada por el diputado federal panista Valdemar Gutiérrez Fragoso, ha desplegado una táctica represiva contra los delegados que acudirán a ese encuentro y no le son afines, y que para ello aplica sanciones sindicales. Explica que esta situación la sufren las 37 secciones que

integran el sindicato y afirma que la presión selectiva para tener un congreso a modo es especialmente fuerte en Puebla, el estado de México, Mérida, Guanajuato y Morelos.

Representantes de ocho núcleos agrarios del Distrito Federal se reúnen en el Foro Calmecac de la delegación Milpa Alta con el objetivo de acordar las acciones a seguir contra el proyecto Arco Sur y la formación de un frente común de resistencia. Durante el foro, denominado “Impactos ambientales y ecológicos de la autopista Arco Sur en el suelo de conservación del Distrito Federal”, especialistas exponen las afectaciones ambientales que traería consigo la carretera que pretende concesionar el gobierno federal. El representante comunal del poblado de Villa Milpa Alta, Francisco Chavira, asegura que los asistentes apoyan la decisión de no permitirle a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) el ingreso a tierras comunales para que efectuara estudios como parte del proyecto ejecutivo.

Domingo 11

Los secretarios de Hacienda, José Antonio Meade, de Energía, Jordy Herrera, y de Gobernación, José Francisco Blake Mora, así como el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, y el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Armando Ríos Piter (PRD), acudirán este lunes a la mesa de negociaciones que lleva a cabo el SME con el gobierno federal, para buscar una solución al conflicto y que se levante el plantón del Zócalo. A 23 meses de la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), el dirigente del SME, Martín Esparza Flores, encabeza una multitudinaria asamblea informativa en el campamento del Zócalo capitalino, en la que informa lo anterior y desmiente las versiones que dieron algunos medios respecto de que “él había ordenado el levantamiento de las carpas”. “De aquí no nos vamos, si el gobierno federal no cumple las demandas mínimas de los trabajadores en resistencia, entre ellas que nos regresen nuestro empleo”, afirma Esparza, quien informa que las negociaciones en la SEGOB se reiniciarán este lunes a las 5 de la tarde, e incluso comenta que “las propuestas que se hagan a los electricistas en la mesa serán votadas de inmediato, porque se renovará la asamblea general permanente del sindicato en la plancha capitalina”.

La Secretaría General de Gobierno de Puebla cede a las presiones de católicos tradicionalistas de la comunidad de San Rafael Tlanalapan y solicita a las familias de cristianos abandonar ese poblado del municipio de San Martín Texmelucan para protegerse de seguidores del sacerdote Ascensión Benítez González, quienes amenazaron con lincharlos y crucificarlos. Las autoridades señalan que los protestantes deberán marcharse este lunes y acudir a sus servicios religiosos en la cabecera municipal y en otras comunidades. El delegado de gobierno del séptimo distrito, Roberto Solano Pineda, declara: “Lo mejor es que los cristianos se vayan, porque no podemos garantizar su seguridad y no queremos que pase lo de hace 18 años, cuando el mismo padre Ascensión incitó a un grupo de católicos a expulsar a golpes a una familia completa, incluidos niños, y a quemar su vivienda, por profesar otro culto”, asevera.

La Asociación de Productores de Aguacate de Michoacán denuncia en un comunicado de prensa que sus agremiados son víctimas de elementos de la Policía Federal, quienes cometen extorsiones y detenciones arbitrarias contra el personal que maniobra los camiones de carga, que trasladan miles de toneladas diarias de esta fruta. “Los operativos de seguridad, en lugar de garantizar logros contundentes en contra del crimen organizado, nos han convertido en víctimas colaterales de un Estado mexicano fallido”. En lo que llaman la *Declaración de Ario de Rosales*, aguacateros de

Uruapan, Tancítaro, San Juan Nuevo, Puruarán, Parácuaro y Peribán, los cuales producen más de un millón de toneladas del fruto al año, en una superficie que supera las 115 mil has., aseguran que las fuerzas federales se han convertido en instrumento de intimidación a través de retenes y de la revisión de vehículos sin ninguna orden.

La asamblea estatal de la sección 22 del SNTE desconoce el anexo técnico firmado por su secretario general, Azael Santiago Chepi, con la SEP y el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, para regularizar al personal docente contratado por honorarios. En conferencia de prensa, Santiago Chepi asegura que el acuerdo, surgido de las respuestas de los gobiernos federal y estatal al pliego petitorio de los maestros, fue rechazado porque la comisión rectora, integrada por la SEP y el SNTE, modificó el documento para incluir lineamientos de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), principalmente un examen de evaluación a los docentes.

Lunes 12

Luego de casi 7 horas de negociaciones, el SME y los secretarios de Gobernación, Francisco Blake, y del Trabajo, Javier Lozano, así como el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, logran un acuerdo en principio para destrabar el conflicto de este gremio y levantar el plantón que tiene instalado en el Zócalo capitalino. El acuerdo comprende básicamente la instalación de una mesa de trabajo de alto nivel para buscar la reinserción laboral de los más de 16 mil 500 trabajadores que no aceptaron ser liquidados, antes de noviembre próximo. Marcelo Ebrard, jefe del gobierno capitalino, y Martín Esparza, dirigente del SME, dan a conocer los puntos que se acordaron en la reunión y que serían sometidos en el transcurso de la madrugada a la votación de los electricistas reunidos en asamblea, a fin de confirmar el avance de esta negociación, que permitiría resolver la problemática de los trabajadores de este gremio y a la vez dejar libre este martes la plancha capitalina para conmemorar las fiestas patrias. Dichos acuerdos contemplan: la entrega de la toma de nota a los 26 miembros del comité central del sindicato y vías para agilizar los procesos penales que enfrentan trabajadores encarcelados en el Reclusorio Oriente y en un penal de Puebla, así como la reinserción laboral de los trabajadores no liquidados. Si estas propuestas son aprobadas en las primeras horas de esta mañana por los trabajadores del SME, se volverán a reunir los secretarios de Gobernación y del Trabajo, Marcelo Ebrard y el comité encabezado por Martín Esparza, para firmar a las 8 de la mañana la minuta de los acuerdos y de ahí proceder al levantamiento del plantón hoy mismo.

Al anunciar su incorporación a la caravana del MPJD, que llegará a Chiapas este miércoles, activistas, académicos, ciudadanos y más de 20 organismos civiles admiten que, comprensiblemente, en el país la atención está en la guerra contra el crimen organizado, de manera particular, pero no exclusiva en el norte. No obstante, recuerdan que en el sur de país se vive una guerra de graves y profundas consecuencias “desde hace por lo menos tres sexenios, una estrategia de contrainsurgencia con fuerte ocupación militar del territorio, la formación de grupos paramilitares, la represión y criminalización de la protesta social y los defensores de derechos humanos”. El documento, presentado hoy en conferencia de prensa, enumera los proyectos mal llamados ecoturísticos, las concesiones mineras, la construcción de presas, el saqueo de la biodiversidad y los proyectos de reconversión productiva. Los organismos manifiestan solidaridad y simpatía con las causas del MPJD, así como su rechazo a la proyectada Ley de Seguridad Nacional y al enfoque militarista.

La dirigencia magisterial exige terminar con el dispendio, desvío y mal uso del presupuesto a la enseñanza, así como auditar los recursos que se canalizan a los programas ACE, Enciclomedia y al Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE). Sólo a los proyectos se destinaron más de 35 mil 500 millones de pesos este año. En conferencia de prensa, el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional Democrático (CEND) del SNTE, Sergio Espinal, propone crear un sistema de rendición de cuentas y sanciones que controle el uso del presupuesto educativo tanto en el ámbito federal como estatal. Hay sospechas de que el dinero podría destinarse de manera ilegal a asuntos electorales el año próximo.

El gobernador panista de Sonora, Guillermo Padrés Elías, anuncia que en unos días se reunirá con los gobernadores tradicionales de la etnia yaqui para destrabar el conflicto por la construcción del acueducto Independencia, con el cual se planea llevar cada año 75 millones de m³ de agua de la cuenca del río Yaqui a la capital del estado, que sufre desabasto.

Martes 13

La Junta de Buen Gobierno (JBG) Nueva Semilla que va a Producir, del caracol zapatista de Roberto Barrios, en la zona norte del estado de Chiapas, denuncia que la comunidad de San Patricio, en el municipio autónomo La Dignidad –del ayuntamiento oficial de Sabanilla–, se encuentra sitiada por más de un centenar de paramilitares de distintas comunidades de Tila y Sabanilla, quienes realizan disparos, tienen bloqueados todos los caminos, han quemado 18 has. en las últimas horas, saqueando milpas, y amenazan con asesinar a los zapatistas que se nieguen a abandonar sus tierras.

El SME inicia con el levantamiento del plantón que mantuvo en el Zócalo por más de medio año, luego de pactar un acuerdo con el gobierno federal para que en un plazo de dos meses se encuentre una vía de inserción laboral para los 16 mil 500 trabajadores no liquidados. Tras la firma, el comité ejecutivo nacional del gremio recibe la toma de nota de parte de la Secretaría del Trabajo y cobra cheques que les tenían retenidos por 21 millones de pesos de cuotas sindicales. Cerca de las 2 de la tarde, Martín Esparza, secretario general del SME, entrega la plaza vacía al jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard Casaubon, de quien el dirigente asegura fue una pieza clave para lograr esta negociación. En tanto, el mandatario capitalino indica que “cuando hay un conflicto se debe escuchar al pueblo, a los trabajadores, y resolver, nunca reprimir”.

Miles de productores de leche de Coahuila y Jalisco protestan frente a delegaciones estatales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) para exigir un aumento al precio del lácteo. En Guadalajara entregan un pliego petitorio a la empresa paraestatal Liconsa y regalan 6 mil 100 litros de leche, y cerca de las 11 de la mañana, unos 2 mil productores jaliscienses marchan desde Tlaquepaque. En tanto, unos 300 productores de la Comarca Lagunera, Coahuila, protestan frente a la oficina de la SAGARPA en Lerdo, Durango, para exigir un incremento de 4.50 a 5.50 pesos al precio de la leche. Señalan que debido a las crisis económica y de seguridad, 25 establos han cerrado en un semestre, y 630 están en riesgo.

Miércoles 14

Aproximadamente 4 mil personas, la mayoría docentes de la región educativa Acapulco - Coyuca de Benítez, del nivel básico, participan en una marcha convocada por integrantes del magisterio en la avenida Costera Miguel Alemán, en la ciudad de Acapulco, para protestar por la inseguridad y exigir soluciones al problema de la violencia creciente en el estado. Integrantes del SNTE y del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), así como de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), bloquean de manera intermitente el tránsito en algunas avenidas. Más tarde marchan a la coordinación regional, mientras una comisión de 12 profesores se reúne para dialogar con el secretario general de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, en la Promotora Turística de la zona Diamante. “Salimos a la calle para que la sociedad se dé cuenta de que el maestro está luchando por paz y seguridad”, afirma Abel Casarrubias, secretario de una de las delegaciones del SNTE.

El Centro de Derechos Humanos “Frayba” exige al gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, al secretario de Gobierno, Noé Castañón León, y al procurador estatal, Raciél López Salazar, así como a las autoridades federales, asumir su responsabilidad en evitar que la comunidad zapatista de San Patricio, en el municipio autónomo La Dignidad –ayuntamiento oficial de Sabanilla–, sufra agresiones aún más graves de las que se han suscitado desde el pasado 11 de septiembre. El Frayba emite una acción urgente para llamar la atención de la sociedad civil y de las autoridades gubernamentales sobre esta situación, que la JBG de la zona norte define como muy crítica e insostenible. Exige que se garantice de forma inmediata la vida y la integridad de la comunidad. Asimismo, demanda respeto al proceso de resistencia y autonomía que ejercen las bases del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de conformidad a los tratados internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Acuerdos de San Andrés.

Jueves 15

Integrantes de la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad sostienen un encuentro con sobrevivientes, familiares y compañeros de los 45 indígenas tzotziles asesinados el 22 de diciembre de 1997 en la comunidad de Acteal, en el cual exigen al gobierno federal cambiar la estrategia de combate al crimen organizado. Durante el acto efectuado por la madrugada, el sacerdote Miguel Concha Malo exhorta a los miembros de la organización Las Abejas, vinculada con la diócesis y a la cual pertenecían las 21 mujeres, 15 niños y 9 hombres asesinados por paramilitares, a que “recen mucho, porque el gobierno federal está necio y terco en seguir distorsionando los caminos de la paz”. Más tarde, la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad, en el marco de su recorrido por el sur del país, llega a la comunidad zapatista de Oventic para concretar uno de sus objetivos: reunirse con representantes del EZLN. Con las reservas propias de las comunidades zapatistas, Sicilia afirma en Oventic que reivindicaba sus causas, y condena el incumplimiento de los Acuerdos de San Andrés. También, ofrece una explicación los alcances de la lucha del movimiento, y en especial su empeño por detener la guerra contra el crimen organizado. Durante la mañana, en rueda de prensa, Sicilia reivindica los logros del MPJD, tales como el diálogo con el presidente, haber detenido la aprobación de reformas a la Ley de Seguridad Nacional y la creación de la procuraduría de atención a víctimas.

Siguen agravándose las condiciones de peligro y agresión contra la comunidad zapatista de San Patricio, en el municipio autónomo La Dignidad, en la zona chol, al norte del estado de Chiapas. La JBG Nueva Semilla que va a Producir reitera que el grupo armado, que mantiene sitiada la

comunidad desde el pasado día 11, se incrementó de un centenar a 160 personas. El pasado miércoles, los invasores, encapuchados, colocaron en la orilla de la comunidad una bandera nacional, tres banderas rojas y un tablero, y anunciaron su intención de permanecer allí por la fuerza. La JBG del caracol de Roberto Barrios denuncia los actos de agresión, amenazas, hostigamiento y desalojo que “sufren nuestros compañeros base de apoyo de San Patricio, luego de que unas cien personas se posesionaron en la orilla de la comunidad para desalojar a nuestros compañeros de sus tierras, en las que viven y trabajan con sus familias e hijos desde hace 15 años”. Las autoridades autónomas sostienen que los tres niveles de gobierno –federal, estatal y municipal– “saben muy bien de la situación que están viviendo nuestros compañeros, pero no hacen nada”. Es parte, sostienen, de la estrategia de contrainsurgencia. “El gobierno quiere borrar en la historia la sangre derramada de nuestros compañeros y compañeras en 1994. Y luego, en los años ’95, ’96 y ’97, siguió derramando mucha sangre por los mismos militares y paramilitares dirigidos, promovidos y financiados por las instituciones del mal gobierno.

Durante una protesta afuera de las instalaciones de *El Diario*, en Ciudad Juárez, Chihuahua, comunicadores de este medio y de otros denuncian que luego de 1 y 3 años –respectivamente– de los homicidios de Luis Carlos Santiago Orozco y Armando Rodríguez, conocido como “El Choco”, sólo han encontrado ineficacia, indiferencia e impunidad en los gobiernos federal y estatal, por la falta de investigaciones. Los periodistas Pedro Torres Estrada y Luz Carmen Sosa informan que en una revisión al expediente 23277/10, abierta por el homicidio calificado de Santiago Orozco y lesiones contra Carlos Manuel Sánchez Colunga, los agentes de la procuraduría estatal no revisaron las imágenes grabadas en la cámara que usó el victimado el 16 de septiembre de 2010 en sus últimos minutos de trabajo.

Viernes 16

Andrés Manuel López Obrador conmemora el Grito de Independencia en la ciudad de Salamanca, Guanajuato, y ahí afirma que “igual que hace 201 años, el pueblo de México vive en la opresión y en un régimen de corrupción y privilegios; es necesario que despierte para que sea dueño y constructor de su destino”. El dirigente del Morena señala que “hoy también se padece de un régimen de injusticia, corrupción y privilegios; muchos mexicanos, mujeres y hombres en todo el país, estamos luchando por una nueva República, más justa, más humana, más igualitaria”. Ante unas 3 mil personas que se congregan a un costado de la plazoleta Hidalgo, el político tabasqueño se compromete a seguir luchando por los ideales de libertad, justicia, independencia y democracia. Al terminar su discurso, el dirigente del Morena da el Grito de Independencia, que señala: ¡arriba los de abajo, arriba los pobres, abajo los privilegios, abajo el mal gobierno, no a la corrupción y a la impunidad, no a los que traicionan entregando al extranjero los recursos naturales de la nación, no a la mafia en el poder, si a la paz con justicia y dignidad y libertad a los presos políticos!

Sábado 17

La caravana al sur, del MPJD, culmina su recorrido por Chiapas con una marcha de centenares de velas encendidas por la avenida central en Palenque, Chiapas, y un clamor generalizado de simpatía y generosidad para los migrantes centroamericanos que ingresan al país por las fronteras de este estado y el de Tabasco, fronterizos con Guatemala. “Pedimos la desaparición del Instituto Nacional de Migración por sus anomalías y los atropellos contra los migrantes”, expone el colectivo de

mujeres choles, llamado Mujeres de Palenque, que además denuncia que en el barrio de Pakalná – hoy casi otra ciudad–, “los migrantes se encuentran a merced de la delincuencia, y las mujeres son presa fácil”. Exigen que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto y dan a conocer que los agentes del INM, quienes deben proteger a los migrantes, con frecuencia son responsables u omisos ante la extorsión, el secuestro, las violaciones y los asesinatos. El Comité de Defensa de la Libertad Indígena Xi'Nich se manifiesta contra el narcotráfico, que hace mucho tiene presencia en la región, y añade que “también, desde nuestras comunidades, señalamos que la política de Calderón es de muerte y pobreza, y más migración. Es decir, es un problema de los indígenas mexicanos también: No nos queda más que emigrar a los centros turísticos o más allá de la frontera norte. Calderón convirtió México en un lugar de guerra, no en un lugar para el buen vivir; lo que ha construido es la viva imagen de la mentira y la muerte”. Más tarde, la Caravana por la Paz arriba al estado de Tabasco, en donde los problemas de tráfico de personas, de drogas y de armas son una realidad para diversas comunidades locales. A su llegada, se realiza una larga marcha por las calles de la ciudad de Villahermosa, donde los tabasqueños aportan su parte al repudio a la inseguridad en México, ya que ocupan el cuarto lugar nacional en secuestros y el décimo en extorsiones. En este contexto, el poeta Javier Sicilia intensifica el discurso y sus alcances, en caso de que no haya un viraje en la política de seguridad, si no se escucha realmente a las víctimas y la indignación social ante tantas muertes registradas. “Que hagan caso a lo que está mostrando y proponiendo este movimiento a través de la visibilización de los dolores, de las propuestas en las mesas de negociaciones, porque si no enderezan el camino del país, si no se ponen a servir a los ciudadanos y construir país y seguridad para los ciudadanos, reconstruir el tejido social, éste, por desgracia, va a ser el último movimiento pacífico, lo que va a venir por la indignación va ser terrible”, afirma desde el templete. Aunque concurrida, la manifestación parece no corresponder a la gravedad del problema, según el testimonio de los residentes que sí dejaron a un lado sus miedos para unirse a los contingentes. A la cita de Carlos Pellicer, que dice “Me da tristeza no sólo por mexicano, sino tan sólo por hombre”, la portan en una larga manta poetas, escritores y pintores locales, en reclamo del fin de la inseguridad. Ramón Bolívar, poeta tabasqueño, resume su visión: “el país se nos está yendo de las manos, mientras las respuestas gubernamentales no trascienden los discursos”.

Fray Tomás González, responsable de la Casa del Migrante en Tenosique, Tabasco denuncia que “la ruta de extorsiones, abusos y conductas delictivas, como la trata de personas en Chiapas y Tabasco, tiene en los funcionarios del INM un eje importante de coordinación. “En los hechos, prácticamente operan como crimen organizado”, sostiene. “Hay una red de encubrimiento, por eso, aunque se han denunciado penalmente conductas de los funcionarios del INM, no han prosperado”, afirma el clérigo, y agrega que “la gente de Migración es la que lleva a Los Zetas a los migrantes, porque es un instituto totalmente corrompido”. En sus denuncias, en el contexto de su participación en una marcha y concentración en la ciudad chiapaneca de Palenque, el sacerdote, quien había sido amenazado por su activismo en pro de los migrantes, cuestiona la operación del INM a partir de muchos testimonios de indocumentados que imputan al personal de migración golpizas, amenazas y vejaciones. Horas después, Fray Tomás González es detenido en Coatzacoalcos, Veracruz.

Más de 100 líderes religiosos e integrantes de alrededor de 40 confesiones cristianas e instituciones de inspiración creyente, entre ellas miembros de las iglesias bautistas, presbiterianas, menonita, anglicana y comunidades eclesiales de base, asumen un compromiso público por la justicia y la dignidad del país. En un documento especifican que “debido a la absurda guerra en contra del narco y las acciones de la delincuencia organizada, el país enfrenta uno de los momentos más dolorosos de su historia, caracterizado por una violencia e inseguridad estructurales, y cuyas raíces más profundas son la pobreza y la desigualdad”. Ante esto, los miembros de estas iglesias exponen que

apoyan el llamado hecho por la Caravana del Sur, que encabeza el poeta Javier Sicilia, con lo cual se suman al Movimiento por la Paz y expresan solidaridad con las víctimas de la violencia. Agregan que en franca solidaridad con las víctimas, las iglesias e instituciones participantes asumen un compromiso público “por abatir el miedo y la inseguridad que hoy imperan en el país, al reconocer en primer lugar que no han respondido con la suficiente fuerza a esta situación”. En el escrito indican que la mesa de diálogo “Iglesias por la paz” hace un firme llamado de justicia a las autoridades gubernamentales y pide a las jerarquías de sus iglesias no permanecer en el silencio ante la violencia e inseguridad.

Domingo 18

El Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCH) responsabiliza a los paramilitares de Paz y Justicia, al PRI y al PVEM por el clima de guerra contrainsurgente desatada el día 7 y acrecentada con inusitada violencia el día 13 contra la comunidad San Patricio, en el municipio autónomo La Dignidad, por parte de pobladores de los municipios oficiales de Sabanilla y Tila. La situación de cerco armado y hostigamiento contra San Patricio, en la zona norte del estado, ha generado diversos pronunciamientos de alarma y solidaridad, y la convocatoria de la Red contra la Represión para realizar una movilización nacional e internacional el próximo día 22. Las mujeres del CDMCH se suman a las protestas por estas agresiones que aterrorizan a las habitantes de la región y pretenden despojar a los compañeros zapatistas de las tierras que recuperaron de los terratenientes y que cultivan para su sustento diario.

Durante el décimo día de recorrido, la Caravana del Sur llega al estado de Veracruz y en el marco de ella se realizan actos multitudinarios en la ciudades de Coatzacoalcos y Jalapa. En la primera ciudad, localidad dominada por Los Zetas, según se dice, la participación de los residentes se ve inhibida sensiblemente por ese supuesto hecho, al punto que se había sugerido por los organizadores de la ciudad que el acto concluyera antes del anochecer; sin embargo, al no logarse el mitin termina en medio de un extraño ambiente que se agudiza por la inusual presencia de gente fotografiando a los asistentes. Ya en Jalapa, capital del estado, Daniel Giménez Cacho, actor, habla en nombre de la caravana para reivindicar al movimiento como defensor de la vida. “Hemos recorrido el país con tantos hermanos asesinados, tantos hijos secuestrados, tantas hijas violadas; todo eso me ha indignado y me ha hecho llorar ante la pasividad del gobierno”. Agrega: “Mucha gente se pregunta hacia dónde va este movimiento; su rumbo lo marcarán las víctimas y al hacernos visibles hemos logrado que esta tragedia resuene en los oídos de la autoridad”.

Lunes 19

Después de 3 mil kms recorridos por el sureste del país, la Caravana por la Paz arriba al Zócalo de la ciudad de México, donde el poeta Javier Sicilia afirma que “la herida abierta en Ciudad Juárez a causa de la fallida estrategia de guerra del presidente Felipe Calderón se ha ido extendiendo como gangrena hacia el sur del país, para juntarse con los dolores ancestrales que viven los pueblos indios y las comunidades del sur; asimismo, Guerrero y Veracruz se han convertido en réplicas de Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas”. Desde un pequeño templete colocado a espaldas de Palacio Nacional, Sicilia sostiene que “en su doloroso recorrido por siete estados del sur y sureste del país, así como el de junio pasado por el norte, se mostró la emergencia nacional que nuestra clase política, encerrada en los búnkers de sus oficinas y el bienestar de sus sueldos, no quiere mirar, sino

la inmensa reserva moral que la patria tiene en sus ciudadanos”. Al anochecer, con la bandera nacional a media asta por el vigésimo sexto aniversario de los sismos de 1985 –fecha emblemática para la movilización ciudadana–, Sicilia asegura que “hay una emergencia nacional que este movimiento ha permitido visibilizar con los dolores que la guerra ha provocado a las víctimas, las injusticias estructurales del sistema, así como la corrupción e impunidad por parte del Estado”. Por ello, demanda que las demandas del MPJD, resumidas en el Pacto Nacional Ciudadano, sean tomadas en serio y que permitan a partir de ello rehacer el tejido social, “cuya destrucción nos tiene en la miseria, el horror y la postración; es decir, en la pérdida del suelo de la patria, cuyo dolor no cesa”.

Más de 100 empleados del Centro Estatal de Reinserción Social “La Pila”, en San Luis Potosí, protestan a raíz de la agresión de varios internos contra un custodio; informan que temen por su seguridad. “Si ni los custodios están seguros, ¿qué podemos esperar?”, aseguran trabajadores administrativos. Los inconformes advierten que acudirán al palacio de gobierno para exigir la destitución de Valentín Díaz Reyes, director de Prevención y Readaptación Social del estado, por falta de resultados, prepotencia y desvío de recursos.

La organización Familia Pasta de Conchos asevera que el operativo de cien días de inspección en esa zona minera, el cual prometieron en su comparecencia ante la Cámara de Diputados los secretarios del Trabajo, Javier Lozano, y de Economía, Bruno Ferrari, debido al accidente del pozo tres de Sabinas, Coahuila, ha resultado insuficiente y descoordinado, y ha mostrado la falta de seriedad y compromiso de dichos funcionarios ante la muerte de los trabajadores y el dolor de sus familiares. Dicha organización, integrada por familiares de los 65 mineros fallecidos en febrero de 2006 en la unidad Pasta de Conchos, realiza a cabo la misa mensual en recuerdo de los fallecidos, afuera de la sede de Grupo México, en demanda de justicia y de que sean rescatados los cuerpos. La agrupación demanda que la comisión creada en la Cámara de Diputados para dar seguimiento a los asuntos mineros llame a cuentas a los responsables de las secretarías del Trabajo y Economía, para saber por qué no han cumplido el punto de acuerdo del 20 de julio pasado: que la Oficina Federal del Trabajo de Sabinas se convierta en delegación federal para minería del carbón, a la cual se asignen recursos financieros para 25 plazas de inspectores, y que en el presupuesto de egresos se etiquete dinero para el rescate de los restos de los mineros atrapados hace 67 meses en Pasta de Conchos.

Martes 20

Arrancan en la Secretaría de Gobernación las negociaciones con el SME para encontrar una salida de reinserción laboral para los 16 mil 599 trabajadores no liquidados. En esta mesa el gremio presenta tres opciones de solución: que la CFE sea el patrón sustituto de estos trabajadores, la creación de un nuevo organismo que preste el servicio de energía eléctrica a la zona centro, o que se conforme la figura de Luz y Fuerza en liquidación, la cual contrate a los sindicalistas. En la reunión participan, además del secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, representantes de las secretarías de Energía y Hacienda, así como del jefe del Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, y el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Armando Ríos Piter. Antes del encuentro en Gobernación, Esparza ofrece una conferencia de prensa en la sede del sindicato, en la que puntualiza que “la solución a este conflicto requiere voluntad política, porque económicamente se puede solventar el regreso de los electricistas a laborar, ya que el costo laboral sería cercano a 2 mil millones de pesos anuales, cuando la zona centro del país genera ventas de

electricidad cercanas a 50 mil millones”. Esparza indica que el SME está abierto a otras opciones que plantee el gobierno federal, y defiende que las tres opciones que presenta el sindicato son viables.

Profesores de Acapulco, quienes se encuentran en paro en demanda de mejores condiciones de seguridad para realizar sus labores, informan que tres docentes fueron secuestrados en los pasados dos días y que sus plagiarios exigen, en dos de los casos, 3 y 5 millones de pesos por su libertad. Los mentores dan a conocer en conferencia de prensa que maestros de la escuela Revolución Social recibieron un mensaje en el cual se les pidieron cuotas de 600 pesos, que deberían ser entregadas los pasados 14 y 15 de septiembre. De igual manera, los maestros anuncian que este miércoles se manifestarán una vez más en la avenida Costera Miguel Alemán para exigir medidas de seguridad, principalmente en favor de los docentes que laboran en la zona suburbana de Acapulco.

Un grupo de 40 artistas e intelectuales y más de un centenar de organizaciones de 16 naciones se pronuncian en apoyo de los integrantes del Centro de Derechos Humanos “Digna Ochoa” y del Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas, y exhortan al gobierno del estado y a la PGJE a desistir de las órdenes de aprehensión contra sus miembros. El documento, respaldado, entre otros, por Eduardo Galeano, Manu Chao, José Emilio Pacheco, el obispo Raúl Vera, Paco Ignacio Taibo II, Alfredo López Austin, Raúl Zibechi y Marcos Roitman, reconoce en la movilización social, representada en el Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas, una de las múltiples y legítimas luchas populares mexicanas en defensa de los derechos humanos, civiles, sociales y políticos. El consejo autónomo y sus integrantes representan la autoorganización contra las altas tarifas de energía eléctrica y por la construcción de la autonomía de los pueblos y comunidades. Reconoce, a su vez, el trabajo de denuncia y defensa del Centro de Derechos Humanos “Digna Ochoa” de la ciudad de Tonalá. Las personas acusadas son Nataniel Hernández Núñez, director del centro Digna Ochoa, junto con Roberto Antonio Cruz, Azariel Orozco Cruz, Orlando Gutiérrez Simón, Arturo Villagrán Sánchez, Octavio Vázquez Solís, Bersaín Hernández Zavala y Guadalupe Núñez Salazar. En el caso de los dos últimos, veteranos fundadores del Frente Cívico Tonalteco, se desconoce qué ilícito se les imputa. Estas acusaciones son utilizadas en Chiapas y en todo el país como mecanismo de control de los movimientos sociales y de criminalización de luchadores sociales y defensores de los derechos humanos. Por todo ello, los firmantes llaman al gobierno de Chiapas y a la PGR a dar marcha atrás a las acciones judiciales y a garantizar las libertades civiles y políticas. Responsabilizan al Estado mexicano por la vida, la libertad y la integridad de los integrantes del centro Digna Ochoa y de los integrantes del consejo costeño. Condenan los actos represivos del gobierno de Chiapas en contra de todos ellos.

El CEND del SNTE denuncia que “los malos resultados en las evaluaciones educativas, como la prueba Enlace, se deben a la aplicación persistente de políticas públicas que pretenden el desmantelamiento del sistema educativo nacional”. La disidencia magisterial inicia una jornada de protesta en varias ciudades del país en demanda de mayores recursos económicos al sector, y cambios en la política educativa seguida hasta ahora por el gobierno federal. Con un mitin-plantón frente a la SEP, realizado en la explanada de Santo Domingo, del Centro Histórico capitalino, los maestros presentan su *Programa Nacional Alternativo de Educación y Cultura 2011*, en el cual solicitan la cancelación de la evaluación universal, que no es otra cosa que la certificación docente y la ruta del despido. Durante la protesta, denuncian que en el proyecto de presupuesto 2012 – entregado por el gobierno federal a la Cámara de Diputados–, la SEP insiste en destinar millonarios recursos a programas que han demostrado su fracaso, como es la Alianza para la Calidad Educativa, el Consejo Nacional de Fomento Educativo y la Enciclomedia –hoy denominada Programa de

Habilidades Digitales–, pese a que la Auditoría Superior de la Federación ha hecho múltiples recomendaciones.

Miércoles 21

Al menos 8 mil personas acuden al llamado del magisterio de Acapulco y marchan por la avenida Costera Miguel Alemán para exigir mejores condiciones de seguridad, pues los profesores aseguran ser víctimas de extorsiones y secuestros, entre otros delitos, de la delincuencia organizada. “Aguirre, Rivero, no seas mitotero”, corean contra el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero; “Escucha, Añorve, la delincuencia nos absorbe”, es otra de las consignas en alusión al alcalde de Acapulco, el priísta Manuel Añorve Baños. La marcha comienza en la glorieta de la Diana antes de las 9:30 de la mañana, y hora y media después llega al Centro Internacional Acapulco, donde los manifestantes bloquean los dos carriles de la Costera. A las 2 de la tarde, representantes de los secretarios generales de las 117 delegaciones escolares del municipio se reúnen a puerta cerrada con Humberto Salgado Gómez, Ramón Almonte Borja y Silvia Romero Suárez, secretarios estatales de Gobierno, de Seguridad Pública y de Educación, respectivamente, además de Añorve Baños. Casi a las 5 de la tarde, los profesores levantan el bloqueo y regresan a la coordinación educativa, donde acuerdan seguir concentrados para movilizarse en caso de que el gobernador no los reciba.

En el Día Internacional de la Paz, al menos mil jóvenes de planteles educativos de nivel medio superior marchan por la avenida México, en Tepic, Nayarit, en demanda de que las autoridades devuelvan la seguridad al estado. Édgar Sandoval, presidente del Consejo Estudiantil del Consejo Nacional de Educación Profesional Técnica 169, exige que se detenga a los asesinos del alumno Ismael Castillo Villegas, herido el 7 de septiembre cuando el transporte público en que se dirigía al cine con su hermano quedó en el fuego cruzado de delincuentes y policías estatales. El secretario de Gobierno, Trinidad Espinoza Vargas, informa a los padres del joven que las investigaciones continúan y que esperan resultados en breve. Ismael Castillo, padre del estudiante, expresó que tienen miedo de que le pase algo similar a sus otros dos hijos.

Alrededor de 76 profesores de educación indígena de Ixmiquilpan, Hidalgo, suspenden labores para exigir la destitución de Matías Catalán Hernández, supervisor de la zona 50, a quien acusan de reprimir al personal docente, practicar el nepotismo y ser indiferente ante los problemas laborales. David Torres Mundo, uno de los paristas, solicita la intervención de la Dirección General de Educación Indígena y de la sección 15 del SNTE para poner freno a los atropellos del supervisor. Entre las irregularidades que denuncian los profesores están la retención de cheques, la imposición de la esposa del delegado sindical, Patricia Godínez Roque, en una dirección de educación indígena, y el que Matías Catalán tenga dos cargos –supervisor y pagador.

Desde el caracol zapatista Resistencia hacia un Nuevo Amanecer, en La Garrucha, la JBG El Camino del Futuro denuncia a los gobiernos federal, de Chiapas y de los municipios oficiales de organizar a los paramilitares. Y sostiene: “Claramente está que el dinero que da la ONU [Organización de las Naciones Unidas] por conducto del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) es para armar paramilitares contra nuestras bases de apoyo y destruir la autonomía”. Esto, al denunciar provocaciones y despojo de tierras recuperadas del poblado Nuevo Purísima, en el municipio autónomo Francisco Gómez, por parte de personas procedentes de los

barrios Puerto Arturo y San José las Flores, de la ciudad de Ocosingo, quienes dicen no pertenecer a ninguna organización, si bien reciben evidente apoyo del ayuntamiento panista.

Se inicia la campaña para la liberación de Francisco Jiménez Pablo y Eric Bautista Gómez, integrantes de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), que están presos desde hace casi un año y medio en el penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit, acusados de delitos que no cometieron, como represalia por su lucha a favor de 33 comunidades de Chiapas reubicadas en 2007 por el taponamiento del río Grijalva. Así lo informa Leonel Rivero, abogado de ambos activistas, quien denuncia que el gobierno chiapaneco presenta hacia el exterior una imagen de respeto a los derechos humanos, al mismo tiempo que reprime y encarcela a quienes disienten de sus políticas. En conferencia de prensa, Rivero anuncia el inicio de la campaña por la liberación de sus defendidos, que servirá también para visibilizar el tema de la reubicación forzosa de los pueblos afectados por el desastre natural y la expropiación de sus tierras a precios irrisorios.

Diversas organizaciones ambientalistas denuncian que el otorgamiento de una concesión por 25 años a la empresa española Abengoa para que construya el acueducto que irá de los Altos de Jalisco a León, Guanajuato –pese a la existencia de un amparo que obliga a detener las obras–, es una muestra de que las autoridades ignoran el derecho de consulta de las comunidades afectadas, y una puerta a la privatización del agua en el país. María González, directora ejecutiva del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, afirma que, con este permiso, otorgado por la CONAGUA, se confirma el lugar de privilegio que han ocupado en este gobierno las empresas de capital español, que ahora tratarán de incursionar en la gestión y comercialización del líquido. Representantes de los poblados afectados por el proyecto viajan a Pacuaré, Costa Rica, donde se realizará del 22 al 25 de septiembre el sexto foro mesoamericano de la Red Latinoamericana contra las Represas. Ahí darán a conocer una serie de acciones para intentar detener las obras, entre ellas invitar a diputados del Parlamento Europeo a visitar la zona, y presentar una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Claudia Gómez, abogada del colectivo ecologista COA, señala que “en el caso de El Zapotillo, la estrategia de las autoridades sigue siendo la mentira y la imposición, ya que presentaron el proyecto dividido en varias partes –la presa, el acueducto, la distribución en León y en los Altos de Jalisco–, lo cual dificulta el análisis de las manifestaciones de impacto ambiental”.

Padres de familia del colegio Humboldt, en la ciudad de Puebla, Puebla, acusan a Eric Merkel Reyes, director general de Volkswagen Camiones y Autobuses, y a Bárbara Karig, esposa del director de relaciones corporativas y estrategias de la empresa automotriz, de un presunto fraude por 24 millones de pesos contra la escuela. Patricia Velasco, representante legal de los tutores, asegura que el desfalco y la desaparición del Fideicomiso de Garantía Educacional –que cubriría los estudios universitarios de jóvenes huérfanos– afectará a más de mil alumnos. El gobierno de Alemania aporta un millón de euros anuales al colegio.

Jueves 22

Profesores del magisterio de Guerrero y el gobernador Ángel Aguirre Rivero se reúnen a puerta cerrada durante casi 5 horas en un hotel de la zona Diamante, donde acuerdan integrar comisiones de trabajo para evaluar los avances en la aplicación de estrategias de vigilancia y protección propuestas por el gobierno estatal, en busca de brindar garantías de seguridad a los docentes,

principalmente a los de la periferia del puerto. Los maestros están en paro desde el pasado 25 de agosto, tras denunciar haber sido víctimas de extorsión, secuestros y robo de vehículos.

La organización de la sociedad civil Las Abejas afirma que la demanda interpuesta en Estados Unidos contra el ex presidente Ernesto Zedillo por la masacre de 45 indígenas de Acteal no surgió de esa agrupación, única representante de los sobrevivientes, cuya exigencia no se centra en obtener dinero sino en que se haga justicia y se ponga un alto a la impunidad por el asesinato de sus integrantes. En un comunicado divulgado durante la misa con que fueron recordados en esa comunidad tzotzil 21 mujeres, 15 niños y 9 hombres ultimados el 22 de diciembre de 1997, Las Abejas sostiene que la demanda tiene fuertes elementos para suponer que la memoria de los mártires de Acteal está siendo manipulada con fines político-electorales y económicos, ajenos a la organización. Lo anterior no significa, agregan, que el ex mandatario no tenga responsabilidad. “Queremos que se juzgue a Zedillo y a sus cómplices, pero no callaremos ante la usurpación de nuestra memoria por políticos y comerciantes oportunistas, ni permitiremos que una verdad parcial sirva para oscurecer la verdad completa”.

En el contexto de un acto político realizado en Coatepec, Veracruz, López Obrador asegura que “para enderezar el rumbo del país y recomponer su vida pública, se requiere derribar a los 30 gigantes con pies de barro que hoy dominan como una mafia y toman las decisiones que mantienen a las mayorías en la pobreza, el desempleo, la migración, la inseguridad y la violencia”. El ex candidato presidencial afirma que “si bien los integrantes de la mafia del poder se creen muy poderosos, no dejan de ser débiles, porque no tienen autoridad moral ni política y porque se han dedicado nada más a saquear, robar y a desgraciar al país”. En las elecciones presidenciales de 2006 fueron derrotados y en los comicios de 2012 se les volverá a vencer en buena lid y en el terreno político, advierte.

Viernes 23

Profesores representantes de las delegaciones educativas de Acapulco se reúnen con autoridades municipales y estatales en un hotel para discutir la estrategia de vigilancia policiaca trazada por el gobierno estatal para proteger a docentes del ayuntamiento. Tras cuatro semanas de suspensión de clases debido a la inseguridad, principalmente en escuelas de los suburbios de Acapulco, autoridades estatales desconocen cuándo será el regreso a las actividades en más de 300 planteles, cerrados desde finales de agosto, lo que, según el magisterio, tiene detenidos a 35 mil alumnos del nivel básico. En la reunión participan representantes de la Secretaría de la Marina y el Ejército, el alcalde Manuel Añorve Baños, la secretaria de Educación estatal, Silvia Romero Suárez, el secretario general de la sección 14 del SNTE, Emiliano Díaz Román, y el titular de Seguridad Pública estatal, Ramón Almonte Borja.

Organizaciones de la Campaña Nacional por el Derecho a Decidir celebran que el proyecto de dictamen del ministro José Fernando Franco González Salas en torno a las reformas constitucionales antiaborto se discutirá el lunes en la SCJN. Confían en que se aborden directamente los derechos fundamentales de las mujeres, de conformidad con la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos y con los tratados internacionales en la materia, y que la postura del ministro Franco sea respaldada por el pleno de la SCJN. En un documento donde expresan su postura oficial, las agrupaciones señalan que la SCJN tiene ante sí la oportunidad histórica de reivindicar los derechos esenciales de millones de mexicanas.

Decenas de activistas se reúnen en Ciudad Madera, Chihuahua, para conmemorar que hace 46 años 15 jóvenes, entre maestros, campesinos y estudiantes, asaltaron el cuartel militar de esa ciudad resguardada por 125 soldados, con el propósito de acabar con los abusos y despojos de los caciques de la región solapados por el entonces gobernador del estado, Práxedes Giner, hecho que marcó el inicio de la acción guerrillera en México. En el acto es recordado el profesor Arturo Gámiz, que murió en el ataque junto con otros siete guerrilleros, y se rinde homenaje al activista Salvador Gaytán, uno de los siete sobrevivientes –fallecido este año en un accidente vial–, quien, afirman, fue un luchador social mexicano, y durante casi 50 años mantuvo en alto la bandera de la revolución socialista. La promotora de la conmemoración, la Fundación Liga Comunista “23 de Septiembre”, salió en caravana de la ciudad de México el 21 de septiembre y llegó el jueves en la noche a Madera.

Yahir Pineda, integrante del Frente Amplio Opositor (FAO), lanza un zapato al gobernador del estado de San Luis Potosí, Fernando Toranzo Fernández, mientras este leía su segundo informe de gobierno, para protestar por la explotación de la empresa canadiense Minera San Javier en el cerro de San Pedro. Al instante es sacado por guardias de seguridad y entregado a policías estatales.

Sábado 24

López Obrador inicia su segundo y último día de gira por Puebla en Zacapoaxtla, donde encabeza un mitin en la plaza principal al que asistieron simpatizantes e integrantes del Morena. En Teziutlán, el tabasqueño convoca a la sociedad a no seguir el camino trillado que representan el PRI y el PAN en la elección de 2012, sino a buscar un verdadero cambio en el movimiento nacional que encabeza. El último punto de la gira de López Obrador en el estado de Puebla fue Huauchinango, donde se pronuncia en favor de cambiar la política energética del país y reitera su propuesta de crear una empresa pública para proporcionar empleo a los integrantes del SME despedidos después del cierre de LFC, en octubre de hace dos años.

El Ministerio Público Federal ejercita una acción penal en contra de tres ex servidores públicos del estado de Sonora involucrados en el incendio de la guardería ABC, que dejó 49 menores fallecidos. Las autoridades federales les imputan los delitos de homicidio y lesiones culposas. Los indiciados son Jesús Davis Osuna, ex director general de Inspección y Vigilancia del ayuntamiento de Hermosillo, el ex subdirector de control vehicular de la Secretaría de Hacienda estatal, Jorge Luis Melchor Islas, y Fausto Salazar Gómez, ex director general de Recaudación. La PGR informa de la detención por lo ocurrido el 5 de junio de 2009, cuando el fuego que se inició en una bodega de la Secretaría de Finanzas del gobierno de Sonora se extendió a la estancia infantil, la cual no contaba con medidas para prevenir conflagraciones ni funcionaban las salidas de emergencia, por lo que 49 niños murieron y más de 100 personas sufrieron heridas y secuelas por el fuego.

Gilberto López y Rivas, integrante del Congreso Nacional Indígena (CNI), convoca a apoyar la lucha de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) contra las empresas mineras canadienses e inglesas que pretenden explotar yacimientos de metales en territorios indígenas. Al asistir como invitado al sexto aniversario de la fundación de la colonia Emperador Cuauhtémoc, al sur de Chilpancingo, donde habitan indígenas tlapanecos, nahuas, amusgos y mixtecos, el antropólogo exhorta a la construcción de las autonomías, no solo en territorios rurales. Solicita “hacer un estado nacional de autonomía a lo largo y ancho del país, crear espacios

autonómicos en universidades y centros de trabajo para que esto sea la base, desde abajo, de un gobierno de los oprimidos y de los opresores de nuestro país”.

El grupo anarquista denominado Células de Revolución Inmediata Praxedis G. Guerrero se adjudica la colocación y detonación del artefacto explosivo de fabricación casera que estalló la madrugada del viernes en unas oficinas de la CFE, ubicadas en la delegación Iztacalco, Distrito Federal. Mediante el portal de internet *Liberación Total*, la organización señala que la acción es parte de su lucha contra las empresas de electricidad, que son responsables de la destrucción de bosques y fauna silvestre por la construcción de plantas hidroeléctricas. El comunicado del grupo, que también se ha adjudicado ataques similares en bancos de la ciudad de México, como los ocurridos en mayo pasado en la delegación Tlalpan, señala que si bien estos actos suelen ser simbólicos, “entran en nuestra lógica de guerra cotidiana contra el poder”. El incidente ocurrió la madrugada del pasado viernes, cuando una lata de gas butano estalló en el Centro de Atención a Clientes de la CFE ubicado en calzada Ignacio Zaragoza y Oriente 257, en la colonia Agrícola Oriental.

Domingo 25

Integrantes de la Coordinación Nacional de Electricistas y del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) denuncian que así como se llevó a cabo una campaña contra LFC y sus empleados para justificar la extinción de la paraestatal, ahora el gobierno está abonando el terreno para estrangular los servicios de la CFE y crear una mala imagen de ésta, con el fin de preparar el escenario para que más áreas de la empresa pasen a manos privadas y haya mayor presencia de compañías nacionales y trasnacionales en el sector. Afirman que, más de dos años después de que se adjudicó a la CFE la atención de la zona que correspondía a LFC, la han maniatado y no la han dejado contratar personal ni tener más presupuesto. “Se trata de crear un ambiente desfavorable para desprestigiar a la CFE, tal como se hizo con LFC”, concluyen.

Las agrupaciones Sociedad Civil en Marcha y Salvemos San Miguel solicitan la intervención del director de Patrimonio Mundial del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Francisco López Morales, y del director del Centro de Geociencias (CGEO) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Gerardo Carrasco Núñez, para frenar el intento del ayuntamiento de San Miguel de Allende, Guanajuato, que pretende autorizar la construcción de 8 mil viviendas en 205 has. de una zona paleontológica, lo que pondría en riesgo la declaración de patrimonio cultural de la humanidad del Santuario de Atotonilco. Este proyecto pone en riesgo el valor universal y excepcional del santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco, declarado en 2008 patrimonio cultural de la humanidad. Asimismo, afectará el yacimiento de fósiles de Rancho Viejo, afirman los activistas Arturo Morales Tirado, Luis Ferro de la Sota, Mercedes San Martín y Rodrigo Treviño Lozano

Lunes 26

Al iniciar la discusión sobre la constitucionalidad de la reforma en Baja California, la cual protege el derecho absoluto a la vida desde la concepción, el ministro de la SCJN Fernando Franco González Salas lamenta las expresiones de quienes denigran, descalifican y ofenden a los que no sostienen sus puntos de vista o no piensan igual que ellos. El magistrado instructor expresa su absoluto respeto a todas las opiniones que se han manifestado y afirma que los ministros siempre se

rigen por sus convicciones y no tienen cabida o influencia ni presiones ni agresiones del tipo que sean. Por su parte, el ministro Luis María Aguilar plantea que sólo la Constitución General de la República puede definir los derechos fundamentales, y si ésta no define el momento a partir del cual se inicia la vida, no puede una constitución de un estado de la Federación hacerlo. Sergio Aguirre Anguiano, por su parte, considera que el artículo impugnado es constitucional y además es acorde con la Constitución General de la República y con la Convención Americana de Derechos Humanos. Afuera de las instalaciones de la corte, un grupo de personas se manifiesta en contra del proyecto de dictamen elaborado por Franco. Los manifestantes corean consignas en contra del aborto y reparten volantes que decían que el proyecto en cuestión era digno de esclavistas, de encomenderos y de racistas.

La Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, el Observatorio Nacional contra el Aborto y la Comisión Independiente de Derechos Humanos en Morelos consideran que se violaron los derechos de una menor de 15 años de edad a quien se procesó por el delito de aborto. En un comunicado, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos califica este hecho de grave violación a los derechos de la joven, y en general para todas las mujeres morelenses.

Durante la noche del domingo y el transcurso del lunes la ola de violencia en Guerrero deja un total de 12 homicidios, nueve ocurridos en el puerto de Acapulco y los otros en varios municipios, además de la desaparición de 20 jóvenes en Tlalchapa y Cutzamala de Pinzón, informan autoridades estatales. La mañana del lunes, en Acapulco, dos personas fallecieron en distintos hechos. En el primero, un taxista fue asesinado en la parada El Guayabo de la colonia Vicente Guerrero. De manera simultánea, en la colonia Hermenegildo Galeana, un enfrentamiento entre sicarios y residentes armados dejó por resultado otro muerto. En hechos casi simultáneos ocurridos por la tarde, siete sujetos más fueron asesinados en Acapulco. El primero ocurrió en la colonia Garita, donde cinco hombres que se desplazaban en una camioneta fueron acribillados; tres de ellos fueron calcinados dentro del vehículo, mientras que dos más quedaron semidesnudos sobre el pavimento. En el segundo, dos hombres fueron ultimados a bordo de un vehículo compacto sobre la avenida Cuauhtémoc, en la esquina con la calle Michoacán, donde fueron atacados por sujetos armados al detenerse en un semáforo. Otras tres personas fueron ejecutadas en Tlapa de Comonfort, Huitzucó y Copalillo, entre ellos Lázaro Espinoza Mateos, de 14 años de edad, reporta la Secretaría de Seguridad Pública. El gobernador Ángel Aguirre reconoce que el mediodía del domingo desaparecieron 20 jóvenes en Tlalchapa y Cutzamala de Pinzón, y que algunos ya han sido liberados.

Profesores de Acapulco, Guerrero, en paro desde el 25 de agosto pasado, afirman que hay avances significativos en la implementación de medidas de seguridad que el magisterio exigió a autoridades estatales para regresar a laborar. Representantes de los profesores explican que el fin de semana anterior los maestros trabajaron divididos en seis comisiones, para analizar los avances en materia de protección y vigilancia. Indican que se colocarán unas 45 cámaras en el exterior de escuelas y en puntos específicos de las áreas de mayor problemática; además se instalarán retenes en colonias de alta peligrosidad de Acapulco.

Se anuncia la creación de la asociación civil Ya basta de abusos de Televisa, que tiene como objetivo integrar una demanda de acción ciudadana para que el gobierno federal, en uso de sus facultades, revoque las concesiones otorgadas a esa empresa, por haberlas utilizado indebidamente en repetidas ocasiones. Simón Charaf, quien auspicia la agrupación, distribuye un comunicado en el que informa que están incorporados a la misma, entre otros, Purificación Carpinteyro, Javier Corral

y Raúl Trejo Delarbre. Todos ellos, asegura, están conscientes y preocupados por el daño que Televisa causa a la sociedad mexicana. Asimismo, Charaf, quien se presenta como socio defraudado por Televisa y víctima de una de las calumnias e injusticias más grandes en el Distrito Federal, el caso Cabañas, indica que esta asociación es para que “quien esté viviendo un abuso, injusticia, ataque o atropello por parte de Televisa –en contubernio o sometimiento de la autoridad– tenga una plataforma de difusión con la que pueda enfrentarlos, evidenciándolos de inmediato ante millones de personas”. La agrupación se apoyará, menciona, en foros como televileaks.com, donde se pueden ver desde cartas al presidente de la República exponiendo anomalías en que incurre Televisa, hasta documentos confidenciales de la misma empresa

Debido a que la policía municipal se ha visto rebasada por la delincuencia, pobladores de la comunidad de Acuexcomac, una de las diez que forman el municipio de San Salvador Atenco, Estado de México, se organizan para realizar rondines nocturnos y formar 3 o 4 brigadas en las que participen hasta 150 personas. Los vecinos efectúan los rondines de las 23 a las 5 horas diariamente. La decisión se toma a raíz de los secuestros de tres residentes, que se sumaron a una ola de asaltos a viviendas y a comercios. Los pobladores afirman que más de 500 personas han participado en estas actividades.

Unos 300 estudiantes afiliados a la CUL vuelven a apoderarse de las instalaciones de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en concreto las facultades de Medicina, Odontología, Derecho y Enfermería, además de las preparatorias en la ciudad de Morelia, Michoacán, a fin de exigir 500 lugares para aspirantes rechazados. El rector, Salvador Jara Guerrero, advierte que no negociará con los inconformes hasta que liberen las instalaciones.

Martes 27

El SME da a conocer un manifiesto en que afirma que “la obsesión de este gobierno de entregar el sector eléctrico nacional a empresas extranjeras, por encima de cualquier criterio técnico o financiero, arroja un saldo de escandalosos robos al país”. Dicho documento, publicado con motivo del quincuagésimo primer aniversario de la nacionalización de la industria eléctrica, denuncia además los altos costos del servicio que pagan millones de usuarios mexicanos, dado que 50% del total de la generación de electricidad está en manos de empresas privadas. Refiere que los contratos de operación que la Comisión Reguladora de Energía otorga a las trasnacionales cuestan al país más de 67 mil millones de pesos anuales. Integrantes del sindicato realizan una guardia de honor en el mausoleo del ex presidente Adolfo López Mateos, quien nacionalizó la industria, así como en el Monumento a los Niños Héroes, en Chapultepec; más tarde realizan un mitin en el Monumento a la Revolución.

Por decisión de los habitantes, no se instalarán casillas para los comicios estatales del próximo 13 de noviembre en las comunidades indígenas de Ostula y Cherán, en el estado de Michoacán. Representantes de dichos poblados aseguran que están en pláticas con localidades vecinas para que se sumen a la propuesta de elegir autoridades mediante usos y costumbres. La asamblea comunal nahua de Ostula, municipio de Aquila, decide no apoyar a ningún partido político, con el argumento de que el gobierno permite el despojo y la explotación de los pueblos indígenas, como ocurrió con los pequeños propietarios de La Placita, a quienes han querido quitar tierras en varias ocasiones. En un comunicado, los nahuas sostienen que prefieren designar autoridades y elementos de seguridad por el régimen de usos y costumbres. Además, anuncian que no permitirán la instalación de casillas

en la tenencia de Ostula. “Ningún habitante de esta comunidad participará como candidato o promotor de las campañas electorales”, advierten. Los representantes de la cabecera municipal de Cherán, quienes mantienen bloqueados los accesos al poblado desde el 15 de abril, cuando se enfrentaron a talamontes, tampoco permitirán que se celebren comicios. Aseguran que mantienen contacto con autoridades comunales de los municipios de Nahuatzen y Paracho, así como con los jefes de tenencia de Nurío, San Ángel Zurumucapio, Cheranástico y Zirahuén, todos de la región purépecha, para que tampoco participen en las elecciones. Según las autoridades provisionales de Cherán –designadas hace más de 5 meses, cuando el pueblo desconoció al alcalde Roberto Bautista Chapina y despidió a los policías–, comunidades vecinas han sido víctimas del crimen organizado, que las extorsiona sin que las autoridades intervengan.

En la ciudad de Huejutla, Hidalgo, 84 policías y agentes de tránsito y vialidad paran labores indefinidamente para acusar de fraude a funcionarios municipales, encabezados por el tesorero, Homero Gómez, y anuncian que presentarán una denuncia penal contra quien resulte responsable, pues les prometieron la entrega de vales por 42 mil pesos para adquirir material de construcción a fin de mejorar sus viviendas y sólo les entregaron documentos con sus firmas de recibido falsificadas.

Líderes de comerciantes de mercados públicos del Distrito Federal denuncian que la competencia desleal que representan las tiendas de conveniencia los sitúa en desventaja, pues ahora solo satisfacen el 8% de la canasta básica –cuando tres décadas atrás lo hacían al 80%–, debido a que se ha permitido que estos comercios proliferen en los alrededores de sus centros de trabajo. “Ahora existen más de 2 mil 300 tiendas, como Oxxo, que tapando las entradas hacia los mercados son las que se quedan con el consumidor”, afirma Juan Manuel Hernández, líder de mercados en Distrito Federal, por lo que exige a las autoridades mayor certeza jurídica y generar una zona de protección para esos centros de abasto.

Miércoles 28

La SCJN avala la reforma antiaborto del estado de Baja California, la cual protege el derecho a la vida desde la concepción. El ministro Arturo Zaldívar lamenta la decisión, al cuestionar que el máximo tribunal dejara de lado los derechos de las mujeres, entre los cuales y bajo ciertos supuestos está la interrupción del embarazo. Luego de que fueron insuficientes los votos de siete ministros que se pronuncian por la invalidez del artículo séptimo, párrafo primero, de la constitución de la entidad fronteriza, el cual señala que desde el momento en que el individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural o no inducida, Zaldívar asevera que la resolución implica avasallar, desconocer y eliminar los derechos humanos de las mujeres, algo que un tribunal constitucional en ningún supuesto puede avalar. Fuera de la suprema corte, un pequeño grupo de personas se manifiesta, con grandes mantas con fotografías del ministro instructor, Fernando Franco, a quien llaman ministro de la muerte, y otras, con las imágenes de los once integrantes del pleno, en las que los instan a votar por la vida. En cuanto se oficializa la decisión, explotan las expresiones de júbilo de los activistas en contra del aborto que se encontraban en el salón de plenos. Al salir, ofrecen entrevistas reconociendo la decisión de la SCJN a favor de la vida; el grupo de manifestantes que seguía frente al edificio olvida sus consignas en contra de los “ministros de la muerte” y exclaman con júbilo: “¡Gracias, ministros!”.

En el contexto del Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, representantes de ocho agrupaciones sociales del estado de Querétaro demandan a las autoridades estatales no criminalizar el aborto y, en cambio, ampliar las causales por las que se permita la interrupción del embarazo. En los tres años recientes, la Procuraduría de Justicia de Querétaro registró 33 averiguaciones previas contra mujeres por haber recurrido al aborto —once en 2009, 17 en 2010 y cinco hasta agosto pasado—, revela Fernanda López Gallegos, de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos. De esas averiguaciones previas, una se resolvió con sentencia condenatoria, otra fue absolutoria, una más con suspensión de prueba, dos con negativas de orden de aprehensión y el resto continúa en trámite. En tanto, en Guadalajara, unas 30 activistas que defienden los derechos de la mujer a decidir sobre su cuerpo se manifiestan fuera de Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador, para exigir que se despenalice el aborto en el estado.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), en Michoacán, recibe nueve quejas contra la directora y dos maestros de la escuela primaria Club de Leones, ubicada en la cabecera municipal de La Piedad, por desnudar el martes a 30 niños y niñas de sexto grado en busca de 180 pesos que presuntamente se perdieron en el salón de clases. El presidente de la CEDH, Víctor Manuel Serrato Lozano, anuncia que enviará el expediente a la PGJE “porque se cometieron abusos deshonestos e intimidación; además, se violentaron la dignidad humana y los derechos de los menores”. En el incidente participaron la directora del plantel, María Dolores Reyes Estrada, la maestra María Domínguez y un profesor de computación a quien sólo se identificó como Alejandro. Los alumnos señalaron que las niñas fueron sacadas del salón de clases de cinco en cinco y llevadas a la dirección de la escuela, donde la directora les levantó la falda y les esculcó en el corpiño. Dijeron que a los varones se les trasladó al salón de computación, donde el profesor de esa materia los obligó a bajarse los pantalones y a quitarse suéteres y camisas.

Productores de distintas regiones cafetaleras del estado de Veracruz bloquean calles y se manifiestan en la plaza principal de Jalapa para exigir la liberación de 250 millones de pesos que el gobierno federal debió canalizar a 200 mil caficultores, 80 mil de ellos veracruzanos, por medio del Programa de Fomento Productivo. El dinero tuvo que haberse entregado entre mayo y julio. Los manifestantes, afiliados a consejos regionales del café y a la Coordinadora Nacional de Asociaciones Cafetaleras, han protestado varias veces este año para demandar la entrega de apoyos y que se investigue a funcionarios de la SAGARPA y de la Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café (AMECAFE) por registrar a 19 mil supuestos productores que se han beneficiado del programa.

Jueves 29

Luego de conocerse la propuesta gubernamental que modifica los términos de una próxima reunión entre el presidente Felipe Calderón Hinojosa y el MPJD, para realizarla en conjunto con otras organizaciones civiles, el grupo que encabeza el poeta Javier Sicilia demanda que se honre el compromiso presidencial y el encuentro se efectúe bajo los términos originalmente pactados. Agregan que en principio la reunión con el titular del Ejecutivo federal sería sólo con el movimiento para evaluar los avances efectuados en estos tres meses, por lo que emplazó a que el encuentro se efectúe el próximo 7 de octubre en el Alcázar de Chapultepec. Al rechazar la nueva propuesta para la reunión, pues se reduce a una participación de sólo dos integrantes del movimiento por la paz, Javier Sicilia y el ex ombudsman capitalino Emilio Álvarez Icaza convocan a una conferencia de prensa donde acusan al gobierno federal de pretender diluir al movimiento, faltar a la palabra

empeñada por el presidente y con ello evidenciar que aún no se asume realmente la gravedad de la emergencia nacional que se está enfrentando.

Un sector de integrantes del magisterio de Acapulco, afiliados a la sección 14 del SNTE, acuerda regresar a clases de manera gradual a partir del próximo lunes. Sin embargo, de acuerdo con la CETEG, cuarenta de 103 secretarios generales de delegaciones educativas escolares rechazan los acuerdos propuestos por el gobierno del estado y reiteran su exigencia de que las autoridades brinden seguridad real a los profesores, principalmente los de escuelas ubicadas en la periferia de Acapulco. Luego de abandonar el salón donde se firmaría el acuerdo del regreso a clases, en el cual se encontraban el gobernador Ángel Aguirre Rivero y autoridades del sector educativo estatal, Felipe de la Cruz Sandoval, integrante de la CETEG, manifiesta: “No queremos gestorías ni mesas de trabajo, queremos seguridad”.

Organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, académicas y políticos lamentan que no se alcanzaran los ocho votos requeridos en la SCJN para invalidar las reformas en las constituciones de Baja California y San Luis Potosí que penalizan el aborto. Sin embargo, señalan que “la batalla no está perdida, pues aún quedan instancias internacionales, además de que siete de los 11 ministros expresaron argumentos muy sólidos en favor de la protección de los derechos de las mujeres”. Representantes de organizaciones feministas recuerdan que las modificaciones legislativas en 17 estados del país que protegen la vida desde la concepción fueron avaladas por el PAN y el PRI, y en algunos casos por el PRD y el PT, por lo que exhortan a las mujeres a analizar por quién votarán en las elecciones de 2012. Fue precisamente durante la gestión de Beatriz Paredes, como presidenta del PRI –subrayan–, cuando los legisladores locales de ese partido avalaron esas leyes conservadoras. Por su parte, AI lamenta que la decisión de la máxima instancia de justicia en el país signifique un retroceso para los derechos de las mujeres, y advierte que la reforma es un gran paso atrás para los derechos de las mujeres y niñas en México. En tanto, el obispo de Saltillo, Raúl Vera, asegura que “hay mucha hipocresía en la decisión asumida de la SCJN respecto a esas normas, pues si bien el crimen de aborto es claramente rechazado por la Iglesia católica, que considera que desde la concepción hay vida humana, con esta decisión quienes van a pagar el pato son las mujeres, por lo que hay que pensar muy bien en las consecuencias de la penalización del aborto”.

La JBG Nueva Semilla que va a Producir, del caracol zapatista Que Habla para Todos, en Roberto Barrios, alerta nuevamente sobre nuevas amenazas de muerte, masacres, robos, daños, destrozos y despojos contra las bases de apoyo del EZLN de la comunidad chiapaneca de San Patricio, municipio autónomo rebelde La Dignidad, por parte del grupo armado que mantiene sitiado el poblado. Los ataques, que se han vuelto continuos, “son dirigidos por los malos gobiernos”, y ejecutados por sus paramilitares de Paz y Justicia y la Unión Campesina Indígena y Forestal (Uciaf). Los mismos grupos operaron en la zona norte entre 1995 y 1997, culpables de muchas muertes y del desplazamiento de las comunidades en la región chol y la selva norte.

Viernes 30

El gobierno federal asevera que ya tiene respuestas a algunos planteamientos del MPJD, que serán expuestas en la siguiente etapa del diálogo, con la participación de otros grupos civiles. En una carta enviada por la SEGOB a ese grupo, se señala que el presidente Felipe Calderón ha sostenido más de 18 reuniones de diálogo con diversas organizaciones de la sociedad civil y los tres órdenes de gobierno. Se propone una nueva ronda de encuentros para abordar cinco grandes temas: iniciativas

de reformas impulsadas por el Ejecutivo federal en materia de seguridad y justicia, acciones de depuración y reclutamiento de la fuerza pública –unidades estatales contra el secuestro, policía acreditable y control de confianza– y evaluación las mesas de trabajo con el movimiento por la paz.

Un día después de que un sector del magisterio de Guerrero acuerda con autoridades federales y estatales reanudar clases en las escuelas públicas del nivel básico, tras un paro de 37 días en demanda de condiciones de seguridad –mismo que fue rechazado por 40 de los 103 secretarios generales de delegaciones educativas–, un grupo de docentes asegura que no existen garantías para retornar a las aulas. Los profesores, en su mayoría de la CETEG, niegan que las bases vayan a volver a las aulas el próximo lunes y convocan a otra marcha para el 5 de octubre, con el objetivo de expresar su malestar “porque la inseguridad y la violencia no han disminuido en el puerto, así como las amenazas contra docentes”.

Ante cientos de militantes y simpatizantes del PRD, el PT y el Movimiento Ciudadano –antes Convergencia–, del estatal Partido de Unidad Popular, así como de organizaciones sociales, reunidos en el parque central de Tlacolula de Matamoros, en el estado de Oaxaca, López Obrador denuncia que “la paz y la tranquilidad del país se alcanzarán únicamente garantizando educación y trabajo, principalmente para los jóvenes”. La inseguridad y la violencia no se resolverán en México con soldados, policías y cárceles, sino combatiendo la pobreza, subraya López Obrador durante una asamblea informativa del Morena, celebrada por la tarde en esta municipalidad zapoteca de la región Valles Centrales. Posteriormente, se trasladó a Guelatao de Juárez, para dar por terminada su gira de 6 meses por los 2 mil 38 municipios gobernados por el régimen de partidos políticos y las 418 municipalidades regidas por usos y costumbres.

En el Centro Estatal para la Reinserción Social de los Sentenciados número 5, en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, siete presos, considerados políticos, comienzan una huelga de hambre por tiempo indefinido, y cuatro más ayunos diarios, exigiendo su libertad inmediata. Son miembros de las organizaciones La Voz del Amate y Voces Inocentes, ambas adherentes a la Otra Campaña, o bien solidarios con esas agrupaciones. Después de soportar las injusticias que han causado mucho daño a sus familias con estos encarcelamientos injustos y la prefabricación de los delitos que los tiene privados de sus libertades, en algunos casos por defender el derecho y otros por ser carentes de todo recurso y analfabetos, los presos argumentan que se han violado sus derechos, y esto sigue ocurriendo: “Hemos sido ignorados por las autoridades incompetentes”.

Integrantes del Movimiento de Mexicanos Afectados por las Presas y en defensa de los Ríos exigen la cancelación definitiva e inmediata de los proyectos de las presas La Parota, en Guerrero, Paso de la Reyna, en Oaxaca, Las Cruces, en Nayarit, Itzantún, en Chiapas, El Zapotillo, en Jalisco, y las 112 hidroeléctricas en Veracruz. También denuncian que en el caso de El Zapotillo hay el avance ilegal del 34% de la obra y la adjudicación a la empresa española *Abengoa* de la construcción del acueducto que llevaría el agua de Jalisco a Guanajuato. En conferencia de prensa para informar sobre su participación en el sexto encuentro de la Red Latinoamericana de Ríos, celebrado la semana pasada en Costa Rica, acusan que en México existen al menos 350 proyectos de presas en los que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la CFE y la CONAGUA, en contubernio con los gobiernos estatales y las empresas privadas, continúan llevando a cabo actos de extorsión, chantaje, falsas promesas, división comunitaria, falta de transparencia, intimidación, amenazas y nula consulta previa e informada a las comunidades.

Glosario de siglas

ACE	Alianza por la Calidad de la Educación
AI	Amnistía Internacional
AMECAFE	Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café
CDMCH	Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas
CEDH	Comisión Estatal de Derechos Humanos
Cencos	Centro Nacional de Comunicación Social
CEND	Comité Ejecutivo Nacional Democrático
CETEG	Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero
CFE	Comisión Federal de Electricidad
CGEO	Centro de Geociencias
CIDH	Corte Interamericana de Derechos Humanos
CNDH	Comisión Nacional de los Derechos Humanos
CNI	Congreso Nacional Indígena
CNPA	Coordinadora Nacional Plan de Ayala
CONAFE	Consejo Nacional de Fomento Educativo
CONAGUA	Comisión Nacional del Agua
CRAC	Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias
CUL	Coordinadora de Universitarios en Lucha
EZLN	Ejército Zapatista de Liberación Nacional
FAO	Frente Amplio Opositor
FGE	Fiscalía General del Estado
Frayba	Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”
HIJOS	Hijos por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio
Idheas	Litigio Estratégico en Derechos Humanos
IMSS	Instituto Mexicano del Seguro Social
INAH	Instituto Nacional de Antropología e Historia
INM	Instituto Nacional de Migración
JBG	Junta de Buen Gobierno
LFC	Luz y Fuerza del Centro
Morena	Movimiento de Regeneración Nacional
MPJD	Movimiento Paz con Justicia y Dignidad
ONU	Organización de las Naciones Unidas
PAN	Partido Acción Nacional
PGJDF	Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal
PGJE	Procuraduría General de Justicia del Estado
PGR	Procuraduría General de la República
PNUD	Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
PRD	Partido de la Revolución Democrática
PRI	Partido Revolucionario Institucional
PT	Partido del Trabajo
SAGARPA	Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
SCJN	Suprema Corte de Justicia de la Nación
SCT	Secretaría de Comunicaciones y Transportes
SEG	Secretaría de Educación de Guerrero

SEGOB	Secretaría de Gobernación
SEP	Secretaría de Educación Pública
SEMARNAT	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
SME	Sindicato Mexicano de Electricistas
SNTE	Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
SNTSS	Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social
SUSPEG	Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero
SUTERM	Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana
UAG	Universidad Autónoma de Guerrero
Ubisort	Unión de Bienestar Social de la Región Triqui
Uciaf	Unión Campesina Indígena y Forestal
UMSNH	Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
UNAM	Universidad Nacional Autónoma de México

**Realizada por el Comité de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura de México del Observatorio Social de América Latina (OSAL-CLACSO).
Integrantes: Fernando Munguía Galeana y Mariana López de la Vega.
Fuentes: diarios La Jornada y El Universal.**

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales



Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais



OSAL

Observatorio Social de América Latina
Publicación electrónica

Cronología del Conflicto Social

México

Octubre 2011

Editada en junio 2012



Agencia Sueca
de Desarrollo Internacional



Agencia Noruega para la
Cooperación al Desarrollo



Govern
de les Illes Balears

Conselleria d'Afers Socials,
Promoció i Immigració
Direcció General de Cooperació

El Observatorio Social de América Latina [OSAL] cuenta con el apoyo de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional [ASDI], la Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo [NORAD] y la Agencia de Cooperación Internacional de las Islas Baleares [ACIB].

Documento de trabajo N° 1018

*Realizado por el Comité de Seguimiento y Análisis
del Conflicto Social y la Coyuntura de
México*



Integrantes Fernando Munguía Galeana
Mariana López de la Vega

Fuentes diarios La Jornada y El Universal

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Se autoriza la reproducción de los artículos en cualquier medio a condición de la mención de la fuente y previa comunicación al director.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en el documento incumbe exclusivamente al autor o a los autores firmantes y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

El **Observatorio Social de América Latina** (OSAL) constituye una iniciativa del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinada a la promoción de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, las dinámicas de participación y los repertorios de acción de los movimientos sociales y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado es uno de los resultados de este trabajo de relevo y registro llevado a cabo en el marco del programa. Se trata de un escrito en el que se sintetizan las principales acciones de movilización y protesta social y las medidas políticas llevadas a cabo durante el mes indicado en el país referido.

La cronología presentada ha sido elaborada por uno de los **Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana** que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo la coordinación del equipo de investigación mexicano, que forma parte de la red institucional de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.

Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana

PAÍS	INSTITUCIÓN	COORDINACIÓN
Argentina y Uruguay	PIMSA (Argentina)	María Celia Cotarelo
Bolivia	CIDES – UMSA	Dunia Mokrani Chávez Pilar Uriona Crespo
Brasil	LPP - UERJ	Roberto Leher
Chile	DI - UARCIS	Juan Carlos Gómez Leyton
Colombia	Escuela Nacional Sindical	Guillermo Correa Montoya
Costa Rica	IIS - FCS - UCR	Sindy Mora Solano
Ecuador	Centro de Investigaciones CIUDAD	Mario Unda
Guatemala	FLACSO Guatemala	Simona Yagenova
México	FCPS - UNAM	Massimo Modonesi Lucio Fernando Oliver Costilla
Panamá, El Salvador, Nicaragua y Honduras	CELA “Justo Arosemena” (Panamá)	Marco A. Gandásegui (h)
Paraguay	Centro de Documentación y Estudios	Quintín Riquelme
Perú	Instituto de Estudios Peruanos	Ramón Pajuelo Teves
República Dominicana y Puerto Rico	CES “Padre Juan Montalvo” (Rep. Dominicana)	Octavio Figueroa
Venezuela	PROVEA	Marco Antonio Ponce

México

Cronología del conflicto social

Octubre de 2011

Sábado 1

En Monterrey, más de cien oficiales policiacos de Apodaca, Pesquería y Mina son detenidos por elementos del Ejército y la Marina, por su presunta relación con la delincuencia organizada. De acuerdo con fuentes policiales, los inculpados son trasladados a las seis horas a la Academia Estatal de Policía en Santa Catarina, durante un operativo en el que participan también la Policía Federal, la nueva policía Fuerza Civil y agentes ministeriales de Nuevo León.

Los servicios periciales de la Procuraduría General de la República (PGR) han elaborado más de mil dictámenes en busca de identificar a familiares de los 193 migrantes asesinados por la organización criminal ‘Los Zetas’ en marzo pasado, y sepultados en fosas clandestinas, en el municipio de San Fernando, Tamaulipas. La dependencia dice que “luego de la identificación plena a través de estudios periciales como protocolos de necropsia, obtención de perfiles genéticos, dictámenes de odontología, antropología, criminalística de campo, necrodactilia, fotografía y video; el fiscal de la Federación adscrito a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada entrega el cuerpo de otra víctima localizada en fosas clandestinas de San Fernando”.

Ejidatarios de San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, Chiapas, denuncian detenciones injustificadas, robos y torturas contra adherentes de la Otra Campaña en días recientes, perpetrados por la Policía Estatal Preventiva (PEP), en complicidad con los grupos oficialistas de la región. Señalan que Miguel Vázquez Deara fue capturado por la PEP el pasado 26 de septiembre sin orden de aprehensión. “Mediante montajes y testimonios falsos” intentaron culparlo de diversos asaltos en la carretera Ocosingo - Palenque. Al otro día, el acusado “apareció” en la Fiscalía Indígena, localizado por un abogado de la sociedad de transporte donde labora.

En Chilpancingo, el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan denuncia que después de un año de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitiera las sentencias por los casos de violación y tortura de que fueron objeto las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú por elementos del ejército, el gobierno mexicano no las ha cumplido. Tlachinollan da a conocer el viernes 30 por la tarde una “alerta de prensa” desde su sede en Tlapa, en la Montaña Alta: “de conformidad con ambas sentencias, el Estado mexicano deberá rendir un informe detallando sobre las acciones realizadas para dar cumplimiento a cada uno de los resolutivos ordenados por la CIDH”.

En Chimalhuacán, Estado de México, golpeadores encabezados por dirigentes de la Federación Social Unidos por la Justicia (FSUJ), de filiación priísta, desalojan a padres de familia que habían ocupado la escuela secundaria 678 ‘Juana de Asbaje y Ramírez de Santillana’, en demanda de que dicha organización priísta aclare el uso de las cuotas que aportan las familias de los educandos. El saldo es de 20 lesionados, ocho de los cuales son hospitalizados, incluidos cinco policías, la dirección del plantel escolar y nueve salones con daños, dos de ellos por fuego y cinco vehículos destrozados –incluida una patrulla municipal incendiada. Doce personas del grupo agresor fueron detenidas.

En San Cristóbal de Las Casas, cuatro integrantes de la Central de Organizaciones Campesinas y

Populares (COCP) se declaran en huelga de hambre frente al palacio de gobierno en Tuxtla Gutiérrez, para exigir la liberación de 12 compañeros presos desde hace más de un año por diversos delitos, informa su coordinador estatal, Pedro López Espinosa. Ocho de los inculcados están procesados por posesión de armas de fuego, robo con violencia, daños en propiedad ajena, posesión de drogas y fueron arrestados el año pasado en la comunidad Rincón Chamula y en la cabecera municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán.

En Mazatlán, el Instituto Sinaloense de las Mujeres (INSMUJER) anuncia que promoverá ante las instancias de procuración de justicia que los 81 crímenes contra mujeres ocurridos en los dos sexenios recientes no queden impunes, así como declara su directora, Elizabeth Ávila Carrancio.

Un conflicto social violento puede estallar en cualquier momento entre los indígenas zoques de San Miguel y Santa María Chimalapas y los campesinos chiapanecos ocupantes de más de 48 mil hectáreas de sus tierras comunales, además de que están talando una parte del área de conservación comunal decretada por los chimas en el Cordón del Retén, advierte el presidente del comité de vigilancia de la comunidad sanmiguelina, Álvaro Román Ríos. En entrevista explica que ambas comunidades indígenas decidieron rechazar la propuesta del gobierno federal de pagarles 90 millones de pesos para comprarles las 48 mil has. ocupadas por los ejidatarios chiapanecos. “Nuestra madre tierra no se vende, vamos a luchar para defenderla”, subraya.

Domingo 2

En la conmemoración del 43 aniversario de la matanza de Tlatelolco, miles de jóvenes, principalmente estudiantes de bachillerato y de las escuelas normales rurales, junto con representantes de diversas organizaciones civiles, sindicatos y de derechos humanos, marchan desde la Plaza de las Tres Culturas hasta el Zócalo capitalino. La manifestación, que de principio a fin estuvo fuertemente custodiada por elementos de las distintas corporaciones policiacas del Distrito Federal –casi todos desarmados–, exige castigo a los responsables de la masacre de 1968, alto a la militarización del país, mayores recursos económicos a la educación y alto a represión hacia los líderes sociales. Miles de afiliados a organizaciones sociales, estudiantiles y sindicales se manifiestan en ciudades principales de Oaxaca, Michoacán, Nuevo León, Chiapas, Sinaloa, Morelos y Guerrero para marcar el 43 aniversario de la matanza del 2 de octubre de 1968. Las movilizaciones se desarrollan en general sin incidentes mayores, si bien al término de la efectuada en Chilpancingo, Guerrero, un grupo de jóvenes –ninguno de ellos identificado como estudiante– causa daños a decenas de vehículos, rompe vidrios de edificios públicos y destruye 17 semáforos, lo que deja 37 detenidos, entre ellos un niño de diez años.

La titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), Dilcya García, reprueba que se criminalice a las mujeres por abortar. “Como Estado tenemos que garantizar todas las formas de prevención y opción para que las mujeres y los niños puedan vivir de manera plena todos sus derechos. Es un falso cliché que haya mujeres a las que les guste abortar o tener un embarazo no deseado”, señala en entrevista, luego de la inauguración de la sección Mujeres a Cuadro, del Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México.

En Chilpancingo, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (CODDEHUM) revela que el número de quejas por abusos cometidos por el ejército se incrementó a 91 en lo que va del año, las cuales fueron turnadas a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En un balance dado a conocer con motivo de su vigésimo primer aniversario, detalla que de 2005 al 30 de septiembre de 2011 sumaron 853 las denuncias por atropellos de elementos del ejército, corporaciones policiacas y

funcionarios de los gobiernos federal, estatales y municipales.

En Chilpancingo, campesinos de 55 comunidades serranas del municipio de Atoyac Álvarez anuncian que formarán una policía comunitaria, pues los gobiernos estatal y municipal no les garantizan seguridad. Dámaso Marcelo Saldaña, presidente del comité ejecutivo de la ruta de seguridad civil San Andrés - El Salto, municipio de Atoyac, anuncia que la nueva corporación podría empezar a operar en 2012.

En Oaxaca, más de una veintena de indígenas triquis, desplazados del municipio autónomo de San Juan Copala y miembros de la organización Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad (VOCAL), son detenidos por agentes de la policía municipal por ocupar un predio en la agencia municipal San Martín Mexicapan, perteneciente al municipio de Oaxaca de Juárez. Los activistas son llevados al cuartel y por la tarde quedan en libertad ante el perdón otorgado por el propietario del terreno, José Manuel Maza, sobrino del director del Instituto Estatal de Protección Civil, Manuel Maza Sánchez.

En Guadalajara, la dirigencia del Sindicato de Trabajadores Unidos de Honda de México reclama al presidente de la empresa japonesa, Isamu Yamaki, un aumento salarial de emergencia de 30% a los obreros de la planta de El Salto, Jalisco. En una carta dirigida al empresario, firmada por José Solorio Alcalá, representante de los trabajadores, argumenta que éstos reciben en promedio 4 mil pesos mensuales, ingreso que los ubica entre los peor pagados de la industria automovilística. Asimismo señala que la planta de El Salto vende toda su producción y la empresa planea realizar una inversión multimillonaria para construir una fábrica en Celaya, Guanajuato.

Lunes 3

La violencia generada por grupos criminales –que han ocupado y controlan pueblos enteros– ha provocado que de 2007 a 2010 más de 230 mil ciudadanos, principalmente de entidades del norte, hayan huido de sus lugares de origen o residencia, lo que ha impactado en actividades comerciales, industriales y hasta habitacionales, ya que cientos de viviendas construidas por instancias gubernamentales y privadas se encuentran abandonadas. Lo anterior forma parte de un informe del Observatorio de Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para Refugiados, así como de datos proporcionados por funcionarios del Gabinete de Seguridad Nacional.

Organizaciones civiles de Guerrero y de Chiapas denuncian en conferencia de prensa que debido a la violencia del narcotráfico y la militarización del país, “muchas comunidades son obligadas a abandonar sus casas, sus tierras y sus cultivos”. Lorena Paz, del Instituto para el Desarrollo Rural Maya, destaca que en la sierra guerrerense de Petatlán la violencia del ‘narco’, del crimen organizado, de los cacicazgos, del ejército, de grupos paramilitares y de guerrilleros, “no es novedad”. Desde hace más de una década los medios de comunicación han difundido información y denuncias sobre la inseguridad en esta región, dice la activista, quien asevera que desde marzo pasado “la violencia llegó a la cuenca del río Coyuquilla y en julio a Petatlán. De esta última cuenca, familias de 15 comunidades han sido forzadas a salir de sus pueblos por las amenazas y la violencia del narcotráfico”.

En Querétaro, minas de la zona serrana del estado arrojan a ríos y otros cuerpos de agua sedimentos de mercurio y otros metales, lo que contamina agua, aire y suelos y pone en riesgo la cadena alimentaria de la reserva de la biosfera de la Sierra Gorda, que abarca 383 mil has, indican Miguel Ángel Rico Domínguez, investigador del Centro de Estudios Académicos sobre Contaminación Ambiental de la

Universidad Autónoma de Querétaro, y Roberto Pedraza Ruiz, asistente técnico del Grupo Ecológico Sierra Gorda.

Martes 4

En Morelia, transportistas afiliados a la Mutualista Benito Juárez, quienes se declaran simpatizantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), toman la casa de campaña del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al gobierno de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa. El dirigente estatal del *tricolor*, Antonio Guzmán Castañeda, califica esta ocupación de “acto desesperado” del PRD, que se ha dado cuenta de que no le favorece la intención de voto para las elecciones del 13 de noviembre. Los perredistas buscan “inhibir a nuestros candidatos que han sido respetuosos de los sistemas gremiales”, afirma.

La oposición de vecinos y comerciantes a la construcción de la línea 4 del Metrobús provoca que más de un centenar de granaderos se aposten, en las calles Belisario Domínguez y República de Venezuela, desde el Eje Central hasta República de Argentina, con el fin de abrir cuatro frentes de obra, donde con el apoyo de rotomartillos y retroexcavadoras se levanta el pavimento en menos de 12 horas. Las agresiones de granaderos a más de una veintena de personas durante la noche del lunes, de acuerdo con representantes vecinales, los lleva a presentar una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), a la que se asigna el expediente 11/D/6054 en la primera visitaduría, aunque algunos dicen que acudirían a presentar una denuncia ante la procuraduría capitalina.

Sin orden judicial y sin identificarse, funcionarios del Gobierno del Distrito Federal, acompañados de granaderos, intentan desalojar a 18 familias del predio marcado con el número 40 de la calle Justo Sierra, en el perímetro A del Centro Histórico (CH), denuncian los ocupantes del inmueble. Los servidores, pese a que argumentan que un actuario y un notario público darían fe de la acción, no pudieron acreditar la personalidad jurídica. Sin embargo, los habitantes del predio identifican a trabajadores de la Subdirección de Programas Delegacionales, a cargo de Jesús Romero, y comerciantes ambulantes de la zona.

Las escuelas autónomas zapatistas de comunidades de los altos de Chiapas, como San Marcos Avilés, Tentic y Las Mercedes, “son agredidas repetidamente por grupos oficialistas, lo cual impide su funcionamiento normal y afecta no sólo la escolaridad de los niños indígenas, sino la convivencia comunitaria”. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (FRAYBA) y el Movimiento por Justicia del Barrio –de la Otra Campaña en Nueva York– convocan a una “declaratoria mundial” en defensa del ejido San Marcos Avilés, municipio de Sitalá: “El Estado mexicano, por medio de los actores políticos y organizaciones progubernamentales, ha tratado de dismantelar el proceso que va en cumplimiento, con su práctica cotidiana, de los acuerdos de San Andrés en su proyecto de autogobierno, justicia, trabajo, salud, tecnología apropiada y educación”.

Miércoles 5

Autoridades de San Dionisio Pueblo Viejo, Oaxaca, demandan a las autoridades estatales suspender la apertura de caminos y la construcción de muelles que llevan a cabo la empresa española Preneal y su filial mexicana Mareña Renovables. Explican que el 8 de noviembre de 2004 el comisariado de bienes comunales otorgó, sin consentimiento de los comuneros, mil 643 has a dicha empresa para la instalación de 102 aerogeneradores de energía eléctrica que abastecerán a las empresas Coca-Cola,

Oxxo, Heineken y Cuauhtémoc Moctezuma, de Grupo Femsá. Por cada hectárea, la empresa española pagará 100 pesos anuales durante un periodo de 30 años, que podrá prorrogarse por un tiempo similar.

Dirigentes de organizaciones sociales como el Movimiento de Unidad Social por un Gobierno del Pueblo, el Movimiento Nacional Organizado 'Aquí Estamos' y el Movimiento Hacia la Cuarta Transformación de la Ciudad de México convocan a constituir un bloque progresista de izquierda para exigir a los partidos políticos de esta misma orientación incluir a la sociedad civil en la definición de sus plataformas y del candidato a la jefatura de Gobierno del Distrito Federal. En su convocatoria, hacen un llamado a evitar que la izquierda en la ciudad "pierda ganando" con un candidato afín a la derecha y anuncian el acto constitutivo del movimiento para el domingo 9; confirman su presencia como invitados el secretario del Trabajo y Fomento al Empleo, Benito Mirón Lince, y el ex secretario de Desarrollo Social, Martí Batres Guadarrama, ambos aspirantes perredistas a la candidatura a jefe de Gobierno.

Jueves 6

En Acapulco, integrantes del magisterio de Acapulco y Coyuca de Benítez critican al gobierno estatal por minimizar la tercera movilización efectuada en la Costera Miguel Alemán el pasado 5 de octubre, en protesta por la alta incidencia en secuestros, extorsiones y robo de vehículos contra el gremio, y en la que participaron 4 mil personas. Los maestros en paro informan que buscarán llevar el caso de la inseguridad en Acapulco a organismos internacionales, pues critican que después de la primera marcha de los docentes, efectuada el 14 de septiembre pasado, no ha habido diálogo del gobierno estatal con la "verdadera" base magisterial.

"México no aguanta más, se precipita en el desastre de la violencia cotidiana y generalizada, en el desempleo, el hambre, la violación a derechos fundamentales, la destrucción del tejido social y la pérdida de valores humanos", asegura Miguel Concha, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria. Durante el foro "La crisis global, su impacto y alternativas en México", realizado en el auditorio Ricardo Flores Magón de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Concha indica que en cinco años del actual gobierno el número de pobres creció en 10 millones, los ingresos de los trabajadores disminuyeron un tercio, el desempleo aumentó en 3 millones, hay 7 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan, además de que existe una "guerra" absurda que vulnera los derechos ciudadanos.

En Monterrey, familiares de dos de los 52 muertos durante el incendio del casino Royale piden a legisladores federales de la Comisión de la Verdad, que visitaron los restos del inmueble, que les permitan realizar su propio peritaje. Samara Pérez Muñoz, sobreviviente y madre de Brad Xavier Moraima Pérez, quien falleció en el ataque, pide evitar la demolición del edificio, como se ha rumorado, sin que "siquiera las procuradurías general de la República y del estado hayan entregado el peritaje. Tenemos derecho a exigir un peritaje propio; no podemos confiar en las autoridades", dice. Demanda "la caída de todas las autoridades que permitieron que este lugar fuera una jaula de muerte" y afirma que a un empleado fallecido le robaron sus tarjetas de crédito, una de las cuales fue utilizada cuatro días después del incendio.

En San Cristóbal de las Casas, en comunidades tzeltales y tzotziles de los Altos se ha desatado una persecución contra las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), y en particular contra la educación autónoma. Los hostigamientos, desencadenados por primera vez en junio y julio de 2010, se recrudecen ahora como síntoma de una inminente fiebre electoral que está

adquiriendo en la región un claro carácter contrainsurgente. Arguyendo diferentes pretextos, grupos oficialistas, bajo influjo clientelar de precandidatos y partidos, pretenden despojar a los zapatistas de sus tierras. Sucede en la selva, la zona Norte, Chilón y Ocosingo, en la forma de artificiales disputas por las tierras recuperadas por los zapatistas después de 1994.

En Tepetlaoxtoc, pobladores de San Pablo Xolalpan que demandaban servicios públicos irrumpen en la presidencia municipal, donde causaron destrozos, dañan dos patrullas y lesionan a tres funcionarios, entre ellos el alcalde, Amado Islas Espejel. La Agencia de Seguridad Estatal informa que la mañana de este jueves unos cien habitantes arriban a la alcaldía y exigen apoyo para varias escuelas, así como obras de pavimentación, bacheo, perforación de dos pozos y seguridad pública. Se quejan de que no han sido tomados en cuenta por el ayuntamiento.

En Oaxaca, en demanda de la entrega de tres millones de pesos de cuotas sindicales, el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (STAUO) inicia una huelga el mediodía. El paro deja sin clases a más de 28 mil estudiantes.

En Campeche, trabajadores de la plataforma Akal-C2 de Petróleos Mexicanos, ubicada en la sonda de Campeche, se declaran en huelga de hambre la mañana del miércoles en protesta por la mala calidad de los alimentos y servicios que les proporcionan las empresas Prosegosa y Proveedora y Suministros del Golfo S.A de C.V, informa la paraestatal, pero asegura que la protesta se resolvió el mismo día y no afectó la extracción de hidrocarburos.

Viernes 7

En San Cristóbal de las Casas, este viernes cumplen nueve días en huelga de hambre los presos indígenas de la Otra Campaña en el Centro de Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) número 5 de este municipio. A las siete personas en ayuno total desde el 29 de septiembre, y cuatro en ayuno de 12 horas diarias, se han sumado dos, una en el CERSS 14 de Cintalapa, El Amate, y otra en el 6 de Motozintla. La asamblea de adherentes a la Otra Campaña en Chiapas se pronunció el jueves 6 por la liberación de los “presos en lucha”, quienes permanecen en el patio del penal sin ingerir alimentos. El pasado día 3, Juan Collazo Jiménez, preso en Motozintla y miembro de los Solidarios de la Voz del Amate, y Enrique Gómez Hernández, de la misma organización en el penal del Amate, se declaran en ayuno y se suman a las exigencias de los huelguistas.

En Morelia, la comisión por la defensa de los bienes comunales de la población nahua de Santa María Ostula, municipio de Aquila, informó que el activista Pedro Leyva Domínguez, participante en la lucha por la recuperación de tierras contra los pequeños propietarios de la comunidad de La Placita, fue asesinado la noche del jueves “por un grupo de paramilitares”. El cuerpo del miembro de la guardia comunal de Ostula, y representante ante el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, fue encontrado en el poblado de Xayakalan, perteneciente al predio que los comuneros de Ostula recuperaron el 29 de junio de 2009, tras una larga lucha con los pequeños propietarios. El crimen de Leyva Domínguez ocurre a unos días que la comunidad concluya una consulta interna a fin de analizar y tomar decisiones en torno de la negociación que el gobierno de Michoacán y la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), mediante el Programa de Atención a Conflictos Sociales del Medio Rural, sostienen con las partes para intentar dar certeza jurídica al poblado, sobre la posesión y propiedad del territorio y lograr una compensación económica a los pequeños propietarios que se dicen afectados.

En Oaxaca, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) presentará el recurso de

inexistencia de huelga en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para obtener la declaración de ilegalidad de la suspensión de labores del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (STAUO), informa el abogado de la institución, Avelino Vásquez Luis. Subraya que se propuso al sindicato la elaboración de un padrón de maestros para entregar las cuotas. El secretario general del STAUO, Agustín Hernández Monroy, dice que la rectoría retiene las aportaciones por intereses políticos y no por una decisión legal.

En Morelia, el líder estatal de la organización Nación Purépecha, Abundio Marcos Prado, dice que el consejo general del Instituto Electoral de Michoacán debería ser más abierto y sensible, pues existen normas jurídicas internacionales que respaldan a la comunidad de Cherán, para que pueda elegir sus autoridades municipales por el sistema de usos y costumbres. La noche del miércoles 5 el barrio tercero de Cherán lanzó la convocatoria para elegir representantes según sus normas ancestrales. Entre los lineamientos se indicó que el consejo comunal estará integrado con siete representantes, y se estipuló que los aspirantes debieron participar como activistas desde el inicio en la lucha contra el crimen organizado.

Como parte de la estrategia para evitar la construcción del proyecto carretero Arco Sur, 60 empleados de la delegación Milpa Alta se preparan como “brigadistas informativos”. Convocados por las autoridades de la demarcación, los brigadistas llevarán a cabo una campaña en las 12 comunidades de la delegación para repartir casa por casa folletos en los que se explican las consecuencias ambientales, en caso de que se concrete el proyecto del gobierno federal.

Sábado 8

En México 45% de las víctimas de trata son niñas indígenas, informan Rosi Orozco, presidenta de la Comisión Especial para la Lucha contra la Trata de Personas y Xavier Abreu Sierra, director de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), quienes expresan la urgencia de contar con una ley general que combata este crimen que cada año arrebató la infancia a 20 mil niños mexicanos que son enganchados para el comercio sexual. En el contexto de la vigésima séptima sesión ordinaria del Consejo Consultivo de la CDI, la diputada señala que, aunque en 2007 se promulgó la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, existen importantes vacíos, sobre todo que en las indagatorias no se “revictimice” a las niñas, se sancione no sólo a los tratantes, sino también a los clientes y se atienda a las víctimas desde que son liberadas hasta su reinserción social.

Este martes se cumplen dos años del cierre de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) por un decreto presidencial que dejó sin empleo a 44 mil trabajadores. Tras 24 meses de la entrega de la operación del suministro de energía eléctrica de la zona central del país a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el gobierno federal y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) discuten acerca del costo de una eventual reinserción laboral para cerca de 16 mil trabajadores que no han aceptado su liquidación.

En San Cristóbal de las Casas, Javier Sicilia manifiesta el “respaldo moral y político a todas las bases de apoyo zapatistas” por parte del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD). En un mensaje leído esta mañana por la Comisión Acciones de Resistencia del MPJD, en conferencia de prensa, Sicilia expone: “durante el tiempo que estuvimos en el estado de Chiapas, al paso de la Caravana del Sur [en septiembre pasado], fuimos informados de las amenazas y agresiones que padecen las bases de apoyo zapatistas y en particular de la comunidad de San Patricio, municipio autónomo La Dignidad, correspondiente al municipio oficial de Sabanilla”.

Integrantes del Centro Pro se reúnen esta semana con los relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de los derechos al agua, a una vivienda digna y de la situación de los defensores de los derechos humanos. El objetivo de la reunión, que se llevó a cabo en Ginebra, Suiza, es denunciar la actuación del gobierno capitalino durante la construcción de la Supervía Poniente. Stephanie Erin Brewer, coordinadora del área internacional del Centro Pro, explica que el encuentro se derivó de un documento que enviaron los centros Fray Francisco de Vitoria, Pro y Litiga Ole a diversos relatores especiales de la ONU, entre ellos Margaret Sekaggya, de defensores de derechos humanos; Raquel Rolnik, vivienda; Anad Grober, salud; Catarina de Albuquerque, agua y John Ruggie, relator especial sobre las empresas transnacionales.

Domingo 9

En San Cristóbal de las Casas, cientos de indígenas afiliados a 15 organizaciones sociales toman la madrugada de este domingo el estacionamiento y otras áreas del mercado Chiapas Solidario, inaugurado este sábado. Durante la apertura, varios locatarios pretenden retener al administrador Francisco Martínez Pedrero, inconformes por el reparto de las 18 bodegas; en protesta lanzan piedras y palos, por lo que la alcaldesa Cecilia Flores Pérez es rescatada por la policía municipal.

La caravana motociclista que se llevó a cabo ayer para sensibilizar a los automovilistas sobre el respeto para este vehículo, reúne a un grupo aproximado de mil 800 personas a bordo de mil 200 motocicletas que salen de Ciudad Universitaria hacia el Monumento a la Revolución, por lo que elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF) efectuaron cortes a la circulación, lo que afectó el tránsito sobre Insurgentes Sur y Centro.

Lunes 10

En Acapulco, un centenar de profesores adscritos a las zonas escolares 29 y 30 de la región educativa Acapulco - Coyuca de Benítez de la Secretaría de Educación Guerrero protestan y bloquean por más de siete horas, de forma intermitente, la carretera federal Acapulco - México, a la altura de la comunidad de Xaltianguis, ubicada en el km 50 de dicha vía federal, en demanda de mayor seguridad para los planteles del norte de Acapulco. Los docentes inconformes, quienes se plantan afuera de la primaria Rufo Figueroa y piden omitir sus nombres, subrayan que “no nos dejaron otra alternativa; aquí en Xaltianguis se vive una situación especial por la inseguridad, ya no podemos dormir tranquilos, hay civiles que han desaparecido y otros que se han ido del pueblo. Hemos recibido amenazas de extorsión, se han presentado secuestros; nuestros niños valen lo mismo que los de Acapulco”. Por separado, profesores de Acapulco en paro laboral desde el pasado 25 de agosto expresan que probablemente retornen a las aulas el próximo lunes, si el operativo federal ‘Guerrero Seguro’ anunciado por autoridades federales, comienza a dar resultados. Sin embargo, confirman que la marcha programada para el próximo miércoles por la avenida Costera Miguel Alemán sí se llevará a cabo.

La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOC) y la Agencia para el Desarrollo Internacional del gobierno de Estados Unidos (USAID) trabajarán juntos en programas para abatir la pobreza en comunidades prioritarias en México durante el próximo año. El embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, y el secretario de Desarrollo Social, Heriberto Félix, hablan de este acuerdo durante el encuentro. El diplomático estadounidense indica que “por medio de la Agencia para el Desarrollo Internacional, el gobierno de Washington respalda la meta de SEDESOC de eliminar la pobreza mediante el desarrollo integral, incluyente y humano, y mejorando las condiciones sociales,

económicas y políticas tanto en áreas rurales como urbanas”.

En San Cristóbal de las Casas, al cumplirse 11 días de la huelga de hambre de siete presos en el penal de San Cristóbal de las Casas, y seis reclusos más en ayuno de 12 horas diarias, sus familiares se suman a su lucha con un plantón en el atrio de la catedral y declaran en conferencia de prensa: “no nos levantaremos hasta no ver a nuestros familiares libres”. Éstos purgan condenas de hasta 45 y 60 años “a pesar de que acreditan su inocencia”. El plantón indefinido dio inicio el día 8, “para que conjuntamente exijamos la justa e inmediata liberación de cada uno de ellos”, expresan las muy modestas familias indígenas, de distinto origen y con historias particulares, reunidas por la experiencia de injusticia que condujo a prisión a las personas que ayunan, y por las malas condiciones carcelarias que comparten.

En Acapulco, representantes del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG) exigen la destitución de su secretario general, Anselmo Sotelo Albarrán, así como de su secretario de finanzas, Panuncio Solano Escalante, a quienes acusaron de gastar 960 mil pesos de manera irregular. El dinero provino de cuotas sindicales y los descuentos solidarios aplicados por el STAUAG para utilizarse en caso de huelga. Los recursos estaban en una cuenta denominada Fondo de Resistencia del Emplazamiento a Huelga 2010. Once de 17 secretarios del STAUG ofrecen una conferencia de prensa en la cual aseguran que el desfalco afecta a dos mil 400 profesores de 42 preparatorias, facultades y unidades de posgrado.

Martes 11

Cuando hace tres meses comenzó el diálogo entre el gobierno federal y el MPJD las expectativas de frenar la violencia eran mayores, pero en este periodo hubo diez mil muertos más y hay una gran deuda todavía, sostiene Pietro Ameglio, vocero de Javier Sicilia. Explica que el próximo viernes 14 a las 9 de la mañana en el castillo de Chapultepec será la segunda reunión, que tendrá una duración de dos horas, y hasta el momento está confirmada la asistencia del presidente Felipe Calderón. Después de este encuentro, un representante del movimiento participará en el diálogo de las autoridades con otras organizaciones. Entrevistado vía telefónica, Pietro Ameglio dice que entre el primer diálogo y este segundo con el gobierno federal “ha habido 10 mil muertos. La guerra, las desapariciones, las muertes no paran. Éste es el objetivo número uno y la presión hacia la autoridad, por que se detenga este nivel de muerte y exterminio que tenemos en el país”.

Miércoles 12

Al menos 150 policías municipales antimotines, y en menor medida elementos estatales de Guerrero, desalojan este miércoles a maestros, empleados del sector salud y padres de familia que bloquean ambos carriles de la avenida Costera Miguel Alemán de Acapulco, quienes por la mañana marchan y se plantaron frente al Centro Internacional, donde exigen entrevistarse con un representante del gobierno estatal, a quien pretendían exigir protección para la periferia del municipio. El desalojo, por el cual resultaron heridos los maestros Azucena de Jesús Peñaloza, Reinel Lagunas, José Juan Campos y Andrés Sánchez, ocurre alrededor de las cinco de la tarde, después de que los docentes permanecen unas cinco horas en plantón sin ser atendidos por autoridad alguna.

Agrupaciones del movimiento nacional campesino “El hambre no espera” se pronuncian en contra de que el Procampo sea trasladado a la Secretaría de Desarrollo Social para, presuntamente, mejorar su impacto redistributivo y combatir mejor la pobreza rural. Advierten que no permitirán el recorte al

presupuesto del programa de más de 3 mil millones de pesos, como lo indica la propuesta del ejecutivo. Al entregar su propuesta de presupuesto para el sector agropecuario a la Cámara de Diputados, apuntan que dicho programa debe elevarse a rango de ley e impedir su uso discrecional y político electoral, y con ello asegurar la permanencia del programa hasta 2020. Con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se había previsto que dicho programa estaría vigente hasta 2008, pero por acuerdo presidencial su existencia se programó hasta el próximo año.

Estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) toman simbólicamente la nueva cafetería para manifestar su rechazo a los “precios altos” y demandan la instalación de un comedor subsidiado. Las autoridades del plantel se dicen dispuestas a dialogar para llegar a un acuerdo con los quejosos. Carlos Cario, estudiante de la FES, informa que tras realizarse una asamblea en la explanada principal, “200 jóvenes” decidieron tomar este comercio ya que “a muchos compañeros les es imposible pagar por una comida” en ese sitio.

El campesino tzotzil Juan Díaz López ha sido víctima de ultrajes, tortura y encarcelamiento injusto en dos ocasiones. Una en 2004 y otra apenas en mayo pasado. Su caso ilustra lo que puede significar en Chiapas la impartición de justicia. De 28 años, poblador del paraje Chenok, en Santa Marta, Chenalhó, pertenece a la organización Voces Inocentes de la Otra Campaña y aún espera sentencia. Este día cumple 14 en huelga de hambre en el penal número 5 de San Cristóbal de Las Casas.

En el Día de la Raza, miles de personas marchan en Michoacán y Chiapas para demandar que se aprueben leyes de cultura y derechos indígenas, libertad para elegir autoridades por usos y costumbres, y para recordar que 519 años después de la invasión española, el saqueo continúa, ahora por compañías transnacionales. Más de 2 mil personas, la mayoría purépechas, aunque también hubo representantes nahuas, mazahuas y otomíes, marchan desde el monumento al general Lázaro Cárdenas y se concentran frente a palacio de gobierno en Morelia, Michoacán.

Con el apoyo de granaderos, la medianoche del martes 11 ingresaron maquinaria y camiones de volteo de la empresa OHL - Copri al área natural protegida de La Loma, en la delegación Álvaro Obregón, para empezar la construcción de dos túneles y caminos de acceso a la Supervía Poniente, y retirar 183 mil toneladas de material de construcción, informa el secretario de Obras y Servicios, Fernando Aboitiz, quien aclara que “no se trató de sorprender a nadie, sino garantizar una incursión pacífica”. Sin embargo, vecinos de la colonia Torres de Potrero señalan que alrededor de 500 uniformados se apostaron en la calle Fresno, donde se encuentra uno de los accesos al parque, pese a que el gobierno capitalino, en un documento, se comprometió a no ingresar transporte y maquinaria pesada por esa vía.

Jueves 13

La Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) anuncia que el próximo miércoles 19 sus integrantes efectuarán marchas en Acapulco y Chilpancingo, en demanda que el gobierno garantice seguridad a los profesores, pues advierte que el movimiento no termina con el desalojo efectuado anteayer contra maestros que bloqueaban la avenida Costera Miguel Alemán. Víctor Hugo Ocampo Rodríguez, de la Comisión Política de la CETEG, condena la represión contra los maestros que bloqueaban la vía acapulqueña. “Vuelven el autoritarismo, el diálogo falso, la simulación y el doble discurso como características palpables del gobierno del perredista Ángel Heladio Aguirre Rivero”, dice.

En Ciudad Juárez, transportistas, maestros, madres de familia y empresarios protestan durante la visita

del presidente Felipe Calderón. Los primeros, a bordo de 50 unidades, se congregan en avenida Tecnológico y Granjero, por donde pasa el mandatario, y manifiestan su repudio por las alzas a gasolinas, diesel y a los productos de la canasta básica. En el museo La Rodadora esperan a Calderón maestros y empleados del Sindicato del Tecnológico de Juárez, quienes le exigen mejoras en los servicios médicos y equipamiento de clínicas. Elementos de seguridad impiden a varias madres acercarse al auditorio donde se encuentra el titular del Ejecutivo, a quien pretenden exigir justicia ante la desaparición de sus hijas.

En Cuernavaca, la mayoría de los familiares de las más de 40 mil personas asesinadas durante la lucha contra el crimen organizado han sido “revictimizadas”; viven el primer sacrificio cuando se da muerte a uno de sus seres queridos, y el segundo, cuando ni siquiera son escuchadas ni reconocidas como víctimas por las autoridades, asegura Eddie Mendoza, experto en justicia restaurativa en delitos violentos del Departamento de Justicia Criminal en Texas, Estados Unidos. Entrevistado después de presentar una ponencia en el congreso internacional “Impactos y escenarios de la reforma penal, mediación penal y mecanismos alternativos. Proceso de duelo de la víctima”, dice que para esas familias “el dolor es mayúsculo, porque muchas veces no saben quién mató a su pariente, por qué, ni cómo ocurrió el crimen”.

En Ciudad Juárez, una reportera de la fuente policíaca del periódico local *El Diario* fue amenazada por un militar durante un operativo. El oficial le dijo, en referencia a su actividad: “luego por eso amanecen muertos”. El rotativo indica que el hecho ocurrió el miércoles anterior en la confluencia de la avenida Insurgentes y Fray Marcos de Niza, donde una reportera y un fotógrafo intentaron captar imágenes y obtener datos de un despliegue militar, momento en que los abordaron soldados que viajaban en los vehículos números 0826356, 0826302 y en “otro más”. Los militares tomaron fotos y video de los comunicadores. Un militar que se identificó como capitán Díaz les ofreció una disculpa y solicitó que la acción no fuera difundida; aseguró que se atendía una denuncia anónima, pero el *operativo* terminó sin arrestos ni droga confiscada.

Alfredo López Jiménez, en huelga de hambre desde el 29 de septiembre en el penal de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y su esposa, Rosa López Díaz, en ayuno, son sentenciados a 27 años de prisión por un secuestro que nunca existió. Originario de Chimhukóm, municipio tzotzil de Mitontic, Alfredo fue detenido junto con Rosa el 10 de mayo de 2007 en San Cristóbal por hombres que no se identificaron y los torturaron. Alfredo, solidario de la Voz del Amate, de la Otra Campaña, narra: “cuando habíamos pasado por torturas, nos dijeron que nos estaban llevando por prestarle la casa a un amigo, que había ido ahí con Claudia Estéfani Gómez Méndez, a quien mi primo Juan Collazo había enamorado y ‘robado’, que según las costumbres es cuando una muchacha se va con un hombre sin que éste pague el dote a los padres; esto no es un secuestro. La hermana de Claudia anteriormente había hecho lo mismo con otro hombre”.

Viernes 14

La junta de buen gobierno (JBG) Hacia la Esperanza, de La Realidad Trinidad, Chiapas, denuncia amenazas de muerte con arma de fuego, robo de productos, despojo e intento de homicidio contra bases de apoyo zapatistas del poblado Che Guevara, o Rancho La Paz, en el municipio autónomo fronterizo Tierra y Libertad, por personas de rancherías cercanas protegidas por funcionarios gubernamentales. Los pasados días 6, 7 y 8, Eladio Pérez y Filadelfo Salas, familiares suyos y seis personas más entraron a robar dos hectáreas de café, y otro tanto fue cortado por Olegario y Ángel Roblero. “Los cafetales son trabajados por nuestros compañeros, pero estas personas lo están cortando verde en el terreno

recuperado Che Guevara, ubicado en el municipio oficial de Motozintla”, expone la JBG.

En Monterrey, el vocero de seguridad del gobierno de Nuevo León, Jorge Domene Zambrano, señala que, en lo que va del año, 48 internos han muerto en penales del estado, incluyendo los siete fallecidos el pasado jueves 13 en el reclusorio de Cadereyta, debido a la rivalidad entre los grupos del crimen organizado en las calles y que han trasladado también a los centros penitenciarios. Señala que el crecimiento poblacional de 3% mensual en las cárceles que mencionó el gobernador Rodrigo Medina en su segundo informe de labores, agudiza el problema, lo que implica que se tenga que ingresar a 200 internos en los distintos penales del estado en ese periodo. Precisa que en promedio el sobrecupo de los penales del Topo Chico, Apodaca y Cadereyta es de 36%, pero sería muy irresponsable que la autoridad no actuara para capturar y remitir a los reclusorios a quienes incurrir en acciones delictivas. A fin de evitar enfrentamientos en los reclusorios, enfatizó, se han reubicado este año 400 reos peligrosos en coordinación con autoridades federales. Otra medida que se pretende es que el penal de Apodaca sea federal, pero hasta la fecha no se ha recibido respuesta de la Secretaría de Gobernación. Dice que durante la riña del jueves en la que participaron 70 reos, murieron siete y 14 resultaron heridos, ya fueron identificados los fallecidos y en la madrugada del viernes fueron trasladados 27 reos del fuero común, de la cárcel distrital de Cadereyta al penal del Topo Chico.

En Ciudad Victoria, enfermeras del hospital infantil de esta capital exigen frente al palacio de gobierno basificación y aumento de salario. Yesenia Carmona, una de las manifestantes, dice que a 80 trabajadoras les urge que la Secretaría de Salud satisfaga sus demandas. Señalan que el año pasado lograron el pago de vacaciones, bono de fin de año y servicio médico para sus hijos en el propio nosocomio donde laboran, pero “con mil 675 pesos de cada quincena apenas podemos pagar la renta, el transporte y mal comemos. El director del centro hospitalario, Guillermo Morris Garza, ha dicho que ya llevamos mucha ventaja y si queremos busquemos empleo en otro hospital. Hay compañeras que tiene 10 años de eventuales y de pronto llegan otras enfermeras y en ocho meses obtienen la base”, comenta una enfermera. Morris Garza dice que el hospital es de tercer nivel, tiene ocupación de 90% y da servicio de primer mundo. La administración no está en posibilidades de cubrir la demanda porque los recursos son administrados por la Secretaría de Salud. El 30% de los 400 trabajadores, dice, carecen de base y el pago más alto de una enfermera sin especialidad es de mil 800 pesos, precisa.

El Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM) anuncia que el primero de noviembre estallará la huelga en la máxima casa de estudios, en caso de que no sea atendida su exigencia de 20% de aumento salarial. El comité ejecutivo informa también que solicita frenar la contratación de personal de confianza, de honorarios o de servicio social, que ha “invadido” las funciones de los trabajadores de base.

Sábado 15

En Paraje Montero, Malinaltepec, Guerrero la defensa de los territorios indígenas, de sus recursos naturales y de su cultura, frente al embate de megaproyectos mineros y de infraestructura, se suma las tareas que desde hace 16 años realizan la Policía Comunitaria y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC) para garantizar, de forma autónoma, la seguridad y justicia en 76 pueblos indígenas de 10 municipios de esta entidad federativa. Ni la lluvia ni el mal estado de la carretera impiden que se den cita aquí, durante dos días, unas mil 200 personas para los festejos por el 16 aniversario de la CRAC-PC, que es ocasión para revisar los principales problemas que afectan a la región y proponer, en reflexión colectiva, formas para enfrentarlos. La convocatoria al acto, signada también por la regional Centro-Pacífico del Congreso Nacional Indígena (CNI-RCP), pone en el centro

de la discusión la defensa de los territorios de los pueblos originarios ante el embate de casi 800 transnacionales, principalmente mineras, a las que el gobierno mexicano ha entregado concesiones sobre 25% del territorio nacional.

En San Cristóbal Las Casas, los indígenas Juan Jiménez Pérez y Manuel Jiménez Heredia, originarios de Mitzitón, adherentes de la Otra Campaña, que pasaban nueve años en prisión, son liberados como resultado de los trabajos de la Mesa de Reconciliación, integrada por los tres poderes del estado y el Consejo Estatal de los Derechos Humanos, informan pobladores de esa localidad. Los tzotziles, que salieron el viernes del penal de San Cristóbal, ubicado a 20 km de esta ciudad, son recibidos con júbilo por sus familiares y por los habitantes agrupados en la Otra Campaña en Mitzitón, quienes habían protestado por lo que consideraron una detención “injusta”. Las autoridades envían su agradecimiento al gobernador Juan Sabines Guerrero por la liberación.

En Mazatlán, en protesta porque el gobernador no ha cumplido con el pago de indemnizaciones a los desplazados por la construcción de la presa Picachos, unas 500 personas participan en dos marchas por ambos carriles de la carretera internacional, donde confluyeron los afectados de los municipios de Mazatlán y Concordia. El líder de los perjudicados, Atilano Román, encabeza la protesta, que inicia a las 9 horas y dura hasta la tarde. Uno de los bloqueos se realiza a la altura del puente de Urías, en la salida sur de la ciudad hasta el aeropuerto, donde se encontraron con otro grupo que había salido de Villa Unión.

Domingo 16

En nombre del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia Édgar Cortez refiere que el diálogo entre el presidente Felipe Calderón y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que encabeza el poeta Javier Sicilia, “fue más bien un desencuentro. No hubo resultados; las víctimas iban con expectativas de justicia y se encontraron con la cerrazón del Ejecutivo federal”. Agregó que en esa reunión “víctimas y organizaciones salieron sin respuestas y sin soluciones. Se repite ese ciclo en que en el mejor de los casos te reciben, pero no te escuchan ni te resuelven. Un Ejecutivo está en ese papel para responder a la ciudadanía, pero lo que vemos es sólo cerrazón y desdén”.

En Paraje Montero, Malinaltepec, Guerrero, “El pueblo que se mueve obtiene frutos”, manifiesta el sacerdote católico Mario Campos Hernández durante la misa realizada en la cancha de basquetbol de esta comunidad, con motivo del 16 aniversario de la CRAC-PC. El religioso, uno de los tres que ofició en la misa ante representantes de policías comunitarios de 76 pueblos de 10 municipios de esta entidad, donde ya opera el sistema de justicia de la CRAC-PC, se refiere con esas palabras a la lucha que han dado 40 municipios de Guerrero, conjuntamente con organizaciones de San Luis Potosí, Querétaro, Chiapas, Tabasco y Oaxaca, contra las altas tarifas eléctricas que cobra la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Tras las manifestaciones del movimiento ‘indignados’ en 951 ciudades del mundo, un sector de quienes participan en la movilización del sábado en la ciudad de México acuerda acampar frente a las instalaciones de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), con el propósito de mostrar el rechazo al “símbolo nefasto de todos los métodos de especulación financiera en el país”. Se unen también a las demandas del profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Edur Velasco, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, quien desde el 11 de octubre mantiene una huelga de hambre en la BMV, para acompañar “su lucha” y demandar un incremento en el presupuesto destinado a las universidades públicas y mayores oportunidades a la juventud mexicana.

Desde la cárcel de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Rosa López Díaz escribió así en abril del presente año a las Madres Antifascistas de Roma, que realizaban en la capital italiana un encuentro contra la tortura en las cárceles: “Soy indígena de lengua tzotzil. Soy de una familia humilde de escasos recursos. Me detuvieron el 10 de mayo de 2007 junto con mi esposo –Alfredo López Jiménez–, nos culparon de un delito que no cometimos, donde sufrí tratos inhumanos como es la tortura física y psicológica, y amenazas de muerte. “Fue lo más triste de mi vida de mujer, jamás podré olvidar los rostros de las personas que me golpearon injustamente; hombres y mujeres que dicen ser autoridades no se tocan el corazón y sólo se dedican a violar los derechos humanos y a imputar delitos a personas que no les damos dinero; y a la cárcel venimos a parar porque no sabemos nuestros derechos y somos pisoteados, ignorados por todos nuestros derechos como seres humanos.”

En Guadalajara, en plena celebración de los Juegos Panamericanos, ancianos, ex braceros, estudiantes, activistas en contra de la presa El Zapotillo, miembros de diversas organizaciones y ciudadanos en general realizaron una protesta y los primeros inician un plantón al mediodía de este domingo en el quiosco de la plaza de armas, frente al palacio de gobierno. Los ancianos acampaban ante Casa Jalisco desde septiembre para exigir al gobernador panista Emilio González Márquez que cumpla el compromiso que firmó en 2006, cuando estaba en campaña y dijo que impulsaría una iniciativa popular avalada por 75 mil firmas para pensión universal a los habitantes del estado mayores de 70 años.

Lunes 17

Familiares de 23 desaparecidos de San Luis de la Paz, Guanajuato, acuden a las instalaciones de la PGR con el fin de entrevistarse con fiscales de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) y realizarse pruebas de ADN, así como revisar el avance de las investigaciones sobre el caso, informaron fuentes ministeriales. Desde el pasado 21 de marzo esos familiares han vivido un calvario tratando de localizar a sus parientes, que salieron del poblado en esa fecha con la intención de cruzar a Estados Unidos.

El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Juan Díaz de la Torre, expresa que aún en la guerra, los únicos espacios que se han mantenido libres de afectaciones son las escuelas y los hospitales, y exigió al gobierno de Guerrero una investigación para que descubra y castigue a los culpables del asesinato del maestro Francisco Tepoztitlán, ocurrido en el municipio de Zitlala. Hasta este momento, dice, no existen razones que permitan vincular este crimen “con alguna acción de amenaza o chantaje” por parte de la delincuencia organizada, añadió. Entrevistado al término de la inauguración de la segunda semana nacional por una cultura de la productividad en la escuela, considera que el acuerdo con las autoridades locales en materia de la seguridad escolar va “caminando bien; sin embargo, este hecho viene a llamarnos la atención”.

En Paraje Montero, Malinaltepec, la defensa de nuestro territorio empieza con la defensa de nuestros cuerpos como mujeres, e incluye nuestras relaciones familiares y comunitarias, señalaron unas 50 indígenas participantes en la conmemoración del decimo sexto aniversario de la policía comunitaria y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, quienes exigen la desmilitarización de los territorios indígenas, ya que ello conlleva acoso, violencia e impunidad. Aunque no estaba prevista la realización de una mesa de mujeres, éstas vencieron la resistencia, incluso la de sus propios compañeros, para realizarla. Levantaron la voz para reclamar al gobierno que cumpla la sentencia de la CIDH de agosto de 2010, relativa al caso de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, del pueblo me'phaa –tlapaneco–, violadas y torturadas en 2002 por efectivos del Ejército. Acordaron luchar

y apoyarse entre mujeres, para que se haga justicia en éstos y otros casos en los que sufren violencia de los militares.

Juan Collazo Jiménez, de 28 años, originario de San Juan Chamula y preso en el penal de Motozintla, Chiapas, realiza un ayuno solitario de 12 hrs diarias desde el pasado 2 de octubre. Participa así en la huelga de hambre en curso de seis presos, indígenas como él, en el penal de San Cristóbal de las Casas, que este lunes cumplió 18 días. Cinco más ayunan. Collazo, quien en febrero de este año estuvo 33 días en huelga de hambre exigiendo su libertad, da a conocer este lunes una carta donde manifiesta: “En el país y sus estados se observa a miles de personas que reclaman justicia, dignidad y respeto a sus derechos que las autoridades tienen la obligación de respetarlos y sin embargo no los respetan”.

Martes 18

El presidente Felipe Calderón Hinojosa informa a la Cámara de Senadores que desde el inicio de su sexenio hasta junio pasado han desertado del Ejército 40 mil 179 militares y 4 mil 21 integrantes de la Marina. A pesar de estas cifras, el jefe del Ejecutivo federal sostiene en su informe que ha logrado un “mínimo histórico”, al otorgar buenas prestaciones y motivar a los integrantes de las fuerzas armadas, ya que la desertión es 49.8 menor en el caso del Ejército y 54.4 en el de la Marina, respecto del sexenio de su antecesor, Vicente Fox Quesada, cuando abandonaron el servicio y las armas 80 mil 109 militares y 8 mil 822 marinos.

Alberto Patishtán Gómez, vocero de la Voz del Amate y de todos los presos en huelga de hambre y ayuno en tres penales de Chiapas, destaca hoy vía telefónica, desde la cárcel de San Cristóbal de Las Casas, que la protesta de las organizaciones de la Otra Campaña Voces Inocentes, Solidarios con la Voz del Amate y la comunidad de Mitzitón “cumple 20 días sin respuesta del gobierno. Señaló que los ayunantes, en particular quienes no han probado alimento desde el pasado 29 de septiembre, acusan ya fuertes mareos y debilidad, y que las autoridades del penal han restringido las visitas y el ingreso de equipo médico.

A lo largo del circuito Cuemanco se construye una barda que separará a los habitantes de la colonia Barrio 18, de las familias asentadas en los ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco, en plena zona chinampera. El muro marcará la diferencia entre viviendas de material precario y enormes casas consolidadas, por ello lo han denominado “el muro discriminatorio”. De un lado quedará la zona “humilde”, como se definen los habitantes de Toltenco, Tultenco y Amalacachico; del otro, quienes exhiben mejores condiciones socioeconómicas: los vecinos de la colonia Barrio 18, con apenas 15 años de creada.

Al grito de “¡fuera Orozco!”, profesores, estudiantes y administrativos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) paralizan los planteles de San Lorenzo Tezonco –Iztapalapa–, Centro Histórico y colonia Del Valle, para exigir la renuncia de la doctora Esther Orozco, la reinstalación de cuatro trabajadores “despedidos injustamente”, el cese de los “juicios sumarios” contra varios más y la erradicación de la “violencia física y verbal” desatada por la rectoría desde que se reanudaron las clases en agosto. En un comunicado oficial, Orozco anuncia la suspensión de las conferencias que iban a impartir ayer los doctores Oliver Smithies y Claude Cohen-Tannoudji, ganadores, respectivamente, del premio Nobel de Fisiología en 2007 y de Física en 1997. Asimismo, lamenta “profundamente la imagen que dejan estos actos, la cual podría impactar en el presupuesto que se nos otorgue” para 2012.

Miércoles 19

En Mexicali, el ejido Plan Nacional Agrario, el más extenso del país con 520 mil 784 hectáreas, contiene en sus montañas un filón de oro y plata que divide a los dueños de esas tierras y la empresa que lo descubrió y explota. Cada uno de los ejidatarios recibe un pago por concepto de renta de 11 mil pesos al año de la minera Frisco. Ésta calcula las reservas probadas y probables de ambos metales en unas 295 ton en cinco zonas concesionadas a su favor, en la región norte de Baja California. El Banco de México resguarda en sus bóvedas 100.15 toneladas del metal dorado. Los proyectos mineros de Frisco son un atractivo en la BMV, principalmente por la volatilidad en el precio del oro y la plata, originada por la devaluación del dólar.

La familia de Jesús Israel Moreno Pérez –estudiante de geografía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, desaparecido en las costas de Oaxaca desde julio pasado– asegura que ya no buscará apoyo de la directora de esa institución, Gloria Villegas, pues “lo importante es encontrarlo y no podemos seguir perdiendo el tiempo”. En conferencia de prensa convocada por alumnos y activistas, Mauricio Moreno, primo de Israel, aseveró que su familia está “decepcionada” por la escasa ayuda que recibió de las autoridades de la facultad. “Nos causa indignación que la comunidad de filosofía, en particular sus directivos, no nos abrió las puertas desde el principio para la difusión del caso”.

En Acapulco, los profesores de la región Acapulco - Coyuca de Benítez, que desde el 25 de agosto suspendieron labores de manera intermitente en al menos 80 zonas escolares en demanda de seguridad para los planteles de esa zona, dan por concluido su movimiento luego de que el gobernador Ángel Aguirre Rivero firma la minuta que exigían para regresar a las aulas. En la mesa de trabajo que sostuvo con representantes de los inconformes en la zona Diamante, el mandatario estatal signó el acuerdo de nueve puntos, entre los que sobresalen la suspensión de las actas administrativas por faltar a clases y de las órdenes de aprehensión giradas contra los profesores por encabezar bloqueos a las vías de comunicación y a la coordinación educativa de Acapulco y Coyuca.

Pedro López Jiménez, de 31 años, tzeltal de Colonia Sibactel, municipio de Tenejapa, Chiapas, cumple 21 días en huelga total de hambre junto con otros seis presos indígenas en la cárcel de San Cristóbal de las Casas. Exige su libertad, pues sostiene que es inocente de los cargos –por los cuales está condenado a 14 años de prisión–, y que fue torturado y obligado a declararse culpable de secuestro y violación, delitos que no cometió. Lo detuvieron agentes judiciales del estado el 10 de mayo de 2007, en San Cristóbal de las Casas. Según refiere el mismo López Jiménez, los agentes no se identificaron ni mostraron orden de aprehensión. Tampoco dijeron porqué lo detenían. En una “casa” lo asfixiaron en repetidas ocasiones con una bolsa de plástico, le sumergieron la cabeza en agua, le taparon los ojos con un trapo impregnado de picante y le aplicaron descargas eléctricas. Sus captores lo apalearon hasta que cayó desmayado.

En León, Guanajuato alrededor de cien recolectores y recicladores de residuos sólidos se manifiestan frente a la presidencia municipal, donde arrojan varios kilogramos de botellas de plástico porque “el gobierno dice que la basura es de su propiedad”. Esta manifestación fue en respuesta a que policías municipales impiden a pepenadores recoger basura en las calles o les piden sobornos para dejarlos trabajar, pues el 25 de agosto el ayuntamiento autorizó a la empresa Limpiado y Reciclados del Bajío operar el único centro de acopio, separación, clasificación y comercialización de residuos en la ciudad, y proscribió las actividades de los pepenadores.

En Oaxaca, pobladores de Santa Cruz Mixtepec, perteneciente a la región Valles Centrales, bloquean el

acceso a esa municipalidad y el periférico Eduardo Mata de esta capital, además de protestar frente a Palacio de Gobierno para pedir la intervención de la administración estatal ante las agresiones de que son objeto por parte de sus vecinos de San Miguel Mixtepec, a causa de un conflicto agrario. El presidente municipal de Santa Cruz Mixtepec, Jesús Martínez Alcázar, denuncia que la tarde del martes, habitantes de San Miguel Mixtepec irrumpieron en el paraje Barranca de Fierro, donde incendiaron seis casas y dos vehículos; también robaron material explosivo de una cohetería.

Jueves 20

“No sé si porque somos humildes, de bajos recursos, de una etnia, la mazahua [...] si eso es un problema y por eso Hugo está en la cárcel”. Más de cuatro años han pasado desde que este joven fue aprehendido y para su madre, Rosalba Ramírez, resulta incomprensible que haya sido sentenciado a más de 40 años de prisión, a pesar de que las acusaciones de secuestro y portación de armas prohibidas son falsas. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez asumió la defensa de Hugo Sánchez Ramírez, de 23 años de edad, luego de verificar las irregularidades cometidas en el juicio, entre otras, que el indígena fue acusado falsamente por las víctimas del secuestro, mismas que ante el juez de la causa se retractaron y en una audiencia reconocieron que mientras estuvieron en cautiverio no pudieron ver a sus captores.

A cinco días de haber llegado con sus tiendas de campaña a la BMV y al parque Centenario de Coyoacán, al sur de la ciudad de México, los ‘indignados’ trabajan para construir “otro tipo de relaciones sociales” que permitan, poco a poco, cambiar el sistema. “Se han planteado ejes de cómo cambiar el sistema, principalmente las relaciones humanas: comemos juntos, platicamos, convivimos; se trata de ir construyendo otro tipo de relaciones sociales”, explica Alexis Jiménez, quien se encuentra en el campamento de la BMV.

En Aguascalientes, unas 250 maestras de preescolar se manifiestan frente al Instituto de Educación del estado y después marchan a la Plaza de la Patria para exigir más recursos económicos y materiales, pues hace dos semanas el horario de los planteles donde laboran se amplió de 9 a 13 hrs –antes era de 9 a 12. Guadalupe Martínez dice en nombre de las profesoras: “Tenemos un salario base de 6 mil 30 pesos al mes y estamos cumpliendo más de ocho hrs. No tenemos vacaciones y nos llevamos trabajo a casa. Pedimos que respeten nuestro contrato colectivo de trabajo.”

Con un “cofre con tesoros forestales”, colocado en la entrada principal de la Cámara de Diputados, que contenía una maqueta relativa al manejo forestal comunitario, Greenpeace busca informar a los legisladores sobre la importancia de apoyar a los dueños de bosques y selvas. Los bosques son un tesoro que hay que valorar, por lo que los legisladores que analizan el presupuesto forestal deben priorizar en los programas gubernamentales los recursos que sí valoran las actividades de manejo sustentable de los bosques, dice Paloma Neumann, activista de la campaña de bosques de Greenpeace México.

En Ciudad Juárez, la activista Malú García Andrade, directora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, solicita protección al gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, debido a que recientemente ha recibido de nuevo amenazas de muerte. “Estoy en un momento de desesperación”, le dice al mandatario. La luchadora social comenta que teme ser asesinada en cualquier momento por miembros del crimen organizado, ya que desde hace una semana ha sido amenazada vía telefónica en varias ocasiones. El año pasado, García Andrade y Marisela Ortiz, otra de las fundadoras de dicha agrupación, tuvieron que refugiarse en otras ciudades del país y Estados Unidos, respectivamente,

luego de ser amenazadas por presuntos criminales.

Viernes 21

En Cherán, “En el municipio gobierna el PRI, en el estado el PRD y en el país el PAN y ninguno de los tres niveles han hecho caso a nuestra demanda de justicia y de combatir el crimen organizado que ha talado nuestros bosques, asesinado a cinco comuneros y desaparecido a otros cinco”. Ante esta situación, la población decidió: “no a los partidos políticos, no a las elecciones estatales de noviembre y elegir por usos y costumbres un gobierno indígena autónomo”. Así lo informa en entrevista en el palacio municipal, ocupado ahora por una coordinación comunitaria, uno de los dirigentes –quien, por seguridad, reserva su nombre y se cubre el rostro con un paliacate– de este pueblo “alzado” desde el pasado 15 de abril, cuando la gente expulsó a los talamontes, y para garantizar la seguridad cerró el poblado con barricadas, reactivó la ronda tradicional comunitaria –que no es policía, aclara– e instaló en cada esquina fogatas, que ahora se cuentan por decenas en cada uno de los cuatro barrios de la ciudad, y en las que se mantienen en guardia toda la noche.

Sábado 22

En algunas zonas de México “estamos en una guerra civil no declarada”, en la que casi todo ciudadano puede ser víctima de asalto, robo, secuestro y muerte, advierte el sacerdote Flor María Rigoni, director de la Casa del Migrante de Tapachula, Chiapas. Frente a Margarita Zavala, esposa del presidente Felipe Calderón, y Salvador Beltrán del Río, comisionado del Instituto Nacional de de Migración, Rigoni hace un recuento de lo que desde hace una década denomina “frontera vertical de México, que corre del Suchiate al río Bravo, convertida en un cementerio sin cruces y en guerrilla de caminos de extravíos”.

En Mazatlán, en demanda de que el gobernador Mario López Valdez, conocido como ‘Malova’, cumpla con el pago de las indemnizaciones que se adeudan a los desplazados por la presa Picachos, además de resarcir los daños a las viviendas de los seis pueblos de los municipios de Mazatlán y Concordia, un grupo de afectados por esa obra ocupan la obra hidráulica y se instalan en plantón. Atilano Román Tirado, dirigente del movimiento de desplazados, señala que fue decisión de más de 500 familias de los seis pueblos tomar las instalaciones, de donde sacaron a unos 40 obreros y vigilantes.

Domingo 23

En Ciudad Juárez, la organización Justicia para Nuestras Hijas documentó al menos 12 casos de desaparición forzada de mujeres en Ciudad Juárez y en la capital del estado, informa la presidenta de la ONG, Norma Ledezma, y señala que línea de investigación “debe ser hacia la trata de personas”. Menciona el caso de dos adolescentes desaparecidas el 13 de agosto pasado en San Juanito, cuyos cuerpos fueron encontrados en la sierra de Cuauhtémoc por agentes de la Fiscalía General del Estado. Se concluyó que fueron “levantadas” exclusivamente con fines de explotación sexual, señala Ledezma.

En Ciudad Juárez, la Red por la Infancia denuncia que 15 promotores juveniles de la campaña ‘Escúchame, Invierte en mí’ fueron detenidos el viernes arbitrariamente por policías municipales. Representantes de esa organización denuncian que es la segunda vez que aprehenden a adolescentes que trabajan para impulsar ese organismo en pro de la niñez juarense. Los policías justificaron la

detención, argumentando que son sospechosos porque la mayoría son menores de edad y no cuentan con credencial de elector para identificarse.

El movimiento de los indignados de México realiza su “asamblea de asambleas” en la explanada del Monumento a la Revolución, en la cual delinea actividades para los próximos días, y comienza un ejercicio de análisis de la realidad del país. Casi en punto del mediodía, los activistas comenzaron a agruparse y a debatir en torno de cinco mesas temáticas sobre economía, medios de comunicación, educación y cultura, resistencia civil no violenta y “democracia real”, en las cuales empezaron a darle forma a algunas de las propuestas que han surgido tanto en el ciberespacio como en los campamentos ubicados en Coyoacán y en la BMV.

En Veracruz, pese a la oposición de residentes y vecinos de Paseo Salvador Díaz Mirón esta semana se inicia el derribo de árboles, algunos centenarios, de este emblemático sitio del centro histórico de Veracruz. La alcaldesa priísta Carolina Gudiño Corro impulsa su proyecto de remodelación y modernización de los espacios públicos que abarca a este sitio y aunque a la pregunta –hace cuatro meses– de que si derribaría árboles declaró que “ni que estuviera loca”, un comunicado de prensa de su ayuntamiento informó el martes que se “reubicarán” un total de 110 árboles del paseo, mismos que se sustituirán por palmillas “para reforestar el área”.

Comuneros zoques de San Miguel y Santa María Chimalapas que bloquean desde el jueves pasado “en forma total y definitiva” el ejido chiapaneco Díaz Ordaz –asentado en tierras de los comuneros oaxaqueños– denuncian que el viernes policías chiapanecos “dispararon contra los bloqueadores, afortunadamente sin herir a nadie”, pero temen un desalojo por cerca de 300 policías que el gobierno chiapaneco envió al ejido Rodolfo Figueroa, por lo que demandan protección policiaca al gobierno de Oaxaca, informa Raymundo Pérez, asesor de los comuneros oaxaqueños. Por su parte el presidente del consejo de vigilancia del comisariado de bienes comunales de San Miguel, Álvaro Román Ríos, indica que el bloqueo realizado el viernes por 14 congregaciones de comuneros chimas de la carretera Panamericana, a la altura del parque eólico La Venta, es parte “de las acciones de resistencia civil y pacífica de autodefensa” de la nación Zoque - Chimalapa “como último recurso” para que las autoridades solucionen el conflicto agrario que los enfrenta con ejidatarios chiapanecos desde hace 60 años, ante la “negligencia” del gobierno oaxaqueño y la “agresiva soberbia” del gobierno de Chiapas.

Elementos de la policía municipal de La Paz, estado de México, se manifiestan encapuchados este domingo frente a la alcaldía para denunciar anomalías en la corporación, de las que responsabilizaron al director, Alfonso Melgarejo Jiménez. Entre otras quejas, los uniformados expusieron que sus salarios no han sido homologados desde 2010 a 6 mil pesos mensuales más una compensación, como marcan las disposiciones de seguridad pública federal. Agregan que su sueldo actual es de mil 500 pesos quincenales.

Lunes 24

México es el país más riesgoso para ejercer el periodismo en América Latina y el quinto a escala mundial, señala el relator especial para la protección del derecho a la libertad de expresión de la ONU, Frank La Rue, en una videoconferencia de prensa en la que se planteó que es urgente que en el país se “federalice” el delito de asesinato contra periodistas. En el contexto de la presentación del informe *La libertad de expresión en México. Misión de las relatorías de la ONU y la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos)*, estas organizaciones indican que de 2000 a 2010, 66 periodistas fueron asesinados en México y 12 desaparecidos, y que tan sólo en lo que va de 2011, 13

más han sido ejecutados.

En Acapulco, con temor e incertidumbre este lunes se reanudan actividades en las escuelas públicas del nivel básico que se mantuvieron cerradas desde el pasado 25 de agosto, debido a que profesores de la zona periférica del municipio denunciaron delitos como extorsión, robo de vehículos y secuestros dirigidos contra maestros, motivo por el cual se suspendieron labores en al menos 80 delegaciones educativas de la Secretaría de Educación de Guerrero, lo que equivale en promedio a unos 700 planteles.

En San Salvador Atenco, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco asegura que los ejidatarios de la región padecen acoso constante de la Comisión Nacional del Agua para que vendan sus tierras y se concrete el proyecto Zona de Mitigación y Rescate Ecológico en el Lago de Texcoco, en 2 mil 600 hectáreas. Este lunes, al conmemorar el décimo aniversario del inicio de su resistencia, los campesinos, junto con representantes de 15 organizaciones sociales, estudiantiles y sindicales, dicen que se oponen a dicho proyecto porque es sólo una excusa para revivir la construcción de un aeropuerto en sus tierras.

En Ciudad Juárez, una veintena de madres de adolescentes desaparecidas de 2008 a la fecha realizan una marcha este lunes por calles de Juárez hasta las instalaciones de la Fiscalía general del estado, en la zona norte, para exigir que investigue el caso de Cinthia Jocabeth Castañeda Alvarado, de 14 años de edad, quien desde hace tres años permanece extraviada, situación similar a los casos de 130 mujeres en ésta frontera. Una niña no mayor de 12 años expresa durante la protesta: “ayúdame a localizar a mi hermana, se la llevaron cuando ella tenía 14 años de edad, se llama Cinthia Jocabeth Castañeda Alvarado y se perdió el 24 de octubre de 2008. Ella jugaba conmigo, la extraño, la quiero otra vez en mi casa”. Como parte de las cifras de homicidios en el estado de Chihuahua en el reporte de extravío y/o ausencia de mujeres, elaborado por la Fiscalía general estatal, de 2008 a agosto de 2011, suman 210 las mujeres y niñas desaparecidas en el estado, la mayoría en Ciudad Juárez. De ellas 30 reportes son de 2008; 34, en 2009; 54, en 2010, y 92, en 2011, y sólo 13 han sido localizadas.

El SME interpondrá el próximo jueves 27 de octubre en Ottawa, Canadá, una queja ante la Oficina Nacional Administrativa del TLCAN, en contra del gobierno mexicano, por violaciones a los Acuerdos de Colaboración Laboral suscritos por México, Canadá y Estados Unidos. El dirigente del gremio, Martín Esparza, y el secretario del exterior, Humberto Montes de Oca, señalan lo anterior en conferencia de prensa, en la que mediante videoconferencia, la directora del Departamento Internacional de la central obrera AFL-CIO, Catty Feungold, y la abogada de los Steelworkers, Shaheen Hirani, informaron que las direcciones de estos organismos, tanto de Estados Unidos como de Canadá, respaldarán la queja de los electricistas mexicanos ante esa instancia.

En Oaxaca, miles de indígenas afiliados al Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) marchan este lunes en la capital oaxaqueña para demandar el esclarecimiento del asesinato de su líder moral, Heriberto Pazos Ortiz, ocurrido el 23 de octubre de 2010, durante el gobierno priísta de Ulises Ruiz Ortiz.

En Oaxaca, elementos antimotines de la Policía Estatal detienen la mañana de este lunes al secretario general del STAUO, Agustín Hernández Monroy, y a la directora de la Facultad de Enfermería, Georgina Corazón Saavedra, así como a 18 catedráticos y estudiantes, por bloquear el tráfico en la avenida Universidad, frente a la ciudad universitaria. Los manifestantes del STAUO, quienes se hallan en huelga desde hace 18 días para reclamar la entrega de sus cuotas sindicales, retuvieron autobuses colectivos para cerrar el paso; en respuesta, antimotines de la PE retiraron el bloqueo y detuvieron a los

inconformes.

Sindicatos universitarios se solidarizaron con las demandas de los trabajadores de la UACM y anuncian que recurrirán a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para que termine la retención de las cuotas sindicales en esa casa de estudios que se realiza desde 2010.

Con el cobijo de las autoridades del Gobierno del Distrito Federal y de la delegación Álvaro Obregón, en el número 60 de Plaza Valverde, en la colonia Guadalupe Inn, se construyen los cimientos de lo que será un desarrollo inmobiliario de 11 niveles, con 60 departamentos, lo que está en contra de las normas de uso de suelo y el Programa Delegacional de 2011, denuncian residentes. Ante la falta de respuesta de las autoridades, los vecinos se manifestaron ayer por la mañana ante la construcción, con el fin de exigir la cancelación del proyecto.

Martes 25

El Frente en Defensa de Wirikuta anuncia movilizaciones a partir de este miércoles en la ciudad de México ante la falta de respuesta del gobierno federal a su rechazo a la concesión que otorgó a la minera canadiense First Majestic en la zona sagrada de este pueblo, ubicado en Real de Catorce, San Luis Potosí. Encabezado por el Consejo Regional Wixárika, el frente anuncia en un comunicado que este miércoles acudirá a Ciudad Universitaria y el jueves realizará una movilización a Los Pinos y al Museo de Antropología.

Pedro López Jiménez, nuevo vocero de los presos en huelga de hambre en los penales chiapanecos de San Cristóbal de las Casas, Cintalapa y Motozintla, declara este martes que después de 27 días en ayuno los internos en protesta “ya resienten la debilidad y el cansancio, sienten mareos y calambres”. López Jiménez, quien ocupó el lugar de Alberto Patishtán como portavoz de los presos luego de que éste fue trasladado injustificadamente a un penal federal en Guasave, Sinaloa, denuncia que el director del penal en San Cristóbal de las Casas no ha permitido el paso de un médico independiente y los reclusos no han aceptado al médico del penal.

En Centla, Tabasco, más de 3 mil pobladores de la zona de Los Chilapas, municipio de Centla, abandonados por las autoridades, enfrentan la que consideran “la peor de las inundaciones” provocadas por el desbordamiento del río Grijalva. Los afectados quedaron incomunicados por carretera y sus campos de cultivos están anegados, al igual que cientos de viviendas. No hay servicio médico ni clases desde hace dos semanas; el agua potable escasea y no hay leche en la tienda Diconsa.

En Chilpancingo, indígenas mixtecos de cuatro comunidades del municipio de Ayutla de los Libres toman las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social para demandar obras de agua potable y de riego, prometidas a cuatro poblados desde el sexenio de Zeferino Torreblanca. Sebastián Portes Morales, asesor de los mixtecos, manifestó que el gobierno estatal quiere imponer una constructora que invirtió en la campaña del ahora gobernador Ángel Aguirre y detalló que las obras inconclusas se encuentran en La Cortina, Cuapinola, El Charco y Ocote Amarillo, y a ellas se destinaron 5 millones 600 mil pesos. “No vamos a permitir que nos manden constructoras con las que hacen negocios turbios”, concluye.

En Cuernavaca, Morelos, los cuerpos de tres mujeres asesinadas, de entre 18 y 30 años de edad, fueron localizados este día en Morelos. A una la lapidaron y la otra fue encontrada desnuda, informa la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

En el km 19 con 400 metros de la carretera federal México - Cuernavaca se instala un plantón ciudadano para impedir la apertura de una gasolinera, en el número 4367 de San Pedro Mártir, en la delegación Tlalpan. La barrera humana es el último recurso de defensa de los pobladores para evitar que la estación empiece a operar y ponga en riesgo a la comunidad. Corpo - Gas, empresa propietaria de la estación, “ha violado normas ambientales y el uso de suelo”, dicen. También presentó una licencia irregular y carece de permisos. Las anomalías no sólo han sido documentadas por los vecinos, sino también por la Procuraduría Ambiental del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, que las constató en la resolución administrativa PAOT-05-300/300-4192-2011.

Miércoles 26

En Acapulco, profesores y alumnos de la Preparatoria 27 de la Universidad Autónoma de Guerrero, ubicada en Acapulco, suspenden labores luego de que el lunes pasado fue asesinado un estudiante del plantel, cuyo nombre no se divulga. En este contexto, maestros de Acapulco y Coyuca de Benítez se reúnen con la titular de la Secretaría de Educación estatal, Silvia Romero Suárez, para exponerle casos de violencia contra maestros en los últimos días, entre ellos el asesinato de un profesor de inglés perpetrado en Acapulco el sábado anterior, así como el secuestro de un docente en Coyuca de Benítez, mismo que motivó el cierre de 28 planteles en dicho municipio por segunda semana consecutiva.

Organismos y defensores de los derechos de los migrantes, entre ellos el padre Alejandro Solalinde, denuncian en el Senado que a pesar de que se aprobó la Ley de Migración, persisten las violaciones a las garantías de centroamericanos y mexicanos deportados por Estados Unidos. La religiosa Leticia Gutiérrez Valderrama, de la Pastoral de Movilidad Humana –instancia de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) encargada de la defensa de los indocumentados– sostiene: “Hay preocupación porque la misma situación de secuestro que están viviendo los migrantes centroamericanos durante su travesía por México para llegar a los Estados Unidos, la sufren los connacionales deportados”.

En Jalapa, colonos y comerciantes afiliados al Frente Popular Revolucionario (FPR) dan a conocer que Gustavo Méndez Gallardo, coordinador estatal del FPR, y Francisco Rodríguez Pineda, líder de la organización Vendedores Independientes Veracruzanos, fueron secuestrados la noche del martes tras recibir amenazas de colaboradores de la alcaldesa priísta Elizabeth Morales García, y del regidor primero del ayuntamiento, Jaime Cisneros González.

En Chihuahua, una joven de 22 años de edad fue detenida y sometida a proceso penal tras llegar a un hospital para ser atendida por un aborto en proceso. La Fiscalía General del Estado (FGE) informa que médicos del Hospital General de la entidad denunciaron el lunes a la joven, identificada como Pamela, quien decidió interrumpir un embarazo de cuatro meses. Según la FGE, la mujer se encontraba con su novio cuando empezó a sentirse mal y fue llevada al hospital, donde le practicaron un ultrasonido y se determinó que estaba por abortar.

El gobierno federal entrega nuevas concesiones a empresas mineras para la explotación del subsuelo en territorio sagrado del pueblo huichol, con lo que no sólo viola sus derechos culturales sobre ese lugar, sino decretos y leyes, señalan representantes de comunidades que desde ayer están en la ciudad de México para demandar “respeto a esa zona sagrada”.

Decenas de hombres y mujeres dejaron las fiestas de la cosecha y desde la sierra desértica de Jalisco y

Nayarit salen para difundir su demanda de cancelación de la explotación minera en Real de Catorce, San Luis Potosí, donde se localiza Wirikuta, una de sus zonas sagradas. Además de la concesión que el gobierno federal otorgó en 2009 a la compañía canadiense First Majestic, ha entregado otras y hay al menos 30 proyectos mineros en la región desértica que se extiende desde Real de Catorce, San Luis Potosí, donde se ubica Wirikuta, hasta municipios aledaños que también forman parte del territorio sagrado, señala Carlos Chávez, de la Asociación Jalisciense de Apoyo a los Pueblos Indígenas.

Jueves 27

En Washington, el poeta Javier Sicilia denunció este jueves ante la CIDH la “dramática situación” de los desaparecidos y la impunidad que priva en México. “Nos pueden matar, nos pueden secuestrar, porque el grado de inseguridad es atroz. Nos pueden asesinar y nuestra muerte quedará impune”, dice Sicilia, quien encabeza el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, en una audiencia en la comisión sobre seguridad ciudadana y derechos humanos. “La justicia es decepción y la impunidad es la norma”, expresó el escritor, quien señaló que en México 98% de los crímenes quedan impunes.

La Comisión de Mediación (COMED) entre el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el gobierno federal informa que los familiares de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, militantes del EPR, desaparecidos hace más de cuatro años, llevarán los casos a la justicia internacional. Como parte de la premisa de trabajo de la COMED, de respetar íntegramente las decisiones que toman los familiares, informan que los acompañarán en las gestiones que realicen tanto en instancias nacionales e internacionales. De igual forma aportarán elementos a su alcance para que las gestiones sean exitosas.

Dirigentes de movimientos sociales de Chile y Marruecos, y del llamado *Ocupa Wall Street*, de Estados Unidos, se encuentran en México para participar en la quinta Conferencia Sindical Nacional, que empezará este viernes. En entrevistas por separado coinciden en que vienen a buscar acuerdos para acciones conjuntas entre las organizaciones independientes de la región, así como resolutivos que ayuden a enfrentar las políticas neoliberales.

Javier Castillo, dirigente de la Confederación Minera de Chile y ex representante de los mineros de San José, donde fueron rescatados 33 trabajadores luego de permanecer sepultados 70 días, dice que la movilización social en su país y en otros puntos del orbe, responde a la desesperación de los pueblos por ver que el gran capital y los gobiernos los han despojado de todos sus derechos más elementales.

Amnistía Internacional (AI) pidió a las autoridades mexicanas que se garantice la protección a la integridad física de los habitantes de Unión Hidalgo, Oaxaca, donde se pretende construir un parque eólico. La organización internacional advirtió del riesgo que corren los habitantes de la localidad por expresar su rechazo al proyecto y por lo cual dos activistas han sido amenazados de muerte por empleados de la empresa.

En Guadalajara, Alrededor de mil estudiantes de la Normal de Atequiza y de instituciones educativas de otros 10 estados se manifiestan este jueves en el primer cuadro de esta capital para exigir a las autoridades estatales un incremento en la matrícula, más becas y respeto a la organización estudiantil. Poco después de las 10 horas, los normalistas se plantan fuera de la Torre de Educación de la Secretaría de Educación Jalisco a unos metros de las instalaciones del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo, resguardadas por policías federales, donde se realizan los partidos de basquetbol de los Juegos Panamericanos.

En Pachuca, policías estatales desalojan en el municipio de Lolotla a unos 200 militantes del PAN que bloqueaban la carretera federal México - Tampico cerca de la comunidad de Ixtlahuaco, en protesta porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avaló el triunfo del PRI en Lolotla luego de las elecciones del 3 de julio –cuando se renovaron los 84 ayuntamientos de la entidad– y para exigir nuevos comicios. Fueron detenidos 20 panistas y se les confiscaron siete vehículos con que interrumpieron la circulación.

En Tepic, a un año de que 15 personas fueron acribilladas en el autolavado Gamboa, sus familiares y amigos, respaldados por el diputado local perredista Miguel Ángel Arce Montiel, colocan este jueves en la rampa de acceso al negocio –que sigue funcionando, aunque con diferente nombre– una corona de flores blancas y una cruz elaborada con pequeñas velas y una estampa de San Judas Tadeo. Aunque en un principio los responsables del autolavado no querían que se hiciera el homenaje póstumo, al considerar que perjudicaría su negocio, finalmente acceden.

En Morelia, un grupo de comuneros de Santa Cruz Tanaco, municipio de Cherán, se plantan ante las oficinas del Instituto Electoral de Michoacán para exigir que se instalen en su comunidad casillas para las elecciones del 13 de noviembre. Aseguraron que han sido excluidos por los pobladores de la cabecera municipal que pretenden elegir autoridades municipales por el sistema de usos y costumbres. Los inconformes anuncian que promoverán ante el Congreso local la separación de su comunidad, porque además de que los comuneros de Cherán no los han considerado en las decisiones que han tomado desde el 15 de abril, cuando se enfrentaron a talamontes, tienen problemas añejos por la delimitación de linderos. “Nos acusan de que les robamos su madera, y eso no es cierto”, dice uno de los 10 comuneros que pidieron hablar con los consejeros del órgano electoral.

Nueve comunidades huicholas entregan en la residencia oficial de Los Pinos una carta dirigida al presidente Felipe Calderón, en la que le piden la cancelación de las concesiones mineras en Wirikuta, área natural protegida y zona sagrada de este pueblo; el freno a megaproyectos de producción de jitomate y la puesta en marcha de un proyecto alternativo para los pobladores. Esto fue después de la marcha que realizaron la tarde del día anterior del Ángel de la Independencia a la glorieta de Chivatito, donde un grupo de granaderos les cerró el paso, y sólo se permitió la entrada a una comisión que entregó el documento; después, el contingente se retiró.

El activista Carlos Sinuhé Cuevas fue asesinado la noche del miércoles “con 16 balazos” –seis impactos, según autoridades capitalinas–, por un grupo de personas que lo esperó a unas calles de su casa, ubicada en la zona de Topilejo, denuncian compañeros suyos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En un comunicado, la dirección de la FFL manifiesta su “consternación por el clima de inseguridad del país, en el que se inscribe la terrible y violenta muerte de Carlos Cuevas, miembro de nuestra comunidad”. Repudia el asesinato y llama a las autoridades correspondientes a esclarecerlo “plenamente y a la brevedad”. Estudiantes realizan un mitin en la FFL, donde señalan que este asesinato parece tener “motivos políticos”, hicieron una marcha interna y bloquean Insurgentes Sur en ambos sentidos por media hora en demanda de que se esclarezca el hecho y se castigue a los culpables. Acuerdan cerrar la FFL el día anterior y este viernes como medida de protesta.

El MPJD documentó más de 500 casos de víctimas de la violencia sólo en las dos caravanas que recorrieron el norte y sur de la República, los cuales presenta como parte del informe que entrega a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el documento, la organización encabezada por el poeta Javier Sicilia insiste en la necesidad de que el gobierno federal cambie la estrategia contra el crimen organizado y empiece con el retiro del Ejército de actividades policiacas. Incluso señala que con el argumento de que la reforma a la Ley de Seguridad Nacional está en un *impasse* legislativo, el

Ejecutivo sigue violando la Constitución al incumplir el precepto relativo a que la seguridad pública es tarea sólo de las autoridades civiles.

Viernes 28

En Guanajuato, “Destruir el sitio sagrado de Wirikuta es algo grave porque se está destruyendo la brújula de un pueblo”, afirma el artista huichol Álvaro Ortiz López. El también pianista se encuentra en Guanajuato como parte de la delegación de Nayarit, estado invitado a la edición 39 del Festival Internacional Cervantino. La explotación por mineras canadienses en la zona de Real de Catorce, en San Luis Potosí, donde se localiza Wirikuta, lugar hacia el cual el pueblo wixárika –huichol– ha peregrinado desde hace cientos de años, es “un genocidio”, añade tajante, en entrevista con *La Jornada*, “porque dentro de nuestra cosmogonía ahí es donde nuestro pueblo recibe su orientación. Entonces, es como si nos estuvieran matando la brújula, y nos quedaremos nadando a la deriva”.

El Observatorio de Multinationales en América Latina denuncia la inundación y consecuente desaparición de tres pueblos de los Altos de Jalisco –Temacapulín, Acasico y Palmarejo– por la construcción –impulsada desde el sexenio pasado por la Comisión Nacional del Agua– de la presa El Zapotillo. Las obras estarán a cargo de la empresa española Fomento de Construcciones y Contratas en asociación con dos compañías de Carlos Hank Rhon –La Peninsular y Grupo Hermes. Se trata, explica, de “un nuevo caso de participación del sector privado en la infraestructura hidráulica mexicana”, que permite a los empresarios recuperar su inversión y obtener ganancias por la concesión de 25 años de la presa, pero los derechos humanos de la población afectada no han sido respetados, y tampoco el patrimonio histórico y arquitectónico de Temacapulín ni la riqueza ambiental de la zona.

Por la mañana un preso más se suma a la huelga de hambre que realizan indígenas en tres penales de Chiapas, protesta que este sábado cumplirá un mes de iniciada. Andrés Núñez, de la organización Solidarios de la Voz del Amate, quien ya se había declarado en ayuno desde el 29 de septiembre, se puso en huelga de hambre total, junto con otros seis de sus compañeros de la Otra Campaña, quienes no han probado alimento desde hace 30 días, en el Centro para la Reinserción Social de Sentenciados número 5, en San Cristóbal de Las Casas. Tres más permanecen en ayuno indefinido de 12 hrs diarias.

En San Cristóbal de Las Casas el Frayba informa que pidió a la CIDH que solicite al gobierno de México el establecimiento de medidas cautelares para que sea regresado a una prisión de Chiapas el indígena Alberto Patishtán Gómez, adherente de la Otra Campaña, quien hace ocho días fue trasladado a un penal de Guasave, Sinaloa.

Víctor Hugo López Rodríguez, director del Frayba, dice que la petición a la CIDH incluye también una solicitud de medidas cautelares a favor de nueve indígenas que desde el 29 de septiembre están en ayuno en los penales de San Cristóbal de Las Casas, El Amate –municipio de Cintalapa– y Motozintla.

En Oaxaca, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje declara inexistente la huelga iniciada el 6 de octubre por el STAUO y le da plazo de 24 hrs para que entregue las instalaciones, informa Avelino Vásquez Luis, abogado general de la institución. El STAUO comenzó la huelga en demanda de la entrega de cuatro millones de pesos por cuotas sindicales retenidas a raíz de que un grupo sindical disidente reclama la titularidad del contrato colectivo de trabajo.

En Texcoco, un grupo de trabajadores sindicalizados de la Universidad Autónoma Chapingo cierra

instalaciones de la institución para exigir a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social la toma de nota a Telésforo de la Vega Carrillo como dirigente del sindicato de administrativos. Actualmente, Wilbert Gilberto Novelo ostenta el cargo de secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma Chapingo quien cuenta con el reconocimiento de las autoridades de la casa de estudios.

En Nezahualcóyotl, este viernes se cumple un año del deslizamiento de tierra que oficialmente dañó 254 viviendas en la colonia Benito Juárez, por lo que un centenar de vecinos marcharon con pancartas por calles de esa comunidad para exigir al gobierno del estado de México cumplir su compromiso de sanear el tiradero a cielo abierto Neza II. Colonos afectados denuncian que no fue un movimiento de tierra lo que dañó sus casas, sino una explosión provocada por la acumulación de gas metano en dicho vertedero, el cual fue clausurado en noviembre de 2010.

Un grupo de estudiantes de la UNAM realiza frente a la Facultad de Filosofía y Letras un acto en recuerdo del activista Carlos Sinuhé Cuevas Mejía, asesinado el pasado miércoles a unas cuerdas de su casa. En tanto, la universidad emitió un comunicado en el que repudió el crimen; pidió una investigación exhaustiva para encontrar y castigar a los responsables; externó sus condolencias a la familia del estudiante y ofreció su apoyo para hacer cualquier gestión ante la procuraduría capitalina, además dice que se mantendrá atenta al curso de la averiguación previa para que el caso no quede en la impunidad.

Sábado 29

En Acapulco, el último día de la 29 edición de la Convención Internacional Minera se efectúa sin representantes de los poblados que serán afectados por la explotación de oro, plata, zinc y otros metales preciosos por compañías canadienses y británicas. No obstante, en el panel Las comunidades indígenas y la minería, representantes de empresas mineras y del gobierno mexicano reconocen que en el país ha hecho falta mayor vinculación social entre impulsores de proyectos mineros y habitantes originarios de las comunidades.

En San Cristóbal de las Casas, al cumplirse este sábado un mes del inicio de la huelga de hambre en el penal de San Cristóbal de las Casas, y una semana después del traslado de Alberto Patishtán Gómez, vocero de los huelguistas, al penal federal de Guasave, Sinaloa, los familiares de los presos instalados en plantón realizaron un acto en la plaza de la catedral para informar a los transeúntes sobre su lucha y las condiciones en que se encuentran los ayunantes. Este campamento cumple a su vez 22 días. Por su parte, los reclusos que protestan en los centros para la Reinserción Social de Sentenciados (Cerss) 5, 6 y 14 envían una carta al escritor John Berger, a quien llaman “nuestro compañero” y le dicen: “usted es un gran hombre con mucho talento, humildad, sencillez y sobre todo con un gran corazón en la mano”.

En Ciudad Juárez, con la consigna “El luto no basta”, el movimiento de los indignados de Juárez comienza las jornadas de coraje y resistencia para colocar alrededor de nueve mil cruces de papel en paredes, postes y calles de la ciudad con los nombres de igual número de víctimas que fueron asesinadas de enero de 2008 a la fecha. Este movimiento, integrado por más de 10 organizaciones de la sociedad, exige justicia para las víctimas, muchas de ellas inocentes como niños, mujeres, ancianos y otras que nada tenían que ver con el crimen. El movimiento expone, en conferencia de prensa, que “no está liderado por una persona, sino por la comunidad, y en las actividades que se realizarán, desde hoy hasta el 2 de noviembre, buscamos dejar claro que en esta ciudad vivimos la muerte todos los días”.

En Morelia, más de 2 mil comuneros de Cherán marchan y efectúan un mitin en la plaza del pueblo en

protesta por la decisión del consejo general del Instituto Electoral de Michoacán de instalar casillas el próximo 13 de noviembre, tanto en esta población purépecha como en la localidad nahua de Santa María Ostula, cuando ellos tienen previsto elegir sus autoridades municipales por el método de usos y costumbres. Los comuneros aseguran que esperan el resolutive del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que les autorice designar sus autoridades, de la misma forma que lo hacían sus ancestros, pues ya no confían en las elecciones constitucionales.

En Chilpancingo, luego de pagar más de 15 mil pesos de fianza en el juzgado segundo de distrito, es liberado Agustín Barrera Cosme, consejero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria, recluido en el penal estatal de Las Cruces, de Acapulco, acusado de derribar tres árboles para sembrar frutales. Barrera Cosme, quien deja la prisión alrededor de las 20 hrs del viernes, fue detenido el 25 de octubre por soldados y policías federales que en siete vehículos ingresaron a territorio comunitario por el municipio de San Luis Acatlán, luego de pasar por ocho comunidades, incluida Pajarito Grande, municipio de Malinaltepec.

Académicos de la UACM aseguran que la rectora, Esther Orozco Orozco, lejos de emprender un proceso de reconciliación entre la comunidad universitaria, tras la crisis que se vivió en esta casa de estudios, inició una política de intimidación, acoso laboral y despidos injustificados, contra quienes han criticado su gestión. Encabezados por el secretario general del sindicato de esta institución, Abraham Guzmán, los universitarios Alberto Benítez y José Raymundo Sandoval, detallan que hasta ahora son ocho los casos de profesores destituidos.

Domingo 30

En Tenosique, “La pérdida de un hijo es como estar muertos en vida”, reza la leyenda en un cartel colocado en una de las paredes de la Casa del Migrante La 72, en este municipio fronterizo, adonde este mediodía arriba la Caravana de Madres en Busca de sus Desaparecidos, integrada por 33 mujeres centroamericanas, que son apoyadas por diversas ONG. Hace tres días salieron de la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, exactamente de la sede de la Red de Comités de Familias de Migrantes Hondureños, ubicada en el barrio Guadalupe, con el propósito de persistir en la búsqueda de cientos de desaparecidos, y éste domingo ingresan en México por el cruce fronterizo conocido como El Ceibo.

En San Cristóbal de las Casas, otro participante en la protesta de presos en Chiapas, quien se encontraba en ayuno en el penal número 6 de Motozintla, el tzotzil Juan Collazo Jiménez, se une a la huelga de hambre total que realizan siete reclusos de la Otra Campaña en el penal 5 de San Cristóbal de las Casas. Esto, al cumplirse un mes de la acción de los indígenas en demanda de su liberación, argumentando inocencia y largas sentencias amañadas e injustas, como en el caso de Collazo, de 27 años. Collazo, miembro de Solidarios de la Voz del Amate, se sumó a la huelga de hambre desde el pasado jueves 27 de octubre, pero esto sólo pudo confirmarse este sábado. Recluido en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados de Motozintla, se había declarado en ayuno el 3 de octubre, al sumarse a la acción iniciada en el penal de San Cristóbal el 29 de septiembre.

En Oaxaca, Oax. Cientos de militantes de la Unión General Obrera, Campesina y Popular (UGOCP) de varios estados se congregan en la ciudad de Tuxtepec, en la cuenca del Papaloapan, para demandar que se aclare el asesinato de su líder histórico, Margarito Montes Parra, cometido el 30 de octubre del 2009 en Sonora. En acto al que acudió el secretario de Desarrollo Social, Gerardo Albino González, representante del gobernador Gabino Cué Monteagudo, la delegada de la organización en Oaxaca,

Karina Barón Ortiz, demanda que la Procuraduría General de la República atraiga el caso porque en Sonora el gobierno del panista Guillermo Padrés Elías no lo ha atendido.

Lunes 31

Integrantes de la Red por la Paz con Justicia y Dignidad recaban este lunes testimonios de víctimas de la guerra contra el crimen organizado, en Monterrey, Nuevo León, y Cuernavaca, Morelos. Unas 80 personas responden en Nuevo León al llamado a unirse a la convocatoria nacional del Movimiento por la Paz: Un Destello en la Oscuridad, hecho en la entidad por las organizaciones Colectivo Plural de Mujeres, Comunidad Agape, Colectivo Juglares, Contingente Monterrey, La LUPA, Zihuame Mochila, Cadhac y Resistencia Civil Pacífica, entre otras.

Transportistas y comerciantes de mercados populares de Ciudad Juárez, Chihuahua, así como campesinos de la zona centro sur del estado, protestan por separado contra la Policía Federal a cuyos elementos adscritos a la división caminos y aduanas acusan de extorsión. La Federación de Organizaciones del Autotransporte de Turismo, Similares y Conexos de la República Mexicana denuncia que choferes y trabajadores del servicio de turismo y carga son objeto de “arbitrariedades, abusos y extorsiones” que cometen efectivos de la Policía.

En Villahermosa, la Caravana de Madres Buscando a sus Hijos Desaparecidos, integrada por 33 mujeres centroamericanas apoyadas por diversas ONG, exige a las autoridades y diputados de Tabasco seguridad para los migrantes que ingresan a México por la frontera sur. Al denunciar que “Tabasco es la tenebrosa ruta del Golfo, donde los migrantes viven un infierno en zonas peligrosas”, demandan la creación de una red en apoyo al migrante y de una fiscalía especializada en delitos cometidos contra ellos, a fin de poner un alto a los secuestros, homicidios y extorsiones.

En San Cristóbal de las Casas, el director del penal número 5 en este municipio nuevamente niega el fin de semana, en dos ocasiones, el acceso a los médicos independientes que pretendían revisar a los presos en huelga de hambre de la Voz del Amate, Voces Inocentes y Solidarios de la Voz del Amate, adherentes de la Otra Campaña. Cautivos en tres penales de Chiapas, los indígenas anuncian que en ocasión del Día de Muertos, levantarán un altar en memoria a los zapatistas caídos en 1994, cuando “los compañeros dieron sus vidas en reclamar la justicia y el bienestar de todos; hombres y mujeres como ellos jamás mueren porque viven en cada corazón de nosotros”.

En Morelia, unos 200 comuneros de Cherán armados con palos y piedras hacen disparos al aire y revientan un mitin del candidato único a la presidencia municipal, Antonio Charapeti Ambrosio, efectuado la noche del domingo en un salón ubicado a las afueras del poblado, en la carretera a Nahuatzen, informa la dirigencia estatal del PRD. Indica que aproximadamente a las 19 hrs del domingo, cuando iniciaban el mitin simpatizantes del candidato del sol azteca, así como de los partidos Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, integrantes del Movimiento Ciudadano de Cherán irrumpen e impiden que la reunión se llevara a cabo.

En Chilpancingo, la CRAC-PC denuncia una nueva incursión del Ejército Mexicano en su territorio, en el cruce de Zoyatlán, ubicado entre los municipios de San Luis Acatlán y Marquelia, en la Costa Chica de Guerrero, y pidió a las comunidades donde opera la CRAC “que estén atentos ante la presencia de los soldados”. Vía telefónica, los coordinadores de la CRAC, Valentín Hernández y Pablo Guzmán, confirman que al menos seis camiones con soldados ingresaron ayer por Marquelia rumbo a San Luis Acatlán e instalaron un retén en el cruce de Zoyatlán.

En San Cristóbal de las Casas, tres indígenas mueren este lunes al enfrentarse a balazos con empleados del rancho El Vergel, en el municipio de Sitalá, cuando intentaron invadir la propiedad por tercera vez en un año, informan fuentes no oficiales. Dicen que el enfrentamiento ocurrió luego que unos 15 hombres armados y encapuchados ingresaron en la finca, de 176 has, donde combatieron con una docena de trabajadores, uno de los cuales, Sebastián Moreno, resultó herido de bala.

Organizaciones de indígenas y campesinos y defensores de derechos humanos denuncian al gobierno de Oaxaca como “responsable por omisión y cómplice de las empresas transnacionales” –en su mayoría españolas– que pretenden construir un parque eólico en las tierras de Unión Hidalgo, en el Istmo de Tehuantepec, y exigen el esclarecimiento y castigo a “caciques y autoridades municipales de La Venta” por el violento ataque del viernes 28 contra los opositores que realizaban un bloqueo de la carretera Panamericana, con saldo de un muerto y una veintena de heridos. Los miembros de la comunidad indígena de Unión Hidalgo subrayan que se oponen a que Demex S.A de C.V –filial de la española Renovalia Energy– y Grupo Bimbo construyan el parque eólico Piedra Larga en sus tierras sin el consentimiento previo, libre e informado de los contratos de arrendamiento fraudulentos, “así como de las afectaciones ambientales no remuneradas en nuestras tierras; no hay condiciones de desarrollo sustentable ni protección de los derechos humanos ni del medio ambiente”.

Glosario de Siglas

AI	Amnistía Internacional
BMV	Bolsa Mexicana de Valores
CDHDF	Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
CDI	Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
CERSS	Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados
CETEG	Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero
CFE	Comisión Federal de Electricidad
CIDH	Comisión Interamericana de Derechos Humanos
CNI-RCP	Centro-Pacífico del Congreso Nacional Indígena
COCP	Central de Organizaciones Campesinas y Populares
CODDEHUM	Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero
COMED	Comisión de Mediación
CONAVIM	Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
CRAC-PC	Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias
EPR	Ejército Popular Revolucionario
EZLN	Ejército Zapatista de Liberación Nacional
FRAYBA	Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas
FPR	Frente Popular Revolucionario
FSUJ	Federación Social Unidos por la Justicia
INSMUJER	Instituto Sinaloense de las Mujeres
JBG	Junta de buen gobierno
MPJD	Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad
MULT	Movimiento de Unificación y Lucha Triqui
OIT	Organización Internacional del Trabajo

ONG	Organizaciones no gubernamentales
ONU	Organización de las Naciones Unidas
PAN	Partido Acción Nacional
PEP	Policía Estatal Preventiva
PGJE	Procuraduría General de Justicia del Estado
PGR	Procuraduría General de la República
PRD	Partido de la Revolución Democrática
PRI	Partido Revolucionario Institucional
SEDESOL	Secretaría de Desarrollo Social
SIEDO	Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada
SME	Sindicato Mexicano de Electricistas
SNTE	Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
SRA	Secretaría de la Reforma Agraria
STAUAG	Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero
STAUO	Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca
STUNAM	Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México
TEPJF	Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
UABJO	Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca
UACM	Universidad Autónoma de la Ciudad de México
UAM	Universidad Autónoma Metropolitana
UGOCP	Unión General Obrera, Campesina y Popular
UNAM	Universidad Nacional Autónoma de México
USAID	Agencia para el Desarrollo Internacional del gobierno de Estados Unidos
VOCAL	Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad

Realizado por el Comité de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura de País del Observatorio Social de América Latina de México (OSAL-CLACSO).

Coordinadores: Massimo Modonesi y Lucio Oliver

Relevamiento y sistematización: Mariana López de la Vega y Fernando Munguía Galeana

Fuentes: Diarios La Jornada y El Universal

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales



Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais



OSAL

Observatorio Social de América Latina
Publicación electrónica

Cronología del Conflicto Social

México

Noviembre de 2011

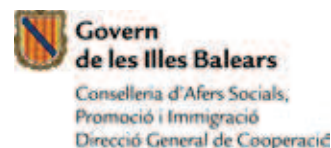
Editada en mayo 2012



Agencia Sueca
de Desarrollo Internacional



Agencia Noruega para la
Cooperación al Desarrollo



El Observatorio Social de América Latina [OSAL] cuenta con el apoyo de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional [ASDI], la Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo [NORAD] y la Agencia de Cooperación Internacional de las Islas Baleares [ACIB].

Documento de trabajo N° 103

*Realizado por el Comité de Seguimiento y Análisis
del Conflicto Social y la Coyuntura de
México*



Integrantes

**Fernando Munguía Galeana
Mariana López de la Vega**

Fuentes

**La Jornada
El Universal**

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Se autoriza la reproducción de los artículos en cualquier medio a condición de la mención de la fuente y previa comunicación al director.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en el documento incumbe exclusivamente al autor o a los autores firmantes y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

El **Observatorio Social de América Latina** (OSAL) constituye una iniciativa del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinada a la promoción de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, las dinámicas de participación y los repertorios de acción de los movimientos sociales y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado es uno de los resultados de este trabajo de relevo y registro llevado a cabo en el marco del programa. Se trata de un escrito en el que se sintetizan las principales acciones de movilización y protesta social y las medidas políticas llevadas a cabo durante el mes indicado en el país referido.

La cronología presentada ha sido elaborada por uno de los **Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana** que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo la coordinación del equipo de investigación mexicano, que forma parte de la red institucional de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.

Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana

PAÍS	INSTITUCIÓN	COORDINACIÓN
Argentina y Uruguay	PIMSA (Argentina)	María Celia Cotarelo
Bolivia	CIDES – UMSA	Dunia Mokrani Chávez Pilar Uriona Crespo
Brasil	LPP - UERJ	Roberto Leher
Chile	DI - UARCIS	Juan Carlos Gómez Leyton
Colombia	Escuela Nacional Sindical	Guillermo Correa Montoya
Costa Rica	IIS - FCS - UCR	Sindy Mora Solano
Ecuador	Centro de Investigaciones CIUDAD	Mario Unda
Guatemala	FLACSO Guatemala	Simona Yagenova
México	FCPS - UNAM	Massimo Modonesi Lucio Fernando Oliver Costilla
Panamá, El Salvador, Nicaragua y Honduras	CELA “Justo Arosemena” (Panamá)	Marco A. Gandásegui (h)
Paraguay	Centro de Documentación y Estudios	Quintín Riquelme
Perú	Instituto de Estudios Peruanos	Ramón Pajuelo Teves
República Dominicana y Puerto Rico	CES “Padre Juan Montalvo” (Rep. Dominicana)	Octavio Figueroa
Venezuela	PROVEA	Marco Antonio Ponce

México

Cronología del conflicto social

Noviembre de 2011

Martes 1

Con motivo de la conmemoración del Día de Muertos, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) demanda al gobierno federal la construcción de un memorial en el bosque de Chapultepec con los nombres de los más de 50 mil muertos que ha costado esta guerra, para que “recordemos sus nombres y las próximas generaciones sepan que esta atrocidad no debe volver a ocurrir en nuestra patria”. Durante el acto, el poeta Javier Sicilia, es acompañado por Araceli Rodríguez, Julia Alonso, María Herrera, Julián Lebarón y María Elena Morera, parientes de secuestrados, desaparecidos y/o asesinados durante la “guerra contra el narcotráfico”, quienes dan lectura a la denuncia y exigencias del MPJD.

La Caravana de Madres Buscando a sus Hijos Desaparecidos en Tránsito (conformada por 33 señoras, 28 de Honduras, cuatro de Nicaragua y una de El Salvador) arranca del puerto de Veracruz rumbo a la ciudad de Coatzacoalcos; tiene previsto llegar a la población de San Fernando, Tamaulipas, para denunciar el trato inhumano y criminal contra los indocumentados en tránsito, en el sitio donde 72 centro y sudamericanos fueron masacrados en agosto de 2010. “Sí, vamos con temor, pero es necesario; es importante estar ahí, para que desde ese lugar esta caravana de madres que sufren exija al gobierno mexicano un cambio, porque esto no pude seguir así”, afirma Rubén Figueroa, uno de los coordinadores de la comitiva y miembro del Movimiento Migrante Mesoamericano.

El Ministerio Público Federal realizará una investigación para tratar de localizar los restos de Rosendo Radilla Pacheco, luchador social de los años setenta, quien presuntamente fue desaparecido por militares durante la llamada “guerra sucia” en instalaciones de la 27 Zona Militar, en Atoyac de Álvarez, Guerrero. La Procuraduría General de la República (PGR) informa que personal de la Coordinación General de Investigación y de la Dirección General de Servicios Periciales, en conjunto con especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), iniciarán la tercera etapa de excavación tendente a la localización de los restos de Radilla Pacheco. Estos trabajos se realizarán en cumplimiento de lo ordenado en la averiguación previa SIEDF/CGI/454/2007, y de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 23 de noviembre de 2009.

El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) informa que la oficina nacional administrativa del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en Ottawa recibió la queja presentada por esta organización contra el gobierno mexicano por violaciones a los acuerdos trilaterales de colaboración laboral. La queja ante esta instancia fue apoyada por centrales sindicales como la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, por si sigla en inglés) de Estados Unidos, y los *Steelworkers* de Canadá, y fue elaborada por abogados internacionalistas. A partir de la presentación de dicha queja habrá un plazo de 60 días para que esta

instancia del TLCAN resuelva sobre la admisibilidad de la denuncia, según adelantó el SME. Explica que en el documento presentado argumentaron todas las violaciones laborales cometidas contra los trabajadores electricistas por el Estado mexicano, a raíz de la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC).

El Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres y las autoridades de esta institución acuerdan un incremento de 3.8% en percepciones, que beneficiará a los trabajadores administrativos de este centro educativo. Con el convenio salarial se evita la huelga emplazada para estallar el primero de noviembre. El incremento abarca a más de 3 mil 300 trabajadores del área administrativa, quienes laboran en 20 planteles ubicados en la zona metropolitana de la Ciudad de México. La firma del acuerdo se lleva a cabo en la oficina de funcionarios conciliadores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). De esta forma, se logra la continuidad de las actividades educativas para más de 100 mil alumnos en la zona metropolitana de la capital del país, según indica la dependencia.

La Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOOC) demanda a los legisladores que asignen un presupuesto de 550 millones de pesos para el programa de fomento productivo para el café, ya que, por segundo año consecutivo, los precios internacionales son elevados. Un recorte al presupuesto va en contra del esfuerzo de los cafecultores, quienes pretenden reintegrar al cultivo 80 mil hectáreas abandonadas, según afirma Fernando Celis Calleja, asesor de la CNOOC.

Miércoles 2

Las 33 integrantes de la Caravana de Madres Buscando a sus Hijos Desaparecidos en Tránsito arriban a San Fernando, Tamaulipas, “maldita por la sangre que hace más de un año regaron 72 migrantes centro y sudamericanos masacrados por miembros del crimen organizado. Este lugar hace un año fue maldecido y se llenó de muerte. Hoy venimos a bendecirlo y a llenarlo de vida”, asegura el cura franciscano Tomás González, guía espiritual de las 28 hondureñas, cuatro nicaragüenses y una salvadoreña que han iniciado un viaje para buscar a sus hijos en distintas rutas del territorio mexicano utilizadas por indocumentados en su intento por llegar a Estados Unidos.

Amnistía Internacional (AI) advirtió que los opositores a la construcción de un parque eólico en Oaxaca podrían ser acusados injustamente de la muerte de Reynaldo Ordaz, ocurrida durante el desalojo de una protesta el pasado 28 de octubre. Los inconformes se enfrentaron con habitantes de la comunidad La Venta, quienes simpatizan con el proyecto. El organismo internacional advirtió que se ha dejado crecer la versión de que los miembros de la Asamblea de los Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y Territorio y del Comité de Resistencia al Proyecto Eólico de Unión Hidalgo fueron responsables del homicidio.

Por la madrugada policías municipales y bomberos de Tijuana, Baja California, desalojan a 20 manifestantes que permanecían en plantón desde un año en el parque Benito Juárez, frente a la alcaldía, en protesta por la construcción del zócalo 11 de Julio, mismo que incluye una catedral auspiciada por la diócesis de Tijuana y que implicaría la tala de cientos de árboles. Éste es el segundo desalojo de manifestantes ordenado por el gobierno del priísta Carlos Bustamante en

menos de un mes. El primero fue contra un centenar de miembros del Movimiento Ocupemos Tijuana, quienes protestaban por las políticas que provocaron la crisis financiera global.

Organizaciones de la sociedad civil y la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez protestan por separado por la golpiza que policías municipales propinaron el martes primero en esa urbe chihuahuense a 27 activistas y dos comunicadores. Los detenidos fueron consignados ante el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua por los supuestos daños a un banco (en cuya pared pegaron cruces de papel), lesiones a un policía municipal (cuya identidad no se ha revelado ni se ha presentado certificado médico) y delitos contra la salud (porque presuntamente se encontró un cigarro de mariguana a un detenido). La asociación de periodistas informa que sus compañeros fotógrafos Ramiro Escobar, de Radio *NET*, y Christian Torres, de *El Diario de Juárez*, salieron libres la noche del martes, y denuncian que fueron golpeados por los policías municipales y amenazados para que no dijeran nada, por lo cual acudieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) zona norte, donde presentaron denuncia contra los agentes.

Un enfrentamiento entre ejidatarios de las comunidades de Tilapa y Tierra Colorada, municipio de Malinaltepec, región de la Montaña, en el estado de Guerrero por la disputa de 14 hectáreas, en la zona limítrofe, deja una persona muerta y dos heridas, según informa el delegado de la Procuraduría Agraria, Fernando Jaimes Ferrer; el conflicto se suscita, luego de que campesinos de Tierra Colorada comenzaron a dispararles a los de Tilapa por rencillas generadas por una resolución agraria, en la que se favorece a la última localidad.

Jueves 3

Durante un mitin en la Cámara de Diputados realizado por miembros del SME, Martín Esparza afirma que comienza el periodo para que el gobierno federal cumpla la promesa hecha al SME de que antes del 30 de noviembre reinsertará laboralmente a los 16 mil 599 trabajadores que aún no han cobrado su liquidación, quienes en septiembre pasado levantaron el plantón del Zócalo capitalino a cambio de que les regresen su empleo, así como advierte Martín Esparza, dirigente del gremio. Tras confirmar que ya fue recibida la queja presentada por el SME contra el gobierno mexicano por violaciones a los derechos laborales, ante la Oficina Nacional Administrativa del TLCAN en la representación de Ottawa, Canadá, Esparza expone que el gremio retomará la calle y las acciones de movilización, ya que no se ve voluntad política del gobierno federal de resolver el conflicto. Los electricistas tienen previsto que el próximo 23 de noviembre marcharán y acompañarán movilizaciones de las organizaciones de usuarios inconformes con los cobros del servicio de energía eléctrica. Esparza afirma que el gobierno federal no ha puesto en la mesa de negociaciones ninguna propuesta para resolver de fondo el conflicto, y que las presentadas por el SME ni siquiera han tocado el tema del patrón sustituto ni la creación de una nueva empresa de energía eléctrica para la zona centro del país, aunque sí han exigido que la reinsertión laboral de los 16 mil 599 trabajadores sea en el sector eléctrico, pero ni esta situación ni el hecho de que ha crecido el número de zonas críticas por el mal servicio eléctrico hacen que Gobernación apure un acuerdo con estos trabajadores.

La lucha laboral en la mina de Cananea, Sonora, se llevará ahora a la CIDH y a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ya que el gobierno mexicano ha violado y desconocido uno de los

pilares de los derechos de los trabajadores, que es el de huelga, afirma el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros. Sostiene que “el presidente Felipe Calderón dio una versión sesgada y falsa sobre la situación que priva en Cananea, al congratularse de que todo está bien en esa mina”.

El Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas (CNDCCHIM) denuncia el fuerte incremento del cerco de hostigamiento y amenazas en contra de los comuneros chimalapas de las congregaciones de San Antonio y Benito Juárez, por parte de la policía chiapaneca y de elementos del Ejército federal asentados en la zona. En un comunicado, informa que además fue bloqueado, por ejidatarios chiapanecos, el camino vecinal que comunica la zona oriente chimalapa, desde el poblado de origen chiapaneco Rodolfo Figueroa al poblado oaxaqueño de Pascual Fuentes (El Júcaro), ubicado sobre la carretera panamericana. Esto se suma al bloqueo del ejido Díaz Ordaz que los comuneros chimalapas oaxaqueños iniciaron desde el pasado 20 de octubre. El CNDCCHIM advierte que hay indicios de una posible acción de represión oficial o de provocaciones que pudieran desembocar en un lamentable enfrentamiento violento, por lo que demandó la intervención inmediata, directa y dialogante, desde el más alto nivel de la Secretaría de Gobernación.

Integrantes de organizaciones sociales que se oponen al megaproyecto eólico en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, presentan una denuncia penal por lesiones, disparo de armas de fuego, ataque peligroso y amenazas, contra el agente municipal de La Venta, Ventura Ordaz Santiago, quien encabezó el ataque contra una manifestación de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) y del Comité de Resistencia al Proyecto Eólico de Unión Hidalgo. La denuncia contra Ordaz Santiago y otros se presenta ante el Ministerio Público de Juchitán, por Bettina Cruz Velázquez, Juan Regalado Martínez y Guadalupe Ramírez Castellanos, miembros de la APIIDTT y del comité, por las lesiones y golpes que les propinaron a ellos y otras 20 personas durante el ataque, en el cual resultó muerto Reynaldo Ordaz Velásquez, del grupo de los atacantes.

Viernes 4

En la mesa de negociación entre el gobierno federal y el SME se presenta y discute la posibilidad de que sea el gobierno capitalino el que dé empleo a los trabajadores que se hallan en resistencia desde hace dos años, cuando un decreto presidencial dio por concluida la operación de LyFC. La propuesta inicial es que los integrantes del SME atiendan las 26 zonas críticas de la capital del país en materia de suministro de energía eléctrica, principalmente redes aéreas y subterráneas, así como deficiencias de mantenimiento en puntos específicos, como el Aeropuerto Internacional, el Centro Histórico, escuelas, hospitales, dependencias públicas y mercados, entre otros. De prosperar este proyecto, en los próximos días se definiría si los electricistas pueden ser contratados directamente por el gobierno (federal o local), quienes estarían integrados a una nueva paraestatal para atender, además, la operación de la fibra óptica en el Distrito Federal.

Diversas organizaciones civiles de Ciudad Juárez, Chihuahua, denuncian que a casi dos años de que la CIDH emitió la sentencia del caso conocido como Campo Algodonero, por la desaparición y muerte de tres mujeres adolescentes en Ciudad Juárez, el Estado mexicano no ha hecho ningún esfuerzo por cumplir con la resolución. Por el contrario, ahora pretende desconocer a las centenares de víctimas que han perdido la vida como parte de feminicidios, afirman. Con motivo del décimo

aniversario de que se encontraron los cadáveres de las jóvenes en un lote de la capital chihuahuense, luego que sus familiares habían reportado su desaparición, el gobierno federal convoca a una ceremonia el próximo 7 de noviembre en ese lugar, donde se develará un monumento en memoria de las mujeres víctimas de homicidio por razones de género en Ciudad Juárez, como lo ordenó la CIDH. Sin embargo ante la negativa del subsecretario de Gobernación, Felipe Zamora, de incorporar en dicho monumento los nombres de todas las víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer, y la Red Ciudadana de No Violencia y Dignidad Humana, así como las familias de las víctimas del Campo Algodonero informan que no asistirán a la ceremonia del próximo lunes. Y es que, aseguran, el Estado pretende reconocer su responsabilidad por las tres víctimas del caso ante la CIDH y desconocer a los centenares de víctimas más que han perecido como parte del feminicidio en Ciudad Juárez.

El Congreso Nacional Indígena (CNI) se solidariza con los pueblos ikoot (huave), binnizá (zapoteco del Istmo) y afro descendientes, integrantes de la APIITDDT, “víctimas de las peores formas de criminalización de su lucha en contra del megaproyecto Corredor Eólico del Istmo [CEI], por parte de los malos gobiernos de Felipe Calderón y Gabino Cué, quienes con su mutismo, complacencia, racismo, condescendencia y malinchismo se muestran cómplices de las empresas transnacionales españolas en la violación directa de derechos de pueblos y comunidades indígenas”. En un comunicado, el CNI, que agrupa a autoridades tradicionales, comunales y agrarias de huicholes, yaquis, purépechas, nahuas y cocas de Michoacán y Jalisco, amuzgos y tlapanecos de Guerrero, tzotziles y tzeltales de Chiapas, zapotecos y mixtecos de Oaxaca exige el retiro de soldados, marinos, policías y paramilitares de sus territorios, porque, afirma, no son delincuentes ni narcotraficantes sino pueblos y comunidades indígenas en lucha y resistencia por la defensa de sus tierras y territorios.

El CNDCCCHIM informa que al mediodía se suscitó un enfrentamiento entre comuneros chimalapas y ejidatarios chiapanecos, luego de que algunos integrantes del poblado Díaz Ordaz provocaron y agredieron a zoques de las congregaciones de San Antonio y Benito Juárez. En un comunicado, la organización indica que luego de la riña, los chimas (apelativo dado a los residentes de la región) se organizaron y masivamente rompieron el bloqueo del camino que comunica la zona oriente de los chimalapas con la carretera Panamericana (poblado Pascual Fuentes, Oaxaca, cerca de Tapanatepec). “Al poco tiempo subieron a la región más elementos de la policía chiapaneca y del Ejército, militarizando totalmente la región. Se teme una represión violenta en cualquier momento”, advierte la organización.

Organizaciones sociales y no gubernamentales de Guerrero rinden homenaje en la capital del estado a Omar Guerrero Solís, comandante Ramiro, al cumplirse dos años de que fuera asesinado en la comunidad de Palos Grandes, municipio de Ajuchitlán del Progreso, región de la Tierra Caliente. Por separado, las agrupaciones realizan un acto en la mañana en el zócalo de Chilpancingo, Guerrero, y después del mediodía en el panteón municipal, donde se encuentran los restos del dirigente del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).

Cuando bajó el nivel de agua de los pozos y el líquido empezó a escasear, los habitantes de San José del Progreso, Ocotlán, Oaxaca, decidieron organizarse para protestar en contra de la compañía minera Fortuna Silver que adquirió la concesión para extraer oro y plata de sus tierras.

Casi tres años después de que habitantes de San José del Progreso, Ocotlán, Oaxaca, decidieron organizarse para protestar en contra de la compañía minera Fortuna Silver que adquirió la concesión para extraer oro y plata de sus tierras, los campesinos mantienen su rechazo a la presencia de la empresa canadiense, sin que hasta ahora ninguna autoridad haya dado respuesta a sus demandas. De cualquier manera, los inconformes siguen en lucha, ahora mediante la realización y presentación del documental “Minas y mentiras”, en el que están plasmadas las acciones que han emprendido y la represión de que han sido víctimas. Durante la presentación del material, elaborado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Bernardo Vázquez, de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, sostiene que el conflicto se originó, primero, porque no se tomó en cuenta a la comunidad. Las autoridades permitieron el proyecto de exploración y explotación sin informar a los pobladores sobre sus alcances y las afectaciones que habría en su entorno, como la desecación de los pocos mantos freáticos que hay en la zona. Tampoco que a causa de los trabajos de minería el subsuelo se contaminaría con ácido sulfúrico o que incluso tendrían que emigrar por el crecimiento del área de explotación.

Sábado 5

La asamblea de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-Policía Comunitaria) acuerda reeducar mediante usos y costumbres a los cuatro indígenas y un mestizo detenidos con 600 kgs. de marihuana –el pasado 13 de octubre– en el cruce de Huehuetepec, municipio de Atlamajalcingo del Monte, Guerrero. La asamblea acuerda también incinerar los 33 paquetes de la droga, decisión que se ejecutó allí mismo, en presencia de Ramón Almonte Borja, secretario de Seguridad Pública y Protección Civil de Guerrero, quien solicita –sin éxito– la entrega de los cuatro mixtecos y un ciudadano del estado de México.

Ejidatarios de Atotonilco, municipio de San Juan del Río, Durango, denuncian que directivos de la empresa minera canadiense Castlegold Corp falsificaron el acta de la asamblea ejidal para que las autoridades agrarias les dieran permiso de extraer oro en la mina Real del Oro. José Gándara Martínez, ejidatario de Atotonilco, asegura que en 2008 la asamblea ejidal acordó rentar por 500 mil pesos anuales 108 has., a la compañía extranjera, que se usarían por 15 años como tiradero de residuos mineros. En esas tierras funcionó la mina Real del Oro hasta hace poco más de dos décadas. Sin embargo, este año la minera empezó a usar dinamita para extracción de oro. Asegura que si hubieran sabido que la empresa pretendía extraer oro, entonces la renta por esas tierras hubiera sido de al menos un millón de pesos al año y habrían solicitado algunas obras en beneficio de la comunidad. En la mina trabajan 500 personas, pero de ellas sólo 10 son del ejido Atotonilco, el resto ha sido contratado en otros municipios y estados.

Unos 600 profesores de la sección 59 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), en Oaxaca, identificada con la lideresa magisterial, Elba Esther Gordillo Morales, renuncian a la gremial y solicitan su reincorporación a la sección 22, por estar en desacuerdo con los intereses políticos asumidos en favor del Partido de la Revolución Institucional (PRI) y de su precandidato a la Presidencia, Enrique Peña Nieto. En un mitin, frente al palacio de gobierno, el ex secretario general de la sección 59, Cuauhtémoc Sigüenza Orozco, uno de los dimitentes, afirma que la renuncia masiva obedece “a un análisis serio y responsable después de cinco años de militancia en esa organización sindical, pues la sección 59 persigue intereses políticos y personales

de Gordillo y de sus actuales líderes, Joaquín Echeverría Lara, Humberto Alcalá Betanzos y Miguel Silva Selvas”.

Bajo un escenario de estrategia contrainsurgente, según expresa el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (FRAYBA), las comunidades autónomas en resistencia cuyas poblaciones lo constituyen civiles bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), están en el foco de una posible confrontación y reactivación de hostilidades como las que el pueblo de México guarda en su memoria colectiva. Esto avisa el centro en una carta pública al presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, y al gobernador del estado Juan Sabines Guerrero, la cual ha sido suscrita en pocos días por más de 350 organizaciones, colectivos, comunidades y pueblos de México y numerosos países, quienes comparten lo que significa la profundización del olvido en que la agenda oficial ha situado las demandas y denuncias de cientos de sujetos y procesos en Chiapas.

El movimiento nacional de los “indignados” se sumará al llamado de acción global hecho por el grupo de España (asentado en la Puerta del Sol, en Madrid) para el próximo 11 de noviembre (11/11/11), con un plantón de 24 horas en el monumento a la Revolución, con el propósito de difundir información sobre un esquema de economía solidaria que pueda impulsarse en beneficio de la población. En la asamblea que realizan cada sábado, representantes de los campamentos de la Bolsa Mexicana de Valores y de Coyoacán acuerdan también que ese día decenas de grupos acudirán a plazas públicas para realizar brigadas informativas sobre las acciones a tomar para construir una economía diferente, así como informa un integrante del movimiento, quien se identifica como Tomás Calles (juego de palabras con el que se refieren a sí mismos algunos activistas).

Domingo 6

Organizaciones y comunidades de la Otra Campaña en Chiapas llaman a movilizaciones y manifestaciones públicas en todo el mundo para el lunes 7, y convocan a una marcha en San Cristóbal de las Casas exigiendo la libertad de los ocho indígenas presos en huelga de hambre desde hace 39 días. Otros dos ayunan y, uno más, el vocero del grupo, Alberto Patishtán, ha sido arrancado de la protesta hace dos semanas. Según el último reporte médico, los ayunantes se encuentran en condiciones de salud muy graves, y parece inminente el riesgo de daños orgánicos permanentes. En carta dirigida al EZLN, las Juntas de Buen Gobierno (JBG), el CNI, la Otra Campaña, y los cerca de 20 organismos, frentes y comunidades que convocan a movilizaciones y acciones nacionales e internacionales por la libertad de los presos, sostienen que “en Chiapas a los presos les prefabricaron delitos por los cuales están condenados a sentencias extremadamente largas, en ningún momento se respetó su derecho al debido proceso, y junto con otras irregularidades procesales, todos denuncian haber sufrido tortura física y psicológica en casas anónimas que no poseen ningún distintivo y son centros de tortura”. En tanto, según información oficial, los ocho presos en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 5 habrían suspendido, por la noche, la huelga de hambre que iniciaron el 29 de septiembre. Los ocho internos, acusados de diferentes delitos, desistieron del ayuno luego de que las autoridades penitenciarias se comprometieron a revisar sus correspondientes expedientes penales. Los reclusos

solicitaron en el escrito que se dé seguimiento a su exigencia de que sean liberados, debido a que fueron encarcelados injustamente.

Grupos ecologistas marchan del parque Zamora al zócalo del puerto de Veracruz para exigir que se detenga la deforestación y destrucción del centenario Paseo Salvador Díaz Mirón, en el centro histórico de dicha ciudad, obra autorizada por la alcaldesa priísta Carolina Gudiño Corro como parte de un proyecto para modernizar el puerto e introducir un metrobús. La marcha es convocada en Internet por Ida Rodríguez Prampolini, fundadora del Instituto Veracruzano de Cultura en la década de 1980, quien en silla de ruedas acude a la movilización, llevada por Daniel Goeritz, su hijo y ex director regional del INAH.

El cardenal Norberto Rivera Carrera afirma que “la Iglesia católica no pide que las mujeres que abortan sean encarceladas, lo que demanda es que el Estado garantice el derecho a la vida y promueva la convivencia pacífica y la seguridad de todos los ciudadanos”. “El aborto debe estar identificado como un delito que altera el bien común social y por tanto deben aplicarse sanciones”, expone Rivera en una entrevista publicada en el semanario *Desde la Fe*, órgano oficial de la arquidiócesis de México. Allí, se pronuncia contra el uso de la píldora del día siguiente u otros compuestos farmacológicos que provocan el mismo efecto que un aborto, y condena éticamente a las compañías farmacéuticas y a los médicos que practican el aborto en clínicas de diverso nivel socioeconómico. “Quien lucra con el aborto debe ser castigado”, sentencia.

Lunes 7

Luego de destacar el crecimiento del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), Andrés Manuel López Obrador hace un llamado a todas las organizaciones civiles a hacer un alto en sus tareas para poner en el centro la prioridad superior de transformar el país. En su mensaje semanal por Internet, el ex candidato presidencial se refiere de manera particular a las organizaciones que trabajan en defensa de los derechos humanos, de los laborales y en favor de los productores, y las llama a reflexionar acerca de la necesidad de un cambio verdadero en el país, pues sin esta transformación no se logrará que se respeten los derechos del pueblo, afirma. López Obrador considera que ese es el verdadero cambio que requiere México. Incluso señala que de lograrse este objetivo, sin duda mejorarán las condiciones en cuanto a derechos humanos, la situación de los trabajadores y “no habrá más autoritarismo, sino que construirá una mejor sociedad, con grandeza espiritual, donde se actúe con honestidad y humanismo”.

Al cumplirse 10 años de que fueron localizados los cuerpos de ocho mujeres en el campo algodnero y en medio de reclamos y abucheos de familiares de las víctimas se inauguró el monumento memorial que ordenó la CIDH. El subsecretario de Gobernación, Felipe Zamora, pide perdón por estos crímenes y reconoce la responsabilidad del Estado mexicano por omisiones que derivaron en violaciones a los derechos de las víctimas. “Por el incumplimiento a investigar y garantizar el derecho a las víctimas, por violentar su acceso a la justicia y protección, el Estado reconoce su responsabilidad”. La intervención del funcionario, así como la de Graciela Ortiz, secretaria de Gobierno de Chihuahua, y la de Héctor Arcelús, secretario del municipio, son interrumpidas por los gritos de familiares de mujeres asesinadas y desaparecidas que reclaman justicia. Los deudos los llaman mentirosos y corean consignas de “ni una más” o “vivas se las

llevaron, vivas las queremos”, y a pesar de todo los funcionarios continúan con los discursos que traían preparados.

A punto de cumplir 40 días en huelga de hambre, y ante la sistemática ausencia de respuesta del gobierno de Chiapas a sus demandas, los presos políticos reclusos en el CERSS número 5 deciden suspender la acción ante el riesgo en que estaban sus vidas; el plantón de familiares de los indígenas traslada su protesta a las puertas del penal de este municipio. Cerca del mediodía, decenas de indígenas bloquean el paso en la carretera San Cristóbal-Ocosingo, frente al centro penitenciario. En una gran manta se resume la demanda clave: “libertad inmediata a nuestros presos”.

La caravana de 33 madres centroamericanas que buscan a sus hijos desaparecidos en territorio nacional llega a la Casa del Migrante San Juan Diego, ubicada en cerrada de la Cruz, colonia Lechería, en el Estado de México, sitio en que las mujeres exigen el apoyo de las autoridades mexicanas para localizar a sus familiares y que proporcionen seguridad en la ruta migratoria hacia Estados Unidos. Martha Sánchez, coordinadora del Movimiento Migrante Centroamericano, al frente de la Caravana Sigo tus Huellas con la Esperanza de Encontrarte, expone que el grupo de madres trae una lista de 360 nombres de migrantes que, presumen, desaparecieron en territorio nacional, aunque, indica, que podrían ser más de 10 mil los extraviados. La representante lamenta que después de ocho días de recorrido, la caravana no ha tenido respuesta de autoridades mexicanas que permitan considerar que existe un interés real por localizar a los desaparecidos.

Pobladores de diversos municipios aledaños a la central nucleoelectrica de Laguna Verde, en Veracruz, marchan por esta capital para demandar la liberación del ex diputado local Francisco Morales Fernández, “el Potro”, fundador del Movimiento de Resistencia Chucho El Roto, que desde 2005 defiende a usuarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) contra cobros excesivos. El activista está preso desde 2008, acusado por funcionarios de la CFE de agresiones, amenazas y privación ilegal de la libertad en contra de trabajadores que pretendían cortar el suministro de energía eléctrica a familias en moratoria.

Autoridades de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) anuncian la reanudación de actividades académicas y administrativas en esa casa de estudios, después de un mes de huelga. Según la rectoría de la UABJO, el conflicto concluyó después de que se acordó depositar 4 millones 200 mil pesos ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en cuotas para el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Oaxaca (STAUO).

Unos 150 artesanos indígenas y mestizos, vestidos con trajes étnicos y pasamontañas, se manifiestan en el primer cuadro del centro histórico de la ciudad de Guadalajara para exigir al munícipe capitalino, Aristóteles Sandoval Díaz, que les permita regresar a vender sus productos en el callejón del Diablo, donde laboraron durante más de 10 años, hasta que policías municipales los desalojaron el julio pasado. Ésta es la tercera manifestación que realizan los afectados desde la semana anterior.

Martes 8

La caravana de madres itinerantes que buscan a sus hijos migrantes, manifiestan en conferencia de prensa realizada en la Ciudad de México que quieren ir un poco más allá de las denuncias y las exigencias y promover la solidaridad en la ciudadanía mexicana: “que se unan a nuestras peticiones para erradicar la xenofobia que subyace debajo de la violencia que padece la población migrante”. En su marcha han recorrido Tabasco, Veracruz, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí y Querétaro, bajo la consigna “sigo tus huellas con la esperanza de encontrarte”. En su camino de regreso hacia Centroamérica pasarán por Orizaba, Veracruz; Ixtepec, Oaxaca, y Arriaga, Chiapas. En cada estación acuden a las casas y albergues de migrantes, a los centros de detención y, cuando se puede, a las morgues, así como recorren las vías del tren y las iglesias.

Autoridades de la comunidad indígena zoque de San Miguel Chimalapa y dirigentes de la Unión Nacional de Organizaciones Campesinas Autónomas (UNORCA) denuncian que “grandes intereses de inversionistas nacionales y extranjeros en la madera, la biodiversidad y ahora la explotación de la riqueza forestal en los mercados internacionales de carbono son las que impiden una solución al conflicto entre indígenas y campesinos de Chimalapas, Oaxaca, y de varios ejidos chiapanecos, que puede derivar en un más grave conflicto social que el ya existente en la región”. En conferencia de prensa afirman que el gobierno del estado de Chiapas ha fabricado e inventado una serie de delitos graves en contra de los comuneros zoques para criminalizar su lucha en defensa de su territorio y recursos naturales, sobre los cuales tienen títulos virreinales de 1687, acusándolos de que hay grupos paramilitares, asociación delictuosa y delincuencia organizada entre los comuneros y calificando como secuestro el arraigo comunitario dictado por la asamblea comunitaria conforme a sus usos y costumbres, contra el ganadero Jorge Humberto Luna Salinas, desde el pasado día 4, porque, aseguran, estaba alterando el orden y agrediendo a los comuneros Chimalapa.

Al cumplir un mes, se levanta el plantón de familiares de los presos de la Otra Campaña que permanecieron 39 días en huelga de hambre. Las familias indígenas que habían acampado en el atrio de la catedral de la ciudad de San Cristóbal de las Casas el 8 de octubre anuncian que seguirán en la lucha por la libertad de los presos políticos, pero de otra manera, desde sus comunidades. Esto, dos días después de que los presos en huelga de hambre interrumpieron su ayuno, no así su protesta –según declara su vocero, Pedro López Jiménez–, ni la denuncia de que el gobierno del estado ha sido sordo a sus reclamos, que ellos consideran justos.

La CIDH da a conocer a las partes del litigio que admitió la petición 512-08, a nombre de Mariana Selvas Gómez y otros contra México, relativa al caso de las mujeres a quienes les fueron violentados sus derechos humanos los días 3 y 4 de mayo de 2006, durante un operativo policiaco efectuado en Atenco, estado de México. “Desde el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (PRODH) celebramos la decisión de la CIDH de declarar admisible el caso de las mujeres de Atenco. En este sentido, recordamos que las agresiones a las mujeres se suscitaron en el operativo Atenco, cuando el 3 y 4 de mayo de 2006, agentes policiales de los tres niveles de gobierno utilizaron de manera excesiva la fuerza pública para inmovilizar la protesta social en Texcoco y San Salvador Atenco. Al menos 26 mujeres reportaron violencia, de las cuáles once continuaron activamente la denuncia de la tortura sexual perpetrada por los agentes policiales, así como la detención arbitraria y la falta de acceso a la justicia, entre otras. Ni la Fiscalía Especial de Delitos Violentos Contra las Mujeres y Trata de Personas [FEVIMTRA] ni la Procuraduría General

de Justicia del Estado de México [PGJEM] han realizado una adecuada investigación y ningún policía, de los más de 2 mil 500 agentes que intervinieron, ha sido sancionado”, destaca el comunicado del organismo no gubernamental.

Jóvenes y estudiantes organizados en torno al proyecto de nación que ofrece el MORENA presentan la estructura organizacional, que pretende alentar la participación de este sector de la población y fortalecer el movimiento iniciado por Andrés Manuel López Obrador. María Luisa Alcalde, responsable de MORENA Jóvenes y Estudiantes ante el Comité Ejecutivo de MORENA AC, informa que hay avances muy significativos en la integración de los comités estatales, y se prevé que antes de que concluya el año queden formados en su totalidad, además de que ya hay varias entidades donde se ha empezado la conformación de los comités municipales. En conferencia de prensa, Alcalde explica que en un principio se formaron cuatro comisiones operativas: organización y vinculación, destinada a la tarea de formar comités estudiantiles en universidades, escuelas y centros de reunión y armar el padrón electoral, además de distribuir el periódico *Regeneración*. La segunda comisión es de comunicación y difusión, con la función de actuar en las redes sociales, páginas web y generación de contenidos para su difusión a través de Internet, además de construir espacios y relaciones para posicionarse en todos los medios. La tercera es la de finanzas y eventos, cuya labor es la organización de conciertos, bailes y actos culturales, así como círculos de reflexión y conferencias relacionados con los temas de interés de los jóvenes; la última comisión es la de análisis y contenidos, que tiene como finalidad conjuntar propuestas de jóvenes y estudiantes para llevarlas a la mesa y enriquecer su proyecto de nación.

Transportistas de Jiutepec, Morelos, bloquean durante seis horas el centro de transferencia de basura de Cuernavaca para exigir al ayuntamiento 340 mil pesos que les adeuda desde hace un año. Joaquín Cabello Alcántara, propietario del predio que aloja el basurero, ubicado en la cabecera municipal de Jiutepec, encabeza la movilización y asegura que “hace un año, cuando el ayuntamiento capitalino retiró la concesión a la empresa Promotora Ambiental y no tenía dónde depositar sus desechos, él les rentó su predio durante dos meses y camiones para transportar la basura a rellenos sanitarios del Estado de México, pero no le pagaron lo pactado”.

Por la mañana, casi en forma simultánea, decenas de miembros de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) toman las instalaciones de la CFE en los municipios de Ayutla de los Libres, Ometepec, Chilapa, San Marcos y Chilpancingo, en el estado de Guerrero, en demanda de la reducción de las tarifas eléctricas. En Chilpancingo, seis soldados amenazan a jóvenes que bloquean los accesos a las oficinas administrativas de la CFE y los obligan a retirarse, así como denuncia Emmanuel Rivera, miembro de la UPOEG.

Habitantes del Pedregal de Santo Domingo, en el Distrito federal, advierten que no tolerarán más abusos ni cobros excesivos en los Pedregales de Coyoacán, después de que el pasado lunes la CFE cortó, aunque luego reinstaló, el suministro de energía eléctrica por supuestos adeudos en el pago del servicio. Centenares de personas se congregan en la esquina de las calles de Copal y Xilotzingo, en correspondencia con el acuerdo pactado con representantes de la CFE para realizar una reunión en la que se negociarían los adeudos; sin embargo, ningún representante de la paraestatal llega a la cita.

Miércoles 9

Se presenta el informe de Human Rights Watch (HRW) denominado “Ni seguridad, ni derechos: ejecuciones y tortura en la guerra contra el narcotráfico en México”, que señala que miembros de las fuerzas de seguridad “habrían participado en más de 170 casos de tortura, 39 desapariciones y 24 ejecuciones extrajudiciales desde que Felipe Calderón asumió la Presidencia en diciembre de 2006”. La conclusión de investigaciones exhaustivas realizadas por la organización durante dos años en cinco de los estados más violentos del país, asevera: “en vez de reducir la violencia, la guerra contra el narco ha provocado un incremento dramático en la cantidad de asesinatos, torturas y otros terribles abusos por parte de las fuerzas de seguridad, que sólo contribuyen a agravar el clima de descontrol y temor que predomina en muchas partes del país”. José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, agrega—después de haberse reunido por más de dos horas con el presidente Felipe Calderón para analizar el informe— que el Ejército y la Armada de México deben ser utilizados con total transparencia y rendición de cuentas, cosa que no ocurre actualmente. Insiste en que si las fuerzas armadas continúan actuando al margen de la transparencia y del rendimiento de cuentas, difícilmente cambiará el esquema actual de violación de derechos humanos. En este sentido, hace un llamado al gobierno federal a establecer mecanismos de control para dejar atrás la impunidad casi total en la que actúan soldados y marinos.

Un par de días después de haber sido inaugurado, en Ciudad Juárez, el memorial por las víctimas de feminicidio permanece cerrado y sin vigilancia. En el suelo están las fotografías tamaño cartel de ocho mujeres asesinadas, las cuales arrancó el viento. Integrantes de la Red Ciudadana de No Violencia y Dignidad Humana denuncian que la inauguración fue una farsa, ya que la sentencia de la CIDH fue erigir un monumento, “no lo que las autoridades llaman memorial: un parque enrejado”.

Más de un centenar de agentes de la Unidad Policial de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, y de la Unidad Policial de Acción Inmediata de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) incursionan por la mañana en el municipio zoque de San Miguel Chimalapa, en el Istmo de Tehuantepec, para rescatar al líder ganadero chiapaneco Jorge Humberto Luna Salinas, retenido desde el viernes pasado por invadir tierras comunales. Los uniformados golpean con toletes a unos 30 zoques y detienen a siete personas. Más de 50 resultan intoxicadas con gas lacrimógeno, entre ellas alumnos de un jardín de niños ubicado a un lado de la comisaría, así como denuncia el presidente del consejo de vigilancia del comisariado de bienes comunales, Francisco Sánchez Gutiérrez.

Alrededor de 20 indígenas tohono o’otham (también conocidos como pápagos), habitantes de zonas desérticas del noroeste de Sonora, protestan ante la Comisión Estatal para el Desarrollo Indígena de Sonora porque durante más de un año han solicitado apoyo para que 30 familias emprendan proyectos productivos en los municipios de Caborca y Pitiquito, sin obtener respuesta de las autoridades. Bartolo Sánchez Sinohui, consejero de los indígenas, expone que en septiembre de 2010 funcionarios de la dependencia los invitaron a iniciar trámites para obtener recursos, pero no los han atendido.

Vecinos de la colonia Pedregal de Santo Domingo, Coyoacán, en el Distrito Federal, prohíben el paso a dicha colonia a trabajadores o cualquier otro representante de la CFE en tanto no se resuelva

el asunto de los cobros excesivos por el servicio de energía eléctrica y la paraestatal desista de cortarlo. Así, los vecinos organizados marchan de la calle Copal, justo donde hace tres días la CFE cortó el servicio de energía. Antes, un grupo de representantes de la paraestatal se presenta en la colonia con la intención de entablar una negociación, pero se les exige retirarse de Santo Domingo.

Jueves 10

Aproximadamente 600 estudiantes universitarios y activistas del movimiento de los “indignados” marchan de la Bolsa Mexicana de Valores a la Cámara de Diputados para exigir que el gobierno aumente el presupuesto educativo hasta llegar a 2% del producto interno bruto (PIB). Una comisión de los manifestantes es atendida por un grupo de legisladores, entre ellos Alejandro Encinas, Porfirio Muñoz Ledo y Mario di Costanzo. Una forma de garantizar recursos para la educación, la salud y el campo es gravar las transacciones bursátiles –la conocida tasa Tobin–, reducir al menos 5% los gastos suntuarios de la alta burocracia y diseñar presupuestos multianuales, así como afirma Arturo Guerrero, estudiante de sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Iztapalapa (UAM-I).

El Instituto Nacional de Migración (INM) se compromete a colaborar con las madres de migrantes centroamericanos desaparecidos, para buscar a sus familiares en las bases de datos de la institución. En una reunión de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delitos con integrantes de la caravana Sigo Tus Huellas con la Esperanza de Encontrarte, conformada por 33 mujeres de Nicaragua, El Salvador y Honduras, el coordinador jurídico del INM, Jean Paul Verduzco, ofrece tener un acercamiento con las representaciones consulares de los países de origen de las madres, para agilizar las acciones de búsqueda. En un comunicado, la Secretaría de Gobernación informa que la caravana recibió apoyo de los funcionarios de las delegaciones regionales del INM en Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro y la ciudad de México, así como acompañamiento de los oficiales de los Grupo Beta de Protección a Migrantes en su recorrido por el país.

En vísperas de las elecciones en Michoacán, integrantes de la comunidad de Cherán prácticamente han agotado los pasos previos para la designación de sus autoridades mediante usos y costumbres, tras el aval que les dio el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para hacerlo, aun cuando la ley michoacana no incluya esta figura. Ya se efectuaron las asambleas para la designación del próximo gobierno municipal, que tendrá 200 representantes y entre 13 y 18 concejales. Integrantes del MJPD informan de la consulta en los cuatro barrios de la comunidad indígena: Jarukutini, Ketsikua, Karakua y Parhikutín, que avalaron el esquema tradicional de designación de autoridades para que el domingo 13, en forma paralela a las elecciones constitucionales en Michoacán, la comunidad ratifique la designación en asamblea general.

Los siete indígenas zoques de San Miguel Chimalapa detenidos por policías de Oaxaca que rescataron al líder ganadero chiapaneco Jorge Humberto Luna Salinas quedaron libres la noche del miércoles pasado, así como informa Jesús López López, procurador de justicia del estado. Ante los liberados, López López confirma que la procuraduría abrió una averiguación previa por privación ilegal de la libertad, pero como este delito sucedió en el Istmo de Tehuantepec, donde impera el nuevo sistema penal oral, no amerita la prisión preventiva de los zoques. Preciso que también se

investigará si Luna Salinas invadió tierras y dañó bosques, como denunciaron los indígenas, y asegura que la dependencia investigará si la policía cometió abusos durante el rescate del ganadero.

Afiliados al Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al Servicio de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) suspenden actividades de las 7 a las 21 hrs. en las 350 unidades académicas y de trabajo del estado, a excepción de la escuela de medicina. El gremio, que aglutina a más de mil Y 500 trabajadores, exige al rector Asencio Villegas Arrizón que solucione conflictos laborales en las preparatorias 25 de Petatlán y 1 de Chilpancingo, además de la estancia infantil y otros centros de trabajo en Acapulco. El paro afecta a más de 60 mil estudiantes.

Legisladores locales, jefes delegacionales y líderes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Distrito Federal encabezan una movilización afuera de la Cámara de Diputados con la que dejan en claro que no permitirán que cristalice el recorte de 14 mil millones de pesos que pretenden aplicar las bancadas del PRI y del PAN a las finanzas de la Ciudad de México, ya que eso pondría en riesgo obras públicas y programas sociales que benefician a millones de personas. En el acto, los representantes populares y funcionarios locales demandan un presupuesto digno para esta capital, e incluso se declaran en alerta permanente de aquí hasta el 15 de noviembre próximo, cuando la Cámara de Diputados federal aprobará el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012.

Vecinos del Pedregal de Santo Domingo, en Coyoacán, Distrito Federal, acuerdan presentar una queja ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) contra la CFE por los cobros excesivos que se han realizado en la colonia. También queda conformada la representación vecinal de los habitantes y se organiza la integración de brigadas de vigilancia en la colonia; además, colocan alarmas en las viviendas, pues aún se teme que se reanuden los operativos para la suspensión del servicio de energía. En el cruce de las calles de Jilotzingo y Copal se instala un módulo permanente para informar y orientar a los vecinos en caso de que se les quiera suspender el servicio. También comienzan a hacer un registro de las personas a las cuales se les cortó la energía eléctrica por los altos cobros del suministro.

La comunidad estudiantil, académica y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (SUTUACM) realizan un llamado a la rectora de la casa de estudios, Esther Orozco, para instalar una mesa de diálogo “que permita lograr acuerdos que restituyan el marco de legalidad, entendimiento y respeto que nos debemos”. Al denunciar un despido injustificado más de otro profesor que tomó parte en el movimiento para llevar al consejo universitario la remoción de la rectora, así como hostigamientos laborales y violaciones al contrato colectivo de trabajo, representantes de los sectores advierten que, de ser necesario, irán al paro total en la UACM para forzar el diálogo.

Viernes 11

Más de 2 mil personas vestidas de blanco marchan por las principales calles de Cuernavaca, capital del estado de Morelos, para exigir al gobernador Marco Antonio Adame Castillo aprehender a los asesinos del investigador Ernesto Méndez Salinas, del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El académico fue ultimado el martes pasado cuando circulaba sobre la avenida Teopanzolco de esta ciudad. Los universitarios marchan de la Paloma de

la Paz al centro de la ciudad –donde están las sedes de los tres poderes del Estado– para exigir que el crimen no quede impune y en demanda de que se frene la violencia y la inseguridad en Morelos. En la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, el contingente exige que ésta aclare el asesinato a la brevedad. La marcha concluye frente al congreso local, donde los académicos realizan un mitin para demandar justicia, así como que las autoridades estatales cumplan su función de proveer seguridad.

El gobierno del estado de Oaxaca, instala la Comisión Ejecutiva para la Atención de los Chimalapas, cuyo objetivo será abordar la problemática limítrofe y agraria que comuneros de Oaxaca enfrentan con núcleos agrarios chiapanecos en esa zona del istmo de Tehuantepec. El gobernador Gabino Cué Monteagudo asegura que este organismo se crea mediante decreto publicado en el *Diario Oficial* y responde al interés fundamental de coordinar, apoyar y procurar seguridad jurídica a los legítimos poseedores de esas tierras a partir del ejercicio de acciones legales conforme a derecho, y de trabajos de campo necesarios con las instancias competentes para establecer con precisión y en forma definitiva las colindancias y límites.

Con cierres en varias calles, habitantes de la colonia Cuchilla del Tesoro, en la delegación Gustavo A. Madero, Distrito Federal, reclaman la falta de agua que padecen desde hace más de un mes. Los inconformes señalan que regularmente el servicio les llega por las noches, pero ya pasaron varias semanas en los que a ninguna hora cuentan con el líquido, sin que haya ninguna explicación del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM).

Sábado 12

Más de 200 habitantes del fraccionamiento San Buenaventura, en Ixtapaluca, Estado de México, intentan linchar a un presunto delincuente que hirió a un médico luego de asaltar su negocio. Los granaderos lanzan gases lacrimógenos a los pobladores, para rescatarlo. Ante esto, los habitantes inconformes bloquean las vialidades para protestar por la falta de seguridad en su unidad y exigir la renuncia del alcalde priísta Humberto Navarro de Alba.

Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de Ciudad Juárez, golpean y amenazan al periodista Daniel Domínguez de *El Diario* cuando cubría información policiaca. Esta es la segunda agresión contra periodistas realizada por agentes policiacos municipales en lo que va del mes, la anterior ocurrió el primero de noviembre cuando elementos de esa corporación arrestaron a Christian Torres de *El Diario*, y al fotógrafo Ramiro Escobar, de *Radio Net*. En esa ocasión también sufrió maltrato físico el periodista de *Diario TV*, Omar Chávez Limón. El secretario de Seguridad Pública Municipal, Julián Leyzaola Pérez, asegura que “el hecho ocurrido el viernes le causó indignación, porque esas no son las intenciones de la policía” y afirma que por la noche tomaría las medidas adecuadas en contra de los agentes agresores.

Domingo 13

La caravana Sigo Tus Huellas con la Esperanza de Encontrarte concluye su recorrido de dos semanas por México con la noticia de que la hondureña Olivia Odalma Orellana encontró en el

penal de este lugar a su hijo Osmán Lizandro Mejía Orellana, de quien no tenía noticias desde 2004. “¡Éste es un milagro de dios!”, exclama cuando en el reclusorio de Tapachula el director Luis Antonio Coutiño Ruiz informa que había cruzado datos con las autoridades del penal de Motozintla –en la sierra de Chiapas– y le habían dicho que estaba una persona con ese nombre, después de una llamada informa: “es positivo, está en Motozintla”.

La oficina en México de la AFL-CIO –la central sindical más influyente de Estados Unidos– anuncia que esta semana en Washington la agrupación obrera y otros gremios estadounidenses emprenderán dos acciones en favor de la libertad sindical en México. En el primero apoyarán la presentación de una queja del SME contra el gobierno mexicano, ante instancias del Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte –derivado del TLCAN–, por violaciones a los derechos de los trabajadores. La segunda acción se refiere a la entrega del premio por la Defensa de los Derechos Humanos al dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Napoleón Gómez Urrutia, por la lucha que ha librado este sindicato en defensa sus derechos. La AFL-CIO indica que las dos organizaciones tienen en común, junto con otros gremios independientes, haber sufrido fuertes ataques del gobierno federal mexicano.

Usuarios, comerciantes y ambientalistas del parque Mirador Independencia, ubicado en Guadalajara, Jalisco, se manifiestan junto a 182 árboles talados en esa área verde, en protesta porque la Secretaría de Desarrollo Urbano contrató a la constructora Eco para que se encargara de la preparación de más de seis has. arboladas aledañas a la barranca del río Santiago, en Huentitán, en el extremo norte de Guadalajara. La tala comenzó el 5 de noviembre, sin aviso de las autoridades a vecinos, estudiantes del colindante Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD) o a los casi 35 comerciantes que venden comida en el parque. La empresa despeja el terreno para la construcción del museo de arte moderno proyectado por el gobierno estatal y el ayuntamiento de Guadalajara.

Lunes 14

Académicos y organizaciones sociales difunden una carta en la que deploran el rumbo que ha adoptado la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Critican que desde la rectoría se optara por la persecución laboral como vía para tratar de suprimir el conflicto que aqueja a la institución desde hace meses, producto de la inconformidad de buena parte de la comunidad. “Hoy por hoy, defender el proyecto educativo y social de esa noble institución pasa por pronunciarse en contra de la ola de despidos injustificados y de la campaña de persecución y criminalización que se ha montado en contra de los sectores críticos a la rectoría”, señalan en la misiva. La firman, entre otros, Margit Frenk, Adolfo Castañón, Margo Glantz, Cristina Barros, Rodolfo Stavenhagen, Horacio Cerruti, Guillermo Almeyra y Octavio Rodríguez Araujo, así como organizaciones sociales.

Organizaciones obreras corporativas del Congreso del Trabajo (CT) convocan a una marcha contra el incremento de precios de los productos y servicios básicos, así como contra la imposición, *de facto*, de los toques salariales. La Confederación Obrero Revolucionaria (COR) y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) llaman a realizar una movilización para el próximo 23 de noviembre contra la carestía y la reducción del poder

adquisitivo salarial de los obreros. El dirigente de la COR, Reyes Soberanis, alerta de que de nuevo se intentará dar un aumento de 3% a los salarios mínimos, mientras los productos básicos registran incrementos por arriba de 20 y 30%.

La comisión internacional de observación que visitó la zona de conflicto de los Chimalapas corrobora la tala inmoderada en la zona de reserva de los zoques, así como la desinformación que prevalece entre los ejidatarios chiapanecos en torno a las propuestas de conciliación de los comuneros de Santa María Chimalapas. Durante la vista, que concluyó el domingo, los comuneros pidieron que el Ejército vigile la zona y que salgan los policías de Oaxaca y Chiapas. El secretario de la Reforma Agraria, Abelardo Escobar Prieto, afirma que no se han agotado las alternativas de solución. Recordó que el conflicto surgió por la dotación de 41 mil has. a 19 ejidos en los bienes comunales de los Chimalapas (590 mil has. para San Miguel y Santa María). La secretaria de la Reforma Agraria ofreció a los zoques de San Miguel y Santa María 90 millones de pesos por 48 mil has. para los ejidatarios chiapanecos, oferta que fue rechazada.

Locatarios de mercados públicos se manifiestan en contra de la privatización de dichos espacios que pretende el gobierno capitalino, mediante el cambio de la cédula única. Anuncian que interpondrán otros 200 amparos, para un total de mil 200. En un recorrido por los mercados Hidalgo y El Rodeo presentan los acuses de recibo de dichos amparos, que son 10 veces mayor a los que dicen tener conocimiento las autoridades capitalinas. Fernando García, coordinador de Mercados y Concentraciones del Distrito Federal, señala que se han logrado 300 suspensiones provisionales y un número importante de definitivos, aunque no precisa la cifra.

Habitantes de San Salvador Cuautenco, en Milpa Alta, retienen por varias horas a 15 efectivos de las fuerzas de apoyo de la Policía Federal después de que realizaron un operativo en contra de los aserraderos clandestinos. Condicionan su liberación a cambio de la de dos pobladores detenidos. Habitantes de la comunidad informan que los federales ingresaron a bordo de camionetas *pick up* y un camión de carga a los poblados de San Pablo Oztotepec y San Salvador Cuautenco. En el primer poblado clausuraron dos aserraderos, y en el segundo tres, donde detuvieron a dos personas. De inmediato se corre la voz entre los pobladores y apenas habían recorrido algunos kilómetros por la zona boscosa, los policías federales son interceptados y retenidos por unos 150 integrantes de la comunidad de San Salvador Cuautenco. Más tarde, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) moviliza a cientos de elementos para apoyar la liberación, mientras se llevaban a cabo las negociaciones.

Martes 15

Andrés Manuel López Obrador se convierte en virtual candidato de los partidos y movimientos de izquierda rumbo a las elecciones presidenciales de 2012, al ganar tres de las cinco preguntas de la encuesta que funcionó como mecanismo interno de selección, y que lo posicionan mejor que Marcelo Ebrard Casaubon ante la opinión pública. En conferencia de prensa a la que llegaron juntos ambos contendientes, Ebrard reconoce y acata los resultados. López Obrador asegura que “la izquierda dividida sólo iría al precipicio, y yo no seré nunca quien conduzca las posibilidades de cambiar el rumbo de México al fracaso”. Acepta también las recomendaciones de Ebrard y tras reconocer que el actual jefe de Gobierno del Distrito Federal representa a grandes y amplios

sectores sociales y empresariales, así como a múltiples causas ciudadanas, señala que “al ir juntos, nos vamos a complementar, y eso, se los aseguro, nos permitirá potenciar nuestras fuerzas, con el objetivo superior de transformar a México”. Ante una multitud de representantes de medios de comunicación que se dan cita en un salón del hotel Hilton Alameda, anuncia que participará en la contienda electoral de 2012, con apego a las decisiones que adopten, de acuerdo con sus estatutos, los partidos progresistas: Partido del Trabajo (PT), PRD y Movimiento Ciudadano, y de conformidad con los tiempos y procedimientos que establece la ley electoral. Adelanta que el nombre propuesto para este frente amplio es Movimiento Progresista, que deberá ser analizado por los dirigentes de los partidos y movimientos sociales involucrados. En tanto, dirigentes nacionales de PRD, PT y los movimientos Ciudadano (antes Convergencia) y Regeneración Nacional (MORENA) acuerdan sustituir al frente Diálogo por la Reconstrucción de México (DIA) por uno que ahora llevará el nombre del Movimiento Progresista, el cual entrará en vigor cuando las autoridades electorales validen la coalición de los tres partidos políticos para la elección presidencial del próximo año.

Son liberados dos de los ocho indígenas que permanecieron en huelga de hambre durante 39 días en el CERSS número 5, en San Cristóbal de las Casas, según informan fuentes gubernamentales. Indican que José Díaz López, oriundo de San Andrés Larráinzar, y Andrés Núñez Hernández, de San Juan Chamula, recibieron su boleta de libertad alrededor de las 19 hrs. como resultado del compromiso de las autoridades estatales de revisar sus expedientes. Los dos tzotziles, miembros solidarios de la agrupación de presos denominada La Voz de El Amate, adherente de la Otra Campaña, estaban acusados de homicidio, según el expediente 095/2002, y se hallaban en prisión desde hace más de nueve años. Díaz López, de 36 años, y Núñez Hernández, de 39, participaron junto con otros ocho reos en una huelga de hambre que empezó el 29 de septiembre y concluyó el pasado 6 de noviembre, cuando las autoridades estatales se comprometieron a revisar sus expedientes.

A 15 días de que venza el plazo fijado entre el gobierno federal y el SME para dar una solución definitiva al conflicto, esta organización llama a la Secretaría de Gobernación a que se reanude de inmediato el diálogo y se retomen los acuerdos a los que se comprometió para encontrar una salida y que, a más tardar el 30 de noviembre, regresen a trabajar los 16 mil 599 electricistas en resistencia. Luego de regresar de Washington, donde junto con una comisión acudió a interponer una queja contra el Estado mexicano ante las oficinas del Acuerdo Laboral del TLCAN por violaciones laborales, el secretario general del gremio, Martín Esparza Flores, indica que esta organización volverá a la movilización, a las calles, en defensa de que se cumplan los acuerdos firmados en Bucareli cuando se levantó el plantón del Zócalo.

Profesores de la sección 22 del SNTE y miembros de organizaciones adheridas a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) se manifiestan por las principales calles de la ciudad de Oaxaca con motivo del primer informe del gobernador Gabino Cué Monteagudo. Los inconformes arrancan las protestas en forma simultánea desde cuatro puntos y llegan frente al palacio de gobierno. En un mitin, el secretario general de la sección 22 del SNTE, Azael Santiago Chepi, demanda al gobernador Cué Monteagudo el encarcelamiento del ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz, del ex secretario general de Gobierno, Jorge Franco Vargas, y de la ex procuradora general de Justicia, Rosa Lisbeth Caña Cadeza, así como actuar contra los ex jefes policiacos Manuel Vera

Salinas y Manuel Moreno Rivas, entre otros, a quienes responsabilizan de reprimir a la población en 2006 y 2007.

Trabajadores sindicalizados del congreso de Jalisco paran labores para exigir el pago de la quincena que debieron recibir este martes, debido a que el poder legislativo de Jalisco se quedó sin dinero para pagar sueldos, aguinaldos y deudas en los dos últimos meses de 2011. A partir de las 13 hrs., 323 empleados instalan una asamblea para definir su estrategia ante la situación financiera que atraviesa la legislatura; tres horas después, la dirigente sindical Irene Trejo Acosta y el secretario de la Federación General de Trabajadores del Estado y Municipios, Juan Pelayo Ruelas, anuncian que los sindicalizados del legislativo suspenderán actividades a partir de este miércoles 16 para estar concentrados en asamblea.

Miércoles 16

El pueblo zoque de San Miguel Chimalapa, Oaxaca, no permitirá la creación de un municipio chiapaneco en su territorio y está dispuesto a dar la vida por sus tierras, bosques y selvas, así como advierte Alberto Cruz Gutiérrez, presidente del comisariado de bienes comunales. La creación del municipio, aprobada por el congreso de Chiapas, afectaría al menos 15 mil has. que disputan habitantes de comunidades reconocidas como ejidos en Cintalapa de Figueroa, Chiapas. “Los chiapanecos dicen que están en su tierra, pero ¿cómo va a ser, si se han metido más de 25 kms. en nuestras tierras y en territorio del estado? El pueblo zoque está preparado para luchar contra la intromisión chiapaneca porque su territorio no se regala ni mucho menos está en venta”, asegura Alberto Cruz Gutiérrez. Por su parte, el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, advierte que su administración no consentirá la creación del municipio chiapaneco y adelanta que presentará una controversia constitucional por invasiones al territorio oaxaqueño. “Vamos a hacer lo que legalmente corresponda de la mano con los Chimalapas”, asegura, mientras que pide al gobernador de Chiapas, Juan Sabines, actuar con responsabilidad para solucionar el conflicto.

Alrededor de 300 alumnos toman la Universidad Tecnológica de la Selva, en Ocosingo, Chiapas, para exigir la destitución del rector Roberto David Vázquez Solís, a quien acusan de hostigar y amenazar a los que pretenden formar un consejo estudiantil. Representantes de los universitarios informan que las protestas comenzaron el 8 de noviembre con un plantón, pero como las autoridades educativas no han resuelto sus demandas, han decidido apoderarse ahora del edificio. Otra queja es que Vázquez Solís lleva ocho años en el cargo y fue reelecto por cuatro más. La protesta afecta a más de mil alumnos.

Organizaciones ambientalistas y de productores exigen al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Rafael Elvira Quesada, que renuncie a su cargo por promover la siembra de maíz transgénico en 2 millones de has., en la región norte, bajo el argumento de que allí hay una reducida presencia de maíces criollos y de su pariente silvestre, el teocintle. Sostienen que la autoridad ambiental promueve el maíz genéticamente modificado como un producto milagroso para el campo norteño, aprovechando la situación de sequía. “Es mentira que el transgénico utilice menos agua que los híbridos o las semillas criollas”, asegura Ana de Ita, de la Red en Defensa del Maíz.

Jueves 17

El Observatorio Ciudadano Nacional del Femicidio (OCNF), e integrantes de la Misión Internacional Por el Acceso a la Justicia para las Mujeres, advierten que el gobierno federal y autoridades estatales se han escudado en el combate al crimen organizado y en la militarización del país para esconder y no investigar los casos de feminicidios y desapariciones de mujeres. Denuncian que en sólo 18 meses se han registrado –conservadoramente– aproximadamente 4 mil 517 casos, cifra que ubica a México como un país en estado de guerra. Al presentar el informe “Una mirada al feminicidio en México, 2010-2011”, Luz Estrada, del OCNF, destaca que en el lapso de referencia ocurrieron mil 235 feminicidios y al menos 3 mil 282 mujeres fueron desaparecidas en casi nueve estados del país. En el estado de México –destaca– ocurrieron 320 presuntos feminicidios; 168 en Sinaloa, 169 en Tamaulipas, 142 en Jalisco, 138 en Nuevo León, 125 en el Distrito Federal, 102 en Oaxaca y 71 en Sonora. Del total de víctimas, 41% tenían entre 11 y 30 años; 35%, de 31 a 50, y 13%, más de 50 años. Asimismo, entre enero de 2010 y junio de este año se reportó un total de 3 mil 282 casos de desaparecidas en Chihuahua, Nuevo León, Jalisco, Quintana Roo, Hidalgo, estado de México, Sinaloa, Coahuila y Veracruz. De estos casos, en su mayoría se desconoce si fueron encontradas con vida.

Sin la presencia de la familia de Rosendo Radilla Pacheco, víctima de desaparición forzada en 1974, el Estado mexicano reconoce públicamente su responsabilidad por estos hechos durante una ceremonia oficial en Atoyac de Álvarez, Guerrero. Juan Marcos Gutiérrez, hasta hoy encargado del despacho de la Secretaría de Gobernación, confirma esta obligación internacional –derivada de una orden de la CIDH– y reafirma la plena voluntad del gobierno calderonista con la protección de las garantías básicas. Esta ceremonia fue programada para el lunes pasado (14 de noviembre), a la que asistirían José Francisco Blake Mora en su calidad de secretario de Gobernación, y Felipe Zamora, subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la dependencia, quienes murieron el viernes 11 en un accidente aéreo.

Más de mil trabajadores sindicalizados del poder judicial del estado de Michoacán paran labores durante 12 horas en protesta por presuntas violaciones al contrato colectivo de trabajo, arbitrariedades en áreas administrativas, así como en juzgados civiles y penales, y para exigir mayor seguridad social. A las 8 de la mañana, los integrantes del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial cierran los accesos a 170 juzgados, 16 salas y 15 áreas administrativas. Luego se plantan fuera del palacio de Justicia, donde colocan mantas con sus demandas. Denuncian que las arbitrariedades en el poder judicial van en aumento. “La parte patronal frecuentemente impone multas ilegales con motivo de algún procedimiento sancionador y amonesta a los trabajadores por faltas justificadas, como acudir a recibir atención médica”, afirma Javier Gámez Piñón, líder del gremio.

Habitantes de la junta auxiliar de Santo Toribio Xicotzingo, en Tlaxcala, impiden que 43 alumnos del municipio poblano de Coronango tomaran clases en la escuela local del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), con el argumento de que no son tlaxcaltecas y están en territorio ajeno. En protesta, un grupo de 25 padres de familia realizan un plantón frente al ayuntamiento de Coronango para exigir al presidente municipal, Efraín Titla Galicia, que reubique a los menores que se quedaron sin estudiar, y evitar que pierdan el ciclo escolar. El edil panista, empresario que renta locales en la central de abasto de la capital poblana, no atiende la demanda de los vecinos.

Habitantes que se niegan a pagar cobros excesivos hasta en mil por ciento a la CFE protestan frente a la oficina regional de la PROFECO en Nezahualcóyotl. Guillermo Santos Gómez, integrante de la Asamblea de Usuarios en Defensa de la Energía Eléctrica de Nezahualcóyotl, denuncia que la PROFECO no ha sido capaz de defender a los usuarios que han presentado queja por abusos en que incurre la CFE, empresa que, además, intimida a los afectados.

Habitantes de pueblos, barrios y colonias de la delegación Tlalpan, Distrito Federal, conforman las Redes Ciudadanas por la Reconstrucción Democrática en Tlalpan. Por medio de este movimiento buscarán que en los próximos gobiernos la participación de la gente incida en las acciones implementadas por la administración pública. Luego de denunciar el mal gobierno en la demarcación encabezado por Higinio Chávez, resaltan que “se necesita una administración que atienda las necesidades de los pueblos y no que lucre con ello para escalar posiciones de poder”.

Viernes 18

El gobierno de Oaxaca, mediante mecanismos jurisdiccionales establecidos en la ley civil, indemniza simbólicamente a 66 sobrevivientes y ex presos políticos del movimiento magisterial y popular aglutinado en la APPO durante 2006 y 2007, debido al daño moral sufrido por las violaciones cometidas en detrimento del derecho a su libertad personal. En conferencia de prensa, el presidente de la filial Oaxaca de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, Isaac Torres Carmona, informa que las víctimas presentaron en febrero de 2009 una demanda judicial de responsabilidad civil por daño moral en contra de dos funcionarios, por ser sometidos a proceso penal bajo consigna del gobierno estatal, por los delitos de sedición, asociación delictuosa, resistencia de particulares y ataques a las vías de comunicación, entre otros. Explica que los ex presos políticos y de conciencia demandaron en la querrela una indemnización por la vulneración ilegal de su libertad personal, su integridad física y síquica, tomando en cuenta los derechos lesionados, así como el grado de responsabilidad, la situación económica de las responsables, atendiendo también a la naturaleza compensatoria y satisfactoria de la reparación moral, así como las demás circunstancias del caso tal y como estipula el Código Civil en vigor para el estado. Según informes no confirmados, los 66 sobrevivientes y ex presos políticos del movimiento magisterial y popular reciben 170 mil pesos cada uno como indemnización.

Locatarios del municipio de Tultitlán, Estado de México marchan y se manifiestan frente al palacio municipal para exigir al alcalde, Marco Calzada Arroyo, que no autorice más negocios de la cadena *WalMart*. “¡Están matando al comercio de Tultitlán!”, denuncian comerciantes de más de ocho colonias populares, quienes exigen cumplir el acuerdo firmado por el gobierno municipal el 29 de marzo de 2010, el cual iba a regularizar el comercio local. Expresan que la apertura de más de 35 minibodegas *Aurrerá*, en un año, ha provocado el cierre de locales y que las ventas bajaran 70% en el comercio establecido de dicho municipio.

Cerca de 5 mil trabajadores sindicalizados marchan por las avenidas México y Juárez en Tepic, Nayarit, hasta la sede estatal del PRI, donde con pancartas exigen la no aprobación de la reforma laboral promovida por el gobierno federal. Águeda Galicia Jiménez, dirigente del Sindicato Único

de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios, afirma que dicha reforma “acabaría con las garantías laborales de miles de hombres y mujeres obreros, ya que sólo protegerá al patrón”.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), en Tabasco, confirma que en los que va del año recibió más de 120 quejas relacionadas con casos de tortura infringida por funcionarios policiacos, y ha emitido seis recomendaciones a la Procuraduría General de Justicia del Estado, mismas que fueron aceptadas por la dependencia. “Esta es una práctica que se da aquí y en todo el país”, señala Manuel Argáez Zurita, titular del organismo, quien subraya que las torturas dejan secuelas físicas y psicológicas que ameritan la atención de especialistas. El *ombudsman* tabasqueño reporta también que la CEDH recibió 10 quejas sobre casos de acoso en planteles educativos de la entidad.

Sábado 19

Con un nuevo planteamiento como proyecto alternativo de nación, Andrés Manuel López Obrador asegura en Torreón, Coahuila, que la inseguridad que prevalece en el país sí afectará el proceso electoral en 2012, pero no será determinante. Lo importante –destaca– será volver a la normalidad democrática y apostar a la participación ciudadana, con el objetivo de cambiar el rumbo de México. Posteriormente, en Durango, el tabasqueño se pronuncia en favor del recuento de votos en Morelia, Michoacán, como aprobó el Instituto Electoral del estado, para no dejar dudas. De gira por ambos estados, se reúne en privado con dirigentes del MORENA para evaluar el trabajo de la organización y promover la defensa del sufragio en las próximas elecciones para la Presidencia de la República. En Torreón acepta que serán los mismos árbitros electorales los que evalúen el proceso en 2012, pero destaca que ahora cuenta con la ventaja de la organización, en la que ha trabajado durante cinco años para crear una estructura horizontal con la ciudadanía por medio de MORENA. “La única forma de que las cosas mejoren en el país es con la participación ciudadana y con la democracia; no podemos desanimarnos, desalentarnos, pensar que no hay salida, cruzarnos de brazos, caer en el escepticismo; hay que participar para transformar a México entre todos, para sacarlo de la decadencia en que se encuentra; no hay otra opción más que la participación de los ciudadanos”.

Miembros del grupo religioso católico Pastoral Universitaria (PU), acompañados de sacerdotes realizan una marcha por la paz en Ciudad Juárez, Chihuahua, que catalogan como una de las más violentas del mundo, por el índice de homicidios y la falta de justicia. Se estima que de 2008 a la fecha ha habido 10 mil asesinatos y más de mil 800 han ocurrido en 2011. Unas 500 personas realizan el recorrido en forma de procesión. Estudiantes universitarios, preparatorianos y profesionistas que forman parte de la PU, parien bajo vigilancia policiaca este sábado 19, de Plutarco Elías Calles, donde queda ubicada la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), hasta la megabandera, a tres kms de distancia.

La organización Familia Pasta de Conchos denuncia que continúan los casos de producción a bajo costo, violatoria de la ley laboral, en las minas de San Luis Potosí. Advierten que la STPS ha impuesto multas a Minera México, pero no ha actuado para resolver el problema de raíz, esto es, utilizar de manera sistemática la vía de la supervisión a las plantas.

Una grupo de alrededor de 60 personas a bordo de automóviles, motocicletas y bicicletas realizan un recorrido del Auditorio Nacional al Monumento a la Revolución, en el Distrito Federal, para denunciar que las autoridades del país aún no adoptan las condiciones jurídicas suficientes para prevenir y combatir “el cáncer social” del abuso sexual infantil. La movilización es convocada por diversos colectivos especializados en el tema, con motivo del Día Internacional para la Prevención del Abuso contra Menores. Miguel Adame Vázquez, presidente del Centro de Investigación, Difusión y Estudios sobre Trata de Personas y Explotación Comercial (CIDETEC), uno de los organizadores, afirma que “el gobierno no ha sido capaz de llevar a la práctica las reformas legales que protegen a los niños que han sufrido algún tipo de ataque sexual”.

Domingo 20

Jóvenes “indignados” que acampan frente a la Bolsa Mexicana de Valores aprovechan el paso del desfile por el 101 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana para protestar por los miles de muertos que ha dejado la estrategia federal contra el narcotráfico. Al paso de los primeros contingentes sobre la avenida Reforma, unos treinta “indignados” salen de su campamento y con los rostros pintados como calaveras se unen al paso de la parada militar. Con un *performance* que simula un cortejo fúnebre, acompañado de un tambor, los jóvenes caminan al lado de los elementos de caballería. Con mantas, cartulinas, cruces, flores, globos negros, una corona mortuoria y un ataúd que representaba a los más de 65 mil muertos causados por la violencia en el país, los manifestantes corean: “ni un muerto más”.

La iglesia católica sostiene que el Instituto Federal Electoral (IFE) se ha convertido en una institución controlada por los partidos políticos, y cada vez está menos vinculado al interés de los ciudadanos, aunado a que los institutos locales dejan mucho que desear, como demuestran los resultados electorales recientes en Michoacán, donde prevalecieron descontento e irregularidades. En el editorial de su semanario *Desde la fe*, asegura: “no podemos dejar de señalar que el IFE se ha convertido en una enorme burocracia que, comenzando por los ciudadanos consejeros, requiere de inmensos recursos”.

La organización Familia Pasta de Conchos denuncia que continúan los accidentes en empresas mineras sin que haya sanciones adecuadas contra los responsables. Hace unos días, en una mina de Grupo México ocurrieron dos explosiones que la compañía ocultó, según denuncia dicha organización, puntualizando que la explosión ocurrió en la planta de cobre de Industrial Minero México, localizada en la zona poniente de San Luis Potosí. En la misma planta hubo otra explosión, provocada por una enorme fuga de vapor que causó alarma no sólo de los trabajadores, sino incluso de los habitantes, lo que ejemplifica las graves irregularidades que continúan en las mineras.

Lunes 21

Consejeros electorales del IFE afirman que las críticas del semanario católico *Desde la fe* contra de dicho instituto parten de una gran desinformación “que no sustenta los juicios sumarios con que se descalifica de una forma artera a las instituciones electorales en el momento en que el país requiere de fortalecerlas”; además, exhortan a que la iglesia católica contribuya al fortalecimiento

institucional que permita a México salir de momentos difíciles y que algunos sectores religiosos no se conviertan “en francotiradores de la democracia”.

Ante la pretensión gubernamental de imponer un incremento a los salarios mínimos de 3% para 2012, lo que significa un alza de un peso y 80 centavos, la CROC y la COR convocan a los sindicatos a realizar una marcha para el día 22. En la movilización –que realizarán después de décadas de no salir a las calles– exigirán poner fin a los topes salariales y un incremento de 10% a los mini salarios; de igual manera, invitan a la sociedad en general a sumarse a la protesta. El dirigente de la CROC afirma que esta protesta, convocada para realizarse en todo el país, tiene el propósito de llamar la atención del gobierno federal, los empresarios y el poder legislativo, para impedir que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI) fije otra vez un porcentaje de aumento pírrico, el cual se prevé que sea de sólo tres puntos, y que por quinto año consecutivo significaría menos de dos pesos diarios.

Marcelo Santos Zamora, comunero de El Jicaral, municipio de Coicoyán de las Flores, Oaxaca, es asesinado por la mañana en un ataque de pobladores de Jicayán del Tovar, municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero, con quienes disputan desde hace 30 años mil 500 has., de tierras de cultivo, cerriles, laderas y lomas, que desde hace 110 años son propiedad de comuneros de El Jicaral. El 10 de octubre de 2010 habitantes de Jicayán del Tovar agredieron a balazos a sus adversarios y asesinaron a un niño de 12 años de edad, identificado como Luis Zamora Cruz.

Al menos 600 integrantes del Movimiento Magisterial de Bases (MMB) marchan en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, para rechazar la evaluación universal para docentes y directivos, y aseguran que es un pretexto para despedir a maestros que no acaten las imposiciones de la lideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo, y del gobierno federal. Alejandro Trujillo González, dirigente del MMB y de la CNTE, asegura que detrás de dicho acuerdo hay una violación a los derechos laborales de los profesores y a la educación gratuita.

Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) desalojan a unos 200 vecinos del municipio de Alfajayucan, Hidalgo, quienes bloqueaban la carretera interestatal Ixmiquilpan-Huichapan para protestar por la resolución del TEPJF que revocó el triunfo que obtuvo el 3 de julio el candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la alcaldía, Guillermo Zamudio, para otorgárselo al abanderado del PRI, Óscar Ángeles. Según datos no oficiales, en el desalojo resultan unos 12 heridos.

Martes 22

La CIDH anuncia formalmente la admisión de la denuncia presentada contra el Estado mexicano a cargo de un grupo de mujeres que fueron agredidas sexualmente en mayo de 2006 tras la incursión de la policía en la comunidad de San Salvador Atenco, informa el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). La notificación fue recibida el pasado viernes por las dos organizaciones que representan a las víctimas, el Centro PRODH y el mismo CEJIL, según anuncia éste último mediante un comunicado. El caso, presentado el 28 de abril de 2008 con el nombre de Mariana Selvas Gómez y otras contra México, involucra la comisión de delitos graves, como detenciones arbitrarias, tortura, violencia sexual y uso desproporcionado de la fuerza, además de la

falta de una investigación adecuada por parte de las autoridades del país. Por todo ello, el organismo interamericano consideró que hay la posibilidad de que se hayan violado los derechos a la integridad personal, libertad y seguridad de las mujeres atacadas, además de las obligaciones del Estado mexicano en el marco de la llamada Convención de Belém do Pará.

Miles de maestros de Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas se manifiestan en rechazo a las políticas educativa y laboral del gobierno del presidente Felipe Calderón, a quien acusaron de pretender privatizar el sector mediante la ACE. Con paros, marchas, mítines, bloqueos viales, toma de edificios públicos y casetas de peaje, los mentores se suman el llamado al Paro cívico nacional por la defensa de la educación pública y el empleo. Una de las principales exigencias es la salida de la “cacique” Elba Esther Gordillo del SNTE y mejor servicio del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Cientos de campesinos de la Unión de Trabajadores Agrícolas protestan por tres horas frente a la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), en Morelos, en demanda de que se realicen 400 acciones del programa federal Vivienda Rural, que representan una inversión de 4 millones de pesos. Los campesinos, la mayoría de los Altos de Morelos, aseguran que aún no se ejecutan 200 acciones de vivienda que se presupuestaron en 2010, y faltan 200 de este año. Las obras consisten en pisos firmes y techos para viviendas de familias en pobreza extrema.

Cerca de 300 profesores disidentes del SNTE, la sección 9 del Distrito Federal, marchan en la capital del país para exigir la cancelación de la ACE, y demandar la realización de un congreso seccional para renovar a su dirigencia sindical. Francisco Bravo, secretario general disidente, informa que poco después de las 7 de la tarde iniciaron una movilización del Ángel de la Independencia a la sede del Partido Nueva Alianza (PANAL), vinculado a la presidenta vitalicia del gremio magisterial, Elba Esther Gordillo Morales. Decenas de maestros, quienes portan antorchas durante el recorrido, corean consignas de rechazo a la ACE, así como a la aplicación de una evaluación universal para los docentes de educación básica.

Habitantes de los Pedregales de Coyoacán, Distrito Federal, anuncia que se sumarán a la marcha nacional que este miércoles realizarán afectados por los cortes de energía eléctrica en protestar por los altos cobros que aplica la CFE. A la fecha se han documentado 300 inmuebles a los que, sin motivo aparente, les aumentaron los cobros por el servicio de luz. Ante ello, en asamblea ciudadana acuerdan participar en la protesta, pues consideran que ello ayudará a que se fortalezca el movimiento vecinal en contra de los abusos de la paraestatal. Asimismo, por la tarde, sostienen una reunión con residentes de la colonia Copilco, a quienes el pasado miércoles se intentó suspender el servicio, pero ante la oposición vecinal también se les tuvo que reconectar.

El presidente de la Federación de Estudiantes de Nayarit, Pedro Karás, exige una disculpa pública al edil de Tepic, Héctor González Curiel, por los abusos cometidos por policías municipales contra estudiantes que llevaban a cabo un festival musical la tarde del domingo en la plaza principal, de donde fueron desalojados por presunto desorden público. Por su parte, personal de comunicación social de la alcaldía se hace presente en la conferencia de prensa y grabó las declaraciones de los jóvenes denunciantes. A su vez, el director de la policía municipal, David Pérez Landeros, negó las agresiones a los jóvenes.

Miércoles 23

Organizaciones corporativas del sector obrero pertenecientes al CT señalan que, de los 7 días que labora y cobra un obrero, tiene que destinar 2 ó 3 al pago del servicio de luz, por lo que advierten que si la CONASAMI impone un incremento de 3% a las percepciones obreras de 2012, solicitarán un amparo contra esta resolución. Del mismo modo presentarán una queja ante la CNDH, ya que, afirman, sería indigno un aumento que significa un peso con 80 centavos para el próximo año. En un mitin celebrado por la tarde en el Monumento a la Revolución, los sindicatos de la CROC, la Confederación Obrero Revolucionaria de México (CROM) y la COR protestan contra la nueva apretada de cinturón que se prepara contra el sector obrero en la discusión de los mínimos que regirán a partir del primer día de 2012. En la primera movilización llevada a cabo por el sindicalismo corporativo en la década de gobiernos panistas, el dirigente de la CROC y diputado del PRI, Isaías González Cuevas, indica que actualmente los trabajadores tienen que destinar una tercera parte de su salario al pago sólo de la luz. Esto es porque en promedio este servicio se ha elevado 136% durante los gobiernos panistas.

El secretario general del SME, anuncia a los miles de trabajadores reunidos en el Zócalo capitalino que la próxima semana el gobierno federal les presentará las propuestas de reinserción laboral para los 16 mil 599 trabajadores que no han aceptado su liquidación. En la marcha y mitin realizada para demandar el cumplimiento de los acuerdos firmados con el gobierno federal el pasado 13 de septiembre, el dirigente asegura que el jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, habló con el nuevo secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, y éste le adelantó que la semana que entregarán los planes de reinserción laboral y productiva que les habían prometido a los trabajadores para antes del 30 de noviembre del presente año. En el Zócalo lleno de trabajadores electricistas, así como integrantes de otras organizaciones que los acompañan en la movilización, el dirigente hace un llamado a Alejandro Poiré para que se cumplan los acuerdos convenidos.

El Comité de Familiares de los Desaparecidos, Asesinados y Presos Políticos de Oaxaca (COFADAPPO) rompe relaciones este miércoles con la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH), por no haber incluido a sus integrantes en la indemnización otorgada a víctimas del conflicto político-social de 2006. Porfirio Domínguez Muñozcano, dirigente del COFADAPPO –organización integrante de la APPO– e Isaac Torres Carmona, representante de la LIMEDDH en la entidad, se confrontan en el auditorio del edificio de la sección 22 del SNTE. Los seguidores de ambos gritan consignas y se acusan mutuamente de buscar sólo el beneficio económico, no la justicia para los afectados y caídos durante las protestas contra la administración que encabezó Ulises Ruiz Ortiz (2004-2010).

Más de 100 habitantes de la comunidad Tetelpa, en Morelos, toman la alcaldía de Zacatepec para exigir que la empresa Casas GEO cancele la construcción de un fraccionamiento en terrenos comunales, ubicados en una zona de recarga de manantiales. Casas GEO había iniciado este mismo día la edificación de 750 viviendas en el predio conocido como Matarratera, en el Cerro de la Tortuga. En respuesta, vecinos de Tetelpa acuden al ayuntamiento y obligan al edil, José Carmen Cabrera, a prometerles que buscaría revocar la licencia de construcción. Los pobladores reclaman que el ayuntamiento, el gobierno del estado –por conducto de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la SEMARNAT– y el gobierno federal, a través del Registro Agrario Nacional, han

otorgado licencias y estudios de impacto ambiental a GEO para que edifique 750 viviendas en 101 mil m² de tierras de uso comunal, pese a que la asamblea del pueblo se opone.

Integrantes de la Coordinación General Estudiantil de la UACM toman las instalaciones de las oficinas administrativas de la casa de estudios, localizadas en la avenida División del Norte número 906, en protesta por el incumplimiento al pliego petitorio que entregaron a la rectora Esther Orozco. En consecuencia, la tesorería de la universidad informa que se suspenderá la nómina que se tenía previsto pagar el viernes 25 de noviembre, ya que ante el cierre del edificio por los estudiantes, resultaría imposible realizar el trámite bancario que permitiría programar en el sistema bancario el pago de nómina de la segunda quincena de noviembre, así como se notificó por medio de un comunicado a los trabajadores. La medida fue tomada por personal docente y administrativos como un acto de confrontación que sólo genera un ambiente de agresión y animadversión entre trabajadores y estudiantes, afirman los manifestantes.

Jueves 24

Encabezados por los obispos Felipe Arizmendi Esquivel y Enrique Díaz Díaz, unos 8 mil católicos realizan una peregrinación en la ciudad de San Cristóbal de las Casas para manifestarse contra la explotación minera, la destrucción de la naturaleza, la siembra de transgénicos, la militarización, la drogadicción, el alcoholismo y los atropellos contra migrantes. Con pancartas, flores, palmas, cruces, imágenes religiosas y banderas, los católicos marchan hasta la plaza Catedral, donde se celebra una misa de dos horas con ritos indígenas, en la que se exigió la liberación de Alberto Patihstán Gómez, preso desde hace 10 años, acusado de participar en una emboscada que dejó siete policías estatales muertos y quien hace un mes fue trasladado al penal de Guasave, Sinaloa.

Decenas de mujeres participan en la marcha “Totalmente indignadas”, en el centro histórico de la capital de Oaxaca, con motivo del Día Internacional Contra la Violencia Hacia las Mujeres –que se conmemora este viernes– y señalan que 91 mujeres han sido asesinadas durante el gobierno de Gabino Cué Monteagudo. Las manifestantes, acompañadas por una banda de música, marchan vestidas de morado y negro y portan cruces negras con los nombres de las 91 víctimas.

Habitantes de Tequesquitengo, municipio de Jojutla, Morelos, se manifiestan ante el palacio de gobierno de esta capital para exigir que el centro de salud de su comunidad quede terminado y empiece a funcionar. Javier Castrejón Vargas, ayudante municipal de Tequesquitengo, asegura que el secretario de Desarrollo y Obras Públicas estatal, Demetrio Román Isidoro, inauguró la obra el mes pasado sin que estuviera terminada.

Integrantes de la CNTE advierten que emplearán todos los mecanismos jurídicos a su alcance para apelar del fallo que dio un año de prisión para el profesor disidente, Eugenio Rodríguez Cornejo, por el daño ocasionado en 2010 a una de las puertas centrales del edificio sede de la SEP. En conferencia de prensa, Sergio Espinal, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional democrático del SNTE, informa que el docente acusado de daño al patrimonio histórico nacional fue sentenciado, el pasado miércoles, por el juez 14 de distrito en materia de procesos penales, Rubén Darío Noguera, quien hizo caso omiso de las pruebas que confirman que “nuestro compañero no encabezó las acciones contra las instalaciones de la SEP”.

Representantes de los gobiernos de Chiapas y Oaxaca se reúnen anoche en la Secretaría de Gobernación (SG) para analizar el conflicto en la zona de los Chimapalas, que comparten ambas entidades. Según informa la SG en un comunicado, las partes llegan a acuerdos orientados a la distensión en materia forestal, agraria y de límites territoriales. Firman un documento que incluye mecanismos de negociación y medidas en caso de no lograr acuerdos.

Viernes 25

Unos 70 mil integrantes de la sección 22 del SNTE y simpatizantes de la APPO marchan en la ciudad de Oaxaca, capital del estado, para conmemorar el quinto aniversario de la represión de la entonces Policía Federal Preventiva y corporaciones locales ocurrido en 2006. Los manifestantes salen de las inmediaciones de la agencia municipal Trinidad de Viguera, y después de caminar unos 6 kms., sobre la carretera internacional Cristóbal Colón, arriban al zócalo de la ciudad. Frente al palacio de gobierno, Azael Santiago Chepi, secretario general de la sección 22 del SNTE, asegura que “el magisterio y el pueblo de Oaxaca no olvidan el olor a gas lacrimógeno y más allá de las críticas cotidianas de los medios de comunicación, no claudicará en su exigencia de justicia para los culpables”. Demanda a los gobiernos federal y estatal encarcelar al ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz; su secretario de Gobierno Jorge Franco Vargas; a la ex procuradora de Justicia Rosa Lisbeth Caña Cadeza y a los ex jefes policiales Manuel Vera Salinas y Manuel Moreno Rivas, entre otros responsables de la represión.

Trabajadores del hospital Donato G. Alarcón, en Ciudad Renacimiento, toman durante siete horas las instalaciones del nosocomio, en protesta por la designación de Juan Carlos Hernández Luna como director de ese centro. Hernández Luna es el sexto director que el gobierno de Guerrero nombra en 22 meses, por lo que los empleados exigen que dichas designaciones se realicen de común acuerdo entre la base trabajadora y la Secretaría de Salud estatal. Además, los inconformes exigen la destitución de la administradora del hospital, Anel Salgado Montalbán, sobrina del ex diputado local del PRD, Wulfrano Salgado, a quien acusan de malos manejos.

Unos 100 policías antimotines del municipio de Gómez Palacio disuelven a golpes y con gases lacrimógenos una manifestación de 300 jóvenes tepehuanos que estudian en diferentes escuelas de esa localidad, quienes demandaban apoyos para un albergue. Pedro Martínez Coronel, dirigente de la agrupación Antorcha Campesina, denuncia que 14 jóvenes fueron detenidos por la policía y horas después liberados. Todos tenían huellas de golpes en el cuerpo. “No nos detendrán”, advierte el líder antorchista, quien advierte que el próximo 8 de diciembre volverán a manifestarse y en mayor número.

Por tercer día consecutivo, unos 30 concesionarios del transporte urbano en Hermosillo, Sonora, se manifiestan para exigir al gobierno estatal que rescate financieramente a su empresa, denominada Sistema Integral del Transporte Urbano en Hermosillo, Sociedad Anónima. Los inconformes, quienes colocan sus camiones en las calles aledañas al palacio de gobierno, advierten que de no recibir una inyección de recursos dejarán de prestar el servicio que actualmente brindan con 340 camiones.

López Obrador encabezó en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, una reunión con la estructura del MORENA, en dicha ciudad y allí exhorta a los zapatistas y a otros grupos que no creen en las elecciones a que reflexionen libremente y no se vuelva a cometer el error de 2006 de descalificar, “porque sin que se lo propusieran ello ayudó a la derecha que nos descalificaran”. “No es que lo hayan hecho de manera intencional, sino que al descalificarnos se llegó a decir que era el fascismo; una exageración. Ojalá tengan capacidad para rectificar”.

Sábado 26

Un grupo de simpatizantes del virtual candidato presidencial del PRD, Andrés Manuel López Obrador, hacen un llamado a crear una “república amorosa”, que sustituya la realidad de violencia y sangre que impera actualmente en el país. Tal como lo realizaron en septiembre de 2010 en la explanada del Palacio de Bellas Artes, los activistas se reúnen esta vez en el Hemiciclo a Juárez, en la Ciudad de México, para formar una cadena humana con forma de corazón, con papel rojo picado en el centro y las iniciales AMLO, para reivindicar el amor y la fraternidad como punto central de la vida política del país. René González, del Frente Social por la Igualdad, explica que este tipo de actividades son necesarias “para retomar los espacios públicos, contrarrestar el odio y la violencia que dominan el país, e impulsar una reconstrucción del tejido social no sólo a través del amor en abstracto, sino también al mejorar las condiciones de vida de la gente y terminar con las desigualdades sociales y económicas”.

Unos 150 integrantes del grupo de los “indignados” de Ciudad Juárez, Chihuahua, marchan para demandar la destitución del secretario de Seguridad Pública municipal, Julián Leyzaola Pérez, quien encabezó la represión y la detención de 28 manifestantes el pasado primero de noviembre. Los manifestantes parten del museo de la Revolución Mexicana a la plaza de armas. “En Juárez se mata gente pobre con la complicidad de las autoridades”, afirman. En un par de ocasiones, cuando cruzaban patrullas de la policía municipal cerca de ellos, se ponen de rodillas y colocan las manos en la cabeza, como los agentes los pusieron al detenerlos el primero de noviembre. Demandan terminar con la violencia y la militarización del país, que ha dejado 50 mil muertes –10 mil en Juárez–, 10 mil desaparecidos y 120 mil desplazados.

Policías municipales de Ciudad Juárez han amenazado a personal de Casa Amiga, Centro de Crisis, por atender a esposas de elementos de la corporación que han sido maltratadas, denuncia Irma Casas, directora de dicha organización no gubernamental. Casa Amiga fue fundada por la ya desaparecida Esther Chávez Cano. En el lugar brindan ayuda psicológica y terapias a toda mujer que lo solicite, incluidas las parejas sentimentales o esposas de los policías. Irma Casas asegura que los policías han ingresado a las instalaciones, pero la mayoría de las veces desde las puertas intimidan y amenazan a los empleados con la intención de que terminen las terapias para mitigar el daño psicológico que les han causado a sus parejas con la violencia física y verbal. Cuando ocurren esos incidentes, afirma, han solicitado que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudan a controlar a sus compañeros, sin embargo no asisten porque los protegen.

Domingo 27

Cientos de personas, sobre todo jóvenes, disfrazados con máscaras de calavera marchan de Ciudad Universitaria a la Plaza Garibaldi para demandar alto a la violencia que padece México. Se trata de una acción de sicomagia, propuesta por el escritor y cineasta Alejandro Jodorowsky (creador del término cuya premisa es que el inconsciente toma los actos simbólicos como hechos reales), y cuya convocatoria cobra fuerza a través de las redes sociales. A la Marcha de las Calaveras se suman poco a poco unas 3 mil personas que de diversas formas manifiestan su repudio a la llamada guerra contra el narco.

El decimoquinto congreso extraordinario de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) acuerda impulsar una lucha frontal contra la lideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo, en coordinación con las demás secciones del país, con miras a las elecciones para el cambio de comités seccionales el próximo año. Otro acuerdo, es que la CETEG no apoyará a ningún candidato a la Presidencia de la República en la próxima elección federal y dejará que sus militantes decidan según su conciencia. De la misma forma, el congreso de la CETEG acuerda apoyar las luchas contra las empresas mineras en las regiones de la Montaña y la Costa Chica de Guerrero, contra la construcción de la presa La Parota y por la desmilitarización de diversas comunidades del estado.

Vecinos de Lomas de Chapultepec, en el Distrito Federal, acuerdan realizar la simulación un salón de clases para adultos en plena calle para replicar la operación ilegal de la escuela *Humanitree*, que abrió Fundación Azteca en Paseo de la Reforma y Sierra Madre, además de que reforzarán su estrategia legal y social para frenar las constantes violaciones al uso de suelo en esta colonia. En los siguientes días serán colocados una decena de pupitres frente a dicho colegio, para exponer la importancia del respeto a las leyes de tránsito, medio ambiente, valores humanos y a la normatividad urbana, para lo cual se busca que personalidades en las diversas áreas hagan una exposición al respecto, para fomentar la cultura de la legalidad.

La coalición Movimiento Progresista, integrada por el PRD, el PT y el Movimiento Ciudadano, advierte en su plataforma electoral 2012 que “todos nuestros logros históricos están amenazados porque la alternancia en el poder no se tradujo en el desmantelamiento de la estructura clientelar y corporativa del régimen anterior y tampoco en un cambio del modelo económico”. Aseguran que la violencia está acabando a México “porque la crisis de seguridad no es sino la expresión más dolorosa de la crisis política y económica que se ha venido viviendo en nuestro país a partir del quiebre de un sistema que se sostenía sobre la base del partido hegemónico, y ahora de la derecha que ha protegido criminales, funcionarios y políticos corruptos y delincuentes de cuello blanco”. Los partidos que apoyan a López Obrador en su aspiración presidencial proponen impulsar oportunidades de estudio y de trabajo a los jóvenes “para rescatarlos antes de que caigan en las redes de la delincuencia organizada; por intensificar la persecución del lavado de dinero, y ofrecen el retiro gradual del Ejército y la Marina del combate al narcotráfico, y no utilizarlos para resolver conflictos de orden social o para suplir la incapacidad del gobierno civil, mucho menos para reprimir al pueblo”. También impulsan la creación de una Comisión de la Verdad para investigar los crímenes del pasado y los cometidos en el marco de la guerra contra el crimen organizado y el narcotráfico.

Lunes 28

El MORENA, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, y unas 30 organizaciones suscriben el “Plan de Ayala para el siglo XXI”, con el que buscan revertir la política anticampesina y de entrega de la soberanía alimentaria iniciada por los gobiernos del PRI y continuada por los gobiernos del PAN, de 2000 a la fecha. El aspirante presidencial señala que “hay una buena oportunidad el año próximo para lograr un cambio de fondo, y se compromete a que el documento signado sea el que guíe toda nuestra acción para beneficio de indígenas y campesinos en nuestro país”. A propósito del centenario de la promulgación del Plan de Ayala, y en memoria de Emiliano Zapata y las fuerzas campesinas e indígenas del Ejército Liberador del Sur, convoca a luchar por un nuevo pacto social para el agro, en el contexto de un nuevo proyecto alternativo de nación.

El activista social Nepomuceno Moreno Muñoz, quien había pasado cinco años en la cárcel, es asesinado en la colonia Centenario, en la zona centro de Hermosillo, Sonora, por hombres no identificados que viajaban en un vehículo desde el cual abrieron fuego en repetidas ocasiones. Moreno Muñoz, de 56 años, se había convertido durante el último año en activista social y había participado en protestas frente al palacio de gobierno estatal en Hermosillo para denunciar la desaparición de varios jóvenes en Ciudad Obregón, presuntamente a manos de autoridades e integrantes del crimen organizado. El también integrante del MPJD participó en octubre pasado en el último diálogo público que tuvo la organización con el presidente Felipe Calderón, a quien solicitó formalmente que se le otorgaran medidas cautelares por las amenazas que había tenido. Calderón instruyó al entonces secretario de Gobernación, Francisco Blake, a garantizarle la seguridad.

El grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP) alerta que la creación de la Comisión de la Verdad, impulsada por ex guerrilleros y organizaciones no gubernamentales de la entidad “puede solamente servir para apuntalar las aspiraciones personales de algunos actores políticos que navegan dentro de la izquierda electoral. Es una burla, una caricatura, un remedo de lo que realmente ansía el pueblo y particularmente las víctimas de estos crímenes de lesa humanidad”, sentencian.

Las autoridades del ejido Gustavo Díaz Ordaz, municipio de Cintalapa, en la región de los Chimalapas, Chiapas, informan que pese al acuerdo firmado el jueves por los gobernadores de Chiapas, Juan Sabines; Oaxaca, Gabino Cué, y el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, los accesos a esa comunidad siguen bloqueados por pobladores de Santa María Chimalapas y Benito Juárez. “Esperamos que las autoridades estatales nos informen si ya vamos a poder entrar y salir de nuestra comunidad”, expresa el comisario ejidal Emilio Hernández.

Unos 400 participantes en el Taller Nacional de Diálogo y Reflexión sobre el Impacto de las Empresas Transnacionales en las Regiones indígenas de México, convocado por la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, las autoridades agrarias y municipales de San Mateo del Mar y el Congreso Nacional Indígena, exigen, la expulsión definitiva de dichas multinacionales –mineras, de energía, constructoras, entre otras– de su territorio. En la plenaria final se recuerda, en un pronunciamiento, el centenario de la firma del Plan de Ayala, con la aún vigente aspiración de Tierra y Libertad, y saludan el 28 aniversario de la

fundación del EZLN y su lucha actual por el ejercicio de la autonomía desde sus Caracoles, municipios autónomos y Juntas de Buen Gobierno.

Martes 29

Javier Sicilia, líder del MPJD, manifiesta su repudio a los gobiernos federal y de Sonora tras el asesinato y criminalización de Nepomuceno Moreno Muñoz, y exige garantías para los familiares del activista fallecido y para los líderes de su agrupación; además, demanda la renuncia del procurador sonoreño, Abel Murrieta Gutiérrez. “Lo terrible del acontecimiento es que fue la crónica de un asesinato anunciado, como fue el caso de Marisela Escobedo”, asegura en conferencia de prensa de última hora, en el contexto de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, Jalisco. Anuncia que los integrantes del movimiento llegarán a acuerdos para reanudar las marchas y recorridos por el país, además de que exigirán plazos mucho más perentorios para que las autoridades den respuesta, lo que sólo se logrará con una mayor capacidad de indignación de los ciudadanos.

Alrededor de 50 habitantes de la comunidad de Tetelpa, Morelos, armados con machetes y con palos, paran la construcción de un fraccionamiento de la empresa GEO cuyas obras habían comenzado el día 23 de este mes. Los campesinos se oponen a la edificación de 750 viviendas en el predio La Matarratera, en el cerro de La Tortuga. Aseguran que los 100 mil m² son de uso comunal, y la asamblea no ha aprobado el cambio de uso de suelo ni la venta del terreno. Agregan que el fraccionamiento mermará la recarga de manantiales y dañará considerablemente la flora y la fauna en el sur de la entidad. Los campesinos se plantan a la entrada del predio a las 6 de la mañana, lo que impidió la entrada de trabajadores, maquinaria pesada y camiones de volteo.

En protesta por la alta incidencia de ilícitos y fallas en la infraestructura urbana, unos 4 mil simpatizantes y militantes del PRD marchan por las calles del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. El ayuntamiento, encabezado por el priísta Édgar Navarro Sánchez, asegura que la movilización tuvo tintes electorales y que recurrió al engaño y la calumnia. Los miembros del *Sol Azteca* marchan desde el monumento Cabeza de Coyote, en el cruce de las avenidas Pantitlán y Adolfo López Mateos, hasta la explanada municipal Unión de Fuerzas.

Unos 150 taxistas y comerciantes bloquean de manera intermitente, por más de cinco horas, varios puntos de la avenida Costera Miguel Alemán, en Acapulco, Guerrero, para exigir que se detenga el presunto hostigamiento de agentes de la Policía Federal (PF), a quienes acusan de extorsionarlos y de detenciones injustificadas, como parte del operativo conjunto que se aplica en el puerto desde que comenzó este año para combatir a la delincuencia organizada. Algunos de los inconformes portan cartulinas con sus demandas y otros estacionan más de 100 vehículos a lo largo de la avenida. En otro momento exhiben una piñata en forma de ratón vestido de policía. La protesta comienza a las 10 de la mañana en el astabandera ubicada cerca del parque Papagayo; más tarde, taxistas y comerciantes marchan a la base naval que se halla rumbo al hotel Casa *Inn*, frente a la discoteca *Baby'O*, donde bloquean la circulación y provocan congestión vial.

Miembros de la organización Vendedores Independientes Veracruzanos se extraen sangre frente al ayuntamiento de la capital, para exigir a la alcaldesa priísta Elizabeth Morales retirar los cargos

contra sus compañeros Gustavo Méndez y Francisco Rodríguez, detenidos el 25 de octubre pasado, luego que el gobierno municipal interpuso denuncias en su contra por encabezar protestas contra la alcaldesa. Magno Méndez, hermano de Gustavo, acusó a Morales de responder a las demandas de la población con la fuerza pública y el acoso judicial.

Miércoles 30

La familia del activista Nepomuceno Moreno Muñoz –asesinado el pasado lunes en esta ciudad– saldrá de Sonora ante el riesgo de sufrir un atentado, informa Emilio Álvarez Icaza, integrante del MPJD. Señala que los parientes de la víctima solicitarán a las autoridades federales protección las 24 horas del día. “Hemos hecho saber al gobernador [Guillermo Padrés Elías] que nos parece una señal de alarma que la gente de Sonora decida en un caso de crisis no permanecer en el estado”, subraya. En tanto, la administración federal, legisladores y grupos religiosos integrantes del MPJD condenan el asesinato de Nepomuceno Moreno Muñoz; además, senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y PRD exigen al gobierno garantizar que no haya impunidad en este crimen. Asimismo, por conducto de la Secretaría de Gobernación, la administración del presidente Felipe Calderón condena el cobarde homicidio del señor Nepomuceno Moreno Muñoz, ocurrido recientemente en la ciudad de Hermosillo, Sonora, y expresa sus más sentidas condolencias a los familiares del reconocido activista por tan lamentable pérdida.

El gobierno federal entrega por la noche al SME una propuesta de reinserción laboral que, de entrada, es calificada por la dirigencia de esta organización como no viable. El SME aspira a regresar a trabajar al sector eléctrico y el planteamiento gubernamental se limita a que los electricistas, ex trabajadores de LFC que no han aceptado su liquidación, se integren en empresas prestadores de servicios para la CFE y 12 dependencias públicas más. Entonces, el secretario de Gobernación ofrece continuar con una siguiente reunión la próxima semana; analizar la forma de acercar las dos posiciones, tanto sindicato como gobierno, segura Martín Esparza, al término de una reunión de más de dos horas en la SG, encabezada por el titular de esta dependencia, Alejandro Poiré. Los dirigentes sindicales advierten que la propuesta recibida “ya ha demostrado su fracaso con los trabajadores que aceptaron su liquidación y se embarcaron en la creación de pequeñas empresas que, finalmente, no prosperaron ni significaron una alternativa viable para la sobrevivencia y ocupación de los electricistas”.

Luchadores sociales y catedráticos proponen que se amplíe el periodo que investigará la Comisión de la Verdad –en cuya integración trabajan diputados locales de Guerrero y dirigentes ciudadanos–, pues los coordinadores de ese órgano proponen que sólo indague entre 1969 y 1979, lapso que abarca la denominada “guerra sucia” en Guerrero, durante la mañana en el marco del foro de análisis y discusión sobre la Ley de la Comisión de la Verdad, en el cual participan principalmente representantes de organismos no gubernamentales. Entre sus propuestas, los asistentes insisten en la necesidad de elaborar un programa integral para resarcir el daño causado a familiares y víctimas de la guerra sucia.

Un centenar de taxistas marcharon el día 29 hacia la Plaza de la Constitución, en el Distrito Federal, para exigir una prórroga en el plazo para pagar la concesión y sustitución de los vehículos con 10 años de antigüedad, y que sea en diciembre del próximo año, pues la revista vehicular “nos obliga a

hacerlo ya, cuando las autoridades no han cumplido con el ajuste cuatrimestral [de la tarifa] acordado”. Desde las 10 de la mañana, el grupo de taxistas ocupa dos carriles de las calzadas de Tlalpan e Ignacio Zaragoza para dirigirse al Zócalo. Los manifestantes arriban a la Plaza de la Constitución alrededor del mediodía para ubicarse frente a la sede del Gobierno del Distrito Federal, que ya se encontraba resguardada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.

Glosario de siglas

AEI	Agencia Estatal de Investigación
AI	Amnistía Internacional
AFL-CIO	Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales
ANAD	Asociación Nacional de Abogados Democráticos
APIIDTT	Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio
APPO	Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca
CEDH	Comisión Estatal de Derechos Humanos
CEI	Corredor Eólico del Istmo
CEJIL	Centro por la Justicia y el Derecho Internacional
CERSS	Centro de Reinserción Social para Sentenciados
CETEG	Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero
CFE	Comisión Federal de Electricidad
CIDH	Corte Interamericana de Derechos Humanos
CNDCCHIM	Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas
CNDH	Comisión Nacional de los Derechos Humanos
CNI	Congreso Nacional Indígena
CNOC	Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras
CNTE	Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
COFADAPPO	Comité de Familiares de los Desaparecidos, Asesinados y Presos Políticos de Oaxaca
CONAFE	Consejo Nacional de Fomento Educativo
CONAGUA	Comisión Nacional del Agua
CONASAMI	Comisión Nacional de Salarios Mínimos
COR	Confederación Obrero Revolucionaria
CRAC	Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria
CROC	Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos
CROM	Confederación Obrero Revolucionaria de México
CT	Congreso del Trabajo
CUAAD	Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño
DIA	Diálogo por la Reconstrucción de México
ERPI	Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente
EZLN	Ejército Zapatista de Liberación Nacional
FARP	Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo
FEVIMTRA	Fiscalía Especial de Delitos Violentos Contra las Mujeres y Trata de Personas
FGE	Fiscalía General del Estado
FRAYBA	Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas

HRW	Human Rights Watch
IFE	Instituto Federal Electoral
INAH	Instituto Nacional de Antropología e Historia
INM	Instituto Nacional de Migración
ISSSTE	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
JBG	Junta de Buen Gobierno
LyFC	Luz y Fuerza del Centro
LIMEDDH	Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos
MMB	Movimiento Magisterial de Bases
MORENA	Movimiento de Regeneración Nacional
MPJD	Movimiento Paz con Justicia y Dignidad
OCNF	Observatorio Ciudadano Nacional del Femicidio
OIT	Organización Internacional del Trabajo
PAN	Partido Acción Nacional
PANAL	Partido Nueva Alianza
PF	Policía Federal
PGJDF	Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal
PGJE	Procuraduría General de Justicia del Estado
PGR	Procuraduría General de la República
PRD	Partido de la Revolución Democrática
PRI	Partido Revolucionario Institucional
PRODH	Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
PROFECO	Procuraduría Federal del Consumidor
PT	Partido del Trabajo
PU	Pastoral Universitaria
PVEM	Partido Verde Ecologista de México
SACM	Sistema de Aguas de la Ciudad de México
SEDESOL	Secretaría de Desarrollo Social
SEP	Secretaría de Educación Pública
SME	Sindicato Mexicano de Electricistas
SNTE	Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
SSPDF	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal
SSPM	Secretaría de Seguridad Pública Municipal
STAUO	Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Oaxaca
STPS	Secretaría del Trabajo y Previsión Social
SUTUACM	Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México
TEPJF	Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
TLCAN	Tratado de Libre Comercio de América del Norte
UABJO	Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca
UACJ	Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
UACM	Universidad Autónoma de la Ciudad de México
UAG	Universidad Autónoma de Guerrero
UAM-I	Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Iztapalapa
UNAM	Universidad Nacional Autónoma de México
UNORCA	Unión Nacional de Organizaciones Campesinas Autónomas

UPOEG

Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero

Realizado por el Comité de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura de México del Observatorio Social de América Latina de México (OSAL-CLACSO).

Integrantes: Fernando Munguía Galeana y Mariana López de la Vega.

Fuentes: diarios La Jornada y El Universal.

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales



Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais



OSAL

Observatorio Social de América Latina
Publicación electrónica

Cronología del Conflicto Social

México

Diciembre de 2011

Editada en junio 2012



Agencia Sueca
de Desarrollo Internacional



Agencia Noruega para la
Cooperación al Desarrollo



Govern
de les Illes Balears

Conselleria d'Afers Socials,
Promoció i Immigració
Direcció General de Cooperació

El Observatorio Social de América Latina [OSAL] cuenta con el apoyo de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional [ASDI], la Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo [NORAD] y la Agencia de Cooperación Internacional de las Islas Baleares [ACIB].

Documento de trabajo N° 1050

***Realizado por el Comité de Seguimiento y Análisis
del Conflicto Social y la Coyuntura de
México***



Integrantes Massimo Modonesi, Lucio Oliver,
Mariana López de la Vega y Fernando
Munguía Galeana

Fuentes diarios La Jornada y El Universal

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Se autoriza la reproducción de los artículos en cualquier medio a condición de la mención de la fuente y previa comunicación al director.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en el documento incumbe exclusivamente al autor o a los autores firmantes y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

El **Observatorio Social de América Latina** (OSAL) constituye una iniciativa del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinada a la promoción de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, las dinámicas de participación y los repertorios de acción de los movimientos sociales y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado es uno de los resultados de este trabajo de relevo y registro llevado a cabo en el marco del programa. Se trata de un escrito en el que se sintetizan las principales acciones de movilización y protesta social y las medidas políticas llevadas a cabo durante el mes indicado en el país referido.

La cronología presentada ha sido elaborada por uno de los **Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana** que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo la coordinación del equipo de investigación mexicano, que forma parte de la red institucional de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.

Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana

PAÍS	INSTITUCIÓN	COORDINACIÓN
Argentina y Uruguay	PIMSA (Argentina)	María Celia Cotarelo
Bolivia	CIDES – UMSA	Dunia Mokrani Chávez Pilar Uriona Crespo
Brasil	LPP - UERJ	Roberto Leher
Chile	DI - UARCIS	Juan Carlos Gómez Leyton
Colombia	Escuela Nacional Sindical	Guillermo Correa Montoya
Costa Rica	IIS - FCS - UCR	Sindy Mora Solano
Ecuador	Centro de Investigaciones CIUDAD	Mario Unda
Guatemala	FLACSO Guatemala	Simona Yagenova
México	FCPS - UNAM	Massimo Modonesi Lucio Fernando Oliver Costilla
Panamá, El Salvador, Nicaragua y Honduras	CELA “Justo Arosemena” (Panamá)	Marco A. Gandásegui (h)
Paraguay	Centro de Documentación y Estudios	Quintín Riquelme
Perú	Instituto de Estudios Peruanos	Ramón Pajuelo Teves
República Dominicana y Puerto Rico	CES “Padre Juan Montalvo” (Rep. Dominicana)	Octavio Figueroa
Venezuela	PROVEA	Marco Antonio Ponce

México

Cronología del conflicto social

Diciembre de 2011

Jueves 1

Elementos del Ejército Mexicano desarticulan redes de radiocomunicación clandestinas que utilizaban grupos del crimen organizado para apoyar sus actividades, en los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) precisa que en total fueron desmanteladas 167 antenas, 155 repetidoras, 166 fuentes de poder, mil 446 radios, mil 306 celulares, mil 354 aparatos Nextel y 71 equipos de cómputo. Señala que con estas acciones fueron afectadas y en muchos casos desarticuladas, redes de comunicación empleadas por la delincuencia organizada, además de que fueron detenidos integrantes de grupos criminales y se decomisó armamento, equipo táctico y vehículos.

En Chilpancingo, Javier Morlett Macho anuncia –luego de que se corroboró que una osamenta hallada en el Distrito Federal correspondía a su hija Adriana Morlett, asesinada en septiembre de 2010–, “ahora nos dedicaremos de tiempo completo a luchar para que el gobierno federal castigue a los autores intelectuales y materiales del homicidio, lo haremos hasta el final de nuestros días”. Entrevistado antes del inicio del foro Diálogo por la convivencia y la paz, realizado en la capital, Morlett manifiesta: “Primero le vamos a dar sepultura honrosa a mi hija, eso lo haremos en estos días, y en segundo lugar la lucha continúa con la búsqueda de los responsables del homicidio”.

En Guadalajara, unos 150 intelectuales y artistas de 30 países piden en un documento al presidente Felipe Calderón que cancele las concesiones otorgadas por el gobierno mexicano a las empresas mineras canadienses que extraen plata y oro en Wirikuta, territorio sagrado de los huicholes, ubicado en el desierto de San Luis Potosí y que abarca unas 140 mil hectáreas. Entre los firmantes del escrito se encuentran tres premios Nobel de Literatura: Jean-Marie Le Clézio, Orhan Pamuk y Tomas Tranströmer; además de los escritores y artistas Paul Auster, Francisco Toledo, Lawrence Ferlinghetti, Sergio Ramírez, Ledo Ivo, Ariel Dorfman, Alejandro Jodorowsky, Vicente Rojo y Homero Aridjis, este último promotor del documento por medio del Grupo de los Cien Internacional.

Dos secciones mineras de Ciudad Sahagún, Hidalgo, la 200 y la 301, concluyen la madrugada sus revisiones salariales con la empresa Bombardier Transportation México, en las que obtuvieron incrementos de 6 % directo a sus remuneraciones, más 2 % adicional en una sola exhibición. El sindicato nacional de mineros indica al respecto que las negociaciones fueron llevadas directamente desde Vancouver, Canadá, con la empresa, por parte de su dirigente Napoleón Gómez Urrutia, y que a pesar de que no era revisión contractual, también se logró el acuerdo de aumentar cien categorías para los trabajadores y trabajadoras, así como 120 puestos de planta adicionales.

En Villahermosa, trabajadores sindicalizados de los Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos del estado levantan este jueves la huelga que iniciaron el lunes pasado, para exigir un incremento salarial de 3.8 %. El paro de labores que mantuvieron en 18 planteles afectó a unos 13 mil alumnos. La noche del miércoles los trabajadores acordaron instalar una mesa de negociación con autoridades educativas estatales.

Por cerca de nueve horas el edificio sede de la delegación Tláhuac, Distrito Federal, es tomado por profesoras de cinco Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) de la demarcación quienes exigen el pago adelantado de la última quincena de diciembre, como se hacía cada año. Pese a la interrupción de servicios, agresiones que se suscitaron e inconformidad de personal administrativo, el titular de la demarcación, Rubén Escamilla Salinas, demora seis horas en atender la protesta, porque no estaba en agenda. La inconformidad se presentó hace más de 20 días al director de desarrollo social, Luis Alberto Meléndez Ortiz –quien está a cargo de los CENDI–, pero no hubo respuesta. Las profesoras decidieron entonces acudir con el titular de la demarcación, y, ante su negativa a recibirlos toman el edificio delegacional.

Viernes 2

Los promotores de la demanda ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el presidente Felipe Calderón y diversos cárteles del narcotráfico, por delitos de guerra y de lesa humanidad, responsabilizaron al gobierno federal de cualquier acción legal o extralegal que pueda llevarse a cabo contra ellos, y solicitan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares para quienes han aparecido en foros públicos apoyando la denuncia. En conferencia de prensa, subrayan que la querrela no puede ser calificada de calumnia ni es posible que sus impulsores sean acusados penalmente, como sugirió el gobierno del país en un comunicado, porque forma parte de los derechos ciudadanos a defenderse de las autoridades y a señalar las acciones equivocadas.

El Centro de Derechos Humanos ‘Miguel Agustín Pro Juárez’ (PRODH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) manifiestan su preocupación por el retraso del Estado mexicano en las investigaciones por el caso de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, a más de año de la sentencia de la CIDH. Aunque la Procuraduría General de la República (PGR) ya comenzó el proceso, la Sedena no ha facilitado la información necesaria para que las pesquisas continúen, señalan las organizaciones en un comunicado conjunto.

En Ciudad Juárez, Norma Andrade es herida de bala, profesora y fundadora de la Organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, durante un supuesto intento de asalto, por lo que la activista fue internada en el hospital 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con lesiones en tórax y brazo. Entrevistada vía telefónica, Malú García Andrade, hija de la lesionada y también activista social, quien se encuentra fuera de la ciudad con medidas cautelares ordenadas por la CIDH ante amenazas de muerte recibidas, dice que la agresión contra su mamá fue intencional y los responsables “son los mismos que me amenazaron, [están] ligados directamente al cártel de Juárez.”

La organización Familia Pasta de Conchos celebra el Informe especial sobre las condiciones de seguridad e higiene en la zona carbonífera del estado de Coahuila, emitido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el miércoles anterior. El documento de la CNDH detalla las condiciones en las que se realizan los trabajos de explotación del carbón, subraya que distan mucho de ser las idóneas para asegurar un trabajo digno, conforme a lo establecido en nuestra Constitución y en la normativa internacional. Con ello, indica la organización, se demuestra también que los problemas en la zona carbonífera van más allá de la expresión de unas viudas o las gestiones de algunos grupos civiles.

En Chilpancingo, organizaciones sociales recuerdan el 37 aniversario de la muerte de Lucio

Cabañas, fundador del Partido de los Pobres, demandan libertad para los presos políticos, repudian la violencia provocada por el crimen organizado y exigen desmilitarizar las comunidades indígenas. El acto se realizó en el zócalo de Chilpancingo, fue convocado por el Frente de Masas Populares de Guerrero. Ahí, Javier Monroy, coordinador del Taller de Desarrollo Comunitario, manifiesta que en la etapa de la guerra sucia, entre los años 60 y 70, desaparecieron más de mil 300 personas en México, y de ellas más de 660 en Guerrero.

En Ciudad Juárez, Chihuahua hace dos meses, personal de la Fiscalía General del Estado encontró una fosa clandestina en el Valle de Juárez. Sin embargo ante presiones de diversas organizaciones civiles las autoridades confirmaron el hallazgo, aunque señalan que solamente hay cuatro cuerpos recuperados, a los que se les realizan estudios de antropología para definir si son de mujeres desaparecidas en los años recientes. Un grupo de 25 familiares de mujeres desaparecidas se planta fuera de la fiscalía para exigir informes acerca del hallazgo de una fosa clandestina ocurrido hace dos meses, pero cuya existencia fue guardada en secreto por la autoridad.

En Chilpancingo, indígenas me'phaá –tlapanecos– de la comunidad de San Pedro Huitzapula, denuncian que una empresa extranjera, de la que no saben su procedencia, inició trabajos de exploración el lunes pasado en 3 mil hectáreas. El terreno está en disputa pobladores de la comunidad nahua, San Juan Bautista, en el municipio de Atlixnac. Unos 200 habitantes armados de San Juan Bautista apoyan los trabajos de la minera que ya abrió una brecha de un kilómetro, denuncia Jesús Parra de la Cruz, secretario de Bienes Comunales de San Pedro Huitzapula, en conferencia de prensa.

En Juchitán, indígenas zoques de San Miguel y Santa María Chimalapa concluyen el bloqueo a las carreteras Transistmica y Panamericana, cerca de El Mezquite, municipio de Asunción Ixtaltepec; y La Venta en Juchitán de Zaragoza. Luego de que el secretario de gobierno Jesús Martínez Álvarez ofrece destrabar las negociaciones en el conflicto que los comuneros oaxaqueños mantienen con ganaderos y ejidatarios de Chiapas.

En Jalapa, Veracruz, más de 90 mil caficultores del Estado resienten el aumento en el precio del café cereza –fruto maduro y recién cortado– impuesto por las empresas: Agroindustrias Unidas de México (AMSA), Café California, y Nestlé. Se estima que perderán más de 300 millones de pesos en esta cosecha, pese a que las cotizaciones internacionales del producto son elevadas. Dirigentes cafetaleros adheridos a la Confederación Nacional de Organizaciones Cafetaleras denuncian que por cada kilo las empresas que monopolizan su compra rebajan entre 1.5 y 2.50 pesos, pagándolo a inicio del presente ciclo de cosecha entre 8.50 y 9.50, cuando la cotización real debería ser de 11 pesos.

En Acapulco, líderes sindicales representantes de 215 profesores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Guerrero (CECyTE), advierten que las condiciones aún no están dadas para reanudar labores en sus seis planteles –en Petatlán, Iguala, Chilapa, Filo de Caballo; y Mozimba y Coloso, en Acapulco– donde fueron suspendidas las labores el pasado 22 de noviembre, en demanda de: 1) 80 a 85 días de aguinaldo, 2) 600 mil pesos para mantenimiento y, 3) la nueva firma del contrato colectivo de trabajo. Explican que las negociaciones con las autoridades avanzan lentamente.

En Chilpancingo, Bertoldo Martínez Cruz, dirigente del Frente de Organizaciones del Estado de Guerrero, denuncia que esta mañana en el Centro de Rehabilitación Social (CERESO) de Tuxpan,

municipio de Iguala, aparece muerto Joel Santana Villa, de 26 años, hijo de Rubén Santana Alonso, defensor de los bosques en la sierra Madre del Sur. No obstante, entrevistado vía telefónica Martínez Cruz afirmó: El secretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte Borja, informó que Joel murió de un paro cardíaco, lo cual no creemos: por eso pedimos al gobierno estatal una investigación exhaustiva del caso”. El dirigente social mencionó que según la dirección del CERESO de Tuxpan a las 6 de la mañana el celador pasó lista donde se encontraba junto con otros cinco reclusos, y a las 8 horas ya no llegó al comedor para desayunar con los demás presos.

Hay un enfrentamiento entre vecinos y trabajadores de la delegación Tlalpan contra elementos del cuerpo de granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal a la altura del km 23 de la carretera México - Cuernavaca. El jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard Casaubón, afirma que en total fueron 26 los uniformados que resultaron lesionados en la trifulca.

Integrantes del magisterio disidente inician el tercer Congreso Nacional de Bases para elegir nueva dirigencia, así como para analizar la construcción de una ruta crítica contra la aplicación de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) y la evaluación universal de docentes y directivos. Sergio Espinal, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional Democrático (CEND) del magisterio, afirma que acudirán delegados de 25 entidades, quienes deberán definir y aprobar las acciones jurídicas inmediatas para detener el deterioro de las condiciones generales de trabajo de los maestros.

Sábado 3

La organización de derechos humanos ‘Hijos México’ lleva a cabo la denuncia pública que realizan cada primer sábado de mes frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como hacen desde hace más de dos años. En esta ocasión, los activistas reparten uvas a los transeúntes y les pide que escriban una carta de Navidad con sus deseos de justicia para 2012. En cartulinas o a través del micrófono, diversas personas piden juicio y castigo para los responsables de crímenes, presentación con vida de los desaparecidos y empleo justo y decoroso, entre otras reivindicaciones. A propósito del final del año, Pablo Álvarez, integrante de Hijos México, lamenta que en 2011 la situación de los derechos humanos cambió para mal, pues los ataques contra los activistas se recrudecieron de forma notable.

La extrema dependencia comercial de México con Estados Unidos es uno de los principales motivos que atan al país a factores ajenos a su economía, e incluso ha hecho que los índices de pobreza e indigencia aumenten, como advirtió en días recientes la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), afirman académicos especializados en el tema. Señalan que lejos de ser una nación que se dirige a ser mayoritariamente de clase media, como afirma el ex secretario de Hacienda Ernesto Cordero, México es uno de los países del subcontinente donde resulta más difícil acceder a la canasta básica de alimentos.

Entre 1970 y 1995, miles de indígenas chamulas fueron expulsados de sus comunidades por ser protestantes. Muchos fueron asesinados o heridos. Su delito fue convertirse en evangélicos, en una época en que estaba prohibido –en ese municipio– no ser católico tradicionalista y/o militar en un partido diferente al Partido Revolucionario Institucional (PRI). Octavia Méndez, varias viudas así como aproximadamente mil evangélicos encabezados por dirigentes y pastores, participan en un acto para conmemorar el decimoséptimo aniversario del retorno de 587 indígenas desterrados

–durante 10 meses– en 1994 en San Cristóbal. Durante la ceremonia se guarda un minuto de silencio y se honra la memoria de 10 mártires que cayeron en la lucha y dieron su vida por la libertad religiosa, entre ellos los padres de Octavia, quien ahora vive en Tuxtla Gutiérrez, se dedicada a vender artesanías con su esposo y siete hijos. La celebración es parte de las actividades del día de la libertad religiosa que se conmemora el 5 de diciembre.

Domingo 4

Profesores del Movimiento de Bases Magisteriales (MBM) e indignados se plantan por la tarde en la explanada de Expo Guadalajara durante la 25 FERIA Internacional del Libro (FIL); extienden sus mantas de repudio al sindicalismo que encabeza Elba Esther Gordillo, a las políticas neoliberales que se siguen en el país, a la cuenta regresiva contra los poblados alteños de Jalisco amenazados de extinción por la presa El Zapotillo y al gran negocio que, dicen, significa la FIL. El MBM señala, en volantes los visitantes de la FIL. A la par, en el interior de la feria, se presenta un libro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación al que acudiría Gordillo, lo que no sucede, aunque sí estuvieron los líderes jaliscienses del gremio.

Ejidatarios de San Sebastián Bachajón, en Chilón, Chiapas, anuncian que recuperarán pacíficamente la caseta de cobro y las instalaciones oficiales en el acceso a las cascadas de Agua Azul, paraje del que fueron despojados hace 10 meses por policías estatales y grupos oficialistas de la región. Exponen que han tomado la decisión con base en que dichas construcciones se encuentran en las inmediaciones del terreno ejidal, sin el consentimiento de nuestro máximo órgano directivo. Los tzeltales de San Sebastián –adherentes de la Sexta declaración de la selva Lacandona– advierten que su acción fue consensuada por el núcleo ejidal. Los gobiernos estatal y federal serán responsables de cualquier acto represivo que suceda durante la toma.

La Central Campesina Independiente (CCI) exige al gobierno federal simplificar las reglas de operación de los programas sociales y ejercer sin dilación ni pretexto político electoral el presupuesto del Programa Especial Concurrente 2012, el cual asciende a 305 mil millones de pesos en apoyos para el campo, ya que no existe legislación que impida la distribución de recursos por motivos de la contienda electoral donde se elegirá al presidente de la República y al congreso federal. El dirigente de la CCI, Rafael Galindo Jaime, apunta que tiene que existir un cambio radical el próximo año en cuanto a los procedimientos que establecen las normas de operación para dichos programas, ya que se requiere actitud y estructura operativa por parte de la administración federal para que estos apoyos y recursos se ejerzan a tiempo.

El dirigente del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero, Bertoldo Martínez Cruz, culpa al gobierno de Guerrero de la muerte del campesino ecologista Joel Santana Villa, ocurrida el viernes pasado en el CERESO de Tuxpan, municipio de Iguala. Martínez Cruz exige una explicación al gobernador Ángel Aguirre Rivero, pues por un lado el secretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte Borja, declara que Santana Villa se suicidó, mientras el sábado el procurador de Justicia de Guerrero, Alberto López Rosas, afirma que el activista fue envenenado.

En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, un indígena murió y seis resultaron lesionados de bala en el municipio de Tenejapa, informa la procuraduría de justicia estatal. Añade que por la mañana, en la comunidad Vanabil, un grupo de sujetos agredió con armas de fuego a siete personas, provocando la muerte de Pedro Méndez López a consecuencia de dos impactos de bala. Entre los heridos está

Lorenzo López Girón, presunto integrante del grupo agresor, quien ya fue dado de alta y puesto a disposición del Ministerio Público, al igual que Francisco Santis López, aprehendido por autoridades comunales.

En Matamoros, en hospitales públicos de este municipio persisten la segregación y los abusos contra pacientes pobres diagnosticados con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, asegura Juan Martínez Escandón, miembro de la agrupación Nueva Vida. Agrega que médicos y enfermeras del hospital civil ‘Doctor Alfredo Pumarejo’ discriminan a mujeres y varones infectados con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), al grado de no quererles cambiar las sábanas hasta por una semana, dejando al paciente entre sangre y deshechos.

La población indígena acapulqueña sufre discriminación y olvido; no obstante, ha mantenido vivas sus tradiciones gracias a sus sistemas de enseñanza, los cuales sobreviven en los ocho planteles de educación bilingüe que hay en el puerto, da a conocer la investigadora Cristina Gabriela Barroso Calderón, de la Universidad Autónoma Metropolitana y de la Universidad Autónoma de Guerrero.

El presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, el perredista Javier Castellón, presenta un punto de acuerdo para demandar que la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el gobierno de Nayarit informen a la cámara alta por qué no se han pagado desde hace cinco meses apoyos del Programa Nacional de Becas y Financiamiento a jóvenes pobres.

Las 70 especies de vertebrados que en México se perdieron durante los pasados cien años equivalen a las que debieron desaparecer en 3 mil años, de acuerdo con las tasas normales de extinción, señala Gerardo Ceballos, investigador del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de (UNAM). El especialista detalla que en el mundo, durante el último siglo, la extinción de especies fue 280 veces más rápida, y que esto pone en riesgo los servicios ambientales que benefician a los humanos. En entrevista, explica que la tasa de extinción que se ha dado en el país es gravísima y se trata de un problema irreversible, mientras en otros conflictos ambientales, como la deforestación y el cambio climático, la Tierra se puede recuperar.

Las amenazas contra integrantes de organizaciones civiles, defensores de los derechos humanos y colaboradores de los medios de comunicación, generan un ambiente de inseguridad e intolerancia. Como no existe claridad sobre si todas estas amenazas y acciones vienen del gobierno federal, o de grupos que se dedican a la delincuencia, dificulta mucho tomar acciones concretas, advierte el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia. Ante la falta de mecanismos de protección federales prometidos, ha rescatado y brindado seguridad a personas con ayuda de la PGR y organizaciones de la sociedad civil, cuyos nombres, por seguridad, dice, no se pueden revelar, pero “lo que quiero decir es que esto demuestra que basta con una coordinación precisa y se puede hacer de inmediato, antes de tener este mecanismo que finalmente no se ha consolidado”.

Lunes 5

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y la entidad de ese organismo internacional para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, condenan enérgicamente el asesinato de Nepomuceno Moreno, integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), ocurrido el pasado 28 de

noviembre en Hermosillo, Sonora, y el atentado por el que resultó herida con arma de fuego –el pasado 2 de diciembre en Ciudad Juárez, Chihuahua– Norma Andrade, copresidenta de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa. Ambas instancias destacan la necesidad de retomar el diálogo entre el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil, para crear a la brevedad un mecanismo nacional de protección eficaz que garantice la seguridad de todas las personas que se dedican a la promoción y defensa de los derechos humanos. El representante en México de ONU-DH, Javier Hernández Valencia, sostiene que desde julio del presente año en que el gobierno expidió el acuerdo por el que se establecen las bases del mecanismo de protección de defensoras y defensores de los derechos humanos, no contamos con avances para su implementación eficaz, y asevera que toda dilación continúa aumentando los riesgos que cotidianamente enfrentan las víctimas y los defensores.

En Monterrey, tras realizar una investigación, la CNDH concluye que el cuerpo del médico Jorge Otilio Cantú Cantú presenta lesiones hechas a distancia menor a un metro, por lo que el padre de éste, Jorge Otilio Cantú González, señala que la muerte de su hijo “se trató de un asesinato, cobarde y maquinado por efectivos federales adscritos al gobierno estatal, que debe ser castigado”. Aunque tras la muerte de Cantú Cantú elementos militares informan que el joven de 29 años habría quedado en medio de un enfrentamiento entre policías estatales y hombres armados que viajaban en una camioneta y un vehículo Mazda, la investigación de la CNDH descarta esta versión con base en los videos de negocios ubicados en la avenida Lázaro Cárdenas, donde el pasado 18 de abril ocurrió la balacera que acarrió la muerte del médico.

La activista Malú García –hija de Norma Andrade, vicepresidenta de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, quien fue lesionada de cinco balazos el viernes anterior– afirma que el ataque que su madre sufrió no fue un intento de asalto sino un atentado directo, versión ya reconocida por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua. En entrevista realizada en Ciudad Juárez, Malú García recuerda que desde hace dos meses solicitó a las autoridades ayuda para salir del estado, por lo que se elaboró un protocolo que le permite estar en la ciudad de México; no así su mamá, que vive en Juárez con sus dos nietos, hijos de su hermana que mataron en 2001 y por quien se involucraron en actividades en favor de las mujeres.

La brecha entre los ingresos que perciben las familias más ricas del país y la población más pobre muestra una diferencia de 26 veces, informa la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en un informe difundido este lunes. La parte referente a México del estudio: Siempre más desigualdad: por qué la brecha de los ingresos aumenta, señala que en los últimos 25 años el ingreso real de los hogares mexicanos más acomodados creció en una proporción de 1.7, mientras en los de menores ingresos sólo aumentó 0.8%. De esta forma, según el organismo internacional, México se sitúa como el segundo país con mayor desigualdad entre los integrantes de la OCDE, sólo superado por Chile. México tiene el segundo nivel más elevado de desigualdad de los ingresos en la población activa en la OCDE, justo por debajo de Chile y muy por encima de la media, a pesar de su disminución desde mediados de los años 90. El ingreso medio del 10% de los hogares mexicanos con mayores ingresos en 2008 era de 228 mil 900 pesos, 25 veces por encima del 10% con menores ingresos, que tenían una percepción media de 8 mil 700 pesos. La diferencia es de nueve a uno en los países de la OCDE, destaca el organismo.

Cada vez menos mexicanos confían en la recuperación de la economía del país y en que mejore su situación económica. El índice de confianza del consumidor (ICC), elaborado de manera conjunta por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Banco de México (BM()), registró

en noviembre pasado una disminución mensual de 0.78%. Según el reporte de los organismos, en el ICC se observan reducciones mensuales en dos de los cinco componentes parciales que lo integran, los cuales se refieren a la actual situación económica de los miembros del hogar y a sus posibilidades para efectuar compras de bienes durables.

En Morelia, Michoacán, integrantes de la Coordinadora de Universitarios en Lucha (CUL) toman esta mañana las instalaciones de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) para exigir a la rectoría que se suspendan las investigaciones que realiza la PGR contra varios jóvenes que presuntamente utilizaron bombas molotov durante la ocupación del recinto, el primero de septiembre. A las 6 hrs, unos 500 moradores de las casas de estudiantes Nicolaíta y Che Guevara –adheridas a la CUL– entran a la universidad y bloquean los accesos. Lo mismo hicieron en las cinco preparatorias y siete escuelas y facultades ubicadas fuera de la ciudad universitaria. Los dirigentes estudiantiles exigen a las autoridades universitarias retirar los cargos para que la PGR suspenda la averiguación previa 320/2011, ya que nueve alumnos fueron llamados a declarar y en breve podrían librarse contra ellos órdenes de aprehensión. Sin embargo, el rector Salvador Jara Guerrero, declara que la Universidad Michoacana nunca presentó denuncia y que la procuraduría procedió de oficio.

En Querétaro, aproximadamente 30 trabajadoras sexuales demandan la destitución del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHQ), Adolfo Ortega Osorio, a quien acusan de ignorar sus denuncias contra autoridades, principalmente del municipio de Querétaro, gobernado por el Partido Acción Nacional (PAN). Con coronas fúnebres y un ataúd, se manifiestan frente a las oficinas de la CEDHQ, donde indicaron que este año han presentado cerca de 40 quejas y ninguna ha sido resuelta. En nombre de las trabajadoras sexuales, la presidenta de la asociación Mujer Libertad, Mónica Mendoza, indica que las denuncias interpuestas ante la CEDHQ son por abusos de policías municipales de Querétaro, quienes las extorsionan para dejarlas realizar su actividad en la vía pública.

En Jalapa, Veracruz, los ayuntamientos de Cosoleacaque y San Juan Evangelista, en Veracruz, así como el de Santiago Yaveo, Oaxaca, promueven denuncias penales contra Petróleos Mexicanos (PEMEX) por negarse a realizar 140 obras públicas que prometió tras causar daños en sus tierras y por adeudos fiscales. PEMEX adeuda a Cosoleacaque 40 millones de pesos por impuesto predial desde hace cinco años, mientras en San Juan Evangelista y Santiago Yaveo personal de empresas subcontratadas por la paraestatal ha amenazado a lugareños que reclaman pago por el uso de una panga –plataforma utilizada para cruzar ríos– y la reparación de caminos y puentes destruidos. Cirilo Vázquez Parissi, edil panista de Cosoleacaque, anunció que los tres ayuntamientos formaron un frente para defenderse de Pemex, obligarla a pagar sus deudas y dejar de acosar a los pobladores.

La CNDH lamenta la negativa de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), para aceptar la recomendación 61/2011 sobre el caso de las inundaciones ocurridas en Tabasco en 2010, “con argumentos que no corresponden a la realidad ni a las evidencias que se allegó este órgano nacional de defensa de los derechos humanos para resolver este asunto que enfrentaron y aún padecen miles de víctimas” [...] “En dicha recomendación –señala en un comunicado– se observa que servidores públicos de la citada institución vulneraron en agravio de las víctimas los derechos a la seguridad jurídica, legalidad, propiedad, posesión, trato digno, vivienda adecuada y desarrollo”. Ello, en razón de que se encuentran pendientes de concluir obras del Plan Hídrico Integral de Tabasco y no ha realizado obras de infraestructura hidráulica que permitan controlar los ríos que escurren libremente sobre la citada entidad. Asimismo, se advirtió que han existido prácticas que no han estado

encaminadas a prevenir la corrupción. Además, hubo irregularidades en cuanto a la actuación y fundamentación de la CONAGUA en relación a las evacuaciones y demoliciones de viviendas en las que participó su personal.

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (TCADF) declara nula la resolución administrativa de la Secretaría del Medio Ambiente (SMA) en la que se autoriza la manifestación de impacto ambiental para el proyecto de la Autopista Urbana de Cuota –conocido como Supervía Poniente–, al asegurar que nunca se realizó la consulta ciudadana a la que obliga la ley en la materia para llevar a cabo una obra de ese tipo. La resolución fue emitida el pasado viernes 2 de diciembre por la primera sala ordinaria de dicho tribunal, conformada por los magistrados Jorge Fernández Souza, Carlos Manuel Rebolledo Busto y José Luis Moctezuma Orozco, quienes fijaron un plazo de 15 días para que la Dirección General de Regulación Ambiental de la SMA deje sin efecto legal el acto declarado nulo. En el fallo del juicio I-43103/2010 se da la razón a la organización Greenpeace México y a los particulares Jorge Vera Lomelín y Lilia Rodríguez Ochoa, quienes promueven ese recurso legal, y se resuelve en contra de la Secretaría del Medio Ambiente y de la empresa Controladora Vía Rápida Poetas, responsables de la construcción de dicha vialidad, la cual correría de la avenida Centenario, en la delegación Álvaro Obregón, hasta la avenida Luis Cabrera, en Magdalena Contreras.

Por lo menos 10 mil vendedores ambulantes y de los llamados toreros han tomado las calles del Centro Histórico con la tolerancia de las autoridades capitalinas, lo cual ha provocado el cierre de 5 mil 40 negocios establecidos y la caída de las ventas en un 35%, lo que podría duplicarse en esta temporada navideña, según el sector privado. En la entrega de los resultados de la encuesta sobre la elección para jefe de Gobierno de la ciudad de México 2012, empresarios y comerciantes denunciaron que no ha habido ningún operativo para retirarlos. Dicen que se han extendido a calles como República de Bolivia, República de Colombia, República de Venezuela, Corregidora, Correo Mayor, El Carmen, Apartado, Jesús María, Argentina y Anillo de Circunvalación. Ello, dijeron, sin considerar el Eje 1 Norte-Rayón, Motolinía, ambas aceras del Eje Central y avenida Juárez, las cuales están tomadas por los toreros, cuya presencia, dijeron, es tolerada por policías, así como por la responsable de la Autoridad del Centro Histórico, Alejandra Moreno; el subsecretario de Programas Delegacionales, Héctor Antuñano, y el jefe delegacional de Cuauhtémoc, Agustín Torres.

Martes 6

La embajada de Estados Unidos en México señala que los integrantes de la agencia antidrogas de su país (DEA) –por su sigla en inglés– que investigan el lavado de dinero de cárteles mexicanos; por años han trabajado de manera colaborativa con el gobierno de México en este tema. Como parte de esa colaboración, la DEA trabaja con autoridades mexicanas para obtener y utilizar información sobre las organizaciones criminales para luchar contra las amenazas que éstas representan para nuestros países, por lo que esa oficina ha establecido mecanismos para coordinar y aprobar actividades asociadas con el combate al lavado de dinero. Como resultado de esta cooperación, ha decomisado dinero ilícito al crimen organizado transnacional en todo el mundo, mediante alianzas con instituciones de procuración de justicia, indica.

En Morelia, Michoacán, el jefe de la encargatura de Xalakayan, Trinidad de la Cruz Crisóforo, es secuestrado por un grupo de encapuchados fuertemente armados que lo interceptan cuando el líder

comunero acababa de integrarse a una comitiva del MPJD, que había programado una asamblea en la comunidad indígena de Ostula. Los hechos ocurrieron alrededor de las 16 horas en la carretera costera, entre la cabecera de Santa María Ostula y el poblado de Xalakayan. Los integrantes de la Caravana por la Paz y Trinidad de la Cruz fueron amagados con armas largas y conducidos al monte. Ahí fueron sometidos y tirados boca abajo al suelo mientras eran encañonados por los agresores, quienes los despojaron de sus teléfonos celulares y computadoras. Los encapuchados se llevaron a De la Cruz Crisóforo y permitieron que el resto de la comitiva abordara la camioneta, con placas de Jalisco, en la que se trasladaban desde temprano cuando partieron de la ciudad de Guadalajara. Siguieron su camino escoltados durante horas por un vehículo de hombres armados que, con amenazas, les ordenaron seguir hasta la ciudad de Lázaro Cárdenas –a 300 kilómetros del lugar del secuestro–, impidiéndoles ingresar a Ostula.

En Ciudad Juárez, la activista Norma Esther Andrade, dirigente de la organización no gubernamental (ONG) Nuestras Hijas de Regreso a Casa, fue dada de alta la tarde de este martes del hospital donde se le internó luego que fue intervenida quirúrgicamente por las heridas de arma de fuego que recibió el pasado 2 de diciembre. Andrade, su hija Malú García y sus dos nietos fueron trasladados en vehículos con blindaje a un inmueble no precisado por las autoridades, donde cuentan con seguridad las 24 horas del día por agentes de la Fiscalía General del estado.

Luego de recuperar durante dos días el predio de su ejido donde está la caseta de cobro en el acceso a las cascadas de Agua Azul –el centro ecoturístico más promovido por el gobierno de Chiapas–, los ejidatarios de San Sebastián Bachajón –adherentes a la otra campaña– denuncian la intervención del secretario de Gobierno quien ofreció dinero y amenazó con recurrir a la policía para desalojarlos, el sábado pasado. Los ejidatarios realizan también una protesta en el cruce de la carretera Ocosingo - Palenque, sin bloquear el paso vehicular, denunciando al gobernador Juan Sabines Guerrero y al secretario de Gobierno, Noé Castañón, como cómplices de las autoridades ejidales oficialistas, encabezadas por Francisco Guzmán Jiménez “Goyito”, en el despojo de tierras colectivas. Refieren que el 30 de noviembre, los ejidatarios adherentes a la Sexta declaración de la selva Lacandona tomaron las instalaciones y la caseta de cobro con la finalidad de recuperar lo que el comisariado oficial, en complicidad con dependencias del gobierno, pretende despojarnos: más de 600 has, falsificando un plano de decreto que ni siquiera coincide con el decreto presidencial del 29 de abril de 1980.

“En Chihuahua, sí hay trabajo con la mina. A la gente le pagan bien, pero no habrá dinero que alcance cuando empecemos a enfermar”, advierte Javier Morales, dirigente del ejido Agua Salada, municipio de Chínipas, en el complejo minero de Palmarejo. Cuenta que la vida cambió para los habitantes de la comunidad hace cinco años, con la llegada de la empresa canadiense Coreu d’Alene, que reabrió el viejo mineral inglés y lo explota a cielo abierto. “Hay derrama económica, pero la gente ha comenzado a reportar problemas de salud y mortandad de animales, así como daños en viviendas y parcelas. La mina le ha dado trabajo a la gente, pero pasan cosas que antes no teníamos”, reconoce Gonzalo Acuña, presidente del comisariado ejidal de Palmarejo. En 10 años recientes la sierra Tarahumara ha atraído más de 50 mineras extranjeras que operan a tajo abierto, debido al alto potencial para extraer oro y plata. Cinco ya están en producción.

En Morelia, Michoacán alumnos de la Casa de Estudiantes Nicolaíta, quienes mantienen cerradas desde el lunes las instalaciones de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, bloquean la avenida Madero de esta capital para exigir la suspensión de las acciones judiciales contra sus compañeros que introdujeron bombas molotov en la casa de estudios durante la toma del pasado

primero de septiembre. El rector Salvador Jara Guerrero considera innecesario el paro porque la Procuraduría General de la República archivó los 11 expedientes de los presuntos infractores.

La cifra de personas en situación de emergencia alimentaria en Chihuahua aumenta de 250 mil a 500 mil en poblaciones rurales y se extiende a zonas urbanas de los principales municipios de la entidad, informa el gobierno estatal. Da a conocer la integración de una comisión interinstitucional para atender la crisis generada por la sequía. La secretaria general de Gobierno, Graciela Ortiz, informa que inicialmente se había considerado la población de 22 municipios, principalmente de la zona serrana, donde se resentía el impacto de la escasez de lluvias. Sin embargo, un estudio reciente y más detallado, arroja que medio millón de habitantes, incluidas zonas marginadas de Ciudad Juárez, Chihuahua capital, Delicias, Cuauhtémoc y Parral, requieren asistencia alimentaria. La funcionaria califica de alarmante la cifra de personas en situación de vulnerabilidad por los efectos de la sequía y la falta de cosechas, por lo que apremió al gobierno federal a destinar mayores recursos para enfrentar la crisis.

El Senado aprueba la Ley General de Cambio Climático, cuya finalidad es reducir la vulnerabilidad de los sistemas humanos y naturales del país, ante el reto que impone el calentamiento global. El nuevo ordenamiento jurídico regula las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero. Dispone que los tres órdenes de gobierno concurrirán para aplicar políticas de protección, preservación y restauración del equilibrio ecológico. Crea el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, instituye un fondo para el cambio climático y el Registro Nacional de Emisiones. Determina sanciones de mil a 30 mil días de salario mínimo para las personas físicas o morales que no entreguen la información que se les solicite o por falsear datos, independientemente de cualquier responsabilidad civil o penal que se pudiera derivar, y en caso de reincidencia el monto de la multa podrá ser hasta el triple de lo originalmente impuesto. Se aprueba en lo general con 76 votos en favor, dos en contra y cinco abstenciones, y se turna a la Cámara de Diputados para continuar el trámite legislativo.

Organizaciones sociales solicitan al Gobierno del Distrito Federal (GDF) suspender de inmediato las obras de la Supervía Poniente, luego del fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) que declara nula la resolución administrativa de la Secretaría de Medio Ambiente que autoriza la manifestación de impacto ambiental para la vía de peaje. Las organizaciones Al Consumidor, Alternativas y Capacidad y El Poder del Consumidor afirman que el resolutivo del tribunal es claro: La autoridad violó los derechos de los actores relativos a seguridad jurídica, información y participación, porque la Secretaría de Medio Ambiente tenía la obligación no sólo de informar a la población sobre el proyecto, sino de consultarla para que tuviera la debida participación respecto de la viabilidad de la misma. Negarse a efectuar una consulta, expusieron las organizaciones, ha sido una constante del gobierno local, pese a que la petición ha sido recurrente por ciudadanos, organizaciones civiles y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en la recomendación 1/2011.

El primer visitador de la CDHDF, Mario Patrón, afirma que los ataques contra los defensores de las garantías básicas son un claro termómetro del raquítico nivel de democracia que vive el país. El servidor público acompaña en la conferencia de prensa, en la sede de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a las integrantes del Comité Norma Andrade, quienes solicitan protección y seguridad para la activista del mismo nombre y su familia, durante su estancia en Ciudad Juárez, Chihuahua, y su traslado hacia la ciudad de México. Patrón señala que durante este año, sin que sea un número definitivo, la CDHDF ha documentado 36 casos de agresiones contra defensores de los

derechos humanos, que van de homicidios y amenazas a privaciones de la libertad.

Miércoles 7

El líder comunero Trinidad de la Cruz Crisóforo es encontrado muerto en el municipio de Aquila, Michoacán, sólo unas horas después de que otros dos activistas del MPJD fueran privados de la libertad la noche del martes, lo que lleva al colectivo dirigido por el poeta Javier Sicilia a suspender casi todas sus actividades públicas, mientras definen sus nuevos protocolos de seguridad. La Procuraduría General de Justicia de Michoacán (PGJE) informa que el hallazgo tuvo lugar la tarde de este miércoles en el predio Barranca de Reyes, municipio de Aquila. Funcionarios de la dependencia precisan que el cuerpo del líder comunero, de 73 años, quien era jefe de la encargatura de Xayakalan, fue hallado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional alrededor de las 13 hrs. El cadáver tenía cuatro impactos de bala, huellas de tortura, las manos atadas y la oreja izquierda casi desprendida. En un comunicado, la procuraduría estatal señala que en el sitio fueron encontrados dos cartuchos percutidos calibre .38 súper, otro calibre 7.62, y una ojiva de calibre .38 súper.

En Monterrey, Nuevo León, Javier Sicilia afirma que los integrantes del MPJD están alarmados e indignados, porque en fechas recientes se recrudecieron la persecución y los asesinatos de activistas de la agrupación, como se confirma con la muerte del indígena de Ostula, Michoacán, Trinidad de la Cruz, y los secuestros de Eva Alarcón y Marcial Bautista, en Petatlán, Guerrero. En entrevista colectiva que ofrece después de reunirse con el procurador de Justicia de Nuevo León, Adrián de la Garza Santos, para analizar junto con activistas locales 29 casos de desaparecidos por la lucha contra el narcotráfico, Sicilia considera que parece que de una fecha para acá la persecución, principalmente sobre miembros del movimiento, se ha recrudecido, pues se tienen ya varios asesinados.

“Mentir en grande y hacerlo impunemente, eso es el poder” expone el subcomandante insurgente Marcos en el intercambio de ideas y reflexiones con Villoro sobre ética y política, “acaso ahora más solitarios por el barullo mediático en torno a la definición de los nombres de los tres bribones que habrán de disputarse el regir sobre los ensangrentados suelos de México”. Cuestiona al presidente Felipe Calderón Hinojosa y a los precandidatos presidenciales por sus célebres yerros. Sólo de uno admite “No encuentro nada significativo que Enrique Peña Nieto haya dicho, como si se tratara de un mal actor secundario, de ésos que salen en las telenovelas, balbucean algún parlamento y en los que nadie repara. Su designación como candidato será una muestra más de la descomposición del Revolucionario Institucional, y la disputa por ver quién lo maneja será a muerte (y en los priístas esta imagen no es retórica)”.

A punto de que concluya 2011, el precio promedio de la tortilla sobrepasó los 12 pesos por kilogramo en 30 de las 53 ciudades monitoreadas por el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados, de la Secretaría de Economía. Aún cuando según la dependencia el promedio a nivel nacional se mantiene en 11 pesos con 25 centavos. Si esta última cifra se compara con los 6 pesos que se pagaban en noviembre de 2006, antes de iniciar el gobierno del presidente Felipe Calderón. El principal alimento de los mexicanos acumula un encarecimiento de 87.5 %, de entonces a la fecha cuesta 5.25 pesos más, en promedio. En 2006 el salario mínimo ascendía a 48.67 pesos por día, por lo que alcanzaba para comprar 8.1 kg de tortillas, pero con el salario de 59.82 pesos vigente para 2011 sólo se pueden adquirir 5.3 kilos, es decir, que hay una reducción de

2.8 kilos de tortilla en la capacidad de compra del salario mínimo en lo que va del sexenio.

Al término de 2011, el valor de mercado de la mercancía comercializada en el sector informal de la economía –incluidos contrabando y piratería– será siete veces mayor que los ingresos por turismo y cuatro veces más que lo captado por concepto de remesas en todo el año, informó la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO-Servitur). Jorge Dávila, presidente del organismo, dice en conferencia que, según estimaciones de la confederación, el comercio informal alcanzará 79 mil millones de dólares al término del año, mientras los activos por turismo apenas serán de 12 mil millones y las remesas, 23 mil millones. La cifra del comercio informal representa un aumento de 5.3 % respecto del mismo dato del año pasado, cuando se ubicó en 74 mil millones de dólares.

En Toluca, un juez del estado de México dicta la primera sentencia por feminicidio, nueve meses después de que este delito fue tipificado en el Código Penal mexiquense. Austreberto Huerta Ortiz fue encontrado responsable de haber asesinado a su esposa y se le impuso una pena de 55 años de prisión. Por tratarse de un delito grave, Huerta Ortiz no tendrá derecho a reducción de la condena o preliberación anticipada, informa la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. Según la dependencia, Huerta Ortiz asesinó el 3 de julio a su esposa en el domicilio de ambos, ubicado en la colonia La Magdalena, en Toluca. En una discusión, Huerta golpeó a la mujer en la cabeza con una pesa de 7 kilogramos, provocando la muerte de inmediato.

En Cuernavaca, Morelos unos 400 integrantes del Movimiento Antorchista Nacional bloquean durante cuatro horas la carretera federal Cuernavaca - Tepoztlán para exigir a la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social cumplir 250 acciones de vivienda rural. Mientras, comerciantes de Xochitepec y taxistas de esta cabecera municipal protestan durante la sesión del Congreso local; los primeros, en demanda de que les permitan vender sus productos en el centro de Xochitepec los fines de semana, y los segundos para denunciar que el ayuntamiento aplica cobros excesivos por uso de suelo a los sitios de taxis.

En Chilpancingo, Guerrero, decenas de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa se apoderan de manera simultánea –de 11 a 13 hrs– de cinco radiodifusoras locales para exigir una audiencia de carácter resolutivo con el gobernador Ángel Aguirre Rivero, a quien acusan de dejarlos plantados en dos ocasiones. Los inconformes, que llegan encapuchados, ocuparon las cabinas de Radio Universidad, Radio y Televisión de Guerrero, ABC Radio, Capital Máxima y la Ké Buena. Por medio de ellas difundieron mensajes alusivos a su lucha. Los normalistas también piden un aumento de la matrícula de 140 a 170 alumnos y el otorgamiento de 30 plazas laborales para egresados. En Acapulco, un centenar de profesores y padres de familia pertenecientes a la zona escolar 46, que integra a 18 escuelas de la zona rural del puerto, bloquearon por más de tres horas la entrada principal de la delegación de los servicios educativos de la región Acapulco y Coyuca de Benítez de la Secretaría de Educación, en protesta por la falta de 25 maestros de educación física e inglés, así como 10 trabajadores administrativos desde el comienzo del ciclo escolar, en agosto pasado. Mientras, agremiados del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero denunciaron un déficit de 595 mil pesos en la cuenta del fondo de ahorro de los afiliados.

En la ciudad de México, unos cien mil niños se ven en la necesidad de trabajar en promedio 35 hrs a la semana en la industria de la construcción, gasolineras, tortillerías u ofreciendo sus servicios de limpiaparabrisas, con ingresos que van de uno a dos salarios mínimos, aunque uno de cada tres no

recibe ningún pago, informó el secretario de Trabajo y Fomento al Empleo, Benito Mirón Lince. En el foro La participación intersectorial en la prevención y erradicación del trabajo infantil, señaló que la falta de empleo de los padres obliga a niños de entre cinco y 17 años a incorporarse a alguna actividad para ayudar en los gastos, sin considerar el daño que les puede traer cargar cosas pesadas, no contar con equipo de protección o deambular entre carros por unas monedas. La falta de inspecciones a los centros de trabajo ha provocado muchas veces su contratación, por un salario menor al percibido por el resto de la plantilla y sin ninguna protección social. Advirtió que esa situación debe erradicarse y lo haremos mediante la firma de un compromiso intersectorial con las autoridades federales, organismos empresariales y el sector obrero para prevenir y atender las diversas formas de explotación infantil, afirmó.

Jueves 8

En Morelia, Michoacán, 8 familias de la comunidad nahua de Xayakalan, municipio de Aquila, en la región de la costa michoacana, temen que se dé una incursión de grupos armados ligados al narcotráfico que pretenden despojarlos de su territorio, recuperado en junio de 2009. Habitantes del poblado de Ostula denuncian que sujetos fuertemente armados se concentraron en La Palma de Oro, población enclavada en la sierra, por lo que no descartan que pudieran ser objeto de una nueva agresión. Al frente de los comandos estarían los asesinos del dirigente comunal Trinidad de la Cruz Crisóforo, activista del MPJD. Externan que temen que tras el crimen de la Cruz Crisóforo, el próximo blanco de los asesinatos sea Victorino Faustino Domínguez, hijo de Juan Faustino, otro de los líderes históricos en la lucha por la recuperación y defensa de sus tierras.

En Chilpancingo, Guerrero, fuerzas federales y estatales realizan un operativo conjunto con la finalidad de encontrar a Eva Alarcón Ortiz y Miguel Marcial Bautista Valle, dirigentes de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, levantados por un comando armado la madrugada del miércoles entre los municipios de Tecpan y Atoyac de Álvarez, informa Ángel Aguirre Rivero, gobernador del estado. En entrevista, el mandatario estatal asegura que en esto trabajan el grupo antisequestros de la PGR, el Ejército y, la policía Federal y Estatal.

El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y el gobierno federal acuerdan darle carácter permanente a la mesa de diálogo que establecieron el pasado 13 de septiembre. Con ello, los funcionarios federales, dirigentes sindicales, legisladores y/o las instancias que participen en esta negociación podrían sesionar incluso a diario. El SME informa a sus integrantes que ambas partes, reunidas en la Secretaría de Gobernación, siguen en la mesa de diálogo y se logra retirar la condicionante de liquidación como requisito para aceptar la continuación del análisis de las propuestas. El planteamiento del SME es que la reinstalación laboral sea exclusivamente en el sector eléctrico y no en alguna de las 12 dependencias federales en donde se les ofrece a los ex trabajadores de Luz y Fuerza (LFC) del Centro contratos de prestación de bienes y servicios. Adicionalmente se puso sobre la mesa el análisis de la viabilidad de la creación de una empresa paraestatal que dé servicio al sector eléctrico, incluso bajo el apoyo del gobierno capitalino.

Al escribir a Luis Villoro el subcomandante Marcos rinde reconocimiento a los recientemente fallecidos Tomás Segovia y comandante Moisés, originario éste de Oventik, quien sufrió un accidente la mañana del 26 de septiembre, camino a su cafetal. Como todos los dirigentes del EZLN, no recibía salario o prebenda alguna, y tenía que trabajar para mantener a su familia. El

vehículo en que viajaba con sus hijos se despeñó. Cuando llegó a la clínica de Oventik ya era finado. En su ejercicio, al modo de Plutarco, escribe: “Nombrando a Moisés y a Don Tomás, los traemos de nuevo, armamos el rompecabezas de sus vidas de lucha, y reafirmamos que, acá abajo, una muerte es sobre todo una vida”. Marcos recupera los pasos de Moisés desde 1985, cuando se sumó al EZLN y “junto a otros compañeros –Ramona entre ellos–, comenzó a caminar por las montañas del sureste mexicano con una idea de organización”. Y lo cita “Hay que luchar, decía. El primero de enero de 1994, como un combatiente más, participó en la toma de la presidencia municipal de San Cristóbal de las Casas. Pronto volvería como parte de la delegación zapatista para los diálogos de Catedral. Y siguió caminando los parajes tzotziles. El gobierno no tiene palabra, había concluido Moisés, quien junto a miles de indígenas levantó el Aguascalientes II, cuando el EZLN aún sufría la persecución zedillista”. El vocero rebelde destaca que Moisés, sin proponérselo, y sin ninguna ganancia, se vio convertido en uno de los jefes indígenas más respetados en el EZLN, y rememora: Apenas unos días antes de su muerte lo vi en una reunión del Comité Clandestino Revolucionario Indígena - Comandancia General del EZLN. Allí se analizó que una nueva generación de zapatistas estaba llegando a los cargos de dirección. Que jóvenes que nacieron después del alzamiento, se formaron en la resistencia y se educaron en las escuelas autónomas, son ahora elegidos como autoridades autónomas y miembros de las Juntas de Buen Gobierno.

La Familia Pasta de Conchos indica que el reciente informe de la CNDH sobre la situación de seguridad e higiene en la zona carbonífera de Coahuila, “evidencia que las condiciones en las que se realiza la explotación del carbón distan mucho de ser las idóneas para asegurar un trabajo digno. El documento establece que la situación en la que laboran los mineros en esa zona está fuera de ley, de los derechos que establece la Constitución y violan la normatividad internacional”. Esta organización, conformada por familiares de los 65 mineros muertos en la explosión de Pasta de Conchos en 2006 y que sigue reclamando la recuperación de los cuerpos de los trabajadores, indica que este informe especial dado a conocer la semana pasada, es oportuno porque evidencia lo que ha representado el gobierno del presidente Felipe Calderón para los mineros y lo que les espera con la gestión de Rubén Moreira al frente de ese estado.

En Morelia, más de mil 200 integrantes de la CNTE se plantan frente al congreso local para exigir a los legisladores que frenen la iniciativa de Ley de Educación, que dicen, beneficiará a los empresarios del sector y mantendrá marginada a la población más desprotegida. Jorge Cázares Torres, dirigente magisterial, advierte que tomarán la sede del poder legislativo si los diputados locales aprueban la reforma, porque no se tomaron en cuenta las opiniones de padres de familia y maestros. Cázares Torres insiste en que esta ley, a la cual se dio primera lectura en diciembre de 2010, atenta contra los intereses laborales del magisterio, porque busca la privatización de la educación, pretende inclinar el sistema educativo hacia la formación en competencias y está basado en un modelo pedagógico producto de políticas neoliberales.

En Mazatlán, Sinaloa, Luis Peraza Ibarra, corresponsal del periódico Noroeste en el municipio de Concordia, en el sur del estado, presenta una denuncia ante la visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por las amenazas que recibió en un mensaje de texto enviado a su teléfono celular. La visitaduría, a cargo de Miriam Berenice Hernández, atenderá lo que ocurra con la averiguación previa 228/2011, que integró la agencia del Ministerio Público. Jhenny Judith Bernal, secretaria ejecutiva de la CEDH, indica que en tres días se determinará si ese organismo puede iniciar las indagatorias.

Con un padrón abultado, en favor de institucionales, y rasurado, en contra de disidentes, al cierre de

esta edición los grupos afines a Elba Esther Gordillo de la sección 10 del SNTE seguían en el forcejeo por la pugna de cartera, sin poder arribar a un acuerdo para la designación del nuevo comité seccional. Al continuar el décimo noveno congreso extraordinario de dicha sección para renovar a su dirigencia, los nombres de Jorge Velázquez, de las delegaciones del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y Manuel Vallejo y Gustavo Vera, de las secundarias diurnas y generales, respectivamente, se mencionan entre los candidatos que la jerarquía sindical podría imponer en la secretaría general. Según los cálculos políticos de algunos delegados, en esta madrugada se presentan dos o tres planillas, una de las cuales será propuesta por la agrupación de disidentes. Sin embargo, no había claridad si los institucionales registrarían una o dos planillas, lo que dependerá de sus amarres, ya que la pugna se debe a la reducción de carteras, por lo que ya no habrá cobijo para todos. De 140 secretarios de dicho comité, la cifra bajó a 55, lo que significa que de 300 comisionados con suplentes que había, ahora habrá 55 titulares y 45 auxiliares.

Viernes 9

En Zacatecas, “históricamente la actividad minera ha significado una fuga de recursos para la entidad, porque los impuestos no se quedan, sólo deja una secuela de destrucción ecológica tremenda”, afirma Raúl Delgado Wise, investigador del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. En entrevista, el catedrático critica las enormes facilidades que el gobierno federal y la autoridades locales otorgan a los inversionistas nacionales y extranjeros, para ejecutar ambiciosos proyectos mineros, los cuales no impactan positivamente al desarrollo económico de la localidad e incluso, en muchos casos ni siquiera pagan bien a sus trabajadores. Delgado Wise detalla cómo a pesar de contar en el municipio de Mazapil, en el semidesierto norte del estado, con la mina Peñasquito, de la canadiense Gold Corp Inc. —una de las minas de oro más importantes de América Latina—, su operación no significa gran cosa para Zacatecas, porque realmente no repercute en el desarrollo de la entidad.

La CIDH pide al gobierno mexicano que brinde protección a la activista Norma Andrade, herida de gravedad el pasado 2 de diciembre, cuando fue baleada al llegar a su casa. En tanto, la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa comentó que el martes pasado Norma Andrade fue dada de alta de manera anticipada, por motivos de seguridad. Le pidieron que se retirara lo más pronto posible, ya que hubo llamadas intimidatorias contra el personal de la clínica donde era atendida. Desde entonces la activista está en Ciudad Juárez, en espera de ser trasladada a un lugar seguro, pero por el momento sus condiciones de salud no le permiten viajar. La situación es grave, ya que ha habido amenazas recientes contra sus compañeros de trabajo y familiares. Karla Michel Salas, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, explicó en entrevista que las condiciones de salud de Andrade no permitían que fuera dada de alta en manera inmediata, pero los médicos tomaron dicha decisión tras recibir llamadas amenazantes.

Hay elementos para pensar que Eva Alarcón y Marcial Bautista, integrantes del MPJD, secuestrados la noche del miércoles pasado, todavía se encuentran con vida, por lo cual es urgente que autoridades federales y estatales intensifiquen su búsqueda; afirma Gustavo Sánchez, presidente de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales. Llama a realizar una investigación cuanto antes que aclare la posible participación de agentes policiacos en ese delito y a otorgar medidas cautelares a varios integrantes de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESPCC). “Hay indicios de que Eva y Marcial siguen con vida. No sabemos exactamente cuáles son éstos, pero es la información que nos dan los compañeros de

Guerrero. Por eso pedimos que se intensifique la búsqueda, mediante un operativo de las fuerzas federales, estatales y el Ejército”, indica el activista en una charla con La Jornada.

En la víspera del 63 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos –aprobada el 10 de diciembre de 1948– se observa en el país y particularmente en Nuevo León un claro retroceso en la materia, pues sólo en la entidad la agrupación civil Ciudadanos en Apoyo a Derechos Humanos (CADHAC) ha documentado en lo que va del año 114 casos de desapariciones que involucran a 800 víctimas. Así lo dio a conocer Consuelo Morales Elizondo, directora del organismo, quien sostuvo que en 35% de las desapariciones ocurridas en Nuevo León habrían participado militares, marinos, policías federales y agentes estatales y municipales, según información recabada por CADHAC. Apunta “hay casos de ejecuciones y torturas perpetrados por miembros del Ejército y la Marina que no han sido sancionados ni se han reparado los daños a las víctimas o deudos”, de ahí que resulta altamente preocupante que las autoridades encargadas de proteger a la población y de garantizar los derechos de las personas ejercen o favorecen el aumento de la violencia.

En Tlaxcala, la madrugada de este viernes, al menos 70 profesores de la sección 31 del SNTE desalojan del edificio de su propiedad a docentes disidentes que ocupaban el inmueble desde hace 18 años, apoyados por el MBM de Tlaxcala que se creó tras una fractura con esta fracción gremial. En la madrugada, trabajadores del SNTE desalojan a cinco maestros del MBM que en ese momento hacían guardia en el inmueble. En las inmediaciones de la avenida Juárez, donde se ubica el edificio magisterial, se encontraban tres patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública estatal; sin embargo, ningún agente intervino. Mientras, los miembros de la sección 31 abrieron archiveros y toman la papelería.

“Las agresiones contra periodistas se han vuelto una constante en México, en gran medida a causa de la impunidad, y el hecho de que cada vez sean más los comunicadores asesinados o que recurren a la autocensura va empobreciendo la vida democrática del país”, advierten los participantes en el foro Justicia para periodistas asesinados y desaparecidos. El acto, organizado frente al monumento a Francisco Zarco, por el Centro de Periodismo y Ética Pública y Reporteros Sin Fronteras, comienza con un minuto de silencio por los comunicadores muertos y desaparecidos a causa de su trabajo, y un balance de las recientes agresiones padecidas. En la primera mesa del foro, familiares de periodistas víctimas de agresiones –entre ellos Francisco Ortiz Franco, del semanario Zeta; Mauricio Estrada, del diario La Opinión, o Armando Rodríguez, de El Diario– dan su testimonio de la forma en que debieron enfrentar no sólo el asesinato o desaparición de sus seres queridos, sino también la indolencia oficial para resolver los crímenes.

Sábado 10

En Querétaro, al concluir el Congreso Estatal Ciudadano de Derechos Humanos, los participantes firman un manifiesto de 14 puntos, entre los cuales se encuentra uno en el que se suman a la denuncia de 23 mil mexicanos ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el presidente Felipe Calderón por incurrir en crímenes de guerra y de lesa humanidad, y otro para demandar el retiro de las fuerzas armadas de las calles del país, porque violan las garantías elementales de los ciudadanos. En el congreso participan como ponentes José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México; Javier Sicilia, coordinador del MPJD, y Miguel Concha Malo, presidente de la asociación Fray Francisco de Vitoria, entre otros. “Suscribimos la denuncia que con valentía y

entereza presentaron 23 mil personas ante la CPI de La Haya el 25 de noviembre de 2011 contra la actitud criminal del Estado o de sus protegidos reales contra la violación sistemática de sus derechos que se señalan en la Constitución mexicana”, afirma el texto leído por Gonzalo Guajardo González, catedrático de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro.

En Nuevo Laredo, lo intentaron matar, lo secuestraron e incluso estuvo a punto de ir a la cárcel, pero Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de esta ciudad, continúa su lucha a favor de la justicia social, aferrado a la única autoridad que, afirma, puede brindarle protección durante este sexenio “Dios. Es quien me protege. Me encomiendo a Dios. Si no fuera por la fe, ya me hubiera rajado” exclama. En lo que va del sexenio de Felipe Calderón, 63 defensores de derechos humanos han sido asesinados y cuatro permanecen desaparecidos. Ningún caso ha sido resuelto. La CIDH ha dictado 158 medidas cautelares para 200 defensores que trabajan bajo peligro de muerte. “El gobierno de Felipe Calderón inyecta miedo a través del asesinato de defensores de derechos humanos” dice Raymundo Ramos mientras atiende a unas víctimas en su oficina. “Es una forma de tener oprimido a un pueblo. Cuando el gobierno ofrece terror, impunidad y miedo, controla un pueblo. Y eso es lo que está haciendo el gobierno. Los luchadores sociales somos la última resistencia. La lista de los defensores de derechos humanos asesinados aumenta cada día”. Los últimos: Trinidad de la Cruz, Nepomuceno Moreno, Pedro Leyva Domínguez, y la reciente desaparición de los líderes campesinos Marcial Bautista Valle y Eva Alarcón Ortiz.

En Ciudad Juárez, de 250 familias que llegaron hace 40 años a poblar la colonia Lomas de Poleo, sólo quedan 14. Son los más viejos, los que ya nada tienen que perder porque nada tienen, además de un puñado de mujeres y otro de niños que este año se quedaron sin la escuela que funcionaba desde 1980, por lo que actualmente permanecen junto a sus padres en un plantón dentro de las oficinas de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Ahí toman clases en un campamento improvisado, en demanda de que se reabra su primaria. Los demás salieron huyendo de los asesinatos, el hostigamiento, la vigilancia armada, la quema de casas, la vida dentro de un cerco de púas semejante a un campo de concentración y el sacrificio arbitrario de sus animales de crianza, acciones que imputan a los hermanos Zaragoza, pertenecientes a una de las familias más poderosas de este estado, propietaria de empresas gaseras, lecherías y desarrollos inmobiliarios, pero, sobre todo, dueños de la vida de quien se les atraviesa en el camino. En pleno desierto, en el oeste de esta ciudad conocida por los cientos de asesinatos impunes de mujeres, el auge del crimen organizado, la proliferación de las maquiladoras, las cifras más altas de muertes dentro de la conocida guerra contra el narco –nueve mil, según las organizaciones sociales–, estas 14 familias resisten y se niegan a dejar su tierra.

“Debido a la violencia en el país, cada vez mayor cantidad de habitantes de las zonas más golpeadas por la inseguridad dejan sus comunidades, por lo que tanto en congresos locales como en el ámbito federal debería empezar a discutirse la elaboración de una ley de desplazados internos forzados”. Lo anterior fue planteado durante la jornada académica realizada con motivo del Día de Acción Global Contra el Racismo y por los Derechos de los Migrantes, Refugiados y Desplazados, que se conmemorará el 18 de diciembre. Guadalupe Chipole Ibáñez, directora de Atención a Huéspedes, Migrantes y sus Familias de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, del Gobierno del Distrito Federal, Karina Arias Muñoz, integrante del grupo de trabajo sobre Política Migratoria, y Leticia Calderón, del Instituto Mora, coinciden en que el tema es un pendiente que se debe trabajar, pues los cambios de residencia podrían agudizarse.

En Acapulco, el gobernador Ángel Aguirre Rivero expresa que se sigue una investigación para dar

con los responsables del secuestro de Eva Alarcón y Marcial Bautista, de la Organización de Campesinos Ecológicos de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, ocurrido el miércoles pasado en la región de Costa Grande, cuando se dirigían a Chilpancingo. Entrevistado durante una gira de trabajo por Caleta, el mandatario expresa “Sé que hay alguna línea de investigación que nos puede llevar a identificar a los responsables de este hecho, pero lo importante es rescatarlos con vida”. Sostiene que su gobierno sigue todas las pistas necesarias para encontrar a ambos activistas y que sí ha mostrado su apoyo cuando los luchadores sociales demandaron su apoyo.

“En vez de limitarse a reunir datos para coloquios y foros, la antropología mexicana tiene ante sí el reto de comprometerse con los sectores más desprotegidos del país y retroalimentar las luchas de los pueblos contra las políticas de un Estado etnocida”, afirma el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera. Durante un homenaje que se le rinde en reconocimiento a su trayectoria, en el primer encuentro de egresados de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), el activista pone de relieve la necesidad de replantear el trabajo de los científicos sociales, para hacerlos participar con mayor fuerza en la resolución de los grandes problemas nacionales. “Necesitamos una antropología que se vuelque más en el compromiso con los derechos de los sectores más vulnerables, y no sólo en la investigación, porque en vez de fortalecer a los pueblos, más bien los ha debilitado. Ahora nos encontramos con un Estado cuyas políticas públicas consisten en atentar contra el territorio de los pueblos indígenas, integrarlos de manera forzosa y negarles sus derechos fundamentales”, señala.

Organizaciones sindicales, defensoras de los derechos de los trabajadores y abogados laborales repudian el aumento de hambre de 4.2% que acuerda el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, que regirá desde el primero de enero de 2012. Ante este nuevo atropello a los derechos de los trabajadores llaman a presentar quejas ante instancias defensoras de las garantías individuales, pues el alza miserable, que representa en promedio 2 pesos 45 centavos más por día es anticonstitucional. Carlos Rodríguez, del Centro de Reflexión Laboral y Acción Laboral, indica que con la reforma en derechos humanos, ahora las comisiones del área tienen competencia en los asuntos laborales, por lo que llama a sindicatos, organizaciones defensoras de derechos humanos y a trabajadores en lo individual a impugnar ante la CNDH el incremento que no representa buena noticia para los trabajadores.

Domingo 11

En Guadalajara, “tirados boca abajo en una brecha oculta por la selva sólo escuchamos los golpes secos y los lamentos ahogados de Trinidad de la Cruz Crisóstomo, de 72 años; detrás de nosotros alguno de los cuatro sujetos armados que nos emboscaron lo tortura mientras otros nos vigilan, cortan cartucho, preguntan cosas y amenazan”. Entre los cuatro encapuchados no suman el número de años del anciano al que están matando lentamente. Trinidad regresó ese 6 de diciembre a Xayakalan –territorio recuperado por los nahuas de Santa María Ostula el 29 de junio de 2009–, 15 días antes intentaron asesinarlo ahí mismo; un sicario lo golpeó varias veces con un rifle pero no se atrevió a disparar delante de tantas personas. A Trinidad lo sacaron de Michoacán para refugiarlo en Colima, sus heridas apenas cicatrizaban cuando decidió volver para animar a la gente a participar en la última fase de la consulta con la que se determinaría la postura de la comunidad en las negociaciones con la Secretaría de la Reforma Agraria y el gobierno estatal por el conflicto de tierras con pequeños propietarios de La Placita. Él sabía que estaba amenazado, pero tenía la idea de denunciar públicamente a su agresor, dar su nombre, señalarlo como miembro de un grupo

paramilitar que amedrenta a la gente para dividir a la comunidad.

Se pondrá en marcha en México la Oficina Regional de América de la Asociación Internacional Derecho a la Energía cuyo titular será el líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza Flores, actual vicepresidente de esta organización internacional, que tiene un carácter no gubernamental y el fin de alcanzar, en todo el mundo, el reconocimiento del derecho a la energía como garantía fundamental de la humanidad, y promover la repartición de los recursos energéticos. El SME informa que el organismo también fomenta la protección del ambiente y se moviliza en relación con las situaciones extremas de indigencia energética en el mundo. El secretario del Exterior del SME, Humberto Montes de Oca, indica que la organización impulsa en varias áreas la formulación de una carta del derecho fundamental a la energía y al surgimiento de una ética mundial.

Javier Sicilia, dirigente del MPJD, asevera, a un costado del Ángel de la Independencia, que el sábado se celebraron 63 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero desde hace cinco años, ese festejo en México es de luto. En esta guerra contra el crimen organizado van ya más de 63 mil 700 muertos, y más de 10 mil desaparecidos. “Todos somos Nepomuceno Moreno”, Sicilia exige a las autoridades que devuelvan inmediatamente con vida a Marcial Bautista Valle y a Eva Alarcón Ortiz, presidente y coordinadora, respectivamente, de la OCESPCC, quienes fueron secuestrados el pasado día 7. Ante más de un centenar de personas, Sicilia destaca que este evento está consagrado a los desaparecidos.

En Guadalajara, la Red Jalisciense de Derechos Humanos (RJDH) realiza, con motivo del 63 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, una evaluación sobre las graves violaciones perpetradas en la entidad y que permanecen impunes. Recuerda que el 22 de abril de 1992 ocurrió una explosión en ductos de PEMEX en el sector Reforma de esta capital, y aún hay damnificados sin apoyo. También se refiere al conflicto territorial entre Colima y Jalisco, por el cual han muerto indígenas nahuas. El documento menciona el carpetazo que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) dio al caso de la macrolimosna que el gobernador Emilio González Márquez entregó a la Arquidiócesis de Guadalajara; el abandono oficial a las víctimas del reciente huracán Jova, y el asesinato de 26 jóvenes cuyos cuerpos fueron abandonados en los Arcos del Milenio, el 24 de noviembre.

La CDHDF emite la recomendación 9/2011 por actos de violencia laboral ejercidos en agravio de mujeres que trabajan o prestan sus servicios como personal de confianza o por honorarios en 10 dependencias del Gobierno del Distrito Federal. El organismo investigó 14 quejas las cuales se refieren a violencia laboral, discriminación por embarazo y laboral, y pudo advertir un patrón de abuso sistemático cometido por diferentes servidores públicos adscritos tanto a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la ciudad de México. Las autoridades señaladas son las secretarías de Gobierno, de Seguridad Pública, de Finanzas, de Desarrollo Social, la PGJ, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, las jefaturas delegacionales de Cuajimalpa y Gustavo A. Madero, el Tribunal Superior de Justicia y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Académicos y autoridades de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) entran en una nueva discusión luego de que la contraloría general de la institución intenta categorizar a la planta docente como funcionarios públicos, lo que atenta contra la autonomía de la universidad y el derecho de huelga, señalan profesores del Colegio de Ciencias y Humanidades. Gabriela Vázquez Olivera, profesora investigadora de la Academia de Comunicación y Cultura, adscrita al plantel San

Lorenzo Tezonco, señala que el intento de la contralora Verónica Cuenca Linares viola los artículos tercero y 123 constitucionales, así como la Ley Federal del Trabajo. Desde hace algunos meses la contralora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México ha señalado que los trabajadores, tanto administrativos como académicos, son servidores públicos, por lo que aplica la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos cuando hay supuestas faltas administrativas, indica.

Lunes 12

En Chilpancingo, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, mueren al ser impactados por disparos de policías federales y estatales, así como agentes ministeriales, durante el violento desalojo de un grupo de alumnos de ese plantel que bloqueaba la Autopista del Sol México - Acapulco y la carretera federal, a la altura de Chilpancingo. Alrededor de las 11:45 hrs de este lunes, unos 500 normalistas llegan al sitio en camiones, apoyados por 26 indígenas de la Organización Campesina del Municipio de Tecoaapa, y otros 20 de la organización Xanii Tsavvi –sueño mixteco–, y cierran los carriles de dichas vialidades. Su demanda principal es una audiencia con el gobernador Ángel Aguirre Rivero, a quien acusan de haberlos dejado plantados en cuatro ocasiones. Piden también el reinicio de clases en la normal, suspendidas desde el 2 de noviembre, debido a que los maestros pretenden imponer como director a Eugenio Hernández García, a quien los alumnos señalan de represor. Otras peticiones son el aumento de la matrícula escolar de 140 a 170 plazas para el ciclo 2011-2012 y que los aspirantes que tengan promedio de siete de calificación puedan realizar el examen de admisión. Apenas había comenzado el bloqueo cuando llegaron al menos 300 efectivos de las policías federal y estatal, estos últimos encabezados por el general Ramón Arreola Ibarría, subsecretario de Seguridad en Guerrero; más tarde arribaron agentes ministeriales. Por su parte, más de 200 organizaciones civiles y en particular de defensa de los derechos humanos de todo el país condenan el asesinato de dos estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero. Critican la brutalidad policiaca y exigen una pesquisa inmediata, así como castigo a los responsables. La CNDH informa que inició una queja de oficio y envió visitadores para realizar la investigación correspondiente. ONG prácticamente de todo el país exigen “una investigación expedita, imparcial y efectiva de la violencia policial que culminó con la ejecución extrajudicial de los dos estudiantes, y el pleno respeto al derecho a protestar de los normalistas de Ayotzinapa, de la sociedad guerrerense y la mexicana en su conjunto”. La CNDH sostiene que permanecerá atenta a la actuación de servidores públicos encargados de cumplir y hacer cumplir la ley, de las investigaciones que emprendan para el esclarecimiento de estos hechos, lamentables y condenables, que por ningún motivo deben quedar impunes.

En Santiago de Anaya, Hidalgo, organizaciones ñañús acusan al ex gobernador y actual secretario de Coordinación Política del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong; al delegado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en Hidalgo, Martín Bermúdez Mendoza, y al edil Cliserio Ramírez, de ser cómplices del ecocidio que amenaza a siete comunidades, por la construcción de la cementera Santa Anita, en un área de tres millones 722 mil metros cuadrados. Luis Cruz Hernández, presidente de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC) en este municipio, distante 56 kms de Pachuca, alerta en entrevista sobre la inminente contaminación del acuífero Actopan -Santiago de Anaya, la más importante reserva de agua subterránea del Valle del Mezquital, ya que la cementera se asentará sobre el sitio de recarga de la región hidrológica 26 Pánuco - Cuenca del río Moctezuma - Subcuenca del río Actopan. “El problema se agrava –dijo Cruz Hernández–, si consideramos que la

cementerera, cuya construcción avanza, no cuenta con un sitio para la instalación del relleno sanitario obligatorio, y contraviniendo las indicaciones de la SEMARNAT, extrae de los canales de riego aguas negras que son utilizadas en las obras”. El proyecto cementero de Santiago de Anaya nació en 2008 y fue echado a andar con tecnología alemana el 24 de enero pasado, en una superficie de tres millones 722 mil metros cuadrados que incluyen áreas para la planta, de yacimientos, de amortiguamiento y caminos, con una inversión programada de 230 millones de dólares, de los que 10% será destinado a programas ecológicos para el rescate de flora y fauna, según su director, Jesús Ortiz Rosas.

En Jalapa, Fortunato Ruiz Blázquez, ex presidente municipal de Ixhuacán de los Reyes, y tres integrantes de su familia son asesinados a balazos por un comando que irrumpió en su domicilio, en la cabecera municipal de dicho poblado, cercano a esta capital. La Procuraduría General de Justicia del Estado informa en un comunicado que se inició una investigación sobre el ataque, perpetrado alrededor de las 21 horas del domingo en una vivienda de la calle María Luis Flores. Según testigos, al menos 10 hombres armados a bordo de dos camionetas abrieron fuego con armas de grueso calibre contra Ruiz Blázquez y varios integrantes de su familia, quienes se encontraban fuera de la casa. El ex alcalde fallece en el ataque y minutos después pierden la vida Irma Vargas Rodríguez, de 62 años de edad; Joan Ruiz Vargas, de 33, y Martín Vargas Ruiz, de 47. El Ejército Mexicano y la policía estatal no localizaron a los agresores. En tanto, la Secretaría de la Defensa Nacional, por conducto de la Sexta Región Militar, informa de la detención de dos presuntos sicarios en el municipio de Río Blanco, luego de un enfrentamiento a balazos. Los soldados liberan a una persona secuestrada y confiscan tres armas largas y un vehículo robado.

En Oaxaca, Apolonio Hernández Jiménez, poblador de Zimatlán de Lázaro Cárdenas, municipio de Putla Villa de Guerrero, –localidad beneficiaria de medidas cautelares de la CIDH– resulta herido de varios disparos luego que sus vecinos de la comunidad de San Sebastián Nopalera, municipio de Santa Lucía Monteverde, con quienes disputan tierras, lo atacan cuando cosechaba café con otras siete personas en el paraje Corral de Piedra, denuncia el presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, Maurilio Santiago Reyes. Recuerda que el 4 de agosto de 2010 la CIDH otorgó medidas cautelares a Zimatlán de Lázaro Cárdenas por las constantes agresiones de los habitantes de San Sebastián Nopalera. En tanto, el coordinador de programas de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, Carlos Beas Torres, denuncia que pistoleros al servicio de ganaderos de la comunidad Santa María Yaveo, municipio de Santiago Yaveo, han incursionado en las tierras comunales de San Juan Jaltepec para apropiarse de terrenos y talar árboles. Agregó que sujetos encabezados por un hombre apodado El Guerrero retuvieron a dos comuneros de San Juan Jaltepec durante un día.

Martes 13

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal difunde un presunto peritaje en el que, según la dependencia, un agente de la Policía Ministerial de Guerrero, vestido de civil, sería el responsable de la muerte de uno de los dos estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, fallecidos durante el desalojo violento que realizaron policías locales y federales en la Autopista del Sol el pasado lunes. La dependencia que dirige Genaro García Luna envía a los medios de comunicación dos imágenes; una de ellas es una fotografía aérea de la zona del desalojo, con gráficas sobrepuestas que supuestamente indican la manera en que el policía ministerial abrió fuego y mató al estudiante. La otra consiste en dos imágenes y un cuadro de texto. La SSP federal

escribe en el documento: “los impactos de proyectil de arma de fuego sobre el muro de contención, que demuestra que los impactos fueron hechos por un costado, donde estaba haciendo disparos la Policía Ministerial”. Esto es acompañado con fotografías de un hombre vestido de civil disparando y agentes federales posicionados lejos y de frente al cuerpo de uno de los estudiantes abatidos.

En Acapulco, el gobernador Ángel Aguirre Rivero ordena la destitución del procurador general de Justicia, Alberto López Rosas; del secretario y subsecretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte Borja y Ramón Arreola Ibarría, respectivamente, así como del director de la Policía Ministerial, Antonio Valenzuela Valdez, para no entorpecer las investigaciones del asesinato de dos estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa durante el desalojo policiaco del lunes pasado. En una entrevista radiofónica, el mandatario estatal señala que tomó la decisión porque esto facilitará las investigaciones, dará más certeza y transparencia al proceso de investigación. Lo hago también porque no tengo nada que ocultar. Califica lo sucedido como hechos lamentables y tristes; “estoy conmocionado por lo ocurrido ayer (el lunes), y lo único que puedo expresar es mi condena y mi compromiso de que no voy a meter las manos al fuego por nadie ni voy a permitir actos de impunidad” manifiesta.

Ante el aumento de homicidios y amenazas en contra de defensores de derechos humanos, el gobierno federal generará más mecanismos administrativos para intentar atajar el problema. Ahora busca el apoyo de gobernadores para poner en marcha un protocolo de reacción inmediata y un manual de operación, especialmente en los lugares de mayor alerta y de riesgo para los activistas, como Guerrero y Chihuahua. Aunque la Secretaría de Gobernación (Segob) asegura que la protección a los defensores de garantías básicas, deudos y víctimas del delito es una de sus prioridades, en los hechos la subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos tiene acéfala más de un mes. Ésta es responsable de hacer cumplir las medidas administrativas necesarias para la protección de los luchadores sociales; es decir, vigilar que las dependencias federales, incluida la PGR, realicen las acciones establecidas en el acuerdo presidencial publicado el 7 de julio pasado. Sin embargo, nada se ha dicho hasta ahora acerca de quién será el sucesor de Felipe Zamora, quien junto con el secretario Francisco Blake y otras seis personas falleció el 11 de noviembre en un accidente aéreo. Gobernación tampoco tiene oficial mayor y el trabajo en los temas referidos está a cargo desde hace cuatro semanas de los directores de área y de unidades.

La CNDH investiga los asesinatos de los activistas Trinidad de la Cruz y Nepomuceno Moreno, el secuestro de Eva Alarcón y Marcial Bautista, así como el atentado contra Norma Andrade, y si se confirma una actuación irregular de las autoridades podría citar en breve a diversos funcionarios por realizar mal su trabajo, incluidos los policías que tenían que dar seguridad a De la Cruz. Así lo afirma Javier Sepúlveda Amed, director general del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de la comisión, quien advierte que en años recientes se incrementó de forma preocupante el número de agresiones contra dichos gremios. El funcionario condena enérgicamente cualquier asesinato o desaparición forzada contra comunicadores y activistas, advierte “que estamos viviendo una situación muy complicada, porque el funcionamiento correcto de un Estado democrático depende de que las leyes se cumplan y las instituciones funcionen”.

En Ciudad Juárez, Norma Andrade, vicepresidenta de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, pide ayuda al gobernador del estado, César Duarte Jaquez, para salir de Chihuahua definitivamente, informa su hija Malú García. Los apoyos consisten en cambiar de adscripción de trabajo –ella es maestra de primaria– y para que su casa, adquirida mediante un crédito del Instituto

del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, le sea permutada a otra ciudad. Durante un acto oficial efectuado en el Centro Cultural Paso del Norte, la luchadora social y su hija le piden a César Duarte hablar en privado. La señora Andrade dice que “no siente que el estado tenga un verdadero compromiso de resolver los homicidios y desapariciones de mujeres y que espera que se le brinde ayuda como ciudadana en peligro”.

En Cuernavaca, una de cada tres personas en Morelos ha sido víctima de algún delito, de acuerdo con la Encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública 2011, elaborada por el INEGI. Pese a la estrategia federal y estatal contra el crimen organizado en la entidad, las cifras sugieren que no ha disminuido la incidencia de ilícitos y que las víctimas recurren poco a las autoridades. Durante 2010 se cometieron en Morelos casi 329 mil delitos –300% más que en 2009–, pero sólo se denunciaron poco más de 40 mil. Morelos fue uno de los primeros estados en sumarse a la depuración de las corporaciones policiacas, regionalizó su operación e impulsa la creación de un mando único estatal. No obstante, el estudio señala que 80% de los morelenses se sienten inseguros y que 260 mil fueron víctimas de algún delito.

En Morelia, el congreso local aprueba la reforma constitucional en materia indígena, la cual reconoce la existencia de las etnias purépecha, nahua, mazahua y otomí, y el derecho a su libre determinación como personas morales, con personalidad jurídica y patrimonio propios, para ejercer derechos y contraer obligaciones. El decreto aprobado señala que las comunidades indígenas tendrán derecho a decidir y ejercer sus formas internas de gobierno, y sus propios sistemas de participación, elección y organización social por medio de diferentes formas de autonomía comunal. Las etnias de Michoacán tienen derecho al acceso a la procuración e impartición de justicia en su propia lengua; al acceso a la protección y conservación de sus tierras, recursos naturales y biodiversidad; al reconocimiento, ejercicio y salvaguarda de sus derechos de propiedad, y a preservar y defender su patrimonio cultural, entre otras prerrogativas. El presidente de la comisión legislativa de asuntos indígenas, Jesús Lucas Ángel, declara que esta reforma es preámbulo de la futura ley indígena, y lo más importante es que la Constitución del estado ya reconoce los derechos de los pueblos indios.

Ante el acuerdo enviado a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria por las secretarías de Medio Ambiente y de Agricultura para la definición de los centros de origen y donde también se presentan los sitios en los que sería viable el cultivo de maíz transgénico, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS) demanda su prohibición, ya que estudios realizados a partir de 1995 han demostrado que el grano tradicional se puede contaminar. En conferencia de prensa, expertos del Programa de Agricultura y Alimentación de la UCCS explicaron que el gobierno mexicano conoce desde hace varios años esta información, por lo que es inexplicable que haya dado permisos para experimentar a varias empresas. El Acuerdo sobre Centros de Origen y Centros de Diversidad Genética del Maíz en México presenta mapas y datos suficientes para aseverar que el territorio nacional debe ser considerado Centro de Origen y Diversificación, por lo que no sólo se debe establecer una moratoria –suspensión temporal–, sino una prohibición total a la liberación de maíz transgénico, señaló Elena Álvarez Buylla, investigadora del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Explica que los sitios excluidos del mapa que determina los centros de origen, y que se encuentran en Chihuahua, Tamaulipas, Sinaloa, Baja California, Durango, Coahuila y Sonora, están cerca de las zonas donde se halla el maíz nativo y podrían ser contaminadas por el flujo de polen de los cultivos transgénicos.

Trabajadores de diferentes dependencias del Gobierno del Distrito Federal y de órganos autónomos

se manifiestan afuera de la Asamblea Legislativa para exigir un presupuesto que garantice un empleo digno para los trabajadores de la administración local. Antonio Vital, representante de la Alianza de Trabajadores de la Salud (ATS), asegura que de las 150 mil personas que laboran en el gobierno capitalino, por lo menos 80 mil tienen un trabajo precario, es decir, no cuentan con todas las prestaciones de ley, porque son contratados mediante diferentes modalidades como de honorarios, eventuales, por comisión, becarios o voluntarios. Destacó que inclusive la mayoría del personal de la CDHDF está contratado como becarios, sin tener estabilidad laboral. Aún más, agrega, se tienen cálculos de los 150 mil trabajadores, alrededor de 120 mil no cuenta con seguridad social completa, como sucede con los policías, que acceden a la atención médica, pero no a otro tipo de prestaciones como el FOVISSSTE.

Miércoles 14

“El gobierno federal atrajo la investigación de los hechos del pasado día 12 en la Autopista del Sol, donde fueron asesinados dos estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero”. Lo anterior es difundido en un boletín conjunto de la PGR y la Segob horas después de que el gobierno de aquella entidad y la Policía Federal se acusaron mutuamente –con base en la difusión de videos– de ser los ejecutores del tiroteo que segó la vida de los jóvenes normalistas Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, así como de la golpiza a otros estudiantes. En el comunicado emitido en la tarde se precisa que el titular de Gobernación, Alejandro Poiré, conversa la mañana de este miércoles con el gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero, para informarle de la atracción de la investigación, sustentada en que los hechos ocurrieron en una carretera federal, y de esta forma esclarecer los sucesos y llevar a los responsables ante la justicia.

Integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) – organización que agrupa a los alumnos de las 16 escuelas normales rurales del país, entre ellas la Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero– marchan del Hemiciclo a Juárez a la Segob. Los normalistas exigen juicio político contra el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, y castigo a los responsables materiales e intelectuales de la represión policiaca del lunes pasado, que dejó dos jóvenes asesinados y varios heridos. Durante la movilización, encabezada por los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, se repudian las acciones policiacas, se demanda a los gobiernos federal y estatales no criminalizar ni reprimir la protesta social y se reclama justicia para los caídos. Se suman a la protesta estudiantes de las universidades Nacional Autónoma de México, Autónoma Metropolitana y Autónoma de la Ciudad de México, y del Instituto Politécnico Nacional, así como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y organizaciones sociales, quienes manifestaron su solidaridad y apoyo a la lucha de la normal de Ayotzinapa.

En Ixtla, Guerrero, para la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el asesinato de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, un hecho de interés nacional e internacional, asegura Jorge Nava, integrante de la comitiva que llega la mañana de este miércoles al plantel ubicado en el municipio de Tixtla. Pese a que dicen que no estaban facultados para dar entrevistas, el representante de la Unidad Jurídica, Omar Gómez, manifiesta que su presencia en la Normal Rural de Ayotzinapa, es por un mandato de observación y uno de fortalecimiento institucional. Jorge Nava explica que documentarán los dos crímenes y darán seguimiento a las agresiones que sufrieron los estudiantes. Fue en los medios de comunicación y por las organizaciones sociales que tuvimos conocimiento de

los hechos. La CNDH, y la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero están dando seguimiento.

Funcionarios de la PGR rinden un informe a representantes del gobierno de Estados Unidos de las inversiones y uso de los recursos que han recibido de la Iniciativa Mérida, informan funcionarios de alto nivel de la dependencia que dirige Marisela Morales Ibáñez. La titular de la PGR y los subprocuradores que han recibido beneficios, como Cuitláhuac Salinas, encargado de Delincuencia Organizada (SIEDO), se reúnen con integrantes de departamentos de Estado y de Justicia de Estados Unidos, y como ocurre en días pasados en el Instituto Nacional de Ciencias Penales los estadounidenses escuchan a los funcionarios mexicanos y analizan el destino que ha tenido el apoyo técnico, de capacitación y equipamiento proporcionado por ese país. De acuerdo con información recopilada, los representantes del gobierno de Barack Obama recibieron información detallada, entre otros asuntos, de los avances en la reducción de casos judiciales pendientes, el resultado de la capacitación a elementos de la Agencia Federal de Investigación sobre inteligencia policial, así como el combate a los delitos de cuello blanco, que fueron algunos de los rubros en los que apoyaron las agencias estadounidenses a la dependencia mexicana.

El Javier Sicilia anticipa que el diputado que levante la mano para pedir que este jueves se discuta la Ley de Seguridad Nacional, o que la apruebe, será señalado como un criminal. En conferencia de prensa, denuncia que existe la intención de discutir la Ley de Seguridad Nacional durante la última sesión de este periodo de sesiones. Sicilia define que el país enfrenta una emergencia nacional terrible, y que a pesar de los muertos por la guerra de Felipe Calderón contra la delincuencia organizada, los legisladores quieren que la sociedad civil les extienda un cheque en blanco. Y antes de que se firme, quieren pasar una ley que abonará profundamente a los muertos y al terror que vive la nación. Ahí están los datos del dolor de este país.

Se realiza una evaluación médica a la activista Norma Andrade, quien fue agredida a balazos el pasado 2 de diciembre en Ciudad Juárez, para ver si ya es viable su traslado al Distrito Federal, donde permanecerá por tiempo indefinido por motivos de seguridad, informa Karla Michel Salas, integrante del equipo jurídico de la organización Nuestras hijas de regreso a casa. La abogada afirma que Andrade se encuentra bien de salud, pero es necesario asegurarse de que está en condiciones lo suficientemente estables para iniciar su traslado a la capital del país. Se espera que pueda viajar y le den luz verde, porque es eso lo que la está deteniendo su traslado. Ella está recuperándose del atentado, y después se tendrán más datos del proceso de rehabilitación, indica.

Familiares del activista David Jiménez Fragoso, desaparecido hace 36 años, presentan ante la CIDH una petición de admisibilidad del caso, luego de agotar todas las instancias legales en el país y comprobar la falta de interés de las autoridades en atender situaciones de desaparición forzada. Acompañados por el PRODH y la Fundación Diego Lucero, exigen que el sistema interamericano de justicia los ayude a determinar el paradero de Jiménez, desaparecido el 7 de mayo de 1975 en Atizapán de Zaragoza por agentes de la extinta Dirección Federal de Seguridad. José Rosario Marroquín, director del PRODH, señala en conferencia de prensa que la investigación de estos delitos le fue encomendada a un organismo totalmente inútil, como la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, lo que obstaculizó el inicio de una verdadera justicia transicional.

La Confederación Nacional Campesina (CNC) y el Movimiento por la Soberanía Alimentaria y Energética anuncian el despliegue de estrategias para afrontar la situación de crisis alimentaria que

se vive en el país, sobre todo ante la agudización de las contingencias climáticas y las afectaciones en cultivos y ganado; en defensa de los apoyos al campo, y la reducción de la dependencia alimentaria. Por separado ambas organizaciones detallan sus planes. La CNC da a conocer la creación del Frente Parlamentario contra el Hambre en México, pues más de 28 millones de mexicanos se encuentran en esta condición. La central campesina priísta destaca que un grupo de legisladores se comprometió a definir un programa de trabajo de carácter transversal para la ejecución de políticas públicas sobre el derecho a la alimentación en México. Por otra parte, líderes del Movimiento por la Soberanía Alimentaria y Energética y los derechos de los Trabajadores, reunidos en el sindicato de telefonistas, anuncian la construcción de una agenda social y adelantan que iniciarán 2012 con movilizaciones en defensa de un presupuesto para los rubros olvidados del gobierno de Felipe Calderón.

En Guadalajara, agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado encuentran los cadáveres de tres personas en el edificio de la Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEG), informa Tomás Coronado Olmos, titular de la dependencia de gobierno. El funcionario explica que familiares denunciaron que cinco jóvenes habían desaparecido tras haber sido citados en el inmueble de la FEG, por lo que se ordenó el cateo por personal de la procuraduría, dice el fiscal.

Según datos de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México (Canacope), en esta temporada de fin de año, por cada negocio formal en el Centro Histórico hay 5.5 comerciantes informales. El presidente de la organización, José Juan Rosas, atribuye dicho desbordamiento del comercio en vía pública al periodo electoral, por ser los vendedores ambulantes caldo de cultivo de los partidos políticos en sus campañas. Al presentar los resultados de la encuesta que efectúa la Canacope cada temporada decembrina a población abierta y a sus agremiados, estima que de los 14 mil millones de pesos que habrá de derrama económica en la ciudad, el sector informal recibirá poco más de mil 400 millones, mientras que el grupo que representa unos 2 mil 400 millones.

Jueves 15

En Tixtla, el Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos Ricardo Flores Magón, de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, anuncia que “se rompe todo tipo de diálogo con el gobierno de Guerrero, encabezado por Ángel Aguirre Rivero. Ahora, advierten, nuestra demanda central será la destitución de Aguirre Rivero y castigo a los autores materiales e intelectuales de la muerte de los compañeros Gabriel Echeverría de Jesús y Alexis Herrera Pino”, ocurridas el lunes pasado. En conferencia de prensa en el plantel, ubicado en el municipio de Tixtla, dirigentes normalistas, que piden el anonimato, demandan juicio político en contra del gobernador, que se le juzgue, y luego que sea desaforado para que se le finquen responsabilidades penales. Además, “exigimos castigo a los autores intelectuales y materiales, por la ejecución extrajudicial de nuestros dos compañeros estudiantes en el desalojo (policíaco) del lunes pasado”.

En Guadalajara, los cuerpos de otras dos personas fueron encontrados en las canchas del edificio de la FEG, con lo que llegan a cinco los cadáveres que corresponderían a otras tantas personas desaparecidas desde el viernes pasado, luego de acudir al inmueble aparentemente citados por integrantes de la organización. Los cuerpos fueron encontrados después de las 17 horas luego de que con el uso de perros adiestrados se reanudó la búsqueda interrumpida la noche del miércoles tras el hallazgo de tres cuerpos que podrían ser de los estudiantes de la preparatoria 8 de la UDG:

Morán Cervantes, Francisco Javier Carrillo García y Juan Pablo Valentín Guerrero; los dos primeros de 17 años y el tercero de 16, todos residentes del municipio de Zapopan. Los cuerpos hallados este día serían del estudiante universitario Francisco Ismael Gómez Saucedo y su padre Armando Gómez, vendedor de churros afuera de la Escuela Normal de Jalisco, aledaña al edificio de la FEG.

El comandante de la Novena Región Militar, Guillermo Moreno Serrano, informa que 24 policías municipales de Tecpan de Galeana, así como cuatro policías ministeriales, fueron detenidos por la mañana de este jueves, para ser interrogados en la delegación de la PGR en Acapulco, por el caso de la desaparición de los dirigentes de la Organización de Campesinos Ecológicos de Petatlán y Coyuca de Catalán, Eva Alarcón Ortiz y Marcial Bautista, ocurrida durante las primeras horas del pasado 7 de diciembre. De acuerdo con los reportes, un centenar de elementos de la PGR, Ejército Mexicano y Policía Federal, implementaron un operativo en la Dirección de Seguridad Municipal de Tecpan de Galeana, ubicado en la región de Costa Grande, donde personal del Ministerio Público requirió la presencia de los 28 elementos, para ser interrogados en Acapulco.

El titular de la SG, Alejandro Poiré Romero, encabeza la ceremonia de reconocimiento de culpabilidad del Estado mexicano por el ataque sexual sufrido en 2002 a manos de efectivos del Ejército mexicano por la indígena meph'aa Valentina Rosendo Cantú, lo que le significó una sentencia en contra de la CIDH. Ante un auditorio repleto, en el Museo de la Memoria y la Tolerancia, el encargado de dirigir la política interna del país le da cumplimiento a uno de los puntos de la citada resolución –que se le dio a conocer al gobierno mexicano desde el 1º de octubre de 2010–, en donde se obliga a las autoridades a admitir su responsabilidad en la falta de atención de la víctima, y ofrecerle una disculpa públicamente. Esta es la primera ocasión en que un titular de la SG acude a una ceremonia de esta naturaleza, ya que en la del caso del luchador social Rosendo Radilla –desaparecido por el Ejército en agosto de 1974–, el pasado 17 de noviembre, asistió el entonces subsecretario de Gobernación Juan Marcos Gutiérrez, en sustitución de José Francisco Blake, y la canciller Patricia Espinosa.

La Comisión de seguimiento de las negociaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), envía una carta a la Segob, en la que señala que después de más de dos años, no puede ni debe retrasarse más la salida a este grave conflicto social, propiciado por el propio gobierno federal. Esta comisión de la cual forman parte Rosario Ibarra, Raúl Vera, Miguel Concha Malo, Gilberto López y Rivas, Enrique González Ruiz y Carlos Fazio, señala en la misiva que postergar una solución sólo puede profundizar el conflicto con los electricistas en resistencia, con las consecuencias siempre agravadas para los miles de trabajadores, sus familias y para la sociedad entera, y significa también el deterioro en la provisión del servicio público de electricidad. En el documento indican que esta representación –integrada por personas comprometidas desde diversos ámbitos de la sociedad con los derechos humanos y civiles– decide dar seguimiento a dichas negociaciones, preocupada por la prolongación del conflicto que afecta a más de 16 mil trabajadores y a miles de jubilados de lo que fuera la empresa pública Luz y Fuerza del Centro.

Integrantes de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe se manifiestan afuera de la Cámara de Diputados en contra de las modificaciones hechas a la iniciativa de la nueva Ley General en Materia de Delitos de Trata de Personas y la Protección y Asistencia a las Víctimas por considerar que obstaculiza la verdadera persecución de los tratantes y, en cambio, culpabiliza a las víctimas. Ahí, llamaron a las comisiones de Derechos Humanos, Justicia y Presupuesto y Cuenta Pública a rechazar dichos cambios, promovidos fundamentalmente por

legisladores de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional. Teresa Ulloa, líder de la agrupación, explicó que el nuevo dictamen elaborado a nombre de la Comisión de Justicia pretende que las víctimas demuestren que fueron engañadas y sometidas.

Sujetos armados secuestraron a la profesora Karina Viviana Castillejos, afiliada a la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), cuando se dirigía a impartir clases a la escuela primaria José Vasconcelos, en el municipio de Loma Bonita, región de la cuenca del Papaloapan, colindante con Veracruz. Según fuentes policiacas, alrededor de las 7:45 hrs, cuando Castillejos acababa de salir de su domicilio, en la calle Saturno, colonia El Sol, fue interceptada por sujetos armados que la obligaron a subir a una camioneta negra sin placas, pero la maestra alcanzó a gritar para alertar a su esposo, Héctor Castillo Ubieta, y a sus vecinos. Minutos después, Castillo Ubieta, también profesor y ex síndico de Loma Bonita, acude a la agencia del Ministerio Público a interponer una denuncia.

En Culiacán, Sinaloa, el gobierno del estado despide sin previo aviso a 35 enfermeras y un camillero del Hospital de la Mujer de Culiacán, luego de que protestaron públicamente en varias ocasiones y el 8 de septiembre interpusieron una demanda laboral contra la Secretaría de Salud estatal por los bajos salarios y prestaciones que perciben. Las inconformes llegan a trabajar este jueves y se enteran del despido. Acompañadas de la abogada Yadira Tadeo Bringas, acuden al despacho del gobernador Mario López Valdez, en la Unidad Administrativa, pero después de seis horas no las recibieron. Personal de la oficina del mandatario informa que éste viajó a la ciudad de México. El gobernador recibió a las trabajadoras hace días y les prometió que no habría represalias por las protestas, entre ellas el plantón que instalaron el 25 de noviembre frente al hospital, recordó Tadeo Bringas.

Un grupo de estudiantes de la UACM toma la sesión del Consejo Universitario en protesta porque dicho órgano no respetó el acuerdo de discutir como primer punto del orden del día la derogación del acuerdo que reforma el periodo de integración –curso propedéutico–; pues, afirman, condicionar su aprobación para acceder al curso básico va contra el proyecto educativo. Alrededor de las 13:15hrs, poco menos de 20 alumnos de distintos planteles interrumpen los trabajos que llevaban más de dos horas realizándose en el campus Casa Libertad, en Iztapalapa, al rodear a los casi 30 consejeros, incluyendo a la rectora, Esther Orozco, con pancartas en las que exigían alto a la violencia institucional y gritando consignas contra el consejo. Esta situación provoca enfrentamientos verbales entre los consejeros afines a la rectora y los inconformes, al grado de que el secretario técnico del consejo, Adalberto Robles Valadez, afirma que estaban secuestrados, mientras que los manifestantes dijeron no sentirse representados por el consejo.

Viernes 16

De octubre de 2010 a septiembre de 2011 aumentó 11% el número de homicidios dolosos en relación con el mismo periodo 2009-2010. Los estados más violentos son Chihuahua, Sinaloa, Durango, Sonora y Oaxaca, que acumulan 10 mil 540 asesinatos de los 22 mil 133 reportados en el periodo más reciente. Según datos que el gobierno federal distribuyó exclusivamente a los gobernadores durante la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrada en Palacio Nacional, de octubre de 2009 a septiembre de 2011 se cometieron 41 mil 833 homicidios dolosos, tipo penal en el cual se encuadran las ejecuciones cometidas por presunta rivalidad entre grupos criminales. En el acta de la 31 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública los mandatarios

estatales recibieron datos de las estadísticas nacionales de los casos de extorsión, robo y secuestro, que de acuerdo con los documentos es la incidencia delictiva que se tomó como base para asumir los compromisos por parte de las entidades federativas para combatir los ilícitos. En relación con los homicidios, considerados delitos de alto impacto por las autoridades, las estadísticas aluden a los casos en que ese ilícito fue doloso. En la información entregada a los gobernadores se señala que de octubre de 2009 a septiembre de 2010 en Chihuahua se cometieron 3 mil 800 homicidios dolosos. En el mismo periodo, de 2010 a 2011, el número de asesinatos disminuyó en esa entidad 12%, al registrarse 3 mil 344 casos. Ese estado aún es el que tiene mayor incidencia en este rubro.

En Chilpancingo, Guerrero, el grito de los normalistas rurales “¡12 de diciembre, no se olvida!” Arranca la marcha de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa y sus compañeros de otras partes del país. En la primera parada, frente al palacio de gobierno, los normalistas estacionan el autobús que apenas a finales de septiembre les entregara el gobernador Ángel Aguirre. Se lo devuelven, con algo de pintura que simula sangre sobre el logotipo del gobierno estatal, las llaves puestas y una manta que dice “Te lo cobraste con las vidas de dos estudiantes”. La marcha de los normalistas rurales es de una disciplina casi militar. Abre una banda de guerra que no para de batir tambores y soplar cornetas mientras sube y baja las calles de la capital de Guerrero, para pasar frente a la residencia oficial del gobernador y arribar al zócalo horas más tarde. Los normalistas se detienen frente a edificios vacíos –el palacio de gobierno, el Congreso–, sin que la policía los moleste. Y retoman su andar en ordenadas filas. Vienen también, aunque en escasos números, organizaciones sociales guerrerenses agrupadas en el Frente de Masas, la versión local de la CNTE, productores de la Costa Grande, opositores a la presa La Parota e incluso algunos de los dirigentes emblemáticos de Atenco. Los sectores más radicales del movimiento social guerrerense, si se quiere, o bien los que no buscan diputaciones ni alcaldías en los comicios del año venidero. En la mira de esas organizaciones está el secretario de Gobierno, Humberto Salgado, a quien muchos responsabilizan del operativo que derivó en el asesinato de los estudiantes.

En Guadalajara, aproximadamente 4 mil integrantes de la UDG marchan en silencio para demandar castigo a los asesinos de cuatro alumnos de la Preparatoria 8 y el padre de uno de ellos, el desmantelamiento de la FEG y la entrega del edificio que ocupa esta organización, donde fueron encontrados los cadáveres. Alrededor de las 17:30 hrs la multitud –conformada por alumnos, académicos, personal administrativo y autoridades– parte de la rectoría general de la UDG hacia palacio de gobierno. La comunidad universitaria guarda un minuto de silencio. Los asistentes portan un moño negro en sus prendas; las pancartas pedían alto a la violencia. Marco Antonio Cortés Guardado, rector de la casa de estudios, dice: “Es un imperativo el desmantelamiento de la FEG para que la vida estudiantil de Jalisco recupere la tranquilidad que se requiere para el quehacer educativo y contribuir a la paz”.

En Ciudad Juárez, Chihuahua miembros de ONG y familiares de mujeres desaparecidas realizan diversas manifestaciones en esta frontera y en la capital del estado para conmemorar el primer aniversario luctuoso de la activista Marisela Escobedo, asesinada hace un año frente al palacio de gobierno de Chihuahua, y exigir justicia y castigo para los responsables. Una de las protestas se realiza en el consulado de México en El Paso, Texas, donde se encuentra solicitando asilo Juan Manuel Frayre Escobedo, hijo de Marisela, quien asegura que mienten funcionarios de la Fiscalía General del Estado porque el hombre que señalan como sospechoso de matar a su madre no es la persona que le disparó. “Héctor Miguel Flores Morán, El Payaso –quien según la dependencia murió en una balacera ocurrida en septiembre–, no es el homicida de mi mamá. No descarto que la pistola calibre 9 milímetros sí esté relacionada con el crimen”, puntualiza.

En Acapulco, los 24 policías municipales de Tecpan de Galeana y cuatro elementos ministeriales que fueron presentados el jueves ante la sede de la PGR en Acapulco, para dar seguimiento a la investigación por la desaparición de los defensores ecologistas Eva Alarcón y Marcial Bautista, en la Costa Grande de Guerrero, regresaron la mañana del viernes a su municipio. Los 28 agentes fueron citados para efectuar un peritaje en sus armas, así como para ser sometidos a distintos cuestionarios sobre sus actividades de la semana anterior, por lo que estuvieron retenidos más de 18 horas en la subdelegación de la PGR en el puerto. Eva Alarcón y Marcial Bautista, de la sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, respectivamente, desaparecieron en las primeras horas del pasado 7 de diciembre, cuando fueron bajados de un autobús por hombres encapuchados y llevados con rumbo desconocido.

En San Miguel de Allende, –ciudad catalogada Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura– modificó el uso de suelo Fomento Ecológico a Alta Densidad (H3) de 205 has de una zona paleontológica, para la construcción de 8 mil casas, informó el activista Arturo Morales Tirado. El proyecto afectará el sitio arqueológico donde desde hace años investigadores de la UNAM realizan estudios, y dañará la imagen visual del Santuario de Atotonilco, Patrimonio Cultural de la Humanidad, denuncia. La mañana de este viernes, la alcaldesa Luz María Núñez Flores, quien ganó el gobierno municipal postulada por la alianza PRI-PRD; el síndico, Claudio Mayer; los regidores Manuel Rosas, Laura González, Martín Salgado, Luz María Ramírez, Jaime Martínez Tapia y Alonso Tomasini, aprueban el cambio de uso de suelo.

En San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, las comunidades de San Miguel y Santa María Chimalapa, pertenecientes al estado de Oaxaca, acuerdan retirar este domingo el bloqueo que mantienen en los accesos al ejido chiapaneco Gustavo Díaz Ordaz desde el pasado 20 de octubre, informa el Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas. En un comunicado, agrega que la acción es una muestra de buena voluntad y de disposición a hacer efectivo el acuerdo de distensión integral y paz social en la porción oriente del territorio comunal de los Chimalapas, planteado en la Segob el pasado 6 de diciembre. Dice que el retiro del bloqueo se efectuará a las 12 hrs del domingo en un acto público y formal con la presencia de las autoridades comunales de San Miguel y Santa María Chimalapa; las asambleas comunales de las Congregaciones de Benito Juárez y San Antonio, y como testigos, funcionarios de la Segob federal y la estatal.

El Consejo Universitario (CU) de la UACM aprueba derogar el decreto que establecía la certificación –dar valor curricular– al periodo de integración –curso propedéutico–, así como los gastos ineludibles del mes de enero y el calendario escolar 2012, luego de que el pasado jueves estudiantes de esa casa de estudios tomaron la plenaria de dicho órgano. Luego de que se suspendió dicha sesión, los consejeros universitarios fueron convocados de urgencia por la Comisión de Organización del órgano rector de la UACM, para reiniciar los trabajos en el plantel Casa Libertad, ubicado en la delegación Iztapalapa, luego de que se acordó que el tema del periodo de integración sería el tercer punto a discutir del orden del día, para evitar nuevas protestas. Sin embargo, eso no impidió que el secretario técnico del CU, Adalberto Robles Valadez, citara a conferencia de prensa para leer un pronunciamiento, firmado por 17 consejeros más, en el que condenaron lo que calificaron de irrupción violenta de 15 estudiantes, pues se crea el precedente de considerar como práctica normal de una institución universitaria la toma de planteles, oficinas u órganos de gobierno. A esto, la Coordinación General Estudiantil respondió que su protesta fue verbal y pacífica, por lo que negaron que alguno de los que participaron en la misma haya estado armado, al tiempo que se pronunciaron en favor del diálogo, la movilización –en todas sus expresiones– y el trabajo

colegiado con la comunidad universitaria hasta no ver resueltas sus demandas.

Sábado 17

Desde ex funcionarios de alto nivel hasta policías de a pie han sido cooptados por agencias estadounidenses, principalmente por la encargada del combate antidrogas y las representaciones de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Altos mandos de la PGR y de las secretarías de Seguridad Pública federal y Gobernación confirman a La Jornada que han detectado que al menos 80 ex servidores públicos de áreas sensibles de inteligencia, investigación y análisis del gobierno mexicano trabajan para las agencias estadounidenses, espionando, recopilando información y dando seguimiento a los temas y casos de su interés. Las fuentes consultadas, las cuales solicitaron el anonimato, ya que han sido parte de los equipos que participaron en reuniones de representantes de México y Estados Unidos en negociaciones de acuerdos como la Iniciativa Mérida y la infiltración de agentes en organizaciones criminales, revelan que no se ha descartado que funcionarios en activo también estén trabajando para los estadounidenses en combinación con sus ex compañeros, lo que ya está siendo investigado en la averiguación previa en la que se indaga si la agencia estadounidense ha lavado dinero de grupos criminales mexicanos en territorio nacional sin conocimiento de las autoridades del país.

“El Programa Oportunidades pasa por alto los derechos de las mujeres indígenas, ya que no toma en cuenta la pertenencia de éstas a un pueblo originario; asimismo refuerza el papel social de las mujeres como responsables del cuidado del hogar y los hijos, lo que impide su empoderamiento y evita la deconstrucción de prácticas patriarcales”, señala el diagnóstico “El Programa Oportunidades y los derechos de las mujeres indígenas de México”, elaborado por la organización Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos en la región mixe de Oaxaca y que contó con la asesoría de Servicios del Pueblo Mixe y la organización canadiense Derechos y Democracia. El estudio, realizado en la comunidad mixe de Jaltepec de Candayoc, Oaxaca, considera que la aplicación de políticas públicas de una manera universal puede provocar discriminación al no tomar en cuenta los elementos culturales y políticos de la realidad indígena. El otorgamiento del dinero de Oportunidades a las mujeres se pretende como una acción afirmativa con enfoque de género; sin embargo, las analistas consideran que esta situación reedita el papel tradicional de las mujeres como cuidadoras del hogar y la crianza de los hijos, al hacerlas responsables también del cumplimiento de las condicionantes para la entrega del apoyo económico por parte de Oportunidades.

Unos 80 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa bloquean durante una hora el cruce de avenida Insurgentes y Paseo de la Reforma en demanda de que el Congreso de Guerrero ordene una investigación para sancionar a los policías responsables del asesinato de dos alumnos de esa escuela, cometido el lunes pasado en la Autopista del Sol, y someta a juicio político al gobernador de la entidad, Ángel Aguirre Rivero. Poco después de las 11 de la mañana los jóvenes comienzan a agruparse para iniciar el bloqueo, frente al Monumento a la Madre, donde denuncian con mantas y consignas el homicidio de Alexis Herrera y Gabriel Echeverría, cuyos responsables no han sido identificados. Los estudiantes permiten el paso intermitente del Metrobús, y aunque hubo roces con automovilistas, no hubo incidentes de gravedad. Con el apoyo de activistas de colectivos de la ciudad de México, los estudiantes reiteran su petición de aumento a la matrícula y el presupuesto de las normales, así como el fortalecimiento de dicho proyecto educativo para evitar su desaparición.

En Ciudad Juárez, para recordar a más de mil muertas de Juárez, asesinadas en los últimos 18 años –entre ellas Marisela Escobedo Ortiz y otras activistas–, es inaugurado un mural en la zona centro, a espaldas del parque Los Periodistas, por organizaciones sociales. En el homenaje a las mujeres que fueron ultimadas de 1993 a la fecha, familiares y activistas exigen justicia por los crímenes: entre ellos los de cinco integrantes de la familia Reyes Salazar, en el Valle de Juárez, y el de Susana Chávez, quien acuñó la frase Ni una más. Los asistentes realizan un festival político cultural y colocan ofrendas florales, fotografías de las desaparecidas y cruces. Con bailes y cantos, unas 60 personas se citan para denunciar lo que llaman el nulo o poco trabajo de las autoridades sobre el esclarecimiento de la muerte de las activistas –en particular el de Marisela Escobedo.

En San Cristóbal de las Casas, los presos de la otra campaña que durante 39 días realizaron una huelga de hambre entre septiembre y noviembre en tres penales de Chiapas, sin conseguir la libertad, salvo dos de ellos, anuncian que siguen insistiendo en esta trinchera de nuestra resistencia en las cárceles, pues se declaran inocentes. La liberación de Alberto Patishtán, en un penal federal en Sinaloa, sigue siendo la demanda mayor del movimiento, que continúa más allá de la protesta de ayuno concluida el pasado 7 de noviembre ante la falta de respuesta del gobierno estatal. El profesor Patishtán sigue sometido a condiciones muy duras de encarcelamiento en Guasave, informan presos de la Voz del Amate, Solidarios de la Voz del Amate y Voces Inocentes desde el penal número 5 de San Cristóbal. En una llamada telefónica, el propio Patishtán denuncia que le han retirado el tratamiento de glaucoma y lo mantienen aislado. No podrá recibir ni un libro antes de seis meses. “Me tienen ignorado completamente”, dice. Uno de sus compañeros, el promotor de salud Pedro López Jiménez, relata su conocimiento de la enfermedad Patishtán Gómez, desde que éste llegó del penal de El Amate al de San Cristóbal en abril de 2009, cuando se empezó a dar cuenta que su ojo derecho estaba perdiendo la visibilidad; entonces lo llevaron al hospital donde permaneció más de cinco meses, y se le diagnosticó glaucoma

El movimiento de los indignados en México realiza este sábado una posada en el campamento que levantaron frente a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), con el propósito de difundir el trabajo que han hecho en dos meses de resistencia y compartir reflexiones y experiencias, así como unir esfuerzos con otros colectivos. En balance, coinciden en que el movimiento ha servido como punto de partida a otras expresiones sociales y de reflexión sobre cómo alcanzar un esquema económico y social más justo, además de que lograron tejer redes con otras organizaciones y movimientos. En cuanto a la generación de propuestas –dicen–, han respondido a los sucesos ocurridos en los últimos dos meses, y el movimiento se ha centrado en tres temas fundamentales: asesinato de activistas y defensores de derechos humanos, la demanda contra el presidente Felipe Calderón ante la Corte Penal Internacional y problemas ambientales. Señalan que al principio las propuestas giraban en torno a esquemas de economía solidaria, pero se fueron dejando de lado porque en México las cosas suceden tan drásticamente que tienes que reaccionar; los temas apremian a ir de manera instantánea hacia otras latitudes en la lucha.

“Inaccesibilidad a los servicios médicos, falta de personal y medicamentos, así como negligencia son la constante en materia de salud en los reclusorios de la ciudad de México”, señala un informe de la CDHDF. De hecho, afirma el documento presentado recientemente, pueden pasar varios meses y hasta años para que un interno pueda tener un diagnóstico certero de su enfermedad, poniéndolo en riesgo de perder un miembro o hasta morir. En cuanto a la disponibilidad de medicinas, la CDHDF detecta que en las cárceles capitalinas existe un mercado informal de estos insumos entre los mismos presos, lo cual, demuestra que existe un abasto discrecional de las medicinas. De acuerdo con el informe, entre las principales enfermedades que padecen los internos

destacan las infecciones respiratorias agudas y gastroenteritis infecciosas, la cuales son provocadas principalmente por la mala nutrición de los reos, el hacinamiento, falta de higiene, agua potable y drenaje al interior de los centros de reclusión.

Domingo 18

Tras el último gasolinazo del año –10 de diciembre– y antes de que entre en vigor el aumento de 2.63 pesos al salario mínimo, se desataron incrementos a los precios de algunos productos de la canasta básica, entre ellos huevo, frijol y jitomate, y cuotas carreteras. En la semana pasada se generalizó en 19 y 20 pesos la venta al menudeo del kilo de huevo blanco en centrales de abasto, pero en algunas de ellas, como las de San Luis Potosí y Acapulco, rebasó 22 y 23 pesos, de acuerdo con un reporte de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria. Los precios al mayoreo del huevo blanco superan en promedio 18.30 pesos por kilo, lo cual implica un alza de entre uno y dos pesos, según la región, comparados con los reportados en noviembre por la Dirección General de Comercio Interior de la Secretaría de Economía (SE), que oscilaban entre 16.24 y 17.09 pesos. Se trata de un repunte de al menos 7 por ciento en menos de un mes, que se suma al incremento de 26% registrado hasta noviembre en relación con igual mes del año pasado reportado por la dirección mencionada. En supermercados y tiendas de autoservicio los cartones de huevo blanco o rojo, de 12 y 18 piezas, se comercializan de 12 a 33.50 pesos, dependiendo de la marca, indican monitoreos de la Procuraduría Federal del Consumidor.

En Chilpancingo, Ángel Aguirre Rivero, gobernador de Guerrero, quiere borrar la imagen de represor que le dejó el violento desalojo de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa el pasado lunes 12. Para ello, propone la creación de una comisión ciudadana que coadyuve a la transparencia y la justicia en el caso. Dice, en entrevista con este diario, que no caerá en la ingenuidad de pensar que la investigación, en manos de la PGR, será ajena a las presiones de estos tiempos electorales, pero asegura que hay suficientes evidencia para que muy pronto se sepa quiénes fueron los responsables de los asesinatos de Gabriel de Jesús y Alexis Herrera. Con la PGR a cargo y la posibilidad de que el gobierno federal administre los resultados de la investigación, ¿cuál sería el papel de esta comisión? De hecho, la procuraduría del estado sigue haciendo la parte que le corresponde. Sería una comisión que pueda garantizar la transparencia de las investigaciones. Figuras como Javier Sicilia, Emilio Álvarez Icaza, Clara Jusidman, Javier Morlett, gente que ha venido trabajando en ese movimiento, que cuenta con gran prestigio y gran autoridad. Y quizá algún destacado, como el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero.

En San Cristóbal de Las Casas, como parte de las acciones efectuadas con motivo del Día Internacional del Migrante, activistas y defensoras de los derechos humanos toman simbólicamente la estación migratoria ubicada en Tapachula para exigir el cese de las agresiones contra centroamericanos. Los manifestantes colocan decenas de cruces fuera de la estación Siglo XXI, una de las más modernas de América Latina. Una activista informa que Mercedes Gómez Mont, delegada del INM, refuerza la seguridad en torno a las oficinas de la estación con policías armados. Añade que ocuparon la estación para protestar por las agresiones de que son víctimas los migrantes por parte del crimen organizado y de las autoridades mexicanas cuando cruzan el país en busca de llegar a Estados Unidos para trabajar.

En San Cristóbal de las Casas, sociedad Civil Las Abejas realizará una marcha de dos días desde esta ciudad hasta Acteal, municipio de Chenalhó, contra la violencia de Estado, por la paz, la

memoria y contra la impunidad. Convocando a los indignados, inconformes y rebeldes, la organización indígena iniciará su caminata en las primeras horas del próximo martes 20, para llegar al campamento - poblado - santuario de Acteal la noche del 21. Allí, el 22 se conmemorará el 14 aniversario de la masacre ocurrida en 1997. Se prevé la participación del ex obispo de San Cristóbal y actual obispo de Saltillo, Raúl Vera López, y el actual titular de la diócesis católica, Felipe Arizmendi Esquivel. Ante la grave situación que vive el país, en respuesta a ella y para sumar acciones, la organización de Las Abejas de Acteal efectuará también una jornada de ayuno y oración. Con la caminata, añaden los tzotziles, queremos reflexionar y manifestarnos en contra de la impunidad que vivimos de norte a sur en nuestro país, que se encuentra con un acelerado proceso de militarización, paramilitarización y descontrol social, con una estrategia ejecutada por parte de Felipe Calderón Hinojosa de guerra declarada contra la criminalidad organizada, cuyas consecuencias han sido, hasta el momento, más de 70 mil víctimas entre asesinados y desaparecidos.

En Acapulco, las hijas de Eva Alarcón Ortiz y Marcial Bautista Valle, integrantes de la OCESPCC, quienes fueron secuestrados el pasado 7 de diciembre, realizan brigadas informativas en distintos puntos de este puerto, donde exigen la presentación con vida de sus padres. En el contexto de la formación del Movimiento de Regeneración Nacional-Jóvenes Estudiantes (Morena-Je), las hijas de los ecologistas demandan al gobernador Ángel Aguirre Rivero celeridad en las indagatorias del caso, y manifiestan que la sociedad guerrerense está preocupada por los constantes hechos violentos en la entidad. Coral Rojas Alarcón, hija de Eva Alarcón, explica que la finalidad de las brigadas informativas es transmitir a la población que no es necesario que secuestren a un hijo o que maten a un familiar para estar heridos y convertirse en víctima de la delincuencia organizada. Enfatiza “queremos decirle a la gente que debemos estar juntos, unidos; Guerrero realmente está pasando por un proceso de delincuencia en el que todos vamos a seguir siendo víctimas, esa es nuestra misión”.

En Cherán, Michoacán los cuatro barrios de la cabecera municipal de este poblado purépecha votan a favor de elegir su ayuntamiento mediante el sistema de usos y costumbres. El procedimiento será supervisado y avalado por el Instituto Electoral de Michoacán. El congreso local definirá la fecha de elección. Después del enfrentamiento entre comuneros de San Francisco Cherán con integrantes de la delincuencia organizada, el 15 de abril, habitantes de esta localidad colocan barricadas en los accesos e instalaron 61 centros de vigilancia en las esquinas. También desconocen a las autoridades municipales, incluida la policía, y anuncian que no habría comicios el 13 de noviembre, cuando en el resto del estado se eligió gobernador, diputados locales y presidentes municipales. El 3 de noviembre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a solicitud de los comuneros, ordenó al Instituto llevar a cabo la consulta para que los purépechas decidieran el sistema de elección de sus autoridades municipales.

En Pachuca, Hidalgo, el ayuntamiento de Zimapán ordena el embargo de los bienes inmuebles de la empresa Sistemas de Desarrollo Sustentable en el confinamiento de residuos tóxicos construido en la comunidad de San Antonio, a 8 km de la cabecera municipal. La empresa se negó a pagar una multa de 10 mil salarios mínimos vigentes en Hidalgo –648 mil pesos–, impuesta el 19 de julio como parte del procedimiento de clausura definitiva del vertedero por operar sin licencia. El abogado Rubén Reyes Moreno deberá cumplir la orden de la tesorería municipal, de acuerdo con el oficio 2011/TMZ/0801, con fecha 14 de diciembre. Mientras, la firma española Abengoa-Befesa, que aportó el capital para el confinamiento, demandó al gobierno mexicano en tribunales internacionales y exige una indemnización de mil 200 millones de pesos.

La falta de acciones que favorezcan la recomposición del tejido social entre los habitantes de la colonia La Malinche, en la delegación Magdalena Contreras, provoca un enfrentamiento verbal entre vecinos, dicen los afectados. Ciudadanos que se han manifestado en favor de la construcción de la supervía poniente se presentan a la asamblea que cada domingo, desde hace más de año y medio efectúan los integrantes del Frente Amplio en un plantón. El enfrentamiento no reportó incidentes mayores. Los primeros demandaban que se permita que personal de la delegación cambie el adoquín del andador Durazno y Rosa Sur, calles aledañas al polígono expropiado para la construcción de la carretera urbana de cuota. Los segundos expusieron que no están en contra de ello, por lo que plantearon su disposición a encontrar una solución. Incluso los integrantes del Frente Amplio ofrecieron el altavoz a quienes, aseguran, son enviados por el gobierno para provocarlos.

Lunes 19

La PGR informa que 12 policías –seis ministeriales y seis estatales– son arraigados por 30 días, dentro del proceso que la dependencia abrió para investigar los hechos del pasado 12 de diciembre en la Autopista del Sol, donde fueron asesinados dos estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero. La PGR da a conocer que una vez analizada la situación jurídica del caso y en estrecha coordinación con las autoridades de Guerrero, un juez estatal concede al fiscal de la Federación esta medida, a partir del 18 de diciembre. Se hace énfasis en que uno de los 12 policías que fueron arraigados fue detenido a solicitud de la PGR, como parte de las indagatorias iniciadas la semana pasada. Sin embargo, no se informa sobre la situación de los 40 policías federales que el viernes pasado rindieron declaración ante la delegación de la dependencia ministerial en Chilpancingo, Guerrero.

El costo de producción del litro de leche llegó a seis pesos, mientras que los industriales lo pagan a cinco pesos, por lo que más de 150 mil pequeños y medianos ganaderos siguen en el filo de la navaja, dice Álvaro González Muñoz, dirigente del Frente Nacional de Productores de Leche. El panorama es poco alentador, pese a que en octubre se logró que Liconsa pagara 60 centavos más por litro de leche a los productores. La paraestatal entrega 5.60 pesos por litro del lácteo a 12 mil 500 ganaderos con la advertencia de que el acuerdo concluye el 31 de diciembre. Lamenta que los legisladores no hayan aprobado un mayor presupuesto a Liconsa y que varios de ellos se hayan desgarrado las vestiduras por el aumento de 50 centavos por litro que impuso la paraestatal, luego de cinco años de mantener el mismo costo al consumidor, mientras que han guardado silencio por el aumento de cuatro pesos que impusieron los industriales en ese mismo periodo.

En los cinco años de la estrategia de combate a la delincuencia organizada, 2 mil 268 personas vinculadas con bandas criminales han muerto en enfrentamientos con el Ejército y 2 mil 180 más han sido detenidas, informa el vocero de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Ricardo Trevilla Trejo. Tres días después de que el Consejo Nacional de Seguridad Pública informa que de octubre de 2009 a septiembre de 2011 se cometieron 41 mil homicidios dolosos –incluidas ejecuciones–, Trevilla Trejo matizó el grado de violencia que existe en el país. Mucho se ha mencionado la estrategia integral de combate al narcotráfico, y desafortunadamente se da un solo indicador, el del número de muertos, afirma en una declaración de prensa en el Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales, en Temamatla, Estado de México.

En Guadalajara, Jalisco, los líderes de la FEG, citados a declarar como testigos sobre el asesinato

de cinco personas –cuatro de ellos estudiantes de la Preparatoria 8 de la Universidad de Guadalajara–, no se han presentado ante las autoridades ministeriales de la PGJE. El fin de semana, la PGJE informa que se habían girado citatorios al presidente de la FEG, Israel Mariscal Quiroz, al candidato a dirigir esa misma organización, David Castorena, además de un sujeto al que sólo se ha identificado como Jorge N. Trasciende que la PGJE abre una nueva línea de investigación para comprobar si Armando Gómez Gallardo, padre de familia de uno de los estudiantes asesinados y quien también apareció muerto, era encargado de cobrar las cuotas para la FEG de ambulantes del área de la Escuela Normal de Jalisco.

En Morelia, el Frente Michoacano de Productores denuncia la desaparición de su dirigente, Manuel García Cuevas, quien fue visto por última vez el sábado 10, cuando salió con su esposa de la casa de ambos, en Nueva Italia, municipio de Múgica. El dirigente planeaba reunirse con integrantes de su organización, la cual informa que no hay indicios de agresión. García Cuevas es fundador de la organización Campesinos del Sur. Con otros 22 líderes regionales fundó el Frente Michoacano de Productores, grupo de organizaciones independientes de las regiones Tierra Caliente y Costa, que gestionan ante autoridades beneficios para comunidades rurales. El hermano del dirigente, Baldomero García, informa que ayer se presentó la denuncia por la desaparición y más de 100 personas participan en la búsqueda.

Martes 20

El Ministerio Público Federal regresa a la Procuraduría General de Justicia de Guerrero parte del expediente iniciado con motivo del asesinato de dos estudiantes de la normal de Ayotzinapa. De acuerdo con fuentes de la PGR, aunque la dependencia federal continuará con los peritajes para tratar de identificar a los autores de los homicidios, la decisión de consignar por esas muertes a alguno de los agentes ministeriales y de seguridad pública que están bajo arraigo será responsabilidad de la procuraduría local. A pesar de que la PGR anuncia la atracción del caso sin señalar reserva alguna en la investigación por violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y por los asesinatos de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, ahora ha dejado en manos de las autoridades locales parte de las indagatorias, y por ello permanecen bajo arraigo 12 policías de la entidad que, según la Secretaría de Seguridad Pública federal, fueron los asesinos de los estudiantes, pero el ex procurador Alberto López Rosas –fue cesado del cargo luego de los acontecimientos en la Autopista del Sol– refiere que los responsables de esos fallecimientos fueron policía federales. Hasta el cierre de esa edición, funcionarios de la PGR señalan que el Ministerio Público Federal no ha emitido ninguna determinación jurídica ni pericial que señale alguna responsabilidad de policías locales o federales en la muerte de los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús. Por su parte el Movimiento de Unidad Social por un Gobierno del Pueblo, la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (Cocyp), Alianza de Tranviarios de México y Jubilados y Pensionados del Sindicato Ferrocarrilero exigen el desafuero y la renuncia del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, por la represión y asesinato de dos estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa. El gobernador debe renunciar al cargo y someterse a la investigación correspondiente para establecer su grado de responsabilidad en los hechos; en caso de que no lo haga, que intervenga el Congreso de la Unión, señalan en conferencia de prensa. También demandan que el Poder Judicial de Guerrero y la Procuraduría General de la República detenga a todos los policías federales, estatales y ministeriales que participaron en la represión y asesinato de los estudiantes. Si Aguirre Rivero no renuncia y tampoco interviene el Congreso de la Unión, habrá una movilización social en Guerrero y diversos

estados del país, advierte José Jacobo Femat, dirigente de la Cocyp.

Habitantes de Santa María Ostula, Michoacán, exigen la presentación con vida de los comuneros desaparecidos Francisco de Asís Manuel, Javier Martínez Robles, Gerardo Vera Orcino y el menor de edad Enrique Domínguez Macías, así como castigo a los responsables de los secuestros y asesinatos de integrantes de esta comunidad indígena. Señalan que las autoridades de los tres niveles de gobierno han sido por lo menos omisas en garantizar la seguridad de los pobladores, pues a la fecha 28 personas han muerto, además de las que están desaparecidas. El gobierno ni siquiera ha podido cumplir con las medidas cautelares dictadas por la CIDH, señalan cientos de miembros de Santa María Ostula, localidad que hace unos días sufrió otra pérdida: su dirigente, José Trinidad de la Cruz fue secuestrado y asesinado, sin que a la fecha se haya arrestado a los responsables, a pesar de que testigos ya los han identificado. En un comunicado dirigido a la sociedad civil nacional e internacional resaltaron que, por su ubicación geográfica privilegiada, la comunidad nahua es objeto del asedio de intereses económicos por el potencial turístico, minero y de explotación de recursos naturales.

En Chilpancingo, Guerrero, el encargado de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, Humberto Calvo Memije, confirma que al menos 17 personas fueron levantadas el domingo pasado por sujetos fuertemente armados y se está peinando la entidad en su busca. Los desaparecidos son: Moisés Soto Villa; su esposa, Lucía Flores Morales; y sus hijos Diego, de 12 años; Moisés, de dos, y una niña de tres. Asimismo, Emiliano Salto Peñaloza, su esposa Rocío Orozco Torres, y sus hijos Carlos, Elena y un pequeño de 10. Los demás son Juvenal Salto Peñaloza, su esposa, y sus hijos Tomás, Otoniel, Hugo, Eusebio y Minerva, de 20, 18, 17, 11 y ocho años de edad, respectivamente. El domingo pasado se denunció que sujetos fuertemente armados llegaron al poblado Cerro Verde, municipio de Técpan de Galeana, en la parte alta de la sierra, y se llevaron a las 17 personas que habitaban en cuatro viviendas.

En Chilpancingo, Guerrero, el Congreso del estado aprueba la propuesta del presidente de la Comisión de Gobierno, el perredista Faustino Soto Ramos, para conformar la comisión de la verdad que investigará la desaparición forzada de más de 600 ciudadanos durante el periodo conocido como guerra sucia en Guerrero (1969-1979), pero excluye las masacres de Aguas Blancas (1995) y El Charco (1997). Los diputados priístas, encabezados por Héctor Vicario Castrejón –a quien se acusa de haber sobrevolado, en compañía del general Mario Arturo Acosta Chaparro, el vado de Aguas Blancas, donde fueron asesinados 17 integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur– abandonan la sesión. La comisión quedará integrada por los ex rectores de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) Arquímedes Morales Carranza y José Enrique González Ruiz; por el ex dirigente estudiantil de la UAG y ex militante de las Fuerzas Armadas de Liberación, Nicomedes Fuentes, así como por la abogada Pilar Noriega García y Carmen Herrera García.

La cifra sobre delincuentes muertos dada a conocer el lunes por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) muestra la inconsistencia del gobierno federal para manejar datos verídicos que informen sobre la realidad del país, manifestó René Jiménez Ornelas, coordinador de la Unidad de Análisis sobre Violencia Social del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Subraya que matizar los números por la estrategia contra el crimen organizado limita la transparencia que se debe a la ciudadanía. Inclusive, recuerda que la UNAM –en su propuesta en materia de seguridad, entregada hace unos meses a autoridades de los tres órdenes de gobierno– señala la necesidad de contar con un registro de víctimas. El discurso de las autoridades federales es ocultar y desaparecer datos, pero la realidad dice otra cosa. Es un gran error minimizar las muertes y olvidar a

desaparecidos, agredidos y víctimas indirectas. Sólo reconociendo los números totales se podrán comenzar tácticas para transformar la crisis de violencia que enfrentamos.

La PGR informa que atrajo la investigación del asesinato de Nepomuceno Moreno, ejecutado días después de reclamar por la desaparición de su hijo, ocurrida el primero de julio de 2010. Nepomuceno Moreno Núñez formaba parte del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y durante las charlas de sus integrantes con el presidente Felipe Calderón le entregó a éste el expediente sobre la desaparición de su hijo. Moreno Núñez fue asesinado en noviembre pasado en Hermosillo, Sonora. La PGR informó que investigará el asesinato y para ello abrió la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIS/ 287/2011.

Coral Rojas Alarcón y Victoria Bautista Bueno, en conferencia de prensa, reiteran su llamado a quienes tienen desaparecidos a Marcial Bautista Valle y Eva Alarcón Ortiz, presidente y coordinadora de la OCESPCC, en el estado de Guerrero. “Hacemos un llamado a los secuestradores, estamos dispuestos a negociar todo; queremos que nos regresen con vida a nuestros padres que ya tienen 13 días desaparecidos” solicitan Coral Rojas, hija de Eva; Victoria Bautista, hija de Marcial Bautista, y Pedro Rojas Félix, esposo de Eva, insisten en su llamado “Sabemos que Eva y Marcial están vivos, si estuvieran muertos ya los habrían encontrado. Están vivos y queremos que nos digan qué quieren. Queremos saber cómo están, cuál su estado de salud”. Los familiares están acompañados por el coordinador de los diputados del PRD, Armando Ríos Piter, quien es representante por el tercer distrito en la Costa Grande de Guerrero, quien informa “He solicitado una reunión con el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré. El día del secuestro me comuniqué con él, he tenido contacto y le he solicitado que las secretarías de Gobernación, Marina, Defensa, Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional que crucen información de inteligencia para saber qué pasó. Los conozco, son personas trabajadoras, he convivido con ellos, por lo que he urgido al gobierno federal y estatal a que agilicen las investigaciones”.

En Cuernavaca, la Comisión de Derechos Humanos de Morelos emite la recomendación 224/2011-6 al edil de Cuernavaca, al secretario de protección y auxilio ciudadano del ayuntamiento, al titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado y al presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para pedir que se investigue y sancione el asesinato del estudiante de 16 años Carlos Esteva a manos de un escolta de director de la policía municipal, Mario Ayón Rodríguez. Al cumplirse dos meses del homicidio, la comisión responsabilizó de la muerte de Esteva Lazos al policía Rubén Domínguez Mejía, quien además incurrió en prestación indebida del servicio público y abuso de poder. No obstante, se encuentra libre bajo caución. La recomendación puso en evidencia al policía, quien alegó que su arma de cargo se disparó de manera accidental. Además la comisión señala que el policía se retiró en vez de ayudar al joven herido, según el informe proporcionado por la Procuraduría General de Justicia del Estado, lo que configura el ilícito de prestación indebida del servicio público y violó el derecho del menor a la vida, argumenta la recomendación.

En Oaxaca, elementos de la Agencia Estatal de Investigación aprehenden a Miguel Ángel Velasco Álvarez, uno de los fundadores del municipio autónomo de San Juan Copala y miembro de la dirigencia del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui-Independiente (MULT-I), por su presunta responsabilidad en la desaparición de las hermanas Daniela y Virginia Ortiz, ocurrida en 2007. Según fuentes policíacas, el detenido, profesor jubilado de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, fue detenido alrededor de las 21hrs en inmediaciones del campamento de desplazados del municipio autónomo de San Juan Copala, en los portales del

palacio de gobierno. Un hijo de Miguel Ángel Velasco, Moctezuma Velasco Allende, miembro también del MULT-I, fue asesinado a balazos en Santiago Juxtlahuac, en 2008. Mujeres del campamento de desplazados efectúan un mitin frente al palacio de gobierno para protestar por la detención de su dirigente y advierten que se movilizarán hasta lograr su excarcelación. A Velasco Álvarez se le acusa –según el expediente 70/2007– de haber participado en la desaparición de las hermanas Ortiz, integrantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT). La CIDH otorga medidas cautelares al detenido y a otros 134 indígenas de San Juan Copala, ante las constantes agresiones de pistoleros de la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui y presuntamente del MULT.

En Morelia, Michoacán el Congreso local propone la integración de un gobierno provisional en la comunidad de Cherán mientras se realiza la elección de autoridades municipales por sistema de usos y costumbres, luego de recibir del Instituto Electoral de Michoacán los resultados de la consulta ciudadana realizada el domingo pasado, cuando casi 5 mil pobladores votaron a favor de elegir autoridades según la modalidad referida. Dirigentes de la comunidad purépecha manifiestan su desacuerdo, pues bastaría una semana para que elijan sus representantes de acuerdo con las normas étnicas, lo que evitaría alargar un proceso que mandató el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Aseguran que pueden realizar la designación antes del primero de enero, fecha en que deberán tomar posesión todos los ayuntamientos de la entidad. El pueblo de Cherán se ha mantenido aislado desde el 15 de abril, cuando enfrentó a la delincuencia organizada. Luego desconocieron a las autoridades municipales y decidieron no participar en los comicios del pasado 13 de noviembre.

Una cuarta parte de los maestros en la educación media superior cuenta con un empleo adicional fuera del ámbito educativo y tres de cada cinco docentes en la enseñanza técnica y uno de cada tres de los que laboran en bachilleratos privados tienen un contrato por honorarios, interino o temporal, de acuerdo con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). En un análisis sobre la situación laboral de los mentores en este nivel de enseñanza, el organismo establece que los educadores que se encuentran en una situación mayor de desventaja son quienes laboran en las preparatorias privadas. “Estos últimos tienen menos oportunidades de acceder a un contrato de base, lo cual permite suponer que es en este tipo de instituciones donde se genera una mayor rotación de personal docente”, apunta.

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emite tres recomendaciones por actos de tortura cometidos por elementos de la Procuraduría General de Justicia y la policía capitalinas en agravio de ocho personas, entre ellas Gabriel Valdez Larqué, acusado del homicidio del académico francés Christopher Augur, liberado por no tener pruebas. En la recomendación 12/ 2011, la CDHDF acredita que antes de llevarlos ante el MP, policías de investigación retuvieron ocho horas a dos jóvenes, a quienes golpearon, desnudaron, amarraron a una tabla, sumergieron en una cisterna con agua, obligaron a beber detergente y propinaron toques eléctricos en los pies para que se declararan culpables de un asesinato y un robo. Una situación similar sufrió Valdez Larqué, quien, según la recomendación 11/2011, fue amenazado con una pistola en la cabeza y le colocaron una bolsa de plástico en la cara. Mientras la 10/2011 trata sobre abusos que sufrieron cinco personas acusadas de distintos delitos.

Miércoles 21

La minuta de la última reunión que sostuvieron las autoridades federales y del estado de Michoacán con los líderes comunitarios de Ostula para intentar frenar la acción criminal de los grupos armados que asuelan la región costera, el pasado 28 de noviembre en Morelia, lleva al calce las firmas vacilantes de Trinidad de la Cruz Crisóstomo y Santos Leyva, septuagenarios líderes del movimiento indígena nahua que por décadas mantuvieron vivo el anhelo de recuperar los territorios que les habían sido despojados en las riberas del municipio de Aquila. Santos Leyva fue presidente de bienes comunales. Su hijo, Pedro Leyva, destacó en el liderazgo en años recientes y había llevado la causa a otros espacios de resistencia, como el Congreso Nacional Indígena y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. El 6 de octubre fue asesinado. Resultó la víctima número 27 del implacable proceso de exterminio que padece ese pueblo que había resuelto, tres años antes, fundar un nuevo centro poblacional, al que bautizaron Xayacalan, derivado de su danza ritual de los xayakates. Santos Leyva, ya mayor, con la vista cansada y una sucesión de duelos en el corazón, es el único que queda vivo de toda una generación de autoridades comunitarias que han caído una tras otra. El último en ser asesinado fue Trinidad de la Cruz, firmante de la minuta. Tenía 73 años. Había sobresalido por su activismo en favor de las guardias comunales que se integraron, siguiendo el modelo de las policías comunitarias de San Luis Acatlán. Fue secuestrado, torturado y muerto apenas ocho días de la reunión referida. Él es el número 28.

En San Cristóbal de las Casas, la conmemoración del decimocuarto aniversario de la masacre de Acteal, convocada por la Sociedad Civil Las Abejas, lleva dos de los tres días programados en Yabteclum, municipio de Chenalhó, donde las cinco zonas de la organización tzotzil inician jornadas de ayuno y oración. Las familias de Las Abejas reciben a la caminata contra la violencia de Estado, por la paz, la memoria y contra la impunidad, que parte de San Cristóbal, unos ratos a pie y otros rodando en carros, al modo de las antorchas guadalupanas. En tanto, en Acteal se congregan desde el martes grupos de indígenas católicos de Simojovel, Chenalhó, Pantelhó y Mitontic. Como cada año en estas fechas, y cada día 22 de todos los meses de los pasados catorce años, Las Abejas recuerdan a sus 45 muertos de 1997 y siguen demandando justicia y respeto por parte de las autoridades, así como el castigo a los autores materiales e intelectuales de la masacre.

De acuerdo con información extraoficial del gobierno de Guerrero, que trascendió en reuniones con familiares de Eva Alarcón y Marcial Bautista –secuestrados el pasado 7 de diciembre, cuando se dirigían en autobús de Tecpan a Chilpancingo–, hay buenas noticias de que ambos estarían vivos, aunque no se ha dicho en qué se basa la versión, afirma Francisco Saucedo, asesor de la OCESPCC. Este dato parece que sale del gobierno del estado, en las reuniones con Victoria y Coral, las hijas de ellos, donde informan que hay buenas noticias aunque no dicen por qué, porque si lo hacen pueden causar un problema. El asunto es que están buscando a un policía ministerial de Tecpan de Galeana, quien parece ser la clave de esto, indica Saucedo a La Jornada. También trasciende que como parte de las investigaciones las autoridades de Guerrero han detenido a 17 personas, incluso a familias enteras, para saber si conocían de las actividades de Bautista y Alarcón.

En Veracruz, el gobernador Javier Duarte de Ochoa desaparece la policía Veracruz -Boca del Río mediante un decreto publicado en la Gaceta Oficial del Estado. Esta medida forma parte del operativo de combate al crimen organizado Veracruz seguro y de los acuerdos firmados entre la administración estatal y el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), indica el mandatario priísta, quien agrega que los 900 efectivos y 146 empleados administrativos de la extinta policía serán liquidados conforme a la ley. Duarte de Ochoa anuncia que su gobierno proporcionará recursos a la Marina para las actividades policiacas de los militares, aunque aclara que éstas sólo durarán mientras se integra una corporación con elementos confiables y calificados.

Jueves 22

El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI) revoca la declaratoria de inexistencia hecha por la PGR sobre el total de fosas clandestinas encontradas en el país y el número de cuerpos exhumados de éstas, de 2006 a mayo de 2011, y le ordena buscar y entregar la información estadística sobre el tema. En la resolución del recurso 3634/11, la PGR revela que sólo cuenta con datos relativos a los restos exhumados de dichas fosas entre 2010 y 2011, y los que en esos años han sido reconocidos oficialmente por familiares. Indica que en 2010 fueron exhumados 72 cadáveres, de los cuales se entregaron 14 por vía diplomática, pero no se les practicaron pruebas de ADN. Los otros 58 fueron identificados, y de ellos, 44 se entregaron a sus familiares, mientras los 14 restantes se encuentran en proceso de identificación. Respecto a 2011, informa que fueron 120, pero sólo en 22 casos se emitieron los dictámenes periciales. Del total de pruebas de identificación de ADN –realizadas por peritos de la PGR–, informa que en 2010 realizó 474 estudios, y de 2011 sólo dio datos de enero a mayo, periodo en que hizo mil 156.

En Acapulco, autoridades estatales informan que 17 integrantes de unas tres familias de la comunidad de Cerro Verde, municipio de Tecpan de Galeana, quienes fueron reportados como desaparecidos el pasado 11 de diciembre, fueron encontrados en la comunidad de El Porvenir, municipio de Petatlán, en la sierra de la Costa Grande de Guerrero, y posteriormente trasladados a Zihuatanejo para rendir su declaración. La versión que tenemos es que salieron de sus hogares para esconderse por temor, indica una fuente castrense consultada, por lo que descartó que se tratara de un secuestro. La noticia fue anunciada por el vocero del gobierno de la entidad, Arturo Martínez Núñez, quien en compañía del encargado de Despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, César de los Santos Mendoza, explica que las 17 personas fueron rescatadas en la sierra del municipio de Petatlán. Agrega que los afectados rendirían su declaración ante la PGR para dar seguimiento a la averiguación previa AZUE/01/1145/2011, iniciada por Ignacio Salto Villa, secretario de la organización Frente Libre Hermenegildo Galeana, quien el pasado lunes denuncia que los desaparecidos fueron privados de su libertad el 11 de diciembre por hombres armados con rifles de grueso calibre.

La disfuncionalidad, apatía y falta de compromiso con las víctimas que muestra la mayoría de las comisiones estatales de derechos humanos en el país puede terminar convirtiéndolas no sólo en elefantes blancos, sino también en cómplices de abusos, advierten activistas de organizaciones independientes, a propósito del informe dado a conocer el miércoles pasado sobre este tema por la Academia Mexicana de Derechos Humanos. Jorge Fernández, encargado del área de defensa integral del colectivo Indignación –con sede en la comunidad de Chablekal, Yucatán–, señala en entrevista con La Jornada que la comisión de derechos humanos de la entidad se ha caracterizado por no hacer labor de confrontación con las autoridades, ni documentan agravios contra la ciudadanía, como le correspondería hacer. “Hemos denunciado casos de tortura, pero ellos los recatalogan. Además, sus recomendaciones son totalmente vacuas, no exigen medidas de reparación del daño, ni castigo a los responsables ni garantías de no repetición. Cuando llegan a emitir alguna, es luego de uno o dos años de que ocurrió una violación a las garantías individuales, y para entonces ya es irreparable”, lamenta.

Integrantes del MPJD realizan una manifestación frente a la sede del gobierno de Chiapas en el Distrito Federal, para repudiar que después de 14 años de la masacre de Acteal, no se ha castigado a los responsables materiales ni intelectuales de dicho crimen. Con pancartas, cruces de madera teñidas de rojo y máscaras de cartón en forma de calaveras, los activistas anuncian que apoyan la

demanda que actualmente enfrenta en Estados Unidos el ex presidente Ernesto Zedillo, a quien señalan como uno de los principales responsables de la matanza. Luego de entregar un documento a funcionarios de la representación de Chiapas, Jorge González de León, uno de los organizadores del acto –realizado al mismo tiempo que se llevaba a cabo una ceremonia luctuosa en Acteal–, lamenta que el asesinato de 49 hombres, mujeres y niños a manos de grupos paramilitares siga siendo un crimen impune.

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados ofrece dar entrada y analizar la solicitud de juicio político que presenten los normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, en contra del gobernador Ángel Aguirre Rivero. El compromiso se da en una reunión entre diputados de PRI y PRD con un grupo de al menos 30 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. También, pese a que el gasto federal del próximo año ya está aprobado, les ofrecieron analizar la situación de las escuelas normales del país, para garantizar la suficiencia presupuestal que asegure su buen funcionamiento. De acuerdo con el acta de la reunión, distribuida por el grupo plural de diputados que dará seguimiento al caso, los estudiantes presentaron un amplio panorama sobre la situación que enfrenta la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, destacando la ausencia de diálogo por parte del gobierno de Guerrero. Esa falta de negociación, se señala en el documento, desembocó en los lamentables hechos del 12 de diciembre, donde fueron privados de la vida arbitrariamente dos estudiantes, cometándose diversas violaciones graves a los derechos humanos.

Viernes 23

El presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, citará a comparecer el próximo lunes al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, para que aclare la participación de las fuerzas de seguridad en los hechos en que dos estudiantes normalistas fueron asesinados el pasado 12 de diciembre, cuando realizaban una protesta en la Autopista del Sol, a la altura de Chilpancingo. Luego de reunirse con un grupo de alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, afirma que, en por las nuevas atribuciones que se le confirieron luego de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, el organismo a su cargo iniciará una investigación sobre el homicidio de Alexis Herrera y Gabriel Echeverría, supuestamente abatidos por policías ministeriales. La pesquisa –a cargo del primer visitador general de la CNDH, Luis García López-Guerrero–, tratará sobre el asesinato de dos jóvenes además de la aprehensión de 24, 15 de los cuales habrían sido torturados, e incluirá apoyo psicológico para las víctimas y sus familiares.

En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, un grupo de campesinos indígenas encarcelados en los penales de Chiapas, que se definen como presos políticos, solicitan en la víspera de la Navidad al gobernador Juan Sabines Guerrero, que intervenga para obtener su libertad incondicional. “Cuando hombres y mujeres con sus familias están conviviendo alegremente festejando la Noche Buena y la Navidad, recibiendo el amor, el calor y el abrazo del padre de la familia, nosotros, por el régimen del mal sistema que vivimos, nos han separado de nuestras familias con estos encarcelamientos injustos”, señala en un comunicado enviado a la opinión pública la agrupación La Voz del Amate que aglutina a los indígenas. Los presos, que son adherentes al movimiento del EZLN, afirman que “la fabricación de delitos nos ha ocasionado mucho daño, prueba de ello es que esta Navidad en vez de festejar en armonía con nuestras esposas, hijos e hijas, sólo la pasamos con tristeza, misma que se ha convertido en coraje”.

En San Cristóbal de las Casas, las Abejas denuncian que “siguen las amenazas en contra nuestra,

porque ya están aquí los paramilitares paseando libres, gozando de sus regalos que les otorgó Juan Sabines Guerrero. A 14 años de la masacre de Acteal no ha habido tranquilidad en nuestras familias; al contrario, los paramilitares que quemaron nuestras casas y masacraron a nuestros papás, hermanos, hermanas y hermanitos, quieren volver a desplazarnos y masacrarnos”. Mencionaron dos casos recientes de hostigamiento. Hace menos de dos semanas en la colonia Miguel Utrilla Los Chorros, cuna de los paramilitares, un compañero suyo fue amenazado por un paramilitar, que le advirtió “Si siguen denunciando a nuestros familiares presos por Acteal, vamos a ver si no huyen otra vez como pasó en 1997”. Otro caso delicado son los cortes de luz que sufren miembros de la organización. El acuerdo de Las Abejas es resistencia al pago de la luz, pues el gobierno federal debe mucha justicia. En la comunidad de Javalton, en resistencia, los priistas amenazan a sus compañeros y realizan cortes de luz y robo de cable. “Nuestra mesa directiva y el juez han intervenido como es nuestra costumbre para buscar arreglo. Sin embargo, el agente rural, el juez municipal y el presidente municipal no han hecho caso”. La actitud de autoridades oficiales es hacer caso omiso como sucedió en Acteal. El agente rural amenaza a Las Abejas y les reclama que hayan señalado a los autores materiales de la masacre. En estas circunstancias el riesgo es que puedan darse agresiones en cualquier momento. También que la gente se desplace porque no hay respeto ni seguridad.

En Villahermosa, Tabasco, en un año –diciembre de 2010 a diciembre de 2011– la deuda de los usuarios tabasqueños que se mantienen en resistencia civil contra los altos cobros de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pasó de 2 mil 275 millones de pesos a 3 mil 800 millones de pesos; es decir, un aumento de 67%. En el mismo periodo, el número de personas en huelga de pagos se incrementó de 350 mil a más de 400 mil. Se estima que la cifra de ciudadanos que dejan de pagar seguirá creciendo a causa de los abusos arbitrarios en los recibos de la paraestatal que hacen impagable el servicio de energía eléctrica, afirmaron lugareños afectados. Las protestas contra la CFE, que se iniciaron en 1995, a convocatoria del PRD, se han generalizado y alcanza a los 17 municipios del estado, donde las acciones de rehusarse a pagar son secundadas por militantes del PRI, ciudadanos sin partido y empresarios.

Domingo 25

En Oaxaca, Rafael Vicente Rodríguez Enríquez, secretario general del Frente Amplio de Comunidades Marginadas del Estado de Oaxaca (FACMEO), es asesinado a tiros por desconocidos en el municipio conurbado de Santa Lucía del Camino, el 24 de diciembre. El líder, de 46 años, fue atacado alrededor de las 3:30 hrs cuando esperaba a sus familiares cerca de las oficinas de esa organización, tras asistir a la fiesta de 15 años de su sobrina. Según fuentes policiacas, el profesor – quien participaba en el movimiento magisterial y popular aglutinado en la APPO– fue atacado dentro de su auto en la esquina de las calles Río Chiquito y Sauces, colonia Bosque del Sur, cuando esperaba a su hermano y a su cuñada, quienes guardaban en el FACMEO la comida sobrante del festejo. Al oír las detonaciones, los familiares salieron y encontraron a Rodríguez Enríquez sangrando en el piso. Lo llevaron a una clínica de la ciudad, pero no sobrevivió. Profesores de la sección 22 del SNTE y algunos simpatizantes de la APPO rindieron homenaje de cuerpo presente a Rodríguez Enríquez, quien fue secretario de organización de la sección entre 1995 y 1998.

Lunes 26

En Chilpancingo, indígenas amuzgos de la comunidad El Carmen, municipio de Xochistlahuaca, a unos 60kms de Ometepe, en la Costa Chica de Guerrero, denuncian que soldados del 48 batallón de infantería incursionaron en ese poblado, donde saquearon, golpearon y torturaron a lugareños – entre ellos un menor–, destruyeron lo que encontraron a su paso y se llevaron detenido a Luis Maceda Salazar. El comisario de la localidad, Ángel Maceda Navarrete, relata que unos 50 soldados llegaron la madrugada del 21 de diciembre. Golpearon a ciudadanos, saquearon las casas y exigían que les dijeran dónde tenían las armas escondidas. Narró que los militares catearon varias viviendas y que a Lucía Salazar Ramírez le robaron 52 mil pesos y torturaron a uno de sus hijos, de 13 años. Le colocaron una bolsa de plástico en la cabeza, lo metieron en una pileta de agua y le preguntaban dónde estaban las armas. Maceda Navarrete asegura que los uniformados se llevaron a Maceda Salazar, de 24 años. “Lo tienen recluido en Acapulco y no sólo torturaron a uno de sus hermanos –el adolescente mencionado–, sino también amenazaron a su mamá con armas. No han querido regresarlo. Su familia lo extraña y no queremos que le hagan daño, manifiesta el comisario.

En Tuxtla Gutiérrez, el Ejército Mexicano traslada a Saltillo, Coahuila, a 600 soldados integrantes del 15 Regimiento de Caballería Motorizada que mantiene en su base del municipio chiapaneco de Comitán, en la frontera con Guatemala, para que se integren al Operativo Noreste, como parte del combate contra el crimen organizado, informa el comandante de la séptima Región Militar, Cuauhtémoc Antúnez Pérez. Los elementos castrenses, entre jefes, oficiales y tropa se desplazan en 90 vehículos, en su mayoría camionetas Hummer, sobre la autopista Tuxtla Gutiérrez - Las Choapas, en donde los despiden compañeros y familiares. Este es el quinto viaje que realiza el personal de fuerzas especiales acantonados en Chiapas, entre 2010 y 2011. Van a cumplir tareas de seguridad pública, en apoyo a los estados que enfrentan el fenómeno de la delincuencia organizada, comentó el comandante. Esta es la quinta ocasión que personal castrense del 15 Regimiento de Caballería Motorizada se traslada al norte del país. En mayo pasado retornaron de los estados de Tamaulipas y Nuevo León, donde estuvieron por espacio de dos meses en refuerzo de la Operación Noreste, sin registrar ninguna baja en el desempeño de su trabajo.

Ángel Aguirre Rivero, gobernador de Guerrero, comparece ante el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, para manifestar lo que a su derecho convenga con relación a la queja que el pasado viernes presentaron estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, en contra del mandatario estatal. En la reunión se le hizo saber el contenido la queja y se le indica que se investigan violaciones graves de derechos humanos. Las violaciones graves, se le precisa, son la privación de la vida de dos estudiantes de la normal el pasado 12 de diciembre; la detención de 24 personas y los posibles actos de tortura y tratos crueles de al menos 15 personas que también fueron detenidas en el momento y en el lugar de los hechos. La comparecencia, que dura 45 minutos, se le informa a Aguirre Rivero que la CNDH le ha formulado una serie de informes y medidas cautelares que fueron contestadas a destiempo, informa posteriormente en conferencia de prensa que, en respuesta, el gobernador “se dijo un tanto extrañado respecto a que hubiera llegado tarde la respuesta –respecto a las medidas cautelares que se le solicitaron”.

Las 17 personas originarias de la comunidad de Cerro Verde, municipio de Tecpan de Galeana, Guerrero, que estuvieron desaparecidas entre el 11 y el 22 de diciembre manifiestan que no quieren volver a su pueblo natal, pues temen ser atacados por talamontes por ser defensores de los bosques, indicó el vocero del gobierno estatal, Arturo Martínez Núñez. El grupo fue encontrado el 22 de diciembre en la comunidad El Porvenir, municipio de Petatlán, en la sierra de la Costa Grande,

Guerrero, tras varios días de búsqueda. En conferencia de prensa, Martínez Núñez señala “Estamos esperando a que la PGR nos diga que la información recabada está completa y que las evaluaciones médicas concluyeron, aunque no es tan fácil que declaren porque nueve son menores de edad. Indica que las 17 personas se encuentran en Zihuatanejo y los gastos de hospedaje y alimentación corren por cuenta del gobierno del estado”. En su momento hubo dos versiones sobre la desaparición de las 17 personas. Una indicaba que los pobladores huyeron en busca de refugio, por temor a un ataque. La otra surge luego que Ignacio Salto Villa, dirigente del Frente Libre Hermenegildo Galeana y familiar de varios de los afectados, presenta una denuncia por el presunto secuestro de sus consanguíneos a manos de un grupo armado.

En Oaxaca, las comunidades chinantecas Santa Úrsula y Paso Canoa, en el municipio de Tuxtepec, y Cerro de Oro, en el municipio de San Lucas Ojitlán, en la cuenca del Papaloapan, rechazan que la presa Cerro de Oro se convierta en hidroeléctrica, así como el proyecto de las empresas Comexhidro, Electricidad Oriente y Conduit Capital Partners, por no informar sobre las posibles repercusiones de la obra. Ana María García Arreola, coordinadora de derechos indígenas de la organización Educa, dice que el 30 de noviembre de 2010 se presentó una queja ante la Corporación por la Inversión Privada en el Exterior, agencia del gobierno estadounidense que es la principal financiadora del proyecto.

Martes 27

Del 19 al 26 de diciembre, efectivos de la Sedena han abatido a 53 presuntos delincuentes, y en lo que va del mandato del presidente Felipe Calderón han muerto 2 mil 321, al responder a agresiones armadas, de acuerdo con información difundida por la dependencia que encabeza el general Guillermo Galván Galván, en la cual se asegura que se han girado instrucciones y directivas precisas a los mandos territoriales para que el desempeño de las tropas sea con estricto apego a derecho, sin tolerar infracción alguna a los derechos fundamentales y que quienes transgreden las leyes respondan ante el justo arbitrio de la ley. Días después de que la CNDH difundiera que la Sedena es la institución con el mayor número de denuncias por presuntas violaciones a las garantías individuales, la Sedena asegura que las tropas han cumplido dichas instrucciones, aun en los casos de las agresiones al personal militar, las cuales en lo que va de la presente administración suman mil 971 –el pasado 19 de diciembre se contabilizaban mil 948–, en las que lamentablemente han perdido la vida 2 mil 321 agresores –al 19 de diciembre eran 2 mil 668.

En Jalapa, Veracruz, organizaciones civiles del estado inician una campaña para pedir a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales que convoque a una consulta pública sobre la mina Caballo Blanco, que el próximo año comenzará a explotar yacimientos de oro, plata y cobre en los municipios de Alto Lucero y Actopan. Los inconformes aseguran que la minería pone en riesgo el ecosistema. Las agrupaciones solicitan realizar una asamblea pública con los habitantes de ambos municipios para informarlos sobre el proyecto y los riesgos de hacer perforaciones con explosivos a menos de tres kilómetros de la central nucleoelectrónica de Laguna Verde.

El cuidado de la salud es una más de las condiciones extremas que enfrentan los pueblos indígenas del país. De acuerdo con estudios del Programa Universitario México Nación Multicultural (PUMC) de la UNAM, estas comunidades padecen circunstancias sociales, económicas y demográficas que les impiden acceder a una salud de calidad. Aunado a ello, para los gobernantes resulta improductivo establecer unidades de salud en pueblos indígenas con menos de 100

habitantes –aunque de acuerdo con los dos censos más recientes de población en México hay casi 20 mil comunidades con menos de un centenar de pobladores–, subrayó Carlos Zolla, coordinador de investigación del PUMC. El académico universitario detalla que a la desnutrición, mortalidad infantil y materna, dengue y enfermedades infecto-contagiosas, que son habituales en estas etnias, se suman ahora padecimientos crónico-degenerativos como diabetes, cirrosis, problemas cardiovasculares y diferentes tipos de cáncer, que comienzan a cobrar víctimas en esas localidades. Cuando se examinan las estadísticas del país, ya sean los datos de marginación, encuestas de alimentación y nutrición, o la información sobre servicios vinculados a la salud, se comprueba que los pueblos indígenas están siempre en la parte más crítica de las tablas. Si se trata de marginación invariablemente aparecerán en los primeros lugares; en las estadísticas sobre satisfactores, están en los últimos lugares.

Miércoles 28

“El año que está por concluir ha sido tal vez el peor del actual sexenio en materia de derechos humanos, puesto que los asesinatos y desapariciones de activistas continuaron, lo que coloca al país en un grave déficit democrático y con un aumento exponencial del número de víctimas de la violencia”, advierten miembros de organizaciones de defensa de las garantías individuales, en un balance de 2011. Gloria Ramírez, presidenta de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, expresa que “este ha sido el peor de los años del sexenio, porque todas las situaciones graves que hemos vivido se están agudizando. Sigue habiendo asesinatos, feminicidios y desapariciones forzadas. Ha sido un año brutal y no hay nada que festejar”.

Un tribunal unitario falla en favor del general Jesús Gutiérrez Rebollo, acusado de proteger al cártel de Juárez, al concederle la oportunidad de purgar en su domicilio particular la sentencia de 40 años de cárcel que hace una década le dictó un juez de procesos penales federales. Pese al fallo favorable, Gutiérrez Rebollo tiene pendiente de resolverse un proceso penal en el juzgado segundo de distrito con sede en Tepic, Nayarit, por acopio y transportación de armas de uso exclusivo del Ejército, y ejercicio indebido del servicio público, que le impide en lo inmediato irse a su casa. El mando militar lleva 14 años encarcelado en penales de mediana y alta seguridad.

En Chilpancingo, Guerrero, padres de familia, egresados y estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos denuncian que el subsecretario de Asuntos Políticos del gobierno estatal, Víctor Aguirre Alcaide, pretende dividir su movimiento al ofrecer hasta 100 mil pesos para que desistan de la lucha en demanda de juicio político contra el gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero, a quien responsabilizaron nuevamente de la muerte de sus dos compañeros, ocurrida el pasado 12 de diciembre sobre la Autopista del Sol. En conferencia de prensa este miércoles, Juan Carlos Mena, profesor egresado de la normal, detalla que el subsecretario, Víctor Aguirre, se acercó a los papás de los dos compañeros estudiantes muertos y les ofreció 100 mil pesos a cada familia; propuso la misma cantidad de dinero a los miembros de la comisión de relaciones exteriores del comité estudiantil de la escuela, para que ya no alborotaran, y les dice que los esperaba a las 10 de la mañana en sus oficinas.

En Acapulco, elementos de la Procuraduría de Justicia del Estado localizan y presentan ante la PGR a Cesáreo Espinosa Palma, coordinador de grupo de la policía ministerial adscrito al municipio de Tecpan de Galeana, informa Arturo Martínez Núñez, vocero del gobierno del estado. A Espinosa Palma se le vincula con la privación ilegal de la libertad de Eva Alarcón Ortiz y Marcial Bautista,

campesinos ecologistas de Petatlán y Coyuca de Catalán, desaparecidos el 7 de diciembre pasado, dice el vocero gubernamental, sin precisar mayores detalles del sitio en que se encontraba cuando fue detenido.

El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros asegura que el empresario Alonso Ancira lleva a cabo pláticas con empresas coreanas y chinas para venderles Altos Hornos de México, las cuales le han exigido para comprarla que estén sin problemas sindicales, con sindicatos domesticados a la empresa o de plano sin sindicatos. Indica que por esta razón este empresario, junto con otros como el dueño de Grupo México, Germán Larrea, llevan a cabo una nueva campaña sucia de infundios contra este sindicato, y difunden que las empresas están supuestamente alarmadas por presuntas acciones de intimidación y amenazas de parte del sindicato minero para afiliar a trabajadores de la maquila en el norte del país. Esta organización detalla que Alonso Ancira utiliza el membrete de la Alianza Minera Nacional para crear confusión entre los trabajadores y otras empresas respecto de las verdaderas intenciones de esa campaña, pues ese empresario ha estado en pláticas con empresas coreanas y chinas para venderles Altos Hornos de México.

El sobre endeudamiento que llevó a mil 200 campesinos de Hidalgo al borde de la bancarrota ha quedado subsanado a partir de un convenio firmado por la CNC y el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, mediante el cual se condonaron deudas en 90% de los casos. Onésimo Serrano González, dirigente estatal de la CNC, explica que esta situación fue causada por Banrural –hoy Financiera Rural–, que otorgó créditos sin estudios financieros sólidos. Expone que gran parte de los deudores que cayeron en cartera vencida sólo liquidaron 50% de sus deudas, que iban desde mil hasta 6 millones de pesos, sin cubrir intereses moratorios ni simples.

El relleno municipal de Cuautla recibe de manera irregular, diariamente, mil 200 toneladas de basura del Distrito Federal, con la complacencia de autoridades municipales, estatales y federales, lo que ha provocado inconformidad de la síndico, vecinos y campesinos morelenses. La recepción diaria de esas mil 200 toneladas comenzó el 16 de diciembre pasado sin permiso del cabildo municipal y sin cumplir la norma ambiental 083, denuncia la síndico municipal Juanita Guerra Mena. Además, dijo, la empresa Transilmex SA de CV –misma que fue contratada en junio pasado por el ayuntamiento para operar el relleno sanitario– no tiene autorización para recibir la basura del DF, aunado a que el relleno no tiene suficiente capacidad para tratar esas mil 200 toneladas, ya que fue construido con recursos estatales y municipales en 1997 para 400 toneladas diarias que genera Cuautla.

En Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Juan Sabines Guerrero entrega 16 boletas de libertad a igual número de internos, que se suman a la lista de beneficiados por la mesa de reconciliación, y al mismo tiempo al Programa Motor para la Economía, al otorgarles vales para que inicien un negocio en esta nueva oportunidad de vida que han alcanzado.

Jueves 29

La demanda civil presentada en Estados Unidos contra el ex presidente Ernesto Zedillo, por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en la masacre de Acteal, se basa en un documento de la fiscalía especializada que investigó el tema, en el cual se concluyó que el entonces jefe del Poder Ejecutivo y otros altos funcionarios son responsables por el crimen, aspecto que no ha sido suficientemente destacado por la prensa ni por los sectores que demandan justicia. Así lo

afirma el analista político Gilberto López y Rivas, quien considera que esta acción, aun si sólo buscara una indemnización económica, puede servir de precedente para impulsar la demanda contra Felipe Calderón ante la Corte Penal Internacional.

En Chilpancingo, Guerrero, el Comité Ejecutivo Estudiantil de la Normal Rural de Ayotzinapa denuncia que elementos de la Armada de México interceptaron dos camiones en los cuales viajaban alumnos de esa institución, a quienes bajan por la fuerza y los retuvieron durante una hora en la caseta de cobro de Metlapil, en Acapulco. En conferencia de prensa, Pablo Juárez, vocero de los estudiantes, dice que alrededor de las cinco de la tarde del miércoles unos 70 integrantes de la rondalla y del grupo de danza de la normal se dirigían al municipio de San Marcos para una presentación cuando fueron detenidos. “(Los marinos) los encañonaron con sus rifles y cortaron cartucho, dice. Luego de una hora los dejaron ir, pero fueron seguidos de cerca por patrullas de la Policía Federal.” Desde el 12 de diciembre, cuando fueron asesinados los estudiantes Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino, personas vestidas de civil merodean en las inmediaciones del plantel para intimidar a los alumnos y padres de familia que llevan a cabo las guardias, denuncia. Los dirigentes se negaron a rendir declaración ante Viviana Pérez Colindres, representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en Acapulco. “No tenemos nada contra ella, pero queremos que venga Luis García, quien es el enviado especial, ya que así lo acordamos”, dijo uno de los dirigentes estudiantiles.

“La población afrodescendiente en México es víctima de discriminación y racismo debido a su color de piel”, aseguran integrantes de diásporas africanas y caribeñas que llegaron al país en busca de mejores condiciones laborales. Tan sólo en 2011, esta comunidad registra ocho casos de agresiones en su contra. El más relevante fue el del nigeriano Isaac Echinedu, quien en mayo pasado falleció luego de ser detenido y golpeado por policías capitalinos en la colonia Obrera. “Algunos policías –tanto federales como locales– nos detienen arbitrariamente o nos agreden, violando nuestros derechos y garantías como extranjeros con estatus legal en territorio mexicano”, manifiestan. Entrevistados por La Jornada, acusan que viven discriminación y xenofobia por parte de agentes migratorios.

Las autoridades mexicanas atendieron este año a poco más de 13 mil menores migrantes que realizaban la travesía sin la compañía de un adulto y fueron devueltos por Estados Unidos. El Instituto Nacional de Migración (INM) precisa que de esta cifra, 10 mil 783 son niños, niñas y adolescentes mexicanos, y 2 mil 561 extranjeros. De acuerdo con el organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación, este nivel representa una reducción de 20% respecto al mismo periodo de 2010, cuando se recibió a 12 mil 919 menores repatriados por el vecino país del norte. Con el propósito de proteger a este sector vulnerable de la población migrante, el INM aplicó en 2007 el modelo de protección a niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, donde también participan el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones. Derivada de ello, creó la figura de oficial de protección a la infancia (OPI), agente especializado en la atención a la niñez migrante, sobre todo la no acompañada. A la fecha el instituto cuenta con 362 de esos agentes en todo el país.

“La discriminación hacia las comunidades indígenas, las cuales son objeto de desprecio y marginación, ha ido en aumento en el país, debido a la falta de políticas públicas en materia educativa y cultural enfocadas al respeto de los derechos de las poblaciones originarias de México”,

coinciden académicos de la UNAM y especialistas en la materia. Señalan que estas comunidades, además de ser blanco de la exclusión por parte de la sociedad, al recibir maltratos, ofensas, abuso físico y verbal o ser despedidas injustificadamente de sus trabajos, también son objeto de segregación por parte de servidores públicos, como son los casos de las indígenas que fueron desalojadas con violencia por funcionarios estatales en el centro de Querétaro por vender sus productos en la vía pública, o el más reciente hecho del ex jefe del programa Oportunidades en Uruapan, Michoacán, Carlos Talavera, quien señaló en su página de Facebook, que las mujeres indígenas que asistieron a un acto olían mal y que lo suyo no era la higiene. “Es grave y delicado que en México se siga practicando la discriminación hacia personas por su género, religión, origen étnico, posición social o nacionalidad, pero el asunto es más delicado cuando este tipo de agravios viene de algún funcionario público, porque están al servicio de la población pobre e indígena del país y no para marginarla”, indican.

Los problemas económicos, familiares o sentimentales, así como padecer una enfermedad terminal han llevado este año a 38 personas a suicidarse en las instalaciones del metro, o sea una cada 10 días en promedio, aunque otras 30 intentaron quitarse la vida, pero se salvaron gracias al monitoreo de las cámaras de video vigilancia y atención oportuna de los empleados de seguridad y policía auxiliar, informa el director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Francisco Bojórquez Hernández. El número de personas que lograron su propósito es 58% mayor al registrado el año pasado, cuando sumaron 24, y se espera que no crezca en las últimas horas del año, sobre todo, cuando vienen momentos de depresión y angustia, que lleva a pensar, principalmente a hombres, que suman 70% de los casos, que es la única salida que tienen, señala. De ahí la decisión de redoblar la vigilancia, con el apoyo de policías de tren y andén, quienes se concentran en las estaciones con mayor incidencia como son: las líneas 2, principalmente de Pino Suárez a Taxqueña; la 3, que corre de Indios Verdes a Ciudad Universitaria; la 5, de Pantitlán a Politécnico, y la 8, de Garibaldi a Constitución de 1917, precisó Bojórquez Hernández. El funcionario explica que la observación de las 175 estaciones, con el apoyo de tres mil 404 cámaras de video vigilancia, 3 mil 285 elementos distribuidos a lo largo de 18 horas de funcionamiento del Metro, la instalación de 21 centros de monitoreo y un sistema de radiocomunicación denominado Tetra en las líneas 2 y B, con 50 radios portátiles y 10 bases, ha evitado que otras 30 personas se hayan suicidado, al arrojarse al paso de los trenes.

Viernes 30

Durante 2011 fueron asesinadas 11 mil 890 personas en México, en promedio 33 cada día, por presunta rivalidad delincriminal o en enfrentamientos entre autoridades y grupos criminales. Del total, 10 entidades –Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa, Guerrero, Durango, Jalisco, Tamaulipas, Veracruz, Michoacán y estado de México– acumularon 84% de los casos, hasta este 30 de diciembre. De acuerdo con un recuento periodístico de La Jornada e información obtenida de funcionarios del gabinete de seguridad; del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, en 2011 hubo una disminución de 11% en el número de asesinatos en relación con 2010, al pasar de 13 mil 417 a 11 mil 890. Sin embargo, suman 51 mil 918 en lo que va del gobierno del presidente Felipe Calderón. Desde el pasado 12 de enero, el gobierno federal no ha difundido la actualización de la Base de Datos de Homicidios Presuntamente Cometidos por Rivalidad Delincriminal, la cual en 2010 contabilizó 15 mil 273 asesinatos, mil 856 más que los casos registrados periodísticamente en La Jornada. De enero a octubre de 2011, el promedio fue de mil casos mensuales, pero en

noviembre y diciembre disminuyeron los reportes a 778 y 775, respectivamente.

En Chilpancingo, Guerrero, esta mañana es asesinado el campesino Ascensión Villa Santana en las inmediaciones de la comunidad de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, en la región de la Tierra Caliente, Guerrero. La víctima era miembro de la organización encabezada por su primo, Rubén Santana Alonso, uno de los dirigentes de la OCESPCC en la Costa Grande, quien también fue ultimado, el pasado 15 de febrero en la misma zona. Vía telefónica desde La Laguna, Juventina Villa Mojica, viuda de Rubén Santana, dice que este día aproximadamente a las ocho de la mañana, sujetos armados con rifles AK-47 y AR-15, pusieron una emboscada a Ascensión Villa cuando venía del poblado La Hacienda, hacia La Laguna. Manifiesta que se tiene conocimiento de que los pistoleros llegaron desde antes de las ocho de la mañana al lugar, ya estaban esperando a Ascensión, Villa, para matarlo, son la misma gente del poblado Los Ciruelos, que encabezan Daniel Serrana, José Rauda, Marcelo Benítez Núñez, y Saqueo Peñaloza Castillo.

En Chilpancingo, unos 30 integrantes, a nombre de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, realizan una guardia de honor en memoria de 19 jóvenes masacrados en 1960 en la capital del estado, lo que marcó la fundación de la Universidad Autónoma de Guerrero. Nosotros no pretendemos colgarnos del evento, sino rendir homenaje a nuestros similares, dice Pablo Juárez, líder de los alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Agrega que la demanda central sigue siendo lograr el juicio político contra el gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, por ser el responsable del asesinato de sus dos compañeros, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús –ocurrido el pasado 12 de diciembre, durante un desalojo estudiantil sobre la Autopista del Sol. En entrevista, el dirigente normalista señala que junto con las demás organizaciones sociales en la entidad lucharán hasta que se haga justicia a sus dos compañeros.

En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con el desafío de enfrentar el concepto novedoso de La potencia de los pobres, que el intelectual tzeltal Xuno López llama provocador, al mediodía se inicia el segundo Seminario Internacional de Reflexión y Análisis, en la Universidad de la Tierra, de esta ciudad. Dio pie al debate la presentación de un libro-conversación de los pensadores Jean Robert y Majid Rahnema, precisamente con ese título. ¿Cómo entender desde ahí el desarrollo, el progreso y en general los parámetros impuestos por el poder? Convocado próximo a la fecha del decimoctavo aniversario del alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en su sesión vespertina el seminario también da lugar a una precisa efeméride de la antropóloga Mercedes Olivera, sobre la rebelión zapatista y la guerra encubierta, económica y paramilitar que aún enfrentan las comunidades indígenas de Chiapas desde la resistencia y la autonomía, de las cuales emana su fuerza. Esta sería la potencia a que alude la obra de Rahnema y Robert. El propio Robert, participante en la primera sesión, enuncia la oposición entre la pobreza como síntoma de la riqueza y la riqueza como un síntoma de la pobreza. ¿Desde dónde se mira? O como López había apuntado: ¿los pobres lo son según quién?, tratando de encontrar una traducción a su lengua, o bien al tzotzil, de ese concepto generalizado por el sistema de dominación. En su oportunidad, Rafael Landerreche, educador y colaborador de Las Abejas de Acteal, ofrece una caracterización de dicho dogma impuesto en la educación y la ideología, citando al infalible escritor inglés Chesterton, diciendo que el progreso es el cuento que los ricos cuentan a los pobres cada vez que los ricos los quieren despojar de algo.

En Ciudad Juárez, habitantes del ejido Huizopa, del municipio serrano de Madera, solicitan al gobernador del estado, César Duarte Jáquez instalar una mesa de diálogo para revisar el caso de la

minera Dolores, subsidiaria de la canadiense Minefinders, que contamina la región, comete abusos laborales y arrebató propiedades a los campesinos, en complicidad con el chihuahuense José Liébano Sáenz, secretario particular de Ernesto Zedillo cuando éste fue Presidente de la República. Mediante un oficio que publicaron como carta abierta, los ejidatarios, encabezados por Dante Valdez Jiménez piden una oportunidad al mandatario estatal para comprobar lo que ocurre en Huizopa desde que la mina se instaló en esa zona de la sierra. Le piden que el diálogo sea en la plaza de armas de Madera, donde entregarían documentos y videos que comprueban que en las comunidades de Arroyo Amplio y Mineral de Dolores, cuna de la guerrilla de 1965, han sido despojados de sus bienes patrimoniales por la Minera Dolores, sin que hayan sido atendidos por alguien, aun cuando existen demandas legales como antecedente, quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, contratos firmados por la empresa y los afectados y denuncias públicas al respecto. Entre los afectados en sus bienes patrimoniales están Jesús González Banda, Carmen Lidia González, Mirna Solís y Guadalupe Banda, ejemplifican. También afirman que hay atropellos contra trabajadores, entre los cuales se encuentran Hugo Rayos García, Antonio Grijalva y Juan Gabriel Mendoza Lagarda, quienes tienen interpuestas demandas laborales contra la empresa canadiense.

En Chilpancingo, sin la presencia del rector de la UAG, Asencio Villegas Arrizón, se recuerda el 51 aniversario de la masacre de 19 ciudadanos en esta capital, que marcó el nacimiento de esa casa de estudios. En el acto efectuado en la alameda Granados Maldonado, la mayoría de los oradores, incluido el presidente municipal de Chilpancingo, Héctor Astudillo Lores, se pronunciaron contra el cierre de la Normal Rural de Ayotzinapa. En el acto, el luchador social Pablo Sandoval, así como el dirigente de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria Arturo Miranda Ramírez respaldaron la lucha de los estudiantes. Ahí, el dirigente del movimiento del 60, Jesús Araujo Hernández, manifiesta que esa lucha emprendida por los jóvenes fue para pedir la autonomía de la universidad, con un criterio libre, sin compromiso más que el de apoyar a la sociedad y jóvenes que no podían asistir a la escuela por falta de recursos económicos.

En Chilpancingo, Nicolás de Jesús, pintor originario del poblado nahua de Ameyaltepec, municipio de Eduardo Neri, inaugura un mural sobre la lucha de los alumnos de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa. A la memoria de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, su lucha nos elevará la conciencia para lograr sentir el amor hacia la libertad del pueblo, dice un texto en el mural de unos 20 metros de longitud. El pintor, que ha expuesto en galerías de Chicago, París, Indonesia, Canadá y el Distrito Federal, dice “Lo hice con el sentimiento de indignación y tristeza, y con la finalidad de hacer conciencia en la gente, de hacerla despertar”.

Glosario de siglas

ACE	Alianza por la Calidad de la Educación
AMSA	Agroindustrias Unidas de México
APPO	Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca
ATS	Alianza de Trabajadores de la Salud
BMV	Bolsa Mexicana de Valores
CADHAC	Ciudadanos en Apoyo a Derechos Humanos

Canacope	Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México
CCI	Central Campesina Independiente
CDHDF	Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
CDHDF	Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
CECyTE	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Guerrero
CEDH	Comisión Estatal de los Derechos Humanos
CEDHQ	Comisión Estatal de Derechos Humanos de Querétaro
CEJIL	Centro por la Justicia y el Derecho Internacional
CEND	Comité Ejecutivo Nacional Democrático
CENDI	Centros de Desarrollo Infantil
CEPAL	Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CERESO	Centro de Rehabilitación Social
CFE	Comisión Federal de Electricidad
CIDH	Comisión Interamericana de Derechos Humanos
CNC	Confederación Nacional Campesina
CNDH	Comisión Nacional de los Derechos Humanos
CNTE	Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
Cocyp	Central de Organizaciones Campesinas y Populares
CODUC	Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas
CONAGUA	Comisión Nacional del Agua
CPI	Corte Penal Internacional
CPJ	Comité de Protección de Periodistas
CUL	Coordinadora de Universitarios en Lucha
EZLN	Ejército Zapatista de Liberación Nacional
FACMEO	Frente Amplio de Comunidades Marginadas del Estado de Oaxaca
FECSM	Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México
FEG	Federación de Estudiantes de Guadalajara
FGE	Fiscalía General del Estado
FIL	Feria Internacional del Libro
GDF	Gobierno del Distrito Federal
ICC	Índice de confianza del consumidor
IFAI	Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
IMSS	Instituto Mexicano del Seguro Social
INEE	Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
INEGI	Instituto Nacional de Estadística y Geografía
INM	Instituto Nacional de Migración
MBM	Movimiento de Bases Magisteriales
MORENAJE	Movimiento de Regeneración Nacional-Jóvenes Estudiantes
MP	Ministerio Público
MPJD	Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad
MULT	Movimiento de Unificación y Lucha Triqui
MULT-I	Movimiento de Unificación y Lucha Triqui-Independiente
OCDE	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
OCESPCC	Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyoaca de Catalán
ONG	Organizaciones no gubernamentales

ONU	Organización de las Naciones Unidas
PAN	Partido Acción Nacional
PEMEX	Petróleos Mexicanos
PGJDF	Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal
PGJE	Procuraduría General de Justicia del Estado
PGR	Procuraduría General de la República
PRD	Partido de la Revolución Democrática
PRI	Partido Revolucionario Institucional
PRODH	Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
PUMC	Programa Universitario México Nación Multicultural
RJDH	Red Jalisciense de Derechos Humanos
SCJN	Suprema Corte de Justicia de la Nación
Sedena	Secretaría de la Defensa Nacional
Segob	Secretaría de Gobernación
SEMARNAT	Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
SEP	Secretaría de Educación Pública
SIEDO	Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada
SME	Sindicato Mexicano de Electricistas
SNSP	Sistema Nacional de Seguridad Pública
SNTE	Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
SSP	Secretaría de Seguridad Pública
SSPDF	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal
TCA	Tribunal de lo Contencioso Administrativo
TCADF	Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal
TSJ	Tribunal Superior de Justicia
UACM	Universidad Autónoma de la Ciudad de México
UAG	Universidad Autónoma de Guerrero
UCSS	Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad
UDG	Universidad de Guadalajara
UMSNH	Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
UNAM	Universidad Nacional Autónoma de México

Realizada por el Comité de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura de México del Observatorio Social de América Latina de México (OSAL-CLACSO).

Coordinadores: Massimo Modonesi y Lucio Oliver.

Relevamiento y sistematización: Mariana López de la Vega y Fernando Munguía Galeana.

Fuentes: diarios La Jornada y El Universal.